

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

UNIDAD DE POST GRADO

**La reforma militar y el gobierno de Nicolás de Piérola. El
Ejército moderno y la construcción del Estado peruano**

TESIS

para optar el grado académico de magíster en Historia

AUTOR

David Víctor Velásquez Silva

ASESOR

Dr. Cristóbal Roque Aljovín de Losada

Lima – Perú

2013

Aceptación de Veredicto

Miembros del Jurado

*A Eli, por un amor a prueba de todo,
que ha sido siempre mi inspiración y
motivación.*

*A mis padres, por darme el apoyo y comprensión,
que son inestimables para la azarosa
vida del investigador.*

Agradecimientos

La presente tesis es el resultado de un largo trabajo en el que han participado diversas personas, amigos y colegas, sin los cuales hubiera sido imposible emprenderla y mucho menos concluirla. Por su aliento, recomendaciones, críticas y apoyo, a todas ellas les debo mi más profundo agradecimiento. Siendo la investigación histórica en nuestro país una actividad a veces azarosa, la compañía y ayuda sincera de quienes comparten nuestros intereses e ideales académicos no solo son imprescindibles, sino también gratificantes en grado sumo.

En primer lugar quiero agradecer al profesor Cristóbal Aljovín, mi asesor. Al profesor Aljovín no solo le debo sus clases en la Universidad, en el pre y postgrado, le tengo también profunda gratitud por haberme animado a dedicarme a la actividad académica y a la investigación. Como uno de sus muchos estudiantes, soy consciente de los esfuerzos que realiza nuestro profesor en la Universidad por dedicarle a sus alumnos el tiempo y la consideración oportuna para que estos coronen sus ambiciones intelectuales con sendas investigaciones. En mi caso particular, me encuentro en deuda una vez más con el profesor Aljovín por su desinteresada ayuda en lo personal y en lo académico. Respecto a esto último, no puedo dejar de mencionar las incontables reuniones en las que me ofreció sus inestimables consejos, sus acertadas críticas y sus agudas observaciones que en mucho ayudaron a mejorar la investigación, salvar sus vacíos y corregir sus excesos. Rescato siempre de su ayuda el haberme enseñado a tratar de comprender a los actores históricos de acuerdo a sus propios términos, buscando entender a sus formas de pensar, actuar y sentir.

En segundo lugar agradezco al doctor José de Piérola Balta, descendiente del *Califa*. En su interés por rescatar la memoria de su ilustre antepasado, el Dr. de Piérola ofreció, allá por el año 2008, una generosa beca que permitió adelantar esta investigación, logrando visitar los diferentes repositorios que nutren las conclusiones de esta tesis. Más allá de sus motivaciones personales, fue siempre el interés de don José buscar la verdad sobre los actos públicos de Nicolás de Piérola, lo cual nos permitió trabajar en toda ocasión con la libertad académica que exige cualquier investigación histórica con las pretensiones de rigurosidad que la disciplina exige.

No puedo dejar de agradecer también al profesor Georges Lomné, antiguo director del Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Del profesor Lomné guardo especial consideración por sus consejos como historiador, los cuales han sido de invaluable ayuda en los trabajos académicos que he emprendido. Al IFEA y a las instituciones organizadoras del Premio François Bourricaud quisiera agradecer por haberme brindado la oportunidad de conocer París y poder revisar la documentación gala de la Misión Militar Francesa. De mi estadía en la Ciudad Luz, no puedo olvidar la ayuda de Joëlle Chassin, querida amiga, de la cual guardo particular estima por haberme facilitado el ingreso a los repositorios franceses y hacer más agradable mi permanencia.

Debo agradecer también a las personas que, en diversos momentos de la investigación y redacción de la tesis, me brindaron su oportuna ayuda. De ellas, guardo especial gratitud a Luis Enríquez Travezaño y mi hermano Víctor Manuel Velásquez Silva, quienes en diferentes momentos de la investigación archivística me brindaron su ayuda. Con Luis pasamos maratónicas sesiones de archivo que fueron siempre animadas por agradables conversaciones que enriquecieron la investigación. Agradezco las ideas y comentarios que Luis generosamente compartió conmigo. Con mi hermano Víctor Manuel quedo en deuda por el sacrificio que hizo de sus tiempos libres, acompañándome en la revisión de la documentación que atesora nuestros polvorientos archivos, sometiéndolo –de buen grado, claro está– a las *condiciones extremas* que muy a menudo los historiadores estamos acostumbrados a soportar.

También deseo agradecer a los profesores y colegas, cuya ayuda fue invaluable para la elaboración de la tesis. De los profesores de la Maestría de Historia debo reconocer una deuda intelectual con Manuel Burga Díaz, Antonio Zapata Velasco, Francisco Quiroz Chueca, Eduardo Toche y María Emma Mannarelli. Particularmente debo referirme a los dos últimos. Muchas de mis inquietudes acerca del Ejército peruano fueron estimuladas por las sugerentes ideas y propuestas interpretativas que Eduardo compartió con sus estudiantes en clase. A María Emma Mannarelli, como profesora y amiga, agradezco la solicitud y consideración con que en todo momento me halagó. En sus clases, la lectura y reflexión teórica bajo su inteligente guía me permitieron enriquecer mi mirada sobre los fenómenos sociales, enseñanza que se refleja en esta investigación.

Agradezco, por otra parte, al profesor colombiano León Adolfo Atehortúa el haber dedicado su tiempo durante su estadía en Lima para leer la tesis y brindarme sus acertados comentarios como especialista en las Fuerzas Armadas del vecino país. Al joven historiador colombiano Carlos Camacho debo agradecer también sus observaciones que con sinceridad académica me ofreció. Carlos Camacho es el ejemplo de los jóvenes historiadores que buscan renovar el conocimiento de las instituciones castrenses de nuestro continente.

Finalmente, quisiera reconocer el denodado trabajo del personal de los repositorios que consulté en la etapa de investigación, como el Archivo Parlamentario, el Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, la Biblioteca Nacional del Perú, el Instituto Riva-Agüero y el Fondo Reservado de la Biblioteca Central de la UNMSM. Sus esfuerzos por custodiar la valiosa información que corre a su cargo, a veces no suficientemente comprendidos ni valorados, nos permiten a los historiadores realizar nuestro trabajo. Agradezco a estos silenciosos guardianes su presteza en el servicio y la solicitud con la que resolvieron mis preguntas, actitudes que fueron y son para mí inestimables. Especial reconocimiento quiero hacer al Sr. Germán Matute, trabajador del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú, quien casi solitariamente tiene bajo su responsabilidad un muy rico acervo documental, no siempre lo suficientemente valorado.

A todas estas personas les debo una gratitud imperecedera. Las falencias, errores u omisiones que esta tesis pudiera guardar, son enteramente mi responsabilidad.

Índice General

Introducción		1
Capítulo 1.	El Ejército en el Perú antes de la Guerra del Pacífico (1821-1879)	31
1.1.	Organizando y desorganizando los ejércitos en el Perú	32
1.2.	Una carrera <i>porosa</i> . La oficialidad del ejército	39
1.3.	Intentos de profesionalización de los oficiales	54
1.4.	La justicia militar en el siglo XIX	58
1.5.	A empujones, por «viandas» o mala suerte. Formas de reclutamiento de tropas	73
1.6.	Alianzas, armas y política. «Politización del Ejército»	83
Capítulo 2	Dos miradas respecto a los militares y al Ejército en el siglo XIX	90
2.1.	Mirada de los civiles sobre los militares y el Ejército durante la segunda mitad del siglo XIX	92
2.2.	La mirada de los militares sobre el Ejército y sus reformas durante el Segundo Militarismo	112
2.2.1.	Las reformas militares durante la Reconstrucción Nacional y el fortalecimiento de la identidad corporativa del Ejército.	114
2.2.2.	Propuestas de los militares para reforma del Ejército después de la Guerra del Pacífico	123
2.2.2.1.	Formación de la carrera de las armas	124
2.2.2.2.	Ingreso y ascensos en la carrera militar	126
2.2.2.3.	Organización del Ejército	127
2.2.2.4.	Guardia Nacional y militarización de la población	128
2.2.2.5.	Ordenanzas militares y la Justicia Militar	130
2.2.2.6.	Presupuesto y preparación militar	132
Capítulo 3	El Ejército durante el gobierno de Piérola (1895-1899)	134
3.1.	Comportamiento del Ejército durante el gobierno de Piérola	135
3.2.	Las condiciones favorables para la reforma militar	147
3.3.	Las armas de la reforma: la contratación de la misión militar francesa	158
Capítulo 4	Profesionalización y disciplinamiento de los oficiales	174
4.1.	La profesionalización de los oficiales y el surgimiento de la «ciencia» de la guerra en Europa	176
4.2.	El profesionalismo militar y la Escuela Militar del Perú	186
4.2.1.	La ciencia de la guerra y el nuevo oficial	196
4.2.2.	La instrucción profesional en la Escuela Militar	200
4.2.3.	Un caso de profesionalismo militar: el Viaje del Estado Mayor de 1902	207
4.3.	El «disciplinamiento» de los oficiales al interior de la Escuela Militar	218
4.4.	Balance de la reforma de los oficiales	236

Capítulo 5	El Código de Justicia Militar de 1898: regular a los militares, controlar a la población, fortalecer al Estado	245
	5.1. El sistema jurisdiccional castrense	250
	5.2. Regular al Ejército y domar a los jefes militares	255
	5.3. Un instrumento para el control de la población	263
	5.4. Influencia del Ejecutivo en la jurisdicción castrense	270
	5.5. La «cruzada» contra el Código de 1898	272
	5.6. Los resultados del Código de Justicia Militar de 1898	284
Capítulo 6	La Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898	293
	6.1. Antecedentes a la ley del servicio militar de 1898	294
	6.2. El debate sobre la Guardia Nacional y el servicio militar obligatorio	306
	6.3. Una discusión necesaria: los indígenas y el servicio militar	320
	6.4. El diseño y la aplicación de la Ley	329
	6.5. Las limitaciones de la implementación ley del servicio militar	343
	6.6. Las resistencias al Servicio Militar Obligatorio	361
	6.7. Resultados de la aplicación de la Ley del servicio militar obligatorio	377
	6.7.1. La universalidad del servicio y la justicia de la ley	377
	6.7.2. La militarización <i>ad portas</i> : registro y movilización de los ciudadanos	386
	6.7.3. La civilización del indígena en el marco de una militarización limitada	392
Capítulo 7	Una política de concentración de la coerción: el recojo del armamento de guerra	399
	7.1. La dispersión de las armas de guerra	407
	7.2. La «democratización» del armamento de guerra a fines del siglo XIX	415
	7.3. Política Nacional de recojo de armamento y sus límites en una sociedad agraria	436
	7.4. Casos en los que se permitía el uso particular de armas de guerra	466
	7.5. Continuación de la política de desarme de la población civil	471
Conclusiones		477
Anexos		485
Fuentes		536
Bibliografía		549

Índice de cuadros

Cuadro 1:	Número de oficiales y su situación según su clase militar en 1847	47
Cuadro 2:	Escalafón del Ejército entre 1847 y 1878	50
Cuadro 3:	Penas previstas en las Ordenanzas Militares de Carlos III	63
Cuadro 4:	Solicitudes de baja de oficiales del Ejército (julio-setiembre de 1895)	140
Cuadro 5:	Coroneles con licencia indefinida en el Escalafón Militar de 1897	142
Cuadro 6:	Comisiones de trabajo para la redacción de proyectos de Ley del Ejército (1897-1898)	166
Cuadro 7:	Plan de Estudios de las Escuelas Militares	207
Cuadro 8:	Tareas realizadas en el Viaje de Estado Mayor de 1902	217
Cuadro 9:	Proyectos de Reforma del Código de Justicia Militar formulados en 1900	283
Cuadro 10:	Juicios militares sentenciados en la Zona Militar de Lima (1899-1906)	286
Cuadro 11:	Delitos de juicios sentenciados a militares por la Zona Militar de Lima (1899-1906)	288
Cuadro 12:	Juicios contra militares juzgados por la Zona Militar de Lima (1899-1906)	288
Cuadro 13:	Procesos judiciales del fuero militar a encausados de origen civil (1899-1906)	290
Cuadro 14:	Delitos de los procesos judiciales del fuero militar a encausados de origen civil (1899-1906)	291
Cuadro 15:	Composición del Ejército del Perú según la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898	330
Cuadro 16:	Miembros de las instituciones locales creadas por la Ley del Servicio Militar Obligatorio y su Reglamento	334
Cuadro 17:	División regional-militar del territorio peruano	339
Cuadro 18:	Número y porcentaje de conscriptos licenciados por enfermedades (Segundo Semestre de 1904-Primer Semestre de 1908)	354
Cuadro 19:	Altas del departamento de Lambayeque (1906 y 1908)	376
Cuadro 20:	Conscriptos devueltos a sus hogares en 1901	380
Cuadro 21:	Descuentos realizados a los subprefectos del departamento de Huaraz en 1904	384
Cuadro 22:	Cantidad de ciudadanos inscritos en los registros militares en 1909	386

Cuadro 23:	Factura de la Librería Francesa Científica Galland, 4 de abril de 1900	394
Cuadro 24:	Número y porcentaje de soldados que recibieron instrucción civil en el Ejército (1905-1908)	395
Cuadro 25:	Número de soldados que recibieron instrucción civil por grado de instrucción y cuerpo militar (1905-1906)	397
Cuadro 26:	Armas de guerra entregadas por el Prefecto de Callao al Ministerio de Gobierno (1896)	442

Resumen

La presente investigación busca dar cuenta de la reforma del Ejército peruano iniciada en el segundo gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899), vinculando su ejecución con los procesos de construcción del Estado peruano. Esta reforma acabó con los ejércitos caudillistas decimonónicos, transformando a la institución castrense en un ejército nacional, profesional y burocrático. A través de la concentración de una serie de competencias y recursos militares distribuidos en los diferentes actores sociales, esta reforma logró consolidar un Ejército lo suficientemente fuerte que permitió ejercer al Estado peruano su autoridad sobre aquellos actores durante las dos primeras décadas del siglo XX, rompiendo la dinámica política decimonónica que empleaba la guerra como medio de dirimir el acceso al poder.

Palabras clave

Reforma Militar–Nicolás de Piérola–Ejército Peruano–Coerción–Estado–Cuerpo de oficiales–Justicia Militar–Servicio Militar Obligatorio–Armamento de guerra

Abstract

This research seeks to study the Peruvian army reform in the second government of Nicolás de Piérola (1895-1899), linking its execution with the construction processes of the Peruvian State. This reform put an end to Peruvian caudillista armies of the nineteenth century, transforming the military into a national, professional and bureaucratic army. Through the concentration of skills and military resources distributed in different social actors, this reform managed to consolidate a strong army that allowed the Peruvian State to exercise its authority over those players during the first two decades of the twentieth century, breaking nineteenth-century political dynamics that used war as a mean to reach access political power.

Key words

Military reform–Nicolás de Piérola–Peruvian Army–Coercion–State– Corps Officers–Military Justice–Conscription–War weapons

INTRODUCCIÓN

La azarosa historia del Perú decimonónico muestra las dificultades y limitaciones de una sociedad forjada bajo la dominación de una monarquía de Antiguo Régimen por construir un Estado nacional independiente de cuño republicano. Rota o disminuida la legitimidad monárquica, con convicción o sin ella, diversos grupos de la población peruana lucharon por construir una organización socio-política que se afirmara en ideales y valores de la modernidad política, como la libertad, la independencia, soberanía popular, ciudadanía o felicidad (Aljovín 2000). Una promesa de una vida mejor para el Perú y sus habitantes fue formulada explícitamente por los defensores de la Patria en la hora del combate contra las huestes del Rey español, en un contexto en el que los hombres consideraban que la voluntad política era capaz de romper las cadenas de un pasado que se representaba gobernado por la tradición, la esclavitud, la dependencia y la oscuridad (Basadre s/f: 14-15)

Las promesas para la transformación cualitativa del país suponían la existencia de un Estado que, cual leviatán hobbesiano, fuera capaz de cambiar valores y prácticas enraizadas por *trescientos años de esclavitud*, construyera instituciones orientadas a canalizar las demandas de la población y permitiera el desenvolvimiento de una economía estancada desde fines del siglo XVIII que fuera el sustento de una felicidad material negada o ausente en el pasado. Los herederos de la independencia, civiles y militares, soñaron con la construcción de un Estado moderno que pudiera cumplir con aquella promesa republicana, sin embargo, los materiales sobre los que se debía asentar el nuevo orden resultaron ser ciertamente precarios.

Desechada casi desde el principio la Monarquía, forma de autoridad que había gozado de una fuerte legitimidad durante la mayor parte del período colonial, ningún actor social ni individual de la postindependencia pudo competir con su solidez. La autoridad del Rey, como manifestación de la justicia, había sido distribuidor de los bienes y privilegios con fallos que, aunque pudieran ser resentidos por los interesados, eran acatados en tanto que se consideraba su soberanía incuestionable. Desde el aplacamiento de los encomenderos en el lejano siglo XVI, durante la mayor parte del período colonial, los actores sociales del Virreinato peruano, antes que

desconocer la voluntad real, competían por su favor y el de sus representantes. Ejercida su soberanía a través de una burocracia de Antiguo Régimen, la *pax colonial* se asentó además en la colaboración –no sin contradicciones– de la Iglesia católica, la nobleza y los notables locales, configurándose una forma de gobierno indirecto que mantenía su coherencia, tanto en la legitimidad del Rey, como en los intereses concurrentes de aquellos actores y del Estado colonial.

Imperfectamente, los caudillos militares buscaron llenar el vacío que había dejado la figura regia, sin lograr un consenso similar. La autoridad de los caudillos, carente de los pergaminos que la religión y la tradición otorgaban, resultaba una hechura tan humana como el deseo de derribarla. Habiendo sido erosionada la burocracia colonial, los jefes militares asumieron gran parte de la dirección de los asuntos públicos del nuevo Estado. Presidentes, ministros, prefectos y subprefectos tendieron a «militarizar», en el siglo XIX, la burocracia peruana (Basadre 2003: t. 1). Aprovechando su prestigio como campeones de la independencia y su posición de hombres de *armas* (del ejercicio de una cuota de los medios de coerción), construyeron clientelísticamente precarias alianzas que les permitieron gobernar el país casi ininterrumpidamente por más de setenta años¹. Aunque fue abrumadora su presencia en el Gobierno, esta no significó la creación de un poderoso Estado totalitario que ejerciera una inexorable dominación sobre la población; por el contrario, la violencia ejercida por los jefes militares para controlar el Gobierno era la muestra más palpable de su precariedad, de la debilidad del Estado y sus detentadores.

Conscientes de la fragilidad organizativa del nuevo Estado, los caudillos militares construyeron coyunturales alianzas con diferentes grupos de la población, los civiles. Sabiéndose indoctos para algunas tareas de gobierno, alternaban en ellas a políticos que recibían recompensas a cambio de su lealtad, pero, en otras, las limitadas dimensiones del Estado peruano los conducían a establecer redes clientelares con poderosos regionales o notables locales (especialmente terratenientes), los cuales, por su posición social, podían suplir la ausencia de la burocracia estatal en aquellos espacios. En ese sentido, se siguió recurriendo –de

¹ Un interesante modelo de las relaciones clientelares que podían establecer los caudillos para aglutinar a diferentes actores políticos a nivel nacional lo ofrece Carmen Mc Evoy (1997, cap. 1) para el caso de Ramón Castilla.

facto o legalmente— a la tradición colonial de gobierno indirecto, siendo el fenómeno del gamonalismo republicano en parte producto de este legado, pero también una expresión de la debilidad del Estado peruano postindependentista.

Esta organización socio-política descansaba en la concurrencia de intereses faccionales. Los caudillos conformaron aquellas redes clientelares que terminaban dividiendo verticalmente a los grupos sociales en función de intereses específicos. Mientras incorporaban a sus alianzas a algunos actores, satisfaciendo sus demandas personales o de grupo, terminaban excluyendo a otros, práctica que generaba el descontento suficiente para alentar la conformación de redes políticas rivales. Así, bajo presupuestos legales o no, caudillos militares retadores articulaban redes alternativas que luchaban por el poder en batallas que —las más de las veces— no se dirimían en las urnas, como lo establecía el modelo republicano, sino a través de guerras civiles (Gootenberg 1997, Aljovín 2000, Walker 2004).

Para aumentar sus posibilidades de victoria, los caudillos retadores pactaban con jefes militares que fraccionaban el Ejército *nacional* y buscaban el apoyo de poderosos regionales, poseedores de los recursos materiales necesarios para constituir ejércitos; no faltaba el recurso a otros actores sociales, sean comunidades indígenas, gremios, bandoleros y hacendados a fin de obtener hombres que empuñaran las armas en aquellos combates². Clientelas alternativas suponían nuevos compromisos a satisfacer a costa de los recursos materiales o simbólicos del Estado cuando la campaña terminase exitosamente, a los que se sumaban las también nuevas lealtades y sus concomitantes recompensas establecidas por los caudillos gobernantes cuando recurrían a los mismos métodos para equiparar sus fuerzas a las retadoras.

Durante los primeros cincuenta años de vida independiente, solo unos cuantos gobernantes concluyeron sus mandatos, siendo la mayoría desplazados luego de una guerra civil o *revolución* (como se llamaba entonces), al cabo de la cual se erigía el ganador como presidente provisorio y luego como mandatario constitucional. Al ser la guerra el medio para dirimir el acceso al poder, la movilización armada constante

²Charles Walker (2004) y Cecilia Méndez han puesto de relieve estas alianzas con diferentes grupos de la población, incluyendo a los *menos favorecidos*. Méndez (2004) *Tradiciones liberales en los Andes: militares y campesinos en la formación del estado peruano*. Disponible en URL: http://www.tau.ac.il/eial/XV_1/mendez.html [consulta 26 de agosto de 2009].

de la población tendió a debilitar aún más las frágiles bases del Estado republicano. No solo la guerra pulverizaba los recursos fiscales, sino que el pago de recompensas por lealtades a través de cargos fragmentaba el poder y privatizaba las funciones y recursos de la organización estatal. Las tareas de gobierno terminaban adjudicadas a actores de lealtad inestable, pero necesarios para el ejercicio del poder.

Este carácter disperso del poder era manifiesto en el Ejército, donde diversos actores disponían de una fracción de las atribuciones y recursos para aplicar la coerción, estando lejos el Estado de ejercer su monopolio. Los militares jefes de cuerpos gozaban de una importante autonomía respecto a los gobernantes de turno y disponían de un fuerte control sobre unas tropas levadas y sometidas a terribles castigos físicos que facultaba el legado de la justicia militar colonial. Sin embargo, el convertirse en jefe de tropa u oficial del Ejército dependía en mucho de la coyuntura política y las necesidades militares de los gobernantes o caudillos retadores. En un período de constantes guerras civiles, el paso de civil a militar dependía en gran medida de la posibilidad de otorgar hombres a las facciones en lucha y de las lealtades personales y políticas que podían ofrecer a los caudillos o jefes de cuerpo en cada uno de los bandos. No existía, por tanto, control estatal impersonal para la incorporación de oficiales al Ejército.

Aquellos ejércitos de caudillos eran un conglomerado de soldados levados, pero también de hombres incorporados voluntariamente por recompensas. El reducido desarrollo tecnológico de aquellas fuerzas permitía fácilmente agregar a diferentes grupos de la población que, armados de fusiles, pistolas, piedras o rejonos, sin mayores inconvenientes podían convertirse en soldados y ejercer la violencia sea para defender gobiernos constituidos o para derribarlos. Comunidades indígenas, bandoleros o hacendados poseían parte de esos recursos de coerción, los que podían ser prestados a alguna de las facciones en liza. Era necesaria la ambición de un caudillo, lealtades de algunos cuerpos del Ejército, los contactos con prominentes hombres y alianzas con grupos sociales –con su propia agenda– para que se pusiera en marcha una dinámica política que a través de la fuerza (las más de las veces) terminaba por desbaratar los gobiernos decimonónicos.

Resulta interesante y paradójico constatar que durante la mayor parte del siglo XIX aquel Estado que se soñaba como un coloso reformador o regenerador del país no era lo suficientemente poderoso para defenderse ni siquiera de su propia población cuando la acumulación de intereses de los actores desafectos al gobernante de turno, generaba una correlación de fuerzas que invertía la dirección del ejercicio de la coerción. Pocos gobernantes pudieron resistir las *revoluciones* o golpes de Estado decimonónicos, pues la organización política que gobernaban no disponía de los medios administrativos ni coercitivos para detener a sus retadores cuando entraban en marcha aquellos movimientos armados.

En alguna medida, el boom del guano modificó este esquema a mediados de siglo, otorgando cierta estabilidad política al país (especialmente, en los dos gobiernos de Ramón Castilla), pero los combates por el acceso al poder no concluyeron sino hacia finales de la centuria, luego de la revolución de 1894-1895 y el advenimiento de Nicolás de Piérola al poder (1895-1899). No obstante, el agotamiento de los recursos del guano, primero, y la Guerra del Pacífico (1879-1883), después, terminaron por bloquear cualquier intento de estabilización política del país. Así, el primer proyecto político de origen civil en llegar al poder, liderado por Manuel Pardo y respaldado por una enriquecida élite empresarial, escolló sin poder modernizar el país y reformar el Estado; aún peor, sus dirigentes fueron responsabilizados –en parte– por la guerra y la derrota frente a Chile (Mc Evoy 1995, 1997: cap. 5, Mücke 2010). Este último acontecimiento –con la destrucción de la infraestructura económica, el drenaje de recursos públicos y el desgaste de las capacidades administrativas y coercitivas gubernamentales– tendió a erosionar aún más aquella débil organización estatal, entronizando nuevamente a los militares (esta vez, del Partido Constitucional) en el Gobierno después de una guerra civil³.

Los gobiernos del *Segundo Militarismo* (1883-1894), al cabo de alianzas con los grupos terratenientes serranos, buscaron reconstruir el país, dotando a los notables regionales (especialmente terratenientes) de la administración directa de los excedentes que podían extraerse de la mayoría de la población, la contribución

³ Nos referimos a la guerra que enfrentó a los excombatientes de la Campaña de La Breña, acaudillados por su más grande héroe, el general Andrés Avelino Cáceres, contra los hombres leales al general Miguel Iglesias, presidente que había firmado el Tratado que puso fin a la Guerra del Pacífico y a quien se le acusaba de haber sido erigido por el ejército invasor.

personal⁴. En la práctica, las reformas del Segundo Militarismo permitieron el fortalecimiento de los poderosos regionales, sobre los que se asentaba el Estado central debilitado por la guerra (Manrique 1988: 165-174, Contreras 2004: 288-291), al tanto que facilitaron la rearticulación de los grupos políticos civiles. A pesar del control férreo que podrían ejercer los hombres de uniforme sobre el gobierno, lo cierto era que el Estado peruano de la postguerra era una entidad aún más frágil que en el período anterior, aspecto manifiesto en la creciente privatización del poder en las áreas rurales y en las resistencias de los sectores rurales a aceptar su autoridad (Manrique 1988: cap. 2, Taylor 1990: 215-245, Turner 2007: 130-153). Ni las alianzas con notables locales y algunas fracciones de la plutocracia limeña lograron salvar la debilidad manifiesta de la organización sociopolítica liderada por los hombres del Segundo Militarismo. El aluvión político que significó la revolución liderada por Nicolás de Piérola que coaligaba a los partidos de origen civil, postergados o desplazados por los militares, terminó barriendo a estos del escenario político. Armados de los pertrechos de guerra desperdigados en la derrota peruana, un conglomerado de actores sociales, organizados en montoneras, se lanzaron contra Andrés A. Cáceres, derrotándolo en Lima en marzo de 1895. La revolución de 1894-1895 fue el último de aquellos movimientos por los cuales grupos armados de la población dirimieron en el campo de batalla el acceso de un caudillo al solio presidencial. Fue el colofón de las guerras civiles decimonónicas, significando un antes y un después en la historia del Estado peruano.

El siglo XX se inició con una inesperada estabilidad política que desterró aquellas luchas por el poder, constituyéndose una nueva élite gobernante capaz de subordinar por más dos décadas a los díscolos actores sociales que en esas guerras civiles habían desbordado la autoridad del Estado. Ciertamente, el Estado peruano se fortaleció a fines del siglo XIX. En ese contexto, el segundo gobierno del *Califa* Piérola resulta interesante. Considerado como un período de tránsito entre ambas centurias, durante su administración debió producirse una serie de transformaciones en el ejercicio del poder que concluyeron con esa dinámica política que se dirimía por las armas. Acertadamente, algunos investigadores han observado que tales cambios estuvieron vinculados a una serie de reformas dirigidas a la modernización

⁴ La llamada contribución personal era una capitación dirigida a generar ingresos al Estado peruano durante el siglo XIX sobre los excedentes del grupo mayoritario de la población: los indígenas. En gran medida, la contribución personal fue heredera o continuación del tributo indígena colonial.

del Estado, vía la centralización o concentración de atribuciones antes dispersas en la población, permitiendo así su fortalecimiento como organización (Cotler 2005 [1978]: 128-135, Manrique 1988: 172-178).

Las más famosas reformas de su breve mandato fueron, sin duda: a) la centralización de los procesos electorales a través de la Ley Electoral de 1896, restringiéndose la participación de los sectores populares con la exclusión de los analfabetos –en la práctica, la mayoría indígena– y la constitución de la Junta Electoral Nacional, entidad que dirigió y controló las elecciones desde Lima, limitando la injerencia de los actores locales fuera de la capital en el resultado del proceso (Chiaramonti 1995: 339, Mc Evoy 1997: 355-359, Peralta: 2005: 78-79); y, b) la reforma de la administración tributaria, a través de la liquidación de la contribución indígena y la creación de una institución centralizada (aunque privada) para una recaudación de tributos que reemplazó el sistema del *remate*. Además de liquidar la filtración de recursos que la intermediación del rematista traía consigo, se eliminó la capacidad de los notables locales de administrar los excedentes económicos de la población indígena, abrogándose la contribución personal (Dulanto 1947: 459-460, Manrique 1988: 174-178, Cotler 2005 [1978]: 135-136, Contreras 2004: 292).

Entre las reformas centralizadoras que emprendió Piérola resalta la reforma del Ejército peruano. La historiografía peruana la considera como una política que permitió la modernización y la profesionalización de los ejércitos faccionales y caudillistas del siglo XIX, sentando las bases de una nueva organización militar, esta vez de carácter nacional. Los *militares* derrotados durante la revolución de 1894-1895 fueron conducidos a sus cuarteles, en donde se les sometió a una instrucción militar renovada, procurada por la Misión Militar Francesa contratada por el mismo Piérola. Otras medidas, como la dación del Código de Justicia Militar y la Ley del Servicio Militar Obligatorio han sido destacadas como parte de aquella reforma, sin embargo, no existe hasta la actualidad una investigación que se haya detenido en el estudio profundo de esta política, ni sus consecuencias fuera de la institución castrense. Esta tesis pretende llenar ese vacío historiográfico, en la espera de ofrecer una explicación que inscriba a la reforma militar de este gobierno en el cambio de la

dinámica política entre ambas centurias y en una estrategia manifiesta de fortalecimiento del Estado peruano a fines del siglo XIX.

Ahora bien, la bibliografía disponible sobre esta reforma es ciertamente reducida, como lo es también la correspondiente a la historia del Ejército peruano. Las más de las veces, los historiadores que han reflexionado sobre ella han empleado las consideraciones que hiciera ya hace muchas décadas Jorge Basadre en su monumental *Historia de la República del Perú* (Basadre 2005, t. 11) y las conclusiones del antiguo oficial del Ejército Víctor Villanueva, en las décadas de 1960 y 1970 (Villanueva 1968, 1971, 1973). Ambos autores coinciden en la relevancia del gobierno de Piérola para la modernización del Ejército peruano y el papel del *Califa* y de la Misión Militar Francesa en la subordinación de los militares a la élite agroexportadora civil que se erigió gobernante durante la República Aristocrática (1899-1919).

Sobre las conclusiones de aquellos trabajos se han hecho investigaciones que abordan tangencialmente la transformación del Ejército a fines del siglo XIX, en tanto que su objeto principal de reflexión está orientado al rol de las Fuerzas Armadas peruanas en el sistema político peruano del siglo XX. Ejemplo de ellas son los libros de Lucie Bullick (1999), Daniel Masterson (2001) y Eduardo Toche (2008). El libro de Daniel Masterson: *Fuerza armada y sociedad en el Perú moderno* es una interesante contribución al estudio de las relaciones cívico-militares en el Perú de la pasada centuria, mostrando la fuerte presencia de los hombres de uniforme en la vida política del país. *Pouvoir militaire et société au Pérou aux XIXème et XXème siècles*, de Lucie Bullick, pone el acento en el componente político de las Fuerzas Armadas, considerando su especificidad profesional y las condiciones sociopolíticas locales, factores ambos que incidieron en su actuar desde su modernización a principios del siglo XX. Por su parte, Eduardo Toche considera, en *Guerra y democracia*, que la presencia de los militares en la escena política del siglo XX se encuentra en relación de los imperativos profesionales militares de ocupación del territorio y protección del orden interno que, aunque fundados a fines del siglo XIX, se transformaron en el devenir del siglo XX, impulsando a los hombres de uniforme a desplazar el liderazgo civil en la construcción del Estado peruano.

Tanto Bullick como Toche ponen especial énfasis en la importancia de modernización profesional experimentada por el cuerpo de oficiales entre fines del XIX y principios del XX, considerando este fenómeno como determinante en el rol y presupuestos organizativos que guiarían a los militares peruanos en la centuria pasada. No obstante, ambas investigaciones, además de observaciones muy específicas, por su mirada general sobre las relaciones cívico militares, no abordan esta reforma sino tangencialmente. Por otra parte, unas pocas investigaciones han tenido como objeto de investigación la Misión Militar Francesa. El libro de Efraín Cobas: *Fuerza armada, misiones militares y dependencia en el Perú* trata de establecer una relación de dependencia técnica y armamentística del Ejército peruano con respecto a los países centrales, como Francia y Estados Unidos. Para este autor, la modernización técnica de las Fuerzas Armadas que se buscaba lograr con la contratación de misiones militares, vino aparejada de subordinación tecnológica en materia armamentística y de política militar respecto a los países centrales. Aunque Cobas ha estudiado este tipo de relación desde la llegada de la Misión Militar Francesa a fines del siglo XIX, la fortaleza de su argumentación se encuentra en los vínculos que se establecieron con Estados Unidos desde el gobierno de Augusto B. Leguía (Cobas 1982). Por otra parte, una reciente tesis de la Universidad París-I, defendida por el oficial francés Thibaut Saint John, muestra interesantes perspectivas de las motivaciones peruanas y francesas para acordar la contratación de la Misión Militar Francesa y una historia de la influencia de los instructores galos en la modernización del Ejército peruano en la primera mitad del siglo XX (Saint John 2007).

En el ámbito castrense peruano tampoco se ha explorado las modificaciones del Ejército que vengo mencionando. Las publicaciones de la Comisión Permanente de la Historia del Ejército (CPHE) dedicadas a la historia de la institución castrense del siglo XIX no se han detenido en este punto, pues su orientación hasta la fecha ha sido el presentar una historia general y oficial del Ejército (Medina 1989; Hidalgo, Medina, Sánchez & Gálvez 2005). Salvo algunos datos de interés, nuevas interpretaciones respecto a este fenómeno no han sido formuladas desde la historiografía militar. Y aunque en la actualidad exista en la CHPE un reavivado interés por presentar nuevas investigaciones sobre las fuerzas militares en el Perú,

este tiende a concentrarse en el período de las guerras de independencia o en el tardío período colonial⁵.

La renovación de investigaciones sobre las relaciones entre el Ejército y la sociedad ha sido destacada por la historiografía del Perú decimonónico en las últimas dos décadas. Autores como Paul Gootenberg (1997), Carmen Mc Evoy (1997), Cristóbal Aljovín (2000), Charles Walker (2004) y Cecilia Méndez (2004) han puesto de relieve las relaciones entre los caudillos militares y los más variados grupos de la población para la construcción de las abigarradas coaliciones de que he dado cuenta arriba; no obstante, el conocimiento de la transición de aquel siglo con el siguiente aún queda por descubrir. Es de destacar que la relevancia del estudio de aquella transición ya ha sido resaltada por Cecilia Méndez en su interesante ensayo “Las paradojas del autoritarismo”. En aquel artículo, Méndez ofrece una serie de pistas y un programa de investigación particular acerca de los cambios operados en el Ejército entre ambos siglos, destacando la importancia de la reforma del Ejército en las relaciones entre el Estado peruano y la población indígena. Según Méndez, la profesionalización del Ejército de este período rompió con las alianzas que secularmente habían pactado los caudillos y jefes militares con la población indígena para llegar o ampararse en el poder, al tanto que la nueva organización del Ejército más burocrática implicó un distanciamiento del Ejército de las economías agrarias y de los grupos sociales que las sostenían, haciéndose su relación más vertical (Méndez 2006).

En concordancia con lo aportado por Cecilia Méndez, y buscando llenar la ausencia en el conocimiento de la reforma del Ejército de fines del siglo XIX, esta tesis pretende poner de relieve, específicamente, los cambios institucionales operados en la institución castrense en este período, no solo reduciendo nuestro interés en investigar la reforma en sí misma, sino por el contrario considerándola como un proyecto de modernización castrense que implicó cambios importantes en las relaciones entre el Estado y la sociedad peruana, los cuales se materializaron en el reordenamiento de poderes, competencias y recursos para el ejercicio de la coerción que constituyó una ruptura con las formas como esta se ejercía en el siglo XIX. En ese sentido, la reforma militar iniciada en el gobierno de Piérola consistió,

⁵CHPE. *Documenta de Historia Militar*. Lima, Año I-II, N.º 1-2, 2010 y 2011.

básicamente, en la concentración de aquellas funciones y recursos coercitivos en una institución castrense obediente a la élite gobernante y consciente de su rol como agente de defensa del Estado. Este proceso de concentración condujo a restar poder a aquellos actores sociales que disponían de una fracción de aquellos recursos, posesión que les había permitido intervenir clientelariamente en el proceso político decimonónico. Ello implicó una importante modificación en las relaciones entre el Estado y la sociedad, a saber: un Estado más fuerte que pudo ejercer –después de un hiato de más de setenta años– su autoridad de una manera asimétrica frente a su población.

Considerando esto último, nuestra tesis busca constituirse en una contribución para la reflexión sobre el Estado republicano desde las canteras de la disciplina de la Historia. Desde hace varias décadas, en nuestro país se ha vuelto un tópico reiterativo el discutir en el espacio público y en las Ciencias Sociales acerca de la ausencia del Estado, su sobredimensión o ineficiencia del mismo⁶. El Estado es un tópico omnipresente en las discusiones y acciones políticas de las sociedades modernas; sin embargo, en el Perú, esta centralidad no ha conducido a la elaboración de suficientes estudios históricos que se correspondan con la importancia de este actor. Nuestros cuestionamientos sobre el devenir de nuestro Estado no han llevado a una agenda historiográfica que lo aborde como un agente transformador de las relaciones sociales. Respetables investigaciones desde perspectivas emparentadas con el marxismo lo han considerado más como una entidad simplemente subsumida dentro de las dinámicas de las luchas de clase, donde unos se apropian del Estado y otros resisten sus políticas determinadas siempre por intereses de clase (Cotler 2005 [1978], Burga y Flores Galindo 1987, Manrique 1988). Así también, recientemente, una nueva historiografía centrada en un paradigma cultural de la política viene desarrollando investigaciones históricas sobre las prácticas y discursos políticos, acercándose cada vez más a las dinámicas de los actores históricos, pero descuidando una teorización acerca del Estado peruano, mostrándolo solo como el telón de fondo institucional donde se enmarcan aquellas prácticas y discursos (Mc Evoy 1997, Aljovín y López 2005)

⁶Una mayor atención al Estado le han otorgado otras disciplinas sociales, especialmente la Sociología. Un texto clásico, desde la marxismo-dependentismo, es el de Julio Cotler: *Clases, Estado y Nación en el Perú* (2005 [1978]). Asimismo, otras aproximaciones a la relación del Estado y la población han sido tratada en Vich (ed.) 2005, Tanaka (ed.) 2010.

Sin negar lo que estas valiosas investigaciones han ofrecido, se hacen también necesarios estudios más integradores que visualicen la complejidad de las luchas y resistencias de los actores históricos, pero que también otorguen visibilidad al proceso de construcción del Estado peruano, los diversos proyectos, los enfrentamientos por su constitución o reforma, la creación o modificación de instituciones al interior de este y los cambios operados en la sociedad y en la vida política al desarrollarse tales procesos. En ese sentido, consideramos importante para la historiografía peruana la propuesta que hizo Theda Skocpol hace casi dos décadas de volver la vista hacia el Estado y considerarlo como un actor fundamental (Skocpol 1995)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En esta investigación se plantea como problema principal comprender la relación entre reforma del Ejército iniciada durante gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899) y la consolidación de la autoridad del Estado a fines del siglo XIX. Ello implica interrogarse acerca de la incidencia particular de las reformas de modernización realizadas en la institución castrense en el aumento de las capacidades coercitivas del Estado peruano y la subordinación política de diversos actores sociales que habían cuestionado y desconocido su autoridad desde el nacimiento de la República.

Para responder a esta interrogante, propongo la siguiente hipótesis: la reforma militar iniciada durante el gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899) significó una modernización del Ejército que expresó dos tendencias: la primera, la concentración de una serie de atribuciones y recursos militares destinados al ejercicio de la coerción, anteriormente dispersos en diversos actores sociales (jefes militares, terratenientes, notables locales y comunidades indígenas), en las instituciones del Ejército, burocratizadas y sometidas a la autoridad del gobierno central. La segunda, dependiente de la primera, concibe que dicha concentración restó capacidad a aquellos actores para cuestionar a los gobiernos establecidos, aumentando la asimetría del ejercicio de la coerción entre la élite gobernante y los actores

mencionados. Ambos ejes se manifestaron en diversos procesos concurrentes, a saber:

1. Burocratización del Ejército: la reforma de Piérola implicó el fortalecimiento de las instituciones del Ejército a través de su burocratización, estableciéndose regulaciones, procesos administrativos y competencias instituidas formalmente y con un carácter racional e impersonal.
 - a. Con el apoyo de la Misión Militar Francesa, el Estado peruano proscribió los mecanismos tradicionales de ingreso y formación de oficiales del Ejército, subordinados antes de la reforma a criterios sociales y clientelares controlados personalmente por caudillos y jefes militares; estableciéndose con la reforma mecanismos formales, impersonales y profesionales controlados por la élite gobernante.
 - b. La justicia militar fue separada del cargo de los jefes del Ejército, suprimiéndose el poder de juzgamiento y castigo sobre sus tropas, ejercido como una prerrogativa particular que aseguraba su lealtad política. La dación del Código de Justicia Militar de 1898 permitió la constitución de un sistema judicial unificado, permanente e impersonal para regular el comportamiento de los miembros del Ejército.
 - c. Se reguló la conscripción militar, estableciéndose una ley que prescribía el servicio militar obligatorio y se organizó una burocracia militar especial encargada de efectuar la conscripción. La movilización de fuerzas militares de facto por particulares (terratenientes, notables locales y líderes de comunidades) por alianzas políticas quedó proscriba, estableciéndose por derecho y de facto el monopolio del Estado, través del Ejército, como única entidad conscriptora.
2. La burocratización, para el caso de los oficiales militares, fue acompañada por el establecimiento de instituciones y procedimientos de cualificación profesional y disciplinamiento para mejorar técnicamente el ejercicio de sus funciones y someterlos a la obediencia institucional y al control civil.

3. Se extendió el sistema judicial castrense hacia la penalización de movilización armada de civiles con fines políticos, como medio de control sobre los actores sociales rivales a la élite gobernante.
4. Se inició una política sostenida de recojo del armamento de guerra en posesión de diversos actores sociales, el cual había sido empleado durante el siglo XIX por las redes de clientelas rivales a los gobiernos de turno para limitar las capacidades coactivas del Estado y desestabilizar a tales gobiernos. Esta política confirió al Estado el carácter de único titular del armamento de guerra en su territorio.

Antes de proseguir nuestro planteamiento, vale hacer algunas aclaraciones acerca del fenómeno que estudiamos, el marco temporal que hemos escogido y algunos conceptos clave de mi propuesta. En primer lugar, consideramos que la reforma del Ejército peruano iniciada en el gobierno de Piérola fue un proceso ejecutado por una élite gobernante en el mediano plazo que superó los límites temporales del período de mandato del *Califa* (1895-1899) y que se extendió por lo menos hasta la primera década del siglo XX. Siendo un proceso también complejo, para esta investigación me he contraído al estudio de las reformas que específicamente fueron emprendidas durante aquel gobierno y que obviamente tuvieron continuidad en las administraciones posteriores (como la reforma de la formación de los oficiales, la institución del sistema judicial castrense, la implementación del servicio militar obligatorio y la política de recojo de armamento de guerra). En ese sentido, esta investigación seguirá la continuidad de tales reformas en los primeros gobiernos de la República Aristocrática extendiéndose nuestro marco temporal hasta aproximadamente el año 1910, a fin de hacer el seguimiento, tanto de su implementación como de sus consecuencias.

En segundo lugar, se hace necesario hacer algunas precisiones de nuestra investigación. La primera precisión es respecto a las atribuciones y recursos para el ejercicio de la coerción. Si bien todo Estado ejerce la coerción para el acatamiento de sus mandatos, en los Estados nacionales modernos la coerción es ejercida por instituciones especializadas, las Fuerzas Armadas y Policiales, las cuales tienden a monopolizar una serie de atribuciones y recursos frente al resto de actores sociales

ajenos al Estado (Tilly 1992, Dandeker 1990). En esta tesis nos referimos a un número específico de atribuciones y recursos que teóricamente debían ser de ejercicio exclusivo del Estado peruano, a través del Ejército, y que por diversos factores históricos eran ejercidos por diferentes actores de la época. En ese sentido son atribuciones y recursos militares para el ejercicio de la coerción.

Cuando nos referimos a atribuciones militares queremos indicar una serie de poderes, en el sentido de capacidades adquiridas consuetudinariamente por los actores, y funciones delegadas por un agente estatal, relacionadas con el ejercicio de la coerción en la órbita de la institución castrense. Entre las atribuciones militares que trataremos están: a) las relacionadas a la carrera militar en el Ejército, el autorizar el ingreso de nuevos oficiales y la enseñanza de conocimientos militares; b) la capacidad de juzgar y castigar militarmente a los oficiales y tropa; y, c) la capacidad de constituir tropas o levantar fuerzas militares. Respecto a los recursos materiales, evidentemente, nos referimos a las armas de guerra, del armamento militar; en relación a los recursos simbólicos, consideramos en este rubro el goce de los grados militares.

La segunda precisión, afirmo que la reforma militar estuvo planeada y dirigida por una nueva élite gobernante. Con ello refiero a un conjunto de políticos, profesionales, militares y empresarios que asumirá el liderazgo del país a fines del siglo XIX y principios del siguiente. Es necesario aclarar que en este período aquel grupo estuvo abierto y en recomposición. Luego de la caída del gobierno del general Andrés A. Cáceres, los partidos políticos de origen civil, el Demócrata y el Civil, congregaron en su alianza a empresarios, hacendados, políticos y, en mucha menor medida, militares para el cuatrienio de Nicolás de Piérola (1895-1899), desplazando al Partido Constitucional de Cáceres. La alianza se mantuvo por un breve período luego del gobierno del *Califa*, no sin defecciones en las filas demócratas, especialmente de aquellos que se oponían a las medidas centralizadoras del gobierno de Piérola (como fue el caso de Augusto Durand) y de los que se consideraron políticamente desplazados por los civilistas cogobernantes (el caso de Guillermo

Billinghamst)⁷. Durante la administración de Eduardo López de Romaña (1899-1903), el Partido Civil progresivamente desplazó del Gobierno a los demócratas, acercándose a los políticos y militares del partido del general Cáceres. Luego de una serie de reparaciones materiales y simbólicas, los militares del Constitucional ofrecieron al Partido Civil el concurso de militares aún importantes y prestigiosos para gobernar monopólicamente en detrimento de los otrora aliados demócratas hasta la década de 1910 (Basadre 1980: cap. III).

Ahora bien, para algunos intelectuales, el Partido Demócrata representaba los intereses de los grupos regionales serranos, contrapuestos a la propuesta de centralización estatal de fines de siglo, lo que implicaría que este proyecto –en el que estaba inscrita la reforma militar– fuera de manufactura enteramente civilista, siendo Piérola un instrumento de aquel partido que «paradójicamente» se enfrentó a sus militantes (Cotler 2005 [1978]: 131-135). En el partido Demócrata, como también en el Civil, existían hombres con visiones modernizadoras del Estado y de la economía del país, aunque también intereses contrapuestos a las reformas que llevasen a cabo esas visiones⁸. Los partidos de la época no eran necesariamente monolíticos doctrinariamente ni los criterios de clase eran los únicos que regulaban su composición (Millones 1998: 5-18). Aunque el Partido Civil fuera el más sólidamente integrado, de acuerdo a criterios socioeconómicos y profesionales (élites agroexportadoras, propietarios de minas, bancos e industrias y renombrados profesionales), existía en él, como en las demás organizaciones políticas de la época, una diversidad de actores de diferentes estratos sociales⁹. En el caso del Partido Demócrata, esta diversidad parece haber sido más acusada, en tanto la figura carismática de Piérola atraía a diferentes actores.

En ese sentido se puede observar la alianza gobernante Demócrata-Civil entre 1895-1899, como un pacto de modernización del país. Correligionarios demócratas

⁷Diversos testimonios de correligionarios de Piérola lo consideraban como «ingrato» al preferir en ocasiones a hombres ajenos a su partido para el desempeño de cargos públicos (Basadre 2005, t. XI: 41).

⁸ Debatido la propuesta de Cotler, Nelson Manrique considera que la revolución pierolista y su gobierno no solo fue una reacción antimilitarista, sino también un medio de «recuperar el control del Estado para las facciones más definidamente burguesas» (1988: 143-144). Resulta comprensible que en el Partido Demócrata existieran hombres con similares aspiraciones que los del civilismo, como el mismo Piérola, Manuel Pablo Olaechea o el intelectual Joaquín Capelo.

⁹ Para una caracterización tradicional de la oligarquía peruana durante la República Aristocrática, puede verse: Burga y Flores Galindo (1987: 84-85).

imbuidos en este espíritu colaboraron en este proyecto liderado inicialmente por un hombre fuerte (Piérola), pero luego fueron desplazados por una oligarquía enriquecida, beneficiaria de las reformas de ese gobierno. La creación de un Estado fuerte y centralizado fue usufrutuada por la plutocracia costeña y sus clientelas, desconociendo la propuesta demócrata de alternancia o de coalición entre los partidos de origen civil, excluyendo toda posibilidad de retorno al poder del *Califa*¹⁰. Con el apoyo de los constitucionales, el proyecto modernizador continuó hasta fines de la década de 1910, con la llegada de Augusto B. Leguía. El costo para los demócratas fue el debilitamiento progresivo de su poder y la exclusión política hasta la muerte de su caudillo, hecho este que produjo la desaparición virtual de su organización.

Es necesario señalar finalmente que esta investigación no es un estudio sobre el conjunto de las fuerzas armadas peruanas. Trataremos exclusivamente de las relaciones del ejército terrestre, el Estado y la sociedad peruana, no siendo por lo tanto nuestro interés el estudiar a la Marina de Guerra, ni hacer extensibles a esta institución las conclusiones que podamos arribar acerca del Ejército. Se ha tomado esta decisión por dos razones. En primer lugar, el incluir dentro de nuestro objeto de estudio a la Marina de Guerra resultaría ser un esfuerzo superior a nuestras fuerzas debido a la amplitud de fenómenos que ello implicaría. No solo demandaría una amplísima recolección de información documental, sino también mayores esfuerzos interpretativos para comprender su especificidad como institución y compararla con el ejército terrestre.

En segundo lugar, considero que la Marina de Guerra no ha tenido el rol protagónico que el Ejército ha ostentado en la historia política peruana de los siglos XIX y XX. Por un lado, el Ejército ha intervenido en la vida política del país, ejerciendo la coerción o violencia en virtud de su localización terrestre y proximidad con otros actores sociales. Por otro lado, esta misma localización y proximidad implicó, por lo menos para el siglo XIX y las primeras décadas del XX, una relación más fluida entre esta institución y la población peruana. La presencia física de los

¹⁰ Piérola consideraba que la política debía ser un asunto de civiles, donde los partidos agruparan a los hombres de mejores cualificaciones, los cuales debían alternar en el poder siguiendo unos procesos electorales veraces. Respecto a la alternancia de los partidos, (Partido Demócrata 1889: 26, Leiva 1995: 99).

militares, sus demandas por recursos (población, dinero o bienes) y la ejecución de prácticas marciales, los convertían en actores centrales del paisaje social decimonónico. Por el contrario, la Marina de Guerra, si bien demandaba recursos y se encontraba simbólicamente presente en las representaciones de la población sobre el Estado, no era una realidad próxima ni constante en la vida cotidiana. Sus relaciones con la población, sea demandando recursos humanos o materiales, siempre era mediado por otras instituciones del Estado. Asimismo, la intervención de la Marina de Guerra en la dinámica política que estudiamos no ha tenido similar gravitación a la de su contraparte terrestre, salvo en casos excepcionales.

DISCUSIÓN TEÓRICA

Hemos mencionado que nuestra investigación inscribe la reforma militar del gobierno de Nicolás de Piérola en una estrategia general de fortalecimiento del Estado peruano. A través de las modificaciones que permitieron la formación de la institución castrense moderna, el Estado asumió las capacidades suficientes como para pacificar la vida política y garantizar su estabilidad, debilitando al mismo tiempo a los actores políticos regionales y locales que cuestionaban su autoridad. Teniendo en cuenta ello, para nuestra investigación resulta útil apoyarnos en planteamientos teóricos que abordaran el surgimiento de los Estados modernos y sus formas de administración, al mismo tiempo de desarrollos teóricos relacionados con la esfera militar, es decir, el profesionalismo castrense y el disciplinamiento.

Dentro de las teorías sobre el surgimiento del Estado moderno en Europa, se encuentran los estudios desde la entrada de la sociología histórica, siendo uno de sus principales representantes el sociólogo Charles Tilly. En sus investigaciones sobre el Estado en Europa, Tilly ha puesto de relieve el factor de la guerra o conflicto entre entidades políticas como contexto general para el surgimiento de los Estados modernos. La competencia entre Estados les exigió la formación de organizaciones permanentes de guerra, defensa, conquista y, luego, administración de lo conquistado, que fueron la base de los Estados modernos. Para la construcción de tales maquinarias se tuvieron que producir dos procesos simultáneos y complementarios: la acumulación y concentración de los medios de coerción y del

capital en determinados espacios¹¹. Según Tilly, históricamente, los medios de coerción han estado dispersos en diversos actores sociales, pudiendo esta acumularse y/o concentrarse. Cuando converge su acumulación y concentración en un agente surgen los Estados, pero en el desarrollo de la historia europea las modalidades de los modernas naciones-Estado ha venido acompañada por una enorme concentración del capital que permitió la construcción de grandes maquinarias militares y administrativas (Tilly 1992: 44-45).

Dentro de la propuesta de Tilly, los Estados modernos se construyeron en oposición a otros actores sociales (la nobleza, los poderosos locales o las oligarquías urbanas) que procuraban rivalizar –a través de medios de coerción a su disposición– las pretensiones de los soberanos. Los procesos de acumulación y concentración de los medios de coerción describen el debilitamiento relativo de estos actores, permitiendo constituir una entidad que se amolda a la definición formalista del Estado que Max Weber propuso: como el agente que monopoliza el ejercicio de la violencia legítima en un determinado territorio (Weber 2008: 43-45) y hace comprensible el aforismo de Michel Foucault que la política es la continuación de la guerra por otros medios (Foucault 2001: 172-173), lo que equivale a decir que el Estado moderno se legitimó en el proceso o luego de una victoria sobre sus rivales, y que el ejercicio de la coerción legítima no deja de ser la manifestación de una relación de fuerza.

El proceso de acumulación y concentración de la coerción se expresó en la constitución de instituciones burocráticas y especializadas que permitieron el dominio del Estado sobre sus rivales y luego sobre la sociedad en su conjunto: los ejércitos, primero, y las fuerzas de la Policía, después. Una interesante contribución, también dentro de la sociología histórica que complementa y afina las teorías de Tilly, nos la ofrece Christopher Dandeker, vinculando los condicionantes de la competencia militar y el capitalismo industrial, con las transformaciones globales del

¹¹Según el modelo teórico de Charles Tilly, los recursos económicos son consustanciales a la construcción de Estados, los cuales se pueden acumular y/o concentrar. En los Estados modernos, además de la acumulación y concentración de la coerción, se desarrolla un proceso similar con respecto al capital. En la presente tesis no desarrollaremos la dimensión su teoría por abarcar fenómenos que no nos hemos propuesto investigar. Sin embargo, resulta obvio que desde fines del siglo XIX se produce un proceso de concentración de capital que posibilitó la implementación de reformas que se tratan en esta investigación. La explotación de la dimensión del capital, y su relación con los procesos de concentración de la coerción, queda a la espera de investigaciones futuras sobre la historia del Estado peruano.

Estado moderno expresadas en una creciente burocratización de las instituciones de ejercicio de la coerción entre los siglos XVIII y XX. Simplificando la propuesta de Dandeker, el surgimiento del capitalismo generó una serie de transformaciones en la sociedad y en el Estado. Primero, la riqueza generada por el capitalismo permitió el sostenimiento de enormes organizaciones como los ejércitos, las mismas que reforzaron aquel proceso económico, pacificando la sociedad y mejorando con ello las condiciones para el aumento de las transacciones comerciales, además de incorporar –través de la guerra– nuevas áreas geográficas al capitalismo.

En segundo lugar, la sociedad industrial posibilitó la movilización y concentración de poblaciones en áreas urbanas, erosionando las identidades comunitarias y las bases de poder de los poderosos locales (especialmente, las élites terratenientes), propias de la sociedad tradicional. Con ello se constituyó una «sociedad de extraños», individual, anónima y masiva, transformación que permitió asentar directamente el poder del Estado sobre una población atomizada, desplazando a los poderosos locales de su función de intermediación de los recursos humanos y materiales (Dandeker 1990: 52-60). Las demandas de la nueva relación de autoridad establecida con una población dividida en clases sociales complejizaron las funciones del Estado, otorgándole nuevas dimensiones que fueron resueltas a través de la burocratización de sus instituciones, dejando de lado el patronazgo como forma de administración.

Dentro de este gran proceso se inscriben las transformaciones de las instituciones coercitivas del Estado. En este contexto, para el Ejército, las formas administrativas tradicionales «premodernas», basadas en el patrimonialismo y patronazgo, fueron reemplazadas por las formas de la moderna burocracia que permitieran un mayor control de los recursos civiles para dirigirlos a la guerra y de los recursos militares en el campo de batalla. Desde el siglo XVIII se instituyó un nuevo cuerpo de oficiales, basado en una jerarquía burocrática y crecientemente profesionalizada sometidos al Estado. Para el caso de las tropas, el Estado se hizo el monopolio de la conscripción, movilización armada que luego de la Revolución francesa adquirió dimensiones nacionales, al mismo tiempo que instituciones nuevas hicieron efectivo todo un complejo proceso de disciplinamiento de conscriptos civiles que permitiera rápidamente convertirlos en soldados, dotando a las acciones

militares un carácter más osado y prolongado que llevó a la guerra a nuevas escalas (Dandeker 1990: cap. 3).

Respecto a estos desarrollos teóricos de la sociología histórica, para nuestra investigación nos parece adecuada la apropiación de algunos aspectos que nos podrán ser útiles haciendo unas precisiones conceptuales. De la propuesta de Tilly, nos quedamos con el concepto de acumulación y concentración de los medios de coerción como tendencia que permite la construcción de estados, pues describe adecuadamente los procesos por los cuales los estados modernos lograron el monopolio de la coerción respecto a un territorio y una población que reclaman como suya. Aquella coerción se expresa a través de diferentes medios para ejercerla, para el caso de los ejércitos y nuestra investigación, en particular, los más evidentes son las armas de guerra, pero también lo son la capacidad de reclutamiento y formación de oficiales y tropas, la capacidad de castigo de tales hombres (es decir, la justicia militar). Estos medios de coerción dispersos en actores rivales al Estado, al ser derivados a este, significó el debilitamiento de aquellos.

Siguiendo a Dandeker, esta concentración solo fue posible y efectiva en la medida que los Estados establecieron formas burocráticas para administrar tales medios y someter a mayor vigilancia y control los recursos (humanos y materiales) de la población civil. Formas administrativas «premodernas» como el patronazgo y el patrimonialismo limitaban un efectivo control sobre tales recursos, por lo que una creciente burocratización y profesionalización de tales tareas permitía un dominio más racional y permanente, extendiendo la autoridad del Estado sobre su población. Sobre las implicancias del capitalismo de las teorías de Tilly y Dandeker, en su fase mercantil o industrial, estas no serán desarrolladas en nuestra investigación por dos motivos. El primero, debido a que nuestro país del período que estudiamos no sufrió una transformación capitalista de gran escala (proceso que solo puede mirarse en períodos muy largos); y, el segundo, en virtud que nuestra investigación está orientada al ámbito castrense y su repercusión en la sociedad.

Por otro lado, en nuestras hipótesis hemos mencionado la extensión de la autoridad del Estado, como otra tendencia general del proceso, vale la pena definirla. La consideramos como la contraparte de la concentración de la coerción, en la medida que el Estado va desplazando la administración, vigilancia y dirección que

ejercían los actores rivales al Estado sobre el territorio y la población. Algunos autores como Theda Skocpol han descrito este proceso como la nacionalización de la autoridad del Estado, en la medida que este ejerce un gobierno directo de una manera universal e igualitaria sobre la nación, a través de sus propios funcionarios, lo que implica la creciente eliminación de formas administrativas basadas en el patronazgo, es decir, a través de intermediarios (Skocpol 1984: 319).

Se hace necesario definir, también, otros conceptos que se encuentran presupuestos en estos desarrollos teóricos y que serán nuestras herramientas analíticas en la investigación. Empecemos con burocracia. De acuerdo a Max Weber, las burocracias son organizaciones complejas que se rigen por una racionalidad legal que privilegia la eficiencia, la especialización, la continuidad, la jerarquía y la separación de funciones y competencias. Tanto la organización, como el establecimiento de las funciones, competencias, atributos y jerarquía de los funcionarios, además de las sanciones, se encuentran definidos y limitados en una normatividad racional, abstracta e impersonal que exige estricto cumplimiento para el desarrollo de los asuntos oficiales (Weber 2008: 176, Bendix 1970: 398-399). Las instituciones burocráticas son, desde un punto de vista técnico, organizaciones superiores, diferenciándose de las formas tradicionales de administración como el patrimonialismo, pues permiten una mayor «precisión, velocidad, eliminación de equívocos, conocimiento del registro documental, continuidad, sentimiento de discreción, uniformidad operativa, [un] sistema de subordinación y reducción de fricciones» (Bendix 1970: 399). La administración burocrática permite un mayor grado de *calculabilidad*, en el sentido de que la actividad de la organización y de los funcionarios se encuentra reglamentada y pauta impersonalmente, lo que hace prescindir del criterio del funcionario. Desde el punto de vista del control de la administración, una organización burocrática es más confiable que las dominaciones basadas en el patronazgo, debido que el funcionario asignado a las funciones se encuentra sometido a la vigilancia jerárquica impersonal que sanciona un vínculo contractual que le otorga su principal o medio de vida (Weber 2008: 174-178).

Una característica adicional de las burocracias es la centralización de los medios administrativos (Bendix 1970: 399-400). Ello equivale a decir que las atribuciones y competencias y los recursos para administrarlas sobre alguna actividad tienden a incorporarse al ordenamiento de la organización. Para nuestra

investigación, ello resulta bastante útil, en el sentido que buscamos observar la concentración de una serie de competencias y recursos dispersos en diversos grupos sociales. En ese sentido, la burocratización, como han manifestado los autores arriba mencionados, al tiempo que debilita a los actores que disponía de ellos, refuerza la institución estatal que ejercerá su dominio sobre aquellos.

Otra característica importante de todas las organizaciones burocráticas es la profesionalización de los funcionarios que las conforman (Weber 2008: 178-179). En el caso de las instituciones militares modernas, la profesionalización de sus oficiales ha sido una constante, por lo que todo estudio que busque comprender la modernización del Ejército no pide prescindir de una definición de profesión y profesionalismo militar. Siguiendo los postulados de Samuel P. Huntington, la profesión militar es una actividad regulada, que tiene como único fin la administración de la violencia en pos de la seguridad de la sociedad y del Estado que es su concreción política. Dado que la administración de la coerción exige una serie compleja de actividades como la organización, equipamiento y entrenamiento de las fuerzas, el planeamiento de sus actividades y la dirección de su funcionamiento, dentro y fuera del combate, la profesión militar debe cumplir tres características: maestría, responsabilidad y corporativismo (Huntington 1995).

La profesión militar exige un grado alto de *maestría* para el combate exitoso, razón por la cual el oficial militar es un individuo con competencias específicas y especializadas. El grado de maestría del oficial se mide de acuerdo a la capacidad de aplicar la violencia en distintas situaciones complejas y siguiendo toda una gama de posibilidades. Dado que el trabajo del militar incumbe operaciones complejas, como la dirección y organización de grandes números de personas, el oficial debe someterse a un lento proceso de aprendizaje tanto técnico como humanístico y científico. La maestría en la administración de la violencia entraña una *responsabilidad*, el oficial debe ejercer su profesión con arreglo a intereses socialmente aprobados, representados en el Estado. Dentro de estos intereses, el más importante es la seguridad de la sociedad y del mismo Estado, del que forma parte como asesor experto. Para el cumplimiento de sus funciones, el oficial militar debe estar motivado por el amor técnico a su profesión y el sentimiento de la obligación social que tiene para ejercerla. Refuerzan esta conciencia de su responsabilidad toda

una serie de regulaciones como las leyes, las costumbres, las tradiciones y el espíritu de la profesión (Huntington 1995: 22-26).

Por último, el *carácter corporativo* de la profesión militar está determinado por el carácter burocrático, en el sentido que el Estado establece límites para su ejercicio a un grupo selecto de individuos. Pero a pesar de ser una organización estatal, los imperativos de seguridad originan actitudes vocacionales que moldean el cuerpo de oficiales hasta convertirlo en una unidad social autónoma. En ese sentido existen, además de los roles e instituciones burocratizadas, instituciones que incluyen a sociedades, asociaciones, escuelas, periódicos, costumbres y tradiciones. Por otra parte, la misma profesión militar refuerza el carácter corporativo, pues los militares, especialmente los oficiales, viven y trabajan separados física y socialmente del resto de la sociedad, separación que está simbolizada por uniformes o insignias de rango (Huntington 1995: 26-27).

Para terminar este acápite teórico, haremos una precisión sobre el componente disciplinario de las instituciones castrenses modernas. Para ello nos valdremos de las premisas teóricas desarrolladas por Michel Foucault. Según este autor, el poder disciplinario es un mecanismo que permite la sujeción, modelación, amplificación de capacidades y utilización de los cuerpos y de las mentes de las personas. Según Foucault, alrededor del siglo XVII, es decir, a inicios de la modernidad, se van modelando ciertas «tácticas» o «disciplinas» destinadas a analizar, manipular y utilizar las fuerzas del cuerpo humano y, atado a este, su mente. Los procedimientos propios de estas tácticas surgieron de forma empírica y reflexiva en distintas instituciones (escuelas, ejércitos, fábricas y hospitales), a través de la aplicación de una coerción sobre los cuerpos, permitiendo la acumulación de un saber dirigido al afinamiento y reforzamiento –de forma calculada– de los mecanismos de control y utilización sobre aquellos (Foucault 2001).

A diferencia de los dispositivos de control de otras épocas, las tácticas del poder disciplinario permiten ejercer una coerción a una escala *infinitesimal*, que ya no busca el control sobre los grupos sociales, sino sobre los propios individuos, sobre sus movimientos, sus gestos, sus actividades, sus ritmos; faculta una coerción ininterrumpida que vela más por el proceso de la actividad que sobre el resultado de

la acción. En ese sentido, el poder disciplinario busca que los cuerpos de los individuos hagan no solo lo que se quiere, sino de una forma prescrita, con la rapidez y eficacia deseada, es decir, se busca crear cuerpos «dóciles». En tanto que ejerce control sobre los cuerpos para someterlos, manipularlos, corregirlos y multiplicar sus fuerzas, el poder disciplinario los sujeta, moldea y los hace obediente, por lo que reduce su capacidad de respuesta política. Finalmente, los mecanismos y procedimientos del poder disciplinario no pueden aplicarse sin que se ejerza una vigilancia jerárquica, constante y difusa, que permita la individualización de los comportamientos, a fin de su análisis, corrección y uso. Esto es a lo que Foucault llama *panoptismo* (Foucault 2001).

METODOLOGÍA

En líneas generales, nuestra investigación seguirá un esquema general que permita visualizar la reforma militar y sus consecuencias, tanto en el Ejército, como en las relaciones entre el Estado y la sociedad. Como primer paso, hemos establecido cuatro ámbitos que serán objeto de nuestro análisis y se corresponden con la política militar implementada específicamente durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, a saber: la selección y formación de los oficiales del Ejército, la justicia militar, los mecanismos de conscripción y la posesión y control del armamento de guerra. Cada una de estas áreas tiene una historia propia anterior a la reforma, unas características que fueron objetivo de transformación por esta última. De allí que para el análisis de los cambios operados por la reforma sea necesario el conocimiento de esas historias. En la caracterización que haremos, resulta fundamental observar el control (o su ausencia) que el Estado ejercía sobre actividades y recursos al interior de esos ámbitos, para comprender los tipos de relaciones que se forjaron entre este y los diferentes actores sociales que intervenían en ellos (jefes militares, terratenientes, notables locales, comunidades indígenas, entre otros).

Un segundo paso estaría dirigido a observar las propuestas de reforma institucional del Ejército en tales ámbitos, establecer los actores que las respaldaban y tratar de hacer evidentes los debates resultantes y los consensos o disensos sobre las políticas a implementar. El tercer paso se orientaría a observar el proceso mismo

de reforma, es decir, la implementación de las medidas conducentes a la modernización del Ejército. Nuestro interés estaría dirigido no solo a ver esta modernización como un medio de mejorar la eficiencia del Ejército, sino observar el proceso de concentración de atribuciones y recursos para el ejercicio de la coerción en aquella institución. Al tanto que esto se lleva a cabo, se pondrán de relieve las limitaciones de las reformas, es decir, las dificultades que el territorio, la organización del Estado y la misma población opusieron a las transformaciones que se buscaron implementar. Por último, el cuarto paso supondría observar las consecuencias de las reformas, observar su éxito y sus límites, tanto en el Ejército como institución, como en la relación del Estado y la sociedad. Resulta claro que la observación de tales consecuencias debe dirigirse a observar las tendencias generales de fortalecimiento del Estado que se produjeron en virtud de las nuevas formas organizativas instituidas en el Ejército.

Ahora bien, dado que abordaremos varios procesos paralelos (aunque interdependientes) relacionados con la institución militar, propondremos una metodología específica para cada uno de ellos:

- a) En lo que atañe a la selección y formación de los oficiales, observaremos las orientaciones hacia la burocratización de la carrera de oficiales, es decir, el establecimiento de normas y procedimientos relativos a la selección y formación de los oficiales del Ejército por parte del Estado peruano. Estas modificaciones serán comparadas con los procedimientos que en este ámbito se desarrollaron en el período prerreforma. Para ello, conviene observar las consecuencias de estas modificaciones en las relaciones de los actores involucrados en el período anterior con el Estado. Nuestro interés respecto a la formación de los oficiales, por evidentes razones, se circunscribirá en el análisis de los procesos de profesionalización y las técnicas de disciplinamiento que los miembros de la Misión Militar Francesa establecieron en la Escuela Militar (de Chorrillos), mostrando el modelo del nuevo oficial del Ejército que se buscaba instituir.
- b) En lo que atañe a la justicia militar, se analizará Código de Justicia Militar de 1898 y su implementación siguiendo dos aspectos. El primero, el impacto del nuevo ordenamiento judicial sobre la organización militar, es decir, el

reordenamiento que aquel supuso en la distribución del poder de juzgamiento y castigo dentro del Ejército, y su tendencia hacia la racionalización de la justicia y la burocratización de su administración. El segundo aspecto radica en la observación de la orientación de la justicia militar hacia la sociedad, el papel y la amplitud de la justicia castrense en el ámbito civil. Con ello se busca conocer si la justicia castrense se constituyó en una herramienta de control social y de fortalecimiento de las capacidades coercitivas del Estado sobre el resto de la población.

- c) En lo referente a la nacionalización de conscripción militar, revisaremos la ley del servicio militar obligatorio y trataremos de estimar su éxito a través del cotejo de los informes de las autoridades militares y las observaciones de actores civiles sobre esta materia. Ello nos permitirá analizar las modalidades empleadas para la conscripción de efectivos, además de los problemas que se presentaron para el logro de este fin. Nuestro interés estará orientado a indagar sobre las formas por las cuales el Estado logró desplazar los medios de levantamiento de tropas basadas en la negociación con los actores arriba mencionados, convirtiendo esta función en una tarea propia y exclusiva del Estado, ejercida a través de una burocracia militar.
- d) Para acercarnos al proceso de concentración de los medios de coerción, tomaremos en cuenta dos aspectos. El primero es la desactivación y represión de los cuerpos armados (montoneras) que constituían fuerzas rivales al poder estatal. La lucha contra estos grupos debe ser enmarcada en un proceso más amplio de debilitamiento de los poderes locales y regionales. Segundo, se tomarán en cuenta los intentos de lucha contra el ingreso clandestino de armas y los procedimientos realizados para que su adquisición sean directamente emprendidos por el Estado.

FUENTES

Para la presente tesis, nos hemos apoyado en fuentes escritas de diferente tipo: legislación y normatividad nacional, documentación impresa de carácter oficial,

impresos particulares, publicaciones periódicas, literatura y documentación manuscrita oficial y particular. En primer lugar, hemos consultado legislación y normatividad diversa, relacionada con el Ejército y el ejercicio de la coerción por parte del Estado. La consulta de estas fuentes nos permite observar el diseño de las instituciones del Estado y las prescripciones sobre su funcionamiento y para con sus integrantes; pero también nos acercan a los comportamientos que realizan los actores sociales considerados desde el Estado como prohibidos, *vicios* o delitos que se buscan sancionar y reformar. Para ello, hemos analizado leyes, códigos, resoluciones legislativas, decretos supremos y reglamentos relacionados con el Ejército, la violencia política y las instituciones policía de diversos períodos del siglo XIX.

En segundo lugar, empleamos fuentes impresas de carácter oficial para acceder a los proyectos, debates y balances relativos a las políticas que se implementaron para la reforma del Ejército y sus resultados. Las memorias de los ministerios de Guerra y Marina y de Gobierno y Policía resultan imprescindibles, pero también fueron fundamentales reportes y memorias de otras instancias gubernamentales, como el Estado Mayor General del Ejército, las prefecturas, la Escuela Militar de Chorrillos, entre otras. Resulta importante señalar que este tipo de información, aunque necesaria por ofrecer una mirada centralizadora y englobante de los fenómenos a tratar, comporta una serie de inconvenientes originados por su mismo carácter oficial. Primero, su información ha sido recogida, organizada y presentada en función de los intereses de los organismos gubernamentales que los han producido, por lo que se obscurecen o ignoran las perspectivas de otros actores que se encuentran involucrados o afectados por los intereses de las reformas. Segundo, su carácter de publicación oficial las orienta hacia una presentación, en la mayoría de los casos, benigna o acomodaticia de la institución que la genera, por estar dirigidas a dar cuenta de la marcha de sus respectivas instituciones a instancias gubernamentales y políticas de carácter superior.

Siendo la información oficial siempre parcial, recurrimos a los fondos documentales de instituciones relacionadas con el Ejército y las fuerzas policiales. En ese sentido, hemos revisado el Archivo Histórico Militar del Perú (AHMP), repositorio que guarda la documentación institucional de las diversas instancias del Ejército peruano del que hemos consultado información que corre desde 1895 hasta

1909. Su observación resultó imprescindible, pues muestra la marcha cotidiana de las diversas instituciones del Ejército, tanto su funcionamiento, como los problemas y vicios de sus miembros; brinda información sobre la ejecución de las reformas promovidas desde el Ejecutivo, las resistencias de los militares y de los diversos actores civiles, al tanto que muestra la opinión reservada de los jefes y oficiales sobre el desarrollo del Ejército y de las mismas reformas. Por su carácter interno, en gran medida confidencial, reporta importantes ventajas frente a la documentación publicada de carácter oficial, dado que ofrece una mirada menos benigna y más crítica. Así también resultó necesaria la revisión de los fondos del Ministerio de Gobierno y Policía, custodiados por el Archivo General de la Nación (AGN). Básicamente, la información consultada, entre los años 1896 y 1902, fueron oficios dirigidos a ese Ministerio por las autoridades departamentales de todo el país con motivo de reportar la ejecución de la política de recojo de armamento de guerra durante el gobierno de Nicolás de Piérola y los primeros años del de Eduardo López de Romaña, sin embargo, la documentación departamental permite observar la dinámica política de los actores sociales frente al Estado y complementa la información de carácter militar del AHMP.

Asimismo, se hizo necesaria la observación de otras fuentes impresas y manuscritas de diferente origen. Las publicaciones de carácter particular resultan en ese sentido insoslayables. Incluimos en este rubro a la prensa, folletos, manifiestos, libros y publicaciones de actores interesados en los asuntos relacionados con las reformas. Respecto a la prensa periódica, sus páginas son un material sumamente rico para observar las conductas y actos de los sujetos históricos, mostrándonos descripciones de una serie de fenómenos que son poco perceptibles en otras fuentes. Manifestaciones de la vida cotidiana de los actores estudiados, sus propuestas y debates sobre los temas de la reforma son accesibles a través de esta fuente. Los periódicos que emplearemos, con preferencia, serán *El Comercio* y *La Opinión Nacional*. Mención aparte merecen las publicaciones periódicas militares. Estando por lo general ligadas al gobierno de turno, contienen los puntos de vista de los oficiales ligados al Ejecutivo, aunque ello no invalida que aquellos oficiales presentasen opiniones críticas a las transformaciones en su institución. De este tipo de publicaciones, nos valdremos específicamente de la *Revista Militar y Naval*, la *Revista Militar* y *El Perú Militar*. Una quinta fuente interesante resulta la literatura

satírica y costumbrista del último tercio del siglo XIX, sus observaciones sobre la vida cotidiana y los tipos sociales de la época nos ofrece una entrada interesante para observar los comportamientos de los militares y sus relaciones con los actores civiles. En tanto literatura crítica, su lectura presenta la posición de escritores civiles respecto de los hombres de uniforme y la institución castrense.

No fue menos útil acceder a información particular de carácter manuscrito, ella se encuentra dispersa en diversos repositorios. Además de los fondos de los Ministerios de Guerra y Marina y de Gobierno y Policía, las colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) ofrecen testimonios de actores particulares involucrados en las reformas que estudiamos. En gran medida, la documentación de este tipo en aquellos repositorios resulta ser solicitudes, peticiones o memoriales de particulares que constituyen una muestra de las actitudes y prácticas cotidianas de los actores históricos respecto a las instituciones de coerción del Estado y la ejecución de las reformas de la transición del siglo XIX al XX.

Capítulo 1. El Ejército en el Perú antes de la Guerra del Pacífico (1821-1879)

Para entender la importancia de las reformas que se produjeron en las instituciones castrenses a fines del siglo XIX, las dos preguntas cruciales que deben plantearse son: 1) ¿cómo era el Ejército peruano antes de la reforma? y 2) ¿qué deficiencias o problemas encontraban los políticos y militares decimonónicos en dicha institución para buscar su transformación? Tales cuestiones nos debe llevar a plantear interrogantes más específicas relacionadas con el funcionamiento propio de las organizaciones militares: ¿cómo se organizaba la institución?, ¿cómo se seleccionaban y calificaban a sus oficiales?, ¿cómo se organizaba el servicio de la tropa? y, finalmente, ¿cuál era su papel en la sociedad peruana decimonónica? La respuesta a cada una de estas cuestiones nos debe permitir realizar una caracterización global del Ejército y comprender los procesos históricos que determinaron su funcionamiento durante este período.

Antes de realizar esta tarea, creemos conveniente esbozar una caracterización de los ejércitos occidentales modernos, dado que el Ejército peruano buscó instituirse de acuerdo a esta tradición bélica. En primer lugar, los ejércitos modernos surgieron como organizaciones permanentes que representaban el monopolio legítimo de la fuerza del Estado en sus límites territoriales, tanto para la defensa del Estado frente a otros, como para mantener el orden interno. En segundo lugar, como organizaciones modernas, desde su formación, su funcionamiento estaba pautado reglamentariamente, es decir, el ingreso, ascenso y baja de sus efectivos, el adiestramiento e instrucción de sus tropas y oficiales, encontraban normas escritas y claras para asegurar su desarrollo como institución burocrática y como maquinaria bélica. En tercer lugar, poseían una estructura piramidal de mando para la centralización de la autoridad y la armonización en la toma de decisiones. En cuarto lugar, por las características de su tarea, se estableció una separación legal, física y simbólica entre los miembros de las instituciones castrenses y los demás ciudadanos. Finalmente, en los estados modernos, la fuerza militar se instituyó subordinada al

poder político civil, el cual la consideraba como la herramienta técnico-profesional para la administración y aplicación de la fuerza. Veamos cómo se aplicó esta tradición en el Perú hasta antes de la Guerra del Pacífico.

1.1. Organizando y desorganizando los ejércitos en el Perú

El nacimiento del Estado peruano exigió la organización de una fuerza militar que asegurara la independencia de la República y protegiera sus instituciones. El Perú delegó tales tareas en tres instituciones distintas, la Armada Nacional, las fuerzas cívicas (conocidas como Guardias Nacionales) y el Ejército Permanente; sin embargo, recaía en este último la labor fundamental en la defensa del país, a tal punto que en el siglo XIX se relacionaba «lo militar» casi exclusivamente con lo que atañía al «Ejército», a sus oficiales, a su tropa, a sus valores y a sus prácticas.

En concordancia con el desarrollo de la práctica de la guerra en el siglo XIX, las leyes de la época¹² diseñaron al Ejército Permanente como una institución única, unitaria, especializada, en la que el Estado delegaba la administración y aplicación de la fuerza pública en tierra.¹³ Este Ejército se dividía en cuatro armas: infantería, caballería, artillería e ingeniería, las cuales además se dividían en cuerpos de línea: batallones en el caso de la infantería, regimientos en el de la caballería, brigadas para la artillería y comandancia en la ingeniería.¹⁴ Debía, además, contar con una jerarquía militar única que se iniciaba en la cúspide con los generales, es decir, los grandes mariscales, los generales de brigada y de división, continuaba con los jefes militares, o sea, los coroneles, tenientes coroneles y los sargentos mayores, y culminaba con los oficiales, los capitanes, tenientes, subtenientes.¹⁵ En esta estructura de mando, cabía a los generales, según su rango, la conducción de las

¹²Ley del 1° de enero de 1827, Ley del 3 de julio de 1847 y Ley del 6 de diciembre de 1862.

¹³ Ciertamente existía la Guardia Nacional, sin embargo, esta solo representaba a la «ciudadanía en armas» que se constituía en fuerza militar en tanto que se le convocara y por lo mismo no era una permanente ni especializada. El Art. 10° de la Ley de 1827 establecía que los cuerpos de la guardia formaban divisiones separadas de las del Ejército.

¹⁴ Hasta la Guerra del Pacífico, el arma de ingeniería se organizaba a través de una comandancia. Esta organización se estableció durante el Protectorado de San Martín y, aunque parece que en las décadas de 1830 y gran parte de la de 1840 no estuvo funcionando, el gobierno de Castilla la restableció en 1848. Sólo recién durante la Dictadura de Piérola se dio a esta arma una organización de regimiento, dividiéndose en las compañías de zapadores, pontoneros y mineros.

¹⁵ Consúltese la jerarquía militar expuesta en la Ley del 1° de enero de 1827.

grandes unidades militares, mientras que a los jefes militares, la dirección de las unidades de menor tamaño; el jefe militar nato era el coronel, quien se encargaba del comando de batallones, regimientos y brigadas (dependiendo del arma a la que sirviera), lo que le daba autoridad plena sobre una unidad militar completa que podía oscilar generalmente entre los 600 y 300 hombres.¹⁶ A un nivel inferior, estas unidades se dividían a su vez en compañías, las que estaban al mando de un capitán.¹⁷

Esta compleja organización, para cumplir su misión con eficacia, debía contar con un carácter permanente que le permitiera acumular experiencia, ejercitar con planificación sus fuerzas y especializarse en su oficio. En ese sentido, tanto sus unidades militares como sus entidades administrativas debían mantenerse en el tiempo, mientras que se debía producir la renovación de su personal de oficiales y de tropas, en períodos fijos, en cantidades calculadas y por causales establecidas reglamentariamente (como cumplimiento del tiempo de servicios, licenciamiento o bajas), a fin de que se conservase siempre un núcleo de militares en el que debía resguardarse los conocimientos acumulados. Y, aunque este núcleo se renovase progresivamente, era preciso que sus prácticas y experiencias debieran quedar registradas institucionalmente y ser transmitidas claramente a los nuevos reclutas, a fin de que en caso de inseguridad se lograra movilizar a los ciudadanos en aptitud de llevar las armas en el número necesario y con la diligencia que exigían las circunstancias.

Aunque, según sus normas, esta era la manera de cómo debía organizarse el Ejército peruano durante gran parte del siglo XIX, la ley nunca estuvo más lejos de la realidad, pues como afirmaba el sabio alemán Ernest Middendorf: «[e]n ningún ramo de la administración pública se ha apartado tanto la realidad de los preceptos contenidos en la Constitución, como en el Ejército» (Middendorf 1973: 270).

¹⁶ En el caso de la infantería, el coronel como jefe de batallón tenía a su disposición un contingente militar de varios centenares de hombres. Así por ejemplo, la ley de 1827 estipulaba que un coronel de batallón tenía a su mando una fuerza militar que ascendía a los 1,200 soldados en tiempos de guerra y 600 en tiempos de paz, mientras que la norma de 1847 redujo esta cifra a 300 soldados en tiempos de paz, sin especificar el contingente de tiempos de guerra.

¹⁷ En las unidades completas, es decir, batallones, regimientos y brigadas el coronel era secundado por otros jefes militares de menor rango como tenientes coronel y sargentos mayores que conformaban la plana mayor de la unidad. A un nivel inferior, en las compañías, el capitán era apoyado por la jerarquía inferior de oficiales (tenientes, subtenientes y alferoces) y por las clases o suboficiales (sargentos y cabos).

Durante el siglo XIX, la debilidad del aparato estatal, la precariedad de la autoridad de sus gobernantes y los deseos de copamiento del Estado, para la atención de las demandas de diversos grupos sociales movilizados políticamente, generó un clima de conflictos por el poder que frenó el desarrollo de un poder público que se erigiera sobre sus gobernados y, por lo mismo, evitó la conformación de ese agente especializado para la administración de la fuerza que prescribían las normas, especialmente porque al interior de sus filas se encontraban los líderes de los grupos en pugna: los caudillos militares. La lógica de los conflictos dividía a la sociedad y a sus instituciones que tomaban partido en las luchas, incluyendo al «Ejército», el cual terminaba fraccionado bajo los liderazgos de los distintos caudillos. En ese contexto, por muy pocos períodos los cuerpos militares adoptaron ese carácter único y unitario que le daba el estatus de ejército nacional, pues cada gran unidad o cuerpo de línea optaba por apoyar un bando, formando sobre sí la base para la conformación de grupos beligerantes mayores (en los que participaba la «sociedad civil») o «ejércitos» que, arrogándose el título de «nacional», luchaban entre sí por el control del Estado.

En ese sentido, el Ejército se dividía en tantas fracciones como caudillos hubiese, y sólo se constituía un nuevo «ejército nacional» único y unitario cuando un bando vencía y excluía a los contrarios de la institución y de la vida política del país. El bando vencedor, a través de una retórica patriótica y legalista, legitimaba su autoridad sobre el país y sobre el Ejército, lo que le permitía tener acceso a los títulos del gobierno y los fondos del Estado de manera provisoria, hasta que una elección confirmara la situación de hecho. Al consumarse ello, era común que el nuevo gobierno reorganizase el Ejército sobre la base de sus tropas victoriosas, al mismo tiempo procedía a suprimir o desactivar los cuerpos militares que habían integrado el ejército rival, es decir, destituía a sus oficiales y licenciaba sus tropas; o absorbía algunas unidades rivales, siempre y cuando se hubieran pasado al lado del vencedor antes de concluido el conflicto o, caso contrario, prestaran lealtad al nuevo gobierno. Cuando se producía esto último, una práctica común fue cambiar los nombres de los cuerpos militares que habían servido al caudillo perdedor, que por lo general representaban acontecimientos ligados a él, con la intención de borrar su figura de la memoria las tropas y oficiales (Hidalgo et ál. 2005: 359).

Estas prácticas de renovación, desactivación o de renombramiento de unidades militares fueron muy comunes; veamos cómo se efectivizaron en las primeras décadas republicanas, cuando la sucesión presidencial fue bastante frecuente. Clarifiquemos esto con la organización de los cuerpos del Ejército durante la década de 1830-1840. Durante el primer gobierno de Gamarra, es decir, entre 1829 y 1833, componían el Ejército regular los siguientes cuerpos de línea: *1er. Batallón Pichincha*, *2do. Batallón Pichincha*, *1er. Batallón Zepita*, *2do. Batallón Zepita*, *1er. Batallón Ayacucho*, *2do. Batallón Ayacucho*, *1er. Batallón Callao*, *2do Batallón Callao*; regimientos *Húsares de Junín*, *Dragones de Arequipa*, *Granaderos del Callao* y *Lanceros de Cusco*; y, una compañía de Artillería. Un año después, durante el gobierno de Orbegozo, el orden de batalla había cambiado sustancialmente y era conformado por: *Batallones Pichincha N.º 1 «3 de enero»*, *Legión Peruana N.º 2*, *Ayacucho N.º 3*, *Libres de Arequipa N.º 4*, *Defensores de la Libertad N.º 5*, *Independencia N.º 6*, *Maquinguayo* y *Cazadores del Rímac*; el Regimiento *Húsares de Junín N.º 1* y los escuadrones *Guías de Callao N.º 2*, *Lanceros de Arequipa N.º 3* y *Cazadores de la Libertad N.º 4*; y una Brigada de Artillería. Comparando ambos cuerpos de línea, solo se reconoce la continuidad de tres nombres (Pichincha, Ayacucho y Junín), ligados a acontecimientos históricos; es probable que los demás unidades hayan obedecido a Gamarra y que después de la derrota hayan sido disueltos por el vencedor. Lo que sí resultaba claro era que Orbegozo bautizó cuerpos del Ejército con nombres relacionados a su vida política, como el Batallón N.º 1 «3 de enero» (fecha en la que aquel escapó del golpe de Estado de Bermúdez) y el Batallón «Maquinguayo» (que recordaba el famoso abrazo).

En 1840, la configuración del nuevo Ejército nacional era totalmente distinta a la de 1834 e incluía a las siguientes unidades: batallones *Ayacucho de la Guardia*, *Legión Peruana N.º 1*, *Cazadores de Ancash N.º 3*, *Cazadores de Punyán*, *Cazadores de Salaverry*, *Cazadores del Cuzco*, *Cazadores de Puno*, *Gamarra*; Regimiento *Húsares de Junín N.º 1* y escuadrones *Granaderos de la Guardia N.º 1*, *Cazadores de Lima N.º 2*, *Dragones de La Libertad*, *Cazadores de la Independencia*, *Lanceros del Perú* y *Lanceros de Piura*, y una compañía de Artillería. Entre el Ejército de 1834 y 1840, no existía mayor continuidad que los nombres de dos cuerpos (el batallón Legión Peruana y el regimiento Húsares de Junín), lo que tampoco era

garantía de continuidad en las tropas ni en los oficiales, y algo que resalta son los nombres de los batallones *Salaverry* y *Gamarra*.

Algo que se puede extraer de esta lista de unidades, sobre todo si comparamos su disposición en 1834 y 1840, es que los caudillos vencedores incorporaban al Ejército nacional nuevos cuerpos de línea teniendo como base las unidades militares que formaban apresuradamente en las regiones donde habían conseguido el apoyo de la población.¹⁸ Esta práctica de crear unidades militares apresuradamente, disolverlas o cambiarles su denominación se produjo ininterrumpidamente durante todo el siglo, incluso hasta 1896 con la última reorganización militar decimonónica después de la victoria de Piérola frente a Cáceres. Por tal motivo, resulta extremadamente difícil afirmar que existió en este período un Ejército nacional permanente en todo el sentido de la palabra durante el siglo XIX, sino que un «Ejército nacional» tenía tanta continuidad como la correlación de fuerzas favorable que expresaba para el caudillo en el poder. Solo en períodos excepcionales de estabilidad (como 1845-1853 y 1872-1879) o de guerra exterior (durante las guerras contra Colombia, Ecuador y Chile), el ejército del gobierno se convertía en el «Ejército nacional», en el sentido que era una institución única y unitaria que encarnaba el poder del Estado, sin embargo, estos períodos eran extremadamente breves y concluían con el surgimiento de nuevos ejércitos rivales que al vencer al ejército gobiernista, repetían el mismo esquema de reestructuración de las fuerzas militares.

En ese contexto de organización y desorganización de ejércitos, era evidente que no se podían establecer pautas regulares de funcionamiento institucional y menos aún cumplir las leyes del Estado, salvo de manera muy laxa cuando el ejército del gobierno y las instituciones nacionales (por ejemplo, el Congreso) se asentaban el tiempo suficiente como para que pudieran exigir los procedimientos legales en el desarrollo de su actividad. Pero también los ejércitos rivales que nacían como los agentes «restauradores» de la Constitución y de las leyes buscaban legitimar su posición nacional «obedeciendo» los mandatos de las normas cuando reconocían la jerarquía de los grados de oficiales, exigían la conscripción de los ciudadanos y

¹⁸ Por ejemplo, el gobierno de Orbegozo fue apoyado militar y políticamente por regiones importantes como Lima y el Callao, Arequipa y La Libertad, lo quedó registrado en la organización de sus fuerzas militares. Por su parte, Gamarra obtuvo en su gobierno el apoyo militar y político de regiones como Cusco, Puno, Ancash, La Libertad y Piura.

establecían sus cuerpos de línea dividiéndolos en armas y unidades de combate (batallones, regimientos o brigadas); no obstante, esta «obediencia» era aún más relajada y se justificaba en el discurso de los caudillos rivales debido a las situaciones de extrema necesidad en las que se encontraba el país. Por tales motivos, el Ejército nacional distaba mucho de ser una institución burocrática, en el sentido de una organización de funcionamiento continuo, y especializada en la administración para la fuerza en defensa del Estado constituido. Tampoco estos cuerpos armados podían constituirse en instituciones meritocráticas, en las que los servicios al país en el campo de batalla o la antigüedad de sus miembros permitiera el establecimiento de una jerarquía de oficiales estable que gratificara con ascensos los méritos (como se verá cuando tratemos a los oficiales) y menos aún podían convertirse en entidades donde se podía construir una estructura de mando centralizado y jerárquico que le diera unidad en la acción y que permitiera a la organización, a su vez, gozar de un mínimo grado de predictibilidad para la constitución de fuerzas en relación de su función de defensa o para su regular funcionamiento administrativo.

Con respecto a esto último, dos fueron las deficiencias capitales en las organizaciones militares de decimonónicas: la ausencia de un comando militar nacional y la ausencia de un Estado Mayor General permanente. Ni en las leyes del período estudiado ni en la práctica se creó un organismo nacional que centralizara el comando del Ejército del que emanaran las órdenes estrictamente castrenses. En tiempos de paz, en cierta forma este vacío era cubierto por el Inspector General de Infantería y Caballería, el cual estaba facultado de vigilar el régimen interior de los cuerpos, sugerir los cambios de puestos y establecer las normas de organización de la instrucción de oficiales y tropas. Sin embargo, el mando y la jefatura de la institución siempre estuvo en manos del Presidente de la República o, en su defecto, del Ministerio de Guerra y Marina. Esta atribución les confería, entre otras cosas, la capacidad para seleccionar los ascensos de los oficiales, los cambios puestos y las medidas administrativas y económicas dentro del Ejército (Hidalgo et ál. 2005: 357-358). En tiempos de guerra era habitual que el Presidente dirigiera directamente las tropas o encargara su comando a un general en jefe, el cual lo ejercía mientras la situación de inestabilidad se mantuviera. La injerencia del Presidente o del Ministro en el comando del Ejército evidenciaba la falta de división entre la esfera militar y política, es decir, entre un comando nacional centralizado (estrictamente militar) y la

jefatura (administrativa) ejercida por actores políticos. La razón por la que nunca se estableció tal división pudo radicar en el hecho de que la mayoría de los presidentes decimonónicos fueron militares, los cuales podían considerar inútil y aún más peligroso la conformación de un comando institucional que reemplazara su mando sobre el Ejército, sobre todo si su posición en el poder se sostenía en gran parte sobre la capacidad de obtener obediencia personal de los cuerpos militares. En este último sentido, la constitución de un cargo que concentrara tanto poder real podía permitir el surgimiento de un potencial rival político que podía usar las tropas en su beneficio.

Asimismo, durante casi todo el siglo XIX, no se creó un Estado Mayor General científico que estableciera una doctrina nacional en estrategia y táctica uniformes a los cuerpos del Ejército, que desarrollara conocimientos fácticos del territorio nacional, que implementara planes y operaciones para la constitución de un sistema de defensa y que diera los lineamientos necesarios para la constitución de una fuerza militar permanente de acuerdo a las posibles situaciones de inseguridad exterior. Es cierto que esta institución no estuvo plenamente establecida incluso en los ejércitos modernos europeos, sino hasta después de la guerra franco-prusiana; sin embargo, ya en la década de 1850, los avances militares exigían el establecimiento de instituciones intelectuales y de planeamiento al interior de los ejércitos. Para el caso peruano, esta falencia había sido reconocida por el ministro Echenique en su presentación ante el Congreso, en 1847, en la cual afirmaba que en un Ejército nacional moderno resultaba necesaria la constitución de un Estado Mayor General técnico, pues «[...] un Ejército bien organizado, requiere previos estudios preparatorios, escuela teórica y práctica, doctrina ilustrada [...]. Las operaciones geográficas y topográficas; la reunión y descripción de los hechos militares nacionales y de cuantas noticias se consideran justamente como materiales para conocer y mejorar la posición militar del Estado; todo lo que pertenece a su sistema de defensa puede ó ser útil en la improvisada explosión de una guerra [...]» (Ministerio de Guerra y Marina [en adelante, MGM] 1847: 16).

Lejos estuvieron los estados mayores generales decimonónicos de este ideal, pues estos parecían más dependencias administrativas y logísticas que organizaciones para el desarrollo de lineamientos estratégicos. Por ejemplo, en 1854, el gobierno del mismo Echenique conformó un Estado Mayor General, el cual estaba

compuesto de cinco secciones: la primera tenía a su cargo cuestiones generales «despacho de materias de justicia, la correspondencia general, el boletín, la órden general, el espionaje y lo relativo a los enemigos»; la segunda se encargaba de la inspección de la fuerza del Ejército, su armamento, vestuario, equipo, ascensos, antigüedades, licencias; la tercera tenía a su cargo aspectos contables y de tesorería, además de llevar la contabilidad en los relativo a «construcción y depósito de vestuario, calzado remonta y repuestos de toda especie; la cuarta manejaba todo lo referente a la subsistencia del Ejército, como «provisiones, suministros diarios, depósito de víveres y forraje, hospital, botiquines»; y la quinta se encargaba del establecimiento de las «marchas, campamentos, descubiertas, reconocimientos, puestos, avanzadas y demás servicio, itinerarios, croquis, diario histórico, paradas y otras formaciones.» (Decreto del 30 de marzo de 1854).

Como se puede observar, este Estado Mayor General es un organismo de campaña, como todos los que existieron durante el período que estamos estudiando. La mayoría de las funciones de estas secciones estaban dirigidas a la administración y mantenimiento de las tropas y labores de logística, a excepción de la última, que de manera muy rudimentaria puede asemejarse a las tareas exigidas a un Estado Mayor General moderno. La situación de este tipo de organización se mantuvo, pues los Estados Mayores Generales decimonónicos solo se constituían durante los tiempos de campaña militar que, al concluir, quedaban desactivados (al igual que los estados mayores divisionarios) los que eran reemplazados en sus funciones por el Inspector General de Infantería y Caballería.

1.2. Una carrera *porosa*¹⁹. La oficialidad del Ejército

Una de las tareas prioritarias para constituir ese «Ejército nacional» soñado por los legisladores resultaba la organización de un cuerpo de oficiales que se encargara del comando y jefatura de las tropas. Siguiendo los preceptos de la guerra moderna, el escalafón de oficiales debía contar con tres características. Primero, debía constituirse en una jerarquía única y piramidal que permitiera establecer una cadena

¹⁹ Recogemos esta caracterización de la carrera militar en el siglo XIX del interesante ensayo de Cecilia Méndez: *Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX al XX*, 2006, p. 20.

de mando centralizado de las operaciones militares; segundo, debía asegurar que las modalidades de ingreso y ascenso de los oficiales siguieran pautas reglamentadas basadas en criterios meritocráticos para asegurar la competencia de los oficiales en el arte de la guerra; y, tercero, debía exigir una dedicación exclusiva y permanente de los oficiales a la carrera de las armas que permitiera su especialización técnica. Sin embargo, el cumplir esta tarea resultó ser un tanto complicada, por dos características que adoptó la carrera de oficiales desde el principio: su porosidad y su extrema politización.

Desde la conformación inicial del Ejército peruano durante las campañas de emancipación, este contó con una acentuada porosidad. Al lado de los oficiales de veteranos del Ejército colonial, como Gamarra, Santa Cruz y Castilla, y de los ejércitos de las nuevas repúblicas sudamericanas que formaban la base del escalafón militar, ingresaron nuevos oficiales en la medida que el conflicto imponía la necesidad de crear continuamente cuerpos de tropas. En este temprano período se establecieron dos modalidades que mantuvieron su vigor durante todo el siglo XIX. La primera consistía en el alistamiento de jóvenes cadetes en los batallones del Ejército, los cuales ganarían conocimientos y experiencia militar durante los enfrentamientos y la vida en el cuartel. Esta fue la experiencia de militares como Francisco Vidal, Felipe Santiago Salaverry, Miguel San Román y Domingo Nieto (Wu 1993: 35). La segunda modalidad se manifestaba a través de la rápida incorporación de civiles al cuerpo de oficiales. Este tipo de militares surgió espontáneamente durante el conflicto, pues la dinámica de la conflagración contra un organizado Ejército colonial obligaba el alistamiento continuo de nuevos cuerpos militares en todas las regiones que juraran la causa patriota. En las capitales de provincia, en los partidos y pueblos se formaron grupos armados, liderados por jefes naturales de tales poblaciones²⁰, los cuales fueron reconocidos por los continuos gobiernos provisorios, otorgándoles los títulos de jefes de guerrillas o, incluso, grados militares dentro del Ejército regular patriota. Veamos con más detalle cómo estas modalidades se desarrollaron en las décadas siguientes.

²⁰ Por ejemplo, en la provincia de Huarochirí, el cacique Ignacio Quispe Ninavilca se declaró leal a la causa patriota; su posición como jefe natural de los indígenas de la región le valió el título de coronel de guerrillas durante el gobierno provisorio de San Martín. De similar manera, el hacendado Juan Evangelista Vivas, hombre de riqueza y notable regional en Yauyos, organizó grupos guerrilleros entre sus dependientes, lo que le valió el título de comandante de guerrillas. Para el caso de Ninavilca, puede verse O'Phelan (1997) y, para el caso de Vivas, Beltrán (1977).

La incorporación de nuevos oficiales de «carrera» al escalafón se hacía sin el paso previo de estudios profesionales en una escuela militar. Era común que en los cuerpos de tropa de los distintos ejércitos se alistaran jóvenes interesados en la carrera de las armas. Los que tenían alguna posición social o pertenecían a «familias distinguidas», es decir, hijos de hacendados, comerciantes, funcionarios públicos y oficiales, ingresaban a las filas con el grado de cadete o «soldado distinguido», un estatus intermedio entre los oficiales y la tropa. Esto no excluía que sectores menos acomodados y mestizos hábiles ingresaran al cuerpo de oficiales, aunque distintos observadores aseveraban que el cuerpo de oficiales siempre estuvo dominado por el componente blanco-criollo. El aprendizaje regular de estos oficiales se hacía lejos de las teorías y centros de educación especializada, asemejándose más a la formación de los aprendices de los gremios de artesanos, donde el *soldado distinguido* era adiestrado por un jefe militar que hacía las veces de maestro artesano. Al concluir el aprendizaje, el *soldado distinguido* terminaba convirtiéndose en *oficial* (nótese la similitud con el término de oficial artesano) (Villanueva 1962: 17-18). Sus habilidades demostradas en campaña o sus contactos personales o familiares les permitían un rápido ascenso a la categoría de oficiales. Ilustremos ello con los casos de Felipe Santiago Salaverry y Andrés A. Cáceres

Felipe Santiago Salaverry nació en 1805, en Lima. Como hijo de una familia distinguida, Salaverry ingresó al Colegio de San Fernando, claustro del que se retiró a la edad de quince años para presentarse en el Cuartel General de San Martín para alistarse como cadete. Fue destacado al cuerpo de la Legión Peruana y desde allí participó en todas las batallas de importancia de la guerra de independencia: Torata, Zepita, Junín y Ayacucho. Sus habilidades en combate y su intrepidez le valieron ascensos sucesivos, llegando al grado de Sargento Mayor a la edad de 19 años. Fue partidario de La Mar durante su gobierno, a tal punto que sofocó la sublevación del coronel Huanvique en el cuartel del Colegio Real, hecho que le valió el ascenso a teniente coronel. Luego del golpe de Estado de Gamarra y La Fuente contra La Mar pidió su baja, pero luego fue reincorporado al Ejército a solicitud de Gamarra, colocándolo como ayudante del Estado Mayor Nacional. En 1833 fue acusado de conspiración y encarcelado en el cuartel de Amazonas, lugar desde donde escapó para asechar al gobierno. Tras un enfrentamiento con las fuerzas gobiernistas, se

mantuvo en la clandestinidad hasta que se presentó a Orbegozo ofreciendo sus servicios para cimentar su gobierno. Este último le confirió los grados sucesivos de coronel y general de brigada en 1834 (Basadre 2005, t. 2: 92-93).

Por su parte, Andrés A. Cáceres fue hijo de una familia distinguida de Ayacucho; su padre era hacendado blanco y su madre era una mestiza a la que se le reconocía una ascendencia de nobleza indígena que podía rastrearse hasta Huayna Cápac. En 1854, Cáceres era estudiante del Colegio Nacional de Ayacucho cuando se produjo la revolución que buscaba derrocar a Echenique. Ese año abandonó sus estudios y se alistó como cadete en el batallón castillista organizado en Ayacucho por Fermín del Castillo. En la batalla de La Palma (1855), Cáceres gozaba del grado de alférez, y al concluir la campaña se le otorgó el de teniente. Entre 1856 y 1858 estuvo también en el ejército que sustentaba a Castilla contra Vivanco y participó en las batallas de Yumina, Bellavista y en el asalto final sobre Arequipa, que culminó con el sofocamiento de la rebelión vivanquista, razón por la cual Cáceres fue ascendido al grado de capitán, en 1858, a la edad de 22 años (Paz Soldán 1917).

Como hemos visto, Salaverry y Cáceres, como miembros de «familias distinguidas» de Lima y Ayacucho, respectivamente, entraron al Ejército con el grado de cadete o aspirante a oficial. Sus habilidades como combatientes y sus vínculos personales o políticos, Salaverry con La Mar y Orbegozo, y Cáceres con Castilla (no olvidemos que Castilla envió a Cáceres a Francia a curarse de una herida que le fue propinada en el sitio de Arequipa), les permitieron ascender rápidamente desde cadete hacia altos grados militares.

Sin embargo, ello no debe llevar a pensar que los oficiales decimonónicos eran unos *hijitos de papá*, que jugaban a la guerra; todo lo contrario, eran miembros de las élites locales o de «sectores medios» que veían ineludible o deseaban participar en la vida política y militar del país. Tampoco se puede negar que muchos de estos oficiales tuvieran verdaderos deseos de sacrificarse por el país, pues los valores, en este caso el patriotismo, en ninguna forma anulan a los intereses, sino más bien los refuerzan cuando se dirigen en la misma dirección (Aljovín y Jacobsen 2007: 83-85). Asimismo, estos oficiales no podían dirigir tropas sin que no tuvieran habilidades de liderazgo ni conocimientos mínimos del arte de la guerra. El mismo caso de Cáceres

durante la Campaña de la Breña ilustra bien esto: su indiscutible liderazgo sobre los campesinos indígenas y soldados veteranos, además de su conocimiento de la geografía serrana y conocimientos de estrategia y táctica, si bien empíricos, le permitieron al Perú obtener importantes victorias durante la resistencia al Ejército chileno en la Guerra del Pacífico. Además, para estos militares, la guerra distaba mucho de ser un juego, arriesgaban la vida en el campo de batalla dirigiendo personalmente a sus tropas. No era extraño que muchos perdieran la vida en una aventura militar, como los casos de Gamarra, Salaverry, Castilla o los hermanos Gutiérrez, mientras otros con mayor suerte, cuando eran vencidos, lograban escapar o eran exiliados, voluntaria o forzosamente, pero igualmente arriesgaban sus bienes, su estatus y sus familias.

Como habíamos afirmado, la porosidad del cuerpo también se manifestaba a través del ingreso de civiles al cuerpo de oficiales. El permanente contexto de enfrentamientos bélicos entre caudillos exigía una continua formación de grupos armados, ya fueran cuerpos de las guardias nacionales o partidas de montoneras, que permitieran a los beligerantes acumular las fuerzas necesarias para vencer a sus contrincantes. Los civiles que garantizaban el apoyo de tropas en las batallas podían ser recompensados con el ingreso al escalafón militar con el grado de coronel y sus efectivos ser incorporados al ejército regular. Para los civiles, los grados y distinciones militares representaban importantes incentivos, pues les conferían además de un medio privilegiado de acceso al poder, el prestigio propio de la carrera de las armas y los beneficios de gozar de un fuero militar que exceptuaba a los oficiales de casos que en el fuero civil podían ser considerados como crímenes o faltas.

El ingreso de muchos civiles al escalafón se hizo a través del paso previo de las guardias nacionales. Era habitual que los civiles adherentes a algún caudillo formaran cuerpos de la Guardia Nacional, a los cuales se les otorgaban grados de coronel o teniente coronel de esta institución. Era obvio que no cualquiera podía darse el lujo de convertirse en oficial de las guardias nacionales, derecho que recaía muchas veces en propietarios de obrajes y de haciendas, quienes además de tener los ingresos suficientes para armar a sus respectivos efectivos, tenían la suficiente cantidad de dependientes para constituir cuerpos armados. Al igual que en el caso de

los oficiales de «carrera», los continuos enfrentamientos internos les daban a estos civiles la oportunidad de adquirir conocimientos rudimentarios del arte de la guerra a través de la práctica, al mismo tiempo que obtener el reconocimiento de su caudillo, quien en recompensa a su lealtad y oportuno auxilio a lo largo de los años los incorporaba al fuero militar. Por ejemplo, durante el gobierno de Gamarra, importantes oficiales de milicias terminaron incorporándose al Ejército, como los casos de dos renombrados gamarristas Martín Gavino Concha y Pascual Aranabal, que fueron nombrados mayor y comandante, respectivamente, cuando las compañías civiles de Quipiscanchis se convirtieron en el Batallón del mismo nombre en 1834 (Walker 2004: 178 y 181).²¹ También el gobierno de Echenique obró de esa manera, incorporando a los jefes y oficiales de la Guardia Nacional de Piura al Ejército en retribución de la sofocación de los sublevados de la hacienda Macacará, en el contexto del enfrentamiento con Castilla (Decreto del 25 de junio de 1854). Es probable que esta situación se haya mantenido incluso hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, como lo demuestra el caso de Miguel Iglesias.

Iglesias fue el hijo de un acaudalado propietario de haciendas y minas en el departamento de Cajamarca. Al alcanzar la edad adulta se hizo cargo del fundo Udima, hacienda que medía casi ciento veinte mil hectáreas y que aglutinaba a cientos de trabajadores. En el contexto de la guerra con España, el gobierno de Prado le nombró como prefecto de Cajamarca (abril de 1865) y, ese mismo año, le confirió el grado de teniente coronel de la Guardia Nacional, a raíz de la conformación del Batallón de *Leales de Cajamarca*, el cual había sido armado con los adelantos de la herencia que pudo obtener Iglesias. En 1874 se alzó en Cajamarca en favor de la sublevación acaudillada por Piérola contra Prado, pero fue derrotado. En 1879 formó también con su propio peculio el Regimiento *Vengadores de Cajamarca* y, al igual que cinco años antes, se encontraba entre los oficiales de la Guardia Nacional que apoyaron el levantamiento de Piérola contra Prado. Como dictador, Piérola recompensó sus servicios otorgándole el grado de coronel del Ejército y le nombró secretario de Guerra y Marina. Iglesias estuvo a cargo de la resistencia de Lima, en la que peleó valientemente hasta que fue tomado prisionero y luego liberado bajo la condición que se retirara de combate. Al regresar a Cajamarca, Iglesias formó un

²¹Durante el gobierno de Gamarra incluso se dictó un decreto que establecía que sólo los «ciudadanos de fortuna conocida» podían convertirse en comandantes de las guardias nacionales (Walker 2004: 178).

nuevo ejército, con el que venció en la batalla de San Pablo (Hooper 1966).²² El caso de Iglesias muestra cómo los notables civiles que contaban con la base de la propiedad de la tierra, sus recursos y sus hombres podían acceder al escalafón militar después de años de servicios a los caudillos.

Para el viajero Ernest Middendorf resultaba desconcertante la extrema porosidad del estatus militar, al punto de referirse a ella en los siguientes términos sobre los improvisados oficiales de los que tuvo noticias: «La transformación de civil a militar, se realizaba pronto y sin dificultad alguna. Si alguien había sido enrolado por un jefe de partido o se había ofrecido él mismo y si se había llegado a un acuerdo sobre las condiciones, el nuevo recluta –oficial– al que generalmente le faltaba el dinero para procurarse un uniforme, hacía coser por el momento el distintivo de su grado en su chaqueta habitual y el resto lo dejaban para más tarde. Si la revolución tenía éxito, esto es, si llegaba a dominar la capital, los grados provisionales eran reconocidos, y se le compraba el uniforme [...]» (Middendorf 1973: 271). Como la cita de Middendorf demuestra, no todos los civiles que eran incorporados al Ejército disponían de los enormes ingresos de Iglesias, pues había otros que podían tornarse militares para obtener una pensión fija del Estado, incluso legar montepíos a sus descendientes, sobre todo desde que el erario público empezó a gozar de los ingentes recursos del guano durante el período de la *Prosperidad Falaz*. Sin embargo, el ingreso de estos civiles podía lograrse siempre y cuando tuvieran contactos en el mundo castrense o pudieran ofrecer efectivos militares a la causa de algún caudillo.

El resultado de la aplicación de ambas modalidades no podía ser otro que un alto número de oficiales, situación que atentaba contra la estructura piramidal de mando de un cuerpo de oficiales técnico, al mismo tiempo que significaba un enorme gasto para el Estado. Este problema había sido reconocido tempranamente, a fines de la década de 1820. Después de la guerra con Colombia, en 1829, Gamarra dictó la Ley de Reforma Militar, la misma que tenía como fin reducir el número de oficiales, armonizándolo con la nueva estructura y tamaño del Ejército. Para ello se formó la *Junta Calificadora de Servicios Militares* encargada de revisar los expedientes y de dictaminar los que debían ser retirados, a los que se les llamó «reformados». Aunque

²²Para información adicional sobre la participación de Iglesias en el movimiento pierolista de 1874 puede verse en Ulloa (1981: 196).

se suponía que los primeros oficiales reformados serían los extranjeros y los oficiales capitulados del Ejército español, Gamarra logró que muchos oficiales peruanos de nacimiento opositores fueran retirados del servicio activo, dejando con ello vacantes puestos claves en los que fueron colocados líderes militares adeptos a su persona. Esta actitud generó grandes enconos entre los reformados, los cuales buscaron continuamente desestabilizar el gobierno gamarrista (Walker 2004: 182, Hidalgo et ál. 2005: 103-104). En ese sentido, el primer intento por reformar a la oficialidad del Ejército nacional nació abortado por su extrema politización, sentando el precedente a cuanto intento de reorganizar el «cuerpo» de oficiales.

El segundo intento por reducir el cuerpo de oficiales se produjo durante el primer gobierno de Castilla, dentro de una política de incipiente institucionalización administrativa del Ejército. En 1847, año en el que se elaboró el primer escalafón militar oficial en la historia republicana, se reconoció que durante los veinte primeros años de guerras caudillistas se habían nombrado más de 1,600 oficiales. A fin de evitar «[...] sobrecarga[r] á la Nacion y [considerando] la necesidad de procurar algun alivio á la Hacienda» (MGM 1847: 21), ese año se dieron de baja a 373 jefes y oficiales, entre los que se consignaron a muertos e inválidos, licenciados, retirados por alcanzar su tiempo de servicios, a los que no contaban con más de cuatro años de carrera, a los destituidos por dictámenes de tribunales militares y a los que no pudieran acreditar nombramientos por autoridad política legítima; siendo el último grupo el mayoritario (110 oficiales) (MGM 1847: Anexo N.º 4). Resultaba obvio que las dadas de baja por los dos últimos motivos se concentrarían en los oficiales de rango inferior (de capitán para abajo), y no alcanzarían a los jefes militares más altos y encumbrados, pues tal «desatino», hubiera generado inconformidades con oficiales aún poderosos que podían romper el ambiente de «fraternidad y unión nacional» que había inaugurado Castilla en 1845.²³

Aún hecho ello, quedaron muchos oficiales excedentes, pues los que se necesitaba estrictamente para labores de comando dentro del Ejército no eran más de 470 oficiales (servicio activo); entre estos excedentes se encontraban no pocos

²³ Siguiendo este mismo espíritu, Castilla reinscribió en el escalafón a varios generales de primera importancia que habían simbolizado bandos contrarios en los veinte años de guerra civil como Mariano Necochea, Francisco de Paula Otero, Domingo Tristán, José de la Riva Agüero, entre otros (MGM 1847: 22 y Anexo N.º 5).

generales de división y brigada, además de coroneles, tenientes coroneles e incluso grandes mariscales. Para economizar gastos al erario nacional sin recurrir a medidas drásticas, se buscó destinar a otro grupo de alrededor de 500 oficiales a cargos administrativos dentro del ámbito del Ministerio de Guerra (juzgados militares, jefes de armas, mayorías de plazas, en las comandancias militares) y otras entidades del Estado (prefectos, intendentes de Policía, fuerzas de Policía y otros ramos), práctica que se había realizado habitualmente por los gobiernos de turno para ganarse la lealtad de los jefes militares que podían convertirse en posibles retadores.

Cuadro 1: Número de oficiales y su situación según su clase militar en 1847

Jefes y oficiales	Colocados		Sin colocación	Con letras/ indef.	Total
	Activas	Pasivas			
Grandes Mariscales	--	3			3
Generales de División	1	--	1	1	3
Generales de Brigada	2	9	7	4	22
Coroneles	15	54	21	1	91
Tenientes coroneles	23	53	25	8	109
Sargentos Mayores	20	68	47	15	150
Capitanes	92	104	36	27	259
Tenientes	186	109	2	20	317
Subtenientes	114	77	37	26	254
Comisarios Ordenadores	--	6	--	--	6
Comisarios de Guerra	--	3 (+5)	1	--	9
Cirujanos Mayores	5	5	2	--	12
Cirujanos de primera clase	2	2	--	--	4
Cirujanos de segunda clase	4	--	--	--	4
Totales	464	498	179	102	1243
Total	1243				

Fuente. Ministerio de Guerra y Marina. *Memoria que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Congreso* (1847). Cuadro de elaboración propia.

Sin embargo, la medida más importante para poner coto a los ingentes gastos que representaba la enorme lista militar fue la creación de la condición de *licencia indefinida* para los oficiales excedentes. Las leyes del 29 de octubre de 1845 y del 7 de enero de 1848 establecieron que a todos los militares sin colocación en ningún ramo del Ejército se les concedería la condición de licencia indefinida, es decir, que se les retiraría del servicio activo indefinidamente hasta que se produjeran vacantes dentro de la graduación militar. Dado que se licenciaba a los oficiales sin darlos de baja, estos seguían siendo considerados dentro del escalafón, mantenían sus grados

de oficiales, el fuero militar y sus derechos a pensiones (Basadre 2005, t. 5: 122-123). En dos años de vigor, la Ley de 1845 permitió el licenciamiento indefinido de 102 jefes y oficiales, siendo los más abundantes los capitanes, tenientes y subtenientes.²⁴ Esta norma establecía que los oficiales licenciados que hubieran asistido a las batallas de Junín y Ayacucho o al segundo sitio del Callao o que tuvieran más de 25 años de servicio gozarían de una pensión igual que el sueldo íntegro de un oficial de la misma graduación en actividad; quienes tuvieran más de diez años de servicios recibirían como pensión la mitad del sueldo en actividad; y los que tuvieran menos de diez años y más de cuatro, se les abonaría la tercera parte.

Esta Ley fue considerada demasiado pródiga en el otorgamiento de altos sueldos, por lo que se dictó la Ley de 1848, en la cual se estableció una graduación más rigurosa teniendo como base el tiempo de servicios: sólo los oficiales que tuvieran treinta años de servicios podían gozar de su haber íntegro; los que hubieran servido entre 25 y 30 años se les abonaría las tres cuartas partes; los de 20 a 25, dos terceras; los de 15 a 20, la mitad; los 10 a 15, la tercera parte; los de 5 a 10, la cuarta parte; quedaban excluidos los que hubieran servido menos de 5 años (Ley del 7 de enero de 1848, promulgada el 3 de febrero de 1848). Sin duda, esta norma inicialmente significó un importante ahorro para las arcas del Estado y permitió organizar más racionalmente la jerarquía militar en concordancia con el tamaño del ejército permanente que por esos años la ley había fijado en tres mil efectivos. Sin embargo, su puesta en vigor solo era eficaz en la medida que no se inscribieran nuevos oficiales al Ejército a través de alistamiento de nuevos cuerpos armados durante las guerras civiles, situación que se produjo recurrentemente después de 1854, en la que también le cupo al propio Castilla un rol protagónico.

Como demuestra el Cuadro N.º 2, la tendencia al incremento del número de oficiales fue una constante hasta la Guerra del Pacífico e incluso durante ella este

²⁴ Esta situación fue reconocida por el ministro Echenique en su exposición ante el Congreso en 1847: «Sin embargo de los buenos frutos que en esta parte ha producido la ley de 7 de Enero, no piensa el Ejecutivo que estén satisfechos los designios que presidieron á su sancion, ni remediadas con ella las angustias del Erario, que reclama economías positivas en esta clase de gastos. Como la facultad concedida al Gobierno fue solo para expedir licencia absoluta á los militares que no contasen diez años de servicio, ni hubiesen hecho las campañas de la Independencia, de Yanacocha, de Socabaya ó de Ancasch, ha resultado de aquí que el uso de aquella autorización recayera únicamente sobre las clases subalternas [...]. Mientras tanto, la clase de estos últimos demasiado numerosa en nuestro Ejército, y á la cual es mucho mas difícil dar colocacion, se halla, casi como antes, en monstruosa desproporcion con las necesidades del servicio en guarnicion ó campaña.» (MGM 1847: 15).

proceso se acentuó, como veremos en el siguiente capítulo. Para 1847, solo se necesitaban 464 oficiales para dirigir un ejército de 3000 hombres, sin embargo, el número de oficiales inscritos triplicaba esta cifra. Después de quince años, la cifra se había duplicado, aunque el número de efectivos había aumentado análogamente. La desproporción del número de oficiales frente al de efectivos llegó a niveles alarmantes en la década de 1870, cuando el número de soldados se redujo. Por estos años, los miembros del escalafón representaban más de la mitad del número de efectivos de tropa (véase, en el Cuadro N.º 2, los años 1870 y 1878). Esta situación fue resentida en 1870 por el ministro José Francisco Balta, hermano del Presidente, al afirmar que «[...] el escalafón marca siempre un número crecidísimo de jefe [sic] y oficiales. Si a esta larga lista se agregan la de retirados, inválidos y de pensionistas por montepío, veréis que es enorme el número de personas que gravan al Erario. Pero la cifra de este gasto es tan subido y crece constantemente, que si bien no sobre puja hoy a las entradas del Tesoro, hace presentar una situación angustiosa para el porvenir deplorable situación acarreada por los disturbios domésticos.» (citado en Mc Evoy 1994: 228).

Pero no debe pensarse que solo las guerras internas permitían el ingreso de nuevos oficiales al escalafón del Ejército, también cabía a las guerras externas un papel importante a este respecto. Por ejemplo, cuando se iniciaron los preparativos para la guerra con el Ecuador, el Congreso autorizó el levantamiento de un ejército de alrededor de 15 mil hombres. En el año 1858, el Congreso facultó al Gobierno para que hiciera un llamamiento a «[...] servicio á los militares, sin distincion del partido político á que hubiesen pertenecido.» (MGM 1861: 7). En virtud de tal facultad, el número de oficiales bordeó los 2,100 hombres, cifra que quedó consignada en la lista militar de 1860. No obstante ello, el incremento del escalafón mayoritariamente tuvo motivaciones políticas, como hemos visto. Por ejemplo, durante el segundo gobierno de Castilla se promulgó la Ley de Reparación Militar (1861), por la cual se autorizó reinscribir a los jefes y oficiales que habían sido destituidos con ocasión de la revolución de 1854 (Basadre 2005, t. 5: 29). Gracias a esta norma, el escalafón militar aumentó su número en casi 600 oficiales (véase, en el Cuadro N.º 2, la diferencia entre los años 1860 y 1862).

Cuadro 2: Escalafón del Ejército entre 1847 y 1878

Jefes y oficiales	1847	1860 (a)	1862	1870	1878 (d)
Grandes Mariscales	3	5	5	1	--
Generales de División	3	4	4	4	3
Generales de Brigada	22	21	28	26	8
Coroneles	91	139	144	104	299
Tenientes coroneles	109	187	209	440	165
Sargentos Mayores	150	208	572	463	835
Capitanes	259	421	468	595	426
Tenientes	317	485	500	551	428
Subtenientes y Alférez	254	562	570	386	528
Comisarios Ordenadores	6	6	7	7	4
Comisarios de Guerra	9	3	3	16(c)	9
Cirujanos Mayores	12	20	20	33	28
Cirujanos de primera clase	4	10	12	29	19
Cirujanos de segunda clase	4	13	17	13	10
Total	1,243	2,084	2,559 (b)	2,668	2,762
Total de efectivos del ejército (tropas)	3,000	n.d.	6,000	4,171	5,241

Fuente. Ministerio de Guerra y Marina. *Memoria que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Congreso* (1847); *Memoria que presenta el Ministro de Estado en el despacho de Guerra y Marina al Congreso de 1860* (1861); *Memoria que presenta el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional de 1862* (1962); *Memoria que en el Ramo de Guerra presenta a la Legislatura de 1870 el Ministro de Guerra y Marina* (1870); Milla Batres (ed.). *Recopilación de partes y documentos de la Guerra del Pacífico: 1879-1883* (1980: 193).

- (a) El 26 de octubre de 1858, el Congreso otorgó al gobierno de Ramón Castilla autorización para aumentar el número de efectivos del Ejército a 15 mil. No obstante, el Ministro afirmó, en 1860, que el total de hombres nunca superó los 11 mil.
- (b) En esta cifra no se incluyen los comisarios del ramo de Marina que, a diferencia que en otros años, son contabilizados con los del Ejército en 1862.
- (c) En esta cifra se encuentran considerados los comisarios de Guerra y tres oficiales de Comisaría.
- (d) La columna 1878 fue compuesta por las cifras obtenidas de la *Revista Militar y Naval* y la publicación editada por Carlos Milla Batres.

Aunque el alto número de oficiales tenía como consecuencias directas la destrucción de toda posibilidad de establecer una cadena de mando eficiente y el exacerbamiento de las pugnas al interior del cuerpo de oficiales, la preocupación de los políticos giró especialmente en torno a los grandes costos que generaba al Estado la recargada lista militar. Durante la dictadura de Prado, el gobierno de Balta y el gobierno de Pardo,

se intentó poner fin a este terrible problema, especialmente motivados por la crisis fiscal que se avecinaba a consecuencia del agotamiento de los recursos del guano. Así, en 1866, el ministro de Hacienda Manuel Pardo buscó reducir los goces pecuniarios y aumentar los requisitos para obtener la situación de licencia indefinida, pues esta tendía a incrementarse y el monto asignado a sus sueldos eran muchas veces mayor al de los oficiales en actividad; para ello buscó unificar las condiciones económicas de los indefinidos y retirados y estableció que el goce de pensión solo podía alcanzarse después de diez años de servicio. Estas medidas generaron el rechazo de muchos militares en tal condición y seguramente fue uno de los principales motivos para el derrocamiento del gobierno de la Dictadura en 1868. Muestra de ello fue que el gobierno provisorio de Diez Canseco declaró nulos todos los actos de la Dictadura e incluso el Congreso autorizó, por única vez, el abono de dos sueldos a los oficiales que habían sido pasados a la condición de indefinidos (Hidalgo et ál. 2005: 169-171).

Como habíamos afirmado, la porosidad no era el único problema que aquejaba al cuerpo de oficiales, a esta se añadía la politización de sus miembros, lo cual impidió la constitución de un cuerpo de oficiales sólido y estable. En el contexto de inestabilidad política y de guerras civiles decimonónicas, los caudillos gobernantes buscaban construir una red de alianzas políticas al interior de la oficialidad, a fin de hegemonizar su poder sobre el Ejército, por lo cual los ascensos y nombramientos en puestos importantes recaían en militares cercanos y confiables, mientras que las licencias o dadas de baja caían sobre los oficiales opositores, quienes podían convertirse en futuros rivales. El objetivo de estas prácticas era construir una pirámide de oficiales con mando de tropa y colocada en puestos claves y que era adicta al caudillo del poder, pirámide que debía estar coronada con el círculo personal del Presidente. Ya vimos cómo procedió Gamarra en su primer gobierno cuando creó la Junta Calificadora de Servicios Militares, ahora demos atención a las medidas que tomó Orbegozo cuando asumió el gobierno en 1834.

Temiendo un golpe de Estado, Orbegozo buscó anular la influencia de Gamarra sobre el Ejército. Así, en los primeros tres días de mandato destacó a Gamarra al sur del país para alejarlo de la capital, separó al coronel Zubiaga del Batallón Cusco y lo reemplazó por el coronel Vivanco, al mismo tiempo nombró al coronel Necochea

como comandante en jefe de las tropas acantonadas en Lima y reemplazó al general Vargas por el coronel Valle Riestra (Basadre 2003, t. I: 265-266). Después del golpe de Estado urdido por Bermúdez y Gamarra, Orbegozo creó la Junta de Purificación Militar, en la cual debían juzgarse a los oficiales sospechosos de sublevación y declarar a los que se debían destituir (Decreto del 20 de febrero de 1834). Esta práctica de buscar copar el cuerpo de oficiales se produjo ininterrumpidamente durante todo el siglo XIX. Similares situaciones se produjeron durante el segundo gobierno de Castilla, pues una vez que este asumió el mando destituyó a los oficiales que habían servido a Echenique durante la conflagración de 1854; también, durante la dictadura de Manuel Ignacio Prado, se borraron del escalafón del Ejército a los generales, coroneles y demás jefes militares que habían servido a Pezet hasta 1865 (Basadre 2005, t. 6: 223), aunque paradójicamente el gobierno provisorio de Diez Canseco hizo lo mismo con los oficiales leales con la Dictadura, empezando con el mismo Prado en 1868 (Hidalgo et ál. 2005: 147 y 170).

Nombramientos, ascensos y destituciones o licenciamientos que siguieran criterios políticos no tenían otra consecuencia que reducir la calidad de la oficialidad. En primer lugar, trastocaba la estructura de mando, pues desvinculaba a los oficiales con sus subalternos y con sus superiores inmediatos. En segundo lugar, que los nombramientos y ascensos no se fundaran en criterios meritocráticos reglamentados, desincentivaba el mejoramiento continuo de los oficiales, es decir, el estudio de doctrinas y el aprendizaje de nuevas técnicas, al mismo tiempo que disminuía su respeto por la disciplina militar y la obediencia jerárquica. En tercer lugar, las continuas destituciones o licenciamientos por tiempo indefinido impedían que los oficiales se dedicaran exclusiva y permanentemente a la carrera de las armas, lo que se convertía en un enorme obstáculo para su especialización técnica, echándose por tierra cualquier intento de acumular experiencia militar a través del ejercicio y el entrenamiento táctico. Sin embargo, la principal consecuencia era reforzar la politización de los oficiales, sobre todo de los que eran destituidos o licenciados indefinidamente.

Tanto los destituidos como los indefinidos se convirtieron en grupo de militares «flotantes», útiles para cualquier aventura en pos de la toma del poder (recordemos que los indefinidos ya habían demostrado su fuerza durante el

derrocamiento de la dictadura de Prado). Para estos últimos, resultaba lógico que buscaran desestabilizar a los gobiernos que los habían colocado en dicha situación o que buscaran encumbrar a alguno que los reintegrara al servicio activo, pues el pertenecer a la condición de indefinido significaba ser un «marginal», un agente alejado de las altas esferas de poder (allí radicaba justamente el motivo por el que había sido retirado del servicio activo), pues todo militar que estuviera en actividad gozaba de un acceso privilegiado al aparato del Estado, además de una cuota de poder (al disponer de un cuerpo militar armado) para negociar nuevos puestos, asignaciones y privilegios. Según Carmen Mc Evoy, los indefinidos tenían importantes papeles en la conformación de alianzas interregionales que buscaban acceder al poder: «Los indefinidos, miembros de los “diferentes y heterogéneos ejércitos” que cada gobierno de turno formó y cada gobierno revolucionario dispersó, constituyeron, en ciertos casos, las vanguardias de estas complejas organizaciones [alianzas interregionales].» (Mc Evoy 1997: 36). El papel de operadores políticos que podían cumplir los indefinidos quedó fuertemente grabado en el imaginario popular e incluso fue recogido en la literatura costumbrista. En el cuento *Taita Briche*, de Abelardo Gamarra, escrito a fines del siglo XIX, se hace referencia satíricamente a la condición y al papel político del indefinido:

Briche es un *infeliz*. *Sinoficio ni beneficio*, y a título de haber sido paisano de no sé qué general, se dio de alta en un batallón, allá por los años de mil ochocientos y tantos. Con un poco de valor y otro de cábula, Briche llegó a ser Capitán; conspiró a favor de cierto candidato, siendo Capitán [...] concediéndole el dicho candidato el grado de Sarjento Mayor y le dió una Subprefectura [...] protegió [una] revolución, que echó por tierra al que le dio el ascenso [...] vínose a Lima, cabuleó el grado de Coronel. Salióle el tiro por la culata: la cámara anuló todos los ascensos concedidos por el gobierno que había caído, y hétenos a nuestro Sarjento Mayor vuelto Capitán con trazas de Comandante y con humos de Coronel. Chismeáronlo con el Jefe del estado, y sin que le valieran aves marías, fue llamado bonitamente a la *indefinida* [...]. [U]n hombre que tenía a menos todo trabajo y que *pensaba de un día a otro ser llamado al servicio* [...]. A cada bullita Briche allí, metido en los clubs, capitulero, gritando: viva X y hasta saliendo a la plazuela el día de la toma de mesas; pero siempre tan desgraciado como en el juego: parecía que bastaba que se declarase a favor de un partido para que este se fuera a pique.» (Gamarra 1973: 124-126. Las cursivas son mías)

El mismo cuento de Gamarra termina con el regreso al servicio activo de Briche, mostrándonos los problemas de los oficiales reincorporados después de años de inactividad, en los que no habían sido sometidos a entrenamiento militar y en los que no habían adquirido los conocimientos técnicos del arte militar que avanzaron vertiginosamente en todo el siglo XIX:

Por fin había sido llamado al servicio! [...] En el largo tiempo que había dejado de servir, habíase olvidado por completo su profesión, porque al parecer tenía tanto de militar como nosotros de arzobispos: ni la apostura, ni el traje, ni el aspecto, ni su modo de andar mostraba algo que revelara al soldado [...]. Tata [sic] Briche tiene aspecto de convaleciente, parece que le hubieran dado chamico, está atufado, *no sabe* lo que le pasa: *las armas de nueva invención le dejan boquiabierto; él se afarola mucho; el corre de aquí para acullá, el pobre hace lo que puede*, pero hay casos en que esto sólo no basta. Es una *lanza apolillada*, un *fusil de chispa*, o como si dijéramos un cañón desenterrado de una esquina. (Gamarra 1973: 128. Las cursivas son mías)

1.3. Intentos de profesionalización de los oficiales

El problema de la falta de instrucción y profesionalización de los oficiales del Ejército había sido un mal sentido durante los primeros cincuenta años de vida independiente y se había tomado conciencia de él con mayor claridad en la segunda mitad del siglo XIX. A propósito de la solicitud de financiamiento para el Instituto Militar que hacía el Gobierno en 1847, el Ministro de Guerra y Marina afirmaba:

Sujeto como está el arte militar á reglas fundamentales, el oficial que carece de teoría ilustrada, y que no ha recibido educacion profesional á propósito, necesita cuando menos aprender prácticamente en los cuerpos aquellas primeras nociones que le hacen adquirir los hábitos de moral, subordinación y orden, sin los que no es posible arraigar una verdadera disciplina. De aquí depende en gran parte el buen éxito de las operaciones y el feliz resultado de un combate [...] es bien claro que con Ejércitos puramente colecticios, formados precipitadamente

y compuestos de oficiales nuevos é inexpertos, poco ó nada favorable podrá esperarse al frente del enemigo. (MGM 1847: 6-7).

Para atender a tal problema se hicieron distintos intentos por crear centros especializados de instrucción y formación técnica de oficiales, los mismos que fueron echados por tierra a raíz de los conflictos internos y, en menor medida, los conflictos externos. El primer intento se realizó en 1830, durante el gobierno de Agustín Gamarra, al abrirse la Escuela Militar de San Pedro en la capital. A ella podían ingresar jóvenes de quince a dieciocho años de edad, y la enseñanza duraba dos años, dividida en cuatro semestres de estudios. Además se ofreció facilidades a los hijos de militares en servicio, medida sin duda hábil para granjearse el apoyo de los oficiales militares (Ley del 30 de enero de 1830). Las asignaturas que se dictaban en la Escuela comprendían cursos básicos como aritmética, álgebra, geometría, geometría práctica, trigonometría e historia militar; cursos básicos en materia militar, como ordenanzas (españolas), manejo de arma, evoluciones de compañía, el mecanismo del paso, campañas, equitación y dibujo militar; y, cursos especializados como táctica, fortificación de plazas, elementos básicos de planimetría y lectura y análisis de cartas militares. Sin embargo, dicha institución no duró sino hasta 1833, pues el contexto de conflicto interno durante el gobierno de Orbegozo obligó al Colegio a cerrar, a pesar de los deseos de este último de reabrirlo previa reforma (Basadre 2005, t. 11: 126-127).

Más de quince años después, el gobierno de Castilla abrió el Instituto Militar, el cual estaba destinado para la instrucción de cadetes para el Ejército y guardiamarinas para la Armada. Dicho establecimiento evidenciaba la preocupación del gobernante por profesionalizar los improvisados conocimientos de los oficiales peruanos, pero al mismo tiempo su interés radicaba en granjearse el apoyo de los militares como en el caso de Gamarra, pues ofreció preferencias en el ingreso a los hijos de los oficiales. La composición del currículo de esta institución para los cadetes del Ejército mostró importantes modificaciones en comparación con el de su antecesor. Con respecto a las asignaturas básicas, se incluyó los cursos de planimetría y estereometría (parte de la geometría dedicada a la medición de los cuerpos sólidos) y de aplicación del álgebra a la geometría, al mismo tiempo que se suprimió el de historia militar. El currículo preveía también cursos auxiliares como

geografía física y política, manejo de papeles y documentos militares, esgrima, gimnasia, principio del derecho de gentes en materia de guerra, idiomas extranjeros (inglés y francés), además de los ya previstos en el de 1830, como ordenanzas y dibujo militar. Sin embargo, las modificaciones más importantes se verificaban en los cursos de especialidad militar entre los que figuraban, castramentación (arte de organización de campamentos militares), fortificación de plaza y de campaña, estrategia y su aplicación al terreno, mecánica elemental, hidráulica y química militar (Basadre 2005, t. 9: 127). Este grupo de asignaturas buscaba introducir a los jóvenes cadetes a los nuevos conocimientos que se estaban desarrollando en la naciente ciencia militar en Europa, especialmente los dos últimos, pues su aprendizaje era indispensable para el empleo de la nueva tecnología bélica. Sin embargo, este establecimiento no funcionó más de cuatro años, pues fue cerrado durante la revolución de 1854. En 1860, Castilla reabrió el plantel, esta vez con el nombre de Instituto Naval Militar y se mantuvo funcionando por lo menos hasta 1867.²⁵

Un lustro después, fue el gobierno de Manuel Pardo quien asumió la tarea de crear una nueva institución de formación militar, la cual asumió el nombre de Colegio Militar. Rodeado de una atmósfera de renovación y entusiasmo, el gobierno de Pardo debió ser visto como la alternativa de los civiles que podría reformar y profesionalizar a la institución castrense, sobre todo en un contexto de rechazo al militarismo evidenciado por la derrota de los hermanos Gutiérrez y su propia elección como presidente. Aunque es seguro que Pardo haya visto con gran simpatía la instrucción de los oficiales como un medio de modernización de la institución, es seguro también que este abrigara el deseo que el Colegio fuera un mecanismo idóneo para evitar la politización de futuros oficiales, redirigiendo sus energías al estudio profesional.

Encargado de la instrucción de oficiales estrictamente para el Ejército, pues se fundó por separado la Escuela Naval, el Colegio Militar inició sus labores en 1872 con un total de cien alumnos. Inicialmente, la educación no fue muy compleja y no mostró gran renovación con respecto al de 1850. El cuerpo de asignaturas preveía cursos básicos como geometría elemental y descriptiva, trigonometría, física; cursos

²⁵ Cfr. BNP. *Programa de las materias cursadas en la Escuela Militar, por el que serán examinados sus alumnos en los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de febrero de 1867*. Lima: Impr. de A. Alfaro y Cía., 1867.

auxiliares como historia militar, dibujo lineal y topográfico, ordenanzas del Ejército, esgrima de todas las armas; y, cursos especializados como mecánica y pirotécnica, y táctica y castramentación y fortificación pasajera. Después que se graduó su primera promoción, en 1877, el Colegio realizó una reforma curricular, lo que trajo consigo una notable complejización de las asignaturas. En primer lugar, se aumentó el número de asignaturas básicas, entre las que figuraban álgebra, geometría elemental, trigonometría rectilínea y esférica, geometría descriptiva, mecánica racional y aplicada, física elemental y química elemental y aplicada. En segundo lugar, se incorporaron nuevos cursos de carrera, los cuales eran comparativamente más especializados que sus precedentes. Así aparecieron cursos como construcciones militares, artillería, fortificación pasajera, tácticas de infantería, caballería y artillería, servicio de sitios, ataque y defensa de plazas, higiene militar, administración militar y un curso especial de arte militar. Similar situación se produjo en los cursos auxiliares, los cuales aumentaron considerablemente y se hicieron más específicos. Aparecieron, de esta manera, los cursos de cosmografía y arquitectura; se incluyeron cursos de conocimiento general, como historia y geografía particular del Perú, historia y geografía militares, elementos de literatura y elementos de filosofía; y se ingresaron cursos específicos como derecho público e internacional aplicado a la guerra y dibujo lineal, natural y de paisajes. Esta diversificación de cursos evidenciaba una creciente complejidad de la profesión de las armas y la preocupación del gobierno de Pardo por formar una oficialidad preparada tanto en el orden militar como en los conocimientos generales, como lo evidenciaban los cursos relacionados a la historia, geografía, literatura y filosofía. Lamentablemente, esta reforma curricular no tuvo la oportunidad de mostrar sus frutos, pues el Colegio tuvo que cerrar sus aulas un año después, al iniciarse la Guerra del Pacífico (Basadre 2005, t. 9: 128-130).

La existencia de estos centros de formación profesional militar evidencia el interés de distintos gobiernos por dotar a la oficialidad de los conocimientos técnicos de su profesión, al mismo tiempo que regular de manera más racional el ingreso de nuevos oficiales a la carrera de las armas. Sin embargo, en su creación existieron también motivaciones políticas, pues tanto Gamarra como Castilla vieron en estas instituciones una forma de congraciarse con los oficiales al otorgar a los hijos de estos facilidades para el ingreso a estas escuelas, mientras que Pardo lo vislumbró

como un mecanismo que permitiera la despolitización de los militares; sin embargo, tal como la historia demostraría después, el proyecto de Pardo resultó un fracaso más.

En conjunto, se puede afirmar que todos estos centros no alcanzaron a llenar su función, ya que cada uno de ellos funcionó por breves períodos (el más largo fue de siete años) y se vieron obligados a cerrar sus aulas periódicamente debido a los contextos de inestabilidad política y guerra que aquejaron al país constantemente. Si bien es probable que de ellas hayan egresado algunas promociones de oficiales técnicos que, sumados a los que eran becados o realizaban con su propio peculio estudios militares en el extranjero, formaran la «vanguardia» profesional de los oficiales del Ejército, no obstante, debió ser una reducida minoría. La gran mayoría de los oficiales se formaron en el oficio de las armas en los cuarteles, alejados de las doctrinas y la teoría militar. El aprendizaje de las viejas ordenanzas españolas, el uso de las armas y el conocimiento táctico se hacía rudimentariamente en guarnición o en campaña, siempre bajo la supervisión del jefe militar del cuartel. En ese sentido, el aprendizaje de la carrera militar se asemejó más al modelo gremial-artesanal que a uno académico-profesional.

1.4. La justicia militar en el siglo XIX

La justicia militar era una faceta sumamente importante del mundo castrense decimonónico. Considerada como parte del sistema de regulaciones especiales propias del Ejército, su función primordial era mantener la disciplina al interior de la institución. En los estados de cuño moderno, la justicia militar teóricamente se encontraba fundada bajo el supuesto que los delitos cometidos por los militares en servicio activo eran diferentes de los delitos comunes. En tanto que las organizaciones castrenses estaban dirigidas hacia la guerra, los comportamientos que disminuían la posibilidad o entorpecían el combate exitoso, revestía una mayor significación, pues sus consecuencias podían afectar la vida y los intereses del Estado y la Nación. Acciones como la desertión, el abandono de puesto, la insubordinación, aunque en la vida civil podían comportar perjuicios a los privados o al Estado, tales comportamientos no tenían las mismas consecuencias para el destino del país si es que se cometían al interior de la institución castrense y peor aún en un contexto de

guerra. En ese sentido, la meta de la justicia castrense resultaba ser el aseguramiento de la disciplina y obediencia de los deberes militares, a través del castigo de la omisión o incumplimiento deliberado de aquellos deberes, con penas más duras que en la justicia ordinaria y con procedimientos más rápidos, orientadas ambas características a dotar a esta justicia especial de un carácter ejemplarizador (Eto, Landa & Palomino 1997: 366-371).

En el Ejército decimonónico peruano, la justicia militar se encontraba regulada, en primer lugar, por las viejas Ordenanzas de Carlos III, norma dada en 1768 y que mantuvo su vigencia hasta 1898. Habiendo sido creadas para los ejércitos de una monarquía de Antiguo Régimen, las Ordenanzas establecían una justicia privativa militar, no solo en función de la calidad del delito (militar o de servicio, como en los sistemas modernos), sino también en función del carácter de las personas, es decir, reconocía el fuero militar personal. Es así que, por un lado, la justicia militar se basaba en la consideración que las condiciones especiales de la guerra exigían un tipo de justicia excepcional, separada de la ordinaria para el juzgamiento y sanción rápida y ejemplarizadora de delitos que atañían a la milicia; pero, por otro lado, instituía una jurisdicción separada o fuero que otorgaba a los *soldados* del Rey una justicia privativa que facultaba su juzgamiento por jueces propios del estamento castrense, eximiéndolos de la jurisdicción ordinaria. Este fuero era privilegio de los militares (jefes, oficiales, suboficiales y soldados), de las tropas regladas y ligeras, y de los retirados que por sus servicios lo hubieran alcanzado; pero se extendía también a las esposas de los militares y sus hijos, las primeras hasta su muerte y los segundos hasta los 16 años, en el caso de los varones, y hasta contrajesen matrimonio, en el de las mujeres (Ordenanzas, Tratado VIII, Título I, Arts. 1º, 2º y 8º).

En tanto que gozaban del fuero personal, los jefes y oficiales, por ejemplo, estaban exentos de someterse a los jueces del Rey en procesos civiles y criminales, debiendo ser juzgados por los capitanes generales o el Comandante militar de la jurisdicción en donde residiesen, cargo que recaía, en el Virreinato del Perú, en el Virrey; tampoco los militares y sus dependientes podían ser encausados por la justicia ordinaria en caso de deudas, salvo que ellas hubieran sido contraídas antes de acceder al fuero, y aún en este caso no podían ejecutarse sobre sus caballos, armas ni

vestidos (Ordenanzas, Tratado VIII, Título I, Arts. 4º y 5º). En los casos de los oficiales y soldados en servicio y los oficiales retirados –desde alférez–, las causas criminales por las que se les quisiera procesar podían ser sustanciadas por la justicia ordinaria en un plazo breve, y debían ser derivadas a los tribunales militares para la dación de la sentencia en el cuerpo al que pertenecían los encausados (Ordenanzas, Tratado VIII, Título I, Art. 7º; Título, V, Art. 24º), mientras que todos los dependientes de este fuero ostentaban la prerrogativa que les permitía declarar ante los jueces ordinarios solo con la autorización de su jefe militar respectivo (Ordenanzas, Tratado VIII, Título I, Art. 10º).

El establecimiento del fuero respondía, sin duda, a una correspondencia entre las obligaciones de servicio al Monarca y una serie de privilegios tendientes a motivar la incorporación de los vasallos a las filas del Ejército. En el Virreinato peruano, las Ordenanzas primitivamente debían regir sobre los cuerpos de Ejército regulares acantonados en estas latitudes, no obstante, desde el gobierno del virrey Amat se constituyeron crecientemente cuerpos de milicias que en su conjunto incorporaron a más de 50 mil vasallos, los cuales se encontraban también sometidos a las Ordenanzas. Es evidente que, desde tempranas fechas, además del prestigio que otorgaba el uniforme, los vasallos peruanos que se incorporaron o constituyeron cuerpos de milicias motivados por la posibilidad de obtener un estatus legal privilegiado y extender sus posiciones políticas fuera del tradicional Cabildo, como bien han mostrado Carlos Carcelén y Horacio Maldonado (2011) y Susy Sánchez (2007).

La nobleza limeña y provinciana, hacendados y comerciantes criollos que formaron con su peculio cuerpos de milicias con sus dependientes, además de aumentar a su estatus con el título de *coronel*, incrementaron su capacidad de sujetarlos, sometiéndolos a su autoridad militar. Asimismo, los abusos que cometieran con actores ajenos al fuero quedaban excluidos de ser sometidos a la justicia ordinaria del Rey, siendo juzgados solo por sus propios superiores, con la complacencia propia de una institución que se basaba y buscaba incrementar el espíritu de cuerpo (Sánchez 2007: 734-737). La experiencia del poder que habían ganado aquellos actores sociales que formaban milicias para ingresar al fuero militar era bien recordada en el departamento de Trujillo, en 1822:

Es demasiado sabido que en tiempo del Gobierno Español estos cuerpos no tenían otra existencia que un cuadro de oficiales, que los más de ellos aun no sabían llevar el sombrero: pero se tenía [quemado] mucho cuidado de que estuviese completo, para disfrutar el fuero, y otras ventajas civiles, que no dejaron de ser lucrosas y opresoras para los Ciudadanos. Era bastante común que un cuerpo de estos ocupase la area de más de cien leguas, y que un Cuerpo de Milicias estuviese repartido en siete y ocho pueblos, y desde uno de ellos saliese la voz de un Gefe para turbar la quietud del labrador, impedir el ejercicio de un Juez, y tal vez hacer venir a un soldado de diez leguas, abandonando sus cementaras y familias, para solo responder a la demanda de dos pesos, o ser arrestado por una pequeña fala de servicio [...].²⁶

Como queda dicho, el fuero militar prescribía también una reglamentación particular a las actividades militares que debían ser juzgadas al interior del Ejército, era esta la justicia propiamente castrense. Delitos como la desertión, la traición, la desobediencia, el motín, el robo o la destrucción de los materiales y recursos para la guerra o la negligencia en acciones de armas eran delitos que las Ordenanzas consideraban como eminentemente militares, pues atentaban contra la disciplina, la subordinación y la efectividad de la maquinaria militar. Para su juzgamiento, al interior del ejército del Rey, se disponían de dos tribunales diferenciados: el Consejo de Oficiales Generales y el Consejo de Guerra Ordinario. El primero era un tribunal dirigido al juzgamiento de delitos militares y faltas graves cometidas por los oficiales por las autoridades militares de la provincia. Correspondía al Capitán General (el Virrey) o al Comandante General, además de presidirlo, nombrar entre siete y trece oficiales generales ante los que debía comparecer el acusado, así también al fiscal. Este tribunal, solo sometido a la autoridad del Rey, y en su representación, buscaba asegurar el cumplimiento idóneo de las responsabilidades de los oficiales del Ejército y punir las acciones contrarias al servicio de su Majestad (Ordenanzas, Tratado VIII, Título IV, Arts. 1º y ss.).

El segundo tribunal, el Consejo Ordinario, estaba dirigido a juzgar y penar los delitos militares que cometieran los individuos de clase inferior, sargentos, cabos y soldados. Al ser cometido un delito por un individuo de esta clase, el Coronel del

²⁶ Colección Documental de la Independencia del Perú. Tomo V, Volumen 3, 1973, p. 18.

Regimiento ordenaba la formación de un tribunal de siete capitanes del mismo regimiento, presidido por el coronel. Las Ordenanzas habían facultado a los jefes militares el poder de ser jueces de sus propios soldados e imponerles las terribles penas que aquella norma prescribía, fortaleciendo su autoridad sobre sus subordinados (Salas 1992: 45). En ese sentido, si un acusado era detenido por un cuerpo militar distinto al suyo, este debía entregarlo al autoridad militar de la que dependiera el reo para que sea juzgado por sus propios jefes y castigado al interior de su mismo cuerpo (Ordenanzas, Tratado VIII, Título V, Arts. 1º y ss.).

Las Ordenanzas prescribían una justicia rápida y ejemplarizadora: el proceso en campaña no podía exceder de 24 horas y, en tiempos de paz, tres días, a fin de que el delito fuera inmediatamente castigado. Era ejemplarizadora, también, en tanto que los procesos judiciales castrenses asumían cierta ritualidad²⁷ y las penas eran brutales y sangrientas, mostrando la enorme asimetría de poder entre el Monarca y su representante militar respecto a los acusados y sus cuerpos. Michel Foucault ha mostrado bastante bien que los sistemas penales de Antiguo Régimen estaban diseñados para asegurar el acatamiento de la voluntad del Rey a través de una ritualización de la justicia y de la aplicación de una brutal penalidad que se encarnizaba sobre el cuerpo de los condenados, mostrando a los súbditos en un contexto fuertemente teatralizado, la asimetría del poder entre quien invoca la ley (el propio Monarca) y quien le infringe. Sólo en ese contexto, en el que se exaltaba el poder del Rey, se podía comprender la desproporción de las penas corporales y aflictivas de la penalidad de Antiguo Régimen (Foucault 2001: cap. 1).

Siendo los jefes militares los delegados del Rey, las Ordenanzas les otorgaban un arsenal punitivo ciertamente impresionante con castigos que iban desde la incineración, descuartizamiento y la horca (estas tres podían ejecutarse en el mismo acusado), pasando por el fusilamiento. Los castigos más frecuentes en la norma eran los de muerte (estaban prescritos en 70 artículos), aunque también se preveían penas

²⁷ Para el juzgamiento de oficiales y soldados, los tribunales revestían la mayor solemnidad, sus miembros dispuestos en forma semicircular rodeaban al acusado, quien era sometido a los jueces acompañado de una guardia. Los oficiales comparecían sin espada y eran sentados en un taburete raso, mientras los soldados ingresaban atados de brazos y eran sentados en un banquillo sin respaldo. La deliberación de la sentencia se hacía sin presencia del reo y era proclamada luego ante los miembros del regimiento (Ordenanzas, Tratado VIII, Título IV, Arts. 13º-15º, 28º; Título V, Arts. 38º-41º).

aflictivas o corporales,²⁸ que incluían maltrato sobre el cuerpo de los condenados (presentes en 52 artículos). Por ejemplo, la mutilación de un miembro, por lo general de la mano, se les imponía habitualmente a los acusados de afrentar verbal o físicamente a los superiores militares, resultando fuertemente ejemplarizadora, pues según el derecho hispánico «nada parec[ía] mas razonable que el que cada delincuente sea castigado en lo que le sirvió de instrumento para su delito» (Gutiérrez 1823: 14-15). Otra pena común en las Ordenanzas eran las baquetas, que consistía en pasar al reo, con medio cuerpo desnudo, por entre dos filas de soldados en que se formaba una compañía, «armado cada uno [de los soldados] con una fuerte correa de *baqueta*, con el porta-fusil, ó con una vara flexible», quienes descargaban sobre la espalda del reo (Enciclopedia Española de Derecho y Administración 1852: 632).

Cuadro 3: Penas previstas en las Ordenanzas Militares de Carlos III

Tipo de pena	Pena	Cant de Art.	Total
Pena de muerte	Pena de muerte	37	70
	Horca	10	
	Horca y descuartizamiento	4	
	Horca e incineración	2	
	Fusilamiento	17	
Penas corporales o aflictivas	Pena corporal	11	52
	Mutilación	3	
	Baquetas	8	
	Trabajo en el arsenal de Marina	4	
	Trabajo en la plaza por tiempo restante del servicio	7	
	Prisión en África con grillete	4	
	Prisión perpetua	3	
	Prisión	12	
Otras penas	Suspensión de empleos	8	13
	Recargo del tiempo de servicio	2	
	Tomar el lugar del fugitivo	1	
	Confiscación o retención de bienes	2	
Pena arbitraria	Pena arbitraria	16	16
Total		151	151

Fuente. Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos. (1847-1852 [1768]).
Cuadro de elaboración propia.

²⁸ «Todas las penas que causan dolor, aflicción, molestia ó incomodidad al cuerpo humano, ó le privan de ciertas comodidades, son y deben llamarse corporales». (Gutiérrez 1823: 114).

Además de otras penas aflictivas, como el trabajo forzado en los arsenales de guerra, el servicio en plazas lejanas (como en África) o el reclutamiento en la Armada, las Ordenanzas dejaban un amplio margen a los jueces para establecer los castigos a su voluntad, no estableciéndose taxativamente las penas a algunos comportamientos prohibidos. Así, en un importante número de delitos militares (en 16 de ellos se establece pena al arbitrio del jefe militar), los jueces podían escoger cualquiera de las penas anteriores, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de la trasgresión, lo cual les daba un enorme poder discrecional para el castigo. Con un sistema punitivo de estas características, el Rey o su representante se aseguraba un fuerte control sobre los oficiales de alto rango, y los jefes de cuerpo la obsecuente sumisión de sus tropas.

Teóricamente, con el advenimiento de la República, una serie de disposiciones de la justicia militar colonial debía modificarse, pues atentaba contra los principios republicanos; sin embargo, la continua inestabilidad política, la ausencia de consensos en las facciones políticas gobernantes, los beneficios que reportaban a los caudillos militares y las inercias institucionales del Ejército, permitieron que las Ordenanzas militares de Carlos III se mantuvieran vigentes hasta 1898. Las constituciones republicanas reconocieron de derecho esta vigencia, como las de 1823 y 1828, esta última sancionaba, en su Artículo 131º, que «[t]odas las leyes que no se opongan a esta Constitución quedan en su vigor y fuerza hasta la organización de los Códigos». Ello significaba que las Ordenanzas militares coloniales mantenían su vigor –aunque atenuada– como mecanismo para organizar el Ejército y como norma para administrar su justicia.

Ahora bien, al reconocer el fuero militar personal, las Ordenanzas atentaban contra el principio republicano de igualdad ante la ley, pues siendo todos los ciudadanos legalmente iguales, no podía existir diferencia en su tratamiento en materia de derechos (acceso a la justicia). No obstante ello, la posición de los mandatarios peruanos fue ciertamente errática hasta 1856, en que el fuero fue formalmente abolido por la Constitución. Como en las postrimerías del período colonial, el fuero militar no dejaba de ofrecer ventajas a quiénes dispusieran de él, por lo que en la medida de sus posibilidades y de las circunstancias políticas, los

caudillos gobernantes buscaron reducirlo o ampliarlo. En 1830, el gobierno del general Gamarra decretó diez años de servicio, período mínimo para que los jefes y oficiales del Ejército retirados pudieran acceder al fuero (Decreto del 8 de febrero de 1830).

En el caso del servicio de las milicias (llamada luego Guardia Nacional), el acceso al fuero militar se restringía o ampliaba según las circunstancias políticas. El Decreto del 8 de enero de 1822 dispuso que sólo los oficiales de milicias y sargentos de Lima gozarían del fuero militar íntegramente (en causas civiles y criminales), estando o no en servicio, mientras que los cabos y soldados tenían este beneficio solo en el caso que estuvieran acción de guerra. Por el Decreto del 3 noviembre de 1826 se derogó totalmente las disposiciones que otorgaban fuero militar en materia civil o criminal, que gozaban los miembros de los cuerpos de milicias, debiendo someterse solamente a la justicia militar en los casos en que cometieran delitos propiamente militares (establecidos en las Ordenanzas) en acción de guerra, dado que siendo la totalidad de ciudadanos pasibles de servir como milicianos, resultaba incongruente «que si á todos los cívicos se les concediese el fuero de guerra en lo civil y criminal no quedaría en la República persona alguna sujeta al comun» (Decreto del 3 de noviembre de 1826).

Sin embargo, las condiciones políticas y militares obligaron a los gobernantes, en varias ocasiones, a extender este fuero para asegurarse combatientes para su facción. Así, el gobierno de Luis José Orbegozo otorgó el fuero militar a las guardias nacionales en los momentos en que su gobierno era más inestable, a fin de obtener apoyo militar de los sectores acomodados y subalternos. Terminada esta situación de emergencia, volvió el propio gobierno a derogar esta disposición (Decreto del 2 de setiembre de 1834). En 1841, en una situación de guerra, por el Decreto del 15 de enero, el gobierno extendió el fuero militar a los cuerpos de la Guardia Nacional, íntegro a los jefes y oficiales, y a los individuos de tropa solo mientras estuvieran en servicio. Esta concesión fue derogada más de un año y medio después (Decreto del 23 de junio de 1842). Fue necesario el encumbramiento (aunque efímero) de una élite liberal en una sangrienta revolución para que el fuero militar sea totalmente abolido; así, luego de coronar la victoria los *liberales* que apoyaron al general Castilla en 1854, convertidos en legisladores, sancionaron la Constitución de 1856,

en la cual se estableció definitivamente que «En la República no se reconoce privilegios hereditarios, ni fueros personales» (Artículo 6°).

Paralelamente a la reducción del fuero militar, desde el Congreso, los políticos civiles (principalmente de tendencia liberal) buscaron en diversas ocasiones poner indirectamente límites a la jurisdicción militar. Esto se podía lograr, en primer lugar, a través de la atribución de las autoridades jurisdiccionales para dirimir los conflictos de competencia entre los juzgados militares y civiles. Según las Ordenanzas, los militares como estamento privilegiado solo podían ser enjuiciados civil y penalmente por tribunales militares, salvo en casos muy particulares en que la causa debía derivarse a la justicia ordinaria; sin embargo, planteándose contradicciones entre las Ordenanzas y la Constitución republicana, los conflictos de competencias entre ambas jurisdicciones se producían. Teniendo en cuenta eso, el Congreso aprobó la Ley del 17 de diciembre de 1832, por la que se establecía que los conflictos entre los juzgados del fuero militar y los juzgados ordinarios de Primera Instancia debían ser dirimidos por las cortes superiores de los departamentos, otorgándoles supremacía a los jueces civiles para deslindar sobre aquellos conflictos. Una segunda forma de disminuir el poder de los jueces militares fue estableciéndose instancias superiores para la revisión de las sentencias de sus tribunales. Mientras que la Constitución de 1834 creó el Consejo Supremo de Guerra (organismo compuesto por tres generales, un alto jefe de la Armada, tres vocales de la Corte Suprema), la Constitución de Huancayo otorgó esta función a la Corte Suprema de Justicia, institución ajena a la jurisdicción castrense (Eto, Landa & Palomino 1997: 357-358).

Estas modificaciones no transformaron sustancialmente los procedimientos de la justicia militar, pues esta siguió corriendo a cargo de los tribunales establecidos en las Ordenanzas, el Consejo de Oficiales Generales y el Consejo de Guerra Ordinario. Estos tribunales continuaron funcionando como instancias judiciales creadas ad hoc para el juzgamiento y castigo de los delitos de cuartel, sin embargo, algunos de los objetivos de la justicia castrense cambiaron de acuerdo a las nuevas condiciones políticas del período republicano. Así, en el caso del Consejo de Oficiales Generales, recayó en el Gobierno –en reemplazo del Virrey– el nombramiento de los miembros del Tribunal y del Fiscal, prerrogativa esta que otorgaba al Ejecutivo el control de la administración de justicia sobre los jefes y oficiales de alta graduación y, por tanto,

una importante arma para atacar a los caudillos y militares opositores. El ejemplo paradigmático del uso político de la justicia militar fue el juzgamiento y ejecución de Felipe Santiago Salaverry a instancias del gobierno del general Santa Cruz.

Después de su derrota en Socabaya, Salaverry y sus principales colaboradores fueron tomados presos el 7 de febrero de 1836 y sometidos a un Consejo de Oficiales Generales. Según Jorge Basadre, el consejo de guerra estuvo compuesto por militares peruanos y presidido por uno boliviano, siendo el juicio oral y rápido. Los acusados tuvieron que defenderse con contestaciones verbales, sin que apareciese su firma de conformidad de lo actuado en el expediente. La sentencia se amparó en el Artículo 26°, Tratado Octavo, Título 10 de las Ordenanzas, a la que Salaverry protestó aduciendo la incompetencia del tribunal y la imposibilidad de defenderse sin sus papeles justificativos (acto que hubiera aplazado la sentencia) y, hasta el momento de la ejecución, replicó que «la ley me ampara» (Basadre 2005, t. 2: 110-112). El fusilamiento se verificó el 18 de febrero, en la Plaza de Armas de Arequipa, lugar a la que concurrieron una «enorme multitud» (Basadre 2003, t. I: 338-339).

Santa Cruz reconocía su intervención en el juzgamiento de Salaverry en una carta dirigida a Orbegozo el 17 de febrero de ese año: «Yo he mandado juzgar aquí a todos los jefes principales y aprobadas las sentencias del Consejo militar, se han fusilado esta tarde nueve» (Basadre 2003, t. I: 340). Las razones de este acto, las encontraba el caudillo boliviano en la terrible inestabilidad de aquella época y la costumbre a la desobediencia al gobierno que se había constituido en una práctica establecida, generada principalmente por las ambiciones de los círculos militares. Estos, según Santa Cruz, lideraban un «espíritu de rebelión» extendido en los sectores sociales que ha tendido al desplome de los gobiernos en el Perú:

Tan persuadido estoy de las causas de la anarquía y de la costumbre del desorden casi sistemado que no puedo equivocarme en esperar que la destrucción de Gamarra, Salaverry de las tropas que les servían, sea bastante para extirparlas. Los militares no han sido sino los ejecutores de un espíritu de rebelión, diseminado, y los agentes de círculos establecidos para contrariar a todo gobierno y a todo orden que no se sometiese a su influencia; y como estos círculos han sido varios y en oposición, jamás ha podido haber Gobierno que no tuviese contra sí de ellos que, abusando [...] de la inmoralidad de los militares,

han dado en tierra con toda autoridad legal o ilegal que fuese [...]. (Basadre 2003, t. I:340)

En la misma carta, Santa Cruz recomendaba a Orbegozo, para mantenerse en poder, el uso de castigos rigurosos que sirvieran de ejemplo a los delincuentes, entiéndase a los militares, pero también a la población civil que secundase los movimientos insurgentes:

Si se sostiene Ud. con algunos castigos ejemplares sobre los delincuentes, le será más fácil luego, contar con más respetabilidad que no han tenido en mucho tiempo los jefes del gobierno peruano [...]. Si [...] deja Ud. impunes los delitos, espere luego, muy luego, la repetición de escenas pasadas. Cuanto más altos los personajes merecen menos indulgencia y menos todavía los que han prostituído las altas clases militares. (Basadre 2003, t. 1:340)

Así, en la óptica de Santa Cruz, la impunidad, es decir, la ausencia de un castigo riguroso sobre los insurgentes, llevaría indefectiblemente a los levantamientos, y esta severidad debía ser acentuada específicamente sobre los altos mandos militares.

Respecto a los delitos de los soldados y clases (sargentos y cabos), los consejos ordinarios seguían conformándose a propuesta del coronel jefe del cuerpo militar del acusado. El coronel, respaldado por las Ordenanzas, seguía siendo juez de sus tropas, nombrando a los miembros y presidiendo aquel tribunal. En las condiciones del Ejército decimonónico, en donde la mayoría de soldados eran quechua-hablantes y levados a la fuerza, en un contexto en el que las instituciones civiles eran débiles, el poder de juzgamiento y de castigo de los jefes militares resultaba ciertamente aplastante. Los soldados introducidos a la fuerza al cuartel se encontraban a merced del jefe militar, sin otro recurso de amparo que los petitorios al Presidente de la República o al Ministro. En ese contexto, no resultaba extraño que la subordinación de los soldados al jefe militar fuera casi absoluta, en tanto que el ingreso al cuartel separaba a los soldados de sus soportes sociales (familiares y comunitarios) y los colocaba en un ambiente parcialmente autónomo, donde se acrecentaba la autoridad del jefe militar.

El temor a las terribles penas de las Ordenanzas estaba dirigido a dotar al jefe militar de los suficientes instrumentos punitivos para ejercer esa *rigorosa* autoridad y exigir la total subordinación de las tropas. Facultados para la imposición de penas aflictivas y corporales, no resultaba extraño que una obediencia así obtenida permitiera a los caudillos y jefes militares lanzarse en cuanta aventura política fuera posible, bajo el conocimiento de la subordinación de sus efectivos. No obstante, desde el nacimiento de la República se buscó reducir y *ablandar* la penalidad militar, considerando los castigos de las Ordenanzas como bárbaros. El descuartizamiento, la incineración, la horca y la mutilación quedaron proscritas desde tempranas fechas, no abrogándose con la misma decisión las penas corporales y aflictivas. Por ejemplo, al arribo del general José de San Martín al Perú decretó, el 16 de octubre de 1821, la abolición de la pena de azotes, mientras que el Decreto del 3 de setiembre de 1827 prohibió la pena de palos en el Ejército, considerando que «la pena correccional de palos introducida en el ejército es de suyo bárbara, infamante y propia de los españoles» (Decreto del 3 de setiembre de 1827). Sin embargo, increíblemente pocos días después, el Gobierno confirmaba la aplicación de esta pena en la Marina de Guerra, en tanto que esta era la «única capaz de conservar el orden y disciplina en los buques de guerra» (Decreto del 29 de setiembre de 1827).

Legalmente, castigos como la mutilación, los azotes y la pena de palos quedaron abrogados definitivamente durante la revolución de 1854, bajo los influjos de los políticos liberales que acompañaron al general Castilla (decretos dictatoriales del 20 de junio y 13 de agosto de 1855). Y aunque en teoría estos castigos corporales e infamantes quedaron prohibidos, la práctica de los actores superaba las buenas intenciones de los legisladores. Por ejemplo, en 1863, Catalina Tagle escribió un recurso al Presidente de la República, solicitando la dada de baja de su hijo, el cual había sido *rigurosamente* castigado por el coronel Manuel Salazar:

Y este jefe ha cometido la mas atroz crueldad con dicho mi hijo Ciriaco Mazo flagelándolo y en seguida dándole punteadas hasta derribarlo en tierra y sobre caido darle innumerables patadas, poniéndolo como un mounstro, como le podran declarar por sumaria información todos los individuos de la compañía que hallaban presentes, como tambien los cabos que ejecutaran la flagelación. (*El Comercio*. Lima, 8 de enero de 1863).

Una modificación sumamente importante en las penas militares se produjo en este mismo período, con la total eliminación de la pena de muerte en la Constitución de 1856 y su restricción a los delitos de homicidio calificado en la Constitución de 1860 (Artículo 16°). Al derogarse las penas corporales e infamantes y la pena de muerte, establecida en 70 artículos de las Ordenanzas, se generaban una serie de vacíos que restaban la eficacia original de esta norma. Estas modificaciones, y otras que se venían efectuando desde el período republicano, habían hecho a las Ordenanzas un código poco operativo, poco claro y a veces incoherente, razón por la cual el notable jurista Francisco García Calderón señaló que «[c]ada vez se hac[ía], pues mas imperiosa la necesidad de reformar este código, acomodándolo al estado general de *nuestra* legislación, a fin de que pueda cumplirse en su totalidad, y no sea una letra muerta que da lugar a cometer arbitrariedades» (García Calderón 2007 [1879], t. II: 1449).

¿A qué arbitrariedades se refería García Calderón? Podemos inferir que, con la abolición de la pena de muerte, el poder de castigo de los militares sobre sus subordinados, antes que reducirse, se vio reforzado. El castigo para los muchos delitos que en las Ordenanzas se prescribían dicha pena, quedó al arbitrio de un fiscal nombrado por el Jefe del Cuerpo militar o del Gobierno; y, en el caso de los castigos disciplinarios para los soldados, en las manos del mismo jefe de cuerpo. Estas modificaciones, al romper el *principio de legalidad*²⁹, ampliaban en la práctica el poder de los jefes militares, a pesar de los diques que desde las leyes se buscaron establecer.³⁰ Ante la imposibilidad de aplicar con dureza las penas prescritas en las Ordenanzas, los jefes militares siguieron empleando algunas, clandestinamente, como la flagelación, el encarcelamiento con grilletes o el cepo³¹. La debilidad del Estado, la inacción de las autoridades gubernamentales que en su mayoría eran de

²⁹ Principio reconocido por los sistemas jurídicos modernos, el cual establece que nadie puede ser sentenciado a ninguna pena sin que se encuentre prescrito el delito y la pena correspondiente en la legislación.

³⁰ Por ejemplo, se dispuso que cuando la gravedad del delito correspondiera en las Ordenanzas a la pena de muerte, de mutilaciones o penas corporales infamantes, los jueces debían ser «prudentes» y buscar analogías a estas penas en el Código Penal; las penas que impusieran no podían exceder diez años de presidio, a menos que el propio Código lo dispusiera; a lo que se añadía que ningún juez podía sentenciar a ningún delincuente a los cuerpos de la Armada Nacional. Si bien estas prescripciones debían limitar el ejercicio arbitrario de la penalidad militar, se reconocía que gran parte del dictamen de la sentencia quedaba al «arbitrio del juez» (De la Lama 1877: 12).

³¹ En la prensa se hizo conocida la historia de Manuel García, hombre que «tomado de soldado en 1854 en la Gendarmería de esta ciudad; fue uno de las cabecillas que amotinaron la gendarmería en 17 de Enero de 1855», en castigo «[l]o tomaron» y lo pusieron en «una barra de grillos» (*El Comercio*. Lima, 19 de julio de 1861).

origen militar, la cotidianidad de la violencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana y la visión jerárquica de la sociedad manifiesta en un menosprecio frente a los grupos subalternos (Aguirre 2004: 350-351), daban a los jefes militares un amplio margen para hacer uso «correcional» de la violencia.

Si bien los militares gozaban de este poder, ello no restringía que se demandaran la dación de nuevas leyes que reglamentaran el Ejército, realizándose diversos intentos para la promulgación de nuevas ordenanzas militares, acordes con el sistema republicano. Por ejemplo, en 1834, durante el gobierno de Luis José Orbegozo se creó una Comisión encargada para la reforma de las Ordenanzas de Carlos III: la Comisión de Altos Jefes del Ejército y la Marina, entre los que se encontraba el coronel Manuel de Mendiburu, con la finalidad de elaborar unas códigos armónicos al «sistema representativo, requieren indispensablemente una reforma» (Decreto del 23 de diciembre de 1834). Este proyecto fracasó debido a la inestabilidad política de ese período, debiendo el mismo Orbegozo restituir las Ordenanzas en todo «su vigor y fuerza [...] aún cuando algunos de sus artículos estén en contradicción con la Constitución y leyes vigentes» (Decreto del 12 de junio de 1835).

Nuevamente, en 1845, 1865 y 1878 se hicieron intentos por decretar nuevas ordenanzas que armonizaran dicha norma con la legislación republicana, no obstante, ninguna coronó su objetivo (Decreto del 25 de mayo de 1845). Durante el gobierno del general Juan Antonio Pezet, unas nuevas ordenanzas formuladas por una Comisión creada en 1863 fueron sancionadas por el Congreso, en 1865; sin embargo, la revolución de Prado anuló todos los actos legislativos del gobierno anterior y restableció la vigencia de las viejas ordenanzas (Cassasa 1966: 76-77). El último intento de reforma, antes de la Guerra del Pacífico, se produjo en 1878 cuando se nombró una comisión encabezada por Manuel de Mendiburu; esta iniciativa escolló nuevamente, aunque en aquella ocasión la guerra internacional había sido la causa de la frustración de esa iniciativa (Eto, Landa & Palomino 1997: 359).

A pocos años de iniciarse la Guerra del Pacífico, las múltiples modificaciones que los legisladores republicanos habían hecho sobre las Ordenanzas daban como resultado una legislación militar ciertamente dispersa, muchas veces contradictoria y

confusa que dejaban amplios márgenes de decisión a quienes la ejecutaban. En lo que correspondía a las materias de justicia militar, el abogado Miguel de la Lama reconocía que, hasta 1877, las Ordenanzas tenían por lo menos 37 normas modificatorias vigentes para ese año.³² Una legislación penal militar de tales características, con limitaciones para el castigo de los jefes de cuerpo sobre los soldados, no hacía más que desincentivar el uso de los mecanismos formales de juzgamiento y castigo, es por ello que De la Lama podía contabilizar que entre 1860 y 1873 sólo se habían constituido veinte consejos de guerra³³. Como bien mostraban las comisiones creadas para reformar o crear nuevas ordenanzas, la justicia militar decimonónica asumía un carácter caótico que no garantizaba la aplicación *justa* de las penas y otorgaba, por vías de hecho, amplios poderes a los jefes militares para someter a su obediencia a sus subordinados.

En resumen, el panorama de la justicia militar para fines de la década de 1870 era el siguiente: a) una importante tendencia a la reducción de la jurisdicción castrense, con la abolición del fuero personal, correspondiéndole a esta solo el juzgamiento de delitos estrictamente militares, llamados de servicio o de cuartel; b) limitación de la jurisdicción castrense a través de la supremacía de la justicia civil en la dirimencia de los conflictos de competencias jurisdiccionales; c) uso político de la justicia militar por parte de los gobiernos de turno para perseguir a sus enemigos políticos al interior del Ejército; d) la abrogación de la pena de muerte y de los castigos corporales e infamantes; y, e) el aumento formal de la capacidad de castigo de los jefes militares, con los amplios vacíos que dejaban las modificaciones republicanas.

1.5. A empujones, por «viandas» o mala suerte. Formas de reclutamiento de tropas

Para comprender las características de las fuerzas militares de este período es fundamental conocer cómo estaban compuestas y cuáles eran las modalidades de

³² Para llegar a esta conclusión se han contabilizado las normas que Miguel Antonio de la Lama presenta como modificatorias de las Ordenanzas, en 1877. (De la Lama 1877).

³³ *El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1899.

alistamiento militar de las tropas. Según el Reglamento Orgánico de 1827, la base para el levantamiento del Ejército nacional permanente residía en la «población determinada por los mismos censos que sirven para la elección de diputados al cuerpo legislativo» (Artículo 6º); es decir, correspondía a los ciudadanos que gozaban de derechos políticos la responsabilidad de sostener la fuerza armada. De acuerdo con la misma norma, una vez que el Congreso hubiera establecido el número de efectivos que debía contar el Ejército y que el Ejecutivo hubiera computado el número de tropas que le correspondía a cada departamento, según el número de ciudadanos registrados, el Prefecto debía vigilar y centralizar en la capital de departamento, los contingentes reclutados en las provincias y parroquias. Correspondía directamente al Gobernador o a comisarios suyos la designación o «señalamiento»³⁴ de los individuos tomados para el servicio de las armas (artículos 46º-49º), sin especificarse nada más que el orden de prioridad de los posibles reclutas, en los que obtenían prioridad los solteros que no sean hijos de viudas o padres ancianos y, en segundo lugar, los hombres casados sin hijos, los solteros hijos de viudas o padres ancianos y los estudiantes de una carrera de letras (Artículo 50º). El mismo dispositivo especificaba que el número de efectivos reclutados debía encontrarse en función de las necesidades militares país, siendo que en períodos de situación extraordinaria de guerra externa o desórdenes internos este podía incrementarse sobre la base del ejército permanente. Como habíamos referido anteriormente, las leyes solo eran los marcos en los que los actores legitimaban sus acciones, por lo que en realidad el texto de la norma solo fue «obedecido» mientras no se opusiese a los intereses de los actores de la época.

Dado que la guerra en la gran mayoría de casos era uno de los factores dirimientes en las luchas por el poder, el reclutamiento y la posesión de tropas por algún caudillo o facción era una necesidad imprescindible. Para el reclutamiento de efectivos, el Ejército o los ejércitos mezclaban prácticas en las que se ejercía tanto el consenso como la violencia. Así, el caudillo en el poder, que representaba la legalidad, podía acceder a los usos legítimos de las normas de reclutamiento, engrosando las filas del ejército gobiernista con reclutas incorporados en los departamentos. Sin embargo, un caudillo retador podía tener acceso también a los

³⁴ La norma no especificaba a qué se refería el término «señalamiento», situación que podía interpretarse a favor del funcionario que efectuaba el alistamiento y facilitando el reclutamiento arbitrario de las tropas como desde luego sucedió.

misimos recursos, esgrimiendo la ilegalidad del régimen de turno, e invistiéndose a través de un pronunciamiento de la soberanía y la legitimidad de los pueblos y circunscripciones que reconocieran su autoridad como «nacional». Por lo general, en las zonas rurales de predominancia indígena, las levadas se hacían de forma violenta. Los futuros soldados eran capturados por la jerarquía departamental y conducidos a los batallones, en los cuales se ejercían violentas prácticas de adiestramiento como las que presenció el viajero francés De Sartiges-Botmiliau en el departamento de Puno: «se les cortaba los cabellos y se les abría las orejas para reconocerlos y fusilarlos en caso de desertión. Los conscriptos eran encerrados en una iglesia transformada en cuartel donde no salían más que para hacer ejercicios dos veces al día» (1947: 70-71, citado en Aljovín 2000: 170). Pero no solo en el campo el reclutamiento revestía rasgos violentos, también en las ciudades como Arequipa, los oficiales del Ejército debían perseguir a los futuros reclutas.

Debido al carácter violento del reclutamiento, la conducción de las tropas levadas se hacía con las precauciones necesarias para evitar la desertión, situación que era frecuente. Por ejemplo, en 1828, el prefecto de Ayacucho, Pío Tristán, tuvo que tomar varias providencias para impedir la fuga de sus tropas mientras las dirigía a la capital, como ordenar que los reclutas durmieran separados para evitar algún motín y solicitar el apoyo de los cuerpos de la Guardia Nacional de todos los poblados por donde pasasen (Aljovín 2000: 168). La posibilidad de la fuga de los efectivos era una preocupación que se había manifestado desde inicios de la organización del Ejército. Así, los artículos 57° y 58° del Reglamento Orgánico de 1827 estipulaban fuertes penas para los reclutas que huían de los cuerpos de línea y, sobre todo, para las personas que fomentaban o apoyaban la desertión, determinando contra estos últimos, en caso de guerra, incluso la pena de muerte.

Sin embargo, al lado de la violencia, la negociación y la persuasión eran también caminos para constitución de fuerzas militares. La formación de redes de clientelas era el sustrato en el que se basaba el reclutamiento cuando se basaba en el consenso. Los soldados que se enrolaban voluntariamente y que tenían una acción destacada y leal para con sus oficiales eran recompensados con premios. Por ejemplo, Andrés de Santa Cruz creó un sistema de incentivos al enrolamiento, que permitió un mayor control y estabilidad sobre sus tropas. Para asegurarse el

enrolamiento de soldados indígenas, el caudillo boliviano presionó a las autoridades locales para que otorgaran a los veteranos algunos topes cuando estos concluyeran su servicio. Además, se preocupó por mantenerlos adecuadamente vestidos y remunerados puntualmente en dinero (Aljovín 2000: 168). Sin embargo, esta situación no parece que haya sido extendida. En su estudio sobre el Cusco gamarrista, Charles Walker reconoció la incapacidad del caudillo cusqueño de incorporar a los indígenas a sus filas por medio de la persuasión, situación que quedó demostrada en la desertión en masa de los combatientes indígenas en la batalla de Yanacocha. Según Walker, dos factores alejaban a los campesinos indígenas del sur andino de las guerras caudillistas: por un lado, los recuerdos aún frescos de la represión contra la rebelión de 1814 liderada por Pumacahua; y, por otro, porque los caudillos tenían poco que ofrecer a las comunidades indígenas, pues estas se encontraban en proceso de recuperación demográfica y de mayor acceso a recursos (2004: 267-276).

Si bien los ejércitos caudillistas estaban compuestos principalmente por los efectivos del Ejército, al lado de estas fuerzas se encontraban los cuerpos de la Guardia Nacional y las montoneras. Los primeros, como habíamos mencionado, eran fuerzas civiles organizadas desde inicios de la República para la protección de la Nación y la conservación del orden policial interno. Surgidas bajo el principio del «ciudadano armado» para la defensa de la Patria, los llamados a los cuerpos de estas milicias eran, por lo general, artesanos, labradores y miembros de las clases populares urbanas. Dos rasgos diferenciaban a las guardias nacionales del Ejército, a saber: su carácter momentáneo y su jurisdicción restringida. El servicio en las guardias nacionales no era permanente, pues el llamamiento se hacía solamente mientras se produjeran períodos de inestabilidad; una vez que estos habían sido superados, los ciudadanos podían retornar a sus labores cotidianas. Asimismo, el entrenamiento militar en tiempos de paz era menos frecuente que en el caso de los efectivos del Ejército, ya que por lo general se realizaba una o dos veces a la semana. Por otra parte, nos referíamos al carácter restringido de su jurisdicción en el sentido de que no podían ejercer su fuerza más allá de los límites de la circunscripción en la que habían surgido, exceptuándose esta disposición solo en el caso de que sucediera una invasión externa (Hidalgo et ál. 2005: 185). Esta característica le daba un sentido eminentemente local a estos cuerpos civiles.

Aunque parece que el funcionamiento de estas fuerzas fue irregular durante el tiempo, es cierto que jugaron un papel importante en la composición de las fuerzas caudillistas, sobre todo en los momentos de mayor inestabilidad del país. En ese sentido, no faltaba en el bando establecido, como en el retador, fuerzas de la Guardia Nacional que fueran una importante herramienta tanto para la retención como la conquista del poder. Por ejemplo, en el Cusco, entre 1827 y 1835, Gamarra logró que se formaran setenta y cuatro regimientos leales a él, los cuales fueron la base de su poder local sobre el departamento, pues dichos cuerpos permitían al mismo tiempo el ingreso de nuevos adeptos al gobierno, la vigilancia de focos sediciosos y su represión en caso de agitación (Walker 2004: 178). De la misma manera, en 1836, Orbegozo alentó, entre los varones de 15 a 50 años, la formación de guardias civiles en Lima y Callao que protegieran su gobierno de la posible invasión de Gamarra y de Felipe Santiago Salaverry (Decreto del 12 de enero de 1836). Tanto Gamarra como Orbegozo alentaron la incorporación de los oficiales y tropas de las milicias cívicas a los cuerpos regulares del Ejército (Walker 2004: 178-179, Hidalgo et ál. 2005: 109), lo que significaba para los primeros, acceso a sueldos, pensiones, acceso al fuero militar y capital social y político; y, para los segundos, sueldos y perspectivas de ascenso social. Las redes de clientelaje aceptaban la maquinaria bélica de las guardias nacionales, por lo que parece ser que el consenso era una práctica recurrente para incorporarlos a la lucha armada.

Finalmente, las montoneras terminaban de completar los contingentes de los ejércitos caudillistas. Estas eran agrupaciones armadas irregulares que empezaron a aparecer a fines del período colonial. Por lo general surgían de forma espontánea y aglutinaban a diversos grupos sociales que perseguían fines personales o reivindicaciones locales. En la costa, alrededor de ciudades importantes como Lima, Ica o Trujillo, las montoneras se dedicaban al bandolerismo y tenían un componente mayoritariamente negro y mestizo. En la sierra, estas eran principalmente indígenas y podían agrupar a los habitantes de pueblos y comunidades que se alzaban legitimadas por reivindicaciones locales, lo que no negaba que se pudieran dedicar al pillaje mientras estuvieran movilizadas. El inicio de la guerra de independencia y las guerras caudillistas posteriores permitió a estas bandas informales incorporarse a la política nacional, proporcionándoles un discurso ideológico y una agenda política.

Estos grupos negociaban su participación en la guerra a cambio de la satisfacción de sus propios intereses y su apoyo podía ser decisivo en la victoria. Las montoneras serranas eran sumamente peligrosas para los ejércitos regulares, pues además de ser numerosas nunca atacaban frontalmente: preferían lanzarse a la retaguardia o lanzar piedras o «galgas» desde los despeñaderos cuando la tropa enemiga pasaba por espacios estrechos (Aljovín 2000: 166-167 y 196-197, Quiroz 1992: 125-126).

Esta utilidad militar y política les permitió a varias comunidades indígenas negociar y obtener de los caudillos en liza los intereses corporativos de sus propias localidades, como fue el caso de los indios iquichanos de Huanta, en la década de 1830. Una carta dirigida por Orbegozo a uno de los jefes montoneros de Huanta, Tadeo Choque, es muy ilustrativa al respecto; en ella se instaba a los iquichanos a que hostilicen a Gamarra y a sus tropas cuando recorrieran las inmediaciones de Huanta, tarea que sería reconocida por sus conciudadanos y por el gobierno con *premios*:

Es preciso, pues, que usted aproveche esta oportunidad, como lo está haciendo para atraerse la gratitud de sus conciudadanos, y *hacerse acreedor de los premios que la Patria dispensa á los que le hacen servicios eminentes*. Debe V. usar del influjo que tiene entre sus paisanos para que obren activamente contra los sediciosos, impidiéndoles las comunicaciones, privándolos de recursos y sorprendiéndolos y atacándolos, de modo que no tengan reposo, mientras yo marchó con el Ejército que verá muy pronto. (Méndez 2004. Las cursivas son de la propia autora)

Pero también los hacendados más poderosos, en la medida que empezaron a involucrase en la vida política, organizaron sus propios grupos armados, como fue el caso de Domingo Elías. Dado que las haciendas contaban en su interior con todo un microcosmos social, que agrupaba a yanaconas, jornaleros, arrendatarios, presos, esclavos y artesanos, e importantes recursos emanados de la tierra, no era difícil para estos terratenientes lograr que sus dependientes se organizaran en bandas armadas, a fin de obtener ventajas políticas o económicas. Las partidas de los hacendados podían actuar como bandidos o montoneros, dependiendo si se aliaban con algún caudillo retador o si se aliaban al caudillo gobernante. Sin embargo, esta práctica parece que no fue muy extendida como en Argentina o Venezuela, donde los

«ejércitos» de gauchos y llaneros aglutinados por los hacendados se convertían en actores dirimientes de la vida política de estos países (Aljovín 2000: 167).

Puede afirmarse que bajo este esquema general funcionaban los mecanismos de reclutamiento de los «ejércitos caudillistas». Tropas compuestas por unidades regulares del Ejército propiamente dicho, cuerpos de la Guardia Nacional y montoneros de diversos orígenes. Sin embargo, un ejército constituido «a empujones» o a través de alianzas precarias era poco confiable y no podía contribuir al disciplinamiento y control sobre las tropas. Este último era una preocupación frecuente, porque no era raro que unidades pudieran desintegrarse rápidamente por la falta de paga, el abuso de los oficiales, el cambio de alianzas o el conocimiento de los reveses de la guerra, razón por la cual las operaciones militares debían realizarse con rapidez, jugándose a veces el destino del país en una batalla (Demélas 2003: 421).

Teniendo en cuenta estos problemas, desde mediados del siglo XIX se empiezan a perfilar algunos atisbos de reforma para el alistamiento de efectivos en el *Ejército nacional*, a fin de brindarle mayor estabilidad. Para tal efecto, durante el gobierno de Castilla se promulgó la Ley del 21 de diciembre de 1847, la cual determinaba el modo de hacer el reclutamiento. En los considerandos de la norma se aceptaba la situación de hecho de la compulsibilidad de la leva para el Ejército: «Que una ley especial debe determinar el modo de hacer el reclutamiento para el ejército, á fin de evitar los desórdenes y vejaciones que sufren los pueblos por los encargados de practicarlo» (Ley del 4 de enero de 1848). La Ley establecía dos mecanismos por los cuales se podía incorporar nuevos efectivos a los cuerpos militares. El «enganche» era el medio «primario» para llenar las bajas del Ejército en tiempos de inseguridad, como guerra exterior o desórdenes internos. Este consistía en una «contrata», autorizada por el gobierno, entre el subprefecto o los gobernadores y el recluta, por el cual se le abonaba una cantidad por el ofrecimiento de sus servicios. Según la misma norma, en el proceso de contratación debían encontrarse presentes tanto el síndico como los jefes de los cuerpos del Ejército, a los que debían incorporarse los nuevos reclutas. Los jefes militares debían observar que los reclutas cumplieran con los requisitos mínimos para los servicios de la guerra, mientras parece que el síndico debía cautelar —como representante de la comunidad local— la

voluntariedad y cumplimiento del contrato. Por una observación hecha por el Ernest Middendorff, es posible emparentar el “enganche” militar con los otros tipos de “enganche” que permitían la fijación de los trabajadores a las haciendas, pues afirmaba que los “enganchadores”, a la sazón los encargados de llevar reclutas a los cuerpos del ejército «invitan a los jóvenes a beber y una vez embriagados tratan de convencerlos de sentar plaza» (Middendorff 1973: 270). Podría aventurarse a pensar de que los enganchadores terminaban endeudando a los posibles reclutas a fin de que no tuvieran otra forma de pagar su deuda que ofreciendo sus servicios en el ejército por la fuerza.

Por otra parte, es probable que la institución del enganche haya ganado creciente importancia a medida que el Estado caudillista dejaba de cobrar la contribución indígena. Dado que uno de los elementos de negociación más importantes para que los indígenas cedieran su fuerza de trabajo al Estado caudillista era la exoneración del tributo, su abolición debió hacerlas más reticentes a entregar a sus comuneros al Ejército. Entonces es más que probable que el enganche supliera el déficit de soldados “seguros” que la abolición del tributo dejaba de reclutar. Sin embargo, este mecanismo debe ser estudiado con detalle en futuras investigaciones.

El segundo medio de reclutamiento era la conscripción. Para tal fin debía organizarse en cada distrito una junta integrada por las autoridades locales, el síndico procurador, el cura de la parroquia y cuatro padres de familia “honrados”, debía tomar conocimiento de la cantidad de efectivos necesarios para llenar las bajas restantes en sus respectivos distritos. Hecho ello se procedía a elegir los conscriptos primero entre los individuos que «no tengan ocupacion ni se ejerciten en alguna industria ni sean utiles a sus familias». En el caso de que faltasen reclutas se procedía a realizar un sorteo entre todos los individuos solteros, de 18 a 40 años de edad, colocando sus nombres en un ánfora (Art. 6 y 7). La norma excluía a los individuos que practicaban oficios liberales, como abogados, escribanos, procuradores, médicos y boticarios, a los hijos de padres de ancianos y de viudas, a los alumnos de escuelas, a los sirvientes conocidos de las iglesias, a los mayores y camayos, a los yanaconas de hacienda y chacras y a los operarios de minas (Art. 8º). Asimismo, «[l]os transeuntes de cualquier procedencia y los indígenas contribuyentes no deb[ía]n entrar en el sorteo» (Art. 7). Por otra parte, la norma, a diferencia del reglamento de

1827, no especificaba penalidad alguna para los civiles que apoyasen la desertión, situación de la que se lamentaba el Ministro algunos meses antes en la presentación de su memoria al Congreso. Afirmaba que por falta de una ley que sancione tales actos «los pueblos apoyan y protejen la desertión, en lugar de perseguir á los prófugos y devolverlos á sus cuerpos; lo que si no se remedia por fuertes medidas represivas vigorosamente ejecutadas, que están en el interes de la Nacion para evitar el desorden y economizar gastos, frustraria las miras del Congreso con respecto á las licencias, por que la mayor parte de los soldados jamás llegarán á llenar su tiempo y los pueblos sufrirían constantemente el peso de esta obligación.» (MGM 1847: 14).

A pesar de los esfuerzos de esta nueva legislación, los mecanismos prescritos terminaron siendo un fracaso. En el año 1860, el Ministro de Guerra y Marina se lamentaba de la dificultad de reemplazar a los efectivos militares. Sobre todo se lamentaba de la ineficacia del sistema de enganche, que además de costoso para el erario público, no había rendido los frutos esperados: «SIENDO casi general la repugnancia que hay en el pais para servir en las filas, la aplicacion de la ley de 4 de Enero de 1848, no ha podido dejar de encontrar embarazos en su ejecución. De los dos medios que ella establece para llenar las bajas del Ejército, el de *enganche á mas de dispendioso es ineficaz*; porque necesitándose de un fuerte incentivo para vencer la resistencia que se tiene á enrolarse en el Ejército, és menester que sea muy alto el premio del enganche, y aun así los reemplazos que se obtienen son en corto número y muy paulatinamente» (MGM 1861: 19) (las cursivas son mías). Dos años después, el Ministro, alarmado por la continua disminución de efectivos en los cuerpos del ejército describía los inconvenientes que producía el procedimiento de conscripción en los departamentos:

[Cuando] se ha pedido á los Departamentos algun contingente para aumentar la fuerza, las autoridades han representado la ineficácia de ella y el mal éxito de su ejercicio. En algunos pueblos, las personas llamadas á intervenir en el sorteo, designan á su arbitrio los individuos que deban salir para el servicio, y las mas de las veces escojen hombres exceptuados por la ley ó inaparentes, ocasionando males á las familias y gastos inútiles al Estado, pues es raro que de diez hombres, por ejemplo, de los que mandan, se hallen tres con las calidades necesarias para el servicio militar. Convencido el Gobierno de estos procedimientos, ha dictado diferentes medidas para impedir este desórden, y

hasta ha llegado á prohibir la conscripcion algunas veces, prefiriendo el medio de enganche, aunque dispendioso, para obtener el número de altas precisas, abonando cincuenta pesos á todo el que, con las calidades se requieren, se presentase voluntario. [...] con todo ni ha podido conseguirse el objeto, ni evitarse que algunas autoridades, por el mal ejercicio de sus funciones, manden como conscriptos á individuos que la suerte no señaló, ó como vagos perjudiciales al vecindario á personas con las cuales tienen algun motivo particular de disgusto. Tales procedimientos llevan consigo infinitas reclamaciones, causan indudablemente perjuicios, y dan orígen al falso concepto de que el Gobierno ordena el reclutamiento forzado. Estos actos acontecen en lugares distantes, muchos pasan desapercibidos, y los que llegan al conocimiento del Gobierno son prolijamente examinados y remediados, luego que se descubre el abuso.» (MGM 1862: 62)

Nuevamente, durante el gobierno de Manuel Pardo se buscó remediar estos males dictando la ley del 20 de noviembre de 1872, por la cual se organizaba el servicio militar obligatorio. En lo que respecta a los mecanismos de reclutamiento, ratificó el sistema de conscripción por sorteo, el cual debía verificarse de forma obligatoria entre los jóvenes comprendidos entre los 21 y 24 años de edad. La norma excluía los profesionales, religiosos, estudiantes y familiares de parientes en estado de necesidad como la norma de 1848. No mencionaba nada acerca de los indígenas tributarios (categoría que legalmente ya no existía) ni de los yanaconas. La gran novedad de la norma de Pardo en lo que a materia de reclutamiento se refiere, fue entregar el proceso de conscripción a las municipalidades y a la comunidad local y dictaminar que el sorteo se verificase en la plaza pública para evitar el uso arbitrario de la institución (Ley de 20-11-1872). Sin embargo, la norma no resolvió problema alguno, pues Middendorf recordaba que incluso durante el gobierno de Pardo la ley nunca normó las prácticas de reclutamiento (Middendorf 1973: 270). El mismo Pardo en su memoria de 1876 reconoció implícitamente que para llenar las bajas del ejército ese año se tuvo que recurrir al enganche³⁵, aun cuando en su gobierno el número de efectivos se redujo a tres mil hombres.

³⁵ Cfr. Manuel Pardo, Mensaje como Presidente de la República al Congreso ordinario (1876). En: Mc Evoy, 2004, p. 468.

En virtud de que los mecanismos formales resultaban ineficaces para evitar la reticencia de los pobladores al enrolamiento de tropas, las levass revestían el perfil que las había caracterizado desde inicios de la República: la violencia. El mismo Middendorf reflexionado acerca del carácter forzado de la leva recordaba una escena que se podría hacer típica en el Perú decimonónico:

[S]e envían patrullas que ningún miramiento detienen a todos los jóvenes del pueblo que encuentran en la calle; los llevan a la fuerza a los cuarteles y los obligan a ponerse el uniforme, y después los someten a la instrucción militar y les prohíben abandonar el cuartel. Durante el reclutamiento, se deja salir a los criados con muchas precauciones y de muy mala gana, pues se teme que el cocinero no regrese del mercado, y que muchacho enviado a una compra caiga en manos de los reclutadores. Los dueños de las casas donde sirven los muchachos levados, tienen que recorrer los cuarteles para buscar a los desaparecidos. Si se conoce al comandante del batallón, o se tiene una recomendación para él, se puede lograr la libertad de los jóvenes. (Middendorf 1973: 270).

Ante dicha situación, el Ministro de la cartera en 1861 había propuesto que el reclutamiento de bajas del Ejército y de renovación por el licenciamiento de las tropas bien podía hacerse a través del enrolamiento de los efectivos de la Guardia Nacional, siempre y cuando esta adoptara una forma tal que la armonizase con el servicio militar: «este servicio rolaría entre los cuerpos que se creasen, ó simultáneamente entre todos ellos, según fuesen mayor ó menor el número de hombres de que hubiese necesidad.» (MGM 1862: 20). No obstante, la única reforma que se realizó en la Guardia Nacional hasta antes de la Guerra del Pacífico, la organizó como una fuerza rival al Ejército, durante el gobierno de Manuel Pardo con una clara intencionalidad política. Sólo en cierta medida la recomendación del Ministro fue recogida durante el gobierno de Cáceres al convertir las Guardias Nacionales en cuerpos de reserva del ejército permanente, sin embargo, este proyecto terminaría en un fracaso como se verá más adelante.

Para finalizar, las tropas estaban exclusivamente formadas por individuos de las clases populares urbanas (mestizos, negros y mulatos) y por los indígenas. Por lo general a los indígenas se les destinados a los cuerpos de infantería, mientras que a los mestizos y negros se les destinaba a la caballería. Los oficiales, como habíamos

dicho, se componían por los hijos de las “familias distinguidas”, especialmente blancas. Esta situación había sido verificada por Middendorf: «Para el servicio en la infantería se eligen casi únicamente a indios o cholos; en cambio, en la caballería se prefiere a los negros y zambos [...]. No se ven caras blancas entre los soldados rasos, pues los jóvenes con ascendencia predominantemente europea son rápidamente promovidos a oficiales.» (Middendorf 1973: 270). La visión jerárquica de la sociedad, tal vez impregnada por el racismo decimonónico, se hacía patente en la organización del ejército y llegó a ser ampliamente aceptada en los altos círculos del Estado, muestra de ello era la recomendación que hacía el Ministro Echenique en 1847 al Congreso: «habrá que atender á los hábitos y cualidades físicas y morales de las distintas razas que componen la poblacion del país, y á la influencia de estas circunstancias en la idoneidad de cada una de las clases para el mejor servicio en esta ó la otra arma. Los habitantes del interior, por lo general reúnen á su sobriedad y resistencia para las fatigas ciertas otras condiciones que los hacen muy aparentes para la Infanteria, mientras los naturales de la costa son los únicos llamados á componer los cuerpos de caballería y artilleria por sus peculiares ventajas en cuanto á los ejercicios de la jineta y otras cualidades.» (MGM 1847: 14).

1.6. Alianzas, armas y política. «Politización del ejército».

Con el nombre de militarismo, los historiadores han caracterizado el predominio de los hombres de uniforme sobre el gobierno del Perú decimonónico (Villanueva, 1962, pp. 7-8). Todos los presidentes del Perú del siglo, menos Manuel Pardo y Nicolás de Piérola, pertenecieron al mundo castrense. Considerando ello ¿es posible afirmar que el Ejército decimonónico fue una institución que ejercía su impronta en la dirección de la vida política y social del país? En lo absoluto, pues el Ejército como institución corporativa y permanente, con una agenda sobre su posición en la sociedad y sobre el destino del país, no existía. A nuestro juicio, la imagen de una acción corporativa del ejército en la vida política del Perú decimonónico ha sido la construcción de la propaganda de las nacientes vanguardias políticas e intelectuales civiles desde mediados del siglo XIX y por otros motivos por las construcciones historiográficas institucionales de historiadores militares del siglo XX. Antes de una impronta militar institucional, existían caudillos militares que luchaban entre sí por el

poder, la gloria, el estatus y el tesoro público. Estos líderes militares, antiguos soldados del rey de España o flamantes oficiales del temprano Estado republicano, después de las guerras de independencia resultaron ser los únicos actores fortalecidos, mientras que el liderazgo aristocrático y la élite terrateniente “civil” se vieron golpeadas por las convulsiones de la guerra. Por tales motivos, los caudillos legitimados por la victoria ante la antigua Metrópoli se erigieron en los dirigentes naturales del país en momentos en los que la institucionalidad colonial había sido arrasada y la legitimidad del Estado republicano era aún endeble.

Cuando nos referimos a la “politización del Ejército” estamos afirmando la participación política de los jefes y oficiales, en tanto caudillos militares que luchaban por el poder, y de las tropas de los distintos ejércitos levantados para tal fin, en tanto adherentes a la causa de alguna alianza que representaba un caudillo. Pero sobre todo con ello estamos entendiendo la importancia de la precaria organización del Ejército o los ejércitos para el acceso al poder, dado que la mayoría de los gobiernos que se erigieron en este período se hicieron del Estado a través de las bayonetas y el fusil. Los oficiales militares para construir una red considerable que le permitiera ser “presidenciable”, es decir acumular las fuerzas sociales suficientes para tomar el poder, necesitaba entablar alianzas con diferentes actores sociales de distintas regiones del país, a fin que apoyaran su “candidatura”. El pertenecer al Ejército les brindaba la oportunidad para lograr este objetivo, puesto que la carrera de las armas los obligaba constantemente a desplazarse a distintas regiones, en las que podían establecer vínculos con notables locales y regionales civiles, con hacendados que podían brindar recursos humanos y logísticos para las aventuras militares o poblaciones enteras que podían jugarse por algún caudillo. Pero al mismo tiempo, el continuo movimiento de los caudillos, les permitía relacionarse personalmente con oficiales de todo el país a fin de granjearse sus lealtades y la de los cuerpos del ejército a su mando. Una larga vida en los cuarteles del ejército y en los campos de batalla, generaba los vínculos necesarios para iniciar una campaña exitosa que con audacia podía ser coronada con el sillón presidencial.

Para ilustrar ello valdría la pena tomar el caso de Ramón Castilla como uno entre tantos. Castilla inició su azarosa vida militar como cadete del cuerpo de Dragones del Rey, peleando en Chacabuco. En el año 1817, fue hecho prisionero por

las fuerzas de San Martín y enviado a Buenos Aires, lugar del que fugó para regresar al Perú clandestinamente. En 1821, después de la toma de Lima por las fuerzas libertadoras, el joven oficial se pasó a las filas patriotas. A la llegada de Bolívar, Castilla enarboló un nacionalismo militante contra los militares y jefes colombianos que le valió el reconocimiento de otros oficiales peruanos, sin embargo, tuvo que prestar lealtad al general grancolombiano. A la partida de Bolívar y con el exacerbamiento de lucha entre los caudillos de las primeras dos décadas post-independencia, cupo a Castilla tomar partido convenientemente entre unos y otros, ofreciendo su apoyo y el de sus tropas. Su participación en los continuos combates que se desarrollaban en las regiones más importantes del país, le permitió conocer el territorio nacional y le brindó la oportunidad de construir una red de alianzas basadas en el contacto personal y el clientelismo. El soporte de estas alianzas se hizo efectivo durante el movimiento que permitió a Castilla derrocar a Vivanco en 1845 y llegar a la primera magistratura de la República, pero, además, gracias a tales alianzas, y a los ingentes recursos del guano, el militar tarapaqueño pudo mantener la estabilidad del país en dos períodos largos, sin que ello no significara que no se produjeran levantamientos en contra de su administración. Una vez en el gobierno, tuvo que acudir a prácticas patrimoniales, otorgando pródigas colocaciones en las crecientes burocracias civiles y militares a sus leales prosélitos. Al mismo tiempo, inició una serie de obras públicas en varios departamentos y provincias del país a fin de corresponder los apoyos brindados por los grupos regionales durante sus campañas (Mc Evoy 1997:25-26 y 30).

Sin embargo, el Presidencia sólo era la recompensa para los caudillos de primer orden, como Gamarra, Santa Cruz, Orbegozo, Castilla, Vivanco, Prado, entre otros. Para los caudillos de segundo orden y los jefes y oficiales encumbrados en cada nueva administración les cabía no despreciables cargos políticos dentro del gobierno, como ministros, prefectos, subprefectos y gobernadores, que a la vez que solidificaba la lealtad de estos oficiales con los caudillos gobernantes, permitía un mayor control del gobierno sobre las poblaciones de las diferentes regiones del país, a fin de afianzarse y de evitar un brote insurreccional. Por ejemplo, Castilla en su primer gobierno destinó a casi 380 oficiales a distintas dependencias del gobierno, como comisiones especiales, prefecturas, fuerzas e intendencias de policía, inspecciones de las guardias nacionales, etc. (MGM 1847: Anexo “Noticia...”).

Estos espacios por su parte permitían a los caudillos menores y a los jefes y oficiales capitalizar redes sociales, aunque a niveles inferiores a los grandes caudillos, que podían permitir a su vez el acceso a niveles superiores de decisión política, a los círculos cerrados de la élite civil y al prestigio propio de la función pública que no era poca cosa. Pero si bien, los oficiales se encontraban inmersos y formaban parte de las distintas facciones políticas, una situación análoga sucedía con las tropas. Dado que los cuerpos del ejército eran una de las armas principales para la lucha por el poder, el tener control sobre la mayor cantidad de soldados era una necesidad vital.

Cada facción en pugna buscaba adoctrinar a sus propias tropas a fin de ganarse la adhesión a su causa y evitar amotinamientos que no eran poco frecuentes, por tal motivo, durante las primeras décadas del período republicano, no era raro que periódicos afines a algún caudillo circularan entre los soldados y que paralelamente se filtraran también impresos de caudillos opositores a con la finalidad de desestabilizar el precario liderazgo de los oficiales sobre sus tropas. Por ejemplo, en 1835, Salaverry publicó sucesivamente cuatro decretos (abril, junio, agosto y octubre) indultando a los desertores de las filas de Orbegozo y Santa Cruz a fin de engrosar las suyas (Decretos de 1-04-1835; 29-06-1835; 26-08-1835; 7-10-1835). Sin embargo, el apoyo de las tropas no era gratuito, pues estas exigían también el reconocimiento de sus servicios a la patria”. Como habíamos visto, no era raro que se establecieran relaciones de clientelaje entre los oficiales y la tropa. Un soldado, por ofrecer sus servicios en campaña, al ser licenciado podía pedir en recompensa determinados bienes que le fueran necesarios, como tierras, un empleo en el gobierno, gratificaciones en dinero, etc. El clima de enfrentamientos facilitaba a las tropas obtener un apropiado adoctrinamiento político que les permitía establecer estrategias de negociación con el gobierno y los caudillos, a favor de sus intereses. A esto respecto, Cristóbal Aljovín ha escrito que:

Los constantes conflictos y divisiones dentro del ejército crearon una conciencia política en los sectores populares y en los indios, quienes los usaron en provecho propio y de sus comunidades. Cada miembro del ejército, de arriba abajo, debía “reescribir” su currículum según quien fuese el presidente, mostrando así que habían respaldado “la causa justa”. Los soldados estaban al tanto de las causas de las guerras a su constante adoctrinamiento político en el ejército. Este adoctrinamiento era una combinación de saber quién tenía el

poder, cuál era el nuevo vocabulario político y un fuerte nacionalismo [...] (Aljovín 2000: 169-170).

Como también habíamos visto, no era extraño que los caudillos y sus representantes establecieran alianzas con poblaciones enteras a través de las cuales estas cedían parte de su reserva humana de fuerza de trabajo a cambio de la satisfacción de su propia agenda local. En el caso de las comunidades indígenas que permitían el alistamiento de sus hombres al ejército, estas pedían a cambio la exoneración de la contribución indígena, entendiendo que el servicio de las armas era un gravamen análogo. Esta situación se produjo en 1835, cuando Santa Cruz expidió una resolución suprema en la que exoneraba a las comunidades de Huanta del pago de sus contribuciones (Méndez 2004). En 1854, en el contexto de la revolución liderada por Castilla, el gobierno de Echenique adoptó similar medida otorgando a los habitantes del pueblo de Canta una exoneración al pago de la contribución de fin de año en virtud «á los distinguidos servicios [...] por la causa del orden» (Decreto de 17-11-1854). Tal vez el acto máximo de este tipo de ofrecimientos a diversos actores para que se plegaran a favor de un ejército caudillesco fue hecho por el mismo Castilla al declarar la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo indígena.

No obstante, a mediados de siglo, los caudillos militares tuvieron que ir cediendo espacios de participación política a los civiles y sus propias formas de organización. En el contexto del auge del guano, las nuevas élites civiles enriquecidas formaron clubes políticos y asociaciones voluntarias y fundaron diarios a fin de disputar el monopolio del gobierno que habían gozado los militares por más casi cincuenta años. La candidatura de Domingo Elías a la presidencia en la década de 1850 fue un temprano ejemplo de una tradición que continuaría con Manuel Pardo y Nicolás de Piérola. El primer revés que sufrieron los militares ante los civiles estuvo en manos del propio Pardo, quien tuvo el mérito de utilizar a su favor todos los resortes institucionales civiles, como la prensa, los clubes electorales y los mítines, a favor de su candidatura, esfuerzo que fue coronado con la primera magistratura, convirtiéndose en primer presidente civil del Perú republicano. Sin embargo, los jefes militares no habían claudicado en dejar a los civiles el gobierno del país. El mismo Pardo había constatado unos días antes de su asunción en el mando los peligros de la latente politización del ejército cuando se produjo la rebelión de cuartel acaudillada por los hermanos Gutiérrez.

Esta rebelión, aunque gozaba del apoyo de militares encumbrados, incluyendo inicialmente al propio presidente Balta (coronel a la sazón), y de los cuerpos del ejército de la capital, difícilmente podía considerarse como una respuesta corporativa institucional castrense en contra de un civil, como lo entendió la intelligentsia civilista. Como otras tantas revoluciones, los militares en esta ocasión hacían uso del recurso que tantas veces había utilizado para la toma del poder, la violencia, sin embargo, lo que resultaba diferente en esta ocasión era que el bando contendor no tuviese un ejército detrás de sí; si bien no lo necesitó, pues los habitantes de la capital se encargaron de sofocar la rebelión del cuartel. Por otra parte, era evidente que no todos los oficiales del ejército simpatizaban con los Gutiérrez e incluso algunos influyentes militares, como Manuel Martínez Aparicio, José Miguel Medina, Miguel Grau y Lizardo Montero (Mc Evoy 1997: 58-59), formaban parte del partido político liderado por el personaje que intentó reglamentar más escrupulosamente la condición de las licencias indefinidas.

En ese contexto, Pardo tomó varias medidas para evitar otro brote militar durante su administración. Primero redujo el número de efectivos del ejército de 7,000 hombres a 3 mil, situación que se correspondía con el respectivo licenciamiento de los oficiales que quedasen sin tropa, pues la reducción de la tropa trajo consigo la desactivación de 4 batallones de infantería y un escuadrón de caballería (Villanueva 1971: 25, Hidalgo et ál. 2005: 183-186). En segundo lugar, procuró desfogar los ánimos conspiratorios de los oficiales indefinidos alejándolos de la capital al organizar una expedición militar que tenía por función explorar el río Amazonas y sus afluentes. Finalmente, se reabrió el Colegio Militar, con la intención de dirigir los ímpetus militares hacia la necesaria profesionalización de sus oficiales. Sin embargo, Pardo nunca confió que sus medidas resultasen suficientes para domar la politización de los militares, razón por la cual decretó la reorganización de los cuerpos de las guardias nacionales, aumentando su número a 4 mil efectivos (cantidad superior a la del ejército) y asumió la facultad de elegir a sus oficiales, facultad que aprovechó para nombrar mayoritariamente a conspicuos miembros de su partido. El gobierno de Pardo concluyó atravesado por una dura crisis fiscal, por lo que el Partido Civil fue incapaz de retener la primera magistratura, la misma que cayó en manos de un militar, Mariano Ignacio Prado, sin embargo, ello no significó

el regreso del ejercicio de prácticas violentas para el acceso del poder sino hasta la Guerra del Pacífico.

Capítulo 2. Dos miradas respecto a los militares y al Ejército

[La República] era vasto cuartel y los peruanos incapaces de gobernarse bajo otro régimen que el militar. Felizmente no es así, la ley del progreso que preside la marcha de las sociedades, debe enseñar a los pesimistas que los pretorianos no son los mas famosos centinelas de las instituciones patrias (*El Comercio*. Lima, 3 de marzo de 1868).

El verdadero militar, penetrado de su nobilísima misión, debe tener el orgullo de su carrera, y mostrarse uraño, esquivo, desconfiado é inasequible ante este elemento antagónico [civil] que le es contrario, y el cual ha de tratar de buscar su cooperación [...] no sólo ha traído como resultado el desprestigio del ejército y su postración consiguiente, por atribuírsele, á él exclusivamente, estos movimientos perturbadores, sino todo el cúmulo de males que han pesado sobre el país (*Revista Militar y Naval* 1889: 553-554).

Los hombres de uniforme fueron a lo largo del siglo XIX actores centrales en la vida política peruana, sus guerras, discursos, alianzas y conflictos han marcado el devenir de dicha centuria. Los famosos caudillos, no sin alianzas con los civiles, lograron hegemonizar el gobierno del país, bajo el supuesto de ser ellos los salvadores de la Patria, los representantes más calificados del patriotismo y del amor a la bandera. Era este un discurso patriótico castrense, enarbolado por los diferentes jefes militares para justificar sus acciones políticas, el acceso al poder o la resistencia en él haciendo frente a sus enemigos políticos. Mostrándose ante todo como hombres que orientaban su conducta bajo una moral republicana que les prescribía la preocupación por el bien común, expresada en el sacrificio por la Patria, se presentaban en el espacio público como los defensores más calificados de la institucionalidad republicana, los afianzadores del orden constitucional, los protectores de las libertades ciudadanas o los garantes de la unidad del país frente a los intereses

particulares, calificativos todos ellos que construían una representación idealizada de los militares que justificaba su predominancia política y el gobierno del país (Velásquez 2010:149-156).

Este discurso que enarbolaba un patriotismo republicano castrense había sido planteado desde los albores de la República y buscaba fortalecer el estatus de los vencedores de Junín y Ayacucho y sus herederos, blandiendo a través de la pluma lo que la simple fuerza no podía realizar, es decir, la legitimidad suficiente para el ejercicio del poder (Ibíd.). No obstante, aquella predominancia política, no negaría la articulación creciente de redes políticas predominantemente civiles que, a fines de siglo, terminarían por desmoronar las antiguas coaliciones políticas que habían permitido a los caudillos tener acceso al poder, conduciéndolos por espacio de más de dos décadas a los cuarteles. De manera lenta pero constante, desde mediados de la centuria, la novedosa articulación política de los civiles a través de organizaciones políticas-electorales iría forjando una *mirada* civil sobre los militares y la institución castrense, a medida que los civiles buscaban afirmarse políticamente de una manera autónoma a los caudillos. Será una mirada entonces dirigida a enjuiciar el papel de los jefes militares en el quehacer político republicano, responsabilizándolos de la ingobernabilidad decimonónica y de los extravíos económicos del país. La derrota en la Guerra del Pacífico, con el retorno paradójico de los militares al poder, daría nuevos impulsos a esta mirada crítica del *militarismo*, del papel político de los hombres de armas y, en alguna medida del Ejército como institución, siendo este un discurso de fondo que permitirá, en las postrimerías del XIX, crear un consenso político en las élites políticas civiles para la reforma del Ejército y someter a los díscolos oficiales durante el segundo gobierno de Nicolás de Piérola.

Pero la Guerra del Pacífico no sólo permitió a los civiles esgrimir un discurso crítico sobre los militares, también desde las filas de la oficialidad del Ejército durante los gobiernos del Segundo Militarismo (1883-1895), se formará una visión auto-reflexiva respecto al Ejército de la derrota, sus relaciones con los actores civiles y la posición de los oficiales en la sociedad. Alrededor del Centro Militar y la *Revista Militar y Naval*, los militares de la postguerra ofrecerán un discurso en respuesta a los cuestionamientos abiertos desde la mirada civil, así como a las propias reflexiones profesionales como resultado de una visión autocrítica respecto a la

derrota. En su búsqueda de reformas y en su defensa contra las críticas lanzadas desde las élites civiles, este discurso irá acompañado de un proyecto de corporativismo castrense orientado a fortalecer las solidaridades de los cultores de la guerra. En este contexto de la postguerra, la afirmación de una identidad corporativa más sólida entre los militares, conducirá hacia una crítica a los políticos civiles, considerándolos como los causantes de los desastres militares del país y de la condición deprimida del Ejército. Esta posición más compacta entre los oficiales del Ejército de los gobiernos de Andrés A. Cáceres y Remigio Morales Bermúdez, alentaría también el reforzamiento de la percepción crítica de conjunto que los civiles formaban desde fuera sobre el Ejército.

Dicho esto, pretendemos en el presente capítulo ofrecer dos percepciones o miradas acerca de los militares y del Ejército que servirán de telón de fondo a las reformas que se implementarán durante la segunda administración del Califa. Tanto desde los civiles como desde los militares existieron diagnósticos, críticas y reflexiones sobre los problemas de la institución castrense, así como propuestas de solución que implicaban cambios en el Ejército, así como en el cuerpo de oficiales que lo comandaba. Muchas de estas propuestas, sobre todo las que alcanzaron mayor consenso, serían recogidas en la reforma de Piérola y en los gobiernos posteriores.

2.1. Mirada de los civiles sobre los militares y el Ejército durante la segunda mitad del siglo XIX

Desde las canteras de élites políticas e intelectuales civiles se fue formando, a lo largo del siglo XIX, una percepción crítica respecto de los militares y el Ejército como institución. Siendo los jefes y oficiales del Ejército los conductores del país durante casi toda la centuria, los políticos e intelectuales civiles reflexionaron sobre el rol que cumplían los hombres de uniforme en la vida política y social de la República. En sus diagnósticos y enjuiciamientos sobre la ingobernabilidad política y el atraso material del país, consideraron a los militares como el origen de aquellos males, rémoras que impedían el cumplimiento de las promesas que la fundación de la República había ofrecido. Forjada inicialmente sólo como una representación crítica al predominio militar sobre el Estado y orientada a favorecer a varios proyectos de

candidaturas de hombres de levita, esta mirada civil tendió a complejizarse, desarrollando una serie de tópicos que, agrupados bajo la categoría de *militarismo*, denunciaban las características negativas de los hombres de armas y su institución. Sin embargo, al tanto que se desarrollaba esta mirada crítica, no dejaron de plantearse propuestas específicas que abonarían hacia la completa reforma del Ejército y la subordinación de los militares al gobierno civil.

Considerado diacrónicamente, el discurso civil sobre los militares se manifestó claramente en tres períodos durante la segunda mitad del siglo XIX. El primero inicia en la coyuntura electoral de 1850 y termina poco después de la victoria de la revolución “liberal” de 1854, apareciendo como un discurso contrario al monopolio de los militares sobre el gobierno del país. El segundo período se abre con el fracaso del gobierno de Mariano Ignacio Prado en 1867 y se prolonga hasta el gobierno de Manuel Pardo (1872-1876). El tercer período principia inmediatamente después de la Guerra del Pacífico y se extenderá hasta el gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899). Si bien es reconocible esta mirada civil durante toda la segunda mitad del siglo, será durante coyunturas de definición de la suerte del gobierno, como las elecciones y las guerras civiles, en las que este discurso se hará más perceptible a la par que enfático.

Resulta interesante constatar que esta mirada civil sobre los militares corre paralela a un proceso fortalecimiento de los actores civiles vinculado decididamente al enriquecimiento de sus élites en virtud de los cuantiosos recursos del guano, proceso que se expresó políticamente a través del surgimiento de organizaciones de tipo político-electoral. El surgimiento de este tipo de asociaciones políticas, con sus prácticas cívicas dirigidas a la participación en las contiendas electorales, sería en la segunda mitad del XIX el espacio a través del cual empezarían a articularse las elites políticas de manera paralela a las redes clientelares de los caudillos políticos, otorgándoles una identidad diferenciada que se expresaba no solamente en su diferente quehacer, sino en la forma de hacer política (Aljovín 2005: 59). En ese sentido, al fortalecerse una identidad política civil, estos van forjando por antonomasia un discurso acerca de los hombres de uniforme.

El primer período en la formación de este discurso lo podemos observar entre la campaña electoral de 1850-1 y la revolución de 1854. Terminado del primer gobierno de Ramón Castilla con un ambiente de relativa paz política se abrió un proceso electoral en 1850 para la presidencia de la República, después de casi dos décadas en que los caudillos competían por el poder por las armas. Al lado de los candidatos militares, José Rufino Echenique y José Ignacio de Vivanco terció la figura del enriquecido empresario Domingo Elías, apoyado por el dinámico *Club Progresista*, una de las primeras organizaciones políticas del país de orientación marcadamente civil. A través de las páginas de su publicación *El Progreso*, se llevó a cabo una inusitada campaña electoral a favor de su candidato que, además de poner el acento en su origen eminentemente civil, puso de relieve su objetivo de alcanzar el poder por medios estrictamente cívicos, es decir, conquistando la opinión pública y ganando en las urnas (Loayza 2005: 408-410).

En esta interesante campaña electoral, desde las páginas *El Progreso* se fue hilvanando un discurso crítico contra el predominio exclusivo de los hombres de uniforme en la política ejercido desde la Independencia. La estrategia discursiva empleada por los miembros del Club Progresista tendió a mostrar una imagen negativa del cuasi monopolio de los militares sobre el Estado, el cual generaba una serie de consecuencias negativas que atentaban contra la organización republicana del país. A contracorriente de la imagen que los militares construyeron de sí mismos, como defensores de las instituciones y prácticas republicanas, estos civiles afirmaban que el ejercicio exclusivo del poder traía serias dificultades para la convivencia social en una sociedad formalmente libre e igualitaria.

En primer lugar, el predominio ininterrumpido de los hombres de uniforme en el gobierno desde la independencia atentaba contra el principio republicano de la alternancia, en tanto que aquella no sólo debía verificarse en la renovación periódica de las personas, sino también en la alternancia de los grupos sociales. En segundo lugar, y como derivación lógica, aquel predominio político generaba la constitución de un grupo privilegiado que, en los hechos, otorgaba al país rasgos de una sociedad de cuño aristocrático que era proscrita por el principio de igualdad de la constitución republicana del Estado peruano. En tercer lugar, era de comprenderse que el predominio político y social de un grupo privilegiado conducía inevitablemente al

desincentivo de la participación política de otros grupos sociales, generando males aún mayores, como el afianzamiento de una cultura política en discordia con la libertad proclamada por la independencia, basada en la obediencia pasiva, la «sujeción» y la resignación hacia los mandatarios y el grupo privilegiado:

Mucho tiempo, diremos desde que principió la independencia colonial ha, que no cesan de alternar los jenerales del ejercito en la Presidencia de la República y parece que los demas hombres eminentes, ó están condenado á una nulidad afrentosa ó han agonizado al golpe del olvido ó del desprecio. Los soldados de linea han deliberado de las voluntades por la resignacion, y si se quiere en tanto tiempo de prepotencia han hecho crear hábitos de sujeción, obligando á las otras categorías demócratas á una inercia muda sobre el derecho de alternativa, que todos tenemos al gobierno, según la Carta. (*El Progreso* N° 75. Lima, 14 de diciembre de 1850).

La configuración de una cultura política de esas características fortalecía vicios como el egoísmo³⁶ que conducían al debilitamiento de otro de los principios republicanos que valoraba el concurso de los miembros de la comunidad política para la búsqueda del bien común, en tanto que dividía los intereses comunes y generaba en los ciudadanos una sensación de desconfianza y recelo entre sí.³⁷ En quinto lugar, actitudes egoístas de los grupos privilegiados y resignación de los gobernados, terminaban por generar el espacio suficiente para la constitución del despotismo, pues «[e]l hombre que reconoce en si una superioridad sobre los demas, despotiza casi instintivamente, porque defiende sus prerrogativas y las del cuerpo á que pertenece, y asi lastima los derechos ajenos, y los de la sociedad entera.»³⁸ En ese sentido, para los partidarios de la candidatura civil de Domingo Elías, la falta de alternancia de los presidentes militares, no sólo significaba la exclusión de otros grupos sociales del gobierno del país, sino que implicaba el socavamiento las bases de la República como forma de organización socio-política.

³⁶*El Progreso* N° 75. Lima, 14 de diciembre de 1850.

³⁷*El Progreso*. N° 35. Lima, 6 de abril de 1850. Para este articulista el privilegio de los militares producía automáticamente una situación de iniquidad y predominio.

³⁸ *Ibíd.*

Cabe mencionar que si en esta primera coyuntura se criticaba el cuasi monopolio de los hombres de uniforme en la política, considerándolo como un problema del sistema político, no se produjo un consenso acerca de la actitud que debía adoptarse respecto a los militares como categoría social específica, esto es, sobre su posición en la sociedad. Por ejemplo, en el mismo *El Progreso* algunos de sus redactores consideraban que sus artículos no atacaban a los militares en general, haciéndose siempre salvedades respecto a militares «honrosos»³⁹, al mismo tiempo que se adelantaban a aseverar la importancia de la carrera militar para el país: «nuestra milicia, tan acreedora á nuestra confianza por sus virtudes marciales, y por los bienes positivos que en delante de ella recibiremos»⁴⁰. Sin embargo, ello no negaba que existieran opiniones más críticas que generalizaban un comportamiento negativo de los hombres de uniforme y sus consecuencias «funestas» para la nación. Así, en un artículo en el que se pretendía dar un diagnóstico del país, el redactor consideraba perjudicial para los «pueblos» el proceder de los militares en sus pugnas por el poder:

[L]a propiedad deja de serlo, y pasa a satisfacer las necesidades y codicia de los caudillos: gran número de hombres que vejetan en la obscuridad y en los vicios, se alistán en las filas de cualquier contendiente, y mientras mas bajas cometen, mas pronto ponen sobre sus hombros esas funestas charreteras que entre nosotros dan el derecho de mandar á los pueblos, y de vivir siempre á costa de su sangre (*El Progreso* N° 29. Lima, 18 de febrero de 1850).

Ahora bien la crítica al predominio de los militares no fue privativa de *El Progreso* ni de la coyuntura electoral de 1850. Muestras de ella las encontramos algunos años después en el contexto de la caída del gobierno del general Echenique en 1854. El fuerte apoyo del Ejército a su gobierno, ligó la imagen de los militares con la del desacreditado gobernante. Los escándalos de corrupción, las nuevas fortunas surgidas con los dineros del guano promovidas por un régimen sostenido cerradamente por gran parte del Ejército (Basadre 2005, t. 4: 241), parecía confirmar los temores de los redactores del periódico del *Club Progresista*. La respuesta de los opositores al régimen fue la organización de una revolución victoriosa que, si bien,

³⁹*El Progreso* N° 63. Lima, 13 de noviembre de 1850.

⁴⁰*El Progreso* N° 75. Lima, 14 de diciembre de 1850.

fue acaudillada por el más prestigioso de los caudillos militares, Ramón Castilla, fue vista por algunos actores de la época como una gesta eminentemente popular y civil⁴¹, donde los ciudadanos armados momentáneamente se lanzaban al combate para restablecer sus derechos conculcados por un gobierno pretoriano:

Por lo que hace á nosotros [ejército revolucionario] despreciamos las charreteras, desdeñamos la gorra y las fatídicas insignias que usabais cuando martirizabais al pueblo, porque somos hombres nuevos, y queremos que principie con nosotros y por nosotros una nueva era de ventura para el Perú. Solo la espada conservaremos para teneros á raya mientras se establezcan las cien mil guardias nacionales de la República, que es una de las ideas que sostenemos; agrupados alrededor de nuestros caudillos Castilla, Elias, San Roman [...] (*El Comercio*. Lima, 12 de febrero de 1855)

En los meses siguientes a la victoria de la revolución, un importante discurso contra el monopolio del poder de los militares fue nuevamente lanzado desde la prensa, buscando asimilar lo militar al despotismo, «ahogada la voz de la libertad, y los pueblos gimiendo bajo el yugo férreo del mas atroz despotismo; ó para decirlo de una vez de la funesta oligarquía militar»⁴²; y profiriendo la esperanza de que aquella revolución acabase con el monopolio político de los hombres del cuartel, pues era «llegada la epoca de la rejeneracion del Perú, porque la revolucion del 54 se encamina por un sendero diferente que las otras revoluciones, porque el predominio militar ha descendido de su antiguo estado»⁴³. En este contexto, aparecerá el concepto *militarismo* para fijar lingüísticamente aquellas característica negativas ya esbozadas en *El Progreso*, ligadas al predominio de los militares, a saber, su monopolio de lo cargos públicos, el sentido de casta con que se recubrían los cultores de su *profesión*, su tendencia hacia el autoritarismo y su desprecio por los civiles:

[S]e han sucedido muchos gobiernos todos maquiavélicos y egoístas, republicanos en el nombre, que han mantenido á la nacion bajo el yugo insoportable del militarismo: solo tenientes coroneles y coroneles han sido nombrados para Sub prefectos y Prefectos de los pueblos [...]. La mayor parte

⁴¹ Basadre aunque desconoce los ribetes civilistas de este movimiento, considera que esta revolución fue eminentemente popular. (Basadre 2005, t. 4: 210-211).

⁴² *El Comercio*. Lima, 9 de enero de 1855.

⁴³ *El Comercio*. Lima, 22 de enero de 1855.

de ellos brutos, é ignorantes, acostumbrados á manejar soldados con la bara en la mano [...] he aquí los que han elegido los gobiernos para mandar pueblos [...] entes corrompidos y estúpidos apenas posesionados del puesto, han despreciado con la mas fátua vanidad á todos los ciudadanos [...] poniendo el tacon de la bota granadera en el cuello de todos [...] si una victima la ha llevado [una queja] alguna vez á un superior; esto es, las demasias de un coronel Sub prefecto hasta el coronel Prefecto, ó de este al general Ministro, o al general Presidente, tropezando de escala con espada y charreteras, ha sido casi siempre desatendida, porque entre oficiales no se cobran hechuras, por el espíritu de cuerpo, y porque el general se acuerda que fué coronel, y este, que fue comandante y que en ese tiempo él tambien robo, él tambien hollo, el tambien azotó al paisano que nada significaba [...] (*El Comercio*. Lima, 12 de febrero de 1855)

Algo interesante de este artículo es que mostraba la existencia de un naciente discurso anti-militar, en tanto que no sólo adoptaba una posición crítica para con el predominio político de los militares, sino que hacía extensivas sus críticas a los oficiales, como grupo social (considerándolos brutos, ignorantes, autoritarios, corruptos y vanidosos). A pesar de estas críticas, el mariscal Ramón Castilla gobernó el país por siete años más y los militares se mantuvieron en la cabeza del Estado ininterrumpidamente hasta 1872. Sin embargo, ello no debe llevar a pensar que para los políticos civiles, específicamente de los círculos liberales que habían bregado junto a Castilla, la revolución de 1854 no significaría victoria total, a pesar que una de las medidas más importantes que ejecutaron los liberales peruanos en Convención Nacional fue la abolición del fuero militar, el cual era considerado como un privilegio de casta que desde el período colonial sancionaba diferencias legales entre ciudadanos, un privilegio de Antiguo Régimen que los principios republicanos proscribían (Basadre 2005, t. 4: 256, García Calderón 2007 [1879], II: 995).

En los años que siguieron a esta revolución, los círculos civiles demostraron su debilidad, mientras que los caudillos militares por su lado evidenciaron su plena vigencia. Así, a los pocos años de su victoria, Castilla desplazó a los liberales luego que estos se volvieron un estorbo para sus proyectos de gobierno, al tanto que pactaba con figuras conservadoras (Basadre 2005, t. 4: 285-286, Mc Evoy 1997: 35-

36).⁴⁴ No había aún grupos políticos con capacidad de acción política autónoma frente a los caudillos militares. Sin embargo, cuando el gobierno de Castilla terminó, por lo menos un grupo de liberales promovieron la candidatura de un político civil, que cuestionara el predominio de los militares en el gobierno. Desde el año 1861, se proponían nombres como José Gregorio y Mariano Felipe Paz Soldán, Felipe Barreda o Antonio Arenas para la vicepresidencia.⁴⁵ En los artículos que promovían las candidaturas civiles se podían leer sendas críticas contra el control de los militares sobre el gobierno:

[S]olo resta la Candidatura civil [...] Como *principio* la Candidatura Civil esta juzgada. Ella es la única ancla de salvacion la áncora de la esperanza, para los pueblos, como el nuestro, largo tiempo combatidos por el predominio militar y por la anarquía, que es la consecuencia necesaria de un órden de cosas violento y contra naturaleza. El Gobierno no es un mando militar, es una magistratura. Los estados no son cuarteles, ni los ciudadanos pueden vivir eternamente como soldados, sujetos á un sargento con faja y baston, que los haga marchar á pito y tambor y los llame al órden con vara de mimbre. (*El Comercio*. Lima, 20 de octubre de 1861)

La crítica al predominio militar vuelve a ser beligerante luego de la caída del gobierno del coronel Mariano Ignacio Prado (1895-1867) y el desplome junto con él del gabinete liberal que lo apoyó durante su dictadura. Para las vanguardias civiles e intelectuales de cariz liberal, la victoria del también coronel José Balta, apoyado por la reacción conservadora que estalló en Arequipa a propósito de la fallida Constitución de 1867, significó una nueva decepción respecto a las oportunidades que ofrecían los caudillos para la implementación de reformas liberales. Las elecciones posteriores al golpe fueron una oportunidad propicia para que se planteara nuevamente la posibilidad de un gobierno civil, lanzándose una “avalancha” de escritos en favor de candidatos de este origen, al tanto que articulaban un discurso fuertemente crítico frente a los hombres de uniforme y a su manifestación política y social, el militarismo. A diferencia del anterior, en este segundo período de la mirada civil sobre los militares, la masividad de escritos que criticaron la continuación de

⁴⁴ Recuérdese el hecho muy ilustrativo del cierre de la Convención por parte del sargento mayor Pablo Arguedas el 2 de noviembre de 1857.

⁴⁵ *El Comercio*. Lima, 16 de setiembre de 1861. El artículo glosado llevaba por título “Candidatura militar y de familia”.

este grupo social sobre el gobierno, permite observar un discurso bastante desarrollado, articulado varios tópicos que van desde el enjuiciamiento de los militares en general, el cuestionamiento de la utilidad del Ejército o el predominio militar sobre el gobierno.

Respecto a los militares como grupo social, las primeras críticas se orientaron a cuestionar su perfil moral e intelectual. Estos eran presentados por los civiles como individuos movidos por la ambición personal y el egoísmo. Las continuas revoluciones, la situación de anarquía y el estancamiento del país se debía a la lucha continua entre los militares por acceder al poder y beneficiarse de él: «¿Y por qué han tenido lugar las revoluciones? Por la ambición de mandos en los mismos militares [...] El subteniente por ser capitán, el capitán por ser mayor [...] el coronel o el general por ser Presidente de la República [...] Y de día en día, la moral ha ido desapareciendo, disciplina relajándose, la traición y el crimen, á fuerza de repetirse, convirtiéndose en acción, no solo lícita sino meritoria.»⁴⁶ Esta imagen de ambición y egoísmo, traición y crimen contradecía los propios discursos de los militares, quienes se consideraban ellos mismos como ciudadanos virtuosos que ostentaban el verdadero patriotismo, es decir, ciudadanos interesados sólo en el bien común, al punto de subordinar sus intereses e incluso la vida por los intereses de la Patria.

Asimismo, para estos escritores civiles, los militares eran percibidos como individuos con escaso desarrollo intelectual o mérito profesional, siendo los que se dedicaban a la carrera de las armas aquellos hombres que no podrían desarrollarse en otras profesiones que implicaran esfuerzo y preparación intelectual, pues «el joven menguado en inteligencia ó de carácter holgazan, que incapaz de aprender una ciencia ó un oficio, deja el colegio ó el taller para calzar el uniforme.»⁴⁷ La ociosidad e improductividad formaban también parte de la imagen de este militar. El no dedicarse a alguna actividad productiva para el desarrollo del país, permaneciendo oficiales y soldados «estáticos» en los cuarteles, era visto negativamente por los civiles. Francisco García Calderón afirmaba que la ociosidad era el «vicio del soldado», y dado que «acostumbra á los hombres á vivir sin trabajar», la milicia generaba otros vicios aún peores (García Calderón 2007 [1879]:1051).

⁴⁶*El Comercio*. Lima, 22 de febrero de 1868.

⁴⁷*El Comercio*. Lima, 20 de febrero de 1868.

No fueron menos beligerantes las críticas de cariz liberal que se hacían al Ejército, considerándolo como una institución peligrosa para el régimen republicano⁴⁸. Resultaba interesante que en este período (a diferencia de anterior), para algunos de estos civiles, no sólo se concebía como inconveniente para la República el *militarismo*, sino el Ejército por sí mismo. Uno de los blancos sobre los que dirigieron estos escritores fueron los hábitos de obediencia del mundo castrense, mostrándolos como inconvenientes para la vida ciudadana. La libertad de conciencia, necesaria para el ejercicio de la ciudadanía era anulada por la obediencia militar, que convertía a los hombres en autómatas. Era el caso del «idiota» recluta «á quien por la fuerza se le pone el fusil en la mano y convertido en máquina de destrucción se le hace marchar sin tener conciencia de sus acciones».⁴⁹ Pero además de la obediencia jerárquica, la vida del cuartel generaba otros comportamientos perjudiciales al sistema republicano. Consideraban estos escritores que aquella producía en los militares un carácter agresivo, vehemente, poco controlable, que era una constante amenaza a la ley y a la vida pacífica de los ciudadanos. García Calderón afirmaba que el uso de armas y los reglamentos militares, daban al soldado «cierta rudeza», «impetuosidad de carácter», «una tendencia tan natural al despotismo y al Gobierno absoluto». Rudeza e impetuosidad, acompañadas de armas eran para él una combinación peligrosa para las libertades públicas, sobre todo en los países sometidos «por algun tiempo al dominio del sable.»(García Calderón 2007 [1879]: 1051).

Otro tópico que se dirigía a la institución castrense como contraria a los principios del sistema republicano se refería a las violentas prácticas de reclutamiento. Como hemos visto en el capítulo anterior, los ejércitos peruanos para obtener *altas* reclutaban compulsivamente a pobladores del campo y de la ciudad. Dado su carácter compulsivo, la desertión de la tropa era constante, razón por la cual los oficiales debían realizar nuevas *levas* para completar el número reglamentario de sus cuerpos militares. La prensa limeña denunció constantemente casos de «reclutamiento» o leva, sobre todo en el período en que el Ejército peruano alcanzó

⁴⁸ En 1862, un articulista que se identificaba como miembro del partido liberal afirmaba que esta organización política «trabaja[ba] con decision y empeño en la obra de la democracia», sindicaba como sus enemigos «el clero, los militares y los egoístas» y que no era posible «la transacción del partido liberal con la fuerza» (es decir con los militares). *El Comercio*. Lima, 4 de febrero de 1862.

⁴⁹ *El Comercio*. Lima, 20 de febrero de 1868.

la cifra de quince mil efectivos a inicios de la década de 1860.⁵⁰ Estas noticias alimentaban el discurso crítico y reforzaban los supuestos de la inobservancia por los jefes militares de las libertades individuales que garantizaba la Constitución. Así, en enero de 1868, el diario *El Comercio* se refería al reclutamiento como una cacería de hombres:

El solo cuadro del reclutamiento es un cuadro de violencias, de verdadera persecución, de iniquidad. A la fuerza se arranca de sus casas, del lado de su mujer é hijos, al infeliz indio, tan ajeno, como todos sabemos á nuestras cuestiones políticas [...]. Si se [le] somete á [la] vida de cuartel, tiene que renunciar por completo á toda esperanza halagueña y resignarse á ser máquina; si se deserta, cae otra vez en poder los que se creen con derecho sobre él, y es tratado cruelmente, ó se ve obligado á vivir oculto, como las fieras en los bosques. (*El Comercio*. Lima, 18 de enero de 1868)

Un tercer tópico que se dirigió contra el Ejército fue acerca de los inconvenientes que producía al desarrollo económico del país. Por un lado, los civiles razonaban que la presencia de un Ejército permanente repercutía negativamente en la producción del país, pues los individuos destinados a los cuarteles restaban brazos a las demás actividades productivas (García Calderón 2007 [1879]: 1052). Incluso afirmaban algunos que el deseo de los indígenas de evitar la leva, los llevaba a alejarse en las montañas y en los bosques, lo que incidía en la depresión de las actividades agropecuarias y en la necesidad de importación de mano de obra. Pero además en el caso de los indígenas, la amenaza de la leva destruía «los lazos naturales entre el pueblo», entorpeciendo la «asimilación» de esta población.⁵¹ Por otro lado, la institución castrense no sólo obstaculizaba el desarrollo productivo, sino también generaba gastos no productivos que agotaban las arcas fiscales. Las críticas a los militares se dirigieron entonces a los gastos que hacía el Estado en el mantenimiento de un crecido Ejército: «El ejército nos cuesta ocho millones por año, es decir, el 62% de las rentas nacionales. Lo que resta para fomentar los verdaderos interes

⁵⁰ Para este aspecto hemos consultado el diario *El Comercio* desde 1860, y sin hacer un registro exhaustivo hemos encontrado cinco denuncias sobre actos de reclutamiento en aquel año: 14 de febrero, 5 de marzo, 12 de abril, 7 y 12 de junio de 1860.

⁵¹ *El Comercio*. Lima, 18 de enero de 1868.

[sic]del país, á nada alcanza.»⁵² El alto gasto del presupuesto en el Ejército producto del periódico aumento de los jefes y oficiales militares en cada revolución fue un tópico explotado con habilidad por los civiles para desprestigiar el predominio político de los militares, llegando un articulista a afirmar que «[t]odos los tesoros del Perú no bastan para satisfacer los haberes de los *diez mil* jefes y oficiales».⁵³

Algunos de estos nuevos tópicos fueron coordinados en el concepto *militarismo*, ampliando así el campo semántico del mismo. Así, con este sustantivo ya no solo se refería al predominio y privilegio de los militares en la vida política y en la sociedad⁵⁴ «el dominio del sable, la fuerza bruta que siempre ha impuesto su voluntad á la Nación», sino describía también las crecidas listas de oficiales que conducían a una *militarización* de la sociedad, con el gasto de recursos y las prácticas y valores que le venían aparejados.⁵⁵ Representado como un mal el predominio de la casta militar, según estos escritores, era un fenómeno que terminaría totalmente destruyendo al país: «El militarismo es el mal que corroe las entrañas de la sociedad: es la gangrena que la mata.»⁵⁶ Otro artículo afirmaba que «el ejército, en fin, ó por mejor decir, el espíritu militar se ha propagado como una plaga y acabará por destruirlo todo.»⁵⁷ En ese sentido, la categoría *militarismo* permitía concebir a los militares como los causantes de la inestabilidad política, el poco desarrollo económico del país y la pobreza fiscal del Estado, además de responsabilizarlos de la relajación de los valores republicanos y del debilitamiento de las libertades y de las instituciones. El *militarismo* era considerado entonces como una fuerza magmática e incontrolable, expansiva y peligrosa. Las leyes y las instituciones habían demostrado su incapacidad de contener la violencia y ambición de los jefes militares, de allí que se presentara como alternativa o la disolución o la completa reforma del Ejército.

⁵² El artículo anterior al referirse que los militares al encontrarse en «todos» los cargos públicos, en los clubs electorales, y siendo presentes desde 1821, manifestaba que estos formaban «esa odiosa y privilegiada familia que se llama militarismo» (*El Comercio*. Lima, 18 de enero de 1868).

⁵³ Otro artículo criticaba esa militarización en los siguientes términos: «Para hablar contra el *militarismo* como idea ó como hecho [...] no es hablar contra los militares», sin embargo, «los *diez mil* oficiales y jefes de nuestra lista militar [...], la excesiva *militarización* del país que ese hecho revela, sería siempre una carga insoportable para el erario [...]. En este sentido es indudablemente en que se ha hablado del militarismo y se la ha condenado» (*El Comercio*. Lima, 22 de febrero de 1868).

⁵⁴ *El Comercio*. Lima, 20 de febrero de 1868.

⁵⁵ *El Comercio*. Lima, 10 de marzo de 1868, consúltese el artículo *La Candidatura Civil en sus relaciones con el Ejército*.

⁵⁶ *El Comercio*. Lima, 22 de febrero de 1868.

⁵⁷ *El Comercio*. Lima, 7 de marzo de 1868.

A favor de la disolución estaban liberales como Francisco García Calderón, quien proponía la eliminación del Ejército permanente, institución que debía ser remplazada por las Guardias Nacionales (cuerpos armados temporales, compuestos por ciudadanos armados) para la defensa de las fronteras del país y por las Gendarmerías para brindar seguridad interna. Otros civiles afirmaban que el Ejército no era negativo en sí mismo, ni sus jefes y oficiales perjudiciales per se, por el contrario, el enemigo del país resultaba ser el militarismo.⁵⁸ De esta idea era el mismo Manuel Pardo, quien en la campaña electoral de 1871 manifestaba que «el ejército no es el militarismo, como la institución, no es el cancer que la gangrena. El militarismo es el verdadero enemigo del ejército, es lo que lo corrompe, lo que lo desacredita, lo que lo vulgariza».⁵⁹ Pardo, como otros civiles, consideraban que el militarismo sólo podría extirparse de la institución militar por medio de una reforma, la cual no podía emprenderse desde el propio Ejército, ni desde un gobierno constituido por militares, de allí que cabía a los civiles «regenerar» la carrera de las armas: «una larga experiencia ha demostrado, que los presidentes militares no pueden regenerar su propia carrera, es preciso buscar un presidente diplomático.»⁶⁰

Estos criterios fueron los que llevaron al mismo Pardo a presentar su candidatura presidencial, y desde allí emprender una reforma integral del Ejército peruano. Para ello, las condiciones estuvieron dadas después del intento fallido de golpe de Estado ejecutado por los hermanos Gutiérrez. La sublevación popular en contra de estos coroneles y la fuerte campaña que realizaron la Sociedad Independencia Electoral y círculos civiles contra el militarismo en 1871 y 1872, permitieron a Pardo la ejecución de una serie de medidas orientadas a sujetar a los militares a la autoridad civil, racionalizar los gastos militares y fomentar valores ciudadanos en los soldados (Mc Evoy 1997: 156-160).

Los años posteriores a la Guerra del Pacífico (1873-1883) inician un nuevo período del discurso civil respecto a los militares. La derrota ante Chile no sólo significó la pérdida de los ricos yacimientos de salitre de Tarapacá -recursos sobre los cuales se puso la esperanza de recuperación económica del país-, sino también un

⁵⁸*El Comercio*. Lima, 10 de marzo de 1868, consúltese el artículo *La Candidatura Civil en sus relaciones con el Ejército*.

⁵⁹*El Comercio*. Lima, 18 de mayo de 1871.

⁶⁰*El Comercio*. Lima, 10 de marzo de 1868, consúltese el artículo *Candidatura civil*.

enorme de drenaje de recursos humanos y materiales destinados a la manutención de las fuerzas de resistencia contra la invasión. El estrepitoso fracaso del Perú en la guerra condujo a la reflexión por parte de los intelectuales, políticos y literatos sobre las causas que habían llevado al país al desastre. La larga ocupación chilena, además, trajo consigo la destrucción de la capacidad productiva del país y el desquiciamiento de la capacidad organizativa del Estado, generando un contexto de caos que se asemejaba al período inmediatamente posterior a las guerras de Independencia. Era innegable que las respuestas a tales cuestiones residían en la azarosa vida republicana de la pre-guerra, planteándose así un enjuiciamiento crítico del pasado. El siempre celebrado discurso del Politeama de Manuel González Prada es ejemplo por antonomasia de esa condena del pasado *oprobioso* responsable de la derrota, pero esta actitud crítica y reflexiva se podía hacer extensiva a otros connotados políticos y profesionales, como el viejo liberal José María Químper, quien, en su opúsculo *Derecho político: El liberalismo*, sindicaba a los errores políticos de la pre-guerra las causas de la postración del país, haciendo al mismo tiempo un llamado a la juventud, a los agricultores, artesanos y obreros para su regeneración (Químper 1886: III-V). De manera similar, Carlos Lisson achacaba a un pasado en donde la «moral relajada», los «hábitos viciados» y una vida democrática ficticia había llevado a los peruanos a la catástrofe, sin embargo, quedaba como solución el trabajo paciente sobre los medios productivos que pudieran llevarlo a desarrollarse (Lisson 1887: 6-8).

En ese marco de evaluación de la postguerra, los intelectuales y políticos civiles lanzaron duras críticas a los militares, responsabilizándolos de la derrota peruana ante el invasor chileno. A pesar de que Andrés Avelino Cáceres había alcanzado la Presidencia en 1886, la crítica al militarismo y a los militares será constante a lo largo del período de la Reconstrucción Nacional (1883-1895). Sin embargo, a diferencia del discurso civil de la pre-guerra, durante este último período la beligerancia en la crítica hacia los militares vendría acompañada de una creciente preocupación por la reforma del Ejército y no necesariamente su desaparición. Para los políticos e intelectuales de la postguerra, salvo algunas excepciones, la guerra había dejado claro que para el respeto del país en el exterior era necesario contar con un Ejército permanente y sólido. El discurso de esta época combinará tanto la

denuncia de los *vicios* del Ejército, en folletos, periódicos y obras literarias, pero también se mostrarán propuestas para su recuperación.

Expresión del espíritu crítico frente a los militares durante la postguerra fue José María Químer. Como continuador de la crítica liberal contra los militares, este viejo político proponía la eliminación del Ejército permanente por razones de principio. Bajo la esperanza que el progreso de la humanidad desterraría la guerra para la resolución de las controversias entre naciones en el futuro próximo, Químer consideraba que las fuerzas armadas llegarían a ser innecesarias, pero, al no haberse verificado aún el sueño de la paz universal, reconocía su actual necesidad (Químer 1886: 138-139). Fiel a los postulados liberales, consideraba que los ejércitos eran, al interior de los Estados, instrumentos del despotismo y enemigos de las libertades públicas, mientras que en el exterior constituían una constante de amenaza a la paz internacional y a los derechos soberanos de los pueblos débiles (Ibíd.:139-140). Proponía, por el contrario, que debían ser las guardias nacionales, las fuerzas defensivas del país en caso de una guerra internacional. Ellas, al ser «el mismo pueblo armado», «no amenaza[ban] la libertad», porque el pueblo no podía dañarse a sí mismo. De manera análoga, postulaba Químer que las Guardias Nacionales no podían ser empleadas para una guerra de conquista, porque el pueblo jamás se subordinaría a las ambiciones de mandatarios para dañar a otro «pueblo hermano» (Ibíd.: 141). Era pues esta una de las pocas visiones críticas sobre los militares que se enarbolaron siguiendo los principios castizamente liberales.

Desde un plano menos doctrinario, Manuel González Prada enjuiciaba cáusticamente el pasado caudillesco del Ejército, la continua intervención en la política de los jefes militares, su rapacidad en la «insaciable succión en los jugos del erario nacional», su falta de ilustración, prefiriendo «atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles» que los había hecho incapaces de detener «[l]a mano brutal de Chile [que] despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos»⁶¹. Pero no sólo los políticos e intelectuales plantearon esta mirada cuestionadora de los hombres de uniforme. Desde la literatura también se forjó una imagen satírica, y por tanto crítica, de los militares. Los estereotipos de la prensa y las críticas de los intelectuales

⁶¹ González Prada, M., *Discurso en el Politeama*. Disponible en URL:<http://www.voltairenet.org/article120667.html> [consulta el 10 de julio de 2012].

encontraron en los literatos a los mejores recreadores de una imagen pintoresca y satírica de los militares. En varios escritos de la postguerra, el estereotipo del militar fue presentado de manera contraria a la representación virtuosa que los militares buscaban proyectar de si mismos. En ese sentido, los militares eran presentados como personajes negativos, asociados a los vicios, como la ociosidad, el egoísmo y el afán de poder.

El oficial indefinido fue particularmente empleado por los literatos costumbristas para representar los estereotipos menos favorables de los militares.⁶² Además del cuento *Taita Briche* de Abelardo Gamarra, el indefinido fue retratado por Ricardo Palma en *La cena del capitán*. En este cuento se presenta al capitán Ramírez como paradigmático de los vicios de todos los que participaban de la condición de indefinidos, en tanto Ramírez «era de ese número de holgazanes y sinvergüenzas», gente caracterizada por vivir del «petardo» (es decir, del engaño), a quienes les disgustaba trabajar en labores manuales que deshonraban la profesión militar, pues «para él [Ramírez] más honra cabía en vivir del peliche o en mendigar una peseta, que en comer el pan humedecido por el sudor del trabajo honrado».⁶³ No dejaba de ser característica de los indefinidos la tendencia de participar violentamente en política, en tanto que «pasaban el tiempo esperando la hora [...] en que a cualquier general, le viniera en antojo encabezar revuelta»⁶⁴; rasgo que Palma hacía extensible al mismo Ejército peruano: «nuestro ejército vivía dividido en dos bandos, el de los militares levantados y de los militares caídos».⁶⁵

Otras imágenes críticas de los militares fueron expuestas por Mercedes Cabello, en su *Profesiones de porvenir*. El cuento se desarrolla en una conversación entre tres tíos (una viuda de un militar, un canónigo y un abogado) que discutían sobre la profesión más conveniente para el futuro de su sobrino. En los diálogos de estos, Cabello deslizaba su opinión sobre los militares. Así, por ejemplo, por boca de la viuda, afirmaba que la profesión militar era conveniente para una persona con afán

⁶² Como hemos visto en, el indefinido era el oficial colocado en situación de inactividad durante un tiempo indefinido por el gobierno de turno. Militares de altos rangos, pero también de grados inferiores, eran desplazados de sus colocaciones, cuando se instauraba un gobierno nuevo, compuesto por caudillos rivales, o cuando aquellos no tenían vínculos clientelares con estos últimos.

⁶³ Palma R., *La cena del capitán*. Disponible en URL: <http://es.scribd.com/doc/32166333/Palma-Ricardo-Tradiciones-en-Salsa-Verde> [consulta el 03 de mayo de 2012].

⁶⁴ *Ibíd.* Estas mismas características las encontramos en el cuento *Taita Briche* de Abelardo Gamarra.

⁶⁵ *Ibíd.*

de poder, a la que no le venía a bien el esfuerzo ni el estudio: los «sin talento ni mérito alguno [...] van derechito a la Presidencia de la República, y sin calentarse los sesos ni envejecer libros, pasan de coroneles a presidente». Coincidió con los liberales sobre lo funesto para el país de los militares, por su manifestación más criticada, el «militarismo». A través del cura, Cabello afirmaba sobre «lo mal opinados que todos los militares están en el Perú», sobre todo por «los daños gravísimos que el militarismo trae a las naciones»(Cabello 1998: 73). Seguía los tópicos esbozados en el período anterior criticando el desproporcionado escalafón militar, el carácter poco útil del Ejército (decorativo para Cabello), y su potencial revolucionario, como se lee en este fragmento:

¿De qué le sirve al Perú [...] tener un escalafón militar, comparativamente más numerosos que el de cualquier otra nación europea? Los militares peruanos [...] no sirven más que para las formaciones de Corpus, o para entierros de ministros y presidentes; lo que es en Arequipa, [los militares] no han servido sino para hacerles revoluciones a los gobiernos. (Cabello 1998:73-74).

Estas eran las críticas que se esbozaron en el período de la Reconstrucción Nacional, sin embargo, habíamos afirmado también que desde el ámbito civiles, hubo actores que además de cuestionamientos al mundo castrense, plantearon reformas específicas para buscar una reforma que los convirtiera en verdaderos baluartes del Estado. Un caso especial por las repercusiones políticas que tuvo después fueron las propuestas que hizo el mismo Nicolás de Piérola en el año 1889, cuando publicó el manifiesto de los *Principios del Partido Demócrata*. Para Piérola, a diferencia de los liberales (como Químper), el Ejército era una «institución esencial, indispensable á la existencia de todo Pueblo, es la que asegura el respeto de sus derechos fuera, el mantenimiento de la paz, i, con esta, el imperio del orden i la libertad, dentro.» (Partido Demócrata 1889: 43), Piérola creía, de manera similar a Manuel Pardo el Ejército era en principios una institución de servicio y abnegación por los derechos del Estado y de los ciudadanos, sin embargo, dado el estado de perturbación que se encontraba y el daño que producía al país, debía ser sometido a una radical reforma.

Lejos de presentar una malquerencia hacia el Ejército, Piérola consideraba que las condenas que hacían los civiles del Ejército «afecta[ba]n desdeñar al soldado» y

contribuían a su «relección». Convenía por tanto encaminar a esta institución a su verdadera misión y devolverle su prestigio perdido, «cuidando celosamente de que la moralidad, la más estricta disciplina i la instrucción, hagan de él lo que debe ser.» Postulaba necesario además de dotarlo materialmente y de asegurar los derechos pecuniarios de los militares, la necesidad de dos reformas fundamentales. La primera era el establecimiento del servicio militar obligatorio, de carácter universal. Afirmaba Piérola que la «contribución de sangre y fatigas» debía ser universal, por un criterio de justicia y conveniencia pública, pero al mismo tiempo afirmaba que el servicio militar era un instrumento de civilización eficaz para la «gran mayoría de nuestro pueblo», refiriéndose evidentemente con ello a la población indígena⁶⁶. La segunda reforma radicaba en la dación de leyes militares que garantizaran la adecuada organización y servicio del Ejército (Partido Demócrata 1889: 43-44), pues como hemos señalado anteriormente, el Ejército se normaba aún por las Ordenanzas militares de Carlos III y las leyes republicanas, que en su conjunto creaban un corpus normativo contradictorio y desfasado.

Desde el lado de los intelectuales se plantearon también propuestas específicas para la reforma del Ejército. Joaquín Capelo en su *Sociología de Lima* (1895), consideraba que una de las medidas ineludibles para mejorar el Ejército era el establecimiento de una carrera militar. Según Capelo, no existían hasta entonces criterios que permitieran la discriminación y prelación de los oficiales del Ejército. De allí que afirmara que «[t]odo el que tiene más miedo á la miseria que á la muerte, es un militar. Si es audaz y valiente, puede lograr ascensos con facilidad [...]. Toda su ciencia y moral consiste en saber morir». Al no ser los conocimientos y los valores militares los criterios de prelación en el Ejército los oficiales dependían de los vaivenes políticos para ascender. Para Capelo era necesario, pues, establecer una legislación que prescribiera el número de oficiales necesarios, en la cual se debía exigir también «ciencia» y «experiencia técnica» para ocupar los grados, restringiendo el número de los ascensos, pero al mismo tiempo otorgando a los militares mejores rentas (Capelo 1895, t. II: 124-126). Para el mejoramiento científico de los oficiales y soldados, Capelo no consideraba que la fundación de una Escuela Militar fuera conveniente debido a los altos costos que representaba y a los

⁶⁶ Como se verá en breve las mismas consideraciones serían planteadas por los oficiales del Ejército vinculados a la *Revista Militar y Naval*.

pobres resultados que había ofrecido en el pasado. Esta necesidad debía satisfacerse a través de la creación en cada cuartel de una academia para oficiales y otra para tropa, donde se estimulara a los primeros la «afición por el estudio» y en los segundos ciertas nociones de instrucción primaria (Capelo 1895, t. III: 178-179). Asimismo, Capelo consideraba ineludible la organización meditada de un Estado Mayor General y compartía con Piérola el deseo de establecer el servicio militar obligatorio, como mecanismo de conscripción militar (Ibíd.: 181-183).

Además de estas reformas puntuales, un tópico que siguió siendo discutido entre los civiles de la postguerra fue el predominio de los militares sobre el Ejecutivo. Estas consideraciones, esbozadas durante el primer gobierno de Cáceres, mostraban en algunos casos cierta timidez frente al asunto, que es explicable por el alto prestigio del que gozaba el caudillo de la Breña. Un ejemplo de ello fueron las opiniones sobre el gobierno de los militares que se vertieron en el folleto publicado por el diario *El Callao*. Allí, su autor afirmaba que aunque desde la independencia se había establecido equivocadamente la costumbre de recompensar a los militares victoriosos con las magistraturas del Estado, esta práctica debía desaparecer, pues afectaba tanto al Estado como a los propios militares. Tal tendencia, según la entendía el redactor de *El Callao*, había surgido por la necesaria concentración de poderes que ostentaron los militares durante las guerras de independencia, por su prestigio, y se había perpetuado por la debilidad de los políticos civiles (*El Callao* 1887: 19-20). El autor lanzaba una crítica velada al gobierno cacerista, recomendando que las magistraturas no debían ser recompensa de servicios militares, sino que estas debían ser otorgadas a personas con «aptitudes administrativas y para el gobierno». Los militares, como militares, no debían hacer «ejercicio de funciones extrañas á su profesión», aunque ello no desestimaba que algunos con aptitudes para el gobierno obtuvieran magistraturas en función de sus competencias y no por sus méritos militares. Terminaba con un advertencia a los militares constitucionalistas: «No malogremos, pues, á nuestros hombres de mérito empleándolos en aquello para que no se encuentran preparados. Todas las «glorias militares» dispuestas así terminan siendo «cadáveres políticos» (Ibíd.: 21-22).

Pero también se hicieron críticas directas al predominio militar en el Gobierno. En la década de 1880 plantearon frontalmente este tópico Nicolás de Piérola y

el Partido Demócrata. Durante la guerra civil entre Cáceres e Iglesias y los primeros meses del gobierno de este último, Piérola lanzó varios manifiestos en los que proponía una salida política al conflicto a través del sufragio directo de los ciudadanos. En esos manifiestos Piérola mostraba una actitud contraria a las luchas de los militares por el poder, como en su manifiesto de 1884, donde afirmaba que «[l]os jefes de armas no sólo agotan la [sic] fuentes de vida de este pueblo; le desgarraban con los horrores de una guerra intestina, después de cinco años de guerra exterior [...] sino que imposibilitan la expresión de la voluntad popular» (Partido Demócrata 1889: 6). En otro manifiesto de 1886, criticó al gobierno de Cáceres, considerándolo como una «imposición de la fuerza sobre el Perú», por la cual un “partido” (el Constitucional) gozaba de un poder «discrecional», sin la participación de los ciudadanos (Ibíd.: 20-21). No siendo los militares los destinados a gobernar el país, la solución que proponía Piérola era la participación y competencia política de partidos de ideas en las urnas y en la educación política de la ciudadanía, a cargo de estos mismo partidos.

Las críticas al predominio militar sobre el gobierno se hicieron más explícitas en la década siguiente, a propósito de la continuidad de los jefes militares en el poder después del primer gobierno de Cáceres. El gobierno de Remigio Morales Bermúdez fue percibido y de hecho fue una continuidad del gobierno del general breñero y, mientras que las posibilidades de alternancia entre los círculos políticos civiles y los militares se hacían menos probables, la crítica al gobierno de los militares se hacía más evidente. Así, en 1892, después del retorno del general Cáceres al Perú con intenciones de participar en las elecciones de 1894, el discurso que pronunció Manuel Candamo en el Teatro Politeama clamaba por la obediencia de los militares al Estado y la abstención de estos de participar en la vida política del país:

La fuerza armada debe obedecer y no mandar; no es poder deliberante sino poder de ejecución; si se hace poder político peligran las instituciones; si se convierte en poder electoral, se establece la oligarquía militar; el supremo mando no puede llegar a ser el más alto grado de la carrera, un premio al valor del soldado, el botín del afortunado triunfador. Esto es lo que el país no quiere.⁶⁷

⁶⁷Discurso de Manuel Candamo el 24 de noviembre de 1892, en el Teatro Politeama en una reunión de la Unión Cívica, después del regreso de Cáceres, citado en (Miro Quesada 1961: 216)

Un año después, en un artículo del diario de *La Nación* se denunciaba la subordinación del Ejército al proyecto de relección de Cáceres. Altos oficiales en servicio activo habían concurrido al cumpleaños del general Cáceres, en donde se hicieron vivas a la candidatura y presentaron apoyos a la candidatura de este general:

Basta leer la lista de los concurrentes y los brindis pronunciados al calor del afecto partidista para saber que ha sido el Ejército en servicio activo, y las fuerzas de Policía y la Guardia Nacional, por medio de sus jefes y oficiales en uniforme de gala, los elementos representados allí y que esa fiesta fue únicamente política. Y en esto estriba la gravedad del suceso.⁶⁸

Luego de la sorpresiva muerte de Morales Bermúdez, el golpe de Estado promovido por el segundo Vicepresidente Justiniano Borgoño y el retorno ilegítimo de Cáceres a la Presidencia en 1894, las alianzas con los círculos políticos civiles que habían apoyado a los gobiernos del Segundo Militarismo terminaron coincidiendo en la necesidad de recurrir a la revolución para remover a Cáceres del gobierno y a los militares que lo sostenían. Para 1895, la imagen de los militares, como grupo social, se encontraba seriamente deteriorada, pues la Presidencia del antiguo general de las breñas para sostenerse recurrió una serie creciente de duras medidas que, terminaron por granjearle el desafecto de la población, la cual liderada por los partidos civiles se lanzaron exitosamente en contra de un gobierno que fue considerada como parte de la familia del militarismo. La rendición de Cáceres y la disolución de su Ejército luego de su derrota abrieron un nuevo espacio para el discurso crítico sobre los militares que se expresará durante la totalidad del gobierno del *Califa*.

2.2. La mirada de los militares sobre el Ejército y sus reformas durante el Segundo Militarismo

Como queda dicho, la Guerra del Pacífico fue uno de los acontecimientos de más hondas consecuencias en la historia del Perú republicano. Una penosa guerra, seguida por una guerra civil, dejó al país en una situación de postración similar al

⁶⁸*La Nación*. Lima, 10 de noviembre de 1893, citado en (Miro Quesada 1961: 225).

Perú de los años inmediatos a la Independencia. Sin embargo, en esta ocasión, el final de los enfrentamientos no se coronó con la victoria y una situación de abatimiento general se apoderó del país. Ante la perplejidad de la derrota y la debilidad de los desprestigiados y divididos políticos civiles, los jefes militares de la campaña de la Resistencia de la Breña se convirtieron en los únicos agentes capaces de ejercer el poder en el Perú, pues contaban con elementos necesarios de obtener obediencia de la población: la fuerza y el prestigio.

Una vez que se asentó el gobierno constitucional del general Cáceres y que se iniciaron las difíciles tareas de reconstrucción nacional, las preguntas sobre las causas de la derrota se hicieron insoslayables. Las respuestas que se dieron identificaron a los presuntos responsables, entre los que figuraba la clase política del país, en especial, la plutocracia organizada a través del Partido Civil, y, fundamentalmente, a la *casta militar*. Con respecto al Partido Civil, no pasó desapercibido para la opinión pública la política antimilitarista por la que Manuel Pardo había reducido los contingentes del Ejército y su presupuesto, su política de defensa nacional basada en la firma de tratados internacionales defensivos que había arrastrado al país a la guerra y, sobre todo, la frustración de la compra de dos barcos acorazados que hubiera permitido equilibrar el poder bélico del Perú frente al de Chile.

Por su parte, la responsabilidad que pesaba sobre los militares en el descalabro de la guerra era grande, pues, en primer lugar, se les imputaba haber conducido erráticamente al país por más de cincuenta años, período en el que habían encabezado incontables golpes militares y revoluciones, impidiendo con ello el desarrollo institucional y económico de la República y, sobre todo, la integración social del país. Sin embargo, el cargo más importante que se les imputaba respondía a su patético desempeño militar durante la guerra. Así pues, se recordaba con excepcional amargura que el Ejército peruano había sido incapaz de hacer valer el honor nacional frente a la invasión chilena, habiendo sido constantemente derrotado en el campo de batalla. Estos lapidarios cargos trascendían las acusaciones contra oficiales específicos y atacaban al Ejército, como la fuente de uno de los mayores males de la República: el *militarismo*.

Ante tales acusaciones, la primera reacción de los militares fue la búsqueda consciente de fortalecer la identidad corporativa de los profesionales de las armas. Un paso fundamental para ello fue la fundación del Centro Militar y la publicación de la *Revista Militar y Naval*, pero además los militares buscaron hacer un mea culpa sobre su papel en el desastre de la guerra y reflexionaron constantemente acerca de las deficiencias que imposibilitaban convertir a la institución castrense en una fuerza militar que garantizase la defensa externa y mantuviese el orden interno. Así, en las páginas de la *Revista Militar y Naval* se publicaron numerosos artículos en los que se estudiaban los defectos del Ejército, al mismo tiempo que se proponían medidas para la “regeneración” a la institución. Dado que la mencionada revista en el período de la postguerra se convirtió en la publicación representativa de las instituciones armadas del país, será tomada como la fuente documental que sintetiza el pensamiento o mirada de los militares con respecto a su profesión.

2.2.1. Las reformas militares durante la Reconstrucción Nacional y el fortalecimiento de la identidad corporativa del Ejército

1885 fue un año decisivo para el Perú. El legendario general de La Breña, Andrés Avelino Cáceres, al mando de sus montoneras tomó la capital y derrocó al entonces presidente provisional, Miguel Iglesias. Ese año, apoyado por el Partido Constitucional, Cáceres fue elegido como presidente constitucional. Dado que dicho partido, formado fundamentalmente por los camaradas de La Breña, no contaba con una legitimidad republicana que sostuviese suficientemente su régimen, ni con cuadros de estadistas experimentados, Cáceres se vio en la necesidad de forjar una alianza con algunos connotados miembros del debilitado Partido Civil (Mc Evoy 1997: 257). Una vez en el poder, una de las tareas prioritarias fue reorganizar el aparato administrativo y coercitivo del Estado. La guerra no sólo había traído consigo la postración económica del país, sino también la exacerbación de los conflictos sociales y políticos en varias regiones del territorio nacional que ya se venían manifestando en las etapas finales del conflicto. Así, rebeliones en regiones como el Callejón de Huaylas y algunas zonas del valle del Mantaro, evidenciaron el descontento de los sectores indígenas contra el abuso de los “mistis” y las exacciones del Estado, especialmente en un contexto de depresión de las economías campesinas

producto de la guerra (Manrique 1988: 55-70, Taylor 1990: 215-245, Turner 2007: 130-153). En ese contexto, resultaba obvio para el gobierno que las labores de reconstrucción sólo podían realizarse en un clima de paz social y de acatamiento de la autoridad. En ese sentido, se hacía indispensable reconstruir el aparato público de ejercicio de la violencia, es decir, el Ejército, pues, sobre los contingentes montoneros que habían llevado a Cáceres al poder, era imposible constituir una fuerza que subordinara a otros poderes que intentaran rivalizar al nuevo régimen. Asimismo, el temor de una posible nueva agresión externa en el estado de debilidad que se encontraba el país, jugó también un importante papel en la búsqueda de reconstituir el Ejército.

Por tales motivos, el general de La Breña tuvo un especial interés en apoyar el rápido restablecimiento de las Fuerzas Armadas. Así, el 23 de julio de 1886, el gobierno aprobó un decreto por el cual se organizó un nuevo ejército permanente de 3,500 plazas, aunque un año después tuvo que reducir su número de efectivos a 2,951 por motivos presupuestarios. Para la renovación del personal militar, se dictó la Ley de regularización del servicio militar, con el objetivo, siempre fallido, de abolir la conscripción compulsiva o reclutamiento, disponiéndose el sorteo como mecanismo de selección de efectivos para el servicio militar. Una vez que se verificaba el sorteo en la capital de cada Departamento del país, los aspirantes eran enviados a la Escuela de Clases⁶⁹ de Lima, donde recibían lecciones de táctica e instrucción primaria, y luego pasaban a los cuerpos de tropa para complementar su instrucción. Por otra parte, para complementar las fuerzas permanentes, la ley del 15 de octubre de 1887 estableció la reorganización de la Guardia Nacional, con la finalidad de formar contingentes civiles militarizados que en el caso de emergencia pasarían al servicio activo del Ejército. No obstante ello, la Guardia Nacional institucionalmente se mantuvo separada de la institución castrense (Hidalgo et ál. 2005: 325).

Para mejorar la administración del Ejército, el gobierno creó la Comisión Consultiva de Guerra, órgano encargado para intervenir en los asuntos importantes de la institución; la Junta Permanente, integrada por todos los jefes con mando de tropas, para proponer medidas de mejoramiento militar; y, la Junta Calificadora para

⁶⁹ En los años 1888 y 1889, se reabrió la Escuela de Clases y la Escuela Militar, instituciones de formación de técnicos y oficiales del Ejército que habían venido funcionando con cierta regularidad hasta el estallido de la Guerra del Pacífico.

la evaluación y nombramiento de jefes de la jerarquía castrense (Hidalgo et ál. 2005:324). Asimismo, el gobierno impulsó la renovación de las viejas Ordenanzas Generales del Ejército con la finalidad de «normar y fortalecer el régimen, disciplina y moralidad» dentro de la institución castrense. Como se verá, la renovación de la legislación orgánica del Ejército era uno de los principales reclamos de los militares para la reforma de la institución, pues, para ese entonces, se encontraban aún en vigencia las antiguas ordenanzas coloniales y un sinnúmero de leyes modificatorias republicanas que constituían un corpus legal contradictorio y asistemático que entorpecía el funcionamiento de los cuerpos militares. La redacción de las nuevas ordenanzas fue encargada a la Junta Permanente. Finalmente, el gobierno de Cáceres envió varias comisiones militares al extranjero para enterarse de los avances tecnológicos de las armas de guerra, del desarrollo de la estrategia y la táctica, y otros temas referentes a la carrera militar que se estaban desarrollando en Europa y en los Estados Unidos (Ibíd.: 327).

En este contexto de reorganización del Ejército, se fundó bajo los auspicios gubernamentales el Centro Militar del Perú (1887). Dicha institución se convirtió rápidamente en un importante y activo círculo que agrupó a la oficialidad del Ejército y la Marina, con fines de esparcimiento, ilustración, defensa corporativa y fraternidad. Los oficiales miembros, motivados por el espíritu asociativo que surgió a finales del siglo XIX, esperaban que el Centro Militar facilitara el adelanto de las Fuerzas Armadas, el mismo que redundaría en el desarrollo del país. La creación de la nueva asociación fue celebrada por sus miembros en el prospecto de la *Revista Militar y Naval*, publicación impresa de carácter quincenal que se convertiría en la voz del Centro Militar:

A todas las profesiones había llegado el espíritu de asociación que viene desarrollándose de una manera sensible en la República, menos á la militar. Fuera que no se creyese necesaria la existencia de una Sociedad que se fundara entre otros objetos, con el deseo de estrechar los vínculos, que unen de una manera natural á los que pertenecen á esta carrera [...]. Hoy existe pues, y su existencia parece asegurada por el número relativamente crecido de los Socios activos y correspondientes con que cuenta y por la protección que han de

dispensarle los Gobierno, bajo cuyo amparo se fundan y subsisten esta clase de asociaciones en todas las naciones del mundo.⁷⁰

En los años que siguieron a su fundación durante el Segundo Militarismo, el Centro Militar y Naval del Perú tuvo una activa vida institucional, organizando charlas entre sus miembros, realizando conferencias especializadas sobre temas militares, ofreciendo ceremonias y homenajes en fechas importantes que vinculaban a sus miembros a una memoria militar y publicando sus actividades y artículos sobre temas castrenses en su revista. Pero además de ello, el Centro Militar a través de aquella publicación se convirtió en el portavoz de las instituciones castrenses en el espacio público, articulando un discurso corporativo que recogía los intereses y propuestas de los militares con respecto a sus instituciones y con respecto al país. En ese sentido, el Centro Militar se convirtió en el interlocutor representativo de los estamentos militares frente a las dirigencias civiles, tanto para con los debates conducentes a la formulación de políticas en materia militar. Pero también como portavoz e interlocutor, el Centro Militar tuvo que responder a los serios cargos y responsabilidades que las dirigencias políticas e intelectuales civiles interponían a las instituciones castrenses, especialmente el Ejército, frente a los bochornosos resultados militares durante la Guerra del Pacífico, en donde los jefes militares a pesar de su experiencia en cientos de combates fratricidas, no pudieron otorgar al Perú la victoria; y otros cargos no menos graves que responsabilizaban a los militares de las casi seis décadas de golpes de Estado y revoluciones políticas que habían devastado al país y empobrecido sus arcas, en virtud de las ambiciones de sus todopoderosos caudillos.

Ante estos argumentos, el Centro Militar, a través de sus editoriales y artículos en la *Revista Militar y Naval*, desarrolló un discurso que desde el punto de vista militar explicaba las causas del debilitamiento del país durante las primeras décadas independientes y los factores que determinaron su derrota en la guerra. Resultaba claro que no podían eludir sus responsabilidades ante los elocuentes resultados de la

⁷⁰*Revista Militar y Naval* (en adelante: *RMN*), Año I, N° 1. Lima, 1° de Abril de 1888, p. 1. Un año después la *RMN* seguía fomentando el estrechamiento de vínculos entre los militares a través del Centro Militar: «El cuerpo militar, por si mismo aislado de los civiles, por razón de sus ocupaciones, y las exigencias del servicio, necesita asociarse, departir y dar párbulo á esa tendencia natural del hombre, esencialmente sociable, siempre atraído al círculo de sus semejantes» (*RMN*, Año II, N° 29. Lima, 15 de Mayo de 1889, p. 652).

derrota. Así pues, los militares aceptaban los cargos de haber participado en las revoluciones que asolaban al país continuamente, pero al mismo tiempo respondían que quienes las habían perpetrado eran jefes y oficiales individuales que, sucumbiendo a su ambición, habían atentado contra el régimen constitucional al que estaban llamados a defender. Estos malos elementos que participaban en la política habían dividido al Ejército y a través de las luchas en su seno, desprestigiado la carrera de las armas y a la misma institución militar:

Si los jefes y oficiales del ejército hubieran estado unidos, como debían estarlo siempre, y comprendiendo sus deberes para con la patria, el régimen legal de la República y los del honor militar, así como en sus propios intereses, no se hubiera dividido tan inconsultamente, prestándose á servir á la evolución y combatir a sus compañeros de armas, y esto para derrocar a un régimen legal, fuera hoy muy distinta la suerte que cupiera á los militares de profesión. Esas revoluciones no habrían triunfado; el régimen constitucional habríase afianzado en la República, y con su afianzamiento el respeto por la instituciones patrias, el prestigio, crédito y poder de la Nación y el imperio de la paz con todos los progresos y adelantos consiguientes en ella, y el ejército estaría hoy en posesión y rodeado de todas las consideraciones, los respetos y preminencias á que fuera acreedor como sustentáculo del orden, de la paz y las garantías.⁷¹

Sin embargo, la mayor responsabilidad de la situación calamitosa del país recaía en las dirigencias civiles del país. Según estos militares, el político civil desde inicios de la vida republicana atentó contra la institución militar «seduciendo» y «halagando» a los Jefes y oficiales para que apoyasen sus designios revolucionarios y se alzaran contra sus compañeros de armas que defendían los regímenes legales.⁷² La perfidia de estos «demagogos», de estos «politiqueros de pacotilla», los llevó a traicionar a los militares que les habían llevado al poder, relegándolos una vez que veían cumplidas sus aspiraciones.⁷³ Así también, los políticos civiles eran responsables de la actual situación del país, ya que a ellos les cupieron las tareas de administrar los ramos de hacienda, diseñar las instituciones patrias, legislar para el progreso del país

⁷¹ *RMN*, Año II, N° 5. Lima, 1° demarzo, 1 de 1889, p. 531.

⁷² Para los oficiales de la *RMN*, el « verdadero militar, penetrado de su nobilísima misión, debe tener el orgullo de su carrera, y mostrarse uraño, esquivo, desconfiado é inasequible ante este elemento antagónico que le es contrario [el civil], y el cual ha de tratar de buscar su cooperación.» *RMN*, Año II, N° 25. Lima, 15 de marzo de 1889, p. 553.

⁷³ Cfr. *RMN*, *Ibíd.*, pp. 532-533.

y fomentar la ilustración de los conciudadanos. Lejos de ver cumplidas eficientemente tales obligaciones, los «estadistas» civiles derrocharon el dinero, crearon instituciones ineficaces, legislaron sin tener concepto de la realidad y fracasaron en propagar la ilustración del pueblo.⁷⁴ Es más, según los militares, los estrepitosos resultados de la Guerra del Pacífico debían imputarse sobre todo a las dirigencias civiles, pues suya fue la responsabilidad de mala dirección de la política diplomática que arrastró al Perú a la guerra (con la firma del Tratado de mutua defensa con Bolivia), suya fue la decisión de reducir el presupuesto militar durante el gobierno de Manuel Pardo (que disminuyó el número de efectivos del Ejército y evitó el remozamiento de la escuadra nacional), suya fue la incapacidad de llegar a niveles de consenso político que permitieran unir a la población en contra el invasor, etc.:

¿Y podrá decírsenos por lo que atribuyen los descalabros sufridos en la malhadada guerra que nos ocupa tan solo al ejército, á los militares exclusivamente, si era de incumbencia de ellos [los políticos] dirigir la cancillería diplomática, normalizar el régimen de la administración, prever la guerra, acopiar los elementos bélicos que debían emplearse, conservar el crédito fiduciario en el exterior, levantar el espíritu de los pueblos, reconciliar á los partidos, llamándolos en torno al pabellón nacional; alistar é incrementar la marina de guerra, dar conveniente organización al ejército, y mantener el *lustre* y *vigor* de la carrera militar?⁷⁵

Además, cabía imputárseles no sólo la desnaturalización y desmilitarización del Ejército, sino también la desacertada conducción de la guerra:

[N]o se supo hacer uso del ejército, ni de constituirlo debidamente, dándole carácter, solidez y consistencia, y lejos de esto, se le desvirtuó y degeneró por completo, se le *desmilitarizó* y se le condujo mal, en una palabra, se jugó á la guerra, sin regla ni conocimientos y observancia de los preceptos y medios de hacerla [...]⁷⁶

⁷⁴ Cfr. *RMN*. Año II, N° 26. Lima, 1° de Mayo de 1889, p. 629.

⁷⁵ *RMN*. Año I, N° 1. Lima, 15 de Agosto de 1888, p. 226.

⁷⁶ *Ibíd.*, p. 228.

Esta disposición contra los políticos era bastante extendida en los ámbitos militares después de la Guerra del Pacífico. El mismo Presidente Miguel Iglesias, al asumir el gobierno en 1883, lanzó la siguiente proclama: «Los bandos políticos han perdido al Perú. Agrupaciones intransigentes y personalísimas, sin principios ni propósitos, nada les pido, nada les acepto.»⁷⁷ Este *desprecio hacia los políticos*⁷⁸ no sólo se presentaba como una forma de descargo frente a los acontecimientos de la guerra, sino también como una forma de desvincular lo militar y lo político, por lo menos en el discurso. Así, pues, cuando los militares recordaban el desafortunado papel de los políticos en la precedente historia republicana, olvidan premeditadamente advertir que la inmensa mayoría de los políticos que asumieron el control del país durante esta etapa provenían de los cuarteles militares. Aún más, su argumento resultaba tanto más falaz si se consideraba que estos militares no sólo no tuvieron una posición subordinada a unas dirigencias civiles que los «utilizaban», sino más bien, en muchos casos, los militares las reemplazaron, ocupando los cargos de presidentes, ministros, prefectos, gobernadores, etc., como los notables casos de Agustín Gamarra, Ramón Castilla o Mariano Ignacio Prado.

Pero ¿qué buscaban los militares al disociarse de lo político, minimizando u olvidando su papel en la historia política del país? No era otra cosa que reafirmar una identidad corporativa militar en contraposición a los políticos civiles y a su manifestación pública, la política. Por lo menos para la oficialidad *más profesional* del Ejército de la Postguerra, la derrota había traído no sólo el debilitamiento material de las instituciones castrenses, sino también había mostrado los enormes perjuicios que llevaba consigo el mantener una institución que, al vincularse en los conflictos políticos, dividía a sus miembros y al mismo tiempo los separaba de sus verdaderas funciones destinadas al aprendizaje y práctica de la aplicación metódica de la fuerza para la defensa del orden y la integridad del Estado. En ese sentido, la construcción de una identidad corporativa, donde los intereses de las instituciones castrenses encontrasen firmemente representados, resultaba una tarea prioritaria. El mismo Centro Militar del Perú era una muestra de ese deseo consciente de construir esa identidad corporativa militar, pues en su interior alternaban los oficiales de las

⁷⁷ Proclama de Miguel Iglesias al asumir el gobierno. Citado en José Clavero, *Revelaciones Históricas* (Lima, 1893), citado en Mc Evoy 1997: 296.

⁷⁸ Esta animadversión de los oficiales militares frente a los políticos civiles después de la Guerra del Pacífico ya había sido apuntado por el historiador Víctor Villanueva (1971: 42-43).

armas nacionales, se reunían para discutir temas relacionados a sus instituciones y compartir, a través del trato frecuente, experiencias comunes y la defensa de sus intereses corporativos. Esta búsqueda de reforzamiento de la identidad militar se alentaba activamente desde la *Revista Militar y Naval* a través de sus editoriales titulados *Eco del Ejército* o a través de artículos enviados por militares ansiosos por modificar la imagen y la situación del Ejército de la postguerra. Veamos un fragmento de los editoriales de dicha publicación:

[D]ebe estar [el ejército]constantemente unido, compacto, sólido, homogéneo, teniendo por divisa el mantenimiento del régimen legal en la República, el interés de la carrera y la confraternidad y uniformidad de opiniones entre los individuos de una misma profesión, para hacer frente así á la acción de los traficantes en política y á los tiros asestados contra la institución [...] sólo el militar estima y comprende al militar, y aprecia su méritos y sacrificios, y está dispuesto á hacerle justicia [...]⁷⁹

Asimismo, el fortalecimiento de la identidad corporativa militar facilitaría enormemente la defensa de los intereses comunes de los profesionales de las armas. Es por ello que desde fines de 1888 hasta mediados de 1889, período en el que se discutía en las salas legislativas en torno al presupuesto que debía asignarse a las Fuerzas Armadas, la *Revista Militar y Naval* emprendió una fuerte campaña de solidificación del cuerpo militar: «ya comprenderán los militares, si conocen sus intereses, de lo que se trata, y estrechar más y más, si cabe, los vínculos que los unen, amenazados como están sus goces, en sus fueros, en todos sus derechos, hasta en su entidad moral, autonómica y social.»⁸⁰

Es preciso señalar que para afirmar esta identidad corporativa y remozar el alicaído prestigio del Ejército, los militares tuvieron que recurrir al discurso de patriotismo castrense presentando una imagen benigna, patriótica y abnegada de la carrera de las armas, imagen que permitiera crear vínculos de identidad entre sus miembros y para con su institución. Así, se describió constantemente la vida del soldado como una de las más abnegadas, dignas y patrióticas a los que están llamados los ciudadanos, sometida a múltiples sacrificios, peligros y privaciones

⁷⁹RMN. Año II, N° 24. Lima, 1° de Marzo de 1889, p. 532.

⁸⁰RMN. Año II, N° 29.Lima, 15 de Mayo de 1889, p. 655.

enfavor de la desinteresada tarea de defender el país. Los redactores de la revista en varias ocasiones recordaron que los soldados peruanos lucharon contra las fuerzas chilenas con denuedo, a pesar de la adversidad, incluso sin armamento, y sufriendo las mayores privaciones; recordaron también que, concluida la guerra, habían sido los militares quienes restablecieron el régimen constitucional y devolvieron al Estado su perdida autonomía. Asimismo, describieron al Ejército como la institución que, debido a sus valores y prácticas intrínsecas, había resistido el sentimiento de general abatimiento posterior a la guerra y que por ello mismo estaba llamada a constituirse en la institución tutelar del Estado sobre la cual debía afianzarse el proceso de reconstrucción nacional:

El ejército, debido a su propia estructura, á la severidad de sus reglas, á la índole de la profesión de las armas [...], á la nobleza de la carrera, y á las virtudes inherentes á ella; es la institución, que puede decirse, ha resistido al general abatimiento y manteniéndose firme, conservando su unidad, todo su carácter y demás condiciones, sin degenerar en el grado que las demás carreras é instituciones [...] hoy, aprovechando de la paz que ha procurado á la Nación [...], constituyendo el apoyo más firme y el eje sobre el cual tiene que girar todo el movimiento regenerador y morigeratriz que los hombres de Estado competentes, patriotas y bien intencionados [...] están llamados á imprimir á su política y á la marcha de las instituciones [...]. Así deben comprenderlo los militares, y estar orgullosos de la misión que tienen que llenar. El ejército es, pues, por excelencia, la institución de orden, paz, de apoyo y de defensa del honor nacional. La fuerza tiene que hacerlo todo.⁸¹

Finalmente, esta renovada identidad corporativa debía responder a un nuevo perfil de la carrera de las armas. Concordaban los redactores de la Revista Militar y Naval que la existencia del Estado debía estar «asegurada», «garantida» y «afianzada» y «firmemente constituida» por la *fuerza*, encarnada en las instituciones militares, pues era la única forma conocida por las naciones modernas para mantener la libertad de sus ciudadanos y garantizar la independencia y autonomía de los Estados.⁸² Sin embargo, esta fuerza no podía ser una «fuerza ciega» o «brutal», sino debía ser una

⁸¹ *RMN*. Año II, N° 26. Lima, 1° de abril de 1889, pp. 578-579.

⁸² Cfr. *RMN*. Año II, N° 23. Lima, 15 de Febrero de 1889, p. 506.

fuerza «inteligente, sujeta ala gerarquía y disciplina»⁸³, por tanto las fuerzas militares deben estar sistematizadas, ser sólidas y «susceptible[s] de mayor y más rápido desarrollo, para hacer frente, oportuna y enérgicamente, á toda emergencia que pusiera en peligro su nacionalidad, ó conculcara sus derechos».⁸⁴ Las lecciones de la guerra persuadieron a estos militares que debía también reformarse el perfil del soldado, se debía profesionalizarlo, instruirlo en las nuevas técnicas bélicas, sobre todo en un período en el que la «Guerra» había alcanzado el status de ciencia: «Por esto es que la carrera de las armas tiene que ser profesional y especialísima y de carácter permanente, y, siéndolo, tiene derecho a ser mirada con consideración y respeto».⁸⁵ Sin embargo, para cumplir tales fines en el Ejército debían realizarse grandes reformas, tarea en la que buscaron colaborar los redactores de la *Revista Militar y Naval*, como se verá a continuación.

2.2.2. Propuestas de los militares para reforma del Ejército después de la Guerra del Pacífico

La derrota ante el bien organizado y aprovisionado ejército chileno, motivó que los militares consideraran con sumo cuidado los aspectos negativos que se habían estado gestando en las instituciones castrenses durante las primeras décadas de la vida republicana. Como se ha visto, dos de las principales taras de los militares eran su activo papel en la política interna y la falta de una identidad corporativa sólida, dirigida al mejoramiento técnico de sus labores y a la consecución de sus intereses corporativos. Sin embargo, los militares también desarrollaron propuestas más específicas para la reforma total del Ejército, con la finalidad de convertirlo en una fuerza sistemática y racional, con capacidad para ejercer la defensa y la coerción ante situaciones de necesidad que atentaran contra los intereses del Estado. Según sus diagnósticos, la organización del Ejército debía cambiar radicalmente en los métodos y contenidos de formación de los efectivos militares, en los procedimientos y criterios de selección de los jefes del escalafón de oficiales, en la forma de organización de la población civil para la defensa y en los métodos e instituciones para la administración de justicia al interior de los cuerpos de armas. Asimismo, los

⁸³RMN. Año I, N° 10. Lima, 28 de julio de 1888, p. 202.

⁸⁴RMN. Año II, N° 23, Lima, 15 de febrero 15 de 1889, p. 506.

⁸⁵RMN. Año I, N° 9. Lima, 18 de julio de 1888, p.186.

militares fueron conscientes que estas reformas resultarían inútiles sin una modificación de la legislación orgánica del Ejército y sin un presupuesto adecuado para la ejecución de las reformas y el funcionamiento de las nuevas instituciones que debían crearse. Veamos detalladamente cada uno de estos tópicos.

2.2.2.1. Formación de la carrera de las armas

La piedra angular para la reforma radical del Ejército era la creación de instituciones de formación profesional-científica para hombres de armas. Los oficiales *reformistas* estaban convencidos que la restauración del poderío y prestigio del Ejército peruano pasaba por la creación de centros de formación militar que concibieran la guerra de una manera científica: «La verdadera regeneración y reforma de nuestro Ejército depende de la creación de planteles bien constituidos, donde pudiera recibir perfecta educación militar, técnica y profesional, la juventud dedicada a la novilísima carrera de las armas» (MGM 1890: I).

La derrota en la Guerra del Pacífico había demostrado a los oficiales peruanos los inconvenientes de una oficialidad poco o nada profesionalizada y de un ejército improvisado. Por tanto, resultaba indispensable desterrar la formación empírica y rutinaria en los cuarteles y sustituirla por una metódica y sistemática instrucción en planteles de formación militar. Estos reclamos resultaban pertinentes, pues coincidían con un cambio mundial en la forma de hacer y prepararse para la guerra. Desde la derrota en el año 1871 de los ejércitos franceses, compuestos por masivos contingentes de soldados, a manos del profesionalizado ejército prusiano, dirigido por oficiales formados en escuelas científico-militares, en Europa se empezaron a crear diversos institutos de formación especializada para los profesionales de las armas. Esto respondía a un cambio en la concepción de la carrera de las armas que se estaba operando en Europa desde mediados de siglo XIX y que se había desarrollado tempranamente en Prusia. Poco a poco se estaba abandonando idea de concebir la guerra como un *arte*, en donde el *genio* innato y el valor de los oficiales era la pieza fundamental de la victoria, reemplazándola por la idea de concebir a esta actividad como una *ciencia*, sobre todo en un período de alta especialización tecnológica y de acelerados desarrollos en la industria bélica (Huntington 1995: 41-43).

Los oficiales peruanos de la postguerra eran conscientes de este cambio y estaban dispuestos a aceptarlo como un modo de reivindicar al Ejército: «La estimación al ejército y la cesación de toda hostilidad y adversa propaganda de que es objeto, por parte de la demagogia y los espíritus frívolos y prevenidos; depende de la altura á que se coloque la institución, por medio de los conocimientos y la ilustración.».⁸⁶ Eran también conscientes que el «arte militar, elevado a ciencia», implicaba la adquisición de conocimientos especializados y años de esmerada práctica en el manejo de las armas, la aplicación de la táctica y destreza y exactitud en los procedimientos de la guerra.⁸⁷ Asimismo consideraban que los criterios de selección y estimación, basados en el *valor* del oficial eran insuficientes para afrontar los cambios que se estaban produciendo en el mundo de la guerra.

Por tales motivos, en la Revista Militar y Naval se hicieron muchos llamados a constituir nuevas instituciones de formación científico-profesional militar e incluso se hicieron importantes propuestas a este respecto; no obstante, una de las más completas fue la que expuso el oficial Enrique Carrera en su artículo *Escuelas militares*. Carrera propuso un complejo sistema de formación profesional militar que tenía como objetivo formar una oficialidad nueva instruida en la nueva ciencia militar y perfeccionar y terminar la instrucción de los oficiales que deban cumplir cargos militares. Siguiendo los modelos europeos, el sistema contaba con tres niveles de instrucción consecutivos: la Escuela de Cadetes, la Escuela de Guerra y la Escuela de Aplicación.

La Escuela de Cadetes era el nivel básico de formación; a ella debían ingresar alumnos de todos los departamentos del país, subvencionados por los respectivos Consejo Departamentales. El tiempo de formación en la escuela debía ser de cinco años, y en los primeros se debían instruir a los alumnos en ejercicios corporales como natación, gimnasia, esgrima y equitación. En los años superiores se debía enseñar, además que ciencias generales como química y física, las primeras lecciones de táctica, lecciones técnicas y prácticas sobre el uso de armas de guerra, estudios de fortificación, lecciones de arte de conducción y política de guerra, a lo que debía

⁸⁶ *RMN*. Año II, N° 42. Lima, 1° de diciembre de 1889, p. 962.

⁸⁷ Cfr. *RMN*. Año I, N° 9. Lima, 15 de Julio de 1888, p. 185.

añadirse, conocimientos de administración de ejércitos. Por su parte, la Escuela de Guerra debía constituirse en una institución de formación estrictamente militar. A ella podían ingresar los egresados de la Escuela de Cadetes y los oficiales activos que tuvieran una deficiente formación profesional. Para los primeros, los estudios serían de un año y tendrían un carácter eminentemente práctico. Para los segundos, la formación constaría de dos años, recibiendo durante el primero un curso que compendiará las materias tratadas en la Escuela de Cadetes, mientras que en el segundo se impartiría cursos de táctica, fortificación, arte del mando superior, estrategia e historia militar y política de guerra. Finalmente, la Escuela de Aplicación debía constituirse en un instituto superior que, como las universidades alemanas, debía ser el pináculo de la formación profesional, pues debía impartirse en ella cursos especializados. A dicho centro podían ingresar los egresados de la Escuela de Cadetes y los oficiales del Ejército que contaran con conocimientos y años de servicio y práctica en el empleo militar.⁸⁸

2.2.2.2. Ingreso y ascensos en la carrera militar

Una de las principales críticas que se le hacía al Ejército era la falta de preparación y capacidades militares de muchos de sus oficiales. Los propios hombres de armas estaba prevenidos de esta debilidad al punto de reconocerla públicamente: «No podremos negar que una gran parte de los militares de que consta el Escalafón se nota ciertamente falta de ilustración y aun de los conocimientos militares exigibles á las respectivas clases»⁸⁹, aunque, al mismo tiempo, se apresuraban en afirmar que también existía una parte no escasa de oficiales ilustrados y con un amplio conocimiento de su profesión. Dejando de lado esto último, los militares tomaban en serio esta deficiencia. En sus diagnósticos, la causa fundamental del ingreso a la carrera militar de elementos con escasa preparación fueron los continuos disturbios internos a los que se vio sometida la República, promovidos estos por «demagogos» y «traficantes en política». Asimismo, consideraban que en el cuerpo de oficiales jamás se había producido una buena reforma, pues estos políticos «en vez de depurar ese personal exótico, escojiendo lo que de él fuera útil y honorable, y eliminando, de

⁸⁸ Cfr. *RMN*. Año IV, N° 77. Lima, 15 de Mayo de 1891, pp. 1826-1829.

⁸⁹ *RMN*. Año I, N° 9. Lima, 15 de Julio de 1888, p. 186.

manera enérgica y resuelta, lo desecho, lo inadecuado, se le ha dejado en servicio, y aún tolerado sus desmanes y su indisciplina.».⁹⁰ Por el contrario, siempre contribuían a empeorar las condiciones del escalafón de oficiales, pues, cada revolución que ponía un nuevo gobernante en la Presidencia cambiaba a los oficiales competentes desafectos al régimen entre los cuales se encontraban muchos graduados de las escuelas y colegios militares creados en el país.⁹¹

Ante la situación de falta de preparación de los oficiales, los militares de la Revista Militar y Naval proponían, como hemos visto, el establecimiento de escuelas de formación científico-profesional, no sólo para los cadetes que aspiraban a ser futuros oficiales, sino también para los jefes militares en servicio que carecieran de formación militar adecuada. Con respecto a la formación del Escalafón de los cuerpos del Ejército, la *Revista Militar y Naval* solicitaba que los ascensos del personal militar se confirieran a través de concursos, con reglamentos claros, en los que debía establecerse criterios meritocráticos como aptitudes y suficiencia militar comprobadas y tiempo de servicios consecutivos. Además, proponían que la convocatoria y nombramiento de los ascensos debían hacerse exclusivamente con el fin de cubrir las plazas vacantes.⁹²

2.2.2.3. Organización del Ejército

La Guerra del 79 había demostrado a los militares que la organización improvisada de un Ejército sobre la base de una apresurada conscripción, había sido una de las causas de la derrota peruana en las Batallas de San Juan y Miraflores. Por tanto, urgía otorgar a las fuerzas del Ejército una organización que le permitiera atender la defensa del país en los momentos de emergencia nacional. No está demás decir que la formación de un Ejército numeroso era un imposible en una nación empobrecida como el Perú, de allí que la nueva organización del Ejército debía cumplir los requisitos de economía y aprestamiento.

⁹⁰ *RMN*. Año I, N° 10. Lima, 1° de Agosto de 1888, p. 209.

⁹¹ *Ibíd.*, p. 201.

⁹² Cfr. *RMN*. Año II, N° 36. Lima, 1° de Setiembre de 1889, p. 810.

Considerando ello, los redactores de la *Revista Militar y Naval* propusieron la formación de un Ejército más ó menos numeroso, el cual, dividido en unidades tácticas y cuerpos de armas, debía contar con la posibilidad de expandirse en momentos de necesidad. La base de las Fuerzas Armadas debía ser un ejército de *precisión*, el cual estaría compuesto por personal formado en instituciones castrenses o «de escuela» y debía mantenerse siempre como fuerzas permanentes. Sobre esta «base fundamental» el ejército podría incrementar rápida y eficientemente su número con el concurso de ciudadanos enrolados, pues, cuando el caso lo ameritara, los cuerpos del ejército de precisión se dividirían en dos unidades, incluyendo sus oficiales y clases, y cada unidad absorbería la cantidad suficiente de ciudadanos enrolados hasta completar nuevamente su número reglamentario. Con ello, la base de «veteranos» podría transmitir sus condiciones tácticas, su instrucción y disciplina a los nuevos soldados y los cuerpos del Ejército estarían dispuestos y organizados de tal manera que contarían con el mismo sistema táctico, evitando la perniciosa heterogeneidad en su formación y métodos.⁹³

Estas eran las condiciones generales que la organización debía cumplir, no obstante ello, los militares no excluían la posibilidad de que se adoptase, tomando en cuenta las peculiaridades de nuestro país, el «mecanismo constitutivo más avanzado» entre los Ejércitos de Europa y América que permitiera al país alcanzar los progresos de la época. De la misma manera podía seguirse en materia de administración militar, a fin de normalizar una acción previsora y oportuna que permita al Ejército contar con todos los medios humanos y militares, como eran los de defensa, de hostilidad, de equipo, de vestido, menaje, asilo, locomoción, etc.⁹⁴

2.2.2.4. Guardia Nacional y militarización de la población

Otra preocupación fundamental para los militares era contar con una fuerza de apoyo al Ejército de precisión por la que se alistara la población civil y que permitiera aumentar el poder militar de la nación en momentos de excepcional inseguridad. Sin embargo, como lo habían demostrado los descalabros de la Campaña de Lima, la

⁹³ Cfr. *RMN*. Año II, N° 31. Lima, 15 de junio de 188, p. 697.

⁹⁴ Cfr. *RMN*. Año I, N° 12. Lima, 1° de Setiembre de 1888, p. 259.

formación apresurada de contingentes de civiles armados con una escasa preparación militar e indisciplinados había condenado al Perú a la derrota. Por tal motivo, muchos militares estuvieron no sólo preocupados en que la Ley de reorganización de la Guardia Nacional se cumpliera a cabalidad, sino que fueron especialmente vehementes en la necesidad de «militarizar» a la población del país, es decir, formar a los ciudadanos en cuestiones de táctica, armamento, etc. Por ejemplo, en un artículo publicado en el diario *Demócrata* de Abancay el 20 de Marzo de 1889 se afirma enfáticamente que se hacía necesario «Hacer de todos los ciudadanos, soldados, hé aquí lo que necesitamos» para cobrar la revancha. Al mismo tiempo, el editorial Eco del Ejército de la *Revista Militar y Naval* del 1º de abril de 1889 afirmaba que para salir de la situación que afronta el Perú «aún [se] puede [...] contar con los 300,000 ciudadanos hábiles para las armas [...]. Militarizarlos, instruirlos y armarlos, es todo lo que se necesita.»⁹⁵

Para estos oficiales, la militarización del país no sólo debía verificarse a través de las prácticas y aprendizaje que los ciudadanos podían realizar en el marco general de la Ley de la Guardia Nacional, sino además debía incluirse en los centros de educación civil ejercicios gimnásticos y educación militar básica desde la escuela primaria que permitiera a los ciudadanos contar con elementos básicos de preparación militar previos al servicio en las Guardias Nacionales. Así, el Sargento Carrera en su artículo *Enseñanza militare en la escuela civil* afirmaba que «[l]a educación militar en todas las escuelas y colegios civiles, reforma que es entre nosotros inaplazable [...]. Conviene, en nuestro concepto, que se modifique el reglamento general de estudios para dar cabida en él á conocimientos militares que todo ciudadano debe poseer [...]».⁹⁶ En el mismo sentido, en el editorial *Instrucción Militar* de la *Revista Militar y Naval* del 15 de marzo de 1889, los redactores de tal publicación afirmaban que esta preparación premilitar en las escuelas primarias permitiría la formación de Guardias Nacionales con los criterios uniformes y exentos de vicios por lo que era indispensable «[p]roveerles conocimientos de Tácticas, Ordenanzas, ejercicios gimnásticos y educación moral de los deberes para con la Patria desde jóvenes.»⁹⁷

⁹⁵RMN. Año II, N° 26. Lima, 1º de abril de 1889, p. 580.

⁹⁶RMN. Año IV, N° 76. Lima, 1 de mayo de 1891, p. 1799.

⁹⁷RMN. Año II, N° 25. Lima, 15 de marzo de 1889, p. 557.

No obstante los deseos de los militares del Segundo Militarismo, la debida renovación de la Guardia Nacional estuvo siempre en peligro en virtud a las restricciones fiscales propias del estado de postración económica del país que imponían al Congreso la reducción en los gastos militares, disminución que llegó a alcanzar a los sueldos de los instructores y funcionarios de las instituciones que debían organizar los cuerpos de las Guardias Nacionales. Estas medidas fueron duramente combatidas por los redactores de la revista durante los años 1888 y 1889, pues consideraban a las Guardias Nacionales como un elemento estratégico en el modelo de organización del Ejército:

Créese comúnmente por nuestros charlatanes, politiqueros de pacotilla, que no conocen la guerra, ni las condiciones que deben concurrir en las fuerzas que se emplean en ella; que puede emprenderse sin preparación alguna, consistiendo este elemento, como en San Juan y Miraflores, en una aglomeración informe, discrecional é improvisada de masa de reclutas indisciplinados, tomados al acaso, apresuradamente, y mandados por jefes y oficiales igualmente improvisados, que jamás abrieron la táctica, ni tuvieron otra noción ó idea acerca de la carrera militar que la que les diera la vista de soldados, marchando por las calles al son de música.⁹⁸

En su opinión, la instrucción y formación de las Guardias Nacionales se hacían tanto más necesarias, puesto que otras repúblicas sudamericanas como Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile ya habían adoptado o se encontraban implantando tal sistema de reclutamiento civil, mientras que el Perú se encontraba en la retaguardia de la ejecución de tales medidas.⁹⁹

2.2.2.5. Ordenanzas militares y la Justicia Militar

La promulgación de las Ordenanzas Generales del Ejército era uno de los principales reclamos de los militares, pues «[l]levada á cabo tan importante obra, se habrá dado cima a la regeneración del poder militar de la republica».¹⁰⁰ Hasta 1890, la

⁹⁸ *RMN*. Año II, N° 24. Lima, 1° de marzo, 1 de 1889, p. 529.

⁹⁹ Cfr. *RMN*. Año II, N° 25. Lima, 15 de marzo de 1889, p. 536.

¹⁰⁰ *RMN*. Año I, N° 12. Lima, 1° de setiembre de 1888, p. 260.

legislación militar era un conjunto inorgánico de leyes y reglamentos que modificaba las ambiguas ordenanzas del Ejército Colonial. En el artículo Estudio Militar de setiembre de 1888, se afirmaba que la legislación militar era caótica, pues a las disposiciones españolas, se habían hecho ampliaciones de derogatorias en tiempo republicano, sin ver estudios sistemáticos totalizadores, lo que generaba un corpus «inconexo», «dislocado», «contradictorio» y «monstruoso».¹⁰¹

Este caos legal no solo imponía serias dificultades para atribuir obligaciones y responsabilidades a las dependencias, cuerpos y funcionarios del Ejército, sino también impedía el establecimiento de derechos y penalidades con claridad para los miembros de los cuerpos militares. Era sobre todo importante para los militares definir qué norma cabía dentro del fuero militar y si estas eran o no contradictorias con los normas civiles. Esta situación de indefinición iba en detrimento de la disciplina y la justicia.¹⁰² Así, con respecto a lo anticuado de la legislación militar en materia disciplinaria por sus castigos infamantes y penas físicas, el coronel Norberto Eléspuru afirma lo siguiente en un discurso pronunciado en el Centro Militar el 31 de Julio del 1888:

El Ejército ha estado condenado a vivir con una legislación que se encuentra en pugna con las leyes fundamentales, las civiles y aún las penales, tan distantes hoy, gracias al progreso de los sentimientos humanitarios, de la inflexible severidad y ruda rigidez de los tiempos antiguos. Que se hace imposible en el día darles aquella aplicación estricta, sin que las leyes dejan de tener eficacia, y lejos de servir de freno, llegan á ser piedra de escándalo y foco de desmoralización y menosprecio.¹⁰³

Cierto era que en el año 1864, durante el gobierno del General Pezet, se había decretado las primeras ordenanzas militares republicanas, sin embargo, con el derrocamiento del régimen a manos de Mariano Ignacio Prado, tales ordenanzas quedaron abolidas, sin sancionarse norma alguna que las reemplazase. En tal sentido era pues necesario codificar un nuevo cuerpo de leyes que contuviera normas generales y permanentes para regularizar los derechos, obligaciones, ascensos, pero

¹⁰¹ Cfr. *Ibíd.*

¹⁰² Cfr. *RMN*. Año II, N° 38. Lima, 1° de octubre de 1889, p. 866.

¹⁰³ *RMN*. Año II, N° 34. Lima, 1° de agosto de 1889, p. 777.

también los delitos y penas sobre materia militar.¹⁰⁴ Dentro de la serie de reformas para el ejército que intentó llevar a cabo el gobierno de Cáceres se encontró la elaboración de un Código Penal Militar. Dicha tarea fue encomendada a la Junta Militar Permanente, compuesta de altos mandos militares y asesorada por los abogados Miguel Antonio de la Lama y Antenor Arias. El trabajo fue presentado por el Ministro de Guerra y Marina en la Legislatura de 1887, pero fue devuelto a la Junta para su revisión.¹⁰⁵ El gobierno, por esas fechas, consideró óptimo incluir este documento en unas nuevas Ordenanzas militares del ejército que debían tratar otros temas referentes a la organización militar y que en el año 1891 aún se encontraban en revisión, no obstante ello, las Ordenanzas no se llegaron a promulgar.

2.2.2.6. Presupuesto y preparación militar

Otro de los puntos básicos sobre los que descansaba la reforma militar era el aseguramiento de los fondos suficientes para la aplicación de las medidas correctivas y el normal funcionamiento de las instituciones castrenses. Este tópico fue, sin lugar a dudas, uno de los que generó mayores reacciones por parte del activo grupo de oficiales del Centro Militar, ya que en el contexto de crisis fiscal en el que se encontraba el Estado después de la Guerra del Pacífico, las asignaciones presupuestarias a las instituciones militares siempre resultaban insuficientes en opinión de los cultores de la carrera de las armas.

En los años 1888 y 1889 dos temas delicados para los militares resultaron afectados por la política de austeridad presupuestaria que era mayoritaria en la Cámara de Diputados. El primero, como se ha visto, estaba relacionado con la formación e instrucción de las Guardias Nacionales a nivel nacional, y el problema radicaba en que el proyecto de presupuesto para el año 1889 que se discutía en la Cámara baja, estipulaba una asignación de 80 soles mensuales para los instructores y funcionarios de las Asambleas Departamentales de la Guardia Nacional, y dado que dicha cantidad era inferior a lo estipulado por las normas reglamentarias, además que inferior a los ingresos de los oficiales en servicio activo del Ejército e insuficiente

¹⁰⁴ Cfr. *RMN*. Año I, N° 12. Lima 1° de setiembre de 1888, p. 260.

¹⁰⁵ *RMN*. Año IV, N° 84. Lima, 1° de setiembre de 1891, pp. 1958-1959.

para el «decoro» y «manutención» de los Jefes Militares, resultaba claro para los militares que esta era una medida atentatoria y además de una humillación contra el Ejército y sus oficiales. Según estos oficiales, aquella medida desincentivaría a los posibles instructores, y en su defecto implicaría la contratación de militares con menor jerarquía y conocimiento para los cargos de instructores o funcionarios de la Asamblea de la Guardia Nacional. El resultado previsto sería una formación deficiente o lo que era peor «la total disolución de las Guardias Nacionales».¹⁰⁶

El segundo tema giraba en torno a los ingresos devengados de la «familia militar». En la Cámara de Diputados, se discutía la posibilidad de declarar en insolvencia al Estado y desconocer el montepío a las viudas de los militares, aplazar las pensiones de invalidez de los excombatientes de la guerra y desconocer las pensiones de los militares en el tiempo en que no estuvo vigente el régimen constitucional esto es, durante la Dictadura de Nicolás de Piérola. La reacción de la *Revista Militar y Naval* era obvia, el desconocer los derechos pecuniarios de la «familia militar» significaba un enorme desincentivo a la carrera de las armas, el mejor método para la desmoralización del Ejército y un golpe de gracia contra la institución que debía salvaguardar la integridad, el honor y autonomía del Estado.

Considerando ambos asuntos, los militares increpaban a las dirigencias civiles del país su incapacidad de aprender las lecciones que la Guerra del Pacífico había legado: la reducción de ingresos del Ejército reducía su poder militar y condenaban al país a una situación de debilidad frente a sus países vecinos.¹⁰⁷ Situación que era aún más preocupante en un contexto mundial en el que crecía la «barbarie».¹⁰⁸ Por tanto, resultaba lógico aumentar los gastos militares para remozar al Ejército y la Marina a fin de constituir una fuerza disuasiva contra cualquier agresión externa. El Perú debía prepararse para la guerra a fin de evitarla. Un presupuesto adecuado y las otras reformas propuestas hechas por los jefes agrupados en el Centro Militar, en su opinión, debían devolverle al Perú su imagen de respetabilidad frente a sus vecinos, especialmente a Chile, quien tenía cautivos los territorios de Arica y Tacna.

¹⁰⁶ Cfr. *RMN*. Año I, N° 13. Lima, 15 de setiembre de 1888, p. 273- 275.

¹⁰⁷ Cfr. *RMN*. Año II, N° 23. Lima 15 de marzo de 1889, p. 536.

¹⁰⁸ Cfr. *RMN*. Año I, N° 8. Lima, 1° de Julio de 1888, p. 158.

Capítulo. 3. El Ejército durante el gobierno de Piérola (1895-1899)

Institución esencial a la existencia del Estado es el Ejército; y tal, que, por ella, puede apreciarse seguramente, no ya sólo su respetabilidad en el exterior, sino el grado de robustez y cultura de la vida nacional. La fuerza es por sí brutal y ciega. No puede ser puesta, por lo mismo en manos las más delicadas por su elevación intelectual y moral. Sólo así podrá darnos el Ejército seguridad en el exterior y garantía dentro, y la hora en que no tenemos amenazas fuera, ni domésticas inquietudes, necesitamos emplearla afanosamente en conseguir que adquiera las condiciones requeridas por su altísimo instituto.¹⁰⁹

Para muchos aspectos de la historia del Perú la revolución de 1894-1895 representa una ruptura que cierra el caótico siglo XIX. Como colofón de este acontecimiento una nueva correlación de actores sociales construyó una nueva hegemonía que emprendió una serie de reformas en el Estado que dejaron atrás las alianzas precarias en las que se había asentado el ejercicio del poder en el período anterior. La revolución tuvo un origen claro, la prolongación indefinida de los jefes militares que asumieron la dirección del país después de la derrota en la Guerra del Pacífico. Gozando del prestigio ganado denodadamente en la campaña de la Breña, el general Andrés Avelino Cáceres alcanzó la presidencia del país en 1886 con el apoyo del Partido Constitucional. Compuesto este principalmente por los camaradas de armas del caudillo breñero, diversos políticos de un debilitado Partido Civil se incorporaron al proyecto cacerista, buscando recomponer sus fuerzas para alternar luego en el poder. Sin embargo, concluido el mandato de Cáceres aquellas expectativas se vieron frustradas asumiendo la presidencia Remigio Morales Bermúdez, hombre leal del ex presidente y correligionario suyo.

¹⁰⁹ Mensaje del Presidente de la república, don Nicolás de Piérola, al Congreso Ordinario, el 28 de julio de 1897, en (Ugarteche y San Cristóval 1945:356).

La otra fuerza política de importancia en aquella época la constituía el Partido Demócrata, liderado por Nicolás de Piérola. Debido a su oposición a los gobiernos del Partido Constitucional, Piérola fue perseguido e imposibilitado a tentar la presidencia, teniendo que dejar el país desde 1890. A pocas semanas de concluir su mandato, Morales Bermúdez falleció, tomó la primera magistratura el segundo Vicepresidente, el también militar constitucionalista Justiniano Borgoño, excluyendo al civil Pedro Alejandrino del Solar a quien le correspondía este cargo como primer Vicepresidente. Considerado este hecho como una usurpación y un acto preparatorio para el retorno a la presidencia de Andrés A. Cáceres, los antiguos aliados civilistas se tornaron opositores del gobierno e iniciaron negociaciones con su eterno rival, Nicolás de Piérola.

A los comicios de 1894 sólo se presentó el Partido Constitucional, logrando Cáceres acceder nuevamente al poder, en tanto que los Partidos Demócrata y Civil organizaban al mismo tiempo una insurrección para defenestrar a un gobierno considerado ilegítimo y manifestación de un proyecto excluyente protagonizado por los hombres de uniforme. La revolución logró movilizar a una vasta coalición de actores sociales que por sus diversas agendas buscaron derrocar a esos gobernantes militares cada vez más represivos e impopulares. Para los actores de la época, el enfrentamiento tuvo un cariz eminentemente civil y popular, organizándose grupos montoneros en diversos departamentos del país, los cuales después de cruentos combates lograron debilitando al gobierno, acorralándolo en la Capital hasta obligarlo a deponer sus armas en marzo de 1895.¹¹⁰

3.1. Comportamiento del Ejército durante el gobierno de Piérola

Los *militares* habían caído y con ello se abría al final de la centuria la oportunidad para que los dos partidos de origen civil gobernaran el país. Al terminar los sangrientos enfrentamientos, el ejército que había servido al general Andrés A. Cáceres fue rápidamente licenciado. Los cuerpos de tropas fueron disueltos a los pocos días de la rendición, siendo enviados los soldados a sus hogares, mientras que

¹¹⁰ Una interesante investigación sobre Nicolás de Piérola y su segundo gobierno ha sido recientemente elaborada por Alejandro Salinas, donde se presentan las discusiones parlamentarias y reformas medulares que se implementaron durante dicha administración (2012).

la suerte de los jefes y oficiales fue diversa. Algunos cercanamente vinculados al gobierno caído, marcharon fuera del país en la calidad de exiliados, como fue el destino del mismo caudillo de la Breña. Parte importante de estos oficiales permaneció en el país, en virtud de acceder a una ley de amnistía de diciembre de 1895, sin embargo, fueron colocados en una situación precaria y marginal, en tanto que pasaron a la condición de *indefinidos*. Sólo Andrés A. Cáceres y Justiniano Borgoño fueron borrados del escalafón militar, considerándolos los autores del régimen inconstitucional inaugurado por los jefes breñeros en 1894 (Millones 2004: 149-150, Basadre 2005, t. 11:74).

Habiéndose licenciado a decir de algunos actores de la época «el mejor de sus ejércitos»¹¹¹, el Ejército nacional con que se iniciaba el segundo mandato de Nicolás de Piérola resultaba ser en gran parte el mismo con el que había logrado su victoria contra Cáceres, es decir, un ejército bisoño, constituido en el fragor de la guerra civil y compuesto por voluntarios o reclutados que pasaron en pocos meses de paisanos a soldados. Era entonces un Ejército improvisado, como cualquier otro originado por una revolución decimonónica. Sus oficiales eran un conjunto heterogéneo de aquellos que habían sido excluidos de los regímenes del Segundo Militarismo o indefinidos; otros eran oportunistas que habían cambiado de bando en el momento oportuno; finalmente, civiles que con o sin experiencia previa comandaron montoneras de origen popular. Ejemplo de los primeros fueron Eduardo Jessup y Juan Martín Echenique, militares que habían servido en las filas del ejército de Miguel Iglesias y que fueron destinados a las listas pasivas por el primer gobierno de Cáceres. Respecto a los segundos, los casos de Pedro Collazos, Domingo J. Parra y Carlos Pauli, son representativos¹¹². Del tercer grupo, los más famosos jefes de montoneras fueron el poderoso y joven hacendado de Huánuco Augusto Durand y Felipe Santiago Oré, agricultor importante de los valles del sur de Lima, quienes junto a otros caudillos civiles al concluir la campaña colgaron sus uniformes y se lanzaron a la acción política.

¹¹¹ *La Luz Eléctrica*. Año V, N° 254. Lima, 7 de Setiembre de 1895.

¹¹² Por ejemplo, Juan Martín Echenique había sido Ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Miguel Iglesias (MGM 1885). Respecto a Pedro Collazos, este oficial se pasó a las fuerzas de la Coalición en el año 1894 (Mc Evoy 1997: 331).

Entonces, descontando este tercer grupo, el nuevo gobierno como cualquier otra administración nacida por una revolución durante el siglo XIX, contaba con oficiales leales que habiendo apostado por los ganadores de la guerra civil, su posición dentro del Ejército estaba en función de la estabilidad del régimen y la prolongación en el tiempo de la correlación de poder que este expresaba. Siguiendo esta lógica, correspondía al Gobierno recompensar los esfuerzos de estos campeones de la Patria con colocaciones al interior de las fuerzas del Ejército o alguna otra medida favorable. Sin dejar de ser esto cierto para la administración del *Califa*, distintos indicios muestran que hubo una fuerte tendencia por desechar a los oficiales que resultaban *inaparentes* para su función.

Respecto de los primeros, el ejemplo más importante fue Domingo Parra. Habiendo ingresado a las filas del Ejército durante la Guerra del Pacífico y recompensado durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez como Subprefecto de Huancayo, «el general Cáceres lo desterró del reino de los cielos» razón por la cual «se pasó á las filas tituladas demócratas [y] le obedeció en todo á D. N. Piérola». En recompensa a sus servicios, Parra obtuvo diversas posiciones de importancia, como Prefecto del Callao, Jefe de la División Pacificadora de Huanta e incluso Ministro de Guerra y Marina durante el año 1895.¹¹³

Pero al mismo tiempo hubo una postura favorable a la depuración del cuerpo de oficiales fraguado en la revolución. El mismo Parra, como Ministro, dictó una serie de medidas para regular el reconocimiento de grados militares y confirmar las posiciones de los oficiales en el Ejército activo. Asimismo, ante las diferentes denuncias que se presentaron en la prensa de oficiales post-revolucionarios que atacaban transeúntes, caminaban por las calles en estado de ebriedad, abusaban o departían alegremente con sus subordinados o, en general, propiciaban escándalos públicos, Parra dictó una Orden del Día el 11 de setiembre de 1895 por la que se penaban los «abusos y corruptelas que se han introducido en el Ejército», como los siguientes:

¹¹³ *La Luz Eléctrica*. Año VII, N° 362. Lima, 2 de octubre de 1897 y *La Opinión Nacional*. Lima, 8 de febrero de 1897. La cita corresponde a *La Luz Eléctrica*. Año VII, N° 362. Lima, 2 de octubre de 1897.

1ª Queda absolutamente prohibido coleccionar fondos entre los oficiales y tropa de los cuerpos del Ejército, para banquetes y festividades bajo pretexto alguno.

2ª Prohíbe igualmente, á los señores jefes y oficiales, el uso de prendas ajenas al uniforme, como foetes, chicotillos, bastones, etc.

3ª Conforme á las disposiciones vigentes, los jefes y oficiales que no están en servicio activo no pueden usar el uniforme militar. Los infractores á esta disposición, serán penados convenientemente.

4ª Es terminantemente prohibido, bajo la mas severa responsabilidad, la concurrencia de los jefes y oficiales uniformados, á los establecimientos de expendio de licores. Los contraventores serán dados de baja inmediatamente. [...]

6ª Los jefes y oficiales, cuando salgan á caballo, observará la mayor compostura, marchando al paso de sus cabalgaduras; omitiendo en consecuencia los arrebatos y carreras, que ocasionan con frecuencia escándalos reprobables.

7ª Observándose el poco respeto con que los oficiales se presentan entre los jefes y siendo la subordinación gerárquica la base de la disciplina militar, HA DISPUESTO ESPECIALMENTE el señor Ministro del ramo, que todo subalterno al tratar con sus superiores para todo acto del servicio, lo haga en la forma más correcta, con uniforme abrochado, la espada ceñida al cinto, la mano derecha la altura del kepí y cuadrado según los principios tácticos. [...]

9ª Con el fin de que se revele la competencia y aplicación de los oficiales, rendirán estos, en sus cuarteles y ante jurado respectivo, el 30 de Noviembre próximo, exámenes de Táctica del arma que le corresponde y de Ordenanzas. El oficial que no obtenga el calificativo de “Bueno” será declarado inaparente para el servicio, y en consecuencia, separado de la colocación que desempeña.

10ª Los exámenes á que se refiere la prevención anterior, comprenden de Sargento Mayores graduado á Sub-Teniente. [...]¹¹⁴

¹¹⁴La Opinión Nacional. Lima, 11 de setiembre de 1895.

Tales medidas no obedecían a un exceso de celo por parte de las autoridades militares o del nuevo gobierno, pues, en cada revolución o golpe de Estado, ingresaban a la carrera de las armas hombres improvisados quienes, por su falta de preparación militar o sus costumbres poco marciales, terminaban desprestigiando a la institución castrense o perjudicando el cumplimiento de sus funciones. Los exámenes que daba cuenta la orden anterior, resultaba ser una medida útil y transitoria que se complementó con la formación de una Junta Militar encargada de confeccionar un nuevo escalafón de oficiales, desechando a aquellos que no tuvieran justos títulos para los grados que ostentaban (MGM 1896:14 y Anexo 3). Asimismo, al interior de los cuerpos de línea, sus propios Comandantes solicitaron en diversas ocasiones la baja de oficiales, desde Sargentos Mayores hasta Subtenientes que, por diversas faltas reñidas con la obediencia y competencia militar, no merecían pertenecer a las filas, tal como muestra el siguiente cuadro.

**Cuadro 4: Expedientes de baja de oficiales del Ejército,
(julio – setiembre de 1895)**

Cuerpo	Oficial	Grado	Causal de baja
Batallón Ayacucho N° 3	Guillermo Neira	Teniente	Mala conducta
Batallón Huánuco N° 11	Eleodoro Vázquez Solíz	Sargento Mayor	Faltas cometidas por el abuso del licor; robo de fondos de la impuestos de la prov. de Ambo
Batallón Ayacucho N° 3	Emilio Barrera	Teniente	Insubordinación; negociaciones con presos
	Manuel Soto	Subteniente	Embriaguez e incumplimiento de deberes
Comandancia del Cuerpo Gral. de Inválidos	Benito Barreto	Subteniente	Insubordinación recurrente
Batallón Ayacucho N° 3	Manuel Arias	Capitán	Faltas recurrentes; Inasistencia en el cuartel desde hace más de un mes
Batallón Callao N° 5	Sócrates Valencia	Capitán	Faltas recurrentes; Desconocimiento de deberes de las Ordenanzas Militares
Húzares de Junín N° 1	Carlos Ruiz	Teniente	Faltas recurrentes, a pesar de amonestaciones
	Isaac Rodríguez	Teniente	Ídem.
	César Perla	Teniente	Ídem.
Batallón Ayacucho N° 3	Alfredo Vargas	Subteniente	Por no haberse presentado al Batallón desde su organización
Batallón Callao N° 5	Gerardo Loli	Capitán	Mala conducta; ningún interés por la carrera de las armas
	Eleodoro Luna	Teniente	Ídem.
	Jorge Rizo Patrón	Subteniente	Ídem.
Batallón Ayacucho N° 3	Juan Robles	Subteniente	Continuo estado de embriaguez; graves faltas al servicio; maltrato a la tropa alcoholizado; insubordinación

Fuente: AHMP. 1895. Caja N° 6 Of. de Comandante del Btltn. Ayacucho N° 3, Mateo Vera, al Inspector Gral. del Ejército, 17-07-1895, 23-07-1895 y 17-09-1895; Of. de Comandante del Btltn. Huánuco N° 11, José R. de la Puente, al Inspector Gral. del Ejército, 18-07-1895; Of. de Comandante Gral. del C. de Inválidos, al Inspector Gral. del Ejército, 27-07-1895; Of. de Comandante del Btltn. Ayacucho N° 3, al Inspector Gral. del Ejército, 01-08-1895; Of. de Comandante del Btltn. Callao N° 5, Pedro Collazos, al Inspector Gral. del Ejército, 24-08-1895 y 13-09-1895; Of. de Comandante del Btltn. Húzares de Junín N° 1, al Inspector Gral. del Ejército, 26-08-1895. Cuadro de elaboración propia.

Los criterios de eliminación de personal militar no sólo se basaron en razones profesionales. Resultaba obvio que luego de la victoria sobre un gobierno compuesto marcadamente por oficiales del Ejército, serían los perdedores los primeros en ser retirados del servicio activo. El gobierno de Piérola, procedió como habían hecho en incontables ocasiones sus predecesores, desplazando a las listas pasivas a los oficiales que habían servido a los gobiernos caceristas. Las razones políticas eran

siempre comprensibles para este y otros gobiernos, eliminar una potencial oposición armada de jefes militares con comando de tropa, provenientes de una red política rival. A los oficiales caceristas se les empezó a llamar los «caídos», mientras que a Cáceres se le dio el epíteto del «nefando». Existen testimonios que luego de la firma del armisticio que puso fin a la guerra civil, algunos jefes caceristas, reconociendo su derrota, solicitaron su pase a la condición de indefinidos, sin embargo, otros fueron derivados a esa condición, tanto durante la corta administración de la Junta de Gobierno de 1895, como en los primeros años del gobierno pierolista¹¹⁵.

Tomando como referencia a los oficiales con grado de coronel y coronel graduado que aparecen en el Escalafón militar del año 1897 en condición de indefinidos, se puede observar el grado de depuración de elementos caceristas en las filas del Ejército del nuevo gobierno. Resulta interesante indagar sobre los coroneles, pues a partir de este grado se podía comandar cuerpos de línea enteros (batallones, escuadrones o brigadas), es decir, unidades de considerable dimensión táctica. El total de indefinidos en las dos categorías suman para ese año 172 (21 para coroneles y 151 para coroneles graduados), sobre esta cifra, 80 (9 y 71 respectivamente) fueron declarados en aquella condición entre los años 1895 y 1897, lo que equivale a decir que durante el período de la Junta de Gobierno y los dos primeros años del gobierno de Piérola fueron pasados cerca del 47% a la lista de indefinidos con los grados de coronel y coronel graduado. De los 80 coroneles, de ambas clases, 31 fueron declarados indefinidos en el año 1895, entre los que se encontraban el coronel Norberto Eléspuru, quien se había desempeñado como Director de la Escuela Militar durante las administraciones de Cáceres y Morales Bermúdez; Felipe Neri Huguet, subprefecto de Lima en el último gobierno de Cáceres y Manuel San Román, ambos miembros del Comité directivo del Partido Constitucional en 1898 (ver anexo N.º 1).¹¹⁶

¹¹⁵ *La Opinión Nacional*. Lima, 26, 27 y 28 de setiembre de 1895.

¹¹⁶ Respecto a los miembros del Comité Directivo del Partido Constitucional en 1898, se puede consultar *El Comercio*. Lima, 3 de enero de 1898, edición de la mañana.

**Cuadro 5: Coroneles con licencia indefinida
en el Escalafón Militar de 1897**

Grado Departamento (1)	Coronel			Coronel Graduado		
	Total	Antes de 1895	1895-1897	Total	Antes de 1895	1895- 1897
Lima	14	9	5	115	60	55
Arequipa	3	1	2	21	12	9
Callao	2	1	1	3	2	1
Cuzco	1	0	1	3	2	1
Ica	0	0	0	3	1	2
Junín	0	0	0	1	0	1
Lambayeque	0	0	0	2	1	1
Piura	1	1	0	2	2	0
Puno	0	0	0	1	0	1
Total	21	12	9	151	79	71

Fuente: Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1897. Lima: Imprenta de El País, 1897. Anexo N° 17. Cuadro de elaboración propia.

(1) Los departamentos que no figuran en la presente lista no contaban con oficiales de grado de coronel o coronel graduado con licencia indefinida.

En la prensa limeña no se dejaba de hacer notar el cambio de condición de los antiguos señores de la guerra, *caídos* de las esferas del poder. Por ejemplo, en un número de la revista *La Luz Eléctrica* no se perdía la oportunidad de remarcar esta situación no sin un tono burlón: «Cuando gracias á la generosidad de Cáceres llegué á ser coronel todos me saludaban, todos me tenían á honor de invitarme, todos me rendían pleito homenaje; y desde que me suprimieron las presillas nadie me invita, nadie me busca, nadie se descubre al ver mi humanidad que no esta tan bien *forrada* como yo quisiera.»¹¹⁷ Sin embargo, los *caídos* dispusieron también de una tribuna desde donde se lanzaba una cerrada defensa de sus intereses, esta era el periódico *La Opinión Nacional*. Desde sus páginas se reclamaba tanto la respetabilidad de los jefes militares caceristas, apelando a que se les diera «entrada á las filas á los oficiales de carrera prestigiosa» injustamente alejados por la «intransigencia de partido ó el rencor político»¹¹⁸, o denunciando la condición a la que los habían rebajado: «¿Qué se necesita para hacer justicia á los valientes jefes y oficiales que

¹¹⁷*La Luz Eléctrica*. Año V, N° 243. Lima, 22 de junio de 1895.

¹¹⁸*La Opinión Nacional*. Lima, 12 de setiembre de 1895.

hoy se hallan en la mayor miseria, porque cumplieron su deber, como soldados de honor[?]].¹¹⁹ En esta persecución a los caídos, el acto de mayor trascendencia fue la eliminación del Escalafón Militar del general Cáceres y del coronel Borgoño, ambos acusados de antentar contra el orden constitucional.

La limpieza del Escalafón de elementos caceristas fue constante, como también regular fue la observación de las lealtades políticas de los oficiales en servicio activo durante todo el régimen pierolista. Los comandantes de tropa hacían seguimiento de los posibles vínculos de sus subordinados con los oficiales caídos, bajo el temor de que se incorporaran a sus filas. Así, en diciembre de 1896, Guillermo Zavala, Comandante del Escuadrón Húsares de Guardia, solicitaba la separación del servicio del alférez Carlos Miranda a quien se le había observado tener «continuas reuniones con personas contrarias al actual régimen»¹²⁰; similar situación reportaba un par de años después el Comandante del Batallón Callao respecto al Capitán Pedro Zárate y al Teniente Octavio Mávila, los cuales habían sido descubiertos «en convites continuos y lugares apartados de la población con individuos que son sindicados como conspiradores del orden público».¹²¹ Teniendo en cuenta estas medidas y su posición alcanzada lograda a mérito de la revolución, no resulta extraño que el Ejército nacido en 1895 mantuviera su lealtad al gobierno de Piérola y la coalición gobernante, por lo que, salvo algunas excepciones, sus oficiales combatieron por sostener al *Califa*.

En los cuatro años que duró la administración de Piérola (1895-1899), en tres de ellos se produjeron situaciones de inestabilidad política de diferente cuño. Los militares surgidos de la guerra civil fueron llamados a reprimir los intentos insurreccionales que estallaron en diferentes lugares del país, logrando su cometido, aunque no sin poner en zozobra al régimen. La primera coyuntura se produjo en 1896, a pocos meses de inaugurado, verificándose dos actos insurreccionales con motivaciones diferentes: la rebelión federal de Loreto y la rebelión de la Sal en Huanta. La primera se originó en la ciudad de Iquitos, capital de aquel departamento, y estuvo encabezada por el militar retirado José Mariano Madueño y el coronel

¹¹⁹ *La Opinión Nacional*. Lima, 28 de abril de 1896.

¹²⁰ AHMP, 1896, Caja N° 4, “Oficio del Comandante del Escuadrón Húsares de la Guardia N° 9, al Inspector General del Ejército”, del 3 de diciembre de 1896.

¹²¹ AHMP, 1898, Caja N° 2, “Oficio del Comandante de Batallón Callao N° 6 al Jefe del Estado Mayor General”, del 11 de setiembre de 1898.

Ricardo Seminario Aramburú, por esas fechas Prefecto del departamento. La insurrección enarbolaba el reconocimiento de Loreto como un Estado federado al Perú, bajo el justificativo que el propio Piérola era un admirador del sistema federal, preconizando este sistema como adecuado para el Perú. Desde Lima, por la distancia que la separaba con la capital loretana y el poder que había alcanzado la élite iquiteña en virtud de la explotación del caucho, se consideró la revolución como un movimiento separatista que atentaba contra la unidad y la soberanía del Estado peruano. Al poco tiempo de conocido el hecho, se organizaron tres expediciones para sofocarlo: una marchó por la sierra central al mando de coronel Eduardo Jessup, otra que internándose desde el norte, pasando por el camino de Moyobamba, debía alcanzar la ciudad insurrecta; la tercera, comandada por el propio Ministro de Guerra y Marina, al efecto Juan Ibarra, fue por mar en el buque *Constitución* buscando internarse por el Amazonas y cortar la retirada de los federalistas (Basadre 2005, t. 11:75-76).

No bien conocida la partida de las tres expediciones, la rebelión se disolvió escapando sus líderes de la represión estatal. De las tres expediciones, la comandada por Jessup había sido concebida no sólo como un instrumento de pacificación, sino también como una expedición de exploración de los poco conocidos territorios selváticos. Llevando no sólo soldados, sino también ingenieros y hombres de ciencia, se le encomendó el reconocimiento de una vía que, partiendo desde la sierra central, pudiera comunicar Lima con Iquitos por vía fluvial. Provistos de armas, lanchas herramientas e instrumentos, desbrozaron maleza y lograron la construcción de la vía del Pichis desde Chanchamayo¹²². Aunque se propuso por esas fechas la organización de colonias militares que permitieran aumentar la presencia del Estado peruano sobre el vasto territorio selvático, estas no prosperaron, dejándose esa tarea a colonos civiles¹²³.

Ese mismo año estalló una rebelión indígena en la provincia de Huanta (Ayacucho), conocida como la Rebelión de la Sal. Los pobladores indígenas de las

¹²² Según el Ministro de Guerra y Marina, las expediciones militares «ayudados por nuestro ingenieros y marinos, rasgan el misterio de los bosques seculares; tórnase lo que al principio fue campaña para reconquistar la unidad nacional en cruzada por la civilización: escoltando por penoso itinerario la enseña de la República hasta sus propios y legítimos dominios del extremo Oriente» (MGM 1896: 10-11).

¹²³ *La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 311. Lima, 10 de octubre de 1896.

alturas de Huanta, conocidos como los iquichanos, se rebelaron rechazando el establecimiento de un nuevo impuesto que gravaba la producción y consumo de ese producto. El gobierno de Piérola temeroso de que esta fuera el inicio de un proyecto más amplio para lograr el retorno de Cáceres al poder, en tanto estas poblaciones habían sido poderosas aliadas al caudillo de la Breña, mandó una división del Ejército de las tres armas, al mando del coronel Domingo Parra (Husson 1992: 138). Llevando los nuevos rifles de precisión Manlicher, los hombres de Parra tuvieron oportunidad de probarlos en una represión que fue considerada por parte de la prensa limeña y ayacuchana como una verdadera masacre¹²⁴. La pacificación de Huanta, como se verá en el capítulo 7, fue la oportunidad para someter al Estado central a las siempre rebeldes poblaciones iquichanas, romper sus vínculos con las élites locales de filiación cacerista y decomisar las armas de guerra con las que contaban desde la Guerra del Pacífico. Fue entonces objetivo de Piérola subordinar una población con fuertes autonomías locales, y considerada un peligro latente para la estabilidad política del país.

La segunda coyuntura se produjo en 1898, en el contexto de las discusiones parlamentarias en torno al Protocolo Billinghurst-Latorre. En ese año, el Vice-Presidente Billinghurst fue comisionado a Chile con el objetivo de concretar un acuerdo diplomático a través del cual se salvara el impase de las *Provincias Cautivas*, es decir, lograr que se efectivizara la disposición del Tratado de Ancón que ordenaba dirimir la posesión de Tacna y Arica por medio de un plebiscito (Dulanto 1947: 492-499). A partir de julio de ese año, se empezaron a formar partidas montoneras en los departamentos del norte, como Lambayeque, La Libertad, Piura y Cajamarca. El centro de la insurrección estuvo en los departamentos de Piura y Cajamarca, desde donde se formaron montoneras, respaldando la figura del general de la Breña.¹²⁵ El Gobierno respondió enviando fuerzas que terminaron desorganizando a las montoneras y pacificando momentáneamente tales

¹²⁴ En algunos periódicos limeños se presentó de manera muy crítica las acciones de la División Parra en Huanta. En *La Luz Eléctrica*, se criticó la medida de Domingo Parra de requisar el ganado de las poblaciones iquichanas, a fin de obligarlos a que entregaran las armas de guerra que tenían en su poder. En un editorial de diciembre de 1896, se escribía que por orden de Parra se había tomado «ganado de los *pagos* y *comunidades* indígenas», pasando incluso por encima de una «multitud de cadáveres de ancianos, mujeres y niños», dejando «estancias, cerros y chozas convertidas en escombros carbonizados» (*La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 320. Lima, 12 de diciembre de 1896).

¹²⁵ La filiación cacerista del movimiento piurano se encuentra suficiente documentada en la prensa, pudiendo consultarse el diario *El Comercio*. Un artículo interesante de este diario, titulado *Bandolerismo en Piura*, del 3 de octubre de 1899 (edición de la tarde), trata sobre esta cuestión.

departamentos. Concluidos los combates, le cupo al Ministro de Gobierno José María de la Puente ofrecer al Parlamento las explicaciones del develamiento de tal movimiento, considerándolo motivado por «ese espíritu inquieto, descontentadizo é irreflexivo» de hombres que se lanzaron a «la revuelta pretendiendo hacer ostensible por tan reprobado medio su repugnancia al pacto de arbitraje celebrado con Chile». No eran según el Ministro expresión de una genuina revolución, sino «hordas que sin plan, sin cohesión, sin programa, aparecieron en varios puntos del norte del Perú» (Ministerio de Gobierno y Policía 1899: VIII).

La tercera coyuntura insurreccional se produjo al año siguiente, apareciendo nuevamente grupos montoneros en diferentes regiones del país. Debe tomarse en cuenta que este fue el único movimiento que pudo alcanzar dimensiones de consideración, provocando la movilización de varios cuerpos del Ejército para el desarme de las facciones beligerantes. Los caudillos de este intento revolucionario fueron Augusto Durand, Emilio Vizcarra, Guillermo Billinghurst y Andrés A. Cáceres. Los tres primeros habían formado parte del gobierno de Piérola. Billinghurst y Durand habían combatido al lado del *Califa* en la guerra civil que lo llevó al poder y eran parlamentarios de su partido hasta ese mismo año, sin embargo, rompieron con el gobierno al enterarse de los planes de Piérola de proponer como sucesor a Eduardo López de Romaña. Por su parte, el coronel Emilio Vizcarra, después de haber participado en la pacificación de Iquitos, fue nombrado Prefecto del departamento, por sus conocimientos del territorio. De los caudillos del movimiento, sólo Vizcarra y Durand tuvieron participación directa, liderando ellos mismos sus propias tropas. Vizcarra se lanzó desde Iquitos tratando de incursionar infructuosamente hacia Cajamarca y la Costa, pasando por Amazonas. Formó su ejército con los efectivos de la gendarmería y hombres de la región y obtuvo armamento militar gracias a la posición comercial privilegiada de Iquitos de cara al Amazonas (MGM 1900: 9). En lo que toca a Durand, su ejército se formó con hombres de Huánuco y los recursos de sus propiedades. Sus tropas buscaron caer sobre Lima, pasando por Cerro de Pasco y Junín, pero al ser descubiertas, se

dirigieron a Huaraz, ciudad de la que partieron para unirse a los grupos montoneros del norte, sin éxito alguno.¹²⁶

Otros focos montoneros aparecieron nuevamente en Cajamarca, pero también en Junín, Huancavelica, Cuzco, Ica, Puno y Arequipa. Nuevamente los escuadrones de caballería y los batallones de infantería fueron destacados para apoyar las fuerzas de la Gendarmería y la Guardia Civil, logrando dispersar a la mayoría de los insurrectos antes de finalizar 1899. A los pocos días de iniciado el gobierno de López de Romaña, el general Cáceres hizo un llamado a sus hombres movilizados exhortándolos a deponer las armas, aprovechando una amnistía que ofrecía el nuevo mandatario.¹²⁷ El último reducto insurreccional se centró en Amazonas, a cargo de Vizcarra, siendo reducido a inicios de 1900, cuando su líder encontró la muerte entre la población indígena de la región. En ese sentido, el gobierno de Piérola terminó en un connato de revolución política, sin que ello pudiera detener las reformas puestas en marcha, ni alterar las lealtades a su proyecto por el Ejército nacional nacido de la revolución de 1894-1895.

3.2. Las condiciones favorables para la reforma militar

Contando con el apoyo de un conjunto de jefes y oficiales leales y habiendo eliminado la oposición de sus enemigos políticos al interior del Ejército, el gobierno de Piérola decidió realizar la reforma de más hondas consecuencias en la historia de esa institución castrense. Las condiciones para llevarla a cabo eran óptimas. En primer lugar, el Ejército de Piérola no contaba con grandes y carismáticos caudillos con poder suficiente para oponerse a las transformaciones proyectadas. Por el contrario, los caudillos que lograron prestigio durante la revolución fueron de origen civil y, tan luego de concluidos los combates, capitalizaron su reputación para ser elegidos en el Congreso como lo hicieron Durand y Oré. Asimismo, el caudillo por excelencia del movimiento fue el mismo Piérola, era él el adalid y héroe de la

¹²⁶ Las referencias de las fuentes de estos acontecimientos se encuentran en el capítulo 8, donde tratamos con mayor detalle los intentos de Piérola por estabilizar políticamente el país a través de una política de control de armamento de guerra.

¹²⁷ El Manifiesto que ofreció el general Cáceres al país, publicado en *El Comercio* de 7 de octubre de 1899 (edición de la mañana) es muy revelador de la forma como se gestó la alianza entre los líderes del movimiento, sus diferentes intereses y, sobre todo, la posición final de Cáceres respecto al nuevo gobierno.

revolución, un hombre mito que habiendo cruzado el mar en una chalupa, había coronado su ambición con la victoria sobre un poderoso ejército profesional (Dulanto 1947: 415-417). Salvo el coronel Eduardo Jessup, ninguno de los jefes militares del ejército pierolista alcanzó alguna significación político-militar que pudiera revestirle del carisma suficiente para ser contrapeso a la nueva administración civil, siendo lógico que fuesen leales al Califa, incluso el mismo Jessup. Por su parte, los caudillos militares que en el pasado hubieran tenido poder considerable para oponerse a las reformas fueron precisamente hombres del anterior gobierno, sus grandes hazañas durante la Guerra del Pacífico, especialmente durante la campaña de la Breña, terminaron siendo opacadas a fines de siglo por su defensa férrea a la política monopolista de Cáceres.¹²⁸

En segundo lugar, los militares, como grupo social, quedaron sumamente desprestigiados al concluir la guerra civil. Los gobiernos del Segundo Militarismo lograron congregarse un núcleo importante de militares leales a su proyecto de controlar el país, marginando a otros grupos sociales y políticos del poder¹²⁹. En torno a la figura de Cáceres se había logrado algo que pocos gobiernos militares habían conseguido durante el siglo XIX: fortalecer los vínculos corporativos de los hombres de armas y dirigirlos hacia la defensa de un proyecto caudillista. Precisamente la defensa corporativa de un régimen que fue percibido como autoritario y corrupto, terminó por desprestigiar a los hombres de uniforme. Los militares en su conjunto, tuvieron su más oscura hora a fines de siglo, siendo vistos como bárbaros, seres incontrolables en el uso de la violencia, ambiciosos hombres con tendencias autoritarias. Un artículo de la revista *La Luz Eléctrica* es sintomático de esta visión que no sólo consideraba negativamente a uno que otro oficial del Ejército, sino que hacía extensiva su apreciación a la institución castrense,

¹²⁸ El ejemplo más elocuente de ello era la misma figura de Cáceres: de héroe nacional entre 1883 y 1885, pasó a convertirse en villano diez años después. Un editorial de *El Comercio* sentenciaba esa transformación, indicando que «[c]uando en Diciembre de 1885, cayó el General Cáceres sobre Lima, con sus huestes desorganizadas y desprovistas de todo, y destruyó al ejército superior bajo todos los conceptos, que defendía la capital pudo palpar el poder de la opinión pública; fue ella la que le dio el triunfo [...] En el camino en que había entrado el General Cáceres [al retornar al poder] pocos hombres se detienen, y él ha ido hasta el fin. Tras las persecuciones, vinieron las torturas, los fusilamientos de prisioneros inermes, en seguida el saqueo organizado» (*El Comercio*. Lima, 26 de marzo de 1895, edición de la tarde).

¹²⁹ El objetivo final del proyecto político cacerista ha sido considerado por algunos como orientado por el patriotismo, dirigido hacia la recuperación de las provincias cautivas de Tacna y Arica, no obstante, sin desconocerse ello, lo cierto es que en sus administraciones se produjo una creciente tendencia a controlar el gobierno y concentrar el poder (Hidalgo et ál. 2005: 320).

considerándola como uno de los males del país: «El Ejército del Perú, es un déspota: él ha dispuesto y dispone de vidas y haciendas, de resoluciones y leyes, de cuerpos y almas [...]La responsabilidad del Ejército ante la Historia, es terrible. Él ha amenazado, ha debilitado y hecho retrogradar al Perú.»¹³⁰

En ese contexto particular no fue difícil que se volviera a re-articular un discurso en contra de lo que desde la mirada de los civiles había sido el principal obstáculo para el desarrollo del país: *el militarismo*. Como se ha visto en el capítulo anterior, desde mediados de siglo existía este discurso que avivado en contextos específicos, había facilitado en 1871 la victoria del primer presidente civil, Manuel Pardo. Sin embargo, este discurso no había terminado por socavar el poder político de los militares, siendo ellos gobierno incluso después de la derrota militar que significó la Guerra del Pacífico. Su derrota en manos de montoneras civiles cambió esta situación: el discurso anti-militarismo estará presente durante todo el mandato pierolista, deslegitimando cualquier incursión política de los hombres de uniforme contra el régimen civil. En un artículo de *El Callao*, en el que se comentaba el arribo de los constitucionalistas al poder, se hacía una invocación a impedir su retorno al poder Ejecutivo:

La reacción poderosa que ha derribado el despótico gobierno de Cáceres, no ha destruido simples formas repugnantes, sino que ha realizado, al cabo de tantos años de lucha estéril, la reorganización anhelada por los hombres de bien, matando el militarismo; incapacitando á los hombres de guerra para las tareas de la paz, y preparando de esa manera la iniciación en el opuesto tipo social, en el tipo industrial, que demanda un régimen civil, propio para las funciones de la libertad. Tal es la trascendencia de la revolución operada. Ya no existirá esa tendencia del cuerpo de guerreros á mantenerse frente al cuerpo de trabajadores en proporción más considerable.¹³¹

Sin embargo, no solo se hacía escarnio contra las ambiciones políticas de los oficiales del Ejército y su tendencia a tomar el poder, pues, como en el pasado, no resultaba complicado cuestionar sus propias competencias profesionales. Oficiales

¹³⁰*La Luz Eléctrica*. Año VIII, N° 386.Lima, 19 de marzo de 1898.

¹³¹*El Callao*.Callao, 27 de marzo de 1895, reproducido en *El Comercio*.Lima, 28 de marzo de 1895, edición de la tarde.

sin cualificación profesional, ingresados al Escalafón del Ejército, sea por vínculos políticos, padrinazgos o simple suerte, en el contexto de las interminables guerras civiles, era el estereotipo del militar a fines de siglo. En ese sentido, en otro artículo de *La Luz Eléctrica* se consideraba que «[l]os conocimientos y la vocación no son por cierto lo que lleva al cuartel mayor número de hombres», los militares resultaban ser aquellos que, a falta de capacidad para otra ocupación, eran impulsados a «tomar las armas como un empleo cualquiera en el que sin amor verdadero a la profesión, ni espíritu militar», terminaban vegetando en los cuarteles y llevando «al cinto una espada que jamás aprendieron a manejar». Las revoluciones políticas, habían permitido que a la lista de oficiales ingresase incluso «el que ha perdido hasta sus derechos de ciudadano y muchas veces el que la sociedad arrojó de su seno»¹³².

Este discurso contra los militares de oficio fue denunciado por el periódico pro-cacerista, *La Opinión Nacional*, deplorando en 1895 que en el nuevo régimen no sólo se lanzaban invectivas contra el régimen caído, sino que «con el mal disimulado desafecto que se manifiesta á la profesión militar, se la está desprestigiando, imitando al leñador que hendía su hacha en la rama que lo sostenía».¹³³ La beligerancia de este discurso podía ser resentido incluso por los propios militares afectos al régimen pierolista y comulgantes con sus propuestas reformistas. El coronel Raúl Scamarone, militar cercano al *Califa* y a su política, consideraba que «en la prensa, en la tribuna, en los círculos y en todas las manifestaciones públicas flota el espíritu antimilitar» de tal magnitud que el militar se encuentra «algo decaído por la atmósfera malsana que nos rodea»¹³⁴.

En tercer lugar, al ser considerados los militares como conjunto, su imagen como señores de la guerra quedó seriamente erosionada al ser derrotados por grupos montoneros, es decir, civiles sin experiencia militar verdadera, mal armados, y carentes de organización bélica. Esos militares que, después de haber gobernado el país por espacio de setenta años –casi sin interrupción–, no habiendo sido capaces de coronar la victoria del país durante la Guerra del Pacífico, terminaban siendo obligados a capitular ante las milicias amateurs del ejército pierolista, a pesar de disponer de todos los recursos del Estado (Villanueva1971: 61). Así, en un editorial

¹³²*La Luz Eléctrica*. Año V, N° 253.Lima, 31 de Agosto de 1895.

¹³³*La Opinión Nacional*. Lima, 13 de setiembre de 1895.

¹³⁴*Revista Militar del Perú*. Año 1898, N° 2, p. 19 citado en (Toche 2008: 26).

de *El Comercio*, al poco tiempo de la caída del gobierno, se oponía el poderío del ejército cacerista, «de cuatro mil hombres, bien organizado, perfectamente armado y abundantemente municionado», impotente a pesar de su superioridad militar, ante el accionar de los ciudadanos «desprovistos casi por completo de organización militar, con armamento defectuoso y heterogéneo, escasos de municiones»¹³⁵.

En cuarto lugar, este discurso negativo predominante estuvo aparejado por el deterioro de las condiciones materiales de los oficiales, incidiendo en el estatus social de los mismos. Como mostró Víctor Villanueva hace muchos años, durante el gobierno de Piérola se llega al nadir de los niveles remunerativos de los militares. Los sueldos de los altos jefes del Ejército (desde coronel hacia arriba), ya fuertemente disminuidos luego de la Guerra del Pacífico, fueron reducidos aún más a fines de siglo, colocándose por debajo de las remuneraciones de las altas autoridades del clero, el Poder Judicial y otras autoridades políticas. Aunque durante la administración de Piérola, los ingresos fiscales se multiplicaron por dos, permitiendo el aumento de los haberes de los funcionarios públicos (fluctuando entre un 15 y 50%), en el caso de los militares, sus remuneraciones no mostraron aumento alguno. Así, dentro de los altos puestos de la administración del Estado, los jefes militares se encontraban en una posición subordinada, afectando así su estatus dentro del mundo de las clases dirigentes del país.¹³⁶ Esto no dejó de ser observado por algunos defensores de los hombres de uniforme, como el periódico *La Opinión Nacional*. Este diario, fiel defensor de los militares caceristas reclamaba por aquella “escala mezquina de sueldos, que condena á miseria á los honrados y que fatalmente corrompe á los inescrupulosos”, evitaba que los hombres de uniforme ocuparan «el rango superior, altivo é independiente, que su mismo levantado carácter é importante misión les discierne»¹³⁷.

En ese sentido, la situación de precariedad de los oficiales del Ejército no sólo era relativa a su posición respecto a otros funcionarios del Estado, pues sus bajos salarios les impedían a vivir con el «decoro» que les correspondía por su función.

¹³⁵ *El Comercio*. Lima, 23 de marzo de 1895, edición de la tarde.

¹³⁶ Según Víctor Villanueva, la escala de remuneraciones de los altos funcionarios públicos era a siguiente: Clero 550, Poder Judicial y administración pública 330, y el Ejército y la Marina, 212. El sueldo de los Ministros ascendía a 600, mientras que al presidente le correspondía 3000 (Villanueva 1973: 125).

¹³⁷ *La Opinión Nacional*. Lima, 16 de setiembre de 1895.

Uno de los problemas que aquejaban a los militares resultaba ser la compra de la indumentaria de su rango (uniforme, espada, galones); esta por lo general era importada y vendida por comerciantes a crédito con precios elevados e impagables con los sueldos de la época, por lo cual, las pensiones y sueldos de los oficiales quedaban gravados para la amortización de la deuda.¹³⁸ Además, muchos oficiales pasados a la condición de indefinidos y dados de baja darían una imagen de penurias: «¿cómo será posible que se les condene á perpetua escasés rentaría y á la angustia de sus hogares, mientras están en las filas, y cuando salen de ellas, por indefinida al hambre vergonzante, y si es por muerte, á la degradación de su viudez y de sus hijos?»¹³⁹. Los recortes fiscales posteriores a la Guerra del Pacífico habían reducido la pensión de los oficiales indefinidos a la tercera parte del haber en actividad.¹⁴⁰

En ese contexto, Nicolás de Piérola no encontró mejores condiciones para la reforma del Ejército peruano. Militares debilitados y desprestigiados como cuerpo, sin líderes con la suficiente capacidad para oponerse a las propuestas del nuevo gobierno. Asimismo, tras la victoria en una cruenta guerra civil, en la que se había hecho uso de un discurso fuertemente regenerador, existía una atmósfera favorable para la implementación de grandes reformas que cambiaran un pasado amargo. Esto era evidentemente cierto para la institución castrense, pues considerada desde mediados de siglo por parte importante de los políticos civiles como un lastre para el desarrollo del país, su reforma radical se hacía inaplazable. Sin embargo, a pesar del fuerte discurso anti-militar, diferentes actores históricos, civiles así como militares, mostraron especial preocupación por reformar el Ejército peruano, de allí que se pueda afirmar que durante el gobierno pierolista existía un importante consenso para acabar con el ejército caudillesco decimonónico y remplazarlo por otro moderno y profesional.

Formaban parte de este consenso políticos e intelectuales respetados y vinculados al gobierno de Piérola, como Joaquín Capelo, quien en el mismo año de

¹³⁸ *Ibíd.* y *La Opinión Nacional*. Lima, 5 de mayo de 1897. En este último ejemplar de esta publicación se clamaba por «liberarlos [a los oficiales del Ejército] de la eterna condición de esclavos de sus proveedores». Esta propuesta fue recogida por los reformadores militares del pierolismo, pues como se verá en el capítulo dedicado a la Justicia Militar, el Código Militar de 1898 estableció la prohibición de gravar con préstamos los haberes de los oficiales, quedando sin efecto cualquier acto que se realizara en ese sentido.

¹³⁹ *La Opinión Nacional*. Lima, 16 de setiembre de 1895.

¹⁴⁰ *RMN*. Año I, N° 15. Lima, 15 de octubre de 1888, p. 334.

la revolución publicó en las páginas de su *Sociología de Lima*, diversas propuestas encaminadas a la modernización y profesionalización de la carrera militar como se ha visto anteriormente.¹⁴¹ Políticos importantes del Partido Civil que luego alcanzarían la más alta magistratura del Estado, como Eduardo López de Romaña y Manuel Candamo, eran también conscientes de la necesidad de reformar las instituciones militares. Así, en el debate para la aprobación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio en 1898, ambos políticos, a la sazón senadores, aunque consideraban que el servicio en el Ejército reducía los brazos a la industria y mentes jóvenes en los centros educativos, no cuestionaron la importancia de la institución y la reforma que se estaba llevando a cabo, dando así su voto a favor del proyecto de Ley enviado desde el Ejecutivo.¹⁴²

Comulgaban en esta dirección también viejos y jóvenes militares. Entre los primeros, se encontraba Tadeo Simeón Antay, coronel graduado que había pasado a la condición de indefinido en 1893 (MGM1897: Anexo 17). Desde las páginas de *El Comercio*, Antay escribió diversos artículos a favor de la reforma del Ejército, sobre la precariedad del país en materia de defensa, el servicio militar y la reforma del cuerpo de oficiales.¹⁴³ Así también, estudiantes de la antigua Escuela Militar formada durante el primer gobierno de Cáceres, mostraban sus expectativas por una futura reforma del Ejército. En la revista *La Luz Eléctrica*, dos jóvenes ex cadetes de dicha Escuela¹⁴⁴, bajo los pseudónimos de Yamagata y el Oficial, escribieron artículos criticando la estrechez profesional de los oficiales en actividad y la necesidad de la implementación de cambios radicales en el Ejército. Uno de ellos escribía a los pocos días de inaugurado el gobierno de Piérola su expectativa por las modificaciones positivas que traería el nuevo régimen para con la institución castrense: «Abrigamos

¹⁴¹ En los tomos II y III de su *Sociología de Lima* Capelo hace importantes críticas y recomendaciones respecto a los hombres de uniforme (Capelo 1895, t. II y III).

¹⁴² Las discusiones sobre el Servicio Militar se verán en el capítulo correspondiente, sin embargo, adelantamos que estos parlamentarios, Eduardo López de Romaña y Manuel Candamo, flamantes representantes de la Oligarquía, más tarde presidentes del país por el Partido Civil, mostraron consideración positiva respecto a un Ejército reformado, lo cual mostraba una imagen diferente al anti-militarismo achacado a dicho partido (Cámara de Senadores 1898: 113 y 115-116).

¹⁴³ Para ver las propuestas y observaciones de este oficial indefinido, se puede consultar *El Comercio*, Lima, 1 de febrero de 1896, edición de la mañana; 22 de abril de 1896, edición de la tarde; 9 y 23 de setiembre de 1898, edición de la tarde.

¹⁴⁴ En el ejemplar de 31 de agosto de 1895, el editor presentaba a estos jóvenes oficiales: «Penetrados de la imperiosa necesidad de discutir la urgente reforma que reclama el Ejército, hemos dado cabida en las columnas de “La Luz Eléctrica” á varios escritos, hasta cierto punto técnicos, debidos á la pluma de dos jóvenes ex – alumnos de la extinta Escuela Militar» (*La Luz Eléctrica*. Año V, N° 253. Lima, 31 de Agosto de 1895).

la esperanza hoy que ha subido al solio presidencial el ilustre caudillo del Pueblo D. Nicolás de Piérola, que uno de sus afanes será la regeneración del Ejército, en virtud de la simpatía que siempre ha demostrado para esta institución»¹⁴⁵.

La reforma del Ejército era y había sido también una preocupación de los militares congregados en el Centro Militar y la *Revista Militar y Naval* durante las administraciones de Andrés A. Cáceres y Remigio Morales Bermúdez. Como se ha visto en el capítulo correspondiente, existió en los oficiales colaboradores de aquella publicación una genuina preocupación por una reforma que no lograron concretar, sea por los exiguos recursos fiscales de la postguerra o por las inercias institucionales de un Ejército del que ellos mismos formaban parte. Aunque proclives a la modernización de su institución, los militares más cercanos al cacerismo estuvieron excluidos de la propia reforma en tiempos de Piérola, al ser considerados como enemigos velados o declarados del *Califa*, razón por la cual tuvieron que esperar hasta la administración de Eduardo López de Romaña para participar en un proceso que se encontraba ya en marcha y del que no tuvieron total control. No fue menos importante la voz del periodista Andrés Avelino Aramburú, editor de *La Opinión Nacional* y defensor acérrimo del general Cáceres, los gobiernos del Segundo Militarismo y los militares caídos con la revolución pierolista. Dentro de la línea de su defensa, Aramburú problematizó una serie de tópicos respecto al Ejército, siendo su publicación una de las que más promovió (interesada o desinteresadamente) la modernización del Ejército.¹⁴⁶

Varios historiadores están de acuerdo que la prioridad de Piérola fue la de despolitizar a los díscolos oficiales del Ejército a través de la profesionalización de su carrera (Masterson 2001: 37-39, Villanueva 1973: 123-130, Toche 2008: 24-25). Ello resulta totalmente cierto, pues, desde el frente interno, la coalición de partidos de origen civil (el Demócrata y Civil), consideraba que el manejo del Estado debía recaer en organizaciones políticas civiles, las cuales siguiendo la lógica formal del gobierno representativo debían canalizar y subordinar los intereses de las elites

¹⁴⁵ *La Luz Eléctrica*. Año V, N° 255. Lima, 14 de setiembre de 1895.

¹⁴⁶ Será sin duda *La Opinión Nacional* la publicación periódica que trate con mayor interés los temas militares, manteniendo una línea de defensa respecto a los oficiales del Ejército, en especial, a los oficiales caceristas. Se puede consultar los siguientes ejemplares: *La Opinión Nacional*. Lima, 31 de agosto, 11, 12, 13, 16, 27, 28 de setiembre y 21 de octubre de 1895; 28 de marzo y 2 de julio de 1896; 23 de enero, 17 de abril y 5 de mayo, de 1897; y, 3, 8, 16 de febrero, 14, 23 y 24 de marzo de 1898.

regionales y locales (Partido Demócrata 1889: 26 y 28). Por el contrario, durante todo el siglo XIX los caudillos habían cumplido la función de articuladores de aquellos intereses, estableciendo precarias redes clientelares con diferentes facciones políticas a través de las cuales se acumulaban fracciones de los medios de la coerción disponibles para dirigirlos hacia guerras civiles con las que se dirimía el acceso al poder tanto del caudillo como de su red de alianzas. Una forma de articulación política que periódicamente se consumaba con una guerra, había imposibilitado la consolidación del Estado peruano y fortalecido a los actores locales, haciendo al país ingobernable, envuelto en recurrentes guerras civiles.

Según el proyecto de Piérola, sólo un Estado central fuerte que subordinara a las facciones políticas y los caudillos militares podía estabilizar políticamente al país. Para lograrlo, entre otras variables, era necesario que el ejercicio de la coerción se concentrara crecientemente en unas instituciones castrenses obedientes a la nueva coalición, anulando la capacidad de aquellos actores para convertirse en fuerzas beligerantes. En este esquema, los jefes militares cumplían una función central, debían ser alejados de la acción política y de las posibles alianzas que podrían construir fuera del Ejército, al mismo tiempo que resultaba indispensable que tornáranse en soldados del Ejército nacional (y no faccional), someterlos a una incuestionable obediencia al Estado para que, fundiendo sus intereses personales con los de la Patria, pudieran ejercer la violencia burocráticamente desde las instituciones estatales cumpliendo el papel de “expertos” (Huntington 1995: 23-24). Sólo unas fuerzas armadas robustecidas y leales al Gobierno podrían derivar la dirimencia violenta del conflicto político a las instituciones formales fortaleciendo el poder del Estado y de las élites políticas nacionales frente a otros actores sociales.

Era este un proyecto no sólo de carácter civil, sino también centralizador, un proyecto de modernización del Estado que pasaba por el acatamiento de su autoridad no sólo por los jefes militares sino también por las élites y actores regionales y locales. Sin embargo, para que los jefes militares y las instituciones castrenses cumplieran el rol que les estaba asignado se hacía necesario profesionalizarlas, mejorar sus capacidades coactivas, pero también, redirigir sus energías hacia preocupaciones estrictamente militares, dotándolos de un discurso ético-profesional

que privilegiara la obediencia al Estado y el aprendizaje de su profesión como principales preocupaciones.

Este proyecto centralizador y modernizador del Estado que pone en marcha Piérola no es potestativo solamente del Perú. Como ha puesto de manifiesto Alain Rouquié, desde fines del siglo XIX, en Sudamérica se produjo una fuerte tendencia por modernizar las estructuras estatales a través de una creciente profesionalización de sus fuerzas armadas. En este período, la mayoría de países de la región se insertan a un nuevo ciclo de expansión del sistema capitalista bajo un fuerte perfil exportador de materias primas, el cual permite la ascensión de unas oligarquías de carácter nacional, ligadas a este negocio y, por tanto, preocupadas por la estabilidad de su explotación. Es por ello que en los países en que se consolidó una oligarquía exportadora, se producen proyectos de modernización del Estado, teniendo como eje a las fuerzas armadas como garantes del orden interno (Rouquié 1984: 88-89, Bullick 1999: 58-59). Entonces resulta evidente que las transformaciones globales del Estado peruano y del Ejército que permiten la concentración del ejercicio de la violencia, que se observaran en los siguientes capítulos, se encontraban atadas a este proceso de creciente integración en la economía capitalista mundial.

Pero la despolitización de los militares y la estabilización de la paz interna es sólo una parte de los condicionantes de la reforma, pues consideraciones internacionales tenían similar importancia. El descalabro de la Guerra del Pacífico dejó dos importantes legados para los políticos de fines de siglo: en primer lugar, había sido una dura constatación de que el poderío de la antigua capital del Imperio hispánico en Sudamérica, sólo era un recuerdo lejano, dejando claro que el Perú en las condiciones de la pre-guerra era un país sin capacidad para defenderse de sus vecinos. En segundo lugar, la derrota había dejado abierto el problema de la posesión definitiva de los territorios de Tacna y Arica, provincias peruanas que, bajo las disposiciones del Tratado de Ancón (1883), quedaron en posesión de Chile, hasta que un plebiscito resolviera a cuál de los dos países pertenecerían a perpetuidad.

Respecto a la primera premisa, en la *intelligentsia* limeña rondaba una sensación de precariedad y de indefensión frente a sus vecinos que se hacía más preocupante en tanto que el Perú tenía diferendos limítrofes en todas sus fronteras.

Diversos actores de la época dieron voces de alarma denunciando que en el Subcontinente se estaba configurando un escenario de precaria *paz armada*, como sucedía en la misma Europa. En las publicaciones de Lima, se veía con ansiedad un proceso armamentístico en la región que podría generar las desconfianzas suficientes para desencadenar un enfrentamiento general. Por ejemplo en *La Luz Eléctrica* un editorial alertaba que no sólo en Europa «la paz armada anuncia la guerra», pues «[t]odas, ó casi todas las repúblicas latino-americanas, están actualmente amagadas por el bélico ardor»; América acusaba esas terribles tendencias, «repleta sus arsenales de fusiles, balas, bayonetas y cañones; coloniza sus mares con blindados cruceros y torpederas; arrebatada de sus sembríos, de sus talleres, de sus escuelas, de sus hogares, á sus agricultores, á sus artesanos, á sus estudiantes y a sus padres de familia, para llevarlos del cuartel al campamento y del campamento a la frontera.»¹⁴⁷ El connato de guerra entre Chile y Argentina por las tierras de la Patagonia sólo era una muestra de lo que podría suceder en ese contexto y una advertencia para el Perú de los peligros de un posible enfrentamiento, como lo consideraba el coronel indefinido Tadeo Simón Antay en 1896:

Las naciones más poderosas de Europa han sostenido el antiguo: Si vis pacem para Bellum, el principio siguiente: «en el estado actual de la civilización, el pueblo más avanzado debe ser á un tiempo el más deseoso de la paz y el más dispuesto para la guerra» [...] Desde que el Brasil, Chile, la Argentina, Bolivia y el Ecuador, se arman y reorganizan con vertiginosa rapidez sus ejércitos, nosotros nos hallamos inermes y estacionarios al borde de un volcán próximo á hacer su erupción. Por otra parte ¿quién podrá garantizarnos que en el caso de estallar la guerra entre las repúblicas Argentina y Chile no tuvieran éstas ocasión de librar combates y batallas en territorio peruano?»¹⁴⁸

Asimismo, esta situación de las relaciones internacionales en la región no era la más halagüeña para las pretensiones diplomáticas peruanas, centradas principalmente en la recuperación de las provincias de Tacna y Arica. Resultaba preocupante el acercamiento diplomático de Bolivia hacia Chile, el cual marcaba un entendimiento orientado a solucionar las reclamaciones bolivianas en detrimento de la posición del Perú, pues «Bolivia, nuestra desleal aliada, ha firmado pactos contra nuestra vida y

¹⁴⁷*La Luz Eléctrica*. Año V, N° 252. Lima, 24 de agosto de 1895.

¹⁴⁸*El Comercio*. Lima, 1 de febrero de 1896, edición de la mañana.

nuestra propiedad»¹⁴⁹. Pero las desavenencias no sólo se presentaban con Bolivia, las fronteras con Brasil, Colombia y Ecuador, generaban no poca preocupación. En los diarios limeños existía la imagen de un Perú fuertemente amenazado por las pretensiones de sus vecinos (Barclay 2009: cap. 9), como se advertía desde las páginas de *La Opinión Nacional* en 1895: «En las Relaciones Exteriores, á nadie se le oculta, que jamás el Perú se encontró más agobiado, no menos apercebido para sus arreglos internacionales; oprimido por círculo de fuego, cada cual quiere para sí una parte de nuestro mutilado territorio, olvidando tradiciones, afectos, principios y sólo inventando cuestiones, que den razón al odio y á la envidia.»¹⁵⁰

Entonces, consideraciones respecto a la estabilidad política interna, así como la delicada posición geopolítica del Perú, orientaban a fines de siglo hacia una reforma radical del Ejército que convirtiera en realidad los mandatos de la Constitución, a saber, el mantenimiento de la independencia y soberanía del país y el control del orden público. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de lo que había sucedido durante los gobiernos del Partido Constitucional, la reforma del Ejército se encontraba bajo la tutela de una nueva élite política civil que había derrotado militarmente a los propios hombres de uniforme. El gobierno de Piérola no encontró mejor manera para conseguir tal objetivo que contratar a oficiales extranjeros, bajo la experiencia de que los militares peruanos habían sido incapaces de reformarse a sí mismos. El país al que se escogió como modelo para la modernización del Ejército peruano fue Francia, contratándose una misión militar liderada por Paul Clément.

3.3. Las armas de la reforma: la contratación de la misión militar francesa

Las razones que motivaron la contratación de una misión militar específicamente francesa aún son una incógnita. Los historiadores peruanos y extranjeros que han reflexionado sobre la modernización del Ejército peruano a fines de siglo se han preguntado en más de una ocasión por qué Nicolás de Piérola escogió una misión militar de origen francés, en vez de una alemana, considerando que desde la Guerra

¹⁴⁹*El Comercio*. Lima, 22 de abril de 1896, edición de la tarde.

¹⁵⁰*La Opinión Nacional*. Lima, 2 de diciembre de 1895.

Franco-Prusiana (1870-1871) hasta el fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el Imperio alemán fue considerado como la mayor potencia militar en el mundo. Creyéndolo así, el gobierno chileno había contratado en 1885 los servicios del oficial alemán Edwin Körner y luego la asesoría técnica de una misión militar alemana en 1895 (Camacho 2011: 42-43). Para poder explicar las razones que motivaron a Piérola en esta decisión sería necesaria una investigación ad hoc, y no siendo el tema central en la nuestra, no intentaré dar una respuesta ni remotamente concluyente.

Atendiendo esta interrogante, Víctor Villanueva ha dado una serie de posibles móviles que no podemos omitir, ni dejar de discutir. Según Villanueva, la primera razón pudo estar motivada por la decisión del enemigo. Habiendo sido contratados por Chile oficiales alemanes para asesorar la reforma de su ejército, se colige que el presidente Piérola optó contratar asesores militares de diferente nacionalidad que los de sus enemigos. Se ha sugerido, en segundo lugar, que podría haber sido la misma Alemania quien se hubiera negado a ofrecer sus oficiales para asesorar militarmente a dos países rivales (Villanueva 1973: 126). En contraste podría argüirse que tanto el Perú como Chile tuvieron antes de 1895 simultáneamente asesores militares alemanes: Carlos Pauli, contratado por el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y Emil Körner en Chile. Sin embargo, Körner y Pauli habían sido contratados por los gobiernos de ambos países, a título personal y no como representantes del ejército del Estado alemán (Camacho 2011: 42-43, Hidalgo et. al 2005: 336). En tercer lugar, Villanueva indica que consideraciones de orden no estrictamente militar pudieron asimismo pesar sobre el Presidente para optar por Francia antes que Alemania. Observaciones de carácter cultural y de tradiciones políticas, acercaban a la élite peruana y al mismo Piérola más a Francia que Alemania. Mientras que la primera era un país republicano y católico, Alemania tenía un gobierno monárquico y se profesaba una religión protestante como la oficial (Villanueva 1973: 126). Thibaud Saint John ha subrayado recientemente la fuerte influencia que Francia produjo en América Latina durante todo el siglo XIX. Existiendo vínculos entre sus propios sistemas políticos y admiración por los grandes hechos y hombres de Francia (indiscutiblemente Napoleón I), había una mayor afinidad cultural entre ambos países que incluso en 1921 era reconocido por un agregado militar francés como un «*sentiment très sincère*

de consanguinité latine» (Bullick1999:59,Saint John 2007: 25; la cita corresponden a Saint John loc. cit.).

La última razón que Villanueva considera plausible fueron los vínculos que Piérola tenía con Francia a través del financista judío francés Augusto Dreyfus desde la firma del famoso contrato que llevó su nombre en 1869 (Villanueva1973:126). No es secreto que durante algunos de sus exilios pasase Piérola temporadas en Francia y se especula que Augusto Dreyfus fue su protector en tales estadías. De ser cierto esto, no contradice en absoluto por otra parte que el *Califa* tuviera vínculos de afinidad cultural con Francia, pues según uno de sus biógrafos Piérola tuvo contactos con parte de la intelectualidad parisina, asistiendo al funeral de Ernest Renán. Aunque sea difícil de aquilatarsi la influencia de Dreyfus fue determinante en la toma de una decisión tan trascendente como la contratación de la misión militar, lo cierto es que Piérola fue un gran admirador de la cultura francesa, a la que consideraba además que refinada, sinónimo de civilización y progreso.¹⁵¹

No se ha dejado de señalar también que la situación militar de Francia luego de la guerra Franco-Alemana, ofrecía ciertos atractivos para el Perú. En primer lugar, luego de la derrota, el Ejército francés había sido radicalmente reformado, dotándolo de instituciones más técnicas y de perfil altamente intelectual, pues se reformó completamente el Estado Mayor General y se fundó una Escuela Superior de Guerra como centro de la intelectualidad militar francesa (Huntington1985: 53-54, 57 y 60, Mc Neill 1988: 240-241). Estas modificaciones, entre otras, permitieron que, a fines de siglo, el Ejército francés recuperara su prestigio, aunque no el sitio que había ostentando antes de 1870 como la primera potencia militar en el mundo. Por otra parte, a pesar de sus evidentes deseos de revancha, la intelectualidad militar francesa orientó su doctrina militar de una manera práctica hacia la «defensa, la fortificación y la vigilancia de fronteras» (Rouquié1984: 91), tal vez no considerándose lo suficientemente fuerte para recuperar los territorios perdidos. En segundo lugar, esa creciente profesionalización del cuerpo de oficiales francés, durante lapostguerra, estuvo acompañada por su alejamiento de la política (Toche2008: 25). Durante la Tercera República, las antiguas familias aristocráticas, excluidas por sectores

¹⁵¹ Luego de su escape de la persecución por el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, Piérola marchó a Europa, llegando a París en 1891 permaneciendo allí hasta 1892.(Dulanto 1947: 377-378).

burgueses de posiciones políticas de importancia, tendieron a refugiarse en el Ejército, formando el grupo predominante de su oficialidad. Desde allí, desarrollarían un discurso despreciativo de la política, considerándola una actividad alejada de los valores del honor y de la consideración aristocrática, copada por los burgueses. Y aunque poseían prejuicios contra el republicanismo y las instituciones parlamentarias, la oficialidad aristócrata no las cuestionaría violentamente, siendo por el contrario obedientes del poder civil, en tanto que expresaba el orden, la ley y al Estado (Villanueva 1973: 126-127).

La reconstitución del Ejército francés luego de una estrepitosa derrota, así como la profesionalización y despolitización de sus oficiales debieron generar en el presidente Piérola una buena impresión y darle adicionales motivos para escoger a este país como modelo para el propio Ejército peruano. Compartiendo una similar situación de derrota, poseyendo ambos el deseo de la revancha y de recuperación de territorios perdidos, el Perú podría seguir el ejemplo de Francia, profesionalizando sus hombres de armas, alejándolos de la política y, ante la superioridad militar de sus enemigos, desarrollar doctrinas y prácticas de defensa ante posibles nuevas incursiones. Estas son las hipótesis que han barajado diversos autores en torno a los posibles condicionantes para la contratación de la misión militar francesa (Toche 2008: 25). Al margen de las explicaciones presentadas por estos autores, se pueden ofrecer una serie de indicios que podrían ayudar a clarificar esta interrogante en el futuro. Uno de estos indicios tiene que ver con las relaciones crecientemente tensas establecidas entre los oficiales peruanos y el instructor alemán Carlos Pauli.

Habiendo sido contratado por el gobierno de Remigio Morales Bermúdez para el asesoreamiento e instrucción del Ejército peruano, en tierras peruanas Pauli cumplió diversas tareas, entre ellas, la organización en 1894 de un Estado Mayor General siguiendo los lineamientos del moderno Estado Mayor prusiano, pináculo del profesionalismo militar teutón (Hidalgo et al. 2005: 332 y 336). No obstante este logro, diversos indicios conducen a inferir que la personalidad de Pauli se hizo poco grata entre los oficiales peruanos por una serie de gestos relacionados con sus tareas de instrucción. Por ejemplo, en 1893, se organizó en la pampa de Amancaes un simulacro de combate destinado a mostrar al recién llegado el grado de pericia militar del Ejército peruano. Y aunque el ejercicio estuvo dirigido por jefes militares

peruanos considerados experimentados, «encanecidos bajo el techo del cuartel»(los coroneles Norberto Eléspuru y A. Salcedo), el coronel alemán hizo notar su malestar frente al despliegue del Ejército peruano: «expresó el Coronel Pauli, sino disgusto en su semblante muy poca satisfacción, y entre otras palabras que le oímos, dijo: “que el Ejército peruano necesitaba una organización completa.”»¹⁵²

Los militares peruanos guardaron en su memoria institucional cierta malquerencia hacia Pauli, como lo manifestaba un artículo conmemoratorio del arribo de la Misión Militar Francesa de 1946: «la opinión del Ejército antes que la del nuevo Gobierno de Piérola no tuvo simpatía por los métodos y el espíritu militar que habían de implantarse con el instructor Pauli»(Anónimo 1946: III). Esta malquerencia no era desconocida en la prensa de fines de siglo XIX, pues en opinión de los redactores de la revista *La Luz Eléctrica*: «Se despidió á Pauli, porque el Ejército no se había dejado reorganizar».¹⁵³ Sin embargo, ello no era motivo suficiente para renunciar a los servicios de Pauli, sobre todo si se considera que este había luchado al lado de Piérola en la guerra civil, dejando su posición de asesor militar durante el segundo gobierno de Cáceres (Dulanto 1947:424-428)¹⁵⁴. Aunque este acto debió comportar la gratitud del nuevo régimen, Saint John considera que habría sido precisamente la deslealtad del oficial teutón un motivo para desconfiar de él. Es más, habiendo sido contratado por sus rivales políticos y no gozando de la garantía del Estado alemán respecto a sus servicios, le restaba a Piérola solo un pretexto para rescindir el contrato de Pauli, esta oportunidad se produjo en junio de 1896, cuando el coronel Pauli publicó en *El Comercio* parte de las discusiones sobre la estrategia que se debía llevar a cabo para sofocar la revolución federalista de Loreto.¹⁵⁵ La infidencia de Pauli le costó el arresto en el fuerte de Santa Catalina y, aunque fue puesto en libertad al cabo de pocas horas, es seguro que se granjeara el desafecto del Gobierno y del mismo *Califa*.¹⁵⁶ Rescindido su contrato en el mes de setiembre, Pauli marchó a Europa explicando el Gobierno haber tomado esta

¹⁵² *La Luz Eléctrica*. Año V, N° 252. Lima, 24 de agosto de 1895.

¹⁵³ *La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 313. Lima, 24 de octubre de 1896

¹⁵⁴ Resulta interesante que Pauli siguió los mismos pasos con los que había procedido en Chile su compatriota, Emil Körner. Este habiendo sido contratado por el presidente Balmaceda, no dudó en abandonar al gobierno y apoyar las fuerzas insurgentes que terminaron derrocando aquel gobernante. Como recompensa, Körner se convirtió en un hombre poderoso en nuevo régimen y la llave de entrada para la llegada de la misión militar alemana que arribó al país austral en 1895 (Rouquié 1984: 91).

¹⁵⁵ *El Comercio*. Lima, 3 de junio de 1896, edición de la tarde.

¹⁵⁶ *El Comercio*. Lima, 6 y 8 de junio de 1896, edición de la tarde.

decisión en virtud de la imposibilidad del coronel germano de «ponerse cuanto antes al corriente del idioma castellano, para enseñar en la Escuela Militar en este idioma [y] no lo ha hecho hasta la fecha» (MGM 1896: 3-4).

En una línea paralela, el gobierno de Piérola tuvo una política de enviar a Europa a oficiales peruanos para que observaran los progresos del Viejo Continente en el campo de las armas y la organización militar. Así, al poco tiempo de caído el régimen de Cáceres, se comisionó al coronel Teodoro Seminario para que realizara estudios sobre los ejércitos europeos, marchando específicamente a la Escuela de Saint-Cyr y a Bruselas.¹⁵⁷ Al término de su estadía, Seminario publicó un opúsculo dirigido al Presidente y titulado *Consideraciones generales sobre los ejércitos del continente europeo*, en donde hacía observaciones muy generales sobre la aplicación del nuevo armamento en las acciones de guerra. Si sus observaciones durante su estadía en Francia tuvieron algún peso en la decisión de Piérola, parece ser que las emitió un informe reservado, pues en ninguna línea de su opúsculo menciona una particular consideración por el Ejército galo (Seminario 1895).

El inicio de las negociaciones para la contratación de la Misión Militar Francesa se iniciaron al año siguiente, en febrero de 1896, según se puede observar de la comunicación consular francesa, por lo menos unos cuatro meses antes del exabrupto del coronel Pauli, lo que demuestra que Piérola tenía en mente escoger a Francia con anterioridad (Saint John 2007: 19). El contrato se firmó el 16 de setiembre de 1896, habiéndose designado a José Canevaro como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú para entablar el acuerdo. Algo que resulta interesante constatar es que a pesar de las recomendaciones desfavorables del Cónsul de Francia en Lima, el Estado francés aceptó de buen grado la solicitud peruana, considerando que el envío de una misión militar a Sudamérica constituía una forma positiva de aumentar su presencia en la región, contrabalanceando la influencia que habían logrado pocos años antes sus rivales Alemana e Italia, en Chile y Argentina respectivamente. La aceptación de la solicitud peruana comportaba una ventaja adicional, el posicionamiento de oficiales franceses en la instrucción y

¹⁵⁷ En la resolución de nombramiento se le ordenaba a Seminario verificar «estudios técnicos sobre armamento, organización y sostenimiento de Escuelas y Establecimientos anexos y en general todo lo referente al servicio militar en sus diversos ramos, en armonía con las exigencias de la guerra moderna» (*El Comercio*. Lima, 1 de junio de 1895, edición de la tarde).

modelamiento del Ejército peruano, ofrecía a este país la oportunidad de colocar privilegiadamente el armamento de sus industrias militares, obteniendo ventajas sobre los países competidores, especialmente Alemania. En ese sentido, la apuesta de los franceses por el Perú respondía a la lógica de competencia entre potencias en un contexto del expansionismo colonial europeo (Bullick 1999: 59-61, Saint John 2007: 28-32, Toche 2008: 25).

Cabe resaltar que la contratación de la misión militar francesa difería en gran medida, por su modalidad y garantía, de lo que había significado la contratación del instructor alemán Carlos Pauli. En el caso de este último, su presencia en el Perú era a título personal, habiéndose hecho la contratación sin el intermedio del Ministerio de Guerra de Alemania. Por el contrario, el arribo al Perú de la Misión Militar Francesa era el resultado de una negociación entre dos Estados, es decir, el contrato revestía carácter oficial, y a través de él se estipulaba la cantidad de oficiales, las tareas que les competían, los emolumentos correspondientes, los grados que se les confería en el Ejército peruano, y las cláusulas de renovación o recensión del mismo contrato. Asimismo, al corresponderle al Estado francés elegir entre sus oficiales aquellos que considerase adecuados para la misión, aquel asumía la responsabilidad del proceder de los mismos (MGM 1897: 6-9)¹⁵⁸. Para tal efecto se designó a cuatro jóvenes oficiales, todos con formación militar en los territorios coloniales franceses: Paul Clément, capitán de artillería, con diplomado en Estado Mayor y comisionado para trabajos geodésicos en Argelia y Túnez; Ernesto Claude Perrot, capitán de infantería y laureado con la medalla de honor de la campaña de Madagascar; Eduardo Dogny, capitán de caballería, instructor de dicha arma y veterano de las campañas de Argelia y Túnez; y, Armando Pottin, conde de Vauvineux, capitán de artillería, con estudios en la Escuela Superior de Guerra, y destacado para trabajos geodésicos en Túnez (Revista Militar 1946: s/n). El contrato estipulaba que la jefatura de la misión recaía en Paul Clément, quien sería ascendido inmediatamente al grado de coronel del Ejército peruano, mientras que sus tres compañeros obtendrían el grado de teniente coronel.

¹⁵⁸ Respecto a las observaciones de la conveniencia para el Perú de dicho contrato se puede consultar *El Comercio*. Lima, 31 de octubre de 1896, edición de la tarde.

El 7 de noviembre de 1896 desembarcaron en el Callao estos cuatro oficiales franceses, siendo recibidos por un secretario de la presidencia y un ayudante del Ministerio de Guerra. Habiendo sido reconocidos por la colonia francesa en el Callao, se reportaron ante el Canciller de la Legación gala en el Perú, Pedro La Combe. Por la tarde de ese mismo día, se dirigieron a la Capital poniéndose a las órdenes del Ministerio de Guerra y Marina. Ante su arribo al país, por lo menos dentro de la oficialidad ligada al Gobierno de Piérola hubo una buena disposición, como lo mostraron los asistentes a la cena de honor que los jefes militares peruanos ofrecieron a los recién llegados el 21 de noviembre (Anónimo 1946: VIII-IX). Cupo al coronel Eduardo Jessup ofrecer un discurso de bienvenida haciendo gala de esa admiración por las glorias de Francia que hemos reseñado líneas arriba y que se encontraba presente también en los militares peruanos. En su discurso Jessup brindó por la grandeza de Francia, «aquel país generoso» que «[e]n todos los tiempos nos exhibe la historia [...] como digno de imitación por su valor heroico, por su patriotismo ardiente, por sus brillantes glorias». Habiendo sido «la cuna de la Libertad del Nuevo Mundo por la poderosa influencia de sus ideas revolucionarias», Jessup reconocía al Perú como heredero de sus tradiciones políticas desde su nacimiento como República. Viejos vínculos unían a ambos países, no sólo en función de filiaciones políticas, así también en los propios militares peruanos existía una «antigua simpatía [...] para los militares que descienden de aquel genio inmortal que paseó su bandera por toda Europa en los albores del siglo (Anónimo 1946: X).

En las postrimerías de la centuria nuevos vínculos hermanaban a ambos países, uno y otro sufrían los sinsabores de una común situación de derrota. Sin embargo, Francia a pesar de los «colosales desastres», las «terribles e inmerecidas horas de infortunio», había logrado que su Ejército pudiera, «por sus propios elementos de vida, contrapesar el poderío de las naciones más fuertes», presentándose en aquella hora «sin disputa, como uno de los mejores del Mundo». El Perú un «pueblo joven, pero que también ha sido perseverante en la lucha por sus derechos» esperaba recomponerse de manera análoga de la derrota, para lo cual había solicitado la cooperación de los «ilustres camaradas del Ejército Francés» para recibir «aquella disciplina e instrucción facultativa que son necesarias para el respeto de los otros pueblos». Representando a los jefes militares cercanos a Piérola, Jessup ofrecía

«manifestaciones de armonía y de gratitud imperecedera» y brindaba por la «gloriosa Francia, por sus aguerridos jefes y oficiales» (Anónimo 1946: X).

Una vez instalados los miembros de la misión militar, se les encomendó diversas tareas. La más conocida ha sido y es la que desempeñaron organizando la Escuela Militar de Aplicación que luego de importantes modificaciones llevará el nombre de Escuela Militar de Chorrillos. Sin embargo, su labor como instructores militares fue una parte importante pero limitada de su acción sobre el Ejército peruano. Entre los objetivos del gobierno estaba la reforma total del Ejército y su modernización, lo que equivalía a una modificación radical de su organización y legislación. Para tal efecto, Piérola encomendó a Paul Clément la elaboración de un plan de reformas, nombrándose a su turno tres comisiones formadas por los militares franceses, oficiales peruanos y jurisconsultos nacionales, de las cuales Clément asumía la presidencia (Clément 1900: 11).

Cuadro 6: Comisiones de trabajo para la redacción de proyectos de Ley del Ejército (1897-1898)

Comisiones	Miembros	Proyectos de Ley	Objetivo
Primera Comisión	Coronel Julio Jiménez Teniente Coronel Eduardo Dogny Doctor Alfredo Gastón Doctor Miguel Antonio de la Lama Mayor Enrique Gonzales	Servicio Militar Obligatorio	Establecer las condiciones por las que los ciudadanos deben prestar sus servicio al Ejército
		Código de Justicia Militar	Prescribir las faltas, delitos y crímenes militares para imponer el castigo que impone la disciplina militar
Segunda Comisión	Coronel Enrique Varela Coronel Celso Zuleta Teniente Coronel Ernesto Perrot Mayor Luis Regla	Organización militar del territorio	Dividir el territorio en regiones militares para crear núcleos de Ejército suficientemente fuertes ante caso de guerra; instruir las reservas; facilitar las tareas de movilización
		Ley de Suministros	Establecer deberes de autoridades civiles y ciudadanos de ofrecer recursos en caso de guerra
		Organización del Ejército	Ordenar el número del Ejército permanente y el que corresponde a cada arma, “según su importancia en los ejércitos modernos
Tercera Comisión	Coronel Leoncio Lanfranco Coronel Ricardo Cáceres Teniente Coronel Armando de Vauvineux Mayor Alberto Panizo	Situación de los Militares	Fijar las garantías de los grados militares de los oficiales, condiciones de ingreso y ascensos
		Gastos Militares	Prescribe los derechos de sueldo, pensión, gratificaciones y montepíos en función del tiempo y los servicio

			prestados
--	--	--	-----------

Fuente: Clément, Pablo, *Legislación Militar*. Lima: Tipografía y Litografía de la Escuela Militar, 1900, pp. 11-14. Cuadro de elaboración propia

A cada comisión se le encargó la elaboración de un conjunto de proyectos de reforma en aspectos específicos del Ejército. Producto de sus trabajos, el Ministro de Guerra pudo anunciar al Congreso la existencia de seis proyectos de Ley orientados a la reforma total de la institución castrense (Clément 1900: 11-14). De ellos, sólo dos se convirtieron en ley durante el mandato de Piérola, el Código de Justicia Militar y la Ley de Servicio Militar Obligatorio, los cuales fueron aprobados por el Parlamento no sin presión del Ejecutivo a fines de 1898. Ambas leyes, de importancia capital para la institución castrense, serán al lado de la creación de la Escuela de Aplicación, el legado tangible del gobierno de Piérola al Ejército, por lo que en los siguientes capítulos serán objeto de análisis. Y aunque las reformas restantes se convertirían en leyes y empezarían a normar el accionar del Ejército en administraciones posteriores, resulta claro que mantendrán el esbozo trazado por los miembros de estas comisiones. En ese sentido, el diseño de Ejército peruano, inspirado en el modelo francés, se concebirá desde fines del siglo, como preocupación primera del gobierno de Piérola y de los miembros de la Misión Militar Francesa.

Si estas leyes buscaban cambiar la organización, administración, justicia y constitución del Ejército, no resultaba menos importante la dación de nuevos reglamentos que normaran, tanto la nueva forma de hacer la guerra, como las obligaciones cotidianas de los cuerpos del Ejército, ambas tareas encomendadas a la segunda comisión militar. Hacia el primer fin estuvieron orientados los nuevos reglamentos tácticos de las tres armas, los cuales debían ser empleados en la Escuela de Aplicación para la enseñanza de las modernas y científicas formas de combatir. Así, en 1897, el Ministro de Guerra informaba al Congreso, que «[l]os nuevos procedimientos tácticos, correspondientes á los modernos armamentos y á los preceptos del arte, imponían sin demora, el modificar los reglamentos para instrucción, empleo y servicio de los institutos de Artillería, Infantería i Caballería», razón por la cual se había procedido a la «traducción, arreglo y adaptación» de los «últimos reglamentos del ejército francés», que «al haber merecido aprobación

Suprema, lo son de nuestro ejército» (MGM 1897: 11). La instrucción y entrenamiento de acuerdo a los nuevos reglamentos tácticos formaba parte también de las obligaciones de los oficiales galos, lo que significaba a enseñarles a los militares peruanos a combatir *a la francesa*. Respecto a las obligaciones de cada uno de los puestos del Ejército, la segunda comisión redactó los reglamentos de servicio interior de los cuerpos de tropa, como los de guarnición, normas que fueron puestas en vigor en el gobierno de López de Romaña (MGM 1899: XII).

Ahora bien, a pesar del importante y arduo trabajo que les tocó realizar a los miembros de la misión francesa, no resulta extraño que su presencia generara resistencias, especialmente, entre los oficiales del Ejército peruano. Traídos por decisión del mismo Piérola, los oficiales franceses recibieron el respaldo de su administración, granjeándose la consideración de los posteriores gobernantes durante gran parte de la República Aristocrática, tanto por su suficiencia profesional, como por los logros organizativos que se empezaron a reconocer en el Ejército en la primera década del siglo XX.¹⁵⁹ Por lo menos durante la administración del *Califa*, los oficiales peruanos cercanos al gobierno, aparentemente mostraron entusiasmo ante la llegada de la misión, y si estas declaraciones no fueran sinceras, por lo menos, no adoptaron una manifiesta posición reactiva. Como se ha afirmado líneas arriba, existían condiciones inmejorables para la reforma del Ejército que los oficiales franceses estaban destinados a ejecutar.

Siendo los jefes y oficiales caceristas parte de la oposición al gobierno pierolista, resulta plausible que fueran ellos los primeros en criticar la presencia de la misión francesa, sin embargo, ninguno de ellos hizo un rechazo público a la contratación de los instructores galos. Desprestigiados, fuera de la institución o del país, poca resistencia real podían ejercer. Sus manifestaciones públicas giraron más en torno a la política nacional y sus actos estuvieron dirigidos predominantemente a socavar el gobierno de Piérola para retornar al poder. No obstante ello, no se debe pensar que al interior de las filas del cacerismo hubiera aquiescencia a una reforma dirigida por oficiales diferentes a ellos, su resistencia inicial se manifestó a través de

¹⁵⁹En 1901 el gobierno de Eduardo López de Romaña encomendó al coronel Paul Clément el puesto de Subjefe del Estado Mayor, ejerciéndolo hasta 1902, año en que partió fuera del país. A su retorno en 1906, la administración de José Pardo le confirió el grado de general de Brigada y le otorgó la jefatura de ese instituto (MGM 1901: 22, 1906: V).

la prensa, específicamente, del diario cacerista *La Opinión Nacional*. Tal como queda dicho arriba, el diario de Andrés Avelino Aramburú fue un fiel defensor de los intereses de los oficiales caceristas, de sus méritos profesionales y de su prestigio en pasadas campañas. Concordante con ello, la postura de este diario fue de rechazo a la presencia de la misión francesa y de reconocimiento de las capacidades de las glorias caceristas para emprender la reforma del Ejército peruano.

Al poco tiempo de conocerse la inminente llegada de la misión francesa al Perú, desde este diario se emitió un editorial en donde se la rechazaba categóricamente. Esta reacción se sustentaba en tres argumentos de carácter nacionalista: el primero giraba en torno a la lealtad de los oficiales recién contratados. Según Aramburú, sólo el principio de nacionalidad generaba en los militares lealtad para con el Estado, llevándolos incluso a sacrificar sus propias vidas, pues «[l]o que alienta, estimula y dignifica á la noble carrera de las armas es el sentimiento de nacionalidad». Por el contrario, el vínculo de los oficiales franceses con el Estado peruano se originaba simplemente en un contrato, una relación estrictamente comercial. Al no tener ese «supremo ideal [que] nace en el suelo», sus servicios no eran más que «alquiler de carne galoneada para entregarla al plomo», los llegaba a comparar con mercenarios o *condottieri*. El segundo argumento reposaba en la inutilidad de contratar oficiales extranjeros, en tanto que el Perú contaba con crecido número de oficiales veteranos de mil combates, con suficiente experiencia y conocimientos militares para poder enseñar a las nuevas generaciones los métodos de la moderna ciencia militar, proponiendo incluso «desafiar á los señores Oficiales que se han contratos en Francia, á un concurso con los nuestros, para que se vea la diferencia, si la hay, entre unos y otros». El tercer argumento indicaba que, aunque los oficiales franceses tuvieran conocimientos sobre la guerra moderna, aquellos eran puramente teóricos, dado que ignoraban totalmente «nuestro modo de ser social y económico, territorial y topográfico», factores necesarios para la guerra, de los cuales los oficiales peruanos eran poseedores¹⁶⁰.

La sospecha más grave que lanzaba Aramburú reposaba en la lealtad de los oficiales, llegando a afirmar que si entre las filas del Ejército francés existían traidores de su propia bandera, como el capitán Alfred Dreyfus, dejar que estos

¹⁶⁰*La Opinión Nacional*. Lima, 26 de octubre de 1896.

oficiales conocieran los secretos del país, conduciría a que «nosotros mismos, ponemos en riesgo nuestra seguridad»¹⁶¹. Si esta podía ser la posición de los oficiales caceristas expresada por *La Opinión Nacional*, sectores cercanos al civilismo, como *El Comercio*, apoyaban la medida adoptada por Piérola, considerando objetables los argumentos propuestos por Aramburú. En un editorial de ese diario se respondía que el mismo contrato firmado por el Ministro de Guerra de Francia era una garantía de la lealtad de sus oficiales, en tanto que implicaba relaciones bilaterales con el Perú. Es más, replicaba que al ser Francia «uno de los países que mejor organización militar tiene», con su concurso se podría superar las causas del desastre que había significado la Guerra del Pacífico «entre ella[s], no es posible negarlo, se cuenta la impericia militar. Nuestros oficiales, inclusive los de rango superior, carecían de escuela»¹⁶².

Otras muestras de resentimientos puramente nacionalistas se hicieron empleando el argumento del derroche de dinero en los honorarios que los instructores franceses comportaban. Por ejemplo en *La Luz Eléctrica* se escribía que «Francia nos envía sus mejores militares para que se burlen de nuestro carácter mientras recogen la lluvia de soles con que se les agasaja»¹⁶³. Los argumentos nacionalistas, como lo había puesto de manifiesto ya Aramburú, tenían como trasfondo el reclamo de que los oficiales extranjeros obstruían los beneficios que el Estado podía ofrecer a los nacionales, como lo entendía un artículo anónimo publicado por *El Comercio*: «Hace unos años todas las oficinas públicas, han sido invadidas por extranjeros con daño directo de los hijos del país, quienes se ven obligados á emigrar en busca de trabajo. Si los peruanos, estuviéramos en estado de conquista, nada diríamos al respecto, pero venir hoy, después de cerca de 80 años de vida independiente trayendo oficiales franceses [...] es el colmo!»¹⁶⁴

Los sueldos de los instructores franceses debieron ser motivo de especial cuestionamiento para los oficiales peruanos, si consideramos que los suyos eran insuficientes para mantener el decoro militar. Según el contrato, Paul Clément, el Jefe de la Misión, debía ganar 18 mil francos anuales, mientras que los otros tres

¹⁶¹ *Ibíd.*

¹⁶² *El Comercio*. Lima, 31 de octubre de 1896.

¹⁶³ *La Luz Eléctrica*. Año VIII, N° 379. Lima, 29 de enero de 1898.

¹⁶⁴ *El Comercio*. Lima, 11 de junio de 1898, edición de la tarde.

miembros recibían 12 mil cada uno. En su conjunto la misión costaba al erario peruano 15,600 soles, según cifras de Jorge Basadre, lo que implicaba que el sueldo mensual de Clément bordeaba los 430 soles, mientras que los honorarios de sus comandados importaban al fisco cerca de 290 soles. Estas cifras se encontraban por encima de los 212 soles mensuales que podían alcanzar los generales peruanos y eran percibidas por oficiales que en su propio país no tenían rango más que el de capitán (Basadre 2005, t. 11: 130). Otra razón de cuestionamiento pudo haber girado en torno a los grados militares que ostentaban en el Perú estos oficiales. Todos tenían el grado de capitán en el Ejército francés, mientras que Clément ostentaba adicionalmente un diplomado en Estado Mayor, al asimilarse al Ejército peruano, a este último le fue conferido el grado de coronel, mientras a los restantes el de teniente coronel. No resultaría extraño que ello generara resentimientos en jefes y oficiales veteranos que eran desplazados por jóvenes oficiales de rango inferior, extranjeros que además de las consideraciones especiales del Gobierno podían establecer relaciones de jerarquía con viejos militares encanecidos en los cuarteles. Un miembro de la Misión Militar Francesa recordaba en 1912 en la *Revue du service de l'intendance militaire* de París estos desafectos de los militares peruanos especialmente los caceristas para con los recién llegados:

Pero en el ejército donde, a través de las marcas de una cortesía exquisita y las protestas numerosas de devoción, se adivinaba una hostilidad sorda y un descontento profundo con respecto a estos aguafiestas, a estos "gavachos", a estos "gringos", entre los que por cierto los brillantes oficiales peruanos, productos de revoluciones sin número, políticos afiliados al partido del general Cáceres, llamado constitucional, no les eran necesarios; y muchos pensaban como el ministro chileno de la guerra, al cual se anunciaba el arribo de un oficial francés llamado por el gobierno de Santiago: los vencedores de los vencedores de Baylen tienen que hacer con un oficial francés¹⁶⁵.

¹⁶⁵ «Mais il y avait l'armée où, à travers les marques d'une politesse exquise et les protestations nombreuses de dévouement, on devinait une hostilité sourde et un mécontentement profond à l'égard de ces empêcheurs de danser en rond, de ces "gavachos" de ces "gringos", dont certes les brillants officiers péruviens, produits de révolutions sans nombre, politiciens affiliés au parti du général Cáceres, dit parti constitutionnel, n'avaient pas besoin; et beaucoup pensaient comme le ministre de la guerre chilien, auquel on annonçait l'arrivée d'un officier français appelé par le gouvernement de Santiago: les vainqueurs des vainqueurs de Baylen n'ont que faire d'un officier français.» (Guiot, 1912: 330-331) (La traducción es mía).

Sin plantearse frontalmente estas consideraciones negativas, las inercias a la reforma que proyectaba la misión francesa se hicieron notar tempranamente. Desde que las comisiones creadas en 1897 terminaron sus proyectos de ley, estos trataron de ser rechazados por algunos parlamentarios, especialmente los que atañían a la división militar del país y al servicio militar obligatorio. Respecto al primero, los críticos afirmaban que aquella división no se encontraba prescrita en la Constitución, por lo que era abiertamente anticonstitucional. Con relación al segundo, el diputado Santiago Giraldo publicó un folleto en el que hacía una fuerte crítica de la inaplicabilidad e injusticia de la ley del servicio militar obligatorio que se promulgó en 1898, afirmando que esta había sido hecha a instancias de una «Comisión de Letrados Militares», «iluminados por el faro de la Misión Clément», excluyendo de dicha labor al Parlamento bajo el argumento que «apenas podemos balbucear el abecedario de la Ciencia Militar» (Giraldo 1899: 5). Para el jefe de la Misión Paul Clément, ambas críticas eran excusas esgrimidas por agentes que representaban los intereses de militares contrarios a las reformas, eran por tanto «pretextos para disculpar su inercia, pereza ó mala voluntad y quedar rezagados, mientras se adelantan cada día más los ejércitos de todas las naciones extranjeras. Se empeñan esos enemigos del progreso y partidarios de la rutina en probar que no se puede dotar al país de una legislación nueva y completa» (Clément 1900: 8).

Otro tanto sucedía en la Escuela Militar regentada por los oficiales de la Misión, planteándose desde su fundación críticas acerca de la pertinencia de los estudios que se impartían en sus aulas. En una memoria institucional por el décimo aniversario de dicho plantel, su Director, Eduardo Dongy, recordaba que dicho instituto desde su apertura tuvo «que resistir á poderosas influencias contrarias á su progreso, que dificultaron mucho los esfuerzos de la Dirección y atrasaron su provechoso desarrollo.» Los nuevos métodos y obligaciones implicaban «un cambio total de hábitos y de costumbres», por lo que los nuevos cadetes una vez formados en ellos, al integrarse a los cuerpos del Ejército tuvieron que vencer «obstáculos de todo género, resistencia activa al principio pasiva después» de la «masa general poco inclinada á dejar paso al progreso con todo su séquito, de trabajo y fatiga.» (Escuela Militar de Chorrillos 1908: 2 y 4). No parece extraño que viejos oficiales formados en la rutina del cuartel y en los combates de las revoluciones, fueran reacios a que los jóvenes cadetes, recién salidos de la Escuela Militar, les enseñaran a hacer la guerra.

Los nuevos métodos de la moderna ciencia militar, como se verá en el capítulo siguiente, exigían un oficial activo, en continuo aprendizaje y entrenamiento

Antes de terminar este capítulo valdría reflexionar por qué los miembros del Partido Constitucional no paralizaron las reformas de la Misión Militar Francesa una vez concluido el gobierno pierolista. Es conocido que el sucesor de Piérola, Eduardo López de Romaña, además de acercarse al Partido Civil hasta convertirlo en gobierno, transó una alianza con el Partido Constitucional de Cáceres desde por lo menos de 1903, desplazando al Partido Demócrata que lo había llevado al poder (Basadre 1980: 61-66, Millones 2004:150-151). Sin embargo, resulta interesante constatar que ni Romaña, ni los presidentes del Partido Civil, ni sus aliados caceristas, buscaron detener las reformas ya emprendidas desde 1896 por la Misión (Basadre 2005, t.11: 131). Excluidos inicialmente de ellas, al retornar de manera secundaria al poder, los jefes y oficiales caceristas buscaron tener protagonismo en puestos importantes y de prestigio, como el de Ministro de Guerra y Marina encomendado a Pedro Muñiz por varios años desde 1903 o la Jefatura del Estado Mayor conferida a César Canevaro en 1902.

Desde estos cargos, no intervinieron de manera directa en los asuntos más técnicos de la reforma que fueron delegados por los sucesores de Piérola específicamente a los miembros de la Misión, sin embargo, algunos de ellos especialmente el Ministro Pedro Muñiz, fueron decididos propulsores de la renovación profesional en el Ejército¹⁶⁶. Ello puede deberse a que los mismos oficiales caceristas habían buscado una reforma del Ejército, aunque sin resultados reales durante el Segundo Militarismo. Es lógico pensar que para muchos de ellos siendo la reforma un hecho ya en marcha, la hicieran suya participando tangencialmente, no sin amortiguar sus efectos en los intereses de los militares que el partido representaba (Millones 2004: 156-160).

¹⁶⁶ Respecto al papel de Pedro Muñiz en la reforma del Ejército de la primera década del siglo XX, basta leer las memorias del Ministerio de Guerra y Marina para observar la continuidad con la política militar desde 1896 y los importantes cambios que se realizaron desde que inició su gestión en 1903 (MGM 1904, 1905, 1906 y 1907).

Capítulo. 4. Profesionalización y disciplinamiento de los oficiales

Cree acaso [el Ministro] que la *montonera*, actual merece el nombre de milicia? Propone que jefes que hasta ayer inéditos sean capaces de hacer siquiera regla de subalternos?.... Un jovencito vagabundo, llegó á Cieneguilla, entró á Lima y salió del cuartel con insignias de alferes, teniente, capitán ó sargento mayor. [...] Otro coronel ó comandante, parroquiano de cuantos bebederos existen, acosado por el hambre y por los acreedores, no tuvo más salida que la portada [de Cocharcas], figura al frente de un regimiento, de una brigada de artillería, de una de oficina, etc.¹⁶⁷

En todas partes donde late un corazón por el amor a la patria, donde hay un ciudadano que alberga patriotismo en el pecho, allí existe un soldado; y para que ese soldado sepa ir por el camino de la gloria, sepa vencer es preciso que se instruya y que aprenda porque la milicia es una ciencia y hay que aprenderla.¹⁶⁸

La reforma del Ejército iniciada durante el gobierno de Nicolás de Piérola tenía como uno de sus objetivos primordiales realizar una transformación profunda en el cuerpo de oficiales peruanos. Para la constitución de un ejército moderno resultaba indispensable *reformular* a los oficiales peruanos, eliminando el carácter de *ocupación* que había tenido la carrera de las armas y convertirla en una verdadera profesión, lo cual equivalía dotarla de un estatuto *científico* y ético, al tanto que mecanismos de selección, formación y regulación para sus practicantes. Como se ha visto, la carrera de las armas antes de esta reforma tenía un carácter *poroso*, en donde el Estado no tenía control sobre ingreso de los oficiales al Escalafón militar, no existían mecanismos que regularan meritocráticamente los ascensos y despachos militares y las instituciones de instrucción para oficiales eran extremadamente débiles,

¹⁶⁷ *La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 279. Lima, 29 de febrero de 1896.

¹⁶⁸ Discurso de Nicolás de Piérola en la inauguración de la Escuela Militar de Aplicación el 24 de abril de 1898, citado en (Basadre 2005, t. 11: 130).

egresando de ellas solo una minoría de la totalidad de los oficiales del Ejército peruano. Los débiles mecanismos institucionales con que contaba el Estado para regular la carrera de las armas, traían como consecuencia una escasa o pobre idoneidad o falta de maestría de los oficiales en el cumplimiento de sus funciones (salvo excepciones), escaso profesionalismo que iba paralelo con una fuerte politización del escalafón, siendo esta última, uno de los incentivos principales para el ingreso a la carrera de las armas.

Para acabar con este modelo decimonónico de *formación* de oficiales, el gobierno de Piérola diseñó con el apoyo de los miembros de la Misión militar francesa un plan para la profesionalización de los oficiales que incluía la constitución de centros de educación militar especializada, controlados por el Estado a través del Ministerio de Guerra, así como también la dación de leyes destinadas a la regulación de la carrera de las armas, las mismas que aunque proyectadas en 1897, solo pudieron promulgarse en el primer lustro del siglo XX. En virtud de esas reformas debía constituirse un *moderno* cuerpo de oficiales, democrático en su acceso, especializado y científico en su formación, meritocrático en sus ascensos, disciplinado en carácter, y políticamente subordinado al Estado. No debe escapar tampoco que solo el diseño de una reforma de esta naturaleza podía garantizar al Estado que se estaba erigiendo en este período la concentración de la capacidad de ejercer la violencia que lo pusiera muy por encima de otros actores sociales. Solo el mejoramiento profesional de los encargados de administrar la violencia, subordinados políticamente al Estado, y la concentración de conocimientos destinados a dicho fin, podría invertir la correlación de fuerzas entre la sociedad y el Estado, en favor de este último.

Este capítulo tratará de manera tangencial los proyectos de reforma de regulación de la carrera de las armas, centrándose en los mecanismos de profesionalización que se establecieron durante el gobierno de Piérola, específicamente, en el diseño e implementación de las técnicas de formación profesional que se desarrollaron en la Escuela Militar (inicialmente llamada de Aplicación). Como demuestra el título del presente capítulo, considero que este proceso de reforma tuvo dos dimensiones, una específicamente profesional, asentada sobre una concepción científica de la guerra y una dimensión disciplinaria, orientada a

“militarizar” con todo su rigor la carrera de las armas. Antes de entrar a nuestro tema, se verá cómo surgió el moderno cuerpo de oficiales en Europa y cómo nació el paradigma de la ciencia de la guerra.

4.1. La profesionalización de los oficiales y el surgimiento de la «ciencia» de la guerra en Europa

La reforma en el cuerpo de oficiales iniciada durante el gobierno de Piérola debe entenderse en un contexto más general de profesionalización de las fuerzas armadas que se produjo en Europa a lo largo del siglo XIX. Durante dicho período, los ejércitos europeos, en particular el prusiano, adquirieron un nivel organizativo, científico y técnico que los puso muy por encima de las fuerzas militares del resto del mundo y, por lo mismo, los convirtió en los modelos bélicos a los que debían mirar todos los países que desearan organizar ejércitos modernos y científicos. Dado que en este capítulo se estudia la reforma en el cuerpo de oficiales peruanos, vale la pena detenerse previamente en las innovaciones europeas relativas a este aspecto militar durante el siglo XIX.

Antes de este período, la oficialidad de los ejércitos europeos de Antiguo Régimen no se regía por una regla específicamente profesional, manteniéndose los antiguos valores y prácticas aristocráticas. La secular consolidación de las Monarquías europeas aunque había logrado subordinar a la nobleza a la autoridad real, no por ello le había privado de los privilegios de la conducción de la guerra propios de su rango. Se produjo entonces un pacto que protegía tanto los intereses de la Monarquía y la aristocracia, permitiendo a esta última convertirse en el grupo hegemónico en la oficialidad de los ejércitos reales, excepto en las armas de artillería e ingeniería en donde los plebeyos eran predominantes, por ser consideradas poco honorables para los hombres de noble cuna (Huntington 1995: 32-34).

El tipo de este oficial aristocrático era el de un *amateur* que consideraba la guerra como una actividad nobiliaria de medio tiempo, similar al ocio, la caza y la política cortesana. Para la oficialidad aristocrática, la carrera militar no era una actividad con fines y patrones propios, sino un «atributo incidental de su lugar en la

sociedad» que brindaba oportunidades para la demostración de su status, la satisfacción del deseo de aventura o la obtención de alguna renta. Es por ello que el ingreso o ascenso en la carrera de las armas no respondía a criterios profesionales y se obtenía en virtud de la riqueza, el origen y la influencia política. A ello debía añadirse la inexistencia o deficiencia de centros de estudios que permitieran otorgar conocimientos específicos sobre la guerra y que la entendieran como un fenómeno global. La École Militaire de Luis XV o la Ritter Akademie de Federico el Grande, eran instituciones de educación preliminar, con un nivel de instrucción militar sumamente pobre, destinadas a solventar a la nobleza terrateniente en el primer caso o de entrenamiento diplomático en el segundo (Huntington 1995:34-40).

La poca importancia que se les dio a este tipo de instituciones se condecía con una concepción nobiliaria del «genio militar», la creencia aristocrática que lo que hacía bueno a un oficial era el coraje y el honor, antes que los conocimientos técnicos y la preparación intelectual constante. Las cualidades del genio militar eran atributos innatos o naturales de determinados hombres, por lo que estaba demás una enseñanza que poco añadía las virtudes de un buen comandante. Tal creencia se correspondía con una concepción de «artística» de la guerra, vista ante todo como un arte (como la música, la pintura o la escultura), donde el talento subjetivo del oficial era el factor que dictaminaba el carácter y los resultados de los enfrentamientos, razón por la cual era imposible formalizarla como un fenómeno, estudiarla y transmitir los conocimientos derivados del estudio (Huntington 1995:39-41).

A fines del siglo XVIII y principios del siguiente, la concepción del genio militar alcanzó mayores prestigios, pues pareció ser confirmada por la figura de Napoleón y la actitud táctica de los ejércitos revolucionarios franceses. Sin embargo, las guerras napoleónicas fueron también el aliciente para que se produjera un cambio rotundo en la concepción de la guerra y la carrera de las armas. En realidad el desarrollo del profesionalismo militar europeo se produjo en dos períodos bastante marcados. El primero se inició durante e inmediatamente después de las guerras napoleónicas y estuvo marcado por la fundación de escuelas de educación militar y por la adopción de criterios de competencia en la selección y ascenso de los oficiales en la carrera militar en la mayoría de países europeos. El segundo período corresponde al tercer cuarto del siglo, en el que los procesos de selección y

promoción fueron mejorados, se establecieron nuevas instituciones militares y se organizaron estados mayores generales (Huntington 1995:42). Veamos estos cambios en los casos de Prusia y de Francia.

Después de la vergonzante derrota de Prusia ante Napoleón en Jena (1806), los militares prusianos emprendieron una radical reforma en su ejército para enfrentar a las victoriosas tropas napoleónicas. La revolución francesa había trastocado las dimensiones de los conflictos, enviando al frente de batalla un número superior de soldados a cualquier enfrentamiento anterior; no olvidemos que Napoleón logró enrolar alrededor de 1,3 millones de combatientes entre 1800 y 1812 (Mc Neill, 1988: 213). Ante el desafío francés, los países rivales, especialmente Prusia, tuvieron que aumentar el tamaño de sus ejércitos, adoptando leyes de servicio militar universales que enviaban al campo de batalla contingentes ciudadanos, después de un breve período de instrucción (Ibíd.: 239).¹⁶⁹

Las nuevas dimensiones y la rapidez de constitución de tales ejércitos, tuvieron consecuencias organizativas y tácticas que impulsaron una tendencia hacia la profesionalización de los oficiales. Por un lado, el nuevo tamaño de los ejércitos, vino aparejado de una mayor complejización y especialización producto de su crecimiento, como por el desarrollo de la tecnología militar. Las fuerzas militares se hicieron cada vez más complejas y diversas en sus partes constitutivas, abarcando varios tipos de especialidades diferentes, con niveles propios de complejidad técnica, lo que hacía necesario el surgimiento de otro tipo de especialista encargado de «coordinar y dirigir estas diversas partes hacia su meta asignada. Ya no era más posible dominar esta habilidad mientras se seguía siendo competente en muchos campos». Según Huntington, ante los cambios experimentados por las formas de hacer la guerra, era necesario que surgiera un experto en la administración de la violencia. Por otro lado, el lanzamiento al campo de batalla de centenares de miles de hombres, sin largos períodos de entrenamiento militar, exigió la formación de oficiales mejor capacitados para instruirlos y dirigirlos en el campo de batalla (Huntington 1995: 42-43 y 47-48)

¹⁶⁹ La necesidad de obtener contingentes de soldados bastante numerosos implicaba una fuerte reducción del período de entrenamiento militar, por tal razón, la figura del soldado veterano que permanecía varios años en las filas acumulando experiencia en el oficio, tendió a desaparecer (Huntington 1995: 33 y 47-48).

En este contexto Prusia asumió solitariamente la vanguardia democratizando el ingreso y ascenso al cuerpo de oficiales, fundando instituciones de formación de alta competencia intelectual y convirtiendo a su reformado Estado Mayor General en el centro de planificación y estrategia militar. Bajo la conducción de Gerhard von Scharnhorst el cuerpo de oficiales sufrió una notable transformación. En primer lugar, se estableció que el ingreso y ascenso en la carrera militar debía realizarse de acuerdo a los méritos y suficiencia intelectuales. Un decreto de 1808 estableció que el único título para la comisión de un oficial se basaría «en tiempo de paz, por el conocimiento y la educación, y en tiempo de guerra por un valor y una rapidez de percepción excepcionales [...] todos los individuos de toda la nación que posean estas cualidades son candidatos aceptables para los puestos militares más altos» (Mc Neill, 1988: 240). Además de eliminar las barreras nobiliarias, democratizándose el ingreso, se premiaba la eficiencia y la preparación intelectual en la carrera de las armas.

Esta reforma fue paralela con la fundación de la Academia de Guerra 1810, con la finalidad de convertirla en un centro de altos estudios militares, la cúspide de un sistema de formación profesional militar. Esta institución ofreció por primera vez una educación sistemática de los aspectos generales y específicos de la guerra, dándole el carácter de un fenómeno global. Los cadetes y oficiales estudiaban táctica, historia militar, ciencia de las armas, fortificaciones permanentes y de campo, administración y economía militar y política, matemática, artillería, geografía especial y geología, deberes de oficina y jurisprudencia militar. Un aspecto novedoso de la Academia, como también lo harían las escuelas militares inferiores, fue el énfasis que se dio a la formación general, la comprensión y capacidad teórica de los estudiantes, que significaba un cambio radical con el conocimiento memorístico, factual y detallístico que se promovía en el pasado. Por tal razón, se exigía de los aspirantes una educación general que incidiera en la capacidad intelectual y analítica, antes que en los conocimientos en sí mismos. Como ha afirmado Huntington el método prusiano alentaba «la confianza en sí mismo [...] formar y disciplinar la mente y alentar los hábitos de reflexión» lo que lo convertía en uno de los métodos educativos más avanzados de Europa (Huntington 1995: 50-51 y 56-57; para la cita ver Ídem.: 56-57).

Las crecientes capacidades del profesionalismo militar prusiano terminaron por consagrarse con la reorganización de su Estado Mayor General (EMG). La presencia de esta institución y su gravitación en los enfrentamientos militares desde la segunda mitad del siglo XIX, terminaron por hacer hegemónicos los criterios profesionales y científicos en la forma de hacer la guerra en Prusia. Surgido inicialmente en la década de 1800 como un cuerpo de expertos encargados de asesorar al Ministerio de Guerra en cuestiones especializadas, se convirtió a partir de la década de 1860 en el centro de planificación y comando indiscutible del ejército prusiano, bajo el liderazgo del Mariscal Helmuth von Moltke (Holborn 1992: 297). Desde esta época, cupo al Estado Mayor prusiano la planificación de futuras campañas y la preparación de operaciones militares, el establecimiento de las directrices para la instrucción militar y la preparación profesional de los oficiales. En tiempo de paz el EMG recopilaba información topográfica, administrativa, histórica y de inteligencia para desarrollar los planes estratégicos y la elaboración, evaluación y modificación de los reglamentos tácticos. Elaboraba con antelación los planes de movilización y concentración de contingentes teniendo en cuenta la información topográfica, calculando la capacidad de las vías de comunicación y los medios de transporte, además del tiempo necesario para la movilización de hombres. También evaluaban las tácticas en uso, revisando los resultados de campañas del pasado lejano o reciente y aplicándolas en maniobras simuladas (Mc Neill 1988: 241-242).

Aunque los ejércitos de Antiguo Régimen habían contado con Estados Mayores con anterioridad, estos jamás habían pasado de cuerpos especializados para aspectos administrativos y logísticos. Muy por el contrario, el Estado Mayor prusiano se convirtió en un espacio de alto nivel intelectual y creativo que permitía a su ejército predeterminedar acciones posibles en función de un número de variables calculables (tiempo, espacio, número de tropas, armamento, etc.), a fin de realizar con precisión operaciones en consideración de una situación de guerra dada. Por tal razón, los oficiales del Estado Mayor fueron una eliterigurosamente seleccionada para obtener hombres con altas aptitudes intelectuales, con capacidad de trabajo y dedicación, élite proveniente de la flamante escuela de la Guerra (Rothengerg 1992: p. 319, Mc Neill 1988: 241-242). La utilidad de las capacidades intelectuales y profesionales de estos hombres terminó por hacerse evidente al interior del mismo

ejército prusiano al afianzarse la práctica de remitirlos para el asesoramiento de las decisiones de comando en el campo de batalla: dichos oficiales mostraron que un plan de operaciones elaborado siguiendo los lineamientos del Estado Mayor era por mucho superior a un plan sintético elaborado por un consejo de guerra (Holborn 1992: 304). Según William Mc Neill un oficial de Estado Mayor era de gran ayuda a cualquier fuerza de línea, ya que:

Sabiendo de antemano por los mapas cómo era la topografía, un oficial competente de Estado Mayor podía calcular, basándose en su experiencia anterior y en conocimientos empíricos codificados, a qué velocidad podía avanzar por el terreno en cuestión un tren de aprovisionamientos, un parque de artillería o una unidad de infantería. Esto le permitía predecir el tiempo necesario para completar los desplazamientos a realizar. Entonces se podía especificar cuándo debía partir cada unidad y qué líneas de avance debía seguir con tal exactitud que el oficial al mando pudiera tener un control real mucho mayor sobre sus tropas del que hubiera sido posible sin ese Estado Mayor. (Mc Neill 1988: 242)

Para finalizar sobre el caso prusiano, veamos como su modelo militar se convirtió en paradigmático en Europa después de la victoria sobre Francia en 1871. En este conflicto se puso en evidencia la superioridad de un ejército organizado con un Estado Mayor moderno y oficiales formados en un alto nivel profesional. La superioridad organizativa y estratégica prusiana fue manifiesta desde el inicio de la guerra, concentrando en la frontera franco-alemana tres ejércitos que sumaban más de un millón de efectivos, los cuales llevaron rápidamente el enfrentamiento a territorio enemigo, haciendo retroceder al ejército galo hasta la captura de Napoleón III en Sedán, a seis semanas de iniciado el combate, y la capitulación de Metz, solo ocho semanas después. La estrategia prusiana implicó una veloz secuencia estratégico-operativa de movilización, concentración, movimiento y choque, que descansaba, tanto en la planificación y el lineamiento estratégico elaborado desde tiempo atrás por el Estado Mayor General, como en el comando de jefes militares competentes auxiliados por oficiales formados en las doctrinas del EMG. Bautizada como *envolvimiento estratégico*, consistía en realizar un cerco total o parcial sobre el ejército enemigo para obligarlo a luchar en una batalla decisiva. Para que la secuencia tuviera éxito era necesario una rápida movilización y concentración de

fuerzas en número superior al enemigo, las cuales organizadas en varios ejércitos dispuestos a una distancia conveniente, permitiría el ataque simultáneo del frente y los flancos del enemigo, al mismo tiempo, que el apoyo mutuo entre aquellos ejércitos (Rothengerg 1992: 313 y 316-317, Holborn 1992: 302).

Entonces, conducir a ejércitos de cientos de miles de hombres para que convergieran en un mismo punto con rapidez y en un tiempo preestablecido, requería de planificación y una coordinación centralizada, sobre todo si marchaban por distintas rutas. Cupo al Estado Mayor General de Moltke diseñar y ejecutar estos planes, llevando el control de los movimientos estratégicos de los ejércitos. Pero, a pesar de sus esfuerzos por monitorear el lineamiento general del plan, resultaba sumamente difícil llevar la dirección táctica centralizada de los combates, recayendo consecuentemente la conducción táctica de los mismos sobre los Comandantes de línea (Holborn 1992: 305). Esto último no significaba que las operaciones hubieran sido dejadas totalmente a la voluntad individual de estos jefes, pues sus decisiones estaban basadas en planes operativos diseñados por los oficiales de sus respectivos estados mayores, hombres formados por Moltke, de quienes se podía esperar respuestas parecidas ante situaciones similares, siempre acordes con la estrategia general elaborada desde el EMG. Según Gunther Rothengerg, el diseño del ejército prusiano permitía descentralizar los esfuerzos dentro de un lineamiento estratégicogeneral, siendoel Estado Mayor General:

[E]l cerebro para la confección de los planes estratégicos del ejército y sus métodos operativos. Las funciones descentralizadas corrían a cargo de los oficiales de Estado Mayor [...] que eran asignados a las divisiones, cuerpos de ejército y ejércitos. [...] en Alemania jugaron el papel de verdaderos copartícipes en las tareas de mando. El comandante retenía la autoridad máxima, pero normalmente las decisiones de carácter operativos las tomaba en común acuerdo con un jefe de Estado Mayor... [E]n una situación determinada, diferentes oficiales de Estado Mayor, educados en una doctrina de combate común, llegarían a una solución muy parecida para hacer que el empleo de las fuerzas disponibles fuera el más efectivo [...] (Rothengerg 1992: 318).

En ese sentido, el modelo prusiano ponía un fuerte coto a las *genialidades* individuales de los Comandantes, haciendo recaer el éxito de las operaciones en

hombres promedio con educación superior y amplia experiencia, y en la organización del todo, representada en el EMG (Huntington 1995: 59). Ejecutada de esta manera la guerra, suplantación, dirección y conducción recayó íntegramente en un cuerpo de oficiales competentes y especializados, sin interferencia de una esfera ajena como la política, pues a pesar que los políticos habían dictaminado la participación de Prusia en el conflicto, inmediatamente dada esta orden todas las operaciones correspondientes a él quedaron en manos de la oficialidad militar hasta que se verificó la derrota francesa (Rothengerg 1992: 315).

A diferencia de Prusia, el aguerrido ejército francés fue derrotado por su inferior capacidad para la planificación y conducción de la guerra. Moltke mismo, unos años después, notó las debilidades francesas, entre ellas, la falta de preparación material para el enfrentamiento, la insuficiente planificación de la movilización que llevó a que las líneas férreas fueran insuficientes para la concentración de fuerzas en la medida necesaria, la ausencia de mapas de Alemania para el trazado de las movilizaciones y la conducción política de la guerra ejecutada por el mismo Napoleón; elementos todos que mostraban desorganización y ausencia de un mecanismo de coordinación para el movimiento y concentración de las fuerzas aptas para el combate (Moltke 1891: 10-12). En palabras del propio Helmuth Moltke:

Cuando el emperador [Napoleón III] llegó á Metz, una semana después de haberse hecho la declaración de guerra, los regimientos no estaban aún completos, y ni siquiera se sabía con exactitud dónde estaban acampadas entonces divisiones enteras. El emperador mandó que las tropas avanzaran, pero los generales declararon que las condiciones en que las mismas se encontraban no lo permitían por lo pronto. (Moltke 1891: 12)

La derrota gala había mostrado sus debilidades profesionales frente al modelo prusiano: en Francia, la selección de los oficiales se hacía de acuerdo a la antigüedad y los méritos de campaña y no en función a suficiencia intelectual; no existía un centro de altos estudios militares y su Estado Mayor no se había modificado en mucho desde los tiempos de Napoleón. Es más, existía en el ejército francés una especie de anti-intelectualismo fraguado en los valores igualitarios de la Revolución y en el ideal del genio militar que desestimaba las tendencias a la profesionalización

de los oficiales. Reforzaba esta orientación el recuerdo de las campañas napoleónicas, las fáciles victorias de colonización de África y la victoria en Crimea. El descalabro frente a Prusia modificó radicalmente las concepciones militares francesas. En 1874, el Estado Mayor francés fue reorganizado siguiendo el modelo prusiano y cuatro años más tarde se fundó la Escuela Superior Militar (Escuela de Guerra a partir de 1880), convirtiéndose desde ese entonces en el centro intelectual del ejército y el lugar de formación superior de los oficiales de alta jerarquía. La total reorganización del ejército francés fue radical permitió decir al general Ferdinand Foch pocos años más tarde que el éxito del oficial francés radicaba en el aprendizaje académico y no únicamente en el campo de batalla (Possony y Mantoux 1968:129-132, Huntington 1995:53-54, 57 y 60, Mc Neill 1988: 240-241).

Las modificaciones en la organización y educación militar de los ejércitos europeos durante el siglo XIX fueron de la mano con un desarrollo teórico de la guerra y del papel de los hombres en ella, concibiendo crecientemente esta actividad como una *ciencia*. Hasta el siglo XVIII, todos los estudios acerca de la guerra se acercaban a este fenómeno a través aspectos específicos del combate, discutían una serie de tópicos con un fin práctico y de aplicación, sin relación lógica entre sí. Es solo con la aparición del libro *De la Guerra* de Karl von Clausewitz (1832), cuando se produce este viraje, lográndose la formalización de la guerra como una actividad humana «completa» y un fenómeno especial y autónomo pasible de conocimiento. La importancia de su obra radica en su reflexión de la guerra en general y las consecuencias que se desprendían de ella en el rol de las fuerzas armadas (Huntington 1995: 39-40).

Para Clausewitz la guerra es «un acto de violencia para imponer nuestra voluntad al adversario», siendo la violencia el medio y la imposición de la voluntad el «objetivo» (Clausewitz 1972:7-8 y 15-16). Este acto tiene una naturaleza dual, pues mientras que, por un lado, el ámbito propio de esta actividad es el combate y su propósito el «desarme del enemigo», por otro, la voluntad que se busca imponer y que motiva la violencia, proviene de una esfera ajena, es decir, la política o los fines públicos. La separación aunque subordinada de la guerra frente a la política, permitió establecer una concepción «autónoma» de ella como una entre las demás actividades humanas que tenía sus propios fines (la victoria en el combate y el desarme del

enemigo) y métodos, pero al mismo tiempo, posibilitó concebirla también como una dimensión del mundo social susceptible de un conocimiento unitario y completo, un fenómeno total que podía ser observable, codificable, transferible y aplicable, convirtiéndose así en una rama particular del conocimiento humano. Gracias a su concepción como actividad y como conocimiento aplicado autónomos, se pudieron establecer criterios propios de maestría en su práctica, permitiendo el surgimiento del profesional de la guerra como un especialista en los métodos del uso de la violencia, distinto a otros profesionales en sus respectivos ámbitos como, por ejemplo, el estadista. De ello se desprendía que el grado de maestría dentro de la ciencia militar dependía exclusivamente de la forma cómo se realizaba eficazmente el combate y no de criterios ajenos, como los objetivos políticos, tal y como había sido juzgado por el mismo Moltke en sus memorias de la Guerra Franco-Prusiana. Pero al mismo tiempo, establecía criterios deontológicos que obligaban a los militares a eximirse de juzgar y participar en el trazado de los objetivos políticos que orientaban su propia actividad (Huntington 1995: 40 y 63-65).

Después de la derrota francesa frente a Prusia, por impulso del prestigioso positivismo, el status de *científico* de la guerra se hizo comúnmente aceptado, primero en Europa y luego en el resto del mundo. El funcionamiento calculado y casi perfecto de la organización bélica prusiana, apoyada por el uso de los últimos adelantos de la ciencia (armamento, ferrocarril y telégrafo), incidió en que la guerra fuera elevada al carácter de ciencia «exacta». Sin embargo, la guerra alcanzó este estatuto no solo por su “cientificidad” intrínseca, sino también porque ella misma reunía o se apropiaba, para el cumplimiento de sus objetivos, de otras ramas de la ciencia, como las ciencias básicas, las ciencias naturales y las ciencias humanas. Tal concepción fue celebrada por los teóricos militares de fines de siglo y no tardó en hacerse ampliamente difundida, llegando también a América Latina (Brahm 2002: 33-34).

4.2. El profesionalismo militar y le Escuela Militar en el Perú

Existe un consenso en considerar que el gobierno de Piérola sentó las bases de la profesionalización de la carrera de las armas en el Perú. Tres medidas eran inaplazables para llevar a cabo dicho objetivo: regular el ingreso y ascenso de los oficiales del Ejército con criterios meritocráticos; establecer un centro de instrucción profesional de calidad; y dotar a la carrera de las armas de un estatuto científico y una ética profesional. En este capítulo nos centraremos en los dos últimos aspectos en virtud de haberse verificado durante el gobierno de Piérola, sin embargo, resulta necesario referirnos someramente al primero, aunque su implementación formal se haya realizado en gobiernos posteriores.

Se ha mencionado en capítulos anteriores que el ingreso a la carrera de las armas tenía una nula regulación del Estado. El ingreso de los militares de *oficio* se hacía a través del alistamiento de “soldados distinguidos” en los cuerpos del Ejército, recayendo el control del ingreso en los propios jefes de tales cuerpos. Otra forma de acceder a la carrera se hacía a través de la concesión de grados militares a civiles que, sin formación militar previa, podían incorporarse al “selecto” grupo de oficiales como una recompensa por el apoyo militar al caudillo gobernante o al victorioso en una revolución. Por esta vía pudieron ingresar al Escalafón los poderosos notables locales que brindaban además de recursos, soldados a los bandos en lid. No era tampoco raro que civiles sin fortuna, pero con relaciones, pudieran obtener grados militares. Una última vía de ingreso era la obtención del grado de oficial a través de un centro de formación especializado, sin embargo, el número de estos oficiales era muy reducido en comparación con los que entraban por los otros mecanismos, pues la mayoría de estos centros terminaron cerrando después de algunos años de funcionamiento por los vaivenes políticos del azaroso siglo XIX. En ese sentido, el Estado tenía nulo control del personal militar que ingresaba al oficio militar. Respecto a los ascensos, estos se hacían de acuerdo a criterios políticos que recompensaban acciones de armas o favores políticos para con los gobernantes de turno. Durante todo el siglo XIX, los ascensos militares no fueron regulados por ley alguna, quedando como potestad discrecional del gobernante y, en los grados militares más altos, del Parlamento. Los pases al retiro o disponibilidad y la pérdida del grado militar se hacían con la misma facilidad que el ascenso, dependiendo también de criterios políticos, antes de los méritos personales.

Líneas arriba he afirmado que el gobierno de Piérola montó un plan para modificar radicalmente esta situación. El Ejecutivo nombró varias comisiones para la elaboración de proyectos de ley tendientes a la creación de un sistema que regulara la profesión militar. Para controlar el ingreso de los oficiales al cuerpo del Ejército, además de la creación de las escuelas militares en las que prescribía un examen de suficiencia académica para el ingreso —como se verá más adelante— se proyectó desde 1898 que solo obtendrían los grados de oficiales los que hubieran egresado de dichos planteles, como lo indicaba el informe de la Comisión que elaboró el proyecto de la Ley de Situación Militar, el cual afirmaba que debía ser obligatorio «salir de la Escuela Militar para conseguir el grado de Oficial» (Clément 1900: 34). Finalmente esta ley se promulgó tardíamente a pesar de las insistencias del coronel Paúl Clément, cerrando con ello definitivamente la carrera militar a la incorporación de civiles sin previa instrucción y disciplinamiento y facultando al Estado el monopolio de la incorporación de nuevos oficiales al Escalafón. Situación similar sucedió con la regulación los ascensos y separación de los militares en el Escalafón. En 1901, durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, una ley fijó por primera vez en el Perú los requisitos de ascensos militares, los cuales debían hacerse siguiendo estrictamente la jerarquía militar y solo en casos que se produjeran vacantes en los grados militares. La misma ley introducía criterios meritocráticos al lado del causal de antigüedad, estipulando exámenes de suficiencia desde el pase de teniente a capitán y el ascenso de acuerdo a informes de méritos para los oficiales de más alta jerarquía (Arenas 1921: 241-242).

A fin de evitar las destituciones por razones políticas y asegurar la continuidad de los militares con mayores méritos, la Ley de Situación Militar prescribió que solo podían ser separados del Ejército los oficiales por sentencia judicial del fuero castrense, estipulándose también una edad máxima de permanencia en cada grado militar, a fin de que quienes no hubieran ascendido al grado superior en la edad prescrita debían ser pasados a inactividad (Arenas 1921: 242-243). Ambas leyes establecían por vez primera mecanismos institucionales para poner fin a la manipulación política del Escalafón, cumpliéndose con ello el plan de Piérola, aunque ello no significó por cierto una ausencia total de la intervención política en la carrera militar en los años futuros.

Pasemos a observar las otras dos medidas necesarias para la profesionalización del cuerpo de oficiales, haciendo un acercamiento al significado de la fundación de los centros de instrucción profesional durante el período que venimos estudiando. El último intento serio por llenar el vacío de la formación de oficiales antes del gobierno de Piérola fue emprendido por el gobierno de Cáceres, quien reabrió la Escuela Militar en 1889 bajo la dirección del coronel Juan Norberto Eléspuru. Recordemos que durante este período, algunos de los oficiales reformistas, agrupados alrededor de la *Revista Militar y Naval*, habían reclamado por el establecimiento de una institución científica de educación militar y habían formulado propuestas conscientes para el mejoramiento de la Escuela Militar de Cáceres. Erigida en el cuartel de Guadalupe, esta institución funcionó también por un breve período, entre 1889 y mediados de 1894, fecha en la que tuvo que cerrar por los desórdenes políticos de la revolución, solo pudiendo graduar dos promociones de oficiales que se incorporaron al ejército cacerista.

Si bien los gobiernos del Segundo Militarismo tuvieron un genuino deseo por dotar al Ejército de una nueva generación de oficiales técnicamente suficientes, la concepción del establecimiento adolecía de varios defectos. Por ejemplo, el coronel Francisco Antayo informaba al Congreso que tanto la Escuela Militar como la Escuela de Clases al no cumplir las expectativas iniciales de su fundación, debían sufrir una «reforma radical» y unificarse en una sola institución. Afirmaba también que además de lo «dispendiosos» que eran, no existían en ellos «ni la planta de estudios ni las condiciones que deben tener institutos de esta clase» (López 1932: 24). Sobre las limitaciones de esta Escuela también se pronunció un editorial de la Revista *La Luz Eléctrica*, el cual afirmaba que dicha institución contaba con un deficiente número de profesores y un plan de estudios incompleto, aunque ello no quería decir que sus estudios fueran rudimentarios, pues muchos observadores de la época elogiaron la labor de dicha escuela a pesar de sus límites. El mismo editorial reconocía esto último al afirmar que de la Escuela de Guadalupe había egresado un grupo de oficiales «peritos en el manejo de las tres armas, contingente que por desgracia contribuyó á que se sostuviese, por cerca de un año, un régimen que desde su nacimiento se hizo imposible.»¹⁷⁰ Precisamente este alineamiento político de los egresados dicho plantel acentuaba la crítica a esta institución, pues a pesar de su

¹⁷⁰*La Luz Eléctrica*. Año V, N° 253. Lima, 31 de Agosto de 1895.

formación, los oficiales formados en la Escuela de Cáceres mantuvieron su lealtad no al Estado, o a la Patria, sino al caudillo y a su cohorte que afirmaba representarla.

No obstante el relativo fracaso de la Escuela de Cáceres, después de 1895 la posición de profesionalizar a los militares era común entre sectores políticos civiles y militares: existió un amplio consenso en que en el Perú se hacía inaplazable la constitución de un “ejército moderno”, siendo la base de este proyecto el convertir a la carrera de las armas en una profesión y reconocer en la guerra, el carácter de una ciencia. Donde no existía unanimidad era en la manera específica para hacer de la carrera de las armas una profesión científica y a sus oficiales unos funcionarios políticamente subordinados al Estado. Algunos consideraban inaplazable, a pesar de las deficiencias que había mostrado, la reapertura de la Escuela Militar siempre que se hiciera con las reformas necesarias, como lo afirmaba *La Luz Eléctrica* a pocos días de iniciarse el gobierno de Piérola: «[l]a reapertura de los planteles Militar y de Clases, bajo la dirección de jefes distinguidos, debe ser uno de los primeros, sinó el primero de los actos del Gobierno.»¹⁷¹ Otro grupo consideraba que la profesionalización de los nuevos oficiales debía ser encomendada a las escuelas militares en el extranjero, enviando a una cantidad de oficiales a Europa, pues «los contingentes que llegó á suministrar al ejército [la escuela fundada por Cáceres] fueron bien poca cosa, para las ingentes sumas invertidas en su sostenimiento», como consideraba un articulista de *La Opinión Nacional*.¹⁷² Otro colaborador de *La Luz Eléctrica* compartía la opinión anterior, proponiendo ya en 1897 que los recursos que se buscaban invertir en la recién fundada Escuela Militar y Naval Preparatoria, debían invertirse en que «vayan en buena hora 15 ó 20 jóvenes á Alemania que ahí se harán soldados y no *soldaditos* como se harán en la Escuela Militar y Naval».¹⁷³

Por la parte del gobierno, parece que asumió sintéticamente ambas posiciones como una aspiración a largo plazo, tanto la profesionalización local como el destaque de jóvenes oficiales al extranjero. El Ministro de Guerra y Marina informaba al Congreso de 1896 que pronto se reabrían las escuelas militares «en forma más práctica y económica: reunidas en una sola institución», utilizando los

¹⁷¹ *Ibíd.*

¹⁷² *La Opinión Nacional*. Lima, 7 de octubre de 1896. Similar opinión puede encontrarse en *La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 259. Lima, 12 de Octubre de 1895.

¹⁷³ *La Luz Eléctrica*. Año VII, N° 346. Lima, 12 de junio de 1897.

saldos favorables de la fusión de ambas instituciones en el «sostenimiento de seis jóvenes en Europa, destinados á estudiar» (MGM 1896: 7). Solo la primera de estas aspiraciones se pudo cumplir en el gobierno de Piérola, pues como se ha visto, el gobierno decidió asumir el reto de la profesionalización de los oficiales peruanos contratando una misión militar francesa, liderada por el coronel Paul Clément y fundando dos instituciones de educación militar, la Escuela Militar Preparatoria y Naval (EMPN), y la Escuela Militar de Aplicación, esta última bajo la conducción de los miembros de la misión francesa.

La EMPN tenía como misión dar una instrucción general previa para el ingreso a la Escuela Militar de Aplicación, en el caso de los aspirantes al Ejército, y la formación de guarda-marinas para la Marina de Guerra. Según se afirmó, el formar a los futuros oficiales del Ejército y la Marina en materias y competencias comunes fue uno de los atractivos de este plantel (MGM 1897: 12). Específicamente para los aspirantes al Ejército, la EMPN buscaba formar estudiantes en una serie de materias de cultura general y cursos elementales en materia militar que debían ser la base para los estudios profesionales-técnicos de la Escuela de Aplicación. Esta escuela se encontraba en el tránsito de una institución de formación secundaria y una de educación superior-profesional, ello queda plenamente demostrado en las bases de la prueba de admisión y en el mismo plan de estudios. Las primeras solo exigían como perfil de ingresante personas con estudios primarios concluidos: en la prueba escrita solo se esperaba niveles satisfactorios en habilidades básicas como escritura, ortografía, redacción y cálculo, mientras que en la prueba oral se buscaba que los aspirantes pudieran leer, comprender lo leído, y responder algunas preguntas de la historia y geografía del Perú.¹⁷⁴

¹⁷⁴ La prueba escrita consistía en escribir con tinta un párrafo, no menor de quince líneas, dictado por uno de los miembros del jurado, indicando, de la puntuación, solo los puntos. «El aspirante dispondrá de cinco minutos para revisar la ortografía y puntuación, y entregará en seguida su trabajo al Presidente del jurado. Esta prueba servirá para juzgar la escritura del aspirante. En resolver dos problemas de aritmética relativos á los casos y usos de las operaciones fundamentales, y al sistema métrico, ya sean los números enteros, quebrados, decimales ó sexagesimales. Estos problemas serán designados por la suerte, tomando el aspirante de un ánfora los números respectivos». En la prueba oral uno de los requisitos era «[l]a lectura de un trozo, tomando indistintamente de una obra cualquiera, que explicará y analizará gramaticalmente el aspirante; y en seguida, la recitación de otro trozo, elegido por el jurado de una lista presentada por aquel» (*Bases para concurso en la Escuela Militar Preparatoria y Naval*, citado en MGM 1897: 19-23).

Con respecto al plan de estudios, este estaba diseñado para tener una duración de tres años para los aspirantes a las armas de infantería y caballería y cinco para los de artillería e ingeniería militar. Este contaba con asignaturas generales como “Composición Castellana”, “Geografía elemental”, “Historia del Perú”, “Física, química y mecánica elementales”, así como cursos específicamente técnico-militar como los de táctica de las tres armas, “Historia y arte militar”, “Topografía y fortificación pasajera” o “Artillería descriptiva, balística elemental”. En ese sentido, el diseño curricular de la Escuela estaba orientado tanto para llenar los vacíos en la formación escolar civil, como también para brindar conocimientos militares básicos, lo cual permitía establecer un nivel mínimo de competencias académicas para los ingresantes a la Escuela Militar de Aplicación (Cuadro N.º 7).

Algo que no se debe olvidar es que este centro estableció un filtro meritocrático para el ingreso, filtro que se mantendrá con similares exigencias en la posterior Escuela Militar de Chorrillos. A la EMPN debían ingresar jóvenes entre 14 y 17 años de edad que certificaran, ser peruanos, tener buena conducta, ser sanos y «bien conformado[s], revelando robustez y disposiciones para la carrera de las armas» y haber realizado estudios de 1º y 2º año de educación primaria.¹⁷⁵ La acreditación de buena conducta se hacía ante un jurado presidido por el Director, sobre la base de testimonios de personas que pudieran brindar tal información; las aptitudes físicas se establecían a través de un examen médico del cirujano de la institución; y los estudios primarios se demostraban con certificados de las escuelas en las que hubieran estudiado el postulante. Es fácil comprender que los requisitos de ingreso a la Escuela buscaban eliminar los defectos de los que continuamente se quejaban los *militares reformistas*, por ejemplo la falta de “ilustración” y la mediocre complexión física de algunos oficiales, al mismo tiempo que garantizar al Estado que los ingresantes cumplieran con criterios mínimos para la educación militar. A pesar de este filtro meritocrático, la Escuela establecía condiciones más “democráticas” para el ingreso a través de un conjunto de becas. Ambos aspectos rompían con los criterios sociales de estatus sobre los que se basaban el ingreso al ejército bajo la modalidad de soldado distinguido.

¹⁷⁵Decreto de 30 de enero de 1897 *Reglamento Orgánico de la Escuela Militar Preparatoria y Naval y Bases para concurso en la Escuela Militar Preparatoria y Naval*. (citados en MGM 1897: 16-17 y 20-21).

No obstante, la EMPN cerró solo a tres años de su fundación (1900), fusionándose con la Escuela Militar de Aplicación durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, adquiriendo a partir de entonces el nombre de Escuela Militar. En primer lugar, el Ministro argumentó que este plantel generaba un fuerte gasto al presupuesto (tanto en el alquiler del edificio, como en la plana administrativa y docente) que podía reducirse integrando a sus estudiantes a la Escuela de Aplicación, la cual tenía un local propio y una plana docente.¹⁷⁶ En segundo lugar, y como principal causal, la EMPN no podía graduar el suficiente número de alumnos para la Escuela Militar de Aplicación, pues en los tres años de funcionamiento solo se habían podido graduar dos aspirantes para el ejército, y en el mejor de los casos solo podrían egresar diez un año después (MGM 1900: 10).

Paralelamente, el gobierno de Piérola cifró sobre todo sus esperanzas de modernización y profesionalización del Ejército en la labor directa de la misión militar francesa a través de la Escuela Militar de Aplicación. A dicha institución le fue encargada la instrucción técnica y práctica de los oficiales y suboficiales (los clases), la cual debía estar acorde con los últimos adelantos de la ciencia de la guerra. Para su instalación, se destinó el local de la antigua Escuela de Clases en Chorrillos, el cual fue modificado durante 1897 para que cumpliera las condiciones técnicas e higiénicas necesarias para su fin. La remodelación del edificio corrió a cargo del ingeniero Felipe Arancibia y construyéndose nuevas estructuras y refaccionándose las existentes, al mismo tiempo que se adquirieron varios terrenos adyacentes para la construcción de los nuevos edificios, a fin de dotar al local con áreas de ejercicios (Lluncar y Muñoz 1923: 15-16). El viejo edificio, con sus torreones de «antiguo y tosco estilo», fue dotado de «vistosos y cerrados pabellones» acorde con los requerimientos de mínima comodidad e higiene (Salmón 1923: 126 y 129). El nuevo plantel debía convertirse en el modelo para los futuros emplazamientos del ejército, con la finalidad de que brindara las facilidades necesarias para la instrucción militar.

¹⁷⁶ El costo administrativo del plantel era bastante alto, ascendiendo a 515 LE mensuales, parte de este monto fue destinado a aumentar las vacantes de la Escuela Militar en Chorrillos. Además, el propio local del solar Santa Sofía, a pesar de los trabajos de refacción que se realizaron para la fundación de la EMPN, tenía deficiencias sanitarias que no podían ser salvadas a menos que se realizaran grandes modificaciones en el local, las que sólo podían emprenderse a menos que el solar fuera del Estado. (Oficio de 23 de junio de 1899, de Juan M. Ontaneda al Director de Guerra, MGM 1899: 112, 1900: 9).

El día 24 de abril de 1898 se inauguró con toda solemnidad dicho plantel, ante la presencia del Jefe de Estado y de altas autoridades civiles y militares.

Durante los cinco primeros años de existencia la Escuela tuvo un carácter experimental, a fin de que se pudieran realizar ensayos y modificar la institución en función de las ventajas que estableciera la experiencia. Inicialmente la Escuela fue organizada en tres secciones correspondientes a las armas del Ejército, comandadas por un miembro de la Misión Francesa: Infantería por Claudio Perrot, Caballería por Eduardo Dogny, Artillería e Ingenieros por Armando Vauvineux; todas ellas bajo la Comandancia del Jefe de la Misión Paul Clément, quien asumió la dirección de la Escuela. Adscritas a tales secciones se destinaron unidades tácticas completas (un batallón de infantería, un escuadrón de caballería y una batería de infantería) para la instrucción de soldados y la formación de las clases o suboficiales. El contingente de estas unidades provino en gran parte de los cuerpos de línea, completándose el efectivo de estos últimos con los conscriptos «más aparentes» y con los ciudadanos que voluntariamente quisieran ingresar.¹⁷⁷

Entre 1898-1900, la Escuela tuvo como función central actualizar los conocimientos profesionales de los oficiales en servicio, razón por la cual se les dio la denominación de «oficiales-alumnos». El primer Director Paul Clément prometía, en el día de la inauguración del plantel, que «[a] los oficiales alumnos los pondremos al corriente de los métodos empleados en los ejércitos modernos» (Discurso de Paul Clément de 24-04-1898, citado por Ríos 1962: 41). Los miembros de la misión después de realizar una inspección por los cuerpos del ejército y encontrar una deficiente o nula formación profesional en muchos oficiales, decidió que la Escuela debía dirigirse prioritariamente a los oficiales en servicio activo, antes que cualquier otro grupo (Ponce 1962: 600). Estos oficiales provenían de los cuerpos surgidos de la guerra civil, es decir, habían ingresado de la misma forma irregular e improvisada que otros cientos de oficiales que llenaban el Escalafón militar. A pesar de ello, los miembros de la Misión solicitaron de entre ellos el ingreso a la Escuela de los de

¹⁷⁷ Al concluir el año de instrucción, correspondía a las tropas de la Escuela pasar a los cuerpos de línea, quedándose una proporción para convertirse en instructores y perfeccionar su formación. De ambos grupos, sólo los más destacados eran recompensados con la clase de sargento. (Reglamento Orgánico Provisional para la Escuela Militar de Aplicación, de 30-01-1897, citado en MGM 1897: 14-15; Discurso del Paul Clément de 24-04-1898, citado por Ríos 1962: 41).

mejores antecedentes y, sobre todo, de los más jóvenes, a fin de poderlos moldear en los nuevos métodos, ingresando así capitanes, tenientes y subtenientes.

La decisión de iniciar la reforma del cuerpo de oficiales con hombres ya en servicio respondía a un fin práctico: generar una modificación directa y casi inmediata en el Ejército. El plan de los instructores franceses era formar la mayor cantidad de oficiales en «la parte teórica y práctica de la ciencia militar» para que luego fueran enviados a los cuerpos de línea en calidad de instructores y aplicaran «prácticamente [...] las lecciones que hubiesen aprendido» (Discurso de Paul Clément de 24-04-1898, citado por Ríos 1962: 39). Los egresados de la Escuela, una vez en sus cuerpos de línea, debían realizar la instrucción de los soldados y realizar sus funciones de organización y conducción de forma armónica con los nuevos métodos propuestos por la misión. Sin embargo, inducía también a tomar esta decisión otra consideración no menos importante: formar nuevos oficiales para el Ejército con jóvenes cadetes sin hacer lo mismo con los oficiales activos, hubiera condenado la reforma al fracaso, pues estos últimos hubieran resultado parte de la resistencia institucional a los nuevos métodos. Un diagnóstico de los posibles resultados de la instrucción exclusiva de nuevos cadetes fue expuesto en la *Revista Militar* de la siguiente manera:

Nada ó muy poco obtendremos con formar todos los años alfereces instruidos y bien preparados para distribuirlos en los cuerpos del ejército, pues se verían ahogados inmediatamente por la masa de sus compañeros y de sus jefes no preparados, que no podrían ni aceptar sus lecciones. Además, la organización misma de su nuevo cuerpo no correspondería á la organización de la unidad que han visto funcionar en la Escuela; el método de instrucción sería, así mismo, completamente distinto, y al fin y al cabo renunciarán á la lucha y se habrá perdido todo.¹⁷⁸

Siendo presidente Eduardo López de Romaña, la Escuela Militar de Aplicación sufrió importantes modificaciones organizativas en los años siguientes después de las cuales este instituto adquirió su forma definitiva y el nombre de Escuela Militar de Chorrillos (EMCH). En julio de 1900, como se ha afirmado, se suprimió la EMPN

¹⁷⁸*Revista Militar*. Año IV, Nº 51. Lima, 15 de febrero de 1900, p. 21.

para incorporarla a la Escuela Militar de Aplicación, asumiendo esta última el nombre de *Escuela Militar*, al mismo tiempo que se incorporó una sección superior para la graduación de oficiales de Estado Mayor. A partir de esa fecha, la Escuela complejizó su organización, contando con una *Sección Preparatoria* para la instrucción general y elemental de los alumnos por dos años, una *Sección de Aplicación* para los egresados de la Sección Preparatoria y los postulantes externos, y una *Sección Superior* para la instrucción de guerra a los capitanes del Ejército a fin de prepararlos para el servicio del Estado Mayor (Decreto de 14 -07-1900, citado en MGM 1900: 34-35). Esta modificación no tuvo tiempo para concretarse, pues solo tres meses después se nombró una Comisión presidida por Juan Martín Echenique y compuesta, entre otros, por Juan N. Eléspuru, Eduardo Dogny y Celso Zuleta, con el objeto de estudiar una nueva organización de la Escuela (Decreto de 14 -09-1900, citado en MGM 1901: 3-4).

Fruto de los trabajos de la Comisión, se expidió un nuevo reglamento el 24 de enero de 1901, por el cual se modificó nuevamente la Escuela, suprimiéndose la Sección Superior y la de Aplicación. En reemplazo de esta última, se crearon la *Sección de Aspirantes* y la de *Oficiales-Alumnos*, correspondientes al tercer y cuarto año de estudios de la Escuela. En la primera, los aspirantes, divididos de acuerdo a sus armas, estudiaban por un año algunos cursos generales que completaban la etapa preparatoria y otros específicamente militares, al cabo del cual rendían un examen que les brindaba el ingreso a la siguiente sección y al Ejército con el grado de Subteniente. La Sección de Oficiales-Alumnos también tenía una duración de un año y en ella se impartían cursos militares más avanzados, al término de los cuales, el oficial se graduaba de la Escuela (MGM 1901: 9-10). Esta organización duró por casi dos años hasta que la institución fue reorganizada por un nuevo reglamento a fines de 1902. Por este dispositivo, la *Escuela Militar de Chorrillos* asumió su organización definitiva, modificándose una vez más la División Superior, la cual contó, además de la Sección Preparatoria que permaneció inalterada, con una *Sección Técnica* y una *de Aplicación*, correspondientes al tercer y cuarto año de estudios.

Un aspecto que no debe olvidarse es que las modificaciones implementadas en la Escuela desde 1901 implicaron una orientación completa del plantel a la formación profesional de nuevos cadetes, eliminándose con ello la posibilidad de que los

antiguos oficiales con deficiente formación adquirieran conocimientos profesionales en la Escuela como “oficiales-alumnos”. Es por ello que a fines de 1900, el gobierno de López de Romaña creó la *Academia de Guerra*, institución orientada a «completar la instrucción práctica de los oficiales del ejército que sirven en filas, á fin de que adquieran la técnica y científica tan indispensable para los que se dedican á la carrera de las armas.»¹⁷⁹ (MGM 1901: V-VI)

4.2.1. La ciencia de la guerra y el nuevo oficial

Como se ha mencionado, en Europa la guerra había adquirido un estatus científico desde la victoria prusiana frente a Francia. La guerra fue entendida como una actividad humana relacionada con las otras dimensiones de la vida social, pero a la vez autónoma; como un conocimiento práctico y *exacto*, dirigido a organizar y conducir racionalmente todos los medios para forzar al adversario a hacer la voluntad del vencedor. Esta concepción de la guerra tenía tres consecuencias lógicas: la primera, la subordinación de la guerra a la política; la segunda, la constitución de un ámbito de la vida social autónomo, crecientemente especializado y complejo para la consecución de su fin, del cual se podía desprender un conocimiento observable, registrable, codificable y transferible; y tercero, la necesidad de una amplia formación profesional para la adquisición de maestría en ella.

La concepción científica de la guerra era conocida en el Perú desde antes de la fundación de la Escuela de Aplicación, como lo demuestra un artículo de la *Revista Militar y Naval* de 1888: para «los adelantos que ha alcanzado el arte de la guerra, elevado a ciencia, se requiere de conocimientos especiales y una práctica esmerada y

¹⁷⁹ Quedaban obligados a asistir a ella todos los oficiales de grado de Capitán o inferior que se encontraban en servicio activo y no hubieran estudiado en la Escuela Militar, siendo facultativo para los jefes y oficiales de graduaciones superiores, incluso los que no estuvieran en actividad. Se incentivó el ingreso de estos últimos estableciendo que las calificaciones y aplicación de los estudiantes tendrían incidencia en la provisión de vacantes para empleos y ascensos. Cfr. Ídem. Las clases de la Escuela se dictaban entre las 8 y 9am. y las 9 y 10 pm., para no interrumpir las labores normales de los oficiales activos, dictándose cursos generales como Aritmética, Geografía, y cursos profesionales como Arte e Historia Militar, Fortificación Pasajera, Redacción Militar y Derecho de Guerra. Entre los oficiales que recibieron formación en este plantel se encontraban Oscar R. Benavides, por ese entonces capitán. Cfr. Memoria del Subdirector de la Academia de Guerra, 22 de Mayo de 1901 (MGM 1901: 20-22).

constante»¹⁸⁰; no obstante, es desde la llegada de la misión militar francesa que este estatuto científico adquiere reconocimiento total, dentro y fuera de la profesión de las armas.¹⁸¹ Veamos cómo concebían esta ciencia los instructores franceses llegados al Perú, tomando varios pasajes de los diversos escritos del Comandante de la Misión, Paul Clément.

En las guerras modernas correspondía a los oficiales la administración racional de la violencia, la cual suponía tres principios: la preparación, es decir, la reunión de los elementos bélicos necesarios (armamento, hombres y recursos), la organización de las fuerzas que debían hacer uso de ellos y la instrucción de tales fuerzas (Ríos 1962: 40); la planificación de la defensa nacional que sobre la base de un posible enfrentamiento implicaba el conocimiento de la «potencia de las fuerzas adversarias» y la consideración de la situación geográfica y política de los países en pugna como escenario del conflicto (Clément 1900: 357); y, finalmente, la conducción del ejército durante el enfrentamiento, la cual exigía de los comandantes y de sus Estados Mayores «conocimientos técnicos muy completos» (Ibíd.: 362). Preparación, planificación y conducción eran los componentes de la nueva ciencia militar, los cuales exigían de los oficiales amplios conocimientos y la realización metódica de tales actividades. Este era el campo específico de la guerra como ciencia y los oficiales que buscaran practicarla debían mostrar constantemente crecientes niveles de especialización en las actividades que les eran propias, obtenida a través del estudio y la experiencia.

Dado que la guerra era una ciencia «muy compleja» (Ríos 1962: 39-40), compuesta de actividades diversas, realizables solo por medio de la adquisición de conocimientos técnicos en materias variadas (armamento, administración, tecnología civil, táctica, ingeniería, etc.) y de un método codificado y formalizado para la aplicación de tales conocimientos, los practicantes de la nueva ciencia debían tener un *perfil* diferente al de los oficiales promedio que poseía el Perú antes de la reforma. En ese sentido, los oficiales galos incidieron en la constitución de un código ético-profesional que diera un horizonte deontológico a los oficiales que debían formarse

¹⁸⁰ *Revista Militar y Naval*. Año I, N° 9. Lima, 15 de julio de 1888, p. 185

¹⁸¹ El general Pedro Pablo Martínez recordaba en sus memorias de 1935 que con la fundación de la Escuela de Aplicación y de las otras instituciones de formación profesional se pudo «abrir campo a la enseñanza militar para que se posesionaran (los alumnos) de la ciencia de la guerra y no fuera simple arte, como hasta entonces.» (Martínez 1935: 13).

en la Escuela. Y aunque este perfil lo podemos rastrear desde los tiempos de la *Revista Militar y Naval*, solo a partir de fines del XIX y principios del XX se convirtió en el discurso profesional dominante, definiendo lo que debía ser un oficial de un Ejército moderno.

En primer lugar, el nuevo oficial debía tener un profundo amor por su carrera, orientando todas sus capacidades hacia el cumplimiento cabal de sus deberes profesionales. En ese sentido, el oficial debía encontrar en la carrera de las armas un imperativo vocacional que lo orientara a su constante dedicación, alejándose de otras miras que no fuesen el cumplimiento de sus responsabilidades. En ese sentido, en la Escuela Militar era imperativo inculcar en los estudiantes la «[c]onstante decisión por la carrera de las armas que han elegido y amor por el arma á la cual se dedican»¹⁸². Ello, en opinión de su primer Director, debía llevar los oficiales a la búsqueda constante de su perfeccionamiento a través del estudio sobre los desarrollos bélicos y a la constante práctica a través del ejercicio:

El oficial nunca debe olvidar que el debe siempre perfeccionar su instrucción personal y estudiar continuamente para ser capaz de desempeñar el muy difícil papel del oficial en campaña [...] Deben, pues, los oficiales, aunque ya hayan salido de las escuelas, completar sus conocimientos generales y fuera de los ejercicios dedicarse al estudio [...] y hallarse al corriente de los perfeccionamientos de las armas de guerra y de los ejércitos extranjeros. [...] Muy laborioso debe ser, pues, el oficial y muy serio su trabajo; pero precisamente por eso, honradísima es la carrera militar... (Paul Clément, citado por Torres 1923: 124-125).

La total dedicación a la especialización y perfeccionamiento de la profesión debía eliminar aspiraciones ajenas a la vida militar, como la política. Solo la dedicación exclusiva y el amor por la profesión podían llevar a los oficiales a cumplir sus deberes con maestría y, al mismo tiempo, alejarlos de la vida política. Sin embargo, y en segundo lugar, el nuevo oficial solo podía orientar sus conocimientos y actividades profesionales a los fines de la sociedad y a su representación jurídica el

¹⁸² Art. 22º, inciso 2 del Reglamento Especial de la Sección Superior de la Escuela Militar (Escuela Militar, 1901: 8).

Estado, o simbólica, la Patria. Así, el reglamento de la Escuela Militar establecía como uno de los deberes principales con respecto a los alumnos era «[a]costumbrar[se] siempre á la idea del sacrificio de su existencia por la Patria y por las necesidades del servicio público.»¹⁸³ En ese mismo sentido prescribía el mismo Clément la responsabilidad del oficial con respecto a la sociedad: «el oficial emplea tantos esfuerzos con el noble objetivo de ser útil a su país.» (Paul Clément, citado por Torres 1923: 125). Estas prescripciones debían configurar un sólido imperativo de responsabilidad que encausaba el cumplimiento de la profesión en la subordinación de los oficiales a los fines del Estado, como lo entendía en 1908 Pedro Pablo Martínez, ex alumno e instructor de la Escuela: «El militar, pues, no tiene opiniones políticas, no es prosélito de determinado caudillo, ni debe más fidelidad que a la Patria y al gobierno legal que la representa; es esta la verdadera moral que tiene que servir de norma a todo militar honrado.» (Martínez 1924: 246-247).

Añadido a este perfil ético, la Misión Militar estableció también un perfil académico con el que debía contar todo oficial. Para cumplir sus responsabilidades profesionales el oficial debía instruirse, tanto en materias generales, como técnicas. Las primeras debían permitir al oficial comprender la complejidad del fenómeno de la guerra, en su dimensión humana e histórica, y al mismo tiempo darle una educación acorde con su estamento social: «Debe tener una instrucción general muy sólida para ser capaz de estudiar las cuestiones militares que son de naturaleza diversas [y] para poder ocupar en la sociedad el lugar que le corresponde a la dignidad de la carrera militar». Por su parte los conocimientos técnicos permitían al oficial cumplir su labor con maestría y responsabilidad: «Debe tener también una instrucción técnica completa que corresponda a sus funciones profesionales para poder ejercer digna y eficazmente el mando que se le ha encomendado [...] dedicarse al estudio de la táctica general e historia militar, de la geografía y de la topografía, de la fortificación». Solo este alto grado de conocimientos y su continuo perfeccionamiento conducía al fortalecimiento de la autoridad del oficial por encima de sus subordinados, especialmente de los soldados, pues el grado de maestría de un oficial altamente cualificado le brindaba la confianza de aquellos en función de su superior formación: «[m]erced a su instrucción general y técnica llegará el oficial a

¹⁸³ Art. 22º, inciso 3 del Reglamento Especial de la Sección Superior de la Escuela Militar (Escuela Militar 1901: 8).

ejercer sobre su tropa esa autoridad moral que es indispensable para conducirla a su voluntad en las circunstancias difíciles.» (Paul Clément citado por Torres 1923:124-125).

4.2.2. La instrucción profesional en la Escuela Militar

Siguiendo el perfil académico esbozado por los miembros de la misión, en la Escuela Militar se organizó un currículo mixto, por el cual se debían impartir cursos estrictamente militares y otros cursos generales. Estos últimos se abundaron cuando la EMPN fue incorporada a la Escuela Militar de Aplicación. De las materias militares empezamos con la formación táctica que recibieron los alumnos de la Escuela. El objetivo de ella era tanto formar a los oficiales como conductores de tropa, es decir, para el comando de unidades tácticas, como también como instructores de soldados. Para este fin, en la Escuela se utilizaron los reglamentos tácticos franceses de las tres armas del ejército, los cuales incorporaban los «nuevos procedimientos tácticos, correspondientes á los modernos armamentos y á los preceptos del arte». Se confió su confección a una comisión compuesta por los miembros de la misión francesa, Eduardo Dogny, Armando Pottin y Claudio Perrot, y tres oficiales peruanos, quienes tradujeron y adaptaron a las condiciones nacionales los reglamentos tácticos en ese tiempo más recientes del Ejército francés (MGM 1897: 11). Los nuevos reglamentos reemplazaban a las antiguas ordenanzas españolas de Carlos III (1768), la *Instrucción de guerrilla de San Juan* (llegado al Perú en 1822) y el reglamento español de infantería (1881) (Ponce 1948: 27). Este conjunto de doctrinas tácticas respondían a los preceptos de la guerra de cada uno de los contextos en los que se habían formulado, generando no pocas contradicciones entre sí y dificultades en su aplicación. Estas complicaciones conducían a una ejecución *caprichosa* de tales instrumentos, lo que significaba que cada oficial instructor hasta ese momento la hacía ejecutar a la manera que le pareciera más conveniente. La nueva reglamentación táctica, además de reciente, era armónica y uniforme entre sí, y generaba un paso fundamental «para mejorar y uniformar [...] la instrucción de los cuerpos activos» (MGM 1897: 12).

En base a los nuevos reglamentos, la primera misión de los instructores franceses residía en lograr que los oficiales formados en la Escuela los pudieran aprender y luego aplicar en la conducción e instrucción de sus tropas. Con ese objetivo, los reglamentos eran explicados y discutidos en clase para luego ser demostrados y aplicados en los campos de instrucción de la Escuela (Martínez 1924: 13). Según recordaba en 1923 el coronel Enrique Herbozo, alumno de la Escuela de Aplicación en 1898, la instrucción de los reglamentos tácticos se realizaba siguiendo un programa gradual, discutiendo puntos generales en «academias» e inmediatamente aplicados en la práctica, bajo el seguimiento de los instructores de la Escuela:

De estas Academias se sacaba óptimo provecho, pues las partes discutidas y aprendidas en ellas eran aplicadas en la realidad, porque como oficiales conductores de tropas que lo éramos, teníamos la ventaja de practicarlos casi inmediatamente, y lo que es más, con la ventaja de estar vigilados por nuestros inmediatos jefes, los que nos dirigían y alentaban con su competencia, tino, disciplina, inteligencia y honradez, cualidades estas que elevaban nuestro coeficiente de moralidad y que nos animaban al cumplimiento estricto de nuestro deberes, encaminándonos por la senda del prestigio y del honor. (Herbozo 1923: 197)

El programa gradual para el aprendizaje táctico que menciona Herbozo se inició desde el nivel más elemental. A la primera promoción de oficiales-alumnos (de 1898) se les instruyó como si fueran soldados para luego progresivamente ir complejizando el aprendizaje. El objetivo de este método buscaba que los oficiales se familiarizaran con las operaciones que debían cumplir los soldados, pues era «indispensable para [hacer] ejecutar un movimiento á la tropa que el oficial lo haya hecho en las filas.» Así, por ejemplo, con los oficiales-alumnos se formaban grupos de maniobras en el terreno de la Escuela, a fin que le cupiera a cada uno, por turnos, la posición como soldado y luego la de oficial. Inmediatamente, los oficiales aplicaban los métodos aprendidos con las unidades tácticas adscritas a la Escuela, poniendo «en práctica como instructor, los principios que recibió como alumno.» Al tanto que se hacía esto, se instruía a los oficiales en el uso adecuado del arma, haciendo prácticas de tiro al blanco y realizando escuelas de fuego, a fin de «inculcar

al militar la confianza en su arma y sacar de ella el mayor partido posible». Finalmente, correspondía a los alumnos realizar marchas y maniobras fuera de la Escuela, con la finalidad de que los oficiales pudieran conocer sobre el terreno las «dificultades ordinarias de la guerra», enseñarles la vida en campaña, la marcha, buscar al enemigo y combatirlo.¹⁸⁴

El ideal de la formación táctica de los oficiales-alumnos era la comprensión «consciente» del contenido de los reglamentos tácticos. El mismo Herbozo recordaba que los capitanes de las secciones, a través de las academias y conversaciones personales, explicaban y desarrollaban los distintos puntos de los reglamentos «con lo que se conseguía la compenetración consciente de ellos para una mejor aplicación.» (Herbozo 1923: 199). Esta comprensión «consciente» significaba un cambio cualitativo en la formación de los oficiales peruanos. Durante mucho tiempo, el aprendizaje de los reglamentos tácticos se hacía de forma memorística y pasiva, sujeta a la «rutina del cuartel»; por el contrario, la metodología de aprendizaje de la Escuela estuvo enfocada a que el oficial entendiera los principios tácticos de los reglamentos y las razones de sus prescripciones. Al igual como se había hecho de forma pionera en la Academia de Guerra Prusiana, la comprensión como actividad intelectual debía ser la herramienta de base para la instrucción de los oficiales para la acción. En esta comprensión se basaba «la Escuela moderna» militar, como lo entendía un artículo de la revista *El Perú Militar* de 1902:

Ha pasado ya la época en que los oficiales, como los escolares de primer grado, tenían obligación de aprender de memoria, la instrucción del recluta, [...] pero que en cambio no tenían idea verdadera de lo que significaba el espíritu del Reglamento Táctico y su manera de aplicarlo. Hoy [...] no necesita saber recitar al pié de la letra el texto del Reglamento, sino penetrarse bien del espíritu de él, conocerlo á fondo y saber aplicarlo, logrando formar en corto tiempo, soldado conocedores de sus deberes [...] Esto, pues, es lo que nos enseña la Escuela moderna.-Aplicar los reglamentos. [...] los nuevos Reglamentos, además de obedecer á los adelantos de las ciencias militares, hoy, exigen una instrucción muy diferente á la que se necesitaba antiguamente, sujeta exclusivamente á la

¹⁸⁴ AHMP, 1898, Caja N° 7, Informe del Coronel Clément sobre la organización de una Escuela Militar, del 30 de noviembre de 1896.

rutina de cuartel... [Conocimiento] y penetración de su espíritu y aplicación de sus reglas, á conciencia.¹⁸⁵

Por otra parte, la enseñanza táctica de los oficiales en la Escuela también estaba destinada para convertirlos en instructores de los soldados, función que a partir de este período también acusó una transformación cualitativa. Recordemos que esta función de los oficiales era sumamente importante para el ejército, pues a través de ella la doctrina adoptada en la Escuela podía difundirse uniformemente en todos los cuerpos de tropa, una vez que los oficiales educados en ella marcharan a sus propias unidades. Así lo entendía Clément, quien en la inauguración de la Escuela prometió instruir a los oficiales, poniéndolos al corriente de los últimos adelantos de la guerra «hasta que se penetren del espíritu que debe animar a todo instructor», ya que el oficial instructor «está llamado a poner en juego todas sus aptitudes, sin olvidar un momento la grandeza de su misión, que consiste no solamente en formar soldados aptos para el servicio de las Armas, sino también de habitar a los soldados al trabajo» (Clément, citado por Ríos 1962: 41).

En ese sentido, correspondía al oficial instructor formar en los soldados una personalidad más activa y dúctil frente a las situaciones de la guerra. En el pasado, afirmaba otro artículo de *El Perú Militar*, los oficiales privilegiaban los movimientos mecánicos de las tropas, mostrando su maestría como instructores en el cumplimiento disciplinado y uniforme de las órdenes emitidas, sin consideración del contexto general del enfrentamiento, es decir, el logro del ejercicio *per se*:

[S]e juzgaba, por algunos, un gran militar al que exigía una escrupulosa uniformidad en todos los movimientos principalmente en los del manejo del arma; al que mandaba un descanso que producían un solo golpe originado por las culatas de los fusiles al tocar el suelo [...] como la manifestación mas completa de la instrucción de la tropa; al que hacía mover el Batallón al toque de cornetas valiéndose de caprichosas combinaciones, pues en la originalidad hacía consistir el alto conocimiento táctico.¹⁸⁶

¹⁸⁵*El Perú Militar*. Quincenario Científico-Militar Ilustrado. Año I, N° 8. Lima, 1 de julio de 1902, pp. 91-92.

¹⁸⁶*El Perú Militar*. Año I, N° 8. Lima, 1 de julio de 1902, p. 96

Por el contrario, al tanto que los oficiales adquirirían un conocimiento consciente del uso de los reglamentos, este debía ser enseñado prácticamente a los soldados en su propio nivel de competencias. El nuevo oficial instructor debía hacer ejercitar a los soldados en posiciones y movimientos en directa relación con lo que podría suceder en el combate, ofrecerle conocimiento acerca del armamento que disponía, utilizar el terreno en su favor, etc.:

[P]asado el tiempo, repetimos, al presente sólo debemos juzgar buen militar al que sepa enseñar al soldado la instrucción teórica y práctica de puntería y tiro y la manera de gastar su munición; al que pueda darle instrucción de combate haciéndole conocer el valor de los abrigos del terreno, la manera de elegirlos, ocuparlos y utilizarlos; al que en campaña, en un vivac, sepa tomar todas las disposiciones exigidas por la guerra moderna y sus elementos; [...] en fin, al que pueda devolver á su hogar hecho soldado, al conscripto que son saber tomar un rifle entre las manos, es llamado al servicio obligatorio.¹⁸⁷

Pasemos ahora a ver la instrucción teórica que recibieron los oficiales en la Escuela, tomando como fuente el plan de estudios de 1902. Este está diseñado para un período de cuatro años de formación profesional, con dos divisiones principales: los dos primeros años de formación general y los dos últimos de formación eminentemente técnico-profesional. Resulta importante destacar que el plan era de carácter «mixto», ajustándose a la concepción que había adquirido la nueva ciencia militar, pues en buena parte el estatuto científico que adquirió la guerra durante la segunda mitad del siglo XIX se debió a la complejidad de materias generales y especializadas que intervenían en su ejecución. En ese sentido, para que un cientista de la guerra pudiera cumplir su propósito debía adquirir en su formación amplios conocimientos técnicos como generales, veamos por qué.

En el ciclo inicial se enseñaba disciplinas generales que debían servirle de base para estudios profesionales posteriores, por ejemplo, el conocimiento de álgebra, geometría, trigonometría resultaba indispensable para el estudio de topografía, balística y fortificación, mientras para las dos últimas se hacían necesarios además

¹⁸⁷ *El Perú Militar*. Año I, N° 8. Lima, 1 de julio de 1902, p. 96.

conocimientos de física y mecánica. Oros cursos generales como Historia, Composición Castellana, Dibujo y Geografía permitían situar al estudiante en su contexto inmediato para entablar relaciones con su entorno dentro de la vida militar y con el mundo civil, como afirmaba el coronel Clément: el oficial «debe tener una instrucción general muy sólida para poder ocupar en la sociedad el lugar que le corresponde a la dignidad de la carrera» (citado por Torres 1923: 124). En cierta forma los conocimientos generales estaban también orientados para que los oficiales tuvieran una mayor comprensión de los seres humanos con los que debían tratar a diario, competencia aún más importante si se considera que el Ejército es una organización compleja compuesta de seres humanos, con actitudes, aspiraciones y comportamientos diversos. Al mismo tiempo, estos cursos servían para desarrollar habilidades y competencias, como habilidad analítica, reflexión, imaginación y juicio, que no podían encontrarse estrictamente en el entrenamiento puramente militar. Como ha afirmado Samuel Huntington a nivel teórico para todos los profesionales de la guerra, «[l]as habilidades y hábitos de la mente que le hacen falta en su campo profesional en gran medida pueden ser adquiridos solamente a través de las avenidas más amplias del aprendizaje fuera de su profesión.» (Huntington 1995: 25)

La sección de materias estrictamente militares incluía, además de los de aprendizaje táctico, cursos técnicos como *Balística* y *Teoría de Tiro*, para el conocimiento teórico y práctico de las armas de fuego; *Fortificación*, para el levantamiento de emplazamientos defensivos pasajeros y para obtener conocimientos básicos de instalaciones militares; *Administración Militar* y *Redacción Militar*, cursos orientados a dotar a los oficiales de competencias básicas para sus labores administrativas y de organización, etc. Todos estos cursos tenían una vocación eminentemente técnica y representaban la incorporación de los avances tecnológicos y técnicos en la formación de oficiales en el país. Sin embargo, dentro de este grupo de asignaturas, es conveniente resaltar tres que nos parecen particularmente importantes: Hipología, porque muestra el grado de deficiencia de conocimientos técnicos básicos anteriores a la reforma; *Topografía* por ser una disciplina indispensable en las acciones de comando y planeamiento en la guerra moderna; e Historia Militar, por ser un curso destinado al desarrollo de competencias intelectuales en los oficiales.

El curso de *Hipología* era una materia profesional básica, no solo para la caballería sino también para las demás armas. Dado que el oficial en la mayoría de los casos debía andar a caballo y que la forma de transporte de los suministros y elementos bélicos en la geografía peruana se hacía por medio de tracción animal (caballos y mulas), el curso de hipología se hacía sumamente necesario. Como afirmaba el director Eduardo Dogny en una carta enviada al Ministerio de Guerra en 1900, era inconcebible que en el país no se hubiera jamás enseñado a los militares las reglas básicas para el entrenamiento, manejo y salud de los caballos, vacío que había sido llenado por primera vez ese año por el libro redactado en la Escuela Militar por el Mayor Soyer Caravedo¹⁸⁸.

Por su parte, la enseñanza del curso de *Topografía* era imprescindible para cualquier oficial que buscara el cumplimiento exacto de una orden. A diferencia de los mapas que describen el territorio de una manera general (en dos dimensiones), las cartas topográficas permiten describir el terreno con mayor precisión, destacando la elevación y las condiciones accidentadas del terreno (curvas de nivel). Solo poseyendo tal información un oficial puede establecer órdenes precisas, calculando el tiempo y el espacio para una marcha, o impartiendo la orden de una maniobra en el campo de batalla. En ese sentido, los conocimientos topográficos debían ser infaltables a cualquier conductor de tropas, a fin de que pudiera realizar su misión con un alto grado de precisión. Asimismo, la topografía era imprescindible para cualquier planteamiento estratégico nacional que hicieran los oficiales de Estado Mayor General, por los mismos motivos señalados en la conducción de tropas. De allí que los conocimientos topográficos fueran la base, tanto para los oficiales destacados en campaña, como también para los que se formarían en las tareas de Estado Mayor, como se verá más adelante con mayor detalle. Finalmente, el curso de *Historia Militar* permitía a los estudiantes familiarizarse con todas las situaciones y contextos que podían producirse en una campaña, entendiendo la Historia como un gran receptáculo de experiencias, que aunque irrepetibles, podían ser útiles para desarrollar el juicio para el comando de tropas.

¹⁸⁸ AHMP, 1900, Caja N° 7, “Oficio del Director de la Escuela Militar de Aplicación, Eduardo Dogny, al Director de Guerra”, del 2 de noviembre de 1900.

Cuadro 7: Plan de Estudios de las Escuelas Militares

Escuela de Militar Preparatoria y Naval, y Escuela Militar de Aplicación		Escuela Militar de Chorrillos (1902)	
Escuela Militar Preparatoria y Naval (Local de Santa Sofía) 1899 (3 años de duración)	Cálculo numérico	Dibujo táctico de Inf.	Sección Preparatoria (2 años de duración)
	Álgebra Elemental	Álgebra	
	Trigonometría	Geometría	
	Historia del Perú	Trigonometría	
	Dibujo natural y de paisajes	Composición Castellana	
	Artilería descriptiva, balística elemental	Redacción	
	Inglés	Historia General y del Perú	
	Francés	Geografía Universal y de Sudamérica	
	Geometría Elemental	Física 1	
	Trigonometría y complemento de Geometría	Francés	
	Geometría descriptiva y dibujo lineal		Sección Técnica (1 año de duración)
	Composición Castellana	Física 2	
	Filosofía	Química	
	Fisiología e higiene	Mecánica	
	Historia y arte militar	Balística	
	Historia Natural	Reglamentos tácticos	
	Escuela de tiro	Francés	
	Topografía y fortificación pasajera	Dibujo (lineal y Paisaje)	
	Derecho Internacional	Arte Militar	
	Física, química y mecánica elementales	Administración Militar	
Escuela Militar de Aplicación 1898-1899 (1 año de duración)	Mecánica racional y análisis matemático	Historia Militar	Sección de Aplicación (1 año de duración)
	Táctica de Caballería, Infantería y Artilería	Legislación Militar	
	Hipología	Teoría del Tiro	
	Higiene	Topografía	
	Fortificación	<i>Hipología</i>	
	Reglamentos Tácticos	<i>Higiene</i>	
	Minas y explosivos	Fortificación	
		Reglamentos Tácticos	
		Redacción Militar	
		Arte Militar	
		Derecho de Guerra	
		Administración Militar	
		Dibujo	

Fuente. Ministerio de Guerra y Marina 1899: Anexo 53, Cuadro B: Reglamento Orgánico Provisional para la Escuela Militar de Aplicación, de 30-01-1897, citado en MGM 1897: 14-15. Decreto de Reorganización de la Escuela Militar, de 30-12-1902, citado en Ríos 1962: 681-684. Cuadro de elaboración propia.

4.2.3. Un caso de profesionalismo militar: el Viaje del Estado Mayor de 1902

Un ejemplo claro del grado de profesionalismo que la Misión Francesa buscó procurar al Ejército peruano lo encontramos en la expedición que comandó Paul Clément, en 1902, destinada a la formación de oficiales para el servicio de Estado

Mayor en campaña.¹⁸⁹ Hemos visto que la muestra más palpable del profesionalismo militar y del carácter científico que alcanzó la guerra en el siglo XIX se desarrolló alrededor de los Estados Mayores y de sus oficiales, como espacios y elites intelectuales dentro de un *ejército moderno*. El viaje se inscribía en ese espíritu científicista, siguiendo la doctrina Moltke, tal como se enseñaba en la Escuela Superior de Guerra de Francia (Clément 1902: 9). En ese sentido, esta expedición nos permite conocer en detalle cómo los instructores franceses formaron a los oficiales peruanos en las labores más delicadas de la ciencia de la guerra. Pero al mismo tiempo, la expedición nos ofrece la oportunidad conocer el método que emplearon los franceses para organizar y mejorar el Ejército que ayudaron a reformar.

A nivel general, el Viaje del Estado Mayor (VEM) empleó un método de observación y experimentación. La instrucción de los oficiales de Estado Mayor (alumnos) pasaba por el aprendizaje a través de la observación de datos fácticos (topografía, organización de unidades, maniobras, etc.), seguida inmediatamente por la aplicación (experimentación) de lo observado. De similar manera, los instructores del viaje seguían el mismo método: el viaje les servía para observar datos fácticos del país y registrarlos para el uso del Ejército (topografía, recursos naturales y humanos, y vías de comunicación), pero también para realizar observación y experimentación en el terreno sobre las unidades organizativas del Ejército –representado en los mismos alumnos–, y las deficiencias de sus servicios, a fin de que los datos obtenidos sirvieran para realizar los diagnósticos correspondientes e implementar en el conjunto del Ejército las reformas necesarias. En ese sentido, el viaje permitía a los alumnos observar y experimentar las tareas que debían cumplir los oficiales de Estado Mayor, pero al mismo tiempo permitía a sus instructores conocer el país de una forma rigurosa y observar el nivel de eficiencia del Ejército para hacer ajustes.

Para los fines de la expedición, se organizó una comisión con oficiales destacados con potencial para convertirse en oficiales de Estado Mayor, dividiéndose en dos grupos según su especialidad. El primero, al mando del Coronel Samuel

¹⁸⁹ Esta expedición fue la primera de varios otros viajes de Estado Mayor que se practicaron en el país en las dos décadas siguientes del siglo XX. De ellos se pueden citar el viaje de los alumnos de la Escuela Superior de Guerra realizado en los departamentos de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Piura en 1906 (Escuela Superior de Guerra 1906).

Palacios Mendiburu, se dedicó al estudio de temas tácticos, como la dirección de las tropas en campaña, en estación, en marcha ó en combate, además del estudio particular del papel del oficial de EM como auxiliar del Comando. El segundo grupo, dirigido por el teniente coronel de la Misión, Luis Bailly-Maitre, le cupo realizar los ejercicios de topografía de campaña, levantamiento de itinerarios y cróquis de posiciones.¹⁹⁰ La expedición tuvo una duración de tres meses y se programó para recorrerlos departamentos Lima, Huánuco, Junín y «algunas selvas»¹⁹¹, cruzando las ciudades de Cerro de Pasco, Huánuco, La Merced, Huancayo, Tarma y la Oroya, las colonias de la montaña de Pozuzo y Oxapampa, y recorriendo en canoa los ríos Pacalzú y Mairo, para regresar a Lima después.¹⁹²

Los estudios tácticos estuvieron enfocados a la práctica de las tareas que corresponde a los oficiales de Estado Mayor como auxiliares de dos tipos de unidades tácticas en campaña: Cuerpo de Ejército y División. Durante la expedición los oficiales tuvieron la oportunidad de realizar tareas parciales (véase el Cuadro N.º 8) a fin de observar el funcionamiento del servicio de Estado Mayor en una operación completa de guerra.¹⁹³ De todos los trabajos tácticos que se llevaron a cabo, nos parecen importantes dos que muestran la complejidad de las tareas estudiadas y el grado de profesionalismo que se esperaba de los oficiales de Estado Mayor. La primera, la organización de unidades tácticas mayores, *Cuerpo de Ejército* y *División*, especialmente el primero, pues dado su tamaño podía ser considerada «una verdadera fuerza» capaz de realizar una operación de guerra de bastante importancia. A ello debía añadirse que en el Perú, la formación de unidades de esa dimensión era casi desconocida o por lo menos no se encontraban reconocidas en las leyes y reglamentos militares anteriores a 1897. Para la organización de un Cuerpo de Ejército, era necesaria la instalación de un Cuartel General dotado de *Comando, Estado Mayor y Direcciones de Servicios*. La instrucción incidió en las

¹⁹⁰ Cfr. *El Perú Militar*. Año I, N° 9. Lima, 15 de julio de 1902, p. 109.

¹⁹¹ A solicitud de la “Sociedad Geográfica de Lima” se decidió la expedición al Mairo.

¹⁹² Se escogió tal itinerario por varios motivos. En primer lugar los departamentos serranos del Centro permitían la experimentación de la movilización de unidades tácticas a través de terrenos accidentados, en el caso del camino a Cerro de Pasco, y la ejecución de maniobras de combate de grandes unidades, en las pampas de Junín. Además, contaba con centros poblados de importancia cercanos a Lima que debían ser analizados desde el punto de vista estratégico. Por último, tales departamentos ofrecían un atractivo topográfico, pues a través de ellos podía, como se hizo, establecer un itinerario que comunicara la Capital con el departamento de Iquitos, pasando por Cerro de Pasco y Huánuco y transitando por los ríos del Oriente amazónico, cfr. *El Perú Militar*. Año I, N° 9. Lima, 15 de julio de 1902, p. 110.

¹⁹³ *El Perú Militar*. Año I, N° 9. Lima, 15 de julio de 1902, pp. 109-111

atribuciones de estas dependencias, sus relaciones recíprocas, y las condiciones necesarias de funcionamiento para el servicio del Comandante. Según Clément, los estudiantes de la Comisión «han podido darse cuenta de la complicación que resulta para el Cuartel General de la necesidad de tener siempre agrupados esos elementos, que no pueden funcionar sino cerca del Jefe del Cuerpo de Ejército y bajo la vigilancia del Jefe de Estado Mayor» (Clément 1902: 44).

Bajo una condición de guerra, todos los oficiales de Estado Mayor formados en esta doctrina debían estar en condiciones de organizar estas fuerzas de una manera, sino uniforme, por lo menos armónica que permitiera las relaciones funcionales entre ellas, y la vigilancia y dirección eficaz del Comando Central del Ejército, atribuciones justamente posibles en virtud de la uniformidad o armonización organizativa del Ejército. En ese sentido, se buscaba eliminar la improvisación en la creación de grandes unidades militares, con dependencias y fuerzas diversas e indeterminadas para el Comando Central, pues a pesar de las dificultades concretas del contexto inmediato, los oficiales de Estado Mayor estaban formados para razonar de una forma similar, gracias a «la inteligencia y juicio bien educados» (Clément 1902: 7)

Los trabajos tácticos también incluían la observación y experimentación sobre el terreno de las tareas de los Estado Mayores en la dirección de las operaciones con una División, como la marcha, estación, descubrimiento, y el combate de la División. Una de las tareas que se privilegió en esta clase de trabajos fue la redacción de las órdenes de movimiento. Este tipo de documento resumía el grado de control de las fuerzas militares en desplazamiento a través de las dimensiones tiempo-espacio que podía alcanzar un comando sobre la base de los servicios de un Estado Mayor bien entrenado. La orden no solo incluía el número de efectivos, de unidades y su posición en la marcha, sino también el lugar de su partida, itinerario y destino (espacio) y la duración estimada del desplazamiento (tiempo). Con el conocimiento acerca del terreno de desplazamiento y del tiempo “estandarizado” para el alistamiento de las fuerzas y para la marcha, los oficiales del Estado Mayor podían establecer con un alto grado de precisión en un momento determinado, el lugar en donde se encontraban y las dimensiones de una división militar. Esto era fundamental tanto para el Comando de la misma unidad táctica, como para el

Comando Central del Ejército, sobre todo cuando las marchas eran prolongadas y los caminos lo suficientemente estrechos para obligar a la unidad dividirse en columnas separadas:

De la redacción de esta orden de movimiento depende la regularidad de la marcha; merced á ella, cada tropa sabe el sitio que debe ocupar en la columna, el lugar del camino ó *punto inicial* en que se debe incorporar á ella y la hora en que debe presentarse en ese punto inicial; tiene pues todos los datos necesarios para ponerse en marcha en el momento oportuno. [...] La extricta ejecución de la orden de movimiento se impone si se quiere mantener el orden en las columnas, sobre todo cuando son largas; además es necesario que el jefe de aquellas y su Estado Mayor sepan á cada momento donde se encuentra cualquier tropa, y precisamente la orden de movimiento es la clave que les permite darse cuenta de eso. (Clément 1902: 37)

Este era una de las características del nuevo cientificismo militar, el control y la predicción con «exactitud» del estado y movimiento de las fuerzas a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, estas capacidades solo podían lograrse si los oficiales de Estado Mayor y, a través de ellos el Ejército, acumulaban determinados saberes acerca de su misma organización. Estos saberes estaban compuestos de información observable en la misma práctica del servicio en campaña, en los detalles de los servicios logísticos y en el conocimiento específico de prácticas de las tropas. Era, pues, necesario saber cómo se organizaban y se ejecutaban con regularidad los servicios de alimentación, armamento y vestuario, pero también saber cuánto se demora la tropa en llevar a cabo una actividad diaria: «En cada cuerpo es menester que su jefe sepa exactamente el tiempo que necesita su tropa para alistarse, es decir, el número de horas y minutos que emplea para levantarse, desayunar, ensillar, embastar, etc. [...] según ellos, el jefe del Cuerpo, conociendo la hora en que debe pasar por el punto inicial y aquella en que debe poner su tropa en movimiento, fijará la de despertarse.» (Clément 1902: 37-38). El conjunto de saberes que abrazaban los detalles de la organización militar permitía representarse la multiplicidad de sus componentes en interacción y concebirla como un todo para que funcionara como una maquinaria de precisión.

Al mismo tiempo este saber de los detalles, esta observación de las prácticas mínimas, permitía también establecer comportamientos *normalizados*, es decir, estandarizarlos ascendentemente para construir modelos prescriptivos que debían convertirse en la *norma*, permitiendo la sanción de sus desviaciones y la observancia de los criterios e indicadores de eficiencia que esta encerraba. En ese sentido, el Viaje de Estado Mayor también fue un experimento de la Misión para la observación de cómo se desarrollaba una División modelo en campaña, construir indicadores de eficiencia y denunciar las deficiencias. Fueron así, sometidos a observación aspectos mínimos como los aditamentos y ejercicios para mantener en buen estado el armamento del soldado, las prendas necesarias para la marcha, la calidad de los alimentos, la organización de su preparación y distribución rápida, la forma como mantener listos a los caballos en campaña, etc. Después de un análisis prolijo de estos detalles, la Comisión establecía propuestas específicas para cada problema, actitud que era el sello de la Misión, es decir, la ejecución de las tareas del Ejército a nivel de ensayo y observación, a fin de modificarlas constantemente para asegurar crecientes niveles de eficiencia. El cumplimiento regular de cada uno de estos detalles logísticos, según Clément, permitía a los oficiales librar la atención de los comandantes de las tareas auxiliares y dirigirlos estrictamente a la resolución de las órdenes durante la campaña (Clément 1902: 11-14 y 19), además que su cumplimiento eran la base para la ejecución de las acciones militares: «Es menester que cuando un jefe dé una orden, su ejecución no resulte imposible por dificultades ó tropiezos debidos principalmente á la falta de exactitud ó extrictez en el servicio» (Ibíd.; 18).

Por otra parte, el segundo grupo se dedicó a labores topográficas y estadísticas de los departamentos visitados. Se hicieron itinerarios sobre la ruta que siguió la expedición con una extensión de 1,800 km., además, se levantaron planos y se recopiló información estadística de los recursos humanos y materiales de ciudades y regiones importantes, como Cerro de Pasco, Tarma, Jauja, Huancayo, Oxapampa y Huánuco (Clément 1902: 33-34). Adicionalmente, el viaje permitió constatar las técnicas de recojo de información requerida a particulares: todos los datos obtenidos debían ser *controlados*, es decir, verificados a través de la observación o el contraste entre varios informantes. Este interés del cuidado por la calidad de la información recogida era una consecuencia lógica de la experiencia:

Cada vez que se nos ha proporcionado datos hemos podido constatar que eran falsos; en las selvas como en la sierra, en las chozas como en las grandes poblaciones, hemos encontrado á personas muy bien dispuestas para dar toda clase de indicaciones sobre el estado de los caminos y su longitud, y sobre los recursos que ofrecen las poblaciones del tránsito; pero ni una vez hemos podido constatar que eran conformes á la realidad (Clément 1902: 20).

En ese sentido, estas prácticas sobre el terreno no solo servían para perfeccionar las competencias de los oficiales y las técnicas, sino también ofrecían la oportunidad de llenar graves vacíos de información geográfica y estadística que adolecía tanto el Ejército, como el mismo Estado peruano. Así, el viaje se convirtió en más que una práctica de tareas topográficas para los oficiales, en tanto que los estudiantes recopilaban información para los estudios, proyecciones y planes del Estado Mayor General en Lima y del propio Estado.¹⁹⁴ Se sabe que en muchos sentidos la información geográfica, especialmente la topográfica, es fundamental para el planeamiento estratégico y la operación de las fuerzas militares sobre el terreno. Lamentablemente, el Perú no tenía información geográfica ni siquiera de su propio territorio, como lo recordaba el Jefe de la expedición:

Desde el primer día supimos, pues, que no se podía contar con datos exactos, y estábamos advertidos que debíamos desconfiar de las indicaciones del mapa y las afirmaciones de los prácticos. Lo mismo pasó en lo sucesivo del viaje; el mapa de Raymondi está lleno de inexactitud y no tiene la precisión que conviene á su escala; el viajero que se conforme con guiarse sólo por él, se expone á emprender marchas por caminos que sólo existen en el mapa, y á escoger como pascanas poblaciones donde no encontrará ni siquiera un tambo. En cuanto á los guías, raras veces se encuentran buenos, y los datos que proporcionan son á menudo muy inexactos. (Clément 1902: 20)

El viaje permitió al Ejército conocer in situ el número, el estado y la utilidad de las vías de comunicación que se encontraban dentro del itinerario. En este largo recorrido, la Comisión pudo registrar las condiciones de las vías de comunicación y la factibilidad de movilización de los cuerpos del Ejército por las mismas. Por

¹⁹⁴*El Perú Militar*. Año I, N° 10. Lima, 1 de agosto de 1902, p. 117.

ejemplo, durante la marcha entre la región de Pozuzo y Oxapampa, el paso fue sumamente accidentado por el estado de los caminos y la feracidad del terreno, como lo explicaba Clément: «La marcha en los bosques es difícil, porque el camino que tal vez fue bueno en otra época, está casi destruido, lleno de fango, y cortado por los numerosos árboles que para pasarlos se necesita una gimnástica y modo de andar especial que, en los primeros días, nos cansaron mucho.» Similar situación se sufrió cuando la expedición recorrió el río Pacalzú: «La navegación [...] costó muchos esfuerzos á las 23 personas embarcadas en la canoa, porque cuando el río está cargado, es imposible luchar contra la corriente y cuando bajan las aguas, es menester echarse frecuentemente al agua para jalar la canoa.» (Clément 1902:24). A pesar de las dificultades del viaje, esto permitió a la Comisión explorar, reconocer y corregir los datos inexactos de zonas del territorio nacional escasamente estudiadas, especialmente conocer desde la perspectiva de los militares lo que era «la montaña»: «El fastidio de la marcha es compensado con el interés de la selva; la vegetación intensa, la profusión de árboles y plantas, nos dan idea de lo que es la Montaña» (Ibíd.: 23).

Uno de los aspectos más importantes del viaje fue el establecer una ruta adecuada entre Lima e Iquitos adicional a la vía del Pichis. Esta era una de las principales motivaciones del viaje a las montañas, pues, para los ojos de estos militares, la ciudad de Iquitos no podía seguir estando sin comunicación con el centro de la República, ello significaba quedar expuesta a «vivir separada de la acción del Gobierno» y en peligro de caer en manos de extranjeros. De allí la importancia administrativa y militar de establecer una línea de comunicación rápida para poder enviar tropa al Amazonas. Sin embargo, en tiempos de guerra, esta vía tenía otras ventajas, sobre todo en un escenario de enfrentamiento con sus vecinos del Pacífico, especialmente Chile. Por un lado, a través de los ríos orientales podía establecerse comunicación con países «amigos o neutrales»; por otro, aseguraba una línea de comunicación más rápida y segura entre Lima y los países productores de armas en Europa y Norteamérica, más aún si se consideraba la debilidad de la Armada peruana. Aprovechando la fácil y rápida comunicación de Lima con La Oroya y de Iquitos con el puerto Victoria, se trazó una ruta que unía el Puerto Victoria a Chuchuras, yendo por el Pacalzú o el Pichis y atravesando la cadena de San Matías, para luego dirigirse a Oxapampa y continuar la marcha por el camino

Huancabamba, Hualga, Paucartambo, y arribar a la altiplanicie de Junín, a Carhuamayo, en donde se encontraba el camino del Cerro á La Oroya. Esta ruta tenía la ventaja de que podía recorrerse en 16 días a paso de infantería (con dos días de descanso en Paucartambo y Oxapampa), además que permitía una vigilancia y defensa fácil de los convoyes y columnas militares que transitaran por ella, y posibilitaba por fin la salida de los productos de los colonos de Oxapampa (Clément 1902: 30-31).

Para finalizar este análisis, veamos qué tipo de oficial se buscaba formar con una expedición como esta. Según Clément, el Viaje de Estado Mayor tenía como finalidad proporcionar a los estudiantes una «[i]nstrucción técnica superior», a fin de que pudieran conocer con maestría «todos los ramos del arte y de la ciencia militar». Los oficiales de Estado Mayor debían reunir conocimientos sobre organización de unidades militares, sobre la organización de servicios auxiliares, los procedimientos de los movimientos tácticos y conocimientos topográficos (ver Cuadro N.º8). Sin embargo, antes que nada, los instructores franceses buscaban la formación de un «sano juicio de las cosas militares», cualidad sine qua non del oficial ideal del Estado Mayor. Esta solo podía alcanzarse en tiempos de paz, a través del trabajo constante sobre el terreno, es decir, por medio de la observación personal de casos concretos que permitían generar la suficiente experiencia nacida de la meditación sobre las eventualidades que se podían ofrecer en la guerra y en los problemas que tuvieran que resolver lejos de los formulismos y de las recetas (Clément 1902: 5 y 50-51).

Cada situación de guerra tiene un carácter propio que depende del valor de las fuerzas opuestas, de su número, organización é instrucción, del terreno que ocupan y de los muchos otros factores y circunstancias; de donde resulta que á cada situación le corresponde la solución de un problema especial, el cual no habrá jefe que lo resuelva, si se limita á buscar en su memoria el recuerdo de lo estudiado en los libros de táctica ó historia militar ó de lo que hubo aprendido en las Escuelas. [...] se debe proceder conforme á los dictados de la inteligencia y juicio bien educados. (Clément 1902: 7)

Solo la obtención de tal experiencia en tiempos de paz podría capacitar a los oficiales de Estado Mayor para que en tiempos de guerra pudieran «formarse» rápidamente

una idea «completa» de la situación establecida, tomar las resoluciones necesarias y comunicarlas a través de órdenes «precisas, claras y ejecutables» (Clément 1902: 7). Esta concepción del oficial superior de Estado Mayor, como se ha visto, se alejaba rotundamente de la doctrina del «genio militar», es decir, del jefe militar que por sus cualidades naturales y extraordinarias era un buen oficial, al mismo tiempo, rechazaba las *recetas* y consejos aleccionadores de los famosos “prontuarios” militares que habían sido la base de la formación de la *intelligentsia* militar peruana durante el siglo XIX y habían sido expresión de ese saber poco general y aún fragmentario de la guerra antes de convertirse en ciencia.¹⁹⁵

¹⁹⁵ En la Biblioteca Nacional del Perú se encuentran varios de estos prontuarios que se publicaron durante la segunda mitad del siglo XIX: Sepúlveda, José Antonio, *Manual del oficial en campaña*. Lima: Imprenta de J. Montoya, 1861, Bolognesi, Mariano, *Prontuario de instrucción militar*. Lima: A. Aubert, 1864, Anónimo, *Definiciones extractadas de varias obras para el uso de los SS. oficiales del ejército*. Piura: [s.n.], 1868, Fajardo, Víctor, *Compendio de moral militar*, Lima: Impr. del Estado, 1878, y Anónimo, *Apuntes sobre moral militar, seguidos de algunas instrucciones para el servicio de campaña*, Ayacucho: Imprenta de la Unificación Nacional, 1882.

**Cuadro 8. Tareas realizadas en el Viaje
de Estado Mayor. 1902.**

1er. Grupo		2do. Grupo	
Cuerpo de Ejército		Organización de un Cuerpo de Ejército Servicio de E. M. del Cuerpo de Ejército Marcha del Cuerpo de Ejército, en columna de camino	Operaciones Topográficas Observaciones astronómicas. Triangulación rápida. Levantamiento de itinerarios. Levantamientos de reconocimientos de una posición. Planos de poblaciones. Vistas panorámicas. Estudio del terreno. Estadística: recursos de la región, poblaciones, etc.
División	Organización	Organización de una División operando aisladamente Cuartel General y Servicio de E. M. de la División	
	Marcha	Marcha de la División en columna de camino Servicio de seguridad en marcha Servicio del E. M. durante la marcha	
	Estación	Vívac Servicio de seguridad en estación Servicio de E. M. en la estación	
	Descubrimiento	Servicio de descubrimiento Reconocimiento de oficial de E. M. a) De una región ó terreno, b) Del enemigo	
	Combate de la División	Combate de la vanguardia Llegada del grueso Combate de frente y maniobra de las tropas designadas para pronunciar el ataque Preparación del ataque Ejecución del ataque y asalto Persecución Retirada Organización de una posición defensiva Servicio de E. M. durante el combate	
	<i>Servicios</i>	Funcionamiento del servicio de abastecimiento de munición Funcionamiento del servicio de abastecimiento de víveres Funcionamiento del servicio de sanidad	
	<i>Comunicaciones</i>	Funcionamiento del servicio de correspondencia y telegrafía Servicio de retaguardia hacia la base; línea de comunicación; base de operación.	

Fuente. El Perú Militar. Año I, N° 9, Lima, 15 de julio de 1902, pp. 109-111.
Cuadro de elaboración propia

4.3. El «disciplinamiento» de los oficiales al interior de la Escuela Militar

Se ha visto hasta aquí la dimensión profesional de la Escuela, pasemos ahora a ver una dimensión más sutil, la dimensión disciplinaria. Para que el proceso de reforma fuera exitoso, resultaba necesario, además de brindar conocimientos profesionales a los aspirantes a oficiales, disciplinarlos, creando en ellos *hábitos* militares. Lo que los instructores franceses implantaron en la Escuela para este fin fue un modelo de aplicación del poder compacto, intenso y prolongado para “construir” comportamientos *dóciles* y *útiles* que debían redundar en el beneficio de la organización militar y por extensión en beneficio del Estado. Al interior del plantel, se pusieron en vigor una serie de técnicas que constituían un mecanismo institucional que permitía la transformación de jóvenes civiles, en militares disciplinados. Antes de centrarnos en tales técnicas, veamos las consideraciones que se tenía sobre la disciplina a fines del siglo XIX y algunos casos del nivel de disciplina de los oficiales antes de la reforma.

La disciplina es una característica fundamental de las instituciones militares modernas, a tal punto que para los hombres de uniforme, si no existe disciplina, no puede funcionar ningún ejército. En Europa, desde inicios de la Edad Moderna, los teóricos militares comprendieron que un ejército con efectivos forjados en una dura disciplina, capaces de seguir órdenes precisas y efectuar maniobras con rigor, eran muy superiores a los cuerpos que carecían de ellas. Como herederos de la tradición occidental, los militares peruanos compartieron en parte esta preocupación por el establecimiento de una dura disciplina. Por ejemplo, en su compendio de *Moral Militar*, Víctor Fajardo afirmaba lo fundamental de la disciplina al interior del Ejército, vinculándola con la subordinación y la obediencia, considerándola como el único medio para lograr la eficacia de las operaciones militares:

La disciplina es el alma del Ejército, de su conservación y exacta observancia depende el bienestar de una tropa y el buen éxito de sus operaciones [...] un puñado de valientes, logra vencer casi siempre a una gran masa de gente armada que no está sometida por disciplina. La subordinación es la base de la disciplina y la principal causa de la preponderancia de una tropa; sin subordinación no hay obediencia, sin obediencia no se consigue la perfección [...] (Fajardo 1896: 13)

Por su parte, Ezequiel Vásquez prescribía que al exterior de un Ejército, la disciplina hacía que el militar pudiera regular sus relaciones con otros actores sociales, al mismo tiempo que lo orientaba al respeto de la autoridad civil:

Esta disciplina que brilla tanto en los individuos de un ejército bien organizado no se manifiesta menos en su roce con el resto de sus conciudadanos. Unido con ello por los vínculos de la naturaleza, de la amistad y de la patria no puede tratarlos con altivez ó desprecio. Las leyes son objeto de veneración, y tanto los magistrados civiles que las hacen obedecer como los ciudadanos que las cumplen, deben tener las debidas consideraciones de parte de todas las clases que componen el ejército. Es muy impropio de un militar que se muestre con aire insolente y orgulloso, demostrando que en el ciudadano no vé sino algo inferior á quién debe darle la ley por ir este inerme.¹⁹⁶

A pesar de estas constantes preocupaciones, los ejércitos peruanos que se formaron a lo largo del siglo XIX no eran precisamente los mejores exponentes de la disciplina militar. En las tropas la desertión, insubordinación e incumplimiento de las órdenes y el ataque la población civil eran frecuentes, mientras que en los oficiales la traición, el desconocimiento de la autoridad civil y militar, eran también sumamente recurrentes. Veamos algunos ejemplos del grado de disciplina que guardaban los oficiales peruanos, empecemos con dos relacionados con la subordinación al interior de las instituciones castrenses. En un oficio dirigido al Jefe de Estado Mayor General, desde el Cuzco, el Comandante del Batallón Ayacucho Miguel Jara, se quejaba del subteniente Manuel D. Benavides y pedía su inmediata dada de baja. Afirmaba Jara que Benavides había demostrado una «incorregible conducta» desde que fue destacado al batallón, «faltando constantemente á sus deberes, censurando las ordenes de sus superiores», propiciando «doctrinas contrarias á la moralidad y disciplina del Ejército», incluso llegando a dormir en la calle durante un período en el que se había dado orden de inamovilidad, añadiendo a su historial el quebrantamiento del arresto al que se le había dispuesto «haciendo alarde de una influencia que no es posible conceder». Según Jara, este era un oficial incorregible, pues a pesar de los constantes castigos seguía cometiendo el defecto más grave que

¹⁹⁶*La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 280. Lima, 7 de marzo de 1896.

podría tener cualquier oficial: «juzgar y censurar las órdenes de sus superiores, fomentando con ello, la inmoralidad de los demás.»¹⁹⁷

Un ejemplo adicional lo encontramos en la recién fundada Escuela Militar de Aplicación. El Coronel Clément quejándose de la conducta del Subteniente del Regimiento de Artillería, Eleazar Bermúdez solicitaba su separación de la Escuela y del Ejército. El oficial Bermúdez no solo no se adecuaba al rigor de las disposiciones de la Escuela, sino que incluso desacataba los castigos que se le impusieron: «en días pasados fue consultado por faltas á la disciplina y moralidad, ha incurrido el día de hoy en otras mas graves aun. Encontrándose preso en su alojamiento dispuso, para hacer efectiva esta prisión se le aislara por completo, pero este oficial desobedeciendo la orden faltó á la guardia, fomentando vergonzoso escándalo, llegando al extremo de romper las puertas de su habitación.»¹⁹⁸

Está demás hacer hincapié en la desobediencia de los oficiales decimonónicos a las leyes y autoridades civiles, y su extrema politización. Veamos, cómo algunos se relacionaban con otros actores sociales en los espacios públicos. El 20 de enero de 1863, en el hotel Pescante, por la noche dos oficiales que «se habían echado [...] sendas copas de lo caro», se encontraban acompañados de dos «mozas de la vida airada» pasando un rato bastante «alegre». Avisado un celador del «desorden» que estaban realizando ambas parejas en una de las salas del hotel, intentó detenerles, haciéndoles reconvenciones, como a la una de la mañana, sin embargo, los departientes respondieron con una «descarga» de insultos, teniendo que irse el celador bastante molesto. Según afirmaba la crónica de *El Comercio*, solo se pudo contener este escándalo, cuando un Inspector mandó encerrarlos en el salón que se encontraban para llevarlos al día siguiente a la cárcel.¹⁹⁹

Otro ejemplo de comportamiento inmoderado y de desacato a la autoridad civil se puede encontrar en otro artículo periodístico, esta vez de la época que estudiamos. El 28 de octubre de 1897, en días de fiesta, en una tienda de la villa de Surco, el alférez Gordillo golpeó a un anciano indígena de 60 años, Simón Márquez, quien al

¹⁹⁷ AHMP, 1898, Caja N° 2, “Oficio del Comandante del Glorioso Batallón Ayacucho N° 3, al Jefe de Estado Mayor General”, del 25 de Octubre de 1898.

¹⁹⁸ AHMP, 1898, Caja N° 6, Escuela Militar de Aplicación, “Oficio del Comandante de la Escuela al Director de Guerra”, del 26 de mayo de 1898.

¹⁹⁹ *El Comercio*. Lima, 21 de enero de 1863.

entrar al establecimiento le dio deferencia de alférez, reputándose Gordillo como teniente y por tanto sintiéndose ofendido: «tomándolo de los cabellos, lo arroja al suelo y allí le diera puntapiés.» Avisado del suceso el hijo de Márquez, corrió a la tienda y defendió a su padre, ante lo cual el alférez con visos de teniente recogió del cuartel su espada y varios gendarmes, a quienes ordenó que condujeran a padre e hijo a «culatazos» al cuartel. Enterado el teniente gobernador de Surco, increpó enfurecido a Gordillo su proceder, lo que le valió un culatazo en la ceja. En el cuartel, los Márquez fueron puestos en el cepo y golpeados «sable en mano», hasta abrirles la cabeza. Según el redactor del diario, las víctimas se encontraban «en estado tan deplorable, que causaban verdadera lástima al contemplarlos».²⁰⁰

Estos cuatro ejemplos nos ilustran bastante bien sobre los niveles de disciplina que guardaban no pocos oficiales peruanos decimonónicos. Sin que esto pretenda ser una generalización, pues tres de los casos que presentamos pertenecen a oficiales jóvenes, algo que resultaba cierto era que en los diarios de Lima importante cantidad de artículos denunciaban comportamientos *incorrectos* por parte de oficiales del Ejército: oficiales embriagados que pasean por las calles golpeando a los transeúntes civiles, que desobedecían a las autoridades civiles menores, o que ostentan una conducta inmoral²⁰¹. Estas apreciaciones se corresponden con la documentación oficial del Ejército, especialmente, las notas de los comandantes del Ejército y los Prefectos, quienes se quejaban principalmente de la falta de moralidad de los oficiales, su embriaguez y su insubordinación²⁰². Para que estas conductas no se produjeran, debía establecerse un sistema de disciplinamiento que como veremos se organizó en la Escuela Militar, el cual no solo permitió corregir estos

²⁰⁰ *El Comercio*. Lima, 3 de noviembre de 1897, edición de la mañana.

²⁰¹ Por ejemplo en la revista *La Luz Eléctrica* se criticaba en 1896 que a pesar de las prohibiciones del Ministerio de Guerra «jefes, oficiales y soldados, se embriagan con mayor frecuencia». *La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 315, Lima, 9 de noviembre de 1896. Quejas contra comportamientos de oficiales podemos observarlos en *El Comercio*. Lima, 5 de enero de 1898, edición de la mañana; 04 de mayo de 1898, edición de la tarde.

²⁰² No era ello exageración de la prensa, varios oficios de los Jefes de Cuerpo solicitaban la baja de jefes u oficiales por repetidos casos de embriaguez, como el del Teniente Coronel Aurelio Maldonado, quien por su «diario uso inmoderado del alcohol comete repetidas faltas». AHMP, 1899, Caja N° 3. Oficio del Jefe del Batallón de Guardia Nacional de Lima Alejandro Herrería, al Jefe del Estado Mayor General, de 20 de junio de 1899. El consumo inmoderado del alcohol generaba una mala imagen sobre los militares, como en Puno, el Sub-teniente Carlos Alcázar, enviado de comisión se presentó luego «embriagado al extremo de caerse y rebulsar [sic] por las calles públicas», y a pesar de las diferentes sanciones «ha cometido posteriores escándalos con la misma costumbre de embriaguez.» AHMP, 1898, Caja N° 2, “Oficio del Comandante del Batallón Callao N° 5 al Jefe del Estado Mayor General”, del 18 de setiembre de 1898.

comportamientos desviados, sino inculcar en los oficiales una nueva forma de ser *militar*.

Para contener faltas a la disciplina como las mencionadas arriba, en el Ejército peruano decimonónico, como heredero de las fuerzas militares coloniales, se empleaba las prescripciones de las viejas ordenanzas españolas. Como se ha visto, ellas buscaban asegurar la obediencia de los subordinados en base de castigos infamantes y brutales. Cabía a los jefes de los cuerpos de tropa vigilar la disciplina y observar el cumplimiento de fuertes sanciones a los soldados que desobedecieran a sus superiores o que incumplieran las Ordenanzas. Siguiendo a Michel Foucault, este tipo de penalidad intentaba asegurar el cumplimiento de las prescripciones, siguiendo una «economía del poder» que buscaba mostrar una marcada desproporción entre el infractor de la ley y quien la invocaba (el Rey), a fin de generar a través de esta asimetría, temor al castigo y a las consecuencias del mismo. Sin embargo, la ejemplaridad de este tipo de castigo tenía sus límites, o más bien, los límites del poder para ejercer una creciente vigilancia sobre los sujetos pasibles de cometer una infracción, se correspondía con este tipo de penalidad «del terror» (Foucault 2001).

Este fue el tipo de penalidad que durante todo el siglo se empleó para instruir a los soldados, incluyendo a los “soldados distinguidos” (los aspirantes a oficiales o cadetes): «nuestra disciplina era severa, sustentada en las antiguas Ordenanzas españolas de Carlos III, vigentes aún en el Perú», así lo rememoraba Manuel Ponce, alumno de la antigua escuela fundada por Cáceres (Ponce 1948: 27)²⁰³. La llegada de los instructores galos marcó una ruptura con los métodos de disciplina precedentes, desterrándose las antiguas ordenanzas e introduciéndose, al mismo tiempo, innovaciones *técnicas* que fueron implementadas en la Escuela Militar para el disciplinamiento de los oficiales. Ciertamente, esta ruptura no pasó desapercibida para los actores de la época, como lo recordaba el ex alumno de la Escuela de Chorrillos Pedro Pablo Martínez, a diez años de iniciada la reforma (1907): «hicieron desaparecer [los oficiales franceses] inveteradas preocupaciones y conceptos sobre la disciplina y reprensión en el ejército» (Martínez 1924: 13).

²⁰³ Según las Ordenanzas, cuando los “soldados distinguidos” cometieran inobediencia, falta de subordinación o «crímenes feos», los superiores estaban facultados de imponerles las mismas penas que al resto de soldados pero atenuadas, pues estas debían tener consideración su *calidad* distinta a la de los demás subalternos (Ord., Trat. 8, Tít. VI, Art. 2°).

Para acercarnos a esas innovaciones que llamaremos *técnicas*, seguiremos los planteamientos de Michel Foucault sobre la disciplina, la docilidad de los cuerpos y de las mentes. Foucault nos ha mostrado que en Occidente durante los siglos XVII y XVIII, diversas instituciones que llamará *disciplinarias*, desarrollaron una serie de técnicas para hacer del cuerpo de los individuos el blanco del poder, hacerlo dócil y útil para los fines del *poder*. Lo novedoso de estas técnicas era que permitían el control ininterrumpido sobre el cuerpo de los sujetos (en el doble sentido de la palabra), a través de pequeñas coerciones para someter la voluntad y cuerpos de los individuos, modificarlos y adaptarlos a los fines de las instituciones: «A estos métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las disciplinas.» (Foucault 2001:141). Valga la precisión, cuando Foucault se refiere al cuerpo, entiende al cuerpo humano a nivel orgánico, es decir su totalidad, sus partes, sus fuerzas físicas, sus facultades mentales, sus movimientos y potencialidades.

De todas las técnicas que plantea este autor, trabajaremos algunas que se prestan bastante bien al caso de los oficiales en la Escuela Militar: las distribuciones, es decir, como se utiliza el espacio (el principio de clausura y el de localización elemental), el control de la actividad (el empleo del tiempo y su utilización exhaustiva) y la organización de la génesis, o sea como se organiza el tiempo. Como intentaré demostrar, en la Escuela se aplicaron estas técnicas con todo su rigor, otorgándole a este plantel el carácter de una institución plenamente disciplinaria, y sentaron la norma de los procedimientos para la militarización de los oficiales que, de allí en adelante, se harían permanentes en las instituciones castrenses peruanas. Ello no quiere decir que antes en el Ejército peruano, y en las Escuelas militares anteriores, no se hubiera aplicado algunas de estas técnicas; sin embargo, en la nueva Escuela, además de su carácter permanente ya anotado, fueron aplicadas simultáneamente, convirtiendo a este plantel en una institución, no solo instructiva, sino modeladora del cuerpo y las mentes de los jóvenes cadetes, a través de la

vigilancia constante, el registro de los comportamientos, y la «corrección» de las desviaciones respecto al modelo de militar disciplinado que se buscó establecer.²⁰⁴

De estas técnicas las primeras que analizaremos son las correspondientes a la organización del espacio. El primer requisito para la aplicación de las técnicas disciplinarias es la *clausura*, el establecimiento de un «lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo» (Foucault 2001: 145). La Escuela cumplía con este requisito, un emplazamiento alejado de la bulliciosa ciudad, comunicado a ella solo a través del ferrocarril. Altos muros construidos para evitar el ingreso de personas ajenas y para evitar que los internos desertaran. Sus puertas vigiladas y también vigilados quienes entraban y salían. El espacio a su interior estaba dedicado enteramente a la instrucción militar e intelectual de los aspirantes, encontrándose prohibido el ingreso de individuos que perturbaran la uniformidad de sus actividades. El alejamiento de la ciudad cumplía una función primordial, suprimir a los sujetos bajo instrucción de los «vicios» de otros individuos. Esto era bastante comprendido por el Ministro de Guerra, quien en su Memoria ante el Congreso en 1897 afirmaba «con la permanencia de los cuarteles militares dentro de la ciudad [...] sufren daño irreparable la instrucción y disciplina» de las tropas:

La disciplina, señaladamente, resultante de enseñanza y hábitos que caracterizan la vida militar, se vé expuesta á relajación que tendería á infiltrarse en todo el organismo de las tropas. Ante la perspectiva de esta amenaza, es cuando más pensamos [...] en mantener, á todo trance y en cualquier evento, esta disciplina que consiste en la sumisión á las leyes militares y civiles [...] y en el estricto cumplimiento de todos los deberes. Religión del honor y del deber, ella enjendra virtudes marciales que irradian resplandores de gloria sobre naciones que la cultivan [...] Este noble sentimiento, innato en el hombre altivo y generoso, se desarrolla en los cuarteles y escuelas militares, donde se empieza por inculcar al soldado y al aspirante la estimación de sí mismo. (MGM 1897:5-6)

²⁰⁴ Puede cuestionarse que emplee este modelo teórico a los oficiales, en vez de a las tropas, en las que se muestra este con mayor nitidez, sin embargo, la abrumadora evidencia documental muestra que para que la reforma del Ejército se pudiera llevar a cabo, era necesario someter a los futuros oficiales a un proceso disciplinario para convertirlos en militares modernos.

La amenaza a la disciplina no solo era el contacto con personas con hábitos contradictorios a las «virtudes marciales», sino también el contacto con agentes políticos que incorporaran a los militares en aventuras en pos del poder. El compartir el espacio físico con otros actores politizados, alentaba la formación de las alianzas cívico-militares que habían sido el sustrato de todas las revoluciones del siglo XIX. La ausencia del principio de clausura, permitía estas relaciones peligrosas, como advertía por ejemplo Manuel Balbuena, Comandante del Batallón Callao N° 6 destacado en Arequipa, quien solicitaba al Estado Mayor General que se diera de baja al Capitán Pedro Zárate y al Sub-teniente Octavio Mávila, dado que «dichos oficiales desde que llegó el batallón á esta ciudad, han estado reunidos diariamente en convites continuos y en lugares apartados de la población con individuos que son sindicados como conspiradores del órden público [...] dormían [Zárate y Mávila] diariamente fuera del cuartel»²⁰⁵.

Si el gobierno buscaba constituir una nueva generación de oficiales subordinados al Estado y comprometidos con los valores de la institución castrense, debía establecer un espacio cerrado en el que se rompieran los vínculos sociales a los que los jóvenes aspirantes se encontraban atados antes de su incorporación al plantel. Incomunicados la mayor parte del tiempo y sometidos a entrenamiento e instrucción, debían bloquearse sus vínculos familiares, las consideraciones de su posición social y sus lealtades políticas. Dejando a los educandos como simples individuos, desprovistos de la seguridad y protección de sus identidades sociales, resultaba más fácil y eficaz fundirlos y subordinarlos atomizados en un todo que debía ser la institución, el Ejército.

El principio de clausura también comportaba una doble ventaja. El tener a los hombres de armas dentro de la ciudad, espacio de la vida política, facilitaba sus acciones militares contra los gobernantes. El cuartel dentro de la ciudad, sobre todo en Lima, no solo era un emplazamiento defensivo, también era una constante amenaza, un símbolo de una fuerza que podía aplicarse contra las leyes civiles. Pero, por otro lado, su presencia en la ciudad implicaba el contacto constante de los hombres de uniforme con el resto de la población, lo que generaba constantemente fricciones que terminaban desprestigiando paradójicamente a los primeros,

²⁰⁵AHMP, 1898, Caja N° 2, Estado Mayor General del Ejército. Setiembre, Doc. 11.

haciéndolos temidos por su capacidad de violencia, pero también odiados²⁰⁶. Miedo y odio podían desencadenar, en coyunturas específicas, manifestaciones violentas en proporción mucho mayor que la podían ejercer los militares decimonónicos, como tardíamente descubrieron los hermanos Gutiérrez. Por estas consideraciones resultaba fundamental para formar a nuevos militares buscar un lugar también nuevo, alejado y hermético, características que harán de la Escuela un piloto y paradigma de emplazamientos disciplinarios para los nuevos cuarteles militares.

La Escuela siguió una segunda técnica de organización del espacio, la «localización elemental» o «de división por zonas». Ella implicaba establecer asignaciones crecientemente individualizadas en el espacio para cada uno de los sujetos bajo la disciplina. Este principio busca evitar las «pluralidades confusas, masivas o huidizas», la aglomeración peligrosa de personas, su circulación «difusa» y la desaparición incontrolada de los individuos. Seccionando progresivamente el espacio hasta adscribir a los individuos a lugares prescritos, permitía establecer presencias y ausencias, saber dónde y cómo encontrarlos, establecer comunicaciones útiles y bloquear las nocivas, en otras palabras, permitía vigilarlos constantemente, analizar su conducta atomizadamente, medir su rendimiento y sancionar sus méritos (Foucault 2001: 146-147).

Siguiendo esta técnica, la Escuela estaba dividida en espacios dedicados a sus dos secciones, una Superior y otra de tropas, por lo que los aspirantes a oficiales debían encontrarse fijados con sus compañeros en su respectiva sección: «es prohibido á los alumnos pasar á otras dependencias del local que no sean las que les están especialmente destinadas, ni salir en ninguna circunstancia del cuadro de corredores de la parte de la Escuela reservada á la Sección Superior.»²⁰⁷ Con ello se buscaba evitar su contacto con los reclutas de tropa, con la servidumbre, con agentes distintos que no sean ellos mismos o sus instructores, alejarlos de cualquier elemento

²⁰⁶ Por ejemplo en una crónica titulada *Son enemigos ó amigos* se criticaba que el Jefe del batallón Paucarpata había hecho marchar a sus hombres atravesando la Plaza del Mercado, los cuales avanzaban«[h]ollando los víveres, causando males de alguna consideración. Una tropelía semejante, que hace odioso á nuestro ejército”.Reflexionaba la crónica que actos de esa naturaleza conducían a «encarna[r] el odio en el corazon de los pueblos contra los que de alguna manera representan la autoridad [...]. Es de esa manera como los denodados defensores de la patria llegan á ser mirados como enemigo públicos» (*El Comercio*. Lima, 10 de abril de 1860).

²⁰⁷Reglamento Especial de la Sección Superior de la Escuela Militar de 1901 (en adelante RESS-EM, 1901), art. 35.

que distrajesse el proceso de disciplinamiento. Los futuros oficiales tenían reglada además su permanencia en los dormitorios, las aulas, las áreas de instrucción y los salones de estudio; de esos salones no podían salir sino con un permiso y de los dormitorios no estaba autorizado ausentarse después de la hora de descanso (RESS-EM, 1901, art. 34 y 45). Asimismo, la concentración de los estudiantes y su desplazamiento por estos espacios tampoco quedaba al azar, ya que siempre se encontraban organizados para su vigilancia, agrupados de acuerdo a su pertenencia a las armas y a los años de estudio y dispuestos según su tamaño, para la observación de su presencia por parte del instructor de turno: «Cada vez que formen los alumnos ó que pasen lista, se podrán en dos filas por orden de talla [...]. Los alumnos de la sección de aspirantes y los de la preparatoria marcharán siempre en formación para ir á las aulas y salones de estudios, comedores, dormitorios ó á los ejercicios militares.» (RESS-EM, 1901, art. 28, 29 y 30).

Sin embargo, este control de los espacios era más fino aún. Dentro de los espacios de circulación se establecieron subdivisiones aún más precisas, más restringidas, espacios destinados a la asignación de los propios individuos. Cada uno de los estudiantes tenía prescrito un *lugar* del que no puede moverse sin la autorización del oficial que lo vigilaba. En los salones de estudios, los alumnos estaban obligados «á no alejarse de sus puestos. Solamente podrán alterar esta disposición los que, con permiso del Oficial de servicio, puedan hacer uso de alguna pizarra para el objeto de los estudios.» (RESS-EM, 1901, art. 32); en los comedores, «[c]ada sección de la División Superior tendrá un comedor especial y cada alumno su asiento, el que no podrá cambiar sin autorización» (art. 46); en los dormitorios, cada uno de los alumnos tiene destinada una cama individual y un espacio para sus pertenencias, de allí que incluso en los lugares que en otros espacios eran íntimos, en la Escuela se encuentran seccionados para convertirlos en espacios analíticos.

Pasemos a las técnicas de control de la actividad. La actividad de los alumnos también se encontraba reglada para que todo el tiempo se encontraran realizando actividades útiles. Como otras instituciones disciplinarias, la Escuela estaba organizada para que el «empleo del tiempo» sea hecho a plenitud, de allí que se obligara a sus miembros a ocupaciones determinadas, se establecieran ritmos y se regularan ciclos de repetición de las mismas. Según Foucault, esta técnica buscaba

que el cuerpo de los individuos se encontrasen enteramente sujetos a la prescripción de actividades, aplicados al ejercicio, razón por la cual se debía establecer horarios, descomponer el tiempo (en horas, fracciones de estas, en minutos) para el desarrollo de actividades diversas y para vigilarlas a través de esa referencia temporal. Con esta técnica se buscaba eliminar la vagancia, la inactividad, y eliminar el tiempo “muerto” que podía ser utilizado para actividades «desviadas» (Foucault 2001: 153-155).

Como se ha visto anteriormente, este era el ideal del nuevo soldado que desde la Escuela se deseaba construir, hombres siempre en actividad, nunca en descanso. El Comandante Clément afirmaba: «[m]uy laborioso debe ser, pues, el oficial y muy serio su trabajo», no olvidando que «debe siempre perfeccionar su instrucción personal y estudiar continuamente» (Torres 1923: 125). De esta misma opinión era un articulista de la Revista *El Perú Militar*, quien reconocía la importancia de la Escuela en este cambio: «La vida estacionaria del cuartel, se ha sustituido por la de trabajo instructivo y constante á que se dió principio en la Escuela Militar de Aplicación»²⁰⁸. Este modelo de oficial buscaba romper con el anquilosamiento de la rutina del cuartel, los tiempos ociosos, el empleo del tiempo en actividades no dirigidas al cumplimiento estricto de sus deberes, acabando con viejas prácticas bastantes difundidas en el Ejército hasta 1898:

Entre nosotros, los jefes no hacen más que ir ál cuartel una o dos veces al día, - cuando van- a cobrar el sueldo y alguna otra cosa [...] y si los oficiales están llamados á velar por la disciplina de sus soldados son de la talla de los que á estas horas pasean sus improvisados galones por las *retretas* y expendios de licores y esgrimen sus vírgenes espadas contra cuanto transeúnte *tropieza* con ellos[...] ²⁰⁹

Por el contrario, el nuevo oficial debía estar en constante acción:

El oficio del militar dista mucho de ser un oficio de perezosos; en él no deben ejecutarse sino trabajos útiles y el soldado necesita estar en la faena tanto tiempo como el obrero laborioso. [...] Ni un instante del día ha de correr

²⁰⁸*El Perú Militar*. Año II, N° 29. Lima, 30 de octubre de 1903, p. 340.

²⁰⁹*La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 279. Lima, 29 de febrero de 1896.

desocupado: un ejercicio físico será descanso para un estudio teórico y práctico [...]²¹⁰

La Escuela Militar siguió este principio al pie de la letra, estableciéndose un control total de las actividades de los alumnos desde las cinco y media de la mañana que se tocaba la diana, hasta las diez de la noche que se establecía la hora de silencio. Un «cuadro de distribución del tiempo», seccionado en horas, cuartos de hora y minutos, reglaba las actividades de los alumnos: horario diario para el aseo y el tendido de la cama, para la lista, para el desayuno, para los estudios teóricos, para la instrucción militar, para el almuerzo, la cena, nuevamente la lista, nuevamente los estudios, la instrucción, etc. Aunque ello parezca excesivamente familiar a nuestros ojos contemporáneos, estas técnicas disciplinarias, si bien no se estaban creando en el Perú, se establecieron en ese período con todo su rigor para asegurar la formación oficiales nuevos. Los instructores de la Escuela tuvieron que establecer este tipo de mecanismos de vigilancia para ejercer un control ininterrumpido de la actividad de sus estudiantes, a lo largo del día y todos los días de la semana. El objetivo consistía en obligar a que las actividades de los aspirantes fueran concretadas siempre hacia los fines establecidos, generando así un tiempo enteramente útil: cada día un oficial de servicio, con carácter inamovible «observará el exacto cumplimiento del cuadro de distribución del tiempo, [y] dará parte al 2º Jefe de las ocurrencias» (RESS-EM, 1901, art. 16). Es más, el control temporal de la actividad debía ser siempre creciente, buscándose aumentar la cantidad de actos posibles para la «utilización exhaustiva» del tiempo. Los gestos, los movimientos, las actividades debían hacerse con una creciente rapidez y eficiencia para «extraer del tiempo cada vez más instantes disponibles» (Foucault 2001: 158).

El tercer grupo de técnicas responden a una organización procesual y progresiva del tiempo de aprendizaje de los individuos, la «organización de la génesis». Según Foucault, esta técnica se diferencia en gran medida de otros tipos de enseñanza anteriores como la gremial, en tanto que en esta última, el aprendiz, en contacto constante con el maestro, adquiría destrezas por medio de la observación «global» del oficio aplicándose durante un período estatutario el cual culminaba con

²¹⁰ *Revista Militar*. Año II, N° 44. Lima, 5 de agosto de 1899, p. 12.

una única prueba iniciática. Por el contrario, las instituciones disciplinarias organizan el aprendizaje descomponiendo el tiempo en segmentos, descomponen las actividades en fracciones que deben ser aprendidas y combinadas progresivamente, al tanto que establecen pruebas constantes de acuerdo al aprendizaje de cada uno de los segmentos. Plantea Foucault que estas técnicas permiten acumular y asegurar la acumulación del tiempo de aprendizaje en los individuos, para luego capitalizarlo, «en provecho o en utilidad siempre acrecentados el tiempo que pasa.»(Foucault 2001: 161-162). Veamos por separado cada una de estas técnicas y cómo se aplicaron dentro de la Escuela Militar.

En el programa estudios de 1896 para la primera promoción de la Escuela, la instrucción de los oficiales-alumnos estaba dividida en segmentos paralelos y sucesivos. Los diez meses de instrucción estaban divididos en instrucción práctica, iniciada desde el ingreso a la Escuela hasta el final del año lectivo, y en cursos teóricos, iniciados al tercer mes del período de aprendizaje. La instrucción práctica también se encontraba dividida en segmentos: un primero se realiza en el interior de la Escuela para enseñarle «los primeros principios de la maniobra, la educación militar, la disciplina»; un segundo, el de tiro al blanco y escuelas de fuego, destinado a «inculcar al militar la confianza en su arma y sacar de ella el mayor partido posible»; otro tercero, las marchas y maniobras en terreno accidentado o de campaña, para «poner al oficial en presencia de las dificultades ordinarias de la guerra, enseñarle a vivir en campaña, marcha, buscar al enemigo y combatirlo.»²¹¹

Adicionalmente, estos segmentos seguían un esquema analítico, descomponer los fenómenos estudiados en sus elementos más simples, y combinarlos aumentando la complejidad, lo que permitía evitar la repetición analógica, es decir, la enseñanza ejemplar y global del fenómeno que lo simula (Foucault 2001: 162). Como se ha visto, según el programa de 1896, para aprender la ejecución de las maniobras, se organizaba a los oficiales-alumnos por grupos sobre el terreno para enseñarles cómo debían ejecutar los movimientos con la tropa. Esta era formada por los mismos oficiales, pues resultaba «indispensable para hacer ejecutar un movimiento á tropa que el oficial lo haya hecho en las filas.» Después de estas prácticas, los oficiales

²¹¹AHMP, 1898, Caja N° 7, “Informe del coronel Clément sobre la organización de una Escuela Militar”, del 30 de noviembre de 1896.

aplicaban lo aprendido sobre la compañía de tropa agregada a la Escuela, así «adquirirá desde el principio la costumbre del mando».²¹² En ese sentido, la enseñanza iba desde los ejercicios básicos, como «soldado», y el aprendizaje de los primeros principios de las maniobras, hasta la dirección de una unidad táctica y su práctica en el terreno.

Todos los segmentos temporales debían finalizar con una prueba destinada a indicar tres aspectos: que el sujeto alcanzó el nivel estatutario, garantizar la conformidad de su aprendizaje con el de los demás, y diferenciar los dotes de cada individuo (Foucault 2001: 162). A este respecto, el reglamento de 1901 muestra un sistema de evaluación en la Escuela bastante prolijo: después de concluida alguna parte de un curso, los alumnos eran «interrogados y notados», luego al concluir el primer semestre una nueva evaluación sobre los temas tratados durante este, y al final del año una última evaluación de todo lo enseñado. Las evaluaciones calificaban el nivel de aprendizaje desde nulo y muy malo, hasta muy bueno y sobresaliente; según estas calificaciones, se establecía un orden de mérito para comparar los aprovechamientos de los estudiantes y de acuerdo a ellas se llevaba un registro de calificaciones individual del aprovechamiento de los alumnos, incluso al nivel de cada uno de los cursos, lo que permitía a la Escuela conocer los dotes de cada alumno.

La Escuela, como otras instituciones disciplinarias, organizaba el tiempo en «series de series», construyendo un continuo de segmentos en el que se prescribía el nivel de dificultad y suficiencia esperada, correspondiente al grado de adelanto en cada estadio. Según Foucault, insertar a los individuos en esta cadena temporal permite saber su rango, en qué «momento» de la formación se encuentran, y saber qué se puede esperar de ellos (Foucault 2001: 163). Esto es bastante claro en los planes de estudio de la Escuela: los cursos son divididos en temas y estos agrupados por semestres, estos últimos agrupados en años. Además al concluir los dos primeros años en la sección preparatoria, se pasa a un año de aspirantes de oficiales, y terminado este a un cuarto año de estudios profesionales como oficiales alumnos. En cada una de las series, los temas y los ejercicios se complejizan sobre la adición y

²¹² AHMP, 1898, Caja N° 7, “Informe del coronel Clément sobre la organización de una Escuela Militar”, del 30 de noviembre de 1896.

combinación de los conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en los escalones precedentes. La construcción de estas sucesiones de series temporales permite vigilar el proceso de instrucción, caracterizar a los individuos, corregirlos y utilizarlos al final del proceso:

La disposición en “serie” de las actividades sucesivas permite una fiscalización de la duración por el poder: posibilidad de un control detallado y de una intervención puntual (de diferenciación, de corrección, de depuración, de eliminación) en cada momento del tiempo; posibilidad de caracterizar, y por lo tanto de utilizar a los individuos según el nivel que tienen en las series que recorren; posibilidad de acumular el tiempo y la actividad, de volver a encontrarlos, totalizados y utilizables en un resultado último, que es la capacidad final de un individuo. [...] Los procedimientos disciplinarios hacen aparecer un tiempo lineal cuyos momentos se integran unos a otros, y que se orienta hacia un punto Terminal y estable. En suma, un tiempo “evolutivo” (Foucault 2001: 164).

Ahora bien, ninguna de estas técnicas podía efectuarse si no se disponía de ciertos *instrumentos*, el primero de ellos, la vigilancia jerárquica. Para que se desarrolle un proceso de disciplinamiento es fundamental que se coaccione a los individuos con la mirada, una vigilancia extendida e ininterrumpida que sea lo suficientemente visible para que imponga coerción, pero lo suficientemente sutil para que no interrumpa o estorbe el proceso. De allí que en este tipo de instituciones se construyan «redes» de vigilancia que observan y regulan el comportamiento de los individuos, regulándose a sí mismas al mismo tiempo (Foucault 2001: 175-182). En la Escuela se organizó una red de vigilancia que mantenía bajo observación ininterrumpida todos los espacios y actos de los futuros oficiales. Un primer nivel de vigilancia correspondía a los oficiales instructores, quienes estaban a cargo de la «instrucción militar y disciplina» durante las horas de clases ó estudio del grupo de instrucción que se le asignara²¹³. Durante su servicio eran «inamovibles» y debían vigilar la «puntual asistencia» de los alumnos a las clases, «debiendo [también] frecuentemente asistir ó entrar en las salas de estudio»; presidían las mesas en los comedores y hacían el toque de silencio debiendo vigilar el recogimiento de los alumnos en sus camas

²¹³ Decreto Supremo de Organización de la Escuela Militar 1901 (en adelante DSO-EM, 1901), art. 53.

(RESS-EM, 1901, art. 17 y 19-20). A otro nivel, en las clases, los profesores elevaban al Comandante de la Sección Superior un memorandum por clase sobre la asistencia de los alumnos, las faltas cometidas en el salón y las notas sobre las composiciones o escritos (RESS-EM, 1901, art. 68).

Sin embargo, dicha vigilancia no solo la hacían los superiores que tuvieran contacto directo o inmediato con los alumnos, esta podía adquirir un carácter más difuso, pues en el caso de alguna incidencia, podían los Jefes, oficiales y clases de las tropas presentar quejas de los alumnos al Director de la Escuela; o menos jerárquico, como el que se establecía entre los propios alumnos: los estudiantes con mejores aprovechamientos de los primeros años se les conferían clases (de sargentos y cabos), los cuales «tendrán los roles de su sección, vigilarán el orden en el dormitorio y sala de estudios, darán parte al teniente instructor de todas las ocurrencias, lo reemplazarán en los detalles del servicio interior» (DSO-EM, 1901, art. 71; RESS-EM, 1901, art. 14). Una vigilancia jerárquica y lateral también (en el caso de los mismos alumnos), que permitía un registro detallado del comportamiento, las aptitudes y los aprovechamientos de cada uno de los alumnos convergía en el vértice de la pirámide, la oficina del Comandante de la Sección Superior. Por otra parte, este entramado de miradas que caía sobre los alumnos, también se autorregulaba, pues los vigilantes también eran constantemente observados: el segundo comandante de la División Superior «[s]e encargará particularmente de la vigilancia de la instrucción militar de las distintas secciones, asegurándose que los instructores de estas se sujeten á las prescripciones del Comandante de la División y á las órdenes de la Escuela.» (DSO-EM, 1901, art. 51)

Para que se pudiera ejecutar la vigilancia jerárquica era necesario mantener los espacios dispuestos para su constante observación, fenómeno conocido como *panoptismo*. En los dormitorios, por ejemplo, estaba prohibido poner cortinas o sentarse en las ventanas, las luces debían estar encendidas hasta la hora de silencio, «dejando solo durante toda la noche y con el grado de luz conveniente las que sean necesarias para que el dormitorio no quede en la oscuridad [...] es absolutamente prohibido á los alumnos apagar el resto de las luces durante la noche ó jugar con ellas.» (RESS-EM, 1901, art. 42, 43 y 44). Resultaba interesante constatar que la observación no solo se realizaba al interior de la Escuela, sino que trasponía incluso

los límites del propio plantel, pudiéndose nombrar a un capitán o teniente de «servicio exterior» en Lima, «indicándole los lugares que debía vigilar y lo que debía llamar su atención.» (DSO-EM, 1901, art. 139). Es más, «[c]ualquier alumno que cometa, fuera de la Escuela, alguna mala acción, será castigado como si el hecho hubiere tenido lugar dentro de ella. Les es igualmente prohibido fuera del Establecimiento entrar á lugares poco respetables: principalmente á los de venta de licores.» (RESS-EM, 1901, art. 67).

Un segundo instrumento que se empleó en la Escuela fue la «sanción normalizadora». En las instituciones disciplinarias, las sanciones están dirigidas a corregir un amplio abanico de comportamientos «desviados» y dirigirlos hacia el cumplimiento de un estándar reglamentario, pero, al mismo tiempo, permiten visualizarlos de otra manera, oscultarlos a través del registro de las faltas para diferenciarlos, compararlos y establecer jerarquías, a fin que la institución tenga un conocimiento individualizado de las potencialidades positivas o negativas de los sujetos. Al interior de estas instituciones se establece una «infra-penalidad» que codifica todos los comportamientos que no están sometidos a los controles de las leyes generales de la sociedad (Foucault 2001: 182 y ss.).

Por ejemplo en la Escuela, además de la observancia del aprovechamiento en los estudios, amor por la carrera de las armas y la «absoluta subordinación, obediencia y respeto» a sus superiores (RESS-EM, 1901, art. 22), las sanciones se erigían sobre comportamientos menores que abrazaban todas las posibles conductas de los alumnos en todos los espacios y momentos de su permanencia en el plantel: en general quedaban prohibidas las acciones desatentas, los juegos de manos y las «aspiraciones de superioridad», la «falta de urbanidad, de decoro en las palabras ó modales», no se debía «por ningún motivo turbar el orden» en las distribuciones escolares, se debía guardar silencio en los salones, incluso en los momentos de descanso y receso, y «guardar la mayor compostura». Todo este tipo de prohibiciones están orientadas a eliminar «malos» comportamientos, las «costumbres desordenadas ó malas inclinaciones»; por el contrario los estudiantes debían observar siempre la «sencillez y la austeridad que sólo se inspiran en los sentimientos del honor y en el cumplimiento del deber.» (RESS-EM, 1901, art. 23, 24, 25 y 32). Según Foucault, le compete a la penalidad disciplinaria un amplio campo indefinido,

atacando sobre todo lo que no se ajusta a la regla, «todo lo que se aleja de ella, las desviaciones» (Foucault 2001: 184). Es por ello que se atacaba en la Escuela, tanto los comportamientos desviados como también las inobservancias a los procedimientos, tiempos y niveles estatutarios para el aprendizaje, es decir, la «mala conducta» y la «insuficiencia en el cumplimiento de los deberes» (RESS-EM, 1901, art. 63). En ese sentido la penalidad disciplinaria estandariza, o busca estandarizar los comportamientos a la regla, en otras palabras, los «normaliza».

Los comportamientos desviados van aparejados con «procedimientos sutiles» para su corrección, como castigos leves, privaciones menores y pequeñas humillaciones, diferentes, por tanto, a los castigos desproporcionados del Antiguo Régimen como en las Ordenanzas. Estos pequeños castigos se aplican en forma constante, dirigidos a corregir pequeñas conductas, gestos inadecuados, a dirigir la conducta, no a reprimir ni a sustraer al contraventor (Foucault 2001:183). Este tipo de penas en la Escuela eran la privación del recreo, la llamada de atención en privado por el Comandante de la Sección (autoridad principal de la Sección Superior de la Escuela), la privación de la salida, el calabozo, reconvención del Comandante de Sección por orden escrita de calabozo. Al lado de estas penas, se erigió también un sistema muy efectivo de sancionar las inobservancias, a través de la reducción de «puntos de mérito» (RESS-EM, 1901, art. 55 y 62). Por otra parte, si bien algunas de estas penas tenían un sentido psicológico de «humillación» y privación, otros estaban orientados a la corrección de los comportamientos a través del «ejercicio», de la intensificación de los procesos de instrucción, su repetición para multiplicar sus efectos: «Los alumnos con privación de recreo, permanecerán en los salones de estudio, durante este, para repasar. La privación del recreo diario fluctuará de uno ó cuatro días.» (RESS-EM, 1901, art. 57).

Y, sin embargo, estas sanciones no solo castigan, sino también gratifican, haciendo corresponder acciones «malas» con castigos y las «buenas», es decir, los comportamientos esperados, con recompensas (Foucault 2001: 185). La Escuela constituyó un sistema de gratificaciones bastante funcional, por ejemplo, los que tenían mejores aprovechamientos obtenían calificaciones honoríficas: a los estudiantes de los primeros años se les podía dar la clase de sargentos o cabos, que los ponía por encima de sus compañeros, o al final del año lectivo se hacían

menciones honrosas, como la de «espada de honor». Pero también existían gratificaciones menores, pero no menos psicológicamente efectivas, como el otorgamiento de salidas de la Escuela: «El primer y tercer domingo del mes, los que tengan buena conducta podrán salir de la Escuela.» (RESS-EM, 1901, art. 67).

La segunda función de las sanciones en este tipo de instituciones es la de conocer a los individuos sometidos a la disciplina. A través del registro, cuantificación y cálculo de las faltas se establecen jerarquía entre los individuos, se establecen rangos para diferenciarlos: este mecanismo no solo se cuantifica las «malas» acciones, sino que permite establecer un juicio global sobre los individuos mismos, para diferenciarlos, corregirlos y aprovecharlos (Foucault 2001: 186). En la Escuela se llevaba un registro de los castigos y las faltas, anotadas y cuantificadas a través de los «puntos de mérito». Estos últimos registraban esa «mala conducta» y esa «insuficiencia en el cumplimiento de los deberes» mencionada, permitiendo operar una cuantificación de un mínimo esperable en los alumnos, «el número de deméritos tolerables durante un año escolar será [...] Aspirantes 200 [y] Preparatoria 300» (RESS-EM, 1901, art. 64); pero al mismo tiempo permitía «calcular» una jerarquía que diferenciaba a todos entre sí: «El número total de puntos de demérito que hubiere recibido un alumno, hasta el fin de cada semestre del año, reducido al tanto por ciento del número tolerable, será el calificativo y servirá al comandante de sección para que establezca la nota de conducta de cada uno», la misma que al ser promediada con las notas de los exámenes finales se «hará por orden de mérito de clasificación, una relación de los alumnos, que será aprobada por el Comandante de la Escuela» (RESS-EM, 1901, art. 64 y 80).

4.4. Balance de la reforma de oficiales

Antes de acabar este capítulo es conveniente hacer un balance de la reforma de los oficiales peruanos, mostrando los factores que posibilitaron la reforma, los que jugaron en contra y los resultados que se obtuvieron de ella. Empecemos viendo los primeros. La reforma de los oficiales peruanos solo fue posible a la confluencia de varios factores. En primer lugar, la imagen pública de los militares se debilitó por la actitud del más conspicuo de sus jefes, Cáceres, quien había liderado un gobierno ilegítimo. La participación casi total y única de los principales oficiales del Segundo

Militarismo en este gobierno, acrecentó un desprestigio que venía arrastrándose desde la derrota de la Guerra del Pacífico. La politización endémica de los oficiales peruanos, sumada a su precaria profesionalización, generó un consenso político hacia su radical reforma.

En segundo lugar, y en contrapartida, la presencia de los grupos políticos civiles se fortaleció. Con el destierro del general Cáceres y sus principales allegados militares, y el debilitamiento del Partido Constitucional, compuesto principalmente por hombres de armas, el espacio político quedó en manos de los partidos civiles. El gobierno nacido de la revolución de 1894-1895, fue consecuencia de la alianza de los partidos más importantes (el Demócrata y el Civil) para derrocar a un régimen considerado eminentemente militar. Por tal motivo, el gobierno de la Coalición gozaba de una fuerte legitimidad frente a los actores políticos relevantes, situación que le proporcionó el respaldo necesario para emprender una reforma de envergadura, como la reforma de los oficiales.

Un tercer factor que coadyuvó a la renovación del cuerpo de oficiales y al éxito de la Escuela Militar debe buscarse también en la dimensión subjetiva de los cadetes que iniciaron su formación profesional a fines del siglo. Estos pertenecían a una generación de jóvenes que habían nacido pocos años antes o después del conflicto con Chile, no perteneciendo ni participando por tanto en el ambiente de la preguerra, en el que se creía al Perú como un país invencible y rico. De manera similar a lo que experimentaron jóvenes como José Gálvez Barrenechea, estos nuevos cadetes experimentaron la desilusión de la derrota que contrastaba con las narraciones del lujo y del poder de Lima antes del conflicto²¹⁴. A ello se podía añadir el sinsabor de una pérdida personal que acrecentaba un sentimiento de revancha contra el vencedor, desquite que podía sublimarse para convertirlo en una vocación, redirigiéndolo en pro de la carrera de las armas, como lo recordaba el Teniente-coronel Carlos A. de la Jara en 1923:

²¹⁴ Interesantes reflexiones sobre el estado de ánimo de la juventud que creció durante la Postguerra ofrece José Gálvez Barrenechea en su ensayo *1895*. Consideraba José Gálvez que los peruanos antes de dicho conflicto «[n]os creíamos ricos y privilegiados, gastábamos sin tasa, disfrutábamos de la vida... Pero, vino la guerra y con la guerra la miseria. Por eso los niños de las épocas inmediatamente posteriores a ella, alimentábamos nuestro espíritu con la paradoja del relato fantástico de pasadas opulencias, contrastado con la dolorosa y miserable realidad presente.» (Gálvez s/f: 160).

Verdad que desperté a la vida entre el fragor de una guerra suficientemente reñida y desastrosa [...] Tenía yo apenas cuatro años, a fines de 1880 [...] ¡Ah! Si no caí yo pobre niño [...] cayó mi padre y cayeron mis tíos [...] El cariño, la admiración hasta cierto punto inconsciente que hasta entonces había yo sentido por la carrera de las armas y las que la profesaban, se trocó desde esa memorable fecha, en amor positivo, en verdadera vocación por la que con justicia se ha considerado siempre [...] (Jara 1923: 176-177).

Esta generación solo había visto el desastre, sin embargo, la renovación del ejército emprendida desde 1896 para algunos debió significar un cambio, una esperanza de reivindicación a través de la carrera de las armas. La fundación de la Escuela fue considerada como un momento trascendental de la que esta generación formaba parte, como recordaba muchos años después uno de sus primeros estudiantes: «aun resuenan en nuestro oídos los ecos de las brillantes frases con que entregó [el Presidente Piérola] el Instituto al Coronel Clément, y con él la reorganización de nuestro ejército. Al escucharla, jefes oficiales y soldados sentimos palpar nuestros corazones, rebozantes de júbilo y henchidos de esperanza de venturosos días para esta Patria amada» (Vidal 1923: 181).

En cuarto lugar estuvo el prestigio de los instructores de la Misión francesa. Si bien, a su llegada, las opiniones acerca de su competencia profesional estuvieron divididas, existiendo una crítica por parte de sectores opositores al gobierno acerca de la pertinencia de su contratación, con el pasar del tiempo los efectos de su labor se hicieron indiscutibles para la mayoría de los actores políticos relevantes. Muestra de esto lo encontramos en unos comentarios que refirió Francisco García Calderón sobre la Misión francesa: «nos complace reconocer que la misión militar francesa, tan fecunda para el destino del Perú, hace un excelente trabajo y no sabríamos cómo alentarla más para ayudarla en su tarea. En efecto, la misión francesa ha cambiado el aspecto de la vida militar del país» (García Calderón 2001:406). Pero sobre todo para los jóvenes oficiales ingresados a la Escuela desde 1898, la maestría de dichos oficiales sirvió de modelo de oficial de un Ejército moderno. Es por ese motivo, en gran parte, por qué las doctrinas enseñadas en la Escuela no fueron cuestionadas, sino solo en casos muy excepcionales. En un artículo sobre sus recuerdos de la Escuela Militar de 1823, el coronel César González consideraba a los miembros de la primera misión como «trabajadores y celosísimos oficiales», llenos de «valiosos

conocimientos profesionales», describiendo a Paul Clément como «una personalidad notable, por su competencia profesional, su rectitud de carácter» (González 1923: 106).

Sin embargo, esta reforma tuvo elementos que jugaban en su contra. Su principal obstáculo se encontraba en las resistencias institucionales al interior del propio Ejército. Toda reforma de gran envergadura representa una modificación de las relaciones establecidas en cualquier institución, cambio que beneficia o perjudica a los actores dependiendo de su relación con dicha institución. Este caso no fue una excepción. En todos los documentos que emitieron o publicaron los impulsores de la reforma existe una constante crítica a oficiales que se oponían a la reforma. Por ejemplo en un informe que presentó a la Cámaras el coronel Clément en 1900 para la promulgación de un conjunto de leyes destinadas a modificar radicalmente el ejército, aquel afirmaba que

[...] las medidas que se toman van a dañar algunos intereses particulares lo que originará fatalmente una resistencia a las reformas. Tampoco será fácil cambiar costumbres arraigadas, pero que deben desaparecer del ejército; es necesario esforzarse por introducir los nuevos principios que deben regirlo [...] Estas dificultades podrán ser allanadas por los jefes que tengan la inquebrantable voluntad de llevar a cabo el adelanto del ejército, y de imponer las reformas. [...] La reforma que se impone con mayor urgencia es la del escalafón militar, porque su radical transformación será la base de la estabilidad de la carrera militar. (Clément 1900: 364).

Incluso los oficiales que estudiaron por esos años en la Escuela recordaban estas fuertes resistencias, como lo hacía el Comandante Vidal Panizo en 1923 afirmando que los «obstáculos a la reforma militar que la Misión Francesa había iniciado [...] de antiguos miembros del Ejército, que creían ver en los cambios que en los métodos tenía la reforma que introducir, forzosamente, una amenaza al predominio que ellos ejercían, dentro del medio en que ellos estaban acostumbrados a actuar» (Vidal 1923:180). Solamente el prestigio que alcanzó la carrera de las armas, entendida como una ciencia, y el renombre que alcanzó rápidamente la Escuela Militar hicieron desistir tales resistencias, al cabo que se producía una mayor presión de los sectores

civiles y de los elementos ya profesionalizados para que la instrucción profesional fuera la norma entre los oficiales. En la misma dirección apuntó la lenta renovación del Escalafón, pasando al retiro los oficiales incompetentes y reticentes a la reforma, los que fueron reemplazados por los de la Escuela.

Otro de los obstáculos para la profesionalización de los oficiales lo encontramos en el bajo nivel académico de los aspirantes a oficiales que ingresaron a la Escuela. Desde la apertura de la Escuela de Aplicación, se notaba esta deficiencia, como lo confesaba su Director después de los exámenes de la primera promoción de oficiales alumnos en 1899: «es evidente que la instrucción civil de aquellos es muy atrasada lo que puede explicarse considerando que la mayor parte de esos oficiales alumnos no ha recibido sino una instrucción primaria muy defectuosa»²¹⁵. En gran medida esta deficiencia de la instrucción civil se intentó paliar con la creación de la Escuela Militar Preparatoria y Naval, sin embargo, con su cierre en 1900, los nuevos contingentes de aspirantes ingresaban a la Escuela Militar con serias deficiencias. A pesar del optimismo de los nuevos aspirantes, todo indica que la Escuela tuvo que realizar sus tareas con un material humano muy pobre, como lo indicaba aún en el año 1908 el Comandante de la Escuela Eduardo Dogny, informando incluso que estos defectos de formación había motivado a que la Escuela redujera las exigencias del examen de admisión y modificara continuamente su plan de estudios, introduciendo repeticiones de cursos básicos en años lectivos superiores a fin de que se cumpliera por lo menos con unos niveles mínimos de competencia académica en los egresados (Escuela Militar de Chorrillos 1908: 7-9).

A pesar de los intentos de los miembros de la Misión por atraer a los jóvenes con mayores suficiencias académicas, convocar a los estudiantes de las universidades e hijos de las familias más acomodadas para formar dentro del Ejército una *aristocracia* profesional, estos esfuerzos fracasaron, pues aquellos jóvenes preferían dedicarse a ocupaciones civiles más lucrativas, de más alto prestigio y con mayor influencia política y social. Como observaba Manuel Vicente Villarán, aunque el prestigio académico del Ejército había crecido, al mismo tiempo había disminuido el papel de sus oficiales en la vida política del país, siendo por tal motivo que la carrera

²¹⁵AHMP, 1899, Caja N° 10, Oficio del Comandante de la Escuela de Aplicación al Director de Guerra, del 27 de enero de 1899.

de las armas ofrecía pocos alicientes para que los hijos de la Oligarquía se convirtieran en oficiales (Villarán 1962: 314).

Respecto a los resultados de la reforma del cuerpo de oficiales, el primero fue la creación de mecanismos institucionales para la regulación de la carrera de las armas por parte del Estado. El ingreso a dicha profesión dejó de ser arbitraria y una prerrogativa de la *sociedad*, cimentándose un mecanismo de selección controlado por el Estado, quien establecía los requisitos y el número de oficiales necesarios. Los ascensos y los cambios de situación en el Escalafón también encontraron regulación por primera vez en la primera década del siglo XX, estableciéndose criterios meritocráticos y de antigüedad en la circulación de los oficiales por los grados militares. Al lado de estas reformas, la carrera militar se profesionalizó con la fundación de la Escuela Militar²¹⁶. Bajo la concepción de la guerra como una ciencia, los oficiales peruanos fueron instruidos en una serie de materias teóricas y prácticas destinadas a permitir que sus egresados cumplieran, si no con maestría, por lo menos, con suficiencia sus labores de conducción de tropas y de instrucción de los soldados. Por otra parte, mientras se generó un perfil ético-profesional destinado a proveer a los oficiales de la motivación continua a su perfeccionamiento y al cumplimiento de sus servicios, la Escuela diseñó un modelo de disciplinamiento para los oficiales, a fin de que se convirtieran en sujetos dóciles y útiles para la institución.

Tanto el perfil ético-profesional, como las prácticas disciplinarias al interior de la Escuela, estaban encaminadas a la subordinación de los oficiales a un Estado gobernado por civiles. Este era uno de los puntos básicos de la reforma: la despolitización de los oficiales, convirtiéndolos en profesionales estrictamente ocupados de la guerra. Como la historia del Perú posterior al período que estudiamos demuestra, este objetivo no pudo cumplirse, pues el siglo XX peruano estuvo marcado por dictaduras militares. No obstante, la participación política de los jefes militares es distinta a su contraparte decimonónica, ya que mientras en este período, o por lo menos hasta casi fines de siglo, se consideraban a los militares actores como cualquier otro actor político, en el siglo XX, la intervención de los militares, como

²¹⁶ Para observar el peso que adquirió la Escuela Militar de Chorrillos en la incorporación de nuevos oficiales al Ejército desde la primera década del siglo XX, se puede consultar Villanueva 1973: 480. En los primeros dos lustros de esta centuria ingresaron al Ejército 255 oficiales, de los cuales 225 habían egresado de la División Superior de la Escuela Militar de Chorrillos.

bien ha afirmado Eduardo Toche, respondía a un criterio profesional de «seguridad nacional» y una concepción del Ejército como institución «tutelar» de la Patria que se fue gestando con el avance del siglo (Toche 2008).

Sin embargo, los instructores franceses tuvieron un verdadero interés por despolitizar a los oficiales peruanos, orientándolos a que se dedicaran rigurosamente a sus deberes profesionales. El ya general Pedro Pablo Martínez recordaba en 1935 que durante los doce primeros años de existencia de la Escuela Militar, período en el que recayó la dirección en los miembros de la Misión Francesa, fue la «Época de Oro» de dicha institución, «[n]o germina[ba] en las aulas otra idea que no sea militar. Los intereses políticos no se atrev[ía]n a insinuarse en el plantel» (Martínez 1935: 14). En gran medida la prédica al interior de la Escuela de una ética profesional que excluía la política de la acción de los oficiales, tuvo como consecuencia su alejamiento de la vida política por casi dos décadas, con la breve interrupción del golpe de Benavides en 1914. No obstante esta prédica, fuera de la Escuela, en el mismo Ejército, el interés de los oficiales por la política jamás desapareció, aún en el período que estamos estudiando. En una carta de 1902 dirigida por el Ministro Heráclito Fernández al Jefe de Estado Mayor General, se le informaba que era frecuente la «discusión apasionada de la política partidista, y practican [oficiales] hechos que manifiestan su adherencia y vinculación á determinadas agrupaciones reflejándose muchas veces en sus actos oficiales» (MGM 1902: 37).²¹⁷

En ese mismo año, el Partido Constitucional, compuesto por varios militares en situación de disponibilidad o retiro, se encontraba en reorganización, a propósito de la llegada del general Andrés A. Cáceres después de varios años de exilio. Esto no quiere decir que la responsabilidad de la politización recayera exclusivamente en este partido, pues era evidente que los oficiales tenían afinidades políticas con los demás partidos, sobre todo si es que estos podían intervenir a favor de los propios oficiales. La misma carta citada mostraba que aún el uso de influencias políticas jugaba un papel importante en la situación de los militares: «no es extraño, que cuando se eleve por ejemplo, una consulta para la remoción de un Jefe ú oficial, ántes del despacho á que vá dirigida, llega á noticia de los interesados, dando lugar á que éstos pongan en

²¹⁷Oficio de 13 de mayo de 1902, dirigido por el Ministro Heráclito Fernández al Jefe de Estado Mayor General.

juego las influencias [...] que es conveniente estirpar para siempre.» (MGM 1902: 38)

Las mismas muestras de politización se encuentran unos años después, en 1908. Los conflictos políticos entre el partido Civil, en el poder, y el Demócrata y el Liberal, que desataron un conato de revolución protagonizada por estos últimos, mostraron con suma claridad que los militares seguían atentamente la vida política e, incluso algunos, se negaban a dejar de participar en ella, como lo demuestra la participación de jóvenes oficiales en el alzamiento demócrata-liberal. Uno de los más conspicuos egresados de la Escuela Militar, el ya citado Pedro Pablo Martínez, veía con temor la participación de estos oficiales, considerando que estas acciones podían traer como consecuencia, en primer lugar, la «degradación» de la profesión castrense y, en segundo lugar, la división del Ejército en facciones acaudilladas por jefes militares:

Corren por ahí rumores que denuncian la existencia de perturbaciones y diferencias en el seno del ejército, rumores que siembran desaliento y la pena en los que bien quieren a esa institución [...] los que servimos en el ejército no alimentamos por ideal mas que el cumplimiento estricto del deber profesional, debiendo estar lejos de esas luchas candentes de la política, tal cual es entendida en el país, y trabajando por el desarrollo progresivo de nuestro ejército y la mejora y adelanto de sus condiciones técnicas [...]. Todo lo que tienda a alejarnos de ese estado de tranquilidad, en el que únicamente podemos actuar con eficacia, es colocarnos en condiciones inaparentes para el buen servicio, perturbar nuestra labor propia, desnaturalizar nuestra misión y llevarnos a un campo poco propicio para prestigiar a la institución a que pertenecemos [...] (Martínez 1924: 29).

Esta virtual politización era explicada por Martínez por el constante conflicto entre los actores civiles, «hasta la atmósfera se impregnan de política y por doquiera respiramos odio político, afán partidista» (Martínez 1924: 36) e invocaba a sus compañeros de armas que se sustrajeran de la política, cumpliendo con sus responsabilidades profesionales. En un artículo de ese mismo año, en el contexto de un golpe de estado en Paraguay, Martínez fue más explícito en su invocación, recordando la sujeción de los militares al gobierno constitucional:

Suponerse que está en la voluntad del militar volver sus armas contra el poder constitucional cuando éste no le parece justo o legal, es establecer la inmoralización, más funesta en la organización del ejército; es retroceder a las épocas antiguas cuando no eran verdaderamente ejércitos sino bandas de hombres armados [...] No; el soldado no puede convertirse en árbitro de la voluntad popular; no puede nunca ser él quien, creyéndolo conveniente para los intereses del país, vaya a prestar su brazo y dar su arma para arrojar un gobierno legalmente constituido [...] (Martínez 1924: 246-247).

Estas invocaciones nos dirigen a pensar que el interés de los militares, o por lo menos de una fracción ellos, por la política no pudo desaparecer a pesar de los esfuerzos de las prédicas de los instructores franceses. Las intervenciones de los jefes militares en los golpes de Estado de origen civil y las dictaduras militares posteriores mostraron palmariamente que este objetivo de la reforma iniciada por Piérola no se cumplió en su totalidad.

Capítulo 5. El Código de Justicia Militar de 1898: regular a los militares, controlar a la población, fortalecer al Estado

Necesario es, sin duda, que nuestras escuelas siembren la doctrina; que amolden, por la educación, al joven soldado, pero todo ello será inútil, si, en la práctica, no mantenéis una i otra, con paternal inflexibilidad, con advertencia provechosamente oportuna, con rectitud inquebrantable, contra cuanto, en nuestro Ejército, brote de torcido i vicioso: que esto es, para él, enflaquecimiento, primero; gravísima enfermedad, mui luego; ruina inevitable, finalmente. [...]

En el ejercicio de vuestras funciones, no olvidéis un instante que *«hai compasiones crueles*. Tales son las que se tiene con la culpa, relajando su sanción. La impunidad hace culpados i engendra el daño de todos. Pensad, señores, que no podéis relajar la corrección, que aflige á *uno*, casi siempre en servicio suyo, sin lastimar hondamente el interés de *todos*; i que no hai bondad, sino extravío i culpa, en dañar *indebidamente á todos*, por economizar, el debido i *saludable* sufrimiento de *uno*».²¹⁸

Con estas palabras el presidente Nicolás de Piérola inauguraba el Supremo Consejo de Guerra y Marina, instancia suprema de la jurisdicción militar que fue creada por el Código de Justicia Militar de 1898. Evidentemente, las palabras de Piérola manifiestan una gran crudeza, característica fiel de los objetivos y procedimientos que se buscaban establecer con la promulgación de esta norma. La justicia castrense que se estaba instaurando debía ser un instrumento que, con «paternal inflexibilidad», pondría orden en el Ejército, asegurando la sujeción política de sus oficiales y disciplina y obediencia en su interior. Sin embargo, la modernización de la legislación judicial castrense que esta reforma implicaba fue mucho más que un mecanismo para regular los comportamientos de los hombres de armas: a través de sus dispositivos se diseñó una “táctica” orientada a aumentar las capacidades coactivas del Estado, táctica que se encontraba enmarcada dentro de una estrategia

²¹⁸ Código de Justicia Militar del Perú (CJM 1898). Lima: Imprenta de El Tiempo, 1898, p. 224.

general dirigida al fortalecimiento de aquel Estado, que incluía la profesionalización del Ejército y la concentración de los medios de aplicación de la violencia. En ese sentido, la modernización de la justicia militar puede leerse en líneas generales como un instrumento que coadyuvó a la afirmación del Estado peruano de principios del siglo XX.

En los sectores civiles y militares existía un fuerte consenso según el cual se consideraba que la reorganización del Ejército no podría realizarse sin el establecimiento de un sistema de justicia militar moderno. La justicia militar hasta 1898 se encontraba regulada por las ya vetustas Ordenanzas de Carlos III (1768), norma que fijaba entre otras cosas los delitos en materia castrense y las formas cómo juzgarlos. Las Ordenanzas dispuestas para la disciplina de un ejército de una Monarquía, tenían una serie de preceptos que se hacían inaplicables desde el nacimiento del Perú como república que sería conveniente recalcar²¹⁹. En primer lugar, las Ordenanzas como una norma de Antiguo Régimen habían sido diseñadas para sancionar la existencia de un fuero militar como prerrogativa del estamento militar. En virtud de este privilegio, los individuos que estuvieran dentro de él debían ser juzgados, en materia civil y criminal, por sus pares militares de acuerdo a los mandatos establecidos en las propias Ordenanzas. Segundo, en virtud de ese mismo fuero, la norma otorgaba a los jefes militares el derecho de convertirse en los jueces de sus subordinados, pues según sus preceptos solo podía asegurarse la obediencia de los soldados en la medida que sus propios jefes juzgaran y castigaran sus delitos y faltas (Salas 1992: 45). En tercer lugar, las Ordenanzas respondían a un sistema penal que se asentaba en la sanción de los delitos militares con castigos infamantes y de carácter físico que iban desde el descuartizamiento, la incineración y la horca, hasta las baquetas (contrapartida del látigo en el Ejército), pasando por el fusilamiento. Como he afirmado, este encarnizamiento de las penas se condecía con una “economía del poder” de Antiguo Régimen, en la cual la insuficiencia de mecanismos para tener un control uniforme y continuo sobre el comportamiento de los individuos, intentaba salvarse con una penalidad del “terror” que manifestara una desproporcionada asimetría entre quien infringía la norma y quien la invocaba con el claro fin que la pena tuviera una función ejemplarizadora.

²¹⁹ Las ideas que se presentan a continuación ya han sido expuestas en el capítulo 1.

Aunque con el advenimiento de la República, los castigos infamantes fueron formalmente abolidos (desde la declaración de la independencia fueron proscritos), es verdad que en varias ocasiones durante las primeras tres décadas de la vida republicana fueron reintroducidos, solo quedando definitivamente abrogados a mediados de la década de 1850. Así también, al mismo tiempo que se proscribieron este tipo de penas, desde las canteras liberales se promovió y logró la abolición de los cuestionados fueros personales, incluyendo el mismo fuero militar. Sin embargo, aunque ambas reformas modificaron de manera sustancial la legislación colonial heredada, dejaron intacta la capacidad jurisdiccional de los jefes militares sobre sus subordinados. Es más, las múltiples reformas legales que se hicieron en el siglo XIX, al tanto que redujeron formalmente la capacidad punitiva de las Ordenanzas, hicieron engorrosa, contradictoria y poco clara la justicia militar, sus procedimientos y penas, dejando así a los jefes militares un amplio margen de discrecionalidad para castigar. Por su parte, estos jefes, ante la incapacidad de ejercer legalmente las terribles penas previstas en las Ordenanzas, las siguieron empleando de manera informal al amparo de la impunidad que posibilitaba la vida en el cuartel. Terminaba por dar forma a este cuadro de la justicia militar decimonónica el hecho que el sistema judicial castrense fue controlado por el Gobierno, el cual lo utilizaba como un arma política para atacar a sus rivales al interior del Ejército (Anales 1908, t. IV: 236-237).

En vista de tales inconvenientes, el problema de la justicia militar se trató de resolver en varias ocasiones, siendo el último intento la formación de una comisión para la redacción de nuevas ordenanzas para el Ejército durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, sin embargo, el insuficiente consenso político de ese entonces, no permitió realizar una reforma integral del Ejército, incluyendo la justicia militar. Terminar con la herencia colonial y decimonónica a este respecto debían ser los objetivos del establecimiento de un sistema jurisdiccional militar moderno, dentro de una reforma más amplia de Ejército. Es por ello que las motivaciones del Gobierno de Piérola para implantar un nuevo Código fueran establecer una norma armónica (es decir, no contradictoria ni engorrosa) que identificara con claridad los delitos e infracciones propias del ámbito castrense; que prescribiera su juzgamiento y castigo a través de procedimientos breves y sencillos, al tiempo que dispusiera de penas taxativamente establecidas, las cuales aunque bastante duras, debían ser más “humanas” y de carácter correctivo. Según estas motivaciones la modernización de

la justicia militar era la única vía para el aseguramiento de la disciplina al interior del Ejército.

Sin embargo, como se mencionó, el Código de Justicia Militar de 1898 no solo debe ser visto como una tentativa de modernización de la justicia castrense, sino que debe ser comprendido sobre todo como un instrumento legal orientado al fortalecimiento del Estado. Solo en ese sentido debe entenderse su promulgación, la dureza de sus penas y la amplitud del ámbito de su jurisdicción. Siguiendo este propósito, el Código tuvo dos objetivos específicos relacionados entre sí. El primero, constituirse en un instrumento legal que permitiera el funcionamiento eficiente del Ejército y su subordinación al Estado. En ese sentido, el Código debía penalizar los comportamientos que impidieran el funcionamiento del Ejército como una “máquina” y que se desviaran de sus objetivos organizacionales, es decir, la protección de la soberanía frente a una invasión externa y la protección interna de las instituciones del Estado. Asimismo, las funciones del Ejército no podrían cumplirse a cabalidad sino se aseguraba al mismo tiempo la existencia de mecanismos que penalizaran la insubordinación del Ejército y los jefes militares al Estado representado en el gobierno constitucional de turno. Ambos aspectos estaban orientados, en otras palabras, al control disciplinario y político del Ejército, a fin de que esta “máquina” fuera el baluarte del Estado que se buscaba fortalecer.

El segundo objetivo específico estaba directamente relacionado a la posición del Estado en la sociedad y su fortalecimiento. El Código se orientó a dotar al Estado de los mecanismos formales para la lucha por su hegemonía frente a otros actores civiles que aliados a los caudillos militares habían cuestionado el poder de los gobernantes formales durante todo el siglo XIX. Estos mecanismos formales estaban orientados a proteger, por un lado, a los agentes que resguardaban el “orden” y, por otro, penalizar militarmente delitos que atentaban contra la seguridad interna y la estabilidad del gobierno, otorgando al Ejecutivo a través del Ejército su juzgamiento. Se podría decir que esta era la orientación “antirrevolucionaria” del Código de 1898. Pero este nuevo rol de protección del Estado que el Código otorgaba al Ejército, únicamente podía cumplirse en la medida que aquel ejerciera su función judicial con lealtad y subordinación hacia el propio gobierno, comportamiento que buscaba

obtenerse no solamente a través del mismo sistema judicial, sino también en virtud de la educación de los oficiales en un sólida ética profesional militar.

Para la elaboración del Código, el gobierno de Piérola nombró una comisión especial compuesta por dos miembros de la misión militar francesa, Paul Clément y Eduardo Dogny, un militar peruano, el mayor Julio Jiménez, y los abogados Miguel Antonio de la Lama y Alfredo Gastón.²²⁰ La Comisión fue nombrada en setiembre de 1897 y trabajó en base del Código de Justicia Militar francés, sus normas reglamentarias y modificatorias, acabando sus funciones en mayo del año siguiente, fecha en la cual se formó una sub-comisión (de la Lama y Jiménez) encargada de la redacción final del Código.²²¹ Sobre los trabajos y acuerdos originales de la Comisión, de la Lama y Jiménez incorporaron modificaciones importantes, variando el espíritu original que debía tener el proyecto. Según el propio de la Lama, a quien se debe adjudicar la responsabilidad directa de tales modificaciones, se introdujeron disposiciones provenientes del Código Militar español y de otros países que contaban con legislación reciente, como Guatemala.²²² Como llegó a decir Paul Clément al año siguiente de la promulgación del Código, las modificaciones de la subcomisión le dieron al proyecto una orientación que escapaba de las prescripciones dirigidas eminentemente a la disciplina del Ejército (Anales 1907, t. II: 345-374). El proyecto fue inmediatamente presentado al Ejecutivo, obteniendo el beneplácito de Piérola y luego enviado al Congreso en julio para el debate en las Cámaras previo a su promulgación.

Sin embargo, este documento no fue discutido con detenimiento en los siguientes meses y fue promulgado en diciembre bajo la presión del Ejecutivo de forma simultánea a la ley del servicio militar obligatorio (Bustamante y Rivero 1920: 10). La ausencia de debate en el Parlamento fue manifestada elocuentemente por senador Montoya el 29 de agosto de 1898: «he tenido que hacer del proyecto (que consta de cuatro libros), un estudio muy ligero en veinticuatro horas. Esta brevedad no me ha permitido formar un juicio completo sobre el conjunto del Código, ni menos sobre sus disposiciones»²²³. Dado que en las Cámaras, los parlamentarios no

²²⁰ “Informe presentado al Ministro de Guerra y Marina”, el 2 de junio de 1898 (Clément 1900: 11).

²²¹ “Informe presentado al Ministro de Guerra y Marina”, el 19 de julio de 1898 (Clément 1900: 20).

²²² *El Derecho*. Año IX, N° 210-211, Lima, Junio de 1898.

²²³ Editorial de *El Derecho*. Año IX, N° 214 -215. Lima, Agosto de 1898.

tuvieron intervención alguna en la elaboración del proyecto, se puede afirmar que este respondía únicamente a los fines y la visión que tenía el gobierno de Piérola.

Ahora bien, la promulgación del Código de Justicia Militar por sus mismas características traía consigo una serie de ventajas dentro de la “racionalidad formal” propia de los sistemas jurídicos modernos, si se comparaba con el estado anterior de la legislación judicial militar. En primer lugar, al llevar la forma de un Código se convertía en un cuerpo normativo compacto y unificado, con coherencia lógica en sus disposiciones y procedimientos. Con ello se acababa con las contradicciones entre las normas de antiguo cuño (las Ordenanzas) y la regulación posterior a la independencia, que se asentaba en fundamentos distintos. En segundo lugar, esta coherencia sumada a una importante prolijidad en la reglamentación de los procesos y en la identificación de delitos y penas, reducía en gran medida el alto nivel de discrecionalidad de las autoridades judiciales y de los encausados en los procesos. Esta mayor claridad de las disposiciones hacía que el desarrollo de los procedimientos judiciales fuera más estable y el dictamen de los fallos fuera predecible. En tercer lugar, tal estabilidad y predictibilidad permitía a los encausados establecer estrategias de defensa considerando las “reglas juego” del sistema y los fallos anteriores en similares situaciones. En virtud de esta norma, la justicia militar alcanzó a fines del siglo XIX los requisitos “modernos” que la justicia ordinaria ya contaba desde hacía varias décadas atrás.²²⁴

5.1. El sistema jurisdiccional castrense

Para el cumplimiento de las funciones de la justicia militar, el Código estableció un complejo sistema jurisdiccional encargado de administrar justicia sobre los delitos que la norma consideraba dentro del fuero militar. El sistema fue diseñado como un ámbito independiente al Poder Judicial, adquiriendo la forma de un poder del Estado paralelo, aunque formalmente se encontrara subordinado a aquel a través de la supremacía de la Corte Suprema como primer órgano jurisdiccional de la República.

²²⁴ Según Max Weber, las características de la racionalidad jurídica formal son propias de los Estados modernos que se organizan sobre la base de la dominación legal. (Bendix 1970: 375-376, 380-385 y 389-390). Esto no quiere decir que el Código no pudo ser interpretado por los jueces y abogados, por el contrario, lo fue, sin embargo, el margen de la flexibilidad de la interpretación se reducía en gran medida, al mismo tiempo que los implicados en el sistema tuvieron que someterse a reglas de juego que establecía la norma, no pudiendo esquivarlas sin la anulación de sus propias posiciones.

El sistema estaba compuesto por autoridades judiciales militares, jueces instructores y tribunales de justicia (consejos de guerra). A las primeras le correspondía organizar los procedimientos formales para la formación de los juicios y los tribunales, la tramitación de los recursos de revisión y ordenar la ejecución de las sentencias, además de ejercer jurisdicción disciplinaria sobre el personal a ellas subordinado (Código de Justicia Militar, en adelante CJM, 1898, art. 51). Las autoridades con jurisdicción de guerra, en tiempos de paz, eran los Jefes de zona militar, mientras que en campaña, podían serlo los Generales en Jefe del Ejército, los comandantes con tropa independiente y los jefes de unidades o plazas incomunicadas (CJM, 1898, art. 2). Para la constitución de este sistema, era menester la organización del territorio nacional en zonas judiciales que debían corresponderse con las zonas administrativas militares en las que se dividiría el país, sin embargo, hasta que no se promulgó la ley que establecía la zonificación militar de la República, las jurisdicciones militares se correspondieron con la división departamental preexistente, asignándoles a los Prefectos la autoridad de guerra de estas zonas (Anales de Justicia Militar, en adelante Anales 1907, t. I: 8-9 y 393). A cada una de ellas se encontraba adscrito juez instructor de carácter permanente²²⁵, encargado de la formación del expediente del juicio, es decir, de la comprobación del delito a través de la recopilación de pruebas, la toma de declaraciones, etc., poniendo aquel en estado para la actuación de los tribunales militares (CJM, 1898, art. 96-97, 384, 387-389).

Los tribunales militares, por su parte, eran los Consejos de Guerra, los Consejos de revisión en campaña y el Consejo Supremo de Guerra y Marina. En cada zona militar se debía establecer un Consejo de Guerra para el juzgamiento de primera instancia de los delitos cometidos en dicha jurisdicción²²⁶, salvo los casos que correspondieran directamente al Consejo Supremo (como el juzgamiento de generales y altas autoridades públicas). Estos tribunales se formaban *ad hoc* cuando la autoridad de la zona tenía conocimiento de la incidencia de un delito, sobre un

²²⁵ Como se verá más adelante, esta disposición no se cumplió en todo su vigor, por el cambio continuo de los jueces instructores.

²²⁶ Los Consejos de Guerra de los departamentos no funcionaron en toda la primera década del siglo XX, en tanto que el número de oficiales en servicio activo en los departamentos no era suficiente para organizarlos, por lo que los procesos judiciales eran enviados a un Consejo Ordinario en Lima luego de la instrucción del juez permanente. Esto lo veremos al final del capítulo.

listado o *rol* en el que se inscribían todos los jefes y oficiales en servicio activo que estuvieran destacados en la jurisdicción. Los miembros de los tribunales eran designados siguiendo la prelación del grado militar y antigüedad, no pudiendo volver a ejercer esa función ningún jefe u oficial a menos que los demás la hubieran cumplido a su turno (CJM, 1898, art. 70).

Por encima de los Consejos de Guerra y de todas las autoridades jurisdiccionales se encontraba el Consejo Supremo de Guerra y Marina (CSGM), órgano permanente que ejercía la instancia superior del sistema. En el ordenamiento jurisdiccional peruano, incluyendo el fuero ordinario, el CSGM tenía una altísima prelación, solo superada por la Corte Suprema de Justicia, siendo «de superior jerarquía á todos los juzgados, autoridades judiciales y tribunales de la República» (CJM, 1898, art. 79). Debía estar conformado por seis altos jefes del Ejército y la Marina y tres miembros de la Corte Suprema. Los vocales militares debían ser nombrados por el Ejecutivo, a propuesta de una terna elaborada por el propio Consejo, mientras que se completaba el tribunal con los miembros más jóvenes de la Corte Suprema (CJM, 1898, art. 80).²²⁷ Este órgano tenía varios tipos de funciones por los que asumía en plenitud su alta jerarquía: en materia judicial, conocía directamente los casos en los que altas autoridades civiles y militares estuvieran involucrados en materias relativas a la jurisdicción de guerra. Entre las autoridades civiles que podían pasar por el Consejo Supremo se podían contar los miembros del Parlamento, ministros de Estado, vocales de la Corte Suprema, arzobispos y obispos; mientras que las autoridades militares, podían ser generales y contralmirantes. Como tribunal superior de la jurisdicción militar le tocaba revisar las sentencias de los tribunales ordinarios y conocer las quejas de vicios en los procesos contra autoridades o Consejos de Guerra ordinarios. Obligatoriamente debía pasar por el Consejo Supremo para su revisión las sentencias con penas de mayor gravedad, como la de muerte, penitenciaría de segundo grado para oficiales y tropa, y las de degradación, expulsión y separación de oficiales. Asimismo, como autoridad administrativa de mayor jerarquía en este sistema, le cabía jurisdicción penal y disciplinaria sobre las autoridades y miembros de la jurisdicción militar que cometieran delitos o faltas en el uso de sus funciones judiciales (CJM, 1898, art. 87 y 90).

²²⁷En su primera conformación, el CSGM fue nombrado íntegramente por el Ejecutivo.

El sistema estaba diseñado para abarcar una serie de delitos que según los impulsores del Código debían ser ventilados en la jurisdicción militar. El ámbito de esta jurisdicción se dictaminaba según la índole del delito, el lugar donde se hubiera producido, y si el país se encontraba en un contexto de guerra. Sin embargo, resulta interesante constatar que la aplicación de las disposiciones del Código implicó un aumento considerable de lo que había sido juzgable militarmente, significando una importante inflexión en el proceso de contracción de la jurisdicción castrense que se venía experimentando durante el siglo XIX. En efecto, desde mediados de siglo políticos y juristas liberales habían impulsado reformas dirigidas a la reducción del fuero castrense, eliminado el “fuero personal” (es decir, el juzgamiento por leyes y tribunales especiales considerando la calidad de la persona), para el cumplimiento cabal de uno de los principios indispensables del sistema legal moderno, la igualdad ante la ley. Por su parte, el Código, si bien no entrañaba contradicción con este principio, pues no reconocía el fuero personal, sí reportó una considerable ampliación a la jurisdicción militar, dotando a sus autoridades al mismo tiempo de los mecanismos necesarios para conservar las nuevas dimensiones del fuero militar.

En primer lugar, esta norma sometió a esta jurisdicción no solo delitos estrictamente castrenses, sino que incluyó dentro de su ámbito delitos políticos y de orden interno que anteriormente habían sido ventilados en el fuero común, como los de rebelión, conspiración, salteamiento, ataques a la propiedad del Estado y a la fuerza pública (delitos que veremos con mayor detalle más adelante). En segundo lugar, no solo el ámbito jurisdiccional se había ampliado sino que podía seguir extendiéndose. Por ejemplo, el Código mantuvo en vigencia o reintrodujo el “fuero local”²²⁸, esto es, el establecer la jurisdicción de un delito dependiendo del lugar en que se hubiera cometido, de allí que se reputaran como delitos propios del ámbito castrense los que se hubieran cometido en instalaciones militares o en territorios sometidos a la jurisdicción de guerra por circunstancias de conflicto interno o externo, aunque estos fueran cometidos por civiles. De similar manera, los civiles

²²⁸ Los juristas decimonónicos no llegaron a un dictamen concluyente si el “fuero local” había sido abolido con la Constitución de 1860. Según Francisco García Calderón este había sido abolido, ya que era una manifestación más del fuero personal, (García Calderón 2007 [1879], t. I: 329). Por su parte, Miguel Antonio de la Llama, coautor del Código de 1898, era un convencido de que este fuero no había sido derogado, mostrando como prueba de su argumento jurisprudencia posterior a las Constituciones mencionadas. Cfr. *El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1899.

podían ser enjuiciados militarmente en el caso que fueran coautores, cómplices o encubridores de militares que hubieran cometido delitos en tiempo de guerra.

En tercer lugar, el Código otorgó ciertos “cerrojos” a la jurisdicción castrense para mantener su ámbito ampliado. Por ejemplo, en los casos que cualquier persona, civil o militar, cometiera un delito de «naturaleza doble» (militar y civil, a la vez) o de dudosa adjudicación a alguno de los fueros, la competencia de juzgamiento recaía en la justicia que dispusiera penas más graves, en otras palabras el militar. Es más, si ambos fueros disponían la misma pena, la «preferencia en el juzgamiento ó el exclusivo conocimiento corresponderá á los tribunales militares» (CJM, 1898, art. 35). Para completar esta vocación de creciente amplitud del fuero militar, el Código estableció un último “cerrojo”, otorgándole al Consejo Supremo de Guerra y Marina la facultad de resolver, como única instancia, los conflictos de competencias que se suscitaban entre los jueces del fuero ordinario y el castrense, facultad que desde el establecimiento de la República había sido una prerrogativa de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora bien, esta desmesurada amplitud del fuero militar y la presencia inusual de esos “cerrojos” frente al fuero ordinario solo podía comprenderse si se considera que la justicia militar siguió el segundo objetivo que se planteaba el gobierno de Piérola al realizar la reforma integral del Ejército: el fortalecimiento del Estado, representado a través del Gobierno, de cara a una sociedad o actores sociales que podían desestabilizarlo. Así, el incorporar una serie de delitos que no eran considerados militares antes de la reforma y asegurar su juzgamiento en el ámbito castrense, en donde las penas eran más duras y los procedimientos más rápidos, no se tenía otro interés que facilitar al gobierno los mecanismos judiciales necesarios para asegurar su supervivencia y estabilidad. Sin embargo, este instrumento solo podía cumplir la misión que le otorgó el gobierno de Piérola en la medida que los militares-jueces fueran obedientes al Estado, considerando su tarea como una responsabilidad profesional (tarea que le correspondía a la Misión francesa cumplir en la Escuela Militar) y al mismo tiempo se asegurara tal obediencia con otros mecanismos que el propio Código establecía a favor del Ejecutivo.

5.2. Regular al Ejército y domar a los jefes militares

Como se ha dicho, el primer objetivo de la reforma de la Justicia Militar era dotar al Estado de un instrumento que permitiera regular los comportamientos de los actores militares, orientándolos al cumplimiento de los fines de la organización militar. Solo a través del establecimiento de una norma que permitiera la delimitación y penalización clara de los comportamientos desviados de los objetivos institucionales y el establecimiento de los mecanismos propios para su sanción, esta institución podría convertirse en una organización eficiente y útil a los intereses del Estado, es decir, el aseguramiento de su soberanía frente a otros Estados y su supremacía sobre los actores sociales a su interior.

Para tal fin, el Código estableció un conjunto de conductas que contravenían a los objetivos del Ejército y que debían ser juzgados por la jurisdicción castrense. En primer lugar estaban los delitos de guerra, como el de “traición a la patria”, que se correspondía con cualquier comportamiento que pusiera al Estado peruano en un posición desventajosa frente a una potencia extranjera o que apoyara a esta en detrimento de aquel. El Código estableció diecinueve causales para “traición a la patria”, delito en el que podían incurrir tanto civiles como militares. Por ejemplo, caían dentro de este, los que se pasaran a las filas o entregaran tropa, plazas o puestos al Ejército enemigo, o le sirvieran de guía; los que entorpecieran las actividades militares o destruyeran o inutilizaran la infraestructura militar o de fines militares en tiempos de guerra. De los diecinueve causales, en sus circunstancias más agravadas, todos conducían a la pena capital, llevando la función preventiva de la pena a su máximo nivel, a fin de desalentar con su gravedad cualquier comportamiento que desfavoreciera a la maquinaria militar en tiempos de guerra (CJM, 1898, art. 228-229). Otros delitos de guerra podían ser el “espionaje” y la “infidencia”, ambos orientados a proteger la información militar relevante para la defensa del país (CJM, 1898, art. 230 y 236).

En segundo lugar estaban los delitos contra la disciplina militar. Ya se ha visto en el capítulo anterior que la disciplina militar era un valor fundamental para el Ejército que debía constituirse en prácticas concretas sin las cuales este no podría cumplir su función: «Si un ejército no estuviese organizado así [a través de la

disciplina], conseguiría muy pocos de los resultados á que aspira. [...] Cuando se halla en movimiento ya se convierte en una máquina que cede a un solo resorte. Este resorte debe ser único y su influencia absoluta».²²⁹No obstante, para que el Ejército se convirtiera en una “maquina”, además de las técnicas de disciplinamiento, se hacía necesario el establecimiento de una normatividad penal y un conjunto de instituciones judiciales que castigaran, con *la* mayor severidad, las contravenciones a la disciplina militar. En los casos que estas contravenciones, por sus consecuencias en el entorpecimiento del éxito de su misión, revistieran mayor gravedad, correspondía a la justicia militar dictaminarles un castigo, rápido y ejemplar.²³⁰ Estaban considerados delitos en este grupo, el insulto a los superiores, la desobediencia jerárquica en ocasión de servicio, la negligencia, el abandono del servicio y la desertión (CJM, 1898, art. 262-264, 270, 281-282 y 294-296). Estos delitos estaban dirigidos a proteger la autoridad de los superiores y asegurar la obediencia de los subordinados, al mismo tiempo que garantizar el cumplimiento, con suficiencia, de los deberes militares de los hombres de armas. Cabe añadir que resultaba en especial importante penalizar la desertión, conducta que como se ha visto había sido después harto frecuente entre los soldados en todo el siglo XIX, pues muchos de los individuos armados en los ejércitos decimonónicos habían sido levados.

En tercer lugar estaban las conductas que atacaban distintos aspectos de la organización militar como institución. Incluidos en este grupo se encontraban delitos que atentaban contra los recursos administrativos, materiales y simbólicos del Ejército, desviándolos o apropiándose de las funciones que la organización militar les había prescrito. Por ejemplo, el Código establecía la penalización de la “usurpación de autoridad” como un delito en el que los Comandantes de tropa asumían prerrogativas de mando en acciones militares sin la debida autorización. La orden de ataque, prerrogativa de una autoridad superior, sería apropiada en este caso por el Comandante al asumir la conducción de la acción de armas sin la autorización superior. Esta norma penalizaba además la “enajenación o distracción” de objetos y prendas militares, como armas, municiones, bestias de carga, aparatos telegráficos,

²²⁹ *La Luz Eléctrica*. Año VI, N° 280, Lima, 7 de marzo de 1896.

²³⁰ Miguel Antonio de la Lama aseguraba que aunque la pena capital se había reducido hasta lo posible en el Código de 1898, aplicándose sólo en los delitos más graves, pues «sin ejemplar pena de muerte por los delitos insinuados, son imposibles la obediencia y la disciplina militar, sin las que no hay Ejércitos para la defensa nacional.» *El Derecho*. Año IX, N° 210-211. Lima, junio de 1898.

además de la malversación de fondos públicos u otros recursos materiales destinados a fines militares. Estos delitos estaban destinados a proteger los recursos materiales del Ejército frente al aprovechamiento particular de los propios militares o el favorecimiento de terceros, penalizando así la práctica patrimonial por la cual se hacía uso de los recursos públicos como si fueran recursos privados (CJM, 1898, art. 275, 334, 336-339).

Esta práctica había sido frecuente en el siglo XIX, la misma que había permitido el enriquecimiento particular de militares, al mismo tiempo que la solidificación de alianzas entre estos y empresarios y proveedores particulares, los cuales aprovechaban sus contactos para colocar sus mercancías a través de las poco transparentes adquisiciones de bienes para el Ejército. Consecuentemente tales empresarios en una situación de guerra apoyaban a sus benefactores (y no al Ejército), no solo con recursos materiales, sino también con sus mismos trabajadores (Walker 2004: 182-184). Con respecto a los recursos simbólicos, el Código prescribía la penalización del uso indebido, es decir no regulado por la institución militar, de distintivos militares, como uniformes, condecoraciones o medallas (CJM, 1898, Art. 327). Resultaba fundamental penalizar el laxo uso del uniforme militar, pues este recurso había sido empleado febrilmente por militares improvisados para arrogarse distinciones y prerrogativas militares, uso que en circunstancias militares excepcionales (revoluciones), les daba la capacidad de mando sobre tropas y el posterior ingreso al Escalafón militar.²³¹

La sanción de estos tres grupos de delitos estaba orientada para que el Ejército funcionara como una máquina y asegurar el cumplimiento de sus funciones. Como institución burocrática, buscaba su fortalecimiento estableciendo controles sobre los comportamientos de los soldados y oficiales. Los dos primeros grupos estaba dirigidos a asegurar que los miembros del Ejército, en cada uno de sus puestos y

²³¹ «La transformación de civil a militar, se realizaba pronto y dificultad alguna. Si alguien había sido enrolado por un jefe de partido o se había ofrecido él mismo y si se había llegado a un acuerdo sobre las condiciones, el nuevo recluta –oficial- al que generalmente le faltaba el dinero para procurarse un uniforme, hacía coser por el momento el distintivo de su grado en su chaqueta habitual y el resto lo dejaban para más tarde. Si la revolución tenía éxito, esto es, si llegaba a dominar la capital, los grados provisionales eran reconocidos, y se le compraba el uniforme» (Middendorf 1973: 271). Esta práctica también se había verificado en la revolución de 1895. En un artículo de *La Luz Eléctrica*, se criticaba el uso irregular de los uniformes militares: «Los uniformes que los señores jefes y oficiales tienen en uso, por sus múltiples colores, formas, adornos dejan de ser extraños para ser ridículos» (*La Luz Eléctrica*. Año V, N° 252. Lima, 24 de Agosto de 1895).

jerarquías, cumpliera sus tareas a cabalidad, a fin que el Ejército pudiera cumplir su propósito inmediato que era el combate exitoso. En términos burocráticos establecía las sanciones que orientaban a que cada “funcionario” realizara de manera regular, continua y eficiente sus funciones. El tercer grupo protegía los recursos institucionales frente a la burocracia militar, penalizando su aprovechamiento personal para que en la práctica se estableciera una clara separación entre los asuntos oficiales y los negocios particulares, entre los fondos públicos y los ingresos privados.

Sin embargo, para los fines del Estado, el funcionamiento “industrial” del Ejército solo podía serle útil en la medida que fuera totalmente obediente al gobierno que representara a ese Estado, respetando el orden constitucional. El Código para cumplir este objetivo estableció como delito de la jurisdicción castrense la rebelión de los militares frente al gobierno. Ello demostraba que los medios para despolitizar y hacer dóciles a los militares no solo pasaban por brindarles una ética-profesional de estricto cumplimiento de sus deberes en beneficio de la sociedad y el Estado, sino que implicaba además mecanismos legales y judiciales por los cuales el Estado debía asegurar tal cumplimiento y sujeción. Para eso el Código identificó y prescribió como punibles varios comportamientos por los que se podía manifestar la rebelión militar. Así, estaba prohibido a los militares «levantarse ó revolucionar, acaudillando cualquier fuerza» para variar la forma de gobierno; intentar la deposición del «Gobierno legítimamente constituido» utilizando la fuerza o sustraer de su «obediencia parte del territorio o de las fuerzas armadas»; impedir las elecciones, la reunión del Congreso y el funcionamiento de las Cámaras; exigir empleando violencia la reforma de las instituciones nacionales; e, investirse «apoyado en la fuerza armada» de autoridad o facultades no obtenidas legalmente (CJM, 1898, art. 239). En este articulado se mostraba el aprendizaje de casi ochenta años de revoluciones acaudilladas por militares, en los cuales se habían presentado repetidamente todos estos supuestos y que habían terminado por deponer a los gobernantes de turno.

No obstante, la penalización de estos comportamientos no fue suficiente para los artífices del Código. Dado que los líderes de las revoluciones o golpes de Estado eran los jefes militares, convertidos en caudillos retadores del gobierno, resultaba

fundamental contenerlos, reduciendo el poder personal que ostentaron sobre sus subordinados durante todo el siglo XIX, el cual nacía de su ilimitada y arbitraria capacidad para castigarlos sino seguían sus órdenes como sus superiores. El debilitamiento de este poder de castigo de los jefes se logró a través del establecimiento del sistema jurisdiccional militar mencionado que, por su carácter burocrático e impersonal, era externo a la relación de autoridad que existía entre el jefe militar y sus subordinados, proscribiendo con ello la capacidad de castigo que los jefes militares ejercían más como individuos que como funcionarios.

Las Ordenanzas, vigentes hasta antes de la dación del Código de 1898, otorgaban a los jefes militares la capacidad de ser los “jueces” de sus soldados. Por un lado, prescribían que los jefes de unidades, como los batallones, podían nombrar al fiscal y a los vocales de los Consejos Ordinarios, presidiendo ellos mismos el tribunal, mientras por otro lado, contaban con la potestad de dictaminar castigos sobre sus subordinados cuando estos cometieran faltas a la disciplina militar. Ciertamente, este poder de castigo se veía incrementado por los enormes vacíos que habían producido las reiteradas modificaciones legales republicanas, lo que daba como resultado un alto nivel de discrecionalidad a su favor. Así, a lo largo del siglo, las modificaciones y derogaciones de las ordenanzas habían derivado en la “ininteligibilidad” de sus disposiciones, pues las leyes republicanas establecieron disposiciones contradictorias entre sí, al mismo tiempo que dejaron varios vacíos que debían ser llenados con la analogía del fuero ordinario, también a criterio del juez, contrariando el *principio de legalidad*. Estos defectos hacían recaer en gran medida el curso de los procedimientos, la identificación de los delitos y faltas y, por tanto, la adjudicación de los castigos, en los *jueces* militares, a la sazón, los jefes inmediatos de las tropas. Así, los jefes «apreciaban según su propio criterio, la gravedad de sus acusaciones y cargos que se formaban contra sus subordinados, é imponían directamente las penas; todas ellas arbitrarias, porque no descansaban en ninguna ley» (Anales 1907, t. II: 291). Aún peor, los engorrosos procedimientos de la jurisdicción militar pre-reforma dificultaban la formación de los juicios cuando se producía delitos, prefiriendo los jefes militares juzgar directamente a sus subordinados al interior de los cuarteles, sin pasar por un procedimiento judicial. Es por ello que el número de juicios militares de la pre-reforma fue muy reducido. Este

poder “arbitrario” de los jefes era incluso reconocido por oficiales del Ejército a fines del siglo XIX:

El Perú carecía de un Código Militar y tenía que servirse de las antiguas ordenanzas de Colón [refiriéndose a una edición de las Ordenanzas], en los pocos casos en que se iniciaban procedimientos por delitos de dicho fuero. Por eso fué siempre nula la acción de la justicia militar, y hemos visto con dolor, durante muchos años, que el premio y el castigo de actos militares, ha quedado á merced de la *arbitrariedad de los jefes*, quienes muchas veces los han apreciado al calor de sus pasiones ó en la oscuridad de la ignorancia. [...] Veremos, pues, ya desterradas de los cuarteles las penas arbitrarias é infamantes con que muchas veces satisfacen su crueldad los jefes y que hacían del soldado un ser *sin derechos ni voluntad, á merced del que lo manda*.²³²

Entonces, para disminuir este poder de los jefes, el Código, en primer lugar, derivó la justicia militar a un sistema de jurisdiccional impersonal: «La jurisdicción militar se ejerce en nombre de la Nación» (CJM, 1898, art. 1º). La tipificación de los delitos, su juzgamiento y el dictamen de las penas recaía en autoridades y jueces alejados del contexto inmediato de la infracción y de los actores relacionados a esta. En ese sentido, los jueces militares eran externos a la relación de autoridad que pudiera existir entre los implicados en un delito militar. Como se ha visto, los miembros de los consejos de guerra se nombraban siguiendo una lista elaborada en cada zona militar, asumiendo sus funciones de acuerdo a una prelación basada en el grado militar y la antigüedad de los posibles jueces. Asimismo, el Código prescribía específicamente una serie de incompatibilidades para el nombramiento de estos jueces, a fin de que no existiera ningún vínculo personal, administrativo o jerárquico entre estos y quienes eran sometidos a juicio. El artículo 137º establecía que no podían ser jueces los capitanes u oficiales de la compañía del enjuiciado, o cualquiera que por algún concepto lo tuviera «bajo dependencia inmediata y directa, en el momento de cometerse el delito». La norma además excluía a quienes tuvieran amistad estrecha o enemistad grave con el acusado o quienes tuvieran algún interés en la causa.

²³²El Comercio.Lima, 11 de mayo de 1899 (las cursivas son mías).

En segundo lugar, la norma redujo las causales para el ejercicio del control disciplinario de los oficiales sobre sus subordinados directos, específicamente a los casos en que se cometieran faltas leves, dejando el ámbito del juzgamiento de los delitos militares y de la corrección de las faltas graves al sistema judicial militar. El Código delimitó un estrecho ámbito de comportamientos que podían ser pasibles del control disciplinario de los jefes militares. En ese sentido, las infracciones más graves eran penadas por una organización burocrática y no por individuos. En tercer lugar, que la norma estableciera prolijamente la gama de comportamientos delictivos e infracciones, prescribiera explícitamente sus penas, y los procedimientos de juzgamiento y corrección, iba también en detrimento del enorme poder discrecional que habían acumulado los jefes militares sobre sus tropas. Este aspecto fue celebrado incluso por los militares reformistas de la *Revista Militar*, pues «estableciendo clara y precisamente el procedimiento para el castigo de las faltas ó delitos que están fuera de sus facultades»²³³, se reducía el poder de los jefes militares sobre sus subalternos, es decir, los mecanismos de control y castigo sobre la lealtad y obediencia de las tropas a sus jefes. Otro artículo de la *Revista Militar* reconocía claramente las implicancias políticas de esta reducción del poder de castigo de los jefes sobre sus subordinados:

La disciplina bien entendida, no consiste en el apoyo absoluto é incondicional á todos los actos del superior; no, ella significa respeto á los derechos y garantías de todos, por eso el Código, *limita las atribuciones de los jefes*, determinando el enjuiciamiento para la comprobación y castigo de las faltas graves y de los delitos. Sólo de este modo puede comprenderse la existencia en el ejército de una *oficialidad independiente*, de ideales levantados, que sean en todo tiempo garantía de honor y lealtad. Si una indisposición fuese suficiente para separar de su puesto á un militar, los jefes poco escrupulosos procurarían tener á sus órdenes hombres sin valor moral, que *habrían de seguirlos en todos los caminos, y los conspiradores harían del ejército el escabel de sus ambiciones*.²³⁴

Para afianzar esta medida, y al mismo tiempo otorgar a los subordinados la capacidad de defenderse de los abusos de sus jefes, el nuevo Código tipificó el delito

²³³*Revista Militar*. Año III, N° 46. Lima, 1899, p. 18, citado por Toche, 2008, p. 35.

²³⁴*Revista Militar*. Año IV, N° 52. Lima, 15 de marzo de 1900, pp. 33-34 (las cursivas son mías).

y la falta de “abuso de autoridad”, las cuales permitían a los subordinados entablar recursos penales o correccionales contra sus jefes inmediatos, proscribiéndose todo uso arbitrario de autoridad. Se consideraba dentro de este delito comportamientos como la imposición de tormento y penas no prescritas en la norma, maltratar, golpear, ultrajar y excederse «arbitrariamente en sus atribuciones» en perjuicio de los inferiores (CJM, 1898, art. 273). En este espíritu también se facultó a los subordinados sometidos a faltas leves el acudir gradualmente ante los jefes superiores, e incluso hasta el Presidente de la República, en el caso de que se les aplicara correcciones disconformes con el Código y que por ello se considerasen ofendidos (CJM, 1898, art. 729).

Si bien la reducción de la capacidad de castigo y de poder sobre sus subordinados había sido un duro golpe para los jefes militares como individuos, ello no debe llevar a pensar que el Código fue en contra de la institución castrense, pues al mismo tiempo estableció ciertos beneficios para los miembros del Ejército y, por su puesto, para los mismos oficiales también. En primer lugar, el Código penalizó militarmente los atentados contra cualquier fuerza armada que estuviera en servicio. Según lo prescrito en la norma, esto significaba que cualquier persona, sea civil o militar, que atacara física o verbalmente a un militar, o que realizara actos intimidatorios o preparativos para este fin, configuraba este delito (CJM, 1898, art. 256). Un segundo aspecto a favor de los militares que otorgaba la jurisdicción militar residía en algunos beneficios judiciales en materia civil para los oficiales. Por ejemplo, en el caso de que estos incurrieran en deudas con particulares, los acreedores no podían exigir la ejecución de la deuda en base de los haberes no devengados de los militares ni sobre los instrumentos de su profesión (CJM, 1898, art. 664). Era particularmente beneficioso para los militares que las causas entabladas por deudas contraídas en campaña debían ser sometidas en la jurisdicción militar (CJM, 1898, art. 26). También se les permitió a los militares elaborar sus testamentos sin las formalidades exigibles en la jurisdicción común, lo que significaba que para la realización de estos no era necesaria la presencia de un notario. Debe tenerse en cuenta que sobre los testamentos recaen responsabilidades pecuniarias que involucran a terceros. Estas medidas apuntan a que el deseo de los redactores del Código sobre estos asuntos se dirigía principalmente a proteger a los militares que

como grupo social se encontraban en condiciones más duras que los demás, por sus bajos salarios y la exposición de sus vidas en las acciones de armas.

El tercer aspecto, y tal vez el más importante, radicaba en la existencia del propio fuero privativo militar. En primer lugar, se otorgó a los jefes y oficiales el juzgamiento de los miembros del Ejército para delitos comunes perpetrados en acto de servicio y delitos cometidos por militares y civiles en lugares sometidos al fuero de guerra, como fortalezas, cuarteles, arsenales y zonas declaradas en estado de guerra (fuero local). Pero también se les otorgó la facultad de conocer causas correspondientes a delitos políticos que cometieran civiles, como los de conspiración, sedición y rebelión, antes sometidos al fuero civil, que configuraban un intento por frenar la lógica revolucionaria decimonónica. La capacidad de juzgar también a los civiles, les daba a los militares como grupo una posición ventajosa estos, sobre todo si se considera que la justicia militar tenía un carácter “absorbente”, lo que extendía sus ámbitos jurisdiccionales y, por tanto, el poder juzgar sobre cuestiones claves de la vida social. En ese sentido, la existencia del fuero mismo daba a los militares una situación de “excepcionalidad” que, entre otras cosas, reforzaba la integración “intrainstitucional”, como bien lo ha señalado Eduardo Toche:

El sentido cerrado que adquiere la organización de los ejércitos, reforzado por la transmisión de un “espíritu de cuerpo” que busca resaltar la excepcionalidad de sus integrantes –otorgándoles un criterio casi de casta que, si bien refuerza la integración intrainstitucional, genera múltiples dificultades para entablar sus relaciones con el entorno que los rodea– fue, desde los momentos fundacionales mismos del ejército peruano moderno, un rasgo básico que también se reflejó en el sentimiento de necesidad que se formaron en torno a la existencia de un fuero militar. (Toche 2008: 35)

5.3. Un instrumento para el control de la población

Paralelo al fortalecimiento del Ejército como institución y el debilitamiento relativo de sus jefes, el Código de 1898 también previó mecanismos legales para incrementar el control del Estado sobre la población, contribuyendo a invertir la correlación de fuerza entre estos, en favor del primero. El fin perseguido por el Código desde su

promulgación era desalentar el desarrollo de cualquier movimiento insurgente con participación de la población civil y, en el caso que se verificase, que fuera eficazmente combatido, no solo a través de las armas, sino también por medio de mecanismos judiciales que debían “perseguir” a los insurgentes y aplicarles fuertes penas. Este aspecto del Código se podía resumir en una sola palabra, era “antirrevolucionario”. La aplicación de estos mecanismos contribuiría al reposicionamiento del Estado en la sociedad, superponiéndose a ella y logrando así la estabilidad necesaria para su modernización.

En perspectiva, uno de los principales inconvenientes para el desarrollo del Estado peruano durante todo el siglo XIX, radicaba en la capacidad de la población, aliada o no a caudillos militares, de poder derrocar gobiernos; siendo la misma revolución acaudillada por Piérola un ejemplo elocuente de ello. En este período, los movimientos de descontento e intereses políticos, aglutinados por liderazgos locales y regionales, coordinados desde las periferias, tomaban el control local, deponiendo a las autoridades gubernamentales primero, y luego tendían a confluir en Lima para derribar al gobierno de turno, generando toda una dinámica de realineamientos políticos, reorganizaciones en las instituciones del Estado, cambio de funcionarios y la satisfacción de las demandas esgrimidas por los insurgentes. Esto debió ser una preocupación principal para el gobierno de Piérola, pues, sin abundar en ejemplos, solo en los cuatro años de su gobierno hubo tres momentos en los que se buscó poner en cuestión la autoridad del poder central de Lima: el primero en 1896, con la intentona federalista de Iquitos que en la práctica desconoció el gobierno de Lima; el segundo, en 1898, con movimientos montoneros en el norte del país (Piura, Lambayeque y Cajamarca) y en Ica; y, el tercer, en 1899, con el intento de revolución acaudillada por Augusto Durand y apoyada por grupos caceristas, en Piura, Cajamarca, Iquitos, Huaraz, Huánuco, Ancash, Arequipa y Moquegua. En ese contexto, un Estado moderno en el Perú no podía consolidarse sin que estuviera asegurada la estabilidad del gobierno central y el control ante cualquier tentativa revolucionaria. En primer lugar era una cuestión de supervivencia del gobierno, y luego, un asunto ligado a su capacidad para ejercer su soberanía sobre todas las regiones del país, es decir, asegurar la sostenibilidad de la autoridad y los mandatos que se hacían desde Lima hacia el resto del territorio nacional.

La reforma de la justicia militar intentó atacar este problema de dos formas. La primera, radicaba en fortalecer la posición de los instrumentos coactivos de la institución militar y policial frente a la población civil. El Código penalizaba el ataque o la tentativa de ataque a cualquier fuerza armada, sea esta del Ejército o la policía (sean guardias civiles o gendarmes) en ocasión de servicio. Quien cometiera este delito, debía ser encausado por la jurisdicción militar y sometido a las penas de esta, por lo general más severas y el proceso más diligente (CJM, 1898, art. 12, 256-259). Se puso especial cuidado en proteger a los centinelas (el oficinista de telégrafos también fue considerado como centinela), como agentes encargados de la vigilancia, dotándolos al mismo tiempo de los instrumentos legales necesarios para defenderse de un ataque y repeler actos y grupos contrarios al Gobierno: «El centinela puede también hacer uso de su arma para repeler un ultraje, en caso de legítima defensa, ó cuando tuviera necesariamente que recurrir á ese medio para reprimir delitos flagrantes de traición, rebelión [de militares y/o civiles], sedición, motín ó insubordinación» (CJM, 1898, art. 261). Esta orientación hacia la protección de los mecanismos coercitivos del Estado no pasó desapercibida, como lo indicaba un editorial de *El Comercio*: «parece que por medio de las nuevas disposiciones se pretende, no conservar la disciplina del ejército y garantizar á la sociedad contra la gente armada, que es lo que se proponen los códigos de otros países, sino garantizar al ejército y á la policía, contra los ataques de la gente pacífica y que tiene la prohibición de cargar armas.»²³⁵

Con estas disposiciones el Código buscó compensar la debilidad del Estado frente a los demás actores sociales. Para esas fechas, el total de agentes coercitivos con los que contaba el Estado, es decir, efectivos militares y fuerzas de policía (guardia civil y gendarmería), sumaban algo más de seis mil individuos, dispersados en un territorio, con poblaciones desperdigadas y alejadas entre sí, a lo que se sumaba las deficientes vías de comunicación. De estas fuerzas coercitivas, la mayoría se encontraban concentrados en Lima y, en menor medida en Arequipa, los demás departamentos tenían un número muy reducido, incluso, en algunas provincias rurales, los efectivos de la gendarmería no excedían la media docena, incluyendo a los oficiales. Dada esta debilidad del Estado se hacía sumamente fácil para los actores locales, fueran los notables locales, los campesinos, o los vecinos de un

²³⁵*El Comercio*. Lima, 13 de octubre de 1899, edición de la mañana.

pueblo, desbordar a las autoridades del gobierno central.²³⁶ Esta debilidad se hacía más alarmante para los gobiernos en los contextos revolucionarios, dada la facilidad con que los insurgentes deponían a las autoridades gubernamentales por su incapacidad de defenderse de actores sociales politizados y, después de la Guerra del Pacífico, armados²³⁷. Como afirmó el Jefe de la Zona Militar de Lima César Canevaro, en 1902, antes de la promulgación del Código «era [incluso] difícil conducir arrestado á un individuo; pues se le reunían otros á impedir que el policía verificara el arresto, injuriándolo y atacándolo de obra. Era, pues, necesario que los agentes del orden tuvieran las suficientes garantías, cuando, uniformados, prestan servicios de su instituto; y el Código de Justicia Militar les ha dado dichas garantías» (Anales 1929, t. V: 241). En ese sentido debía entenderse las observaciones de *El Comercio* sobre el «garantizar» al Ejército y la policía de la *gente pacífica*.

La segunda forma de fortalecer al Estado fue penalizar militarmente delitos políticos, y otros que podían tener trascendencia política y que durante todo el siglo XIX habían sido juzgados por la jurisdicción civil. El caso paradigmático de esta orientación política del Código fue la penalización de la rebelión, no solo para los militares, sino también para los civiles. Así, el artículo 240º del Código estableció que la rebelión, entendida como delito militar, debía ser juzgada en el fuero castrense, incluso si este era cometido por «no militares». El delito se configuraba a través de los siguientes supuestos: 1. que la población civil se alzara contra el gobierno bajo el mando de militares o que el movimiento se iniciara, sostuviera o recibiera auxilio de fuerzas del Ejército; 2. que los rebeldes formen una «partida militarmente organizada», compuesta de diez o mas individuos²³⁸; o 3. que, aunque los rebeldes formaran partidas inferiores a diez individuos, existieran en «otro punto del territorio de la Nación otra partida que se proponga el mismo fin» (CJM, 1898, art. 240).

²³⁶ Por ejemplo en el pueblo de Santiago de Chuco, en la fiesta del patrón, «el populacho» dio muerte a un oficial y un soldado que pretendían salvar al Subprefecto de un linchamiento por un malentendido que se produjo cuando se incendió la imagen del patrono del pueblo. AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, La Libertad, «Oficio del Prefecto de la Libertad al Director de Gobierno», del 30 de julio de 1896.

²³⁷ Por ejemplo, las montonera que acaudilló Augusto Durand durante la revolución pierolista de 1894-1895 fueron capaces de derrotar y hacer fugar al Prefecto de Huánuco en menos de tres días (Mc Evoy 1997: 332-340).

²³⁸ El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de 1884 consideraba como una de las acepciones de la voz «partida», el concepto de *guerrilla*, entendida esta como un «[c]onjunto poco numeroso de gente armada, con organización militar ú otra semejante.» (RAE 1884: 794).

El primer supuesto iba dirigido a cortar las alianzas militares y civiles insurgentes que habían dictaminado en gran parte la dinámica política decimonónica. La penalización militar a partir de este supuesto buscaba desincentivar la participación de la población civil en los movimientos insurgentes acaudillados o apoyados por militares. Ciudades como Arequipa, Lima, Chiclayo, Ayacucho o Tacna habían demostrado en más de una ocasión que tanto sus notables locales, con sus respectivas clientelas, o incluso “ciudadanos” comunes y corrientes (especialmente los artesanos), podían protagonizar movimientos insurgentes exitosos, plegándose a un liderazgo militar. Las comunidades indígenas, a través de negociaciones, también cumplían su cuota en estos movimientos, siendo muchas veces el grueso de los ejércitos insurgentes. Por su parte, los supuestos segundo y tercero iban dirigidos específicamente a combatir la formación de montoneras rebeldes, considerándolas como un foco de inestabilidad y como agentes potenciales de peligro a los gobiernos establecidos. Como ya he mencionado en otro capítulo, muchos de los “ejércitos” que se formaban para derrocar a los gobiernos decimonónicos se asentaban en estos grupos irregulares armados que, integrados por los sectores marginales de la sociedad, combinaban el pillaje y la acción política-militar, recibiendo el nombre genérico de montoneras. En tiempos de paz, estas se dedicaban al bandolerismo, atacando a los comerciantes o haciendas locales, en provecho personal de sus miembros; mientras que en tiempos “revolucionarios”, pactaban su participación en movimientos insurgentes, insertándose de esta manera en una dinámica política supra-local, coordinada por los jefes de las rebeliones. De similar manera, los hacendados poderosos (como el caso de Augusto Durand en Huánuco o José María Lizares en Puno) formaban sus propios grupos irregulares, que constituían su fuerza armada particular para proteger sus propiedades, ejercer un control de facto sobre el área circundante a su propiedad o rivalizar por la influencia local contra otros notables locales. En tiempos “revolucionarios”, los hacendados también pactaban con los caudillos insurgentes la movilización militar de sus fuerzas particulares a cambio de prebendas políticas.

Desde la perspectiva de los gobiernos, las montoneras como focos de violencia particulares representaban siempre un problema latente. En tiempos de paz, constituían una amenaza al “orden”, pues, entre otras cosas, atentaban contra las

actividades económicas, generaban incertidumbre en la población local y entorpecían la labor de los delegados del gobierno central (prefectos, subprefectos gobernadores); pero, en tiempos insurreccionales, su peligrosidad para los gobiernos aumentaba exponencialmente, ello debido a algunas ventajas tácticas de las montoneras con respecto a las fuerzas militares que defendían al poder central. Difícilmente las montoneras atacaban directamente a ninguna fuerza militar, pues por lo general actuaban como respaldo de las fuerzas “regulares” insurgentes; preferían el hostigamiento, distracción y desgaste de las fuerzas gobiernistas. Adicionalmente, las montoneras podían atacar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las operaciones militares, destruyendo puentes, cables telegráficos o vías férreas. Las montoneras eran tanto más peligrosas en la medida que eran difíciles de combatir y erradicar, ya que al ser grupos irregulares y no muy numerosos, podían rápidamente dispersarse y ocultarse.

Aunque la presencia de las montoneras fue constante durante todo el siglo XIX, parece ser que esta empezó a incrementarse y tomar un creciente cariz político a partir de tercer tercio del siglo y llegar a su cenit durante el Segundo Militarismo (Jacobsen y Diez 2002, Manrique 1988). Precisamente, después de la Guerra del Pacífico, una enorme cantidad de armas de guerra quedó en posesión de la población civil, permitiendo con ello “democratizar” el acceso a estos medios de ejercicio de la coerción. Esto fue evidente sobre todo en algunas zonas donde el control del Estado era débil como el Valle del Mantaro, la serranía de Piura y Cajamarca, donde campesinos movilizados en la guerra, como en el Centro, montoneras bandoleras aliadas a familias terratenientes, como el caso de Piura, o terratenientes y comerciantes con contingentes armados, como en Cajamarca, constituían fuentes de inestabilidad e insubordinación frente al gobierno y sus representantes²³⁹. La capacidad militar de las montoneras quedó fehacientemente demostrada durante la revolución de 1894-1895, capacidad que atentaba contra el monopolio de la violencia que debía proveerse el Estado para constituirse en una entidad estable y obedecida.

Ante la amenaza latente de las montoneras, los redactores del Código del 1898 buscaron ser más específicos para su tratamiento, de allí que este penalizara

²³⁹ En el capítulo 7 veremos de manera más amplia el posicionamiento del gobierno de Piérola frente a las montoneras.

militarmente también el delito de «salteamiento». De acuerdo a este, quedaban comprendidos en la jurisdicción militar, incluso en tiempo de paz, quienes asaltaran poblados en «banda» no menor de tres miembros; destruyeran hilos telegráficos, puentes o líneas férreas, atacaran trenes o carros a mano armada; atacaran a los conductores de valijas postales o robaran estas; produjeran incendios o secuestraran personas (CJM, 1898, art. 11º, inc. 9º). Con respecto a este artículo, Jorge Basadre ya había mencionado su direccionalidad para atacar a las montoneras, aunque su accionar no se realizara en tiempos de guerra nacional ni dentro de territorios donde se desarrollaran acciones militares (Basadre 2005,t. 11: 131). Efectivamente, esta provisión desligaba a las montoneras de la justicia civil para someterlas a la militar, a fin de que su más rígido tratamiento las erradicara antes de que se produjese una nueva coyuntura “revolucionaria”.

Ahora bien, el control de la población civil a través de la justicia castrense solo podía lograrse en la medida que su jurisdicción tuviera un amplio ámbito y contara con los mecanismos para asegurarse el juzgamiento por esos delitos en tribunales militares, por ello la inclusión de un importante número de delitos políticos y relativos al orden público pasaron al fuero castrense; en ese sentido también la disposición de esos “cerrojos” destinados a derivar los conflictos de competencias en favor del fuero castrense (el principio de la pena más alta o la dirimencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina). Además de esto el fuero castrense era “atrayente”, en el sentido que los coautores, cómplices y encubridores civiles de los delitos castrenses, como el de rebelión, debían ser juzgados en los consejos de guerra. No era ni siquiera necesario que el delito se consumara, pues el Código podía conocer incluso a implicados en conspiraciones y actos preparatorios, y su capacidad de judicial le facultaba el procesamiento incluso de altas autoridades del Estado, que anteriormente gozaban de inmunidad y que en más de una ocasión se encontraban implicadas en movimientos desestabilizadores de los gobiernos decimonónicos, autoridades como: congresistas, funcionarios diplomáticos, miembros de los altos tribunales de justicia, etc. Estas altas autoridades, como se dijo, debían ser juzgadas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

5.4. Influencia del Ejecutivo en la jurisdicción castrense

Según el espíritu del Código, las importantes tareas que este otorgaba a la jurisdicción castrense para la subordinación de los militares al poder político, la inspección de la disciplina interna de la institución del Ejército y el juzgamiento de la población civil subversiva, no podían entregarse sin mecanismos de control de esta jurisdicción que el gobierno central no pudiera accionar. En otras palabras, la norma establecía los suficientes instrumentos para que el Ejecutivo interviniera, directa o indirectamente, sobre el sistema jurisdiccional militar, a pesar de los argumentos que alegaban sus propulsores sobre la independencia de esta jurisdicción.²⁴⁰ A pesar de los cambios que implicaba el Código, el diseño de la norma mostraba una continuidad respecto a la injerencia que el Gobierno había gozado en la justicia castrense en el siglo XIX.

En primer lugar, el Ejecutivo tenía una injerencia indirecta en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, pues cabía al gobierno el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en base a una terna presentada por este mismo cuerpo (CJM, 1898, art. 80). Sin embargo, la norma estableció que para su primera formación, el Ejecutivo nombraría discrecionalmente, como lo hizo el gobierno de Piérola, a los miembros del Consejo Supremo, sin atenerse a la prescripción anterior (CJM, 1898, art. 86). Así, habiendo nombrado a los miembros del primer Consejo, el gobierno podía obtener con mayor facilidad, la proposición de una terna afín con el interés gubernamental para la siguiente conformación del Consejo, manteniendo su influencia sobre dicho cuerpo. En segundo lugar, cabía al Presidente de la República el nombramiento de dos funcionarios claves del mismo cuerpo, el Fiscal y el Auditor General (CJM, 1898, art. 109 y 121-122, respectivamente). Con el nombramiento del primero, el gobierno se aseguraba la presencia de una persona afín que promoviera los cargos contra los sometidos al Consejo y, con la designación del segundo, se aseguraba que un letrado afín fuera el consultor de los fallos emitidos por el Consejo Supremo (debe tenerse en cuenta que

²⁴⁰ En uno de los artículos que publicó Miguel Antonio de la Lama, afirmaba defendiendo la independencia de la Justicia Militar establecida en el nuevo Código que «no se ha querido dejarle al Poder Ejecutivo un poder *discrecional* sobre los militares, que en el proyecto se le deja á la ley, y no á las autoridades, la designación de los Vocales de los Consejos de Guerra» (*El Derecho*. Año IX, N° 214-215, Lima, Agosto de 1898).

el Auditor estaba encargado de ser el asesor legal de los consejos de Guerra). La injerencia del Ejecutivo en el Consejo Supremo era fundamental, en virtud que le cabía a este tribunal el revisar los fallos de la instancia judicial militar inferior, encausar a los altos funcionarios civiles y militares, pero, sobre todo, porque el Consejo Supremo le correspondía vigilar a las autoridades y jueces del sistema jurisdiccional castrense y dirimir las competencias jurisdiccionales entre el fuero militar y el fuero común. A este respecto, la injerencia indirecta del Ejecutivo le permitía adjudicar el juzgamiento de civiles al fuero militar y asegurar un juzgamiento acorde con los intereses del Gobierno.

En tercer lugar, el Código no solo le otorgaba al Presidente de la República injerencia en el nivel superior del sistema, sino también en los niveles inferiores. Por ejemplo, correspondía a este el nombramiento de los jueces instructores en cada una de las zonas militares, y en el caso de juzgamiento de militares con cargo de coronel, el primer mandatario podía nombrar a juez instructor ad hoc para el juicio (CJM 1898, art. 97-98). A los jueces instructores les cabía la tarea fundamental de la instrucción del proceso, esto es, la recolección de las pruebas, la toma de los testimonios, etc., es decir, el material probatorio sobre el cual los consejos de guerra establecían su veredicto. Esta última atribución resultaba muy importante al Gobierno para el control de los jefes militares con mando de unidades militares considerables. Resultaba tácticamente necesario al Ejecutivo designar directamente a dicha autoridad en los casos de juzgamientos de jefes militares de importancia como los coroneles, dado que, de acuerdo a su posición jerárquica de la época, eran estos quienes disponían de mando directo sobre unidades militares de importancia numérica como los batallones, los escuadrones o las brigadas, lo que hacía su lealtad y control fundamental para cualquier gobierno constituido. Para corroborar esto basta con recordar cuántos coroneles y sus sendos batallones se rebelaron contra sus respectivos jefes jerárquicos y gobiernos, terminando al fin y al cabo derrocándolos.

En cuarto lugar, el artículo 4º del Código facultaba al Ejecutivo la capacidad de otorgar jurisdicción militar a cualquier otra autoridad del Ejército. La imprecisión de dicho artículo no permitía designar si se le facultaba al Ejecutivo el nombramiento temporal de jefes de zona o de jueces militares y, menos aún, en que períodos específicos tenía prescrito el uso de esta atribución (estado de guerra o en tiempo de

paz). Esta atribución fue una de las más criticadas por los detractores del Código²⁴¹. En quinto lugar, y esto no fue previsto por los comisionados que elaboraron el Código, el gobierno de Piérola aprovechó que el país no estuviera dividido aún en regiones militares para otorgar el cargo de jefes de zonas jurisdiccionales castrenses a los prefectos de los departamentos. Los prefectos, al ser nombrados directamente por el Ejecutivo, le brindaban a este la seguridad de tener en estos puestos claves a funcionarios leales. Esta medida fue criticada incluso por uno de los comisionados, Alfredo Gastón, quien en el año 1900 señalaba que con ello se había incurrido «en la aberración jurídica, que en un mismo funcionario sea á la vez, juez y parte, por la naturaleza de sus respectivas atribuciones [...] cuando esta no fue la mente de los autores del primitivo proyecto, sino la de dividir la República en cuatro ó cinco circunscripciones militares, con un jefe de zona, independiente de la autoridad política» (Anales 1907, t. I: 393).

En sexto lugar, al Presidente de República le correspondía nombrar a los jueces de las *Cortes de Honor*, tribunales que podían encauzar a cualquier jefe u oficial, por «actos, no definidos como delito ó falta, por este código ó el común, pero que no se conformasen con el sentimiento vivo del honor y el de la hidalguía, esenciales en el militar» (CJM, 1898, art. 656). Finalmente, el Código facultaba al Presidente de la República la atribución de ordenar a las autoridades judiciales correspondientes la formación de una causa correspondiente a un «delito de que tenga noticia» (CJM, 1898, art. 382).

5.5. La «cruzada» contra el Código de 1898

La amplia dimensión que el Código de Justicia Militar dio a la jurisdicción castrense fue criticada casi inmediatamente a su promulgación, generándose un fuerte rechazo a la vigencia de esta norma, resultando interesante que el verdadero debate acerca de la pertinencia de esta norma no se realizó antes de su promulgación, pues como se ha visto, el gobierno de Piérola presionó para que esta se promulgara casi sin discusión, siendo por el contrario en los años inmediatamente posteriores sometido a un

²⁴¹ *El Comercio*. Lima, 9 de junio de 1899, edición de la tarde.

enérgico debate que tuvo como escenarios la prensa, el Congreso y las propias sesiones del Consejo Supremo de Guerra y Marina.

El debate se inició ante las primeras actuaciones de la justicia castrense que, para desgracia de sus defensores, sometió a este fuero a civiles que habían cometido delitos previstos en el Código de Justicia Militar. El primer juicio se entabló contra cuatro civiles que atacaron en las afueras de Lima al Cabo de la gendarmería Emilio Rosado, quien en el cumplimiento de sus funciones resultó muerto. Dado que este hecho configuraba el delito de “asalto en despoblado”, la justicia castrense tomó conocimiento del caso e inició la formación del juicio. Este proceso tomó mayores niveles de conflictividad, cuando el agente fiscal de la Corte Superior de Lima, Felipe de Osma, presentó un alegato ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina para que el delito fuera ventilado en el fuero común. Esta controversia fue publicitada ampliamente en la prensa por varios meses, y tuvo como resultado la incompetencia de la justicia ordinaria en este caso y su juzgamiento en el fuero militar.²⁴² El segundo caso llegó a niveles de escándalo público, pues en él era una mujer la que había sido acusada de cometer una agresión contra un guardia de la Intendencia de Lima. Pasión Muchaipiña había sido detenida en la Intendencia el 3 de abril de 1899 por encontrarse en estado de ebriedad y, al día siguiente, cuando era trasladada a otra dependencia, atacó a un gendarme con un trozo de botella, configurándose con ello el delito de «ataque a fuerza armada». Escandalizó aún más este evento porque Muchaipiña justificó su acto alegando que fue violada por los guardias en la noche, aprovechando su estado de ebriedad.²⁴³ Ambos casos desacreditaron desde un inicio la pertinencia del Código, generando una ola de críticas en torno suyo.²⁴⁴

La primera crítica que se hizo al Código esgrimía que este había restablecido los fueros personales. El mismo caso de Muchaipiña daba asidero para que este alegato se formulase con verosimilitud, pues el que un militar fuera acusado de

²⁴² *El Comercio*. Lima, 28 de marzo 1899, edición de la tarde; 13 de mayo de 1899; 18 de mayo de 1899, edición de la tarde; 9 de junio 1899, edición de la tarde; y 14 de junio de 1899, edición de la mañana.

²⁴³ *El Comercio*. Lima, 16 de mayo 1899, edición de la mañana y 17 de mayo de 1899, edición de la tarde.

²⁴⁴ Esta era la opinión de Alfredo Gastón, miembro de la Comisión que elaboró el Código y luego Auditor General de Guerra del Ejército (Anales 1907, t. I: 389).

violación y que el veredicto sobre el hecho recayera también en militares, activaba los temores de la opinión pública respecto a que una justicia privativa protegiera a los miembros del fuero castrense como un grupo privilegiado. Un artículo de *La Prensa* daba cuenta de esta posición: «Soldados dieron ocasión á un delito y soldados se aprestan a juzgarlo. [...] El fuero personal ha dejado muy tristes recuerdos en la historia. En una época como ésta, en que han desaparecido todos los privilegios que se arrogaron en otros tiempos, la fuerza y la superstición, el fuero militar, y lo mismo el eclesiástico, son insulto á nuestros sentimientos de justicia [...] Que decidirán los nuevos jueces?»²⁴⁵. Agravaba esta sensación los privilegios que el Código otorgó a los militares con respecto a procedimientos judiciales de responsabilidad civil que a partir de ese momento debían ser tramitados en el fuero militar, como el caso de cobro de deudas a militares sobre sus sueldos, como afirmaba otro artículo de *El Comercio*: «no solo restablece el fuero personal sino que ha inventado el fuero de trampa para los muy dichosos y bienaventurados militares. Alerta, pues, señores propietarios, comerciantes, sastres, proveedores de viveres, etc.»²⁴⁶

Otra crítica estuvo dirigida al hecho que la jurisdicción castrense ventilase delitos antes procesados en la justicia civil, especialmente, los relacionados a la orientación política del Código. Los detractores afirmaban que los procesos por delitos políticos seguidos a los civiles, podían ser direccionados por el Ejecutivo en virtud de su autoridad sobre los militares. Esta preocupación se acrecentaba en virtud de que el Código otorgaba al Ejecutivo la facultad de conferir temporalmente jurisdicción castrense a cualquier autoridad del Ejército. De esta opinión era el Agente Fiscal de la Corte Superior de Lima:

Se vé, además, que la rebelión desde la conspiración hasta la consumación misma del delito, cae bajo la jurisdicción militar, que puede ser atribuida por el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 4º, á cualquier autoridad del ejército. Se vé, también, que este código, el día que pese sobre el Perú la desgracia de ser gobernado por un hombre inculto ó que no sepa proceder en todo rectamente, será legal instrumento de las más odiosas arbitrariedades.²⁴⁷

²⁴⁵ *La Prensa*. Lima, 18 de mayo de 1899, citado en *El Comercio*, 19 de mayo de 1899.

²⁴⁶ *El Comercio*. Lima, 12 de agosto de 1899, edición de la tarde.

²⁴⁷ "Informe pronunciado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina", por el Agente Fiscal Felipe de Osma el 8 de junio de 1899, en: *El Comercio*. Lima, 09 de junio de 1899, edición de la tarde.

Los críticos temían que estas enormes atribuciones podían ser empleadas por gobiernos autoritarios para atacar a los opositores del gobierno, procesándolos en el fuero castrense: «El régimen normal de ahora no ha de subsistir, de seguro, toda la vida. Y ¿qué será, por ventura, el código militar en manos de cualquiera de esos bárbaros que, de tarde en tarde, se apoderen del gobierno? ¿Qué haremos cuando, por quítame allá esas pajas, nos arrastren, á título de conspiradores, ante una corte marcial? La libertad, entonces, habrá muerto en el país. El despotismo más espantoso existirá, porque la justicia común, que es lo más grande, lo más sagrado, cederá el paso á las brutalidades de la fuerza.»²⁴⁸ Sin embargo, esta crítica iba aún más lejos, pues consideraba que al tener la facultad el Ejecutivo de intervenir en la administración de justicia, ordenando el arresto de civiles por delitos políticos y parcializando los procesos, atentaba contra las garantías individuales de los ciudadanos (p.e. el Habeas Corpus), como lo entendía un editorial de *El Comercio*:

[E]l anterior gobierno [el de Piérola], que 1898 pidió al poder legislativo suspensión de las garantías individuales para debelar movimientos subversivos poco importantes, en el presente año no ha sido necesario de ese recurso, á pesar de haber existido una situación mucho más grave, sin duda porque el nuevo código conseguía los mismo efectos, y en más vasta escala que con la suspensión de las garantías constitucionales. Esto quiere decir que la subsistencia de tal código equivale á la suspensión permanente de esas garantías, sin el acuerdo del poder legislativo.²⁴⁹

La crítica fue sumamente dura con los comisionados, especialmente con Miguel Antonio de la Lama, criticándolos incluso de haber redactado el Código trasplantando legislación extranjera incompatible con la Constitución peruana, sin ningún tipo de reflexión a las diferencias entre el Perú y los países de los que provenía los modelos legales utilizados. En un editorial de *El Comercio* se podía leer lo siguientes: «De esa adaptación mecánica de una legislación monárquica [refiriéndose al Código Militar español], ha resultado en primer término, que los

²⁴⁸*El Comercio*. Lima, 3 de abril de 1899, edición de la mañana.

²⁴⁹*El Comercio*. Lima, 13 de octubre de 1899, edición de la mañana.

crímenes comunes, como el homicidio, van á ser juzgados por los consejo de guerra, que el motivo personal de que la víctima pertenezca á la fuerza pública»²⁵⁰.

En el espacio público, pocos asumieron la defensa del Código, estando entre ellos el mismo Miguel Antonio de la Lama, su principal artífice. Desde la Revista *El Derecho* y en varios artículos publicados en *El Comercio* de la Lama emprendió un debate contra los detractores del Código, defendiendo su articulado y la pertinencia de sus disposiciones para la disciplina del Ejército y para el orden público del país. En uno de sus primeros artículos en la prensa, tildaba a sus contrincantes de “cruzados”, pues ciegos por sus ideas o por sus intereses no comprendían la importancia de la norma para el bien del país: «La pasión política de un lado y de otro pacioncillas de carácter personal, cuyos nombres se escapan de los labios de personas imparciales, forman la cruzada contra dicho Código. La pasión política, aun cuando bien intencionada, lo pospone todo al triunfo de la idea que engendra. [...] Como la pasión es ciega, los cruzados no saben el grave daño que hacen al país. No teníamos ejército; porque no hay ejército sin disciplina, ni disciplina sin leyes.»²⁵¹

El Código tuvo algunos sectores de los militares a su favor, quienes festejaron la derogación de las vetustas ordenanzas españolas después de casi 80 años de vida independiente. Argumentaban que la nueva norma pondría por fin orden y disciplina en el Ejército, estableciendo con precisión los delitos castrenses, los procedimientos judiciales, acabando con ello el problema existente en el fuero militar el cual hasta entonces otorgaba amplios poderes a los jefes militares sobre sus subordinados. Un ejemplo de ello fue el artículo publicado en *El Comercio* el 11 de mayo de 1899, en donde se afirmaba que «[d]e hoy más, nadie sino la ley juzgará los actos de los militares, y éstos podrán seguir, con paso firme, por los senderos del honor y del deber, sin temor de equivocarse, y sin preocuparse de la opinión ó del capricho que muchas veces tienen los superiores sobre determinados casos.»²⁵² Sin embargo, esta posición estuvo lejos de ser unánime. Otros consideraron cuestionable justo esta última implicancia del Código, es decir, la reducción de la capacidad de castigo de los jefes militares. Los detractores afirmaban que al haberse amputado la potestad de los jefes castrenses para resolver sobre las faltas disciplinarias graves de sus

²⁵⁰*El Comercio*. Lima, 22 de abril de 1899, edición de la tarde.

²⁵¹*El Comercio*. Lima, 1 de abril de 1899, edición de la tarde.

²⁵²*El Comercio*. Lima, 11 de mayo de 1899.

subordinados y entregársela a los jueces militares, se estaba atentando contra la disciplina militar, pues consideraban que solo los subordinados obedecían a sus jefes en virtud que estos tenían la capacidad de castigarlos severa e inmediatamente de cometida la falta. Solo con estos medios podía asegurarse la obediencia de los subalternos como lo entendía un redactor de la revista *El Perú Militar* en 1902:

El actual Código Militar, no garantiza una sólida y saludable disciplina, porque interviniendo exageradamente en los detalles, ha invadido por completo las funciones de la jerarquía militar, sujetando todo á trámites judiciales morosos y superfluos. Así, no se podrá castigar ninguna falta grave, sin que intervengan por lo menos, un juez instructor, un secretario, un jefe de zona y un auditor. [...] En todos los ejércitos, los delitos son materia de procedimientos judiciales, y las faltas graves ó leves, lo son, de procedimientos disciplinarios; porque sobre la conveniencia de dejar intactas las atribuciones de los que tienen grandes deberes y grandes responsabilidades [...] Nadie ignora que en todos los ejércitos del mundo, tiene el comando una suma de facultades, para reprimir en el acto las faltas de los inferiores [...] ²⁵³

Entre estos críticos se encontraba el coronel Paul Clément, jefe de la Misión Militar Francesa, quien en un proyecto que elevó al Congreso en el año 1900 hacía notar acerca de esta deficiencia del Código. El militar francés afirmaba que el objetivo del Ejército, es decir, la defensa exterior y el orden interno, «no puede conseguirse sino con una disciplina absoluta, que exige á todo militar saber que sus mismos jefes son sus jueces y que los delitos y faltas que cometan, sean reprimidos siempre con más prontitud y con más energía y severidad que en lo común.» ²⁵⁴ Adicionalmente, Clément consideraba atendibles las reclamaciones de los sectores civiles con respecto a la enorme amplitud de la jurisdicción castrense, sobre todo en los delitos que se consideraban políticos que atañía a los ciudadanos civiles: «la mayor parte de esas críticas son justificadas, por aplicarse este Código á una categoría de ciudadanos que no tiene nada en común con el Ejército; y por considerar como delitos militares, algunos que por su naturaleza, son esencialmente políticos.» ²⁵⁵

²⁵³ *El Perú Militar*. Año II, N° 22-23. Lima, 1 de junio de 1903, p. 328

²⁵⁴ “Proyecto de reforma del Código de Justicia Militar formulado por el señor Coronel Paul Clément, jefe de la Misión militar Francesa” (Anales 1907, t. II: 346).

²⁵⁵ *Ibíd.*: 345

Ante el gran número de críticas, la Cámara de Diputados por iniciativa de 25 de sus miembros propuso, a menos de un año de su promulgación, la suspensión del Código, restableciendo las ordenanzas españolas, moción que al ser elevada a la Cámara de Senadores, no obtuvo ningún resultado.²⁵⁶ Ante esta situación, el Ejecutivo nombró en abril de 1900 una Comisión encargada de reformar el Código, atendiendo las críticas que se habían lanzado desde la prensa hasta el Congreso. Poco después el mismo Gobierno, al tiempo que hizo entrega de los resultados de la Comisión, instaba al Congreso que por ningún motivo se suspendiera el Código de 1898, pues consideraba que a pesar de sus defectos esta norma era muy superior a la regulación judicial castrense anterior: «el Gobierno [cree] preferible la subsistencia de él, á su suspensión, ó á la vigencia de las antiguas y caducas ordenanza españolas.»²⁵⁷ Un arma de esas características no podía ser desechada por el Ejecutivo tan fácilmente, sobre todo considerando que el presidente Eduardo López de Romaña había empezado su mandato con una “ola revolucionaria” (1899) que no pudo ser apagada sino hasta el año siguiente. El Código, como veremos, había permitido el procesamiento de sus principales líderes, aún sin presencia de los encausados. Es por esa razón que a pesar de la presentación de los proyectos de la Comisión, el Ejecutivo buscó el retraso de la reforma del Código.

Para el año 1900, ya habían sido remitidos al Congreso cuatro proyectos de ley de distintos orígenes que buscaban modificar el Código. El primero había sido promovido por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 1899. Según su parecer, las disposiciones de dicha norma «están en abierta oposición con preceptos claramente contenidos en la Constitución del Estado; y cuya enmienda, estima este Tribunal inaplazable».²⁵⁸ El proyecto contemplaba tres modificaciones sustanciales. Primero, proponía la modificación de la composición del Consejo Supremo de Guerra y Marina, otorgando una participación mayoritaria a los miembros de la Corte Suprema frente a los miembros militares. Con ello se buscaba introducir la competencia de dicho tribunal en el órgano de más alta jerarquía judicial castrense sin modificar sustancialmente la estructura jurisdicción militar, es decir, buscaba

²⁵⁶ “Proyecto presentado en la Cámara de Diputados, el 12 de octubre de 1899” (Anales 1907, t. I: 361-364).

²⁵⁷ “Oficio del Ministro de Guerra y Marina, Agustín Tovar, ala Cámara de Diputados”, del 8 de octubre de 1900 (Anales 1907, t. I: 365).

²⁵⁸ “Oficio de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la Cámara de Senadores”, del 7 de octubre de 1899, adjuntando proyecto de modificación de CJM 1898 (Anales 1907, t. I: 357- 358).

facultar a la Corte Suprema a través de su participación mayoritaria en el Consejo Supremo de Guerra y Marina para revisar los procedimientos de los juzgados inferiores, conocer las causas de los altos funcionarios del Estado o sancionar disciplinariamente a las autoridades jurisdiccionales y judiciales castrenses. En segundo lugar, el proyecto pugnaba por reducir la jurisdicción de guerra, sometiendo a ella solo a los militares que cometieran delitos de función, y a los civiles que cometieran cualquier tipo de delitos solo en territorios que fueran declarados en estado de guerra. En tercer lugar, buscaba acabar con la capacidad de elasticidad del fuero militar, prescribiendo que las competencias de jurisdicción debían ser salvadas por la justicia ordinaria y no por la militar, otorgándose dicha facultad a las cortes superiores del distrito en el que se cometiera el delito, o en su defecto en la Corte Suprema, para los casos especiales.²⁵⁹

Por su parte, la Comisión nombrada por el gobierno dio a luz dos proyectos de ley que fueron también enviados al Congreso. La comisión estaba presidida por Alberto Elmore, vocal de la Corte Suprema y principal crítico del Código de 1898, por tres altos oficiales del Ejército y la Marina, y por tres miembros de la Comisión a la que se le encargó elaborar el Código en 1897 (Miguel Antonio de la Lama, Alfredo Gastón y Julio Jiménez).²⁶⁰ El proyecto de mayoría, en el que se notaba la gravitación de Elmore, proponía una modificación sustancial del sistema jurisdiccional castrense y un cambio radical del Código, siendo sorprendente que el mismo de la Lama suscribiera tal proyecto. En primer lugar, los delitos militares solo serían juzgados por tribunales castrenses en la primera instancia, cumpliendo las funciones de las instancias superiores a las Cortes Superiores y la Corte Suprema, con la adición en fracción minoritaria de conjueces militares asignados ad hoc cuando estos tribunales ventilaran causas previstas en el Código Militar. Además, se suprimía el Consejo Supremo de Guerra y Marina, reasumiendo la Corte Suprema su función revisora en última instancia. En segundo lugar, se propugnó reducir la jurisdicción castrense a los delitos militares cometidos por miembros del Ejército en servicio y los civiles en situaciones excepcionales. En tercer lugar, recogía las

²⁵⁹ “Iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, presentada a la Cámara de Diputados el 7 de octubre de 1899” (Anales 1907, t. I: 357-360).

²⁶⁰ La Comisión fue designada por el gobierno el 10 de abril de 1900, presidida por Alberto Elmore (Corte Suprema), Javier Prado Ugarteche (Facultad de Derecho UNMSM), Miguel Antonio de la Lama (fiscal del CSGM), Alfredo Gastón (Auditor General del Ejército), cuatro altos oficiales de Marina y del Ejército (Anales 1907, t. I: 367).

críticas que se habían hecho algunos militares, devolviendo a los jefes del Ejército, y en general a los superiores, la potestad de castigo sobre sus inferiores (Anales 1907, t. I: 368-383).

El proyecto en minoría, suscrito por los miembros de la Comisión de 1897, a excepción de de la Lama, deslindaron abiertamente con este proyecto afirmando contra la mayoría que «nunca hubo de figurarse, que la misión de *reformular* [el Código de 1898], se llevase al extremo de *destruir*[lo]» (Anales 1907, t. I: 389). Las modificaciones que presentaba la minoría no eran sustanciales y hacían eco de las críticas menos reacias al Código. Este proyecto proponía modificaciones orientadas a afinar la estructura de la organización jurisdiccional propuesta en la norma, suprimiendo los jefes de zonas, estableciendo un Consejo de Guerra y Marina permanente en Lima, como tribunal de primera instancia con jurisdicción a nivel nacional. Adicionalmente, promovía absolvía algunas críticas promoviendo la supresión del CSGM, para reemplazarlo por Consejo Revisor de Guerra y Marina, como segunda y última instancia en el fuero militar, institución que estaría compuesta exclusivamente por militares. A la Corte Suprema le otorgaba la facultad de casación, es decir, conocer y resolver sobre los recursos de nulidad sobre los procesos del Consejo Revisor, al mismo tiempo que le confería en conocimiento de juicios por delitos militares de altos funcionarios públicos. Sobre las contiendas de competencias, proponía que estas debían ser zanjadas en primera instancia por un tribunal mixto, entre las Cortes Supremas y el Consejo Revisor, y en última instancia por la Corte Suprema (Anales 1907, t. I: 393-401).

Un cuarto proyecto fue elaborado por Clément, casi paralelamente a los trabajos de la Comisión Elmore, el cual, si bien crítico al Código, estaba más orientado a modificar partes concretas de él, sin alterar sus aspectos centrales de manera radical. Además de afinar las atribuciones de los órganos jurisdiccionales para hacerlos más diligentes, este proyecto suprimía de la jurisdicción de guerra los crímenes cometidos por los civiles, reduciendo el radio del fuero de guerra al juzgamiento de delitos militares cometidos por miembros del Ejército, haciendo la salvedad de su ampliación en casos excepcionales de guerra. Proponía también, como en el caso del proyecto de mayoría de la Comisión Elmore que se otorgara a los jefes militares la capacidad de castigar disciplinariamente a los subordinados, a

fin de que la obediencia castrense fuera respaldada adecuadamente por la legislación militar (Anales 1907, t. II: 345-374).

Estos proyectos estuvieron en el Parlamento sin discusión hasta el mes de setiembre de 1901, fecha en que la Comisión Principal de Guerra de la Cámara de Diputados formuló un dictamen por el cual solicitaba al pleno el aplazamiento de la redacción de un nuevo Código por tiempo indeterminado, afirmando que lo delicado del tema exigía la revisión detenida de los proyectos del Ejecutivo y del coronel Clément, además de la consulta y armonización de la futura norma con el proyecto de Justicia Militar Marítima que por esas fechas se había enviado a la Cámara de Senadores. Aunque la Cámara no aceptó el dictamen de la Comisión, la reforma del Código fue pospuesta, derivando este asunto a las comisiones de Legislación y la Auxiliar de Guerra (Anales 1907, t. II: 375-385). En esta dilación parece que el Ejecutivo jugó un papel importante, entorpeciendo la resolución del asunto al enviar el Código Militar Marítimo al Senado, al tanto que había enviado los proyectos de reforma del Código de 1898 a la Cámara de Diputados. Así, por lo menos lo entendía uno de los miembros de la Comisión de Guerra y ex-miembro de la Comisión de 1900, Juan Martín Echenique, quien preguntaba al pleno:

¿Cómo vamos á estar discutiendo una reforma [del Código de Marina] que el gobierno ha hecho suya en el Senado, y otra reforma [del Código de 1898] que el Gobierno ha hecho suya en Diputados? El Senado la aprueba en tal ó cual forma y la manda en revisión, y la Cámara de Diputados la aprueba en tal ó cual forma y la manda en revisión al Senado. ¿Qué resultaría de eso? Un verdadero galimatías. (Anales 1907, t. II: 384-385).

Por tal razón los proyectos que se presentaron en 1900 quedaron encarpados en el Parlamento hasta 1905 que se volvió a discutir sobre la modificación del Código. Ese año la iniciativa de reforma fue esgrimida una vez más por la Corte Suprema de Justicia. Los puntos básicos que propugnaba el proyecto eran casi los mismos que había presentado en el año 1899, es decir, la supremacía de la Corte Suprema en materia de justicia a través de su competencia para proveer recursos de nulidad, la resolución de competencias jurisdiccionales por el fuero ordinario, y la reducción de la jurisdicción castrense a los sujetos militares por delitos cometidos en servicio, salvo casos excepcionales (delito cometido por civiles en instalaciones militares y en

lugares sometidos a estado de guerra externa). Sin embargo, en esta ocasión este tribunal decidió asumir una estrategia distinta, presentando cada uno de estos requerimientos en proyectos de ley separados (Anales 1908, t. IV: 293-312). Por su parte, ese mismo año, el Ejecutivo presentó otro proyecto por el cual se buscaba, entre otras cosas, instituir una zona judicial militar en Lima, con un Consejo de Guerra y Marina que conociera como tribunal de primera instancia todos los delitos castrenses que se produjeran en la república, eliminándose con ello las zonas y consejos que debían formarse en los demás departamentos. El proyecto fue presentado al Parlamento y, aunque fue revisado por la comisión de legislación de la Cámara baja el año siguiente, este no mereció su sanción por el Parlamento (Anales, 1908, t. IV: 313-323).

Solo en el año 1906, la jurisdicción ordinaria, representada en la Corte Suprema, pudo ver cumplido su objetivo. En octubre de ese año se promulgaron las leyes N° 272 y 273 que acogían en parte los requerimientos de este poder del Estado. La primera otorgó a la justicia ordinaria la facultad de dirimencia de competencias a través de las Cortes Superiores, al mismo tiempo que restauró el principio por el cual en caso de duda entre ambas jurisdicciones, debía darse preferencia a la ordinaria (Ley N° 272, de 27-10-1906). La otra ley restablecía la supremacía de la Corte Suprema de Justicia, otorgándole la facultad de conocer los recursos de nulidad en la jurisdicción de guerra, así también la de conocer originariamente los juicios por delitos militares que cometieran altos funcionarios del Estado, a los que se les aplicaría las penas del Código de Justicia Militar. Dado que la Corte Suprema revisaría los fallos, incluyendo los correspondientes al Consejo Supremo de Guerra y Marina, se consideró innecesaria la presencia de vocales de dicha corte en el Consejo, el cual quedó compuesto estrictamente por vocales castrenses, recibiendo además el nombre de Consejo de Oficiales Generales (Ley N° 273, de 27-10-1906). Sin embargo, la victoria de los magistrados no fue completa en esta ocasión, pues los delitos políticos y otros que antes de la reforma de 1898 eran ventilados en la justicia ordinaria permanecieron en el fuero militar, lo que significaba en otras palabras que el fuero castrense seguía siendo muy amplio, aunque su capacidad para seguir expandiéndose se cortó con estas reformas. Se tuvo que esperar hasta 1917 para que las Cámaras promulgaran por sí mismas el tercer proyecto, después de doce años de

haber sido formulado por la Corte Suprema, ante la negativa del Ejecutivo de promulgarlo (Bustamante y Rivero 1920: 15).

Cuadro 9: Proyectos de Reforma del Código de Justicia Militar formulados en 1900

	Órganos jurisdiccionales	Competencias jurisdiccionales	Jurisdicción castrense	Procedimientos civiles	Facultades disciplinarias
Iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (1899)	Modifica la composición del Consejo Supremo de Guerra y Marina (CSGM), aumentando el número de miembros de la Corte Suprema, en mayor proporción que los jueces militares	Las competencias de jurisdicción serán resultas por los tribunales del fuero ordinario.	La jurisdicción de guerra no conoce causas contra personas que no pertenezcan al Ejército, solo en el caso que se cometan en territorios declarados en estado de Guerra	Procedimientos judiciales de responsabilidad civil, deben ser atendidos en el fuero ordinario (testamentos, embargo de bienes, deudas).	
Proyecto en mayoría de la Comisión del Gobierno (1900)	Se suprime el CSGM, por haberse dotado jerarquía análoga a la Corte Suprema. Esta última, como instancia suprema, conocerá los juicios militares, a la que se adjuntarán 2 conjuces militares. Aumenta una segunda instancia compuesta por vocales de las Cortes Superiores y dos militares.	No se presentan competencias de jurisdicción con la organización jurisdiccional propuesta.	La jurisdicción de guerra solo conocerá delitos militares cometidos por militares en servicio. Los delitos comunes de militares serán juzgados en el fuero ordinario. Los civiles, cómplices o coautores, de delito militar serán juzgados en el fuero ordinario, salvo que los cometan en espacios militares o en tiempo de guerra externa.	Procedimientos judiciales de responsabilidad civil, deben ser atendidos en el fuero ordinario.	Otorga a los jefes militares la facultad de castigar las faltas disciplinarias de sus subordinados, reduciendo el número de causales para el juzgamiento de un proceso judicial sumario.
Proyecto en minoría de la Comisión del Gobierno (1900)	Supresión de los jefes de zona reemplazándolo por un juez fiscal militar permanente. Establece en Lima un Consejo de Guerra permanente en toda la República, con jurisdicción en todo el país. El CSGM de Guerra debe suprimirse e instalarse un Consejo Revisor de Guerra y Marina, como segunda y última instancia militar, compuesta por militares exclusivamente. La Corte Suprema tiene facultad de casación, recurso de nulidad del Consejo y la capacidad de juzgar a los altos funcionarios, por juicios de delitos militares.	Serán zanjadas las contiendas de competencias en primera instancia por un tribunal mixto, las resultantes entre las Cortes Supremas y el Consejo Revisor, por la Corte Suprema.			
Proyecto presentado por el jefe de la Misión Militar Francesa (1900)			La jurisdicción militar se ejercerá en razón de los delitos cometidos por militares. No deben considerarse, los delitos políticos cometidos por civiles. Estos solo serán juzgados en tribunales de guerra, en caso de guerra exterior o si una jurisdicción es declarada en estado de sitio.		Otorga a los jefes militares la facultad de castigar las faltas disciplinarias, disponiendo que los jueces solo deban atender los casos en que se presenten delitos militares.

Fuente:}. *Anales de Justicia Militar*. Tomo I (1899-1900) y II (1901-1902). Sección de Reforma del Código de Justicia Militar. Cuadro de elaboración propia

5.6. Los resultados del Código de Justicia Militar de 1898

En líneas generales, la implementación del Código de Justicia Militar de 1898 consiguió los resultados que perseguía en algunos casos, mientras que en otros estuvo lejos de alcanzarlos. No obstante, algo que se puede apreciar con total claridad desde su promulgación es una importante transformación en la justicia castrense, tanto por el aumento de los procesos, el radio de los sujetos a los que estos alcanzaron y, por consiguiente, la mayor eficacia en la persecución de los comportamientos delictivos. El primer dato positivo que encontramos fue el aumento del número de procesos que se ventilaron en la justicia militar. Mientras que entre 1860 y 1873 se realizaron veinte juicios en los tribunales de guerra²⁶¹, solo el primer año de la puesta en vigor de la norma (1899), esta cifra se duplicó, llegando a producirse 44 juicios sentenciados, cantidad que osciló en los siguientes siete años, presentando un promedio de 47 casos con sentencia por año. Este aumento del número de juicios militares fue motivo de preocupación inicialmente, como lo refería el Jefe de la Zona militar de Lima, César Canevaro a 1902:

El crecido número de enjuiciados ha de causar extrañeza á las personas que no se hayan formado cabal concepto del Código de Justicia Militar; porque acostumbrados como hemos estado antes de [su] vigencia [...] á que los juicios militares fueran solo de excepción, la frecuencia de estos, en la actualidad, asombra á muchos y no faltan quienes vean síntomas de indisciplina en nuestro Ejército, en la repetición constante de esos juicios.²⁶²

La razón de este aumento de juicios militares, como bien lo señalaba el mismo Canevaro, se debía a que la jurisdicción castrense había asumido en su plenitud la capacidad de juzgamiento de los delitos militares, despojando de los jefes de cuerpo de dicha prerrogativa: «Antes de que se promulgara el Código de Justicia Militar, los Jefes de las diversas dependencias del Ejército eran los únicos y absolutos jueces de los delitos y faltas en que los inferiores incurrían [...] Con ese sistema, rarísimo era el juzgamiento militar [...] El superior ó jefe, castigaba con arrestos, más ó menos

²⁶¹ *El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1899.

²⁶² “Memoria que al Excelentísimo Consejo de Guerra y Marina presenta el Jefe de la Zona Militar de Lima, General de Brigada don César Canevaro”, año 1902 (Anales 1907, t. II: 291).

largos y rigurosos, con la baja expulsión, y con otros castigos que su manera de ver las cosas le inspiraban, las faltas y los delitos de los que á sus órdenes servían.»²⁶³ Sumado a esto, el número de juicios militares creció exponencialmente desde 1899 por el aumento del número de comportamientos delictivos que el nuevo Código incorporó en sus disposiciones, tanto para el juzgamiento de militares como de civiles. Sin embargo, aun con ello, si solo se considera los juicios sentenciados que se siguieron a militares por delitos propios del servicio y de disciplina militar, obviando los juicios antes sometidos al fuero común, el número de aquellos es bastante alto: en la zona militar de Lima²⁶⁴, 304 entre 1899 y 1906 (alrededor del 80% sobre un total de 377), de los cuales 37 se obtuvieron sentencia en el primer año y 34 en el último, teniendo como pico en esos ocho años, 1904 con 52 juicios militares sentenciados (ver Cuadro N.º 12).

Sin embargo, el sistema estuvo lejos de cumplir los niveles de eficacia procesal que habían estimado los promotores del Código. Los procedimientos judiciales no revestían la rapidez deseada, pues algunas sentencias debieron esperar varios años para ser emitidas, sobre todo los casos que llegaban hasta el Consejo Supremo de Guerra y Marina. En los departamentos esto se debía a varios factores: el primero radicaba en que los Prefectos, como Jefes de Zona y encargados tramitar los procesos, en virtud de sus múltiples obligaciones políticas y administrativas, disponían de un tiempo marginal para atender su función en el sistema judicial castrense; un segundo correspondía a la insuficiente permanencia de los jueces instructores en sus puestos (en el año 1907, se contabilizó que estos permanecían en sus cargos entre seis y ocho meses), lo que dificultaba que adquirieran pericia en el cargo; y en tercer orden, el retardo de las cortes ordinarias para entregar información a la zona militar que le solicitaba información para la preparación de los expedientes.²⁶⁵

Asimismo, hasta el año 1911, la totalidad de juicios militares con sentencia en primera instancia se celebraron en Lima acto seguido de la verificación del proceso de instrucción en el departamento donde se producía el delito. El principal

²⁶³ *Ibíd.*: 291-292.

²⁶⁴ Las estadísticas judiciales son especialmente consistentes para la Zona Militar de Lima, mientras que la información de las demás provincias ha sido consignada en los Anales de Justicia Militar de manera bastante fragmentaria.

²⁶⁵ “Memoria del Consejo de Oficiales Generales, año 1907” (Anales 1929, t. V: 298-299).

inconveniente para que los juicios se realizaran en el respectivo departamento, resultaba en la impracticable disposición del Código para formar Consejos de Guerra con oficiales en servicio activo que, por el reducido número de efectivos del Ejército, eran escasos y en muchas ocasiones presentaban excusas para participar en los tribunales por sus ocupaciones del servicio. Si en Lima, estos inconvenientes eran salvados, dada la concentración de tropas y oficiales en la capital, ello no podía realizarse en otros departamentos por su escaso número. Por tal razón, todos los procedimientos que se iniciaron fuera de la capital fueron derivados a ella para que se formaran Consejos de Guerra, lo que traía como consecuencia la demora de los procesos judiciales (Anales 1907, t II: 289-290; 1929, t. V: 258-259).

Cuadro 10: Juicios militares sentenciados en la Zona militar de Lima (1899-1906)

Lugar de procedencia del juicio militar	Nº de juicios
Lima	213
Callao	31
Arequipa	30
Cuzco	15
Ica	11
Puno	11
Piura	10
Cajamarca	8
Otros	35
Total	377

Fuente: Anales de Justicia Militar: Tomo I (1899-1900); II(1901-1902); III (1903-1904); IV (1905-1906); V. Cuadro de elaboración propia

A pesar de estos inconvenientes procesales, el Código cumplió sus objetivos políticos y disciplinarios que se planteó el gobierno de Piérola. El debilitamiento del poder personal de los jefes militares se verificó, desligando de ellos la prerrogativa de castigo y el poder personal que disponía aquellos sobre sus hombres: «Esta restricción en materia penal, tan opuesta al antiguo sistema, encontró al principio algunas resistencias en los jefes, que miraban en ella una disminución ó desprestigio de su autoridad» (Anales 1907, t. II: 292). Jugó también un papel importante en esta reducción de su poder la oportunidad que dio esta norma para que los subordinados

pudieran entablar procesos contra sus superiores inmediatos, sentenciándose 18 juicios por abuso de autoridad entre 1899 y 1906, situación que había sido excepcional antes de la promulgación del Código (ver Cuadro N.º11).

Contrario a lo que afirmaban los más reacios militares respecto a la pérdida de las prerrogativas de castigo de los jefes, según los observadores de la época, el Código permitió mantener la disciplina interna del Ejército, penalizando los comportamientos que se desviaban de los objetivos organizacionales del Ejército, como lo afirmaba el coronel Julio Jiménez, redactor del Código y jefe de la Zona de Lima en 1904:

[...]la criminalidad en el fuero de guerra, disminuye de manera notable en los cuarteles, en las filas del Ejército, en las tripulaciones de los buques de guerra, y en general, en las instituciones militares; bien, alcanzado sin suda, por el mejoramiento de la instrucción de las tropas, con la práctica de la ley de servicio militar obligatorio y con la subsistencia del Código de Justicia Militar.²⁶⁶

Se juzgaron los delitos más frecuentes como el desertión (121 sentenciados), el de insulto a superior (49 sentenciados) y los de abandono de puesto, destino y filas (26 sentenciados). El delito más frecuente contra la disciplina militar fue siempre el de desertión, por la incapacidad del Estado de proveer incentivos para que la población se alistara en las filas del Ejército como se verá en el capítulo siguiente.

²⁶⁶ “Memoria de la Zona Militar de Lima y Callao, presentada al Consejo Supremo de Guerra y Marina, por el señor coronel D. Julio Jiménez”, del año 1904. (Anales 1907, t. III: 236).

Cuadro 11: Delitos de juicios sentenciados a militares por la Zona Militar de Lima(1899-1906)

Delitos juzgados	Nº de juicios
Deserción	121
Insulto a superior	49
Abandono de filas, destino o puesto	26
Abuso de autoridad	18
Homicidio	12
Total	377

Fuente. *Anales de Justicia Militar*: Tomo I(1899-1900);II(1901-1902); III (1903-1904); IV (1905-1906); V. Cuadro de elaboración propia.

Cabía añadir que las cifras registradas para la zona militar de Lima se encontraban acorde con la observación del coronel Julio Jiménez, respecto a la reducción de los delitos de cuartel, aunque a primera vista no lo parezca. Entre 1899 y 1903, el número de juicios sentenciados a militares fue de 36.8 procesos en promedio. Esta cifra debe considerarse como el promedio de delitos para un Ejército de tres mil efectivos, contingente que se aumentó precisamente en 1903 en mil efectivos adicionales (33.4%), lo que trajo como consecuencia que el número de juicios sentenciados en el año siguiente se elevara por encima 52, es decir, el 162.5% respecto del año anterior. En el año 1905 la cifra de juicios militares por delitos de cuartel empieza a reducirse, disminuyéndose notablemente durante el año siguiente.

Cuadro 12: Juicios contra militares juzgados por la zona militar de Lima(1899-1906)

Años	Nº total	Militares	Deserción
1899	44	37	6
1900	54	39	12
1901	50	42	15
1902	41	34	11
1903	37	32	18
1904	69	52	24
1905	60	49	20
1906	22	19	11
Total	377	304	117

Fuente. *Anales de Justicia Militar*: Tomo I (1899-1900); II(1901-1902); III (1903-1904); IV (1905-1906); V. Cuadro de elaboración propia.

El único caso de delito de cuartel de relativa importancia que se produjo entre los años que venimos tratando se verificó en Chiclayo, en febrero de 1902, cuando el escuadrón «Húsares de Junín N.º 1» protagonizó un motín contra sus superiores, robando dinero de la caja del cuerpo militar y reteniendo armas de guerra. El juicio a los amotinados se realizó con cierta rapidez y los sentenciados fueron enviados a la penitenciaría de Lima, en un acto ceremonioso el 19 de febrero del año siguiente en el que se le leyó públicamente la sentencia. A este evento asistió «considerable gentío», del cual se observó que «todos los ánimos se impresionaron, compadeciendo á las víctimas de su propio delito [aunque] el fallo de la ley fué acatado respetuosamente, sin que se alzara una sola voz a favor de los culpables» (Anales 1907, t. III: 230-231).

Respecto al desafío del fortalecimiento del Estado frente a la población civil, el Código cumplió su cuota, procesando y reprimiendo los delitos que atentaban contra el ejercicio de la violencia legítima de los agentes del Estado. Una táctica empleada para este fin, como hemos visto, fue extender la jurisdicción de guerra a delitos relacionados con el ejercicio de la violencia a los actores civiles que anteriormente se ventilaban en el fuero ordinario. Contabilizando los procesos que se iniciaron en el fuero castrense, incluyendo los que se sobreseyeron (archivaron), los que culminaron en sentencias de primera instancia (en Lima) y los que se iniciaron en otros departamentos, el número de procesos en los que se inculpaban a civiles alcanzó el elevado número de 336 (sobre un total de 967). Si se considera que en varios de estos procesos fueron encausados más de un individuo, la cifra de personas sometidas a este fuero debió ser aún mayor.²⁶⁷

²⁶⁷ Las estadísticas judiciales no consignan en la mayoría de casos la cantidad de personas sometidas a proceso judicial.

Cuadro 13: Procesos judiciales del fuero militar a encausados de origen civil (1899-1906)

Año	Juicios sentenciados en la Zona militar de Lima		Procesos iniciados en otros departamentos (1)		Juicios sobreseídos en la Zona Militar de Lima (2)	
	Total	Encausados civiles	Total	Encausados civiles	Total	Encausados civiles
1899	44	6	14	8	45	22
1900	54	16	9	3	60	31
1901	50	8	4	0	41	15
1902	41	7	31	10	42	15
1903	37	5	33	19	55	29
1904	69	17	21	3	30	13
1905	60	11	31	9	87	45
1906	22	3	45	16	42	25
Total	377	73	188	68	402	195

Fuente: Anales de Justicia Militar: Tomo I (1899-1900); II(1901-1902); III (1903-1904); IV (1905-1906); V. Cuadro de elaboración propia.

- (1) Las estadísticas de los departamentos fueron publicadas de manera incompleta. Sólo se incorporaron los departamentos de Junín y Ancash (años: 1899), Tacna (1901-1906), Cuzco (1899-1900, 1902-1906) y Apurímac (1899-1906). Los datos de estos departamentos no se encuentran contabilizados en los procesos ventilados en la Zona Militar de Lima.
- (2) El carácter de sobreseído indica la condición de los procesos judiciales en los que el tribunal desiste en llevarlos adelante por diversos causales.

Aunque la cifra de los juicios donde los encausados era civiles fue siempre inferior a la de su similar de militares no deja de ser significativo su número. En los años mostrados no se puede observar tendencia alguna que manifieste su aumento o disminución. Sin embargo, de ellos, el número más significativo de procesos estuvo dirigido a penalizar los ataques contra los mecanismos coactivos del Estado, es decir, la fuerza armada, sean militares u oficiales de policía. De los 73 juicios con sentencia de primera instancia en la Zona Militar de Lima, 61 correspondían a esta causal. Los encausados por lo general pertenecían «a las clases más bajas de la Sociedad» (Anales 1908, t. IV: 228), siendo los procesados 27 hombres de «raza blanca» y 22 «india», los cuales se dedicaban a oficios diversos, la mayoría, propios de los grupos no privilegiados, como jornaleros, agricultores, artesanos, vaporinos, entre otros (ver anexo N.º 2.). En 1902, el Jefe de la zona Lima, César Canevaro, afirmaba que el Código ayudaba a afirmar la autoridad del Estado frente a la población civil, pues este: «ha reducido á límites muy estrechos los ataques á mano

armada á la fuerza pública; y él, es y será, medio eficazísimo [sic] para la conservación del orden interno que tanto ha de menester la República.» (Anales 1907, t. II: 296). Tres años más tarde le mismo Canevaro reafirmaba esta opinión: «Han disminuido también, considerablemente, los ataques á la fuerza pública. Cosa corriente era antes [...] que los custodios del orden público sufrieran agresiones en el cumplimiento del deber» (Anales 1929, t. V: 241). Y aunque de los 218 procesos iniciados en el período estudiado, en la mayoría de ellos la justicia militar sobreseyó, sentenciándose solo 61, debió ser impactante para los paisanos encausados ser sometidos a la justicia de una institución de la que se tenía pavor.

Cuadro 14: Delitos de los procesos judiciales del fuero militar a encausados de origen civil (1899-1906)

Delitos	Sentenciado en la Zona Militar de Lima	Procesos iniciados en otros departamentos (1)	Sobreseídos en la Zona Militar de Lima (civiles)	Total
Ataque a fuerza armada	61	18	139	218
Rebelión	0	9	29	38
Tenencia de armas del Estado	0	15	0	15
Salteamiento	4	6	9	19
Otros	7	20	18	45
Total	73	68	195	336

Fuente: Anales de Justicia Militar: Tomo I (1899-1900); II(1901-1902); III (1903-1904); IV (1905-1906); V. Cuadro de elaboración propia.

(1) Las estadísticas de los departamentos fueron publicadas de manera incompleta. Solo se incorporaron los departamentos de Junín y Ancash (años: 1899), Tacna (1901-1906), Cuzco (1899-1900, 1902-1906) y Apurímac (1899-1906). Los datos de estos departamentos no se encuentran contabilizados en los procesos ventilados en la Zona Militar de Lima.

Cabe añadir el principal logro del Código radicaba en la eficacia política del sistema de justicia militar, demostrada con toda claridad desde los primeros meses que entró en vigencia norma. Desde el Parlamento a los periódicos, a pesar de la fuerte crítica que tuvo desde su promulgación, se consideró que era un instrumento eficiente para combatir los movimientos revolucionarios contra el Gobierno. Por ejemplo, en la legislatura de 1899, al interior de la Cámara de Diputados se estaba promoviendo un proyecto para suspender su vigencia, en los mismos momentos en los que se

producía una notable insurrección acaudillada por Augusto Durand, en la que estaban implicados Andrés A. Cáceres y Guillermo Billinghurst, situación que motivaría al disputado E. Espinoza a afirmar «importuno me parece el momento para tomar esta medida, porque francamente, el país está conflagrado, hay movimientos por todas partes ¿y se aprovechará esta oportunidad para suspender el ejercicio de la ley de reprensión militar?» (Cámara de Diputados 1899: 528). Por su parte, en *El Comercio* también se reconocía esta eficacia política antirrevolucionaria: «ese código no subsistiría hoy, sino fuera por el temor que hubo, pero que ya ha desaparecido, de que los movimientos subversivos contra el actual orden de cosas se convirtieran en una revolución.»²⁶⁸

Ambas opiniones no deben sorprender, ya que el Código logró iniciar, solo en la zona de Lima en 1899, veintinueve juicios por rebelión y nueve por conspiración, de los cuales en 29 de ellos el procesado era de condición civil. Entre los encausados figuraban nombres de notables políticos y militares como Augusto Durand, Andrés A. Cáceres, Guillermo Billinghurst, Ricardo L. Flores, Wenceslao Valera, Germán Leguía y Martínez, entre otros (Anales 1907, t. I: 51-64 y 80). Las disposiciones del Código permitieron encausar por delitos políticos incluso a altas autoridades políticas, como Durand y Billinghurst (ambos congresistas) y altos jefes militares, como Cáceres (general por entonces), incluso si no se encontraran dentro del país o no habidos por la justicia, pues el Código reconocía el procedimiento de juicio «con reo ausente». En ese sentido, a diferencia del fuero ordinario, no era necesario capturar a los rebeldes ni que se presentasen al proceso, aun estando ellos en la clandestinidad, quedaban sentenciados militarmente, e inhabilitados políticamente por las consecuencias civiles que entrañaba una sentencia por rebelión en el fuero militar. A pesar de que el gobierno de López de Romaña promovió una ley de amnistía para todos los implicados en el movimiento revolucionario de 1899, la eficacia del Código en este sentido fue notable, y su implementación debe ser considerada, junto con la profesionalización de los militares y el control del uso de armas de guerra (aspecto tratado en el capítulo 7) como uno de los factores que permitió al país la estabilidad política necesaria para el desarrollo del Estado y de las actividades productivas que gozó por casi veinte años en que no se produjo un movimiento insurreccional de las características de las revoluciones decimonónicas.

²⁶⁸*El Comercio*. Lima, 13 de octubre de 1899, edición de la mañana.

Capítulo 6. La Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898

[E]l servicio obligatorio corresponde á la sublime idea que, en tiempo de guerra nacional, desaparecen las diferencias sociales y que todos, desde el más humilde hasta el más potente ciudadano, deben unirse en un trabajo común para defender la patria. El objeto primordial de la ley debe ser pues preparar para el tiempo de movilización la reunión de todos los ciudadanos aptos para el servicio y asegurar la instrucción militar de la mayor parte de ellos; su objeto secundario es proporcionar cada año á los cuerpos del ejército las pocas altas que necesitan para tener completos sus efectivos en tiempo de paz. (Clément 1900: 38)

Un asunto medular para la constitución de cualquier fuerza armada resulta ser la manera por la cual los jefes militares logran «enrolar» a los hombres para el ejercicio de las armas. Ya sea que voluntariamente las comunidades humanas consientan derivar parte de la reserva de sus hombres hábiles para el trabajo o sea que dicha derivación de energía sea impuesta por la fuerza, los ejércitos están compuestos por hombres que puedan empuñar las armas y se encuentren dispuestos a morir en el combate. Es así que las formas por las cuales se formaron los ejércitos en la historia de Occidente han variado en función del grado de negociación o de fuerza por las cuales las comunidades han ofrecido sus hombres para los ejércitos que levantaban los centros de poder político.²⁶⁹

Hasta las transformaciones propias de la revolución industrial, las sociedades han sido predominantemente rurales, condición importante para comprender las relaciones de ellas, con las demandas de hombres del poder político. En este tipo de

²⁶⁹El fortalecimiento de los Estados centralizados europeos desde el siglo XVI estuvo vinculado, crecientemente, en su capacidad organizativa propia para construir una maquinaria militar que permitiera a los monarcas subordinar a sus rivales políticos internos y competir con sus enemigos externos. Los Estados de Antiguo Régimen desarrollaron diferentes mecanismos para obtener hombres para sus ejércitos, desde métodos voluntarios como el «enganche» (pago de dinero para enrolarse), enrolamiento de soldados enemigos derrotados, hasta compulsivos como el reclutamiento de «desechos sociales» —delincuentes, desocupados u hombres sin amos— o la conscripción sobre poblaciones locales rurales y urbanas (Parker 2002: 76-84, Mc Neill 1988: 150-151).

sociedades, con poblaciones muy inferiores a las sociedades industriales, la derivación de energía humana hacia actividades no productivas resultaba ser un asunto sensible y de la mayor importancia. La pérdida de un campesino, temporal o permanentemente, significaba una reducción de las capacidades de reproducción. Resulta comprensible, por ello, que dichas comunidades intentasen negociar con los poderes, en la medida de lo posible, la cantidad, calidad y el tiempo de la reserva humana cedida²⁷⁰. Mientras la población europea no experimentó un marcado crecimiento en la segunda mitad del siglo XVIII, generando un excedente de mano de obra empleable, los ejércitos no ofrecieron grandes alicientes a las poblaciones para incorporarse a sus filas, salvo en coyunturas de depresión económica, en las que la vida del soldado podía constituirse en una forma posible para escapar del hambre y un alivio para las unidades domésticas. Por su parte, los Estados, especialmente después de la llamada revolución militar desde mediados del siglo XVI, aumentarían sus exigencias extractivas, en tanto que los ejércitos europeos crecían para responder a los retos tácticos y estratégicos que impuso tal revolución²⁷¹. No obstante, solo será a partir de la Revolución francesa y la famosa *levée en masse*, de 1793, que el peso de la tributación de hombres para las maquinarias bélicas europeas pesaría íntegramente en las poblaciones nacionales, al tanto que los ejércitos crecieron en tamaño a una escala nunca vista hasta ese entonces, teniendo como máxima expresión la organización del servicio militar universal (Cfr. Mc Neil 1988: cap. 6).

6.1. Antecedentes a la ley del servicio militar de 1898

A diferencia de los Estados europeos, cuando el Perú nació como República no contaba con una larga experiencia militar. A pesar de las temidas incursiones de los piratas, el Virreinato peruano careció de verdaderas amenazas bélicas que decidiera a los monarcas españoles la creación de fuerzas militares de consideración en estas latitudes, por lo que no fue sino hasta mediados del siglo XVIII que se estableció,

²⁷⁰ A excepción de la igualitaria Suecia, los monarcas europeos buscaron obviar, hasta fines del siglo XVIII, el hacer reposar sobre sus poblaciones el peso total del contingente de sus ejércitos. En un acuerdo tácito, las comunidades locales podían aceptar la conscripción de sus «desechos sociales»; por el contrario, se mostraban reacias a prestar su reserva de hombres útiles, siendo las milicias hartamente impopulares por la población y consideradas por los reyes como un último recurso (Cfr. Parker 2002: 83-84).

²⁷¹ Para observar una interesante reflexión sobre el concepto de *revolución militar*, puede consultarse Parker (2002: cap. 1).

con las Reformas Borbónicas, un ejército permanente, al mismo tiempo que se organizó militarmente la población del virreinato en milicias, convocando a los vasallos a la defensa de las posesiones de su Majestad. En este esquema, mientras el ejército permanente estuvo compuesto de cuerpos venidos de la Península, los cuales fueron sostenidos y armados por las arcas reales y respondía en gran medida a los criterios burocráticos de la época, las milicias estaban diseñadas para sostenerse y armarse con los recursos de los propios vasallos (Cfr. Luqui-Lagleyza 2006: 19-31).

Las milicias borbónicas fueron el primer intento de constituir una fuerza armada de importantes dimensiones en el virreinato. Dadas las limitaciones financieras y organizativas de la burocracia real, sin la capacidad de constituir un ejército permanente de acuerdo a las dimensiones de las posesiones hispánicas, este proyecto se asentó sobre la estructura de una sociedad jerárquica, multiétnica y corporativa. En la mayoría de casos, su oficialidad estuvo compuesta por la nobleza, las corporaciones y los notables locales del virreinato (hacendados, comerciantes y caciques), a quienes les correspondía sufragar los gastos de la organización de los cuerpos; mientras que la tropa fue integrada por sus dependientes y voluntarios. Al igual que otras formas por las que se ejercía el poder en América, las milicias fueron expresión del tipo de gobierno indirecto, esto es, un tipo de ejercicio del poder por el cual el Estado no realiza sus funciones directamente, a través de una burocracia organizada y rentada por aquel, sino a través de representantes sociales que negocian ventajas por su lealtad al mismo. Resulta interesante considerar que en este esquema de gobierno existía un amplio margen de negociación entre el poder central y sus intermediarios para la cesión de los recursos humanos y materiales, en tanto que aquel no puede ejercer la coerción suficiente para extraer la reserva humana en función de sus intereses políticos y militares. En esta cesión, por un lado, la Corona otorgaba privilegios y recompensas a sus fieles vasallos (los jefes y oficiales), mientras que, por otro lado, las comunidades locales reclamaban la compensación en función de los recursos cedidos (Cfr. Carcelén y Maldonado 2011, Sánchez 2007).

La coyuntura de las guerras de independencia fue un periodo en el que la *pax hispánica* abrió una etapa que marcaría la experiencia del Perú respecto a la guerra. La dinámica de este enfrentamiento arrastraría en su vorágine a diversos actores sociales, familiarizándolos con las acciones militares y exigiría la incorporación de

hombres a los ejércitos enfrentados, los cuales seguirían el mismo esquema esbozado en el periodo borbónico, a saber: un ejército regular, complementado por fuerzas milicianas; a estas fuerzas se añadirían en este contexto particular grupos montoneros, lideradas también por notables locales. Tanto en el Ejército realista, como en los de los patriotas, se combinarían ejércitos de línea, milicias y montoneras, conjuntos heterogéneos de fuerzas beligerantes que se constituirían en legado a una dinámica político-militar decimonónica que acabaría en 1895.

Como hemos visto en el capítulo 1, independizado el Perú del dominio castellano, cupo al nuevo Estado constituir sus propias fuerzas armadas. Instituido este según el tipo de gobierno republicano, correspondía a los miembros de la comunidad política, como individuos-ciudadanos, prestar su fuerza para la defensa de los intereses de la Patria. Bajo este criterio, las flamantes fuerzas armadas republicanas debían alimentar sus cuerpos con la reserva masculina del país. Sin embargo, el principio republicano del cumplimiento del deber hacia el Estado colisionaría con una realidad que hizo errática la derivación de aquella reserva hacia los diversos ejércitos decimonónicos peruanos. Sin el poder simbólico que legitimaba la figura del Rey y los recursos materiales o simbólicos que este gozaba, los caudillos peruanos buscaron constituir sus fuerzas a través de la violencia y la negociación. La leva o «reclutamiento», muchas veces criticada en la prensa decimonónica, fue una práctica común en las zonas urbanas y rurales, permitiendo la extracción de hombres por la fuerza para la formación de los ejércitos permanentes. Fue una práctica común de los gobiernos decimonónicos, más allá de las prescripciones de las leyes de servicio militar, el delegar en los jefes de cuerpos la responsabilidad de proveerse de altas a sus unidades militares para mantener su número reglamentario. No era una institución estatal ad hoc la que se encargaba de incorporar a nuevos hombres a los Ejército, sino los cuerpos mismos, a través de la comisión de patrullas²⁷². Siendo la mayoría de la población peruana rural e indígena, resultaba evidente que el grueso de los contingentes de los ejércitos decimonónicos tuviera tal condición. Sería común

²⁷²Por ejemplo, en *El Comercio* se denunciaba que «comisiones levadoras ha[bía]n salido á la pesca» de hombres el 4 de marzo de 1860, acto por el cual «se convierte á los ciudadanos en piezas de caza» (*El Comercio*. Lima, 5 de marzo de 1860). Para otros casos de denuncias de la prensa, se puede leer *El Comercio*. Lima, 12 de abril y 7 de junio de 1860; 6 de noviembre de 1861; y, 26 de junio de 1864.

leer en las crónicas de la época, las formas por las que se «sentaba plaza» en las zonas urbanas y rurales, las cuales adoptaban la forma de una «cacería de hombres».²⁷³

Esta práctica mostraba la actitud renuente de las poblaciones campesinas indígenas para derivar su fuerza de trabajo hacia actividades no orientadas a la reproducción de la comunidad. Ceder hombres para el ejército permanente implicaba su pérdida, en el mejor de los casos, temporal (sin que ello implicara una delimitación taxativa y real del tiempo de servicio) y, en el peor de los casos, la pérdida total de un hombre en edad productiva. Ello no implicaba que el reclutamiento fuera una práctica totalmente rural, diversos casos mostraban que las personas de menores ingresos y sin la protección de un intermediario ante el Estado eran también levados²⁷⁴. Por este mecanismo, tanto en las zonas rurales como en las urbanas, los cuerpos militares extraían discontinuamente hombres, como individuos, aplicando una coerción localizada, según los requerimientos de altas que pidieran los comandantes.

Distinta situación se producía en los periodos de enfrentamiento militar entre caudillos. Durante estos enfrentamientos, las poblaciones rurales, los notables locales o las corporaciones urbanas (como los artesanos) cedían voluntaria y temporalmente sus hombres útiles a cambio de recompensas, formándose alianzas clientelares. Como ya hemos visto al inicio de la tesis, las guardias nacionales –nombre que asumieron las milicias en el periodo republicano– y las montoneras formaban parte de los ejércitos caudillescos, y era a través de este medio que se incorporaban a la dinámica política. En el caso de las guardias nacionales²⁷⁵, estas eran una forma de servicio militar, con prescripciones legales al igual que en el ejército permanente; sin embargo, su periodo de prestación era esporádico y limitado en el tiempo, por lo que no implicaba una cesión completa de la fuerza útil, como en el caso de los hombres levados en el Ejército. Los notables locales, como los hacendados, o las organizaciones gremiales en las ciudades podían organizar cuerpos de las guardias

²⁷³ *El Comercio*. Lima, 3 de julio de 1861; 18 de enero de 1868; 9 de abril de 1872.

²⁷⁴ Puede verse, por ejemplo, el artículo: “Carta de indemnidad para la leva”. *El Comercio*. Lima, 6 de noviembre de 1861.

²⁷⁵ Con el nombre de guardias nacionales se conocían las milicias cívicas formadas por los ciudadanos armados que no formaban parte del ejército permanente. Como milicianos, no se encontraban acuartelados y recibían una esporádica instrucción militar. En teoría, sus cuerpos prestaban servicio por llamamiento del Gobierno, en contextos de inseguridad interna o de guerra exterior.

nacionales e incorporarlas clientelísticamente en las estrategias políticas de los caudillos a cambio de beneficios. Por su parte, las montoneras formadas por bandidos en la costa o por terratenientes o comunidades indígenas en la sierra, de manera similar, podían prestar su fuerza voluntariamente ante los caudillos, a cambio de recompensas de diferente tipo.

Ante la posibilidad de una contraprestación directa, estos grupos podían derivar voluntariamente parte de sus hombres en contextos particulares, en tanto que la perspectiva de esa prestación era limitada en el tiempo, es decir, era efectiva mientras durara el combate de los caudillos. Esto resultaba particularmente cierto para las comunidades indígenas, las cuales cedían parte de su reserva humana de manera corporativa para alcanzar fines también corporativos; en los casos de las comunidades indígenas resultaba fundamental la exención temporal del tributo o la contribución personal.²⁷⁶ En ese sentido, la forma de alistamiento de tropas, es decir, el acceso a la reserva humana para el servicio de las armas seguía, en gran medida, el modelo de gobierno indirecto, esbozado en el tardío periodo colonial. Por un lado, el débil Estado peruano no tenía las capacidades organizativas y coercitivas para asegurar el cumplimiento de los deberes ciudadanos que imponían las leyes republicanas en la población, sobre todo si se toma en cuenta las dimensiones del territorio peruano decimonónico y el carácter rural y de asentamiento disperso de la mayoría de la población. Por otro lado, los diferentes grupos sociales veían como odiosa la prestación del servicio de la armas, a menos que ellos negociaran condiciones favorables, lo que implicaba afirmar que era reducido el compromiso ciudadano. Aunque las diferentes leyes de conscripción instituyeran el servicio de las armas como un deber ciudadano y el discurso patriótico-republicano ensalzara la figura del sacrificio en aras de la Patria (Cfr. Velásquez 2010: cap. 5), la gran mayoría de los habitantes del país estaban lejos de aprobar otorgar una cuota de sangre por el cumplimiento estricto del deber. Ello no implica decir que no hubiera actos de sincero patriotismo que se expresaban en el alistamiento voluntario, especialmente en momentos extremos como guerras con otros países, siendo la

²⁷⁶ Archivo Parlamentario. Año 1827: Asuntos Reservados para el Congreso N.º 52, Ayacucho: “Expediente promovido por algunos pueblos de la Provincia de Parinacochas sobre la Exempcion de contribución”, fol. 3; Año 1828: Asuntos remitidos a Comisión. N.º 7 62 (a): “Solicitud de varios indígenas de la provincia de Quipiscanchi pidiendo exesion de diezmo”.

Guerra con España (1866) y la Guerra del Pacífico (1879-1883) los ejemplos paradigmáticos.

Para el Estado o su representación, los jefes militares, la cesión clientelar y esporádica de hombres era una forma poco estable, predecible y fiable para componer sus fuerzas. Un ejército de considerables dimensiones no podía constituirse sino por un tiempo limitado. Incluso, en el mismo ejército permanente levado, la desertión era siempre una posibilidad que podía diezmar las filas antes o durante un combate, por lo que los soldados debían ser vigilados para evitar su fuga o marcados para identificarlos en el caso que aquello ocurriera. Es por ello que durante el gobierno de Ramón Castilla estas prácticas buscaron ser modificadas a partir de la institución del «enganche»²⁷⁷, a fin de conseguir de manera regular altas en el ejército permanente sin recurrir al reclutamiento y la negociación; sin embargo, este mecanismo resultaba oneroso para un Estado que, a pesar de los recursos que ofreció el guano por veinte años, no podía solventar las «primas» que se pagaban a los conscriptos que contrataban con el Estado para sentar plaza. Por sus altos costos y la resistencia de la población, el «enganche» nunca pudo reemplazar el reclutamiento hasta fines del siglo XIX.

Una nueva ley para el servicio en el Ejército se promulgó en 1872, durante el gobierno del civil Manuel Pardo y Lavalle; como hemos visto en el capítulo 1, ordenaba el alistamiento general de los ciudadanos para el remplazo de los licenciados, así como las bajas del ejército permanente. Según esta norma, el tiempo de servicio activo era de tres años, al término de los cuales el conscripto pasaba a la reserva por dos años adicionales, debiendo cumplirlos en la capital de la República. El procedimiento para el alistamiento de los conscriptos fue conferido en su integridad a las comunidades locales; pues, solicitado por el gobierno central un número específico de conscriptos por provincia, correspondía a sus municipalidades la distribución del contingente entre los distritos de la jurisdicción, mientras que al interior de estos distritos la Junta Municipal debía realizarse un sorteo entre la población hábil para el servicio (entre los 21 y 25 años) para llenar el número

²⁷⁷El «enganche» era un contrato por el cual los futuros soldados sentaban plaza por un periodo de tiempo determinado, a cambio de una cantidad de dinero. Una parte del emolumento era entregado de manera inmediata a la firma del contrato, mientras que el restante era abonado cuando se culminaba el tiempo de servicio.

establecido. La responsabilidad de estas Juntas culminaba al entregar los conscriptos a los subprefectos en la capital de la provincia (autoridades del gobierno central), aunque ello no impedía que el síndico procurador pudiera reclamar por los alistados retenidos en el Ejército a pesar de haber concluido su tiempo de servicio (Ley del 20 de noviembre de 1872).

Como hemos visto anteriormente, esta Ley estuvo lejos de cumplir sus objetivos, teniendo una limitada ejecución incluso durante el gobierno del mismo Pardo. Las bajas del Ejército en cierta medida fueron remplazadas a través del «enganche»²⁷⁸ y, ante la situación de inestabilidad política generada por la oposición, en varias provincias del país se recurrió al viejo y conocido método del reclutamiento. Respecto a ello, el último trabajo de Ulrich Mücke nos muestra la imposibilidad del presidente Pardo de romper con las prácticas de reclutamiento verificadas en los departamentos serranos, donde los prefectos gozaban de una considerable autonomía frente a los requerimientos del poder central. Por ejemplo, en 1873, el Presidente ordenó al prefecto de Puno, Miguel San Román, el alistamiento de soldados para completar el Batallón Callao, enviado a su jurisdicción con dicho fin. Sin embargo, aunque el Prefecto reportaba positivamente que «[e]l Batallón va creciendo a gran prisa y lo mejor es que con el nombre de voluntarios y previa firma de contrato»; en realidad, como menciona Mücke, «el reclutamiento parecía una cacería de criminales, y los supuestos voluntarios eran encadenados y vigilados mientras eran llevados a los cuarteles» (2010: 276). Este no fue un hecho circunscrito a Puno; un caso similar se produjo en el Cusco ese mismo año, donde al ser reclutados diez soldados, la población afectada terminó por destruir la casa del Subprefecto (Cfr. Mücke 2010: 277).

El Ministro de Guerra del gobierno de Remigio Morales Bermúdez hacía un balance negativo de la aplicación de esta Ley, en 1891, mostrando la permanencia de los problemas para llenar las bajas del Ejército que la misma norma buscaba eliminar, es decir, el reclutamiento y el «enganche»:

Después de muchas tentativas y de vencer grandes resistencias se sancionó por la ley de 7 de Noviembre de 1872 [el sistema de conscripción]. Conocidos son los

²⁷⁸ Cfr. Pardo, Manuel. “Mensaje como Presidente de la República al Congreso ordinario en el año 1876” (citado en Mc Evoy 2004: 468).

deplorables sucesos que impidieron se cumpliera formalmente, dejándola escrita y resucitando el régimen del reclutamiento y de los enganches, que tantas protestas arrancaron al pueblo y tan funestos resultados ocasionaron en el organismo interior de la República.

Por mucho que se haya querido palear las medidas violentas y las exacciones cometidas para llenar por tales medios las bajas del Ejército, el hecho es que se producían con irritante y desconsoladora verdad; arrancábase de sus hogares a ciudadanos ineptos para el servicio de las armas. (MGM 1891: IV-V)

Resulta probable que Pardo no depositara sus principales esperanzas en las fuerzas del Ejército, considerándolo como un mal necesario, muy a tono con la crítica liberal de la época. Por el contrario, preocupaciones de orden político lo hacían inclinarse más por la formación de cuerpos de la Guardia Nacional, dirigidos por conspicuos miembros del Partido Civil, quienes le aseguraban la lealtad de estas fuerzas y la subordinación de los sectores populares (Cfr. Mc Evoy 1997: 156-159). Sin embargo, ello no imposibilitó a Pardo el aprovechamiento del Ejército como un medio de «civilización» (léase como occidentalización) de las poblaciones campesinas indígenas, instituyendo la práctica de enseñar el castellano, la lectura y escritura a unos soldados predominantemente indígenas (Ley del 20 de noviembre de 1872, Artículo 20°).

Las secuelas de la Guerra del Pacífico modificaron sustancialmente, como en otros aspectos militares, las consideraciones sobre la conscripción militar. La derrota ante Chile y la situación de postración e indefensión resultante mostraron los peligros de la ausencia de una política nacional orientada a la defensa nacional. Es por ello que durante los gobiernos de Cáceres y de Morales Bermúdez hubo una creciente y genuina preocupación por la reforma del Ejército, dándole especial atención a los problemas de la conscripción. Los jefes militares congregados alrededor del caudillo de la Breña desarrollaron un discurso favorable a la militarización del país, en contracorriente a las críticas liberales de la preguerra que consideraban el ejército permanente como una institución gravosa para el país. Así, en uno de los artículos de la *Revista Militar y Naval*, órgano de publicidad del Centro Militar, se podía leer la siguiente convocatoria al país: «Después de los desastres experimentados en la última guerra nacional [...] Trabajemos pues en este sentido [prepararse para la

guerra] y pongamos los medios para que echen raíces que desarrollen en todas las clases sociales las virtudes militares» (Año I, N.º 3, 1888: 33).

Concordante con este discurso, durante el gobierno de Andrés A. Cáceres se promulgó, en 1887, una ley que reformaba la Guardia Nacional, transformándola en la reserva del ejército permanente. Habiendo sido esta una institución que permitió la incorporación de la población en las guerras civiles y exteriores decimonónicas, convertida luego por Manuel Pardo en un contrapeso civil para contener los apetitos de los caudillos militares, la reforma que implementaba el gobierno de Cáceres significó un cambio sustancial del carácter de esta institución, concibiéndola como una fuente de conscriptos cuando las fuerzas del Ejército los requiriesen y como unidades tácticas plenas integradas al Ejército nacional ante el contexto de una guerra internacional. La Ley prescribía que todos los ciudadanos que no estuvieran exceptuados por cláusulas taxativas de la misma norma y que no sirvieran en el ejército permanente debían inscribirse en un registro provincial ad hoc. Según la norma, en cada departamento debía establecerse una Asamblea de la Guardia Nacional, compuesta por oficiales del Ejército, encargados de efectuar el registro de la población apta para el servicio, organizar los cuerpos (especialmente batallones) e instruirlos periódicamente en el arte de la guerra (Ley del 15 de octubre de 1887).

Si bien la ley buscaba tener alcances universales, incorporando al servicio a la totalidad de la población apta, la Ley de la Guardia Nacional estaba diseñada para asentarse sobre prácticas de sociabilidad preexistentes. En primer lugar, las compañías de los batallones fueron organizados teniendo en cuenta la pertenencia de los «ciudadanos» a sus lugares de residencia: cada una de las poblaciones de distritos, caseríos o haciendas en edad de servir debían ser incorporados en su conjunto en una compañía y, en el caso que no fuesen suficientes para completar su número reglamentario, debían ser integradas a otras poblaciones próximas para alcanzar la cifra esperada.²⁷⁹ En ese sentido, esta institución no rompía las solidaridades comunales o locales de las poblaciones, sino por el contrario contaba con ellas para la constitución de los cuerpos milicianos. En segundo lugar, la ley mantuvo la

²⁷⁹El inspector general de la Guardia Nacional, Justiniano Borgoño, informaba al Ministro de Guerra, en 1888, que se habían tomado estas providencias «facilitándose así su instrucción y consultando que no quede sin formar parte de la Guardia Nacional activa ningún distrito ó caserío por aislado y escaso de habitantes que sea» (MGM 1888, Anexo 19 B: 8).

práctica de erigir a los notables locales como jefes y oficiales de los cuerpos de la Guardia Nacional. Mientras que a los oficiales del Ejército les correspondía la organización de las asambleas departamentales, el registro de la población, la constitución de los cuerpos y su instrucción, la conducción recaía específicamente en las personas notables de los distritos y provincias, trasplantando así las jerarquías sociales al interior de los cuerpos.²⁸⁰

El funcionamiento de esta institución y sus logros son poco claros. Por un lado, las cifras de inscritos en los registros de la institución fueron verdaderamente importantes. Para 1891, el Ministro de Guerra reportaba al Congreso que los inscritos registrados alcanzaban la cifra de 72 561 ciudadanos, mientras que, un año después, este guarismo se había elevado a 76 711. Asimismo, para este último año, se informaba haberse formado once asambleas departamentales que supervisaban la instrucción en el papel de 151 batallones de infantería, 17 regimientos de caballería y 2 de artillería (MGM 1891: Cuadro *Guardia Nacional de la República* Cuadro s/n; 1892: 8). Estas augurantes cifras contrastaban con las continuas demandas oficiales para el aumento de un presupuesto destinado a las funciones de esta institución. Desde 1888, el inspector de la Guardia Nacional, el coronel Justiniano Borgoño, solicitaba el incremento del presupuesto, considerando que los 80 mil soles anuales destinados era insuficiente para el pago de oficiales instructores de alta graduación, que por su experiencia eran idóneos para la organización e instrucción de los milicianos; por el contrario, con aquella cifra solo se había podido contratar oficiales subalternos, a pesar de sus limitados conocimientos para la instrucción (MGM 1888: 6). Asimismo, las limitaciones presupuestarias hacían informar al Ministro, en 1892, que no se contaba con el personal de instrucción militar suficiente para todos los cuerpos del país, habiendo sido necesario asignar instructores para más de una provincia, «resintiéndose la instrucción de los cuerpos organizados en las localidades de su jurisdicción territorial. Estos inconvenientes se reagran con la falta de la movilidad necesaria para el mejor desempeño de su contenido» (MGM 1892: 7; también MGM: 1893: XIII).

²⁸⁰ La Ley establecía una tajante división de los oficiales de la Guardia Nacional respecto a los del Ejército «Los Jefes y Oficiales de la Guardia nacional no podrán ser reconocidos por ningún motivo ni en ningún tiempo como de ejército» (Artículo 8º). Muestra de la importancia de los notables locales en la Guardia Nacional la dio el Ministro de Guerra, al saludar la participación de los varios parlamentarios como oficiales de la Guardia Nacional en su discurso ante el Congreso en 1896 (MGM 1893: XIII).

Hacían eco de estas demandas presupuestarias los escritores de la *Revista Militar y Naval*, en febrero de 1889. Enfilaban sus baterías contra la exigua remuneración de los oficiales instructores, quejándose amargamente de la incomprensión de la importancia de la misión de la Guardia Nacional por parte de las cámaras legislativas. En su opinión, los políticos no habían aprendido las lecciones de la derrota, siendo «más cautos y previsores», desterrando «nuestra imprevisión y absoluto desapercibimiento» que habían sido la causa del desastre militar. En esa dirección se había reformado la Guardia Nacional, buscando con ello «la “militarización” sistemada de la República». En su razonamiento, la exigua remuneración de los oficiales instructores era insuficiente para guardar el «decoro» militar, desalentado a los jefes y oficiales a asumir dicha responsabilidad.²⁸¹ Un año después, similares críticas contra las cámaras legislativas se hacían en la misma revista, indicando que aquel presupuesto mostraba una declarada hostilidad hacia la carrera militar y las guardias nacionales, «hiriendo así de muerte a la Nación misma»²⁸².

Las observaciones de los actores de la época indican que los efectos de esta Ley fue también limitada. Sobre su efectividad, no faltaron, algunos años después, opiniones adversas, como las de varios editoriales de *El Comercio*, en 1898, en los que se manifestaba que la institución había fracasado en el país por la falta de empuje de los gobiernos del Segundo Militarismo²⁸³ y por los abusos cometidos por las autoridades encargados de ejecutarla²⁸⁴. A pesar de estas consideraciones negativas, se formaron cuerpos de la Guardia Nacional para contener la revolución de 1894-1895 (Dulanto 1947: 413), mostrando que podían formarse cuerpos milicianos por lo menos en las regiones más leales al cacerismo. Así también, la decisión del gobierno pierolista de reactivar esta Ley para aumentar los efectivos, aunque momentáneamente —como veremos más adelante— muestra que esta norma no había sido un total fracaso.

²⁸¹*Revista Militar y Naval*. Año I, N.º 13. Lima, 15 de setiembre de 1888, pp. 271, 273-275.

²⁸²*Revista Militar y Naval*. Año II, N.º 23. Lima, 15 de febrero de 1889, pp. 507-508.

²⁸³*El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1898, edición de la tarde.

²⁸⁴*El Comercio*. Lima, 14 de marzo de 1898, edición de la tarde.

Ahora bien, los gobiernos del Segundo Militarismo consideraron también que la militarización del país no solo cumplía funciones estrictamente bélicas; al contrario, eran conscientes que la incorporación de las poblaciones indígenas al Ejército resultaba un instrumento de «civilización». Muy a tono con el indigenismo de la posguerra (Toche 2008: 38), no escapó a los oficiales peruanos de ese entonces el plantear –como había sido concebido por Manuel Pardo en la Ley de 1872– que los indígenas podían obtener, al interior de los cuerpos del Ejército, la instrucción civil elemental que no habían recibido en sus poblaciones, haciéndolos así ciudadanos útiles para la Nación:

El Ejército [es] un medio eficaz de civilización tal vez el único para las masas peruanas. Poderoso elemento de civilización difunde la luz de la instrucción entre los indígenas, devolviendo al cabo de algún tiempo [...] á individuos que recibe en bruto; millares son los que con el trato continuo de camaradas ya civilizados, cambio de lugares, aprendizaje de lengua castellana y los rudimentos de la Enseñanza Elemental dada en los cuarteles, han despertado del letargo en que la más supina ignorancia los postrara [...] transformados en miembros útiles para la República. (*Revista Militar y Naval*, Año IV, N.º 87, 1891: 2027)

Esta propuesta no era privativa de los militares en el Gobierno, sino que era compartida por algunos miembros de las élites civiles, como el propio Nicolás de Piérola, quien escribía en la Declaración de Principios del Partido Demócrata, además de su visión favorable a la militarización de la sociedad peruana, a través del servicio militar obligatorio, su convicción de que el ingreso de los indígenas al Ejército, constituía un medio de «civilización» de los mismos: «El Ejército tiene que ser, al mismo tiempo, en el Perú, aprovechándolo convenientemente al intento, en grande i eficaz medio de civilización para la gran mayoría de nuestro pueblo» (Partido Demócrata 1889: 43).

6.2. El debate sobre la Guardia Nacional y el servicio militar obligatorio

Iniciado el gobierno de Piérola y habiéndose licenciado los restos del ejército de Cáceres, se abría una nueva oportunidad para la reflexión sobre la profesionalización y modernización del Ejército; uno de los tópicos que más se discutieron en la prensa fue el relativo al adecuado alistamiento de efectivos para el Ejército. Dada la importancia del asunto, participaron en él publicistas civiles y oficiales del Ejército, que desde 1895 sentaron posiciones opuestas o complementarias respecto a cómo debía realizarse el servicio de las armas en el Perú. Si bien las primeras opiniones se vertieron aquel año, la discusión se intensificó en 1898 casi inmediatamente después de la reactivación temporal de la Ley de la Guardia Nacional de 1887 y durante la discusión en el Congreso de la Ley de Servicio Militar Obligatorio²⁸⁵.

A pesar de las diversas opiniones, el debate sobre la pertinencia de la reforma de la legislación de conscripción se basó en tres premisas compartidas. La primera consideraba necesaria la militarización de la sociedad peruana de cara a un aumento de la tensión fronteriza entre los Estados sudamericanos. Como ha notado recientemente Federica Barclay, en la *intelligentsia* limeña existía la representación de una potencial conflictividad futura en la región debido a problemas limítrofes irresueltos (Barclay 2009: 243-249). Para el Perú, la derrota de la Guerra del Pacífico y la situación indeterminada de Tacna y Arica (las «provincias cautivas») abonaban en una visión crítica de una paz²⁸⁶. En un contexto de posible guerra internacional, resultaba ineludible modernizar el Ejército, dotándolo de una institución que asegurase la constitución de una fuerza militar que hiciera respetar la soberanía y los derechos del Perú. Un ejército, de considerables dimensiones, constituido por ciudadanos disciplinados e instruidos militarmente, pasibles de organizarse ante una eventualidad de guerra exterior, aunque no aseguraba la victoria, resultaba ser una «póliza de seguros», como lo entendía un editorial de *El Comercio*:

²⁸⁵ La discusión sobre el servicio militar se prolongó por lo menos hasta el año 1900. Una fuerte crítica a la Ley del Servicio Militar de 1898 fue propuesta por el diputado Santiago Giraldo en su opúsculo *Legislación militar* (1899); la respuesta, desde la posición oficial, se puede consultar en Clément (1900).

²⁸⁶ Para observar las consideraciones geoestratégicas de la *intelligentsia* criolla, se puede consultar *El Comercio*. Lima, 1 de febrero de 1896, edición de la mañana; y, *La Opinión Nacional*. Lima, 2 de diciembre de 1895.

[Á] nadie se ocultará que un estado, como el Perú, que no provoca á ningún otro, ni busca el daño ageno como base de su bienestar, no puede verse envuelto en complicaciones peligrosas, sino por efecto de imposiciones ó agresiones injustas, tanto menos probables cuanto mejor preparado para rechazarlas se encuentra el país contra el que pudiera dirigirse.

El servicio militar, en la forma de aquel de que se trata, se parece, por los efectos que produce, en el sentido de alejar serios peligros internacionales, al de una póliza de seguros sobre la propiedad: con pequeños sacrificios pueden evitarse grandes daños. (*El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1898, edición de la tarde)

La segunda premisa giraba en torno a la necesidad de establecer una institución que permitiera la militarización del país, pero que su implementación fuera compatible con las condiciones especiales de la sociedad peruana. Resulta imprescindible que el modelo de militarización tuviera en consideración el tamaño de la población, las actitudes de la misma frente al servicio militar, los principios políticos de la República y las características de la economía peruana. Como se verá más adelante, estas consideraciones estarían presentes tanto en el debate que se produjo en la prensa, como en las discusiones parlamentarias que terminaron por aprobar la Ley del Servicio Militar Obligatorio.

Por último, existía una tercera premisa, que si bien no tenía total consenso en los miembros de la *intelligentsia* criolla, era un presupuesto necesario a tener en cuenta para la reforma del modelo de conscripción, a saber: si las instituciones preexistentes eran ineficaces en el cumplimiento de su función. Respecto a la Ley de 1872 existía a fines de siglo un consenso en considerarla inapropiada para el país, en tanto resultaba una fachada legal para una serie de abusos contra la población más indefensa: los indígenas, quiénes por lo general eran la fuente de las altas del ejército permanente. En uno de los artículos que dedicó al Ejército el coronel indefinido Tadeo Simeón Antay, denunciaba los abusos que se cometían bajo el amparo de esa norma:

Nuestra ley de Conscripción que prescribe el sorteo por quintas, ha producido pésimos resultados en la práctica. Ni en Lima, Callao, Trujillo, Ica, Moquegua, Tacna ni en Arequipa, hemos visto jamás, practicar el sorteo por quintas [...].

Sólo en apartadas comarcas y aldeas, donde vegetan hombres semi-bárbaros, ha tenido y tiene lugar el sorteo [...] nuestra ley de Conscripción es una farsa, y si algo se aparenta cumplir, solo en las provincias atrasadas, se hace el sorteo al cálculo ó al tanteo. (*El Comercio*. Lima, 22 de abril de 1896, edición de la tarde).

Similar opinión era la de Carlos Castro, un teniente del Ejército constitucional:

La conscripción militar se ha aplicado aquí, defectuosamente en varias ocasiones. No han faltado los abusos, sobre todo en la sierra, en donde el indio permanece aún en la más supina ignorancia. (*La Opinión Nacional*. Lima, 22 de octubre de 1895).

El consenso acerca de la deficiencia de la Ley de conscripción no era extensible a la Ley de la Guardia Nacional. Una parte de los publicistas civiles y militares que consideraba necesaria la militarización de la población, veía positivamente su organización como milicias ciudadanas, lo que equivalía a decir el mantenimiento de la Guardia Nacional o su reforma. Por ejemplo, desde el diario *La Opinión Nacional* se escribieron diversos editoriales y artículos de colaboradores favorables: «necesidad de organizar en la República la Guardia Nacional [...] dada nuestra carencia de ejército y la debilidad de nuestras fuerzas», pues era una «garantía de seguridad»²⁸⁷. En un editorial del mismo diario, Andrés A. Aramburú consideraba que la Ley de 1887, al haber logrado la inscripción de cerca de 80 mil ciudadanos, se constituía en la «esperanza» del Perú frente a sus enemigos.²⁸⁸

En gran medida, la consideración positiva a la Guardia Nacional recaía en razones de fondo que concebían a esta institución como la más adaptable a las condiciones sociales y políticas del Perú de fines de siglo. En un editorial del diario *El Comercio*, de marzo de 1898, se aconsejaba el mantenimiento del modelo miliciano (rechazándose, por tanto, el establecimiento del servicio militar

²⁸⁷ *La Opinión Nacional*. Lima, 12 de febrero de 1898.

²⁸⁸ *La Opinión Nacional*. Lima, 3 de febrero de 1898. El 22 de marzo de 1898, un articulista proponía, bajo el pseudónimo de A.A., entre las reformas necesarias para el remozamiento del Ejército, el llamamiento de los ciudadanos peruanos para que nutrieran el ejército permanente, siguiendo también la Ley de la Guardia Nacional. A su juicio, esta institución debía reorganizarse, introduciéndose nuevos cohortes etéreos, con la finalidad de constituir reservas sucesivas para el tiempo de guerra (*La Opinión Nacional*. Lima, 22 de marzo de 1898).

obligatorio), en función de dos razonamientos: el primero, el escenario internacional sudamericano, aunque preocupante, no llegaba al nivel de amenaza constante de guerra que había llevado a los Estados europeos a organizar sus poblaciones como ejércitos permanentes siguiendo el modelo de servicio militar obligatorio. El segundo radicaba en un aspecto estructural del país, su reducida población. Considerándose su tamaño, esta era insuficiente para alimentar una enorme maquinaria militar permanente que exigía una ley de servicio militar obligatorio. Hacerla efectiva traería como perjuicio la derivación de fuerza de trabajo hacia actividades no productivas, agravando la situación económica del Perú, en tanto que el ya reducido mercado de mano de obra tendría que disminuir aún más.²⁸⁹ En su opinión, el modelo de la Guardia Nacional era bueno, habiendo fracasado en el pasado, por «la negligencia que ha habido para su aplicación [...] la verdadera causa de que esa ley no haya producido ya los beneficios que de ella se esperaban, ha sido la falta de solicitud del Gobierno para procurarlos»²⁹⁰.

Otras preocupaciones no menos importantes fueron esgrimidas de manera implícita en el debate que presentaron a la Guardia Nacional como el modelo de militarización preferible para el país. En la época se creía (acertadamente) que la población peruana era reacia a cualquier servicio de armas, en tanto que implicaba derivación de tiempo y energía humana en actividades que no reportaban beneficios inmediatos a las personas obligadas a ello. Comparando el servicio en el Ejército y el servicio en las guardias nacionales, en este último el tiempo entregado por la sociedad al Estado resultaba ser más reducido, aunque periódico, puesto que esta institución no requería el acuartelamiento permanente de los ciudadanos para su instrucción militar. Los ejercicios doctrinales se debían cumplir en el tiempo libre de la población, en el mejor de los casos dos días a la semana (Cfr. Hidalgo et ál. 2005: 185). A pesar de ello, en el Perú existía una predisposición negativa al Ejército y al servicio que se había hecho patente en el pasado incluso cuando se había tratado de efectuar la instrucción militar de acuerdo al sistema de milicias. Al respecto, *El Comercio* se lamentaba de la falta de solicitud de la población limeña para la inscripción en los registros de la Guardia Nacional decretada por el gobierno ese mismo año, afirmando que:

²⁸⁹*El Comercio*. Lima, 14 de marzo de 1898, edición de la tarde.

²⁹⁰*El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1898, edición de la tarde.

[L]a obligación legal no es suficiente estímulo entre nosotros, no basta que la ley mande, es necesario otro móvil más enérgico; que en el presenta caso no podía ser sino la perspectiva de una guerra. [...] Si llegara á entenderlo así [con pequeños sacrificios pueden evitarse grandes daños] la masa del pueblo, se prestaría á las exigencias de la ley, si no con entusiasmo, al menos, con decisión perseverante, al menos. (*El Comercio*. Lima, 16 de abril de 1898, edición de la tarde)

En ese sentido, algunas de las recomendaciones que hicieron los diversos articulistas estuvieron orientadas a proponer un diseño de una Guardia Nacional que no exigiese un excesivo tributo de fuerza de trabajo (tiempo y energía humana) al Estado por parte de la población. También en *El Comercio* se recomendaba que «los ejercicios doctrinales no deb[ía]n tener el carácter de fatigar á los milicianos», pues debía tenerse cuidado «que los deberes cívicos del miliciano puedan cumplirse sin daño á sus intereses»²⁹¹. El último aspecto favorable de la Guardia Nacional radicaba en el hecho de que esta institución había permitido en el pasado mantener las diferencias y las jerarquías sociales al interior de las filas de los milicianos. Diversos gobiernos habían mantenido la vieja práctica colonial de constituir cuerpos de milicias, organizándolos según las profesiones, gremios o grupos de la población y, dentro de ellos, se había mantenido las jerarquías propias de la sociedad.²⁹² Por ejemplo, el ciudadano extranjero radicado en el Perú G. Brisco H. Fuller recomendaba un sistema por el cual la población de las ciudades se organizara por distritos y grupos sociales, adjudicándoles un día a la semana y un horario específico para su instrucción, «pues por más entusiasmo que haya, si la institución exige el sacrificio de los días de descanso ó recreo, con el agregado de reunirse personas completamente opuesta en clase social, costumbres &, llegarían á tomar odio á la institución en lugar de la resignación necesaria para prestar sus servicios en ella (muchos sin la menor afición á las armas)»²⁹³. Similar opinión tenía Andrés A. Aramburú, quien afirmaba

²⁹¹ *El Comercio*. Lima, 14 de marzo de 1898, edición de la tarde.

²⁹² Respecto a la conformación corporativa y estamental de las milicias en el periodo colonial, puede verse Carcelén y Maldonado (2011). A este respecto, como hemos visto líneas arriba, fue muy elocuente la organización que se le otorgó a los cuerpos de esta institución durante el gobierno de Manuel Pardo. Asimismo, durante la dictadura de Nicolás de Piérola se expidió un decreto para la formación de las reservas para la defensa de Lima en el contexto de la Guerra del Pacífico. Las milicias que se levantaron para tal efecto se dividieron siguiendo criterios ocupacionales o gremios. (Cfr. Mc Evoy 1997: 154-157, Comisión Permanente de Historia del Ejército 1981: 57-60).

²⁹³ *La Opinión Nacional*. Lima, 16 de mayo de 1898.

que las guardias nacionales debían organizarse en función de las ocupaciones o gremios y de clases sociales, de tal manera que «la disciplina social» no se perdiera al interior de las filas²⁹⁴:

[S]ería muy conveniente trasladar al Cuartel, en cuanto sea discretamente posible, las homogeneidades sociales con sus respectivas jerarquías; esto facilita la disciplina, trasladándola simplemente á las filas. El que manda y el que obedece se encontrarían en su centro normal, lo que vence las enormes dificultades y riesgos de la diversidad de razas y costumbres en la aglomeración indistinta de los ciudadanos. (*La Opinión Nacional*. Lima, 24 de marzo de 1898)

De acuerdo con esta concepción, correspondía a los hombres notables, dependiendo su categoría social, el liderar las fuerzas de las guardias nacionales como un medio de ratificar un estatus preexistente y la autoridad que gozaban en la sociedad; es por ello que *El Comercio* recomendaba elegir como jefes y oficiales de los cuerpos a personas con «superioridad social sobre sus compañeros y capacidad de dirigirlos»²⁹⁵, haciendo también un llamado a los ciudadanos notables a que fueran los primeros en presentarse a la convocatoria del gobierno, pues «están llamados á representar primer papel los ciudadanos dirigentes, á quienes, por el ejemplo y el precepto, corresponde influir sobre todos los demás, estimulándolos á cumplir una ley»²⁹⁶. Estas consideraciones no podían ser más opuestas a la militarización del país bajo criterios universales e igualitarios que en teoría eran la base de la institución del servicio militar obligatorio.

Resultaba claro que parte importante de los líderes de opinión de Lima estuvieron de acuerdo con la permanencia del sistema miliciano como el más adaptable a las necesidades militares del país y a las condiciones sociales de su población. La implementación del servicio militar obligatorio estaba lejos de ser la opinión de mayor consenso, sin embargo, las discusiones acerca de la pertinencia de la Guardia Nacional se interrumpieron en el segundo semestre de 1898, cuando se hizo público el debate en el Parlamento de un Proyecto de Ley para la institución del servicio militar obligatorio elaborado por una de las comisiones reformadoras creadas por el gobierno de Piérola (véase capítulo 3). En efecto, el 20 de julio de ese

²⁹⁴*La Opinión Nacional*. Lima, 14 de marzo de 1898.

²⁹⁵*El Comercio*. Lima, 14 de marzo de 1898, edición de la tarde.

²⁹⁶*El Comercio*. Lima, 12 de abril de 1898, edición de la tarde.

año, el ministro de Guerra, Manuel J. Cuadros, remitió a la Cámara de Senadores un Proyecto que proponía su implementación y que en opinión del Ejecutivo era «conforme con nuestra índole y condiciones sociológicas» (Cámara de Senadores 1898: 259).

La Comisión encargada había sido nombrada el 20 de setiembre de 1897 y estuvo, además de presidida por Paul Clément –jefe de la Misión Militar francesa–, compuesta por Eduardo Dogny (miembro también de la Misión Militar), el teniente coronel Julio Jiménez y los abogados Alfredo Gastón y Antonio de la Lama (Clément 1900: 11-12). Según uno de sus propios miembros, el Proyecto se había elaborado observando las leyes de servicio militar obligatorio de las «naciones más adelantadas del mundo» (es decir, Prusia, Francia, España, entre otras), buscando adaptar esta institución a las particularidades sociales del Perú.²⁹⁷ El Proyecto estuvo listo en noviembre de ese año, mostrando que la intención del Gobierno había sido, desde un principio, el establecimiento de esta institución, como lo había manifestado Piérola en la Declaración de Principios del Partido Demócrata casi una década antes²⁹⁸, y que la reintroducción de la Ley de la Guardia Nacional de 1887 había sido sólo una medida provisional, necesaria para el proveer de efectivos al Ejército gubernamental hasta que el Proyecto del servicio militar obligatorio fuera aprobado.

El Proyecto de Ley de servicio militar obligatorio fue presentado como la solución a los problemas del reclutamiento forzado, un método tan «vejatorio de la dignidad humana y contrario á los principios fundamentales de nuestra organización política», y a los altos costos que impondría el «enganche» de tropas, que –aunque legal–, implicaba grandes gastos al erario, sin reportar importantes beneficios esperados de él.²⁹⁹ El Proyecto del Gobierno modificó los términos de la discusión pública. En adelante, este proyecto sería la base sobre la que se discutiría cualquier

²⁹⁷ *El Comercio*. Lima, 26 de agosto de 1898, edición de la tarde.

²⁹⁸ En el manifiesto del Partido Demócrata de 1889, Piérola declaraba una consideración favorable al servicio militar obligatorio: «Las guardias-nacionales no son otra cosa que la falsificación del Ejército, i pertenecen ya sólo al período de organización rudimentaria de los Estados. [...] La contribución de sangre i fatigas, que constituye el servicio militar, como la más dura de todas, no puede tener sino limitadísimas excepciones i fundadas únicamente en evidente justicia i notoria conveniencia pública. El servicio militar tiene, pues, que ser universal i obligatorio» (Partido Demócrata 1889: 44).

²⁹⁹ Según los estimados de la Comisión, si el Estado adoptaba el «enganche» como mecanismo de remplazo de las bajas y licenciados, su costo hubiera alcanzado la suma de 2,000 soles anuales. Se le consideraba un método ineficaz, pues además de obstaculizar el alistamiento voluntario de ciudadanos, los enganchados huían muchas veces antes que terminase el tiempo del servicio (Clément 1900: 16).

proyecto de militarización del país, no volviéndose a emitir propuestas a favor del modelo de milicias. Redirigido el debate, este se presentó, como era de esperarse, en el Parlamento y en las páginas de la prensa.

En el Senado, la discusión del Proyecto del Ejecutivo no fue ciertamente acalorada, ni se detuvo en cuestiones de fondo. Aunque se hizo una revisión detallada de su articulado, los mismos legisladores se consideraron poco doctos en materias militares para observar las líneas maestras del mismo, confiando en el dictamen favorable que las Comisiones de Legislación y de Guerra habían emitido (Cámara de Senadores 1898: 110-112). Sin embargo, en líneas generales, existió en dicha Cámara una opinión positiva acerca de la implementación del servicio militar obligatorio, considerándolo como manifestación de la modernización del Ejército y una muestra del progreso del país. Por ejemplo, el senador arequipeño Lorenzo Montoya afirmaba que «[e]sta ley obedece, pues, á un plan bien ordenado del servicio militar conforme á las reglas del arte y al sistema moderno» (Cámara de Senadores 1898: 114), mientras que su colega limeño Manuel Candamo indicaba que «esta ley [ha sido] muy bien meditada, y creo que responde á las necesidades efectivas del país, y á las ideas modernas sobre la organización de los ejércitos» (Cámara de Senadores 1898: 115). Pero también los legisladores que discutieron el Proyecto dejaron constancia de dos preocupaciones que ya habían sido esbozadas en el debate previo sobre la Guardia Nacional y que consideraban debían ser atendidas por la nueva ley, a saber: la posición de los sectores acomodados en una ley que prescribía un servicio militar universal y el peso de la *contribución de sangre* sobre la economía del país.³⁰⁰

Respecto al primer punto, los legisladores mostraron claramente la concepción de ciudadanía vigente en los grupos dirigentes de la época y, ligado a ello, de las relaciones entre el Ejército y la sociedad. Un grupo mayoritario de los participantes en el debate fueron favorables a la presencia de un artículo que prescribiera la posibilidad de pagar «primas militares» (una multa en dinero) destinadas a excluir a los jóvenes que pudieran pagarlas del ingreso al sorteo que imponía la obligación de

³⁰⁰Vale la pena aclarar que estos dos tópicos no fueron los únicos que se debatieron en el Senado respecto al proyecto de ley del servicio militar, no obstante, los rescatamos por considerarlos importantes para comprender cómo las clases dirigentes concebían debía ejercitarse el deber del servicio militar.

incorporarse al servicio permanente. Pagando la prima militar, los jóvenes sufragantes debían ser derivados a la categoría de «supernumerarios» o a las «reservas», grupos que no estaban obligados a cumplir el servicio militar por los tres o cuatro años que eran impuestos al común de los conscriptos. Por el contrario, para estas categorías, el acuartelamiento debía hacerse solo a llamamiento del Ejecutivo ante una situación de excepcionalidad militar, y su instrucción no superaba un par de meses.³⁰¹

A pesar de que la mayoría de los legisladores encomió el Proyecto de Ley, considerándolo como adelantado (similar a las naciones de Europa) por estar basado «en el principio [...] que todos los ciudadanos son soldados y están obligados á prestar sus servicios a la nación»³⁰², no fue menos elocuente la opinión positiva que la igualdad en el deber podía y debía cumplirse de forma diferente, en tanto que los grupos sociales del país lo eran así también. Como manifestó el futuro presidente del país y miembro conspicuo de la oligarquía peruana Manuel Candamo, resultada una *feliz* disposición que los miembros de las clases acomodadas quedaran dispensados la obligación de cumplir el tiempo del servicio permanente compartiendo el espacio durante un periodo prolongado con miembros de otras «razas» que, además de ser de «distinta condición», contaban con menor educación. Descarnadamente, Candamo afirmaba que la estructura social peruana haría impracticable una disposición contraria de la Ley, y se congratulaba que los sectores acomodados debían cumplir su obligación con dinero, permitiendo que estos pudieran reproducir su condición a través del acceso a la educación superior, lo que equivalía además un bien para el país:

En el Perú, por la desigualdad de razas, entre las que predomina la de color; y más que eso, por la diferencia de educación, sería poco práctico que se obligara á entrar en el sorteo á jóvenes de distintas condiciones. La obligación pesa siempre sobre ellos; pero la cumplen con el pago de la multa. Hay algo más: obligando al servicio obligatorio sin distinción, no solo se hace impracticable la

³⁰¹ Según la Ley del Servicio Militar Obligatorio, los supernumerarios eran el grupo de ciudadanos que, a pesar de tener los requisitos legales para incorporarse a las filas del ejército permanente (edades entre los 19 y 23 años), no eran dados de alta en los cuerpos del Ejército por encontrarse las plazas completas. El diseño de la Ley del Servicio Militar se verá con detalle en la sección correspondiente de este capítulo.

³⁰² Esta fue, por ejemplo, la opinión del senador Montoya (Cámara de Senadores 1898: 113).

ley, sino que se hace un daño al país, porque más vale que hayan diez ó veinte jóvenes estudiantes de medicina, jurisprudencia, literatura; etc., dedicados á su profesión, que vayan al ejército, en donde se les puede remplazar por diez ó veinte de condición distinta. No pasa lo mismo en Europa, en donde la raza es uniforme y la educación casi igual. [...] El que tiene fortuna cumple sus obligaciones con dinero; es una desgracia para los que no lo tienen, pero es desgracia irremediable. Creo, pues, que ese artículo es el más aceptable del proyecto. (Cámara de Senadores 1898: 115)

En ese sentido, eran conscientes los legisladores que se encontraban sancionando la igualdad del servicio en términos diferentes para las clases acomodadas, como lo manifestó también el senador Emilio Luna:

[E]l servicio militar tiene que hacerse general por esta ley, aunque no en las mismas condiciones y escala: porque en una sociedad ineludiblemente tienen que existir las diferencias que marcan la edad, los estados y las profesiones; pero, no obstante, el servicio es obligatorio [...] Esos mismos individuos que merced á su fortuna quedan exceptuados de prestar sus servicios en el ejército permanente, siempre quedarán incluidos ó en las reservas ó en las guardias nacionales; porque el servicio militar, Excmo. Señor, se presta de diversas maneras. (Cámara de Senadores 1898: 115-116)

En gran medida, estas opiniones se emparentaban con las argumentaciones que se habían presentado en la prensa algunos meses antes sobre la conveniencia de organizar la Guardia Nacional de acuerdo a grupos sociales diferenciados. Instituciones basadas en los principios igualitarios de la ciudadanía resultaban para estos legisladores poco adaptables para el Perú, permitiendo a los sectores más acomodados una situación de «excepcionalidad»³⁰³. Resultaba claro que, para las clases acomodadas de fines de siglo, el servicio militar de sus hijos por un periodo

³⁰³ Mientras se debatía este asunto, el senador Ángel Caveró inquirió que el monto de la prima (de 500 a mil soles) era tan elevado que atentaba contra la «equidad que debe haber en toda ley», excluyendo con ello a la mayoría del país, pues «¿qué indio del Perú, que obrero, que industrial» podría disponer de dichos recursos; por su lado, su colega Leónidas Cárdenas respondía que el poner «al alcance de todos los individuos el medio de eximirse del servicio», haría fracasar la norma, considerando que «[s]e habrá conseguido el objetivo primordial de la ley; solo [si] la excepcionalidad del caso puede poner al alcance de una persona el poder de eximirse del servicio pagando la prima» (Cámara de Senadores 1898: 138-141).

prolongado era inaceptable, peor aún si compartían espacios con grupos sociales inferiores y no obtenían beneficio tangible alguno, como el estatus y la autoridad que les otorgaba comandar como jefes u oficiales de las fuerzas de la Guardia Nacional. Ello no quería decir que dentro del Parlamento y fuera de él no existieran opiniones opuestas a este tipo de excepcionalidad. Por ejemplo, el senador huancavelicano Pedro Arana fue crítico a esta institución, en tanto que el senador Caveró era partidario de incorporar en las primas militares un criterio de proporcionalidad en función de los ingresos de los solicitantes (Cámara de Senadores 1898: 115 y 138-141).

La segunda preocupación de los legisladores giró en torno al tiempo de duración del servicio militar, en tanto que este implicaba la derivación de energía humana a actividades no productivas. Esta inquietud se hizo evidente cuando los legisladores discutían la posibilidad de aumentar a cuatro años el tiempo de servicio de los soldados de infantería para igualarlos a los de caballería y artillería.³⁰⁴ Más allá de las consideraciones técnicas o de justicia, resultaban interesantes algunas opiniones acerca de la inconveniencia de hacer pesar excesivamente sobre la economía del país el impuesto de sangre que constituía el servicio militar. Así, Manuel Candamo rechazaba la propuesta de aumentar el tiempo de servicio a la infantería, porque consideraba que la derivación de la fuerza de trabajo a actividades no productivas sería perjudicial para la economía del país:

El gobierno cuando propone que el servicio sea de cuatro años para los unos, y de tres para los otros lo hace porque cree que bastan tres años para la infantería. ¿Qué razón sería tendríamos nosotros para aumentarlos? Sería un daño no solo para el individuo sino para la sociedad, porque quedan inútilmente ociosos los brazos [...] La infantería en el ejército es más numerosa que la artillería y caballería; de manera que á mayor número de jóvenes se les va á imponer un año más de servicios innecesarios; se va á sustraer á la industria, á la agricultura etc. mayor número de gente. (Cámara de Senadores 1898: 129-130)

³⁰⁴Según el Proyecto de Ley y la misma norma, el tiempo de servicio de las tres armas era diferente. Por la mayor preparación que exigían las armas de artillería y caballería, se disponía que los conscriptos destinados a aquellas debían permanecer en el servicio por cuatro años, mientras que en el caso de la infantería el tiempo era inferior: tres años de servicio.

Aunque, en alguna medida, el servicio militar afectaba a las personas como individuos, para este legislador, el daño a la sociedad se expresaba en términos de las actividades productivas y de los intereses económicos de otros afectados por el servicio militar: los hacendados y los «industriales». Esta no era una opinión particular de Candamo, otro miembro de la naciente oligarquía, el también senador y futuro presidente del país Eduardo López de Romaña compartía los mismos presupuestos, afirmando de similar manera que «la tendencia actual en los ejércitos europeos es á reducir el número de años», pues «se sustraen brazos á la industria y al movimiento general» (Cámara de Senadores 1898: 129).

Ambos legisladores expresaban las preocupaciones del naciente empresariado de fines del XIX que constituirá la oligarquía peruana a principios del siglo siguiente. Sus inquietudes, como bien se sabe, estaban fundadas en las dificultades de la economía peruana para constituir un mercado de mano de obra lo suficientemente moderno para satisfacer la demanda de trabajadores de las empresas que se venían gestando en el periodo de la Reconstrucción Nacional. En su razonamiento, una fuerte presión del Ejército sobre la sociedad, expresada en un alto número de conscriptos, significaría la derivación de una mano de obra escasa hacia actividades no productivas, reduciendo las capacidades de la economía peruana para desarrollarse. Resulta interesante constatar que, si bien este tipo de argumentos no eran nuevos en el Perú (pues habían formado parte de la invectiva de los escritores liberales contra el fenómeno del militarismo desde por lo menos la década de 1860), después de la derrota en la Guerra del Pacífico se habían hecho lo suficientemente flexibles para permitir un tolerable *tributo de sangre* hacia el Ejército, es decir, una *razonable* militarización del país.

Mientras estas discusiones se desarrollaban en el Congreso, hubo también un corto, pero interesante debate en las páginas de los periódicos de la época sobre las bondades y defectos del proyecto discutido en la Cámara de Senadores. Sus participantes, mayoritariamente militares, fueron conscientes de la importancia de la discusión pública de una Ley de la magnitud como la que buscaba establecer el servicio militar, por lo que buscaron conscientemente «ilustrar» a unos congresistas

que habían hecho manifiesta su impericia en estos asuntos técnicos.³⁰⁵ Estando ad portas su promulgación, los que intervinieron en este segundo debate en la prensa se mostraron favorables al establecimiento de esta institución, incluso quienes no habían sido partidarios de la modificación de la Ley de 1872³⁰⁶, sin embargo, ello no implicaba que no se desarrollaran críticas al mismo.

En primer lugar, fue motivo de crítica el establecimiento de las primas militares. En opinión del oficial Tadeo Simeón Antay, esta institución no sólo atentaba contra la universalidad de la ley, sino que permitía la constitución de grupos privilegiados. Así, «[e]sta condición es, por cierto, dura para la gente pobre [...] mientras que se abre las puertas a los ricos para escapar del obligatorio servicio». En su opinión, esta disposición no sólo atentaba contra los principios de justicia de toda ley, sino que además alejaba del servicio en las filas del Ejército de los jóvenes con mejor preparación, debilitando la institución castrense.³⁰⁷ De manera similar, un articulista escribió contra esta institución, bajo el seudónimo de «Foción» (evidentemente, un militar), que «la nueva ley pesará con sobrada fuerza sobre aquellos ciudadanos que, no teniendo el dinero para abonar la prima de excepción, se verán forzados á perder los cuatro primeros años del principio de su vida social»³⁰⁸.

Aunque ambos oficiales estaban en desacuerdo con la institución de las primas militares, no tenían iguales opiniones acerca de la mejor manera de realizar el principal objetivo de la Ley, que era sin lugar a dudas la militarización de la sociedad. Ateniéndose a lo prescrito por el Proyecto del Ejecutivo, «Foción» era de la opinión que el periodo de permanencia en las filas debía ser diferenciado (como sucedía en Francia), en función de dos presupuestos: el primero, radicaba en que algunos conscriptos por sus propias aptitudes físicas o intelectuales podían alcanzar la instrucción militar esperada en menos tiempo que otros (con esto último se refería

³⁰⁵Un oficial del Ejército que escribía bajo el seudónimo de «Foción» justificaba sus observaciones al Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo como un deber de patriotismo «llamando la atención, no sólo á nuestros legisladores sino al público en general, pues se trata de un asunto muy trascendental, de una ley que á todos atañe» (*El Comercio*. Lima, 25 de agosto de 1898, edición de la mañana).

³⁰⁶Por ejemplo, Tadeo Simeón Antay, quien había escrito en uno de sus artículos de 1896 que no era aconsejable la modificación de la legislación vigente, considerando que la posición de indefensión del país no permitía la introducción de reformas de lentos resultados; en 1898, sin embargo, aplaudía la discusión del «grave y fundamental» proyecto del servicio militar obligatorio, siendo su aplicación «una especie de revolución en el orden social» de «vital interés» para el país (*El Comercio*. Lima, 9 de setiembre de 1898, edición de la tarde).

³⁰⁷*El Comercio*, Lima, 26 de setiembre de 1898, edición de la tarde.

³⁰⁸*El Comercio*, Lima, 25 de agosto de 1898, edición de la mañana.

a la población indígena quechua-hablante), resultando injusto e inútil ejercer una «pesada carga» sobre quienes ya estuvieran en posibilidad de cumplir su deber cuando se les requiriese; el segundo consideraba que al disponer el Ejército de línea una cantidad reducida de efectivos (por esos años, no excedía las tres mil plazas), un número de años fijo de servicio limitaría la cantidad de conscriptos que podrían incorporarse a sus filas. Prescribiéndose, según el Proyecto, que el tiempo fijo de acuartelamiento sería de tres o cuatro años, tendrían que cumplirse este periodo para que se produjese una renovación total de las filas, a razón de mil soldados por año. Ello restringía, por tanto, la rotación de ciudadanos en las filas y limitado el número de personas que pudieran recibir instrucción militar.³⁰⁹ En ese sentido, la propuesta de «Foción» exigía, para la militarización del país, el cumplimiento universal del servicio, aunque –por consideraciones técnicas– con la diferenciación en el periodo de acuartelamiento.

Por su parte, Tadeo Simeón Antay indicaba que, si bien la Ley traería importantes beneficios para el país en el futuro, estos no se harían presentes inmediatamente. En tanto ello sucediese, proponía dos políticas a considerar por el Estado para la militarización rápida del país. Por un lado, postulaba la incorporación de materias militares en el currículo de la educación civil de todos los niveles de enseñanza. Siguiéndose un plan progresivo, se podría enseñar los principios básicos de la guerra en las escuelas primarias, impartándose las materias más complejas en los niveles siguientes. En su opinión, debía seguirse el ejemplo prusiano, por el cual la instrucción civil debía universalizarse³¹⁰ y junto con ella la instrucción militar, solo así se podría tener una base óptima de ciudadanos aptos para cuando fueran llamados a cumplir el servicio. Su segunda propuesta buscaba animar al Gobierno para que llevara a cabo una política nacional de estímulo a las sociedades de tiro, considerándolas instituciones útiles que permitirían rápidamente la familiarización de los ciudadanos con el uso de armas de guerra, lo que permitiría que «[c]ada ciudadano diestro en el tiro al blanco, se convertirá en un terrible adversario para el

³⁰⁹ *El Comercio*. Lima, 25 de agosto de 1898, edición de la mañana; 31 de agosto de 1898, edición de la tarde.

³¹⁰ Para Antay, Prusia había logrado adelantar militarmente a Francia luego de las guerras napoleónicas, gracias a su énfasis en la extensión de la educación civil, pues «cuidó de fomentar y desarrollar la instrucción civil antes que la militar como lo decantan ellos mismo [los militares prusianos], hablando con frecuencia, que los son invencibles por el Maestro de Escuela.» (*El Comercio*. Lima, 26 de setiembre de 1898, edición de la tarde).

enemigo y un poderoso defensor de la Patria.»³¹¹ De esta manera, las propuestas de Antay, aunque no obviaban el servicio militar, buscaban incrementar las posibilidades de militarización de la sociedad, mejorando las aptitudes militares de los ciudadanos cuando fueran llamados a las filas.

6.3. Una discusión necesaria: los indígenas y el servicio militar

Se ha visto, desde diversos medios se había formado una corriente favorable hacia la militarización de la sociedad, sea a través de la Guardia Nacional o de la institución del servicio militar obligatorio. Ahora bien, resultaba insoslayable en cualquier debate sobre la militarización del país el reflexionar sobre la condición de la población indígena y su utilidad para el Ejército y, en general, sobre su rol en la nación peruana. Al concluir la Guerra del Pacífico se abrió un periodo de una amplia reflexión sobre las razones de la derrota y los medios para la reconstrucción del país, siendo uno de los tópicos más importantes el referido a cuestionar la situación de la población. Conocido luego como *el problema del indio*, estaba dirigido a inquirir sobre su papel en la sociedad oficial y plantear los medios para constituirlos en «ciudadanos» útiles para la Nación. En este marco, desde una parte de la intelectualidad criolla se gestará una corriente de opinión, a la vez que crítica a los abusos contra los indígenas, favorable a su *integración* a la sociedad oficial a través de la educación, considerando esta como el medio idóneo para que los «indios» lograsen adquirir las herramientas culturales occidentales que les permitieran incorporarse al mercado como mano de obra, así también para que internalizaran los valores y prácticas que les permitieran representarse como parte de la nación peruana.³¹²

Es interesante constatar que esta reflexión general sobre el problema del indio en la prensa limeña a fines de siglo se vinculó con las discusiones sobre el servicio militar. Por un lado, desde mayo de 1896 hasta mediados de 1898, en las páginas de los diarios más importantes de la época se llevó a cabo una interesante reflexión en la que se esbozaron diversos diagnósticos acerca del estado de civilización, las

³¹¹ *El Comercio*. Lima, 9 de setiembre de 1898, edición de la tarde.

³¹² Respecto al indigenismo del tránsito del siglo XIX y XX, se puede consultar Favre (1997) y Deustua y Rénique (1984).

condiciones de vida y la posición de la población indígena en la sociedad. Las consideraciones generales sobre los indígenas planteadas en este debate sirvieron de telón de fondo a una reflexión más específica sobre las aptitudes del «indio» y su utilidad para el nuevo Ejército, lo que equivalía a decir que si es que el indígena peruano podía constituirse en un soldado adecuado dentro de un Ejército a la cual se buscaba modernizar. Estas consideraciones derivaron en la reaparición del planteamiento de que la militarización de la población indígena contribuiría a su «civilización».

Los diagnósticos sobre el indígena coincidían en tres características que se reforzaban mutuamente, a saber: servidumbre, ignorancia y pobreza. En las descripciones sobre la condición de los indígenas, estos eran presentados como sujetos sometidos a una situación de «servidumbre» por los hacendados, los notables y autoridades locales, la misma que imposibilitaba el ejercicio por sí mismos de sus derechos ciudadanos y obstaculizaba su relación directa con el Estado. Asimismo, eran vistos como desprovistos de educación y cultura, evidentemente occidental, ostentando una ignorancia que los mantenían en una situación de marasmo, desconocedores de sus derechos, de las bondades de la cultura oficial y de su pertenencia a la Nación peruana.³¹³ Finalmente, la pobreza material en la que vivían, terminaba por completar el cuadro de esta población.³¹⁴

Los indígenas no eran ciudadanos, pues, por un lado, no podían establecer una relación directa con el Estado, debido que el poder en las provincias se encontraba privatizado en manos de particulares que usufructuaban con su posición social y

³¹³ El 30 de abril de 1897 fue publicado un proyecto dirigido al Comité del Partido Constitucional para que las instancias locales de dicho partido recogieran las denuncias de abusos contra los indígenas e intercedieran por ellos ante las instituciones del Estado. En este proyecto se mencionaban que la situación de los indígenas estaba marcada por la servidumbre y la ignorancia: «No obstante haber transcurrido 76 años desde nuestra emancipación política, no se ha borrado en esa *raza* el signo de la cruel é ignominiosa servidumbre á que estuvo sometida durante tres siglos de la dominación española. Víctima siempre de los abusos de la generalidad de los que sobre ella ejercen alguna autoridad ó dominio, í de la falsía de los que especulan con su ignorancia, continúan en ese estado de profundo abatimiento moral que la hace incapaz de hacer valer por sí misma sus derechos y contribuir conscientemente al engrandecimiento de la República» (*La Opinión Nacional*. Lima, 30 de abril de 1897).

³¹⁴ En un artículo dedicado a la provincia de Chumbivilcas se afirmaba que «[n]ingún indio vive con independencia: están sujetos á los notables radicados en el pueblo ó parcialidad á que pertenecen, que son sus señores y á quienes les trabajan sus tierras y cuidan de su ganado [...] por demás miserables, ten[ían] por único menaje pellejos y ollas», mientras que su alimentación constaba únicamente de «papa amarga ó chuño negro, maíz y coca» (*El Comercio*. Lima, 4 de mayo de 1896, edición de la tarde).

económica; mientras que, por otro lado, el estado de «ignorancia» y «fanatismo» (religioso) en el que se encontraban les impedía representar una comunidad nacional o Patria, a la cual tributaran sentimientos y servicios voluntariamente para su engrandecimiento.³¹⁵ Obstruía sin duda esta conciencia de peruanidad el abuso de las autoridades locales que mediaban la relación de esta población con el Estado, pues los indígenas no tenían «ni más sentimientos de Patria que el horror á todo lo que mane de los altos Poderes Públicos por el intermedio del atroz Subprefecto o Gobernador».³¹⁶

Siendo aquella la condición «actual» del indígena, una porción importante de estos publicistas creían que tales características eran no consustanciales o naturales en dicha raza; allí estaban los logros del pasado prehispánico como evidencia contraria a las teorías racialistas: Andrés A. Aramburú compara, en 1897, «lo que fue el populoso imperio de los incas, hoy son tribus errantes que huyen de nosotros»³¹⁷, mientras que un anónimo, titulado *El Estado actual del Indio*, un año después coincidía en afirmar que en el pasado la «raza indígena [...] era la de un pueblo generoso, adelantado y feliz»³¹⁸. Habiendo la «raza» indígena mostrado capacidades superiores en el pasado, su condición *deprimida* debía ser producto de procesos históricos que se podían retrotraer hasta la Conquista; y, no siendo natural, la intervención de la cultura occidental podía lograr su redención.

En parte, algunos de estos articulistas coincidían en que los indígenas poseían aptitudes físicas y morales que podían explotarse para el bien de la Nación y servir de base para convertirlos en adecuados soldados para el Ejército. En un proyecto de instituciones para la protección de las poblaciones indígenas del Partido Constitucional se les atribuía a ellas «ricas y poderosas aptitudes morales» y, especialmente, una «abnegación y valor heroico que ha demostrado siempre que se ha tratado de la defensa de la honra y de la integridad de la Patria».³¹⁹ Incluso se les

³¹⁵ *La Opinión Nacional*. Lima, 30 de abril de 1897.

³¹⁶ *El Comercio*. Lima, 25 de febrero de 1898, edición de la tarde.

³¹⁷ *La Opinión Nacional*. Lima 30 de abril de 1897.

³¹⁸ *El Comercio*. Lima, 25 de febrero de 1898, edición de la tarde.

³¹⁹ *La Opinión Nacional*. Lima, 30 de abril de 1897.

podía adjudicar otras virtudes morales, pues el indio era «humilde, sobrio, tolerante y sufrido hasta la exageración».³²⁰

No siendo una raza *abyecta* por naturaleza y poseyendo sus miembros aptitudes notables, su condición podía transformarse con la participación del Estado. Por un lado, resultaba indispensable la protección de aquel frente al abuso de los notables locales y las mismas autoridades públicas, a fin de que fueran respetados sus derechos como ciudadanos. En segundo lugar, resultaba insoslayable la extensión de la educación a dichas poblaciones para que estas aprendieran sus derechos y los conocimientos occidentales, entre ellos el aprendizaje del idioma oficial del Estado y las competencias de lectoescritura. Con estas reformas podría convertirse en un factor de prosperidad:

[S]i una fuerza vigorosa é inteligente no levanta el espíritu aletargado del *indio*; procurando, primero, defender sus derechos contra todo abuso, despertando en él la *dignidad humana*, y llevando después, á su alma, las luces de la verdad por la *educación*. Sólo así la raza indígena será un elemento de *fuerza* moral, de *poder* y de *cultura*, y se disiparán los vicios que la *servidumbre* y el *fanatismo religioso* han arraigado en su corazón. (*La Opinión Nacional*. Lima, 30 de abril de 1897)

Estas reflexiones tuvieron evidente resonancia en las consideraciones sobre el servicio militar. No podían soslayarse, en tanto que la población indígena había sido en el pasado, y se esperaba que fuese también en el futuro, el principal componente de los ejércitos nacionales, pues se calculaba generalmente que ella comprendía las tres cuartas partes de la población del país. De allí que, al tanto que se problematizaba sobre el indio peruano en general, se iniciase paralelamente un debate respecto a la capacidad de dicha población para constituirse en soldados apropiados para un Ejército moderno. El debate se planteó en función de las actitudes *morales* y sus aptitudes físicas de los indígenas y las condiciones sociales necesarias para el cumplimiento del deber ciudadano de servir a las armas de la Nación.

³²⁰ *El Comercio*. Lima, 25 de febrero de 1898, edición de la tarde. Por su parte, Andrés A. Aramburú consideraba que durante el Incario los indígenas tenían también virtudes morales similares, como la sobriedad, la laboriosidad, la resistencia al sufrimiento, además de aptitudes físicas encomiables, como la fortaleza, la agilidad y la disposición al trabajo, las cuales contrastaban con las que veían en los indígenas: «Hoy es animal de puna, salvaje, arisco, desconfiado». *La Opinión Nacional*. Lima, 29 de abril de 1897.

En este debate se plantearon dos posiciones. La primera consideraba a la población indígena como sujetos valiosos para el Ejército dadas sus actitudes morales e incluso sus aptitudes físicas que mostrados en diversos pasajes de la historia republicana. Como hemos visto, esta era la opinión del Proyecto del Partido Constitucional, el cual era partícipe de reconocer el heroísmo y la abnegación de la población indígena ante la defensa nacional.³²¹ En la misma línea argumentativa exponía el comisario de Chorrillos, Ignacio Vera Tudela, quien afirmaba que: «los soldados indígenas, cuya naturaleza bien dispuesta para la milicia, realza por el contrario sus condiciones de hombres sóbrios, valientes, resistentes á la fatiga, obedientes, subordinados y capaces de todo sacrificio», además de poseer «un sentimiento innato del deber ciudadano» que los impulsaba a cumplir con las diversas responsabilidades que les adjudicaba el Estado en las localidades más alejadas, «donde las autoridades no cuentan con un solo gendarme para el sostenimiento del orden público».³²²

Dado que los indígenas contaban con semejantes virtudes y aptitudes, no resultaría difícil convertirlos en buenos soldados con la instrucción adecuada y con una política firme del Estado. El mismo Vera Tudela recordaba que en los tiempos del gobierno del general Pezet se constituyó un fuerte ejército en dos años, del cual él formó parte. Según su testimonio personal, en aquel «se organizaron academias de instrucción primaria en todos los cuarteles», inoculando a los indígenas «la moral militar», proscribiéndose «el abuso del licor» y ejercitándolos en gimnasia, «adquiriendo [los soldados] de ese modo la salud, robustez y aire marcial que eran consiguientes». En el batallón Cuzco N.º 11, del cual era capitán, había sido testigo que «toda la tropa aprendió á leer y escribir con otros rudimentos.» Considerando ello, hacía un llamado al Gobierno para «establecer los cimientos que en la práctica pueden llevarnos á un porvenir lisongero y provechoso»³²³.

Contrarios a esta primera posición fueron diversos militares que escribieron sobre la reforma del Ejército. En su opinión, las condiciones sociales, económicas y culturales en las que vivían los indígenas tenían como resultado su situación de

³²¹*La Opinión Nacional*. Lima, 30 de abril de 1897.

³²²*El Comercio*. Lima, 24 de abril de 1898, edición de la mañana.

³²³*El Comercio*. Lima, 24 de marzo de 1898, edición de la mañana.

material humano muy pobre para la formación de soldados para un Ejército moderno. Sus observaciones en torno a dicha población se nutrían de las reflexiones mostradas líneas arriba sobre las condiciones sociales de los indígenas. Así, para estos militares, los indígenas no eran ciudadanos plenos de los cuales se pudiera esperar el cumplimiento de un deber cívico, como el servicio militar obligatorio. En primer lugar, no eran sujetos autónomos que pudieran ejercer sus derechos, ni hacer uso libremente de su razón, pues el predominio de los caciques locales los sometía a una situación de servidumbre. En segundo lugar, su posición marginal ante la sociedad oficial se ratificaba en la pervivencia de los idiomas originarios (quechua y aimara) y, por tanto, en la incapacidad de comunicarse en el idioma nacional. Ambas condiciones traían a colación, en tercer lugar, la ausencia de una representación de la comunidad nacional, es decir, de la Patria y de los sentimientos ligados a ella que les impusiera el deber de luchar por ella. Estas condiciones las inquiría elocuentemente Tadeo Simón Antay, en abril de 1896, a propósito de las reformas que debían realizarse para mejorar el Ejército:

Con aquellas gentes [la población indígena], educadas en la escuela de la esclavitud y del temor, con las que crecen y se desarrollan bajo el látigo del cacique, con las que no saben pensar ni hablar su idioma ni tienen la más ligera idea de la patria ni de sus propios derechos ¿se puede formar un Ejército? Con hombres que carecen de ideas propias y si las tienen no son de otro sino del cura, gobernador y juez de paz, que los explota ¿se puede organizar un respetable Ejército, según las exigencias de las guerras modernas? (*El Comercio*. Lima, 22 de abril de 1896, edición de la tarde)

Similares opiniones fueron compartidas por otro militar, el oficial B. S. Leyva Deustúa, en varios artículos que publicó con el nombre de «El Soldado Indio» en polémica a los artículos de Ignacio Vera Tudela. Iniciaba Leyva Deustúa su exposición bajo el supuesto de que el indígena era un pésimo soldado y un peligro al país, por su recurrente tendencia a la desertión, como lo había en diversos pasajes de la historia republicana, en los que la desertión masiva de los soldados indígenas había significado la derrota del Gobierno o el caudillo que los dirigía al combate. La derrota de Gamarra en Ingavi, la deposición de Pezet en 1865 e incluso en el desbande previo a la batalla de Huamachuco (que desmoralizaron el ejército de Cáceres antes del combate) eran hechos palpables de una reiterativa propensión de

los indígenas para eludir el servicio en el Ejército, los cuales colisionaban con la imagen construida por algunos escritores urbanos que ensalzaban las virtudes que podían convertirlos en soldados (como la sobriedad, resistencia, obediencia, etc.)³²⁴:

Las deserciones desmienten la creencia general de que el indio sea sufrido y resignado en la milicia. ¿Y que importan en buena cuenta en sobriedad y resistencia, si bajo la corteza de la mansedumbre, humildad y finta alegría, el melancólico y taciturno suspirador de la *quena* esconde aladas taloneras, es arisco ante el deber de derramar su sangre por la patria, y al frente del enemigo común imita al ciervo que apercibe al cazador? Si la educación no cambia la naturaleza moral del indio, ni doscientos mil soldados de esta laya inspirarán garantías y seguridades para la defensa nacional, así fuera guiados por el genio de César, de Napoleón ó de Moltke, y sólo serán frágil castillo de naipes condenado á derrumbarse por el infalible talle de la Historia. (*El Comercio*. Lima, 20 de abril de 1898, edición de la tarde)

Resultaba interesante que las apreciaciones de Leyva Deustúa no se fundaban en un criterio plenamente esencialista de la población indígena, por el contrario, consideraba en gran medida que eran las condiciones sociales y culturales las que empujaban a los indígenas a la deserción. Por un lado, afirmaba que la dinámica de la lucha por el poder que recibía el nombre genérico de «militarismo» conducía al «reclutamiento arbitrario», convirtiendo al indígena en «[v]íctima del endémico morbo de la anarquía». Su tendencia a la deserción era comprensible, en tanto que «[p]ara contrastar el yugo de sus victimarios tradicionales, evangelio de su salvación fue y es protestar de hecho contra la tiranía de la demagogia histórica, libertándose de sus opresores por medio de la deserción.»³²⁵ Ahora bien, bajo estos criterios un tanto positivistas, Leyva Deustúa pensaba que se podían modificar las condiciones de vida de los indígenas para convertirlos en soldados útiles para la Nación, por medio de una decidida política educativa desde el Estado que permitiera «conquistar en una sola jornada de medio siglo el gran tesoro de la civilización»³²⁶. En ese sentido, proponía la creación de un «Instituto Nacional Indígena» que permitiera redimir a los indígenas de su «infeliz estado moral, intelectual y físico»³²⁷, con lo que establecería

³²⁴ *El Comercio*. Lima, 14 y 20 de abril de 1898, edición de la tarde.

³²⁵ *El Comercio*. Lima, 18 de marzo de 1898, edición de la tarde.

³²⁶ *Ibidem*.

³²⁷ *El Comercio*. Lima, 14 de abril de 1898, edición de la tarde.

la base necesaria para convertir a los indígenas en ciudadanos útiles y, con ello, en sujetos propicios para el servicio de las armas:

El mayor de los innumerables beneficios que de él reportará el indio en el porvenir, cuando el deber militar le lleve al servicio con miras elevadas y serenas, con las mismas aptitudes ciudadanas que las primeras clases sociales; y facilitará su rápida instrucción, evitando á Jefes, Oficiales y sargentos el recargo de obligaciones que impone el ridículo rol de maestros de escuela á que están condenados para subsanar la imperdonable ignorancia del recluta en el idioma patrio, cuando la cacerina debe ser el emporio de exclusiva enseñanza. (*El Comercio*. Lima, 20 de abril de 1898, edición de la tarde)

Leyva Deustúa era crítico de lo que precisamente era ya un sentido común extendido de la función del Ejército y la «civilización» de esta población, es decir, la instrucción de los reclutas indígenas al interior de los cuerpos del Ejército. Esta última era propuesta compartida por quienes veían al Ejército, no solo como un instrumento para la defensa del país, sino como una herramienta para la transformación del indio. Ya hemos visto que durante los gobiernos del Segundo Militarismo esta fue una preocupación de militares y civiles, el gobierno de Piérola surgido luego de una cruenta guerra civil ofrecía las oportunidades de plantear y ejecutar este consenso. Militares, como Ignacio Vera Tudela,³²⁸ o civiles, como el mismo presidente Piérola, veían en la instrucción civil de los conscriptos por sus oficiales un medio eficaz de occidentalización. Otros civiles, como Ortiz de la Puente, eran también partidarios de esta función del servicio militar, que los convertiría en ciudadanos y en mano de obra útil para el mercado. Proponía Ortiz de la Puente que en los cuarteles del Ejército debía dividirse el tiempo de instrucción en cuatro partes: la primera dedicada a la gimnasia y a los ejercicios militares para «que se desarrollen sus fuerzas físicas y adquiera sus conocimientos profesionales»; la segunda a la lectura y escritura, utilizándose tres obras que mostrasen «el noble origen de su raza, la accidentada historia de su patria, y los hechos heroicos de sus compatriotas en la última contienda nacional»; la tercera dedicada a un oficio mecánico (como carpintería, zapatería, herrería, etc.); y una cuarta dedicada a academias³²⁹. Resaltaba en su propuesta el aprendizaje de la historia como un medio

³²⁸*El Comercio*. Lima, 24 de abril de 1898, edición de la mañana.

³²⁹*El Comercio*. Lima, 16 de junio de 1898, edición de la mañana.

eficaz para articular las memorias particulares de las comunidades indígenas en el gran relato de la Nación, posibilitando con ello la imaginación de una comunidad nacional. Ello permitiría redirigir la lealtad de los indígenas hacia el Estado, por encima de sus comunidades locales, es decir, de su patria chica:

Triste á la vez que elocuente ejemplo se ha dado en la última guerra nacional de su bravura en los casos en que los protagonistas eran jóvenes aguerridos, instruidos en el manejo de las armas y que poseían los simples conocimientos de saber leer y escribir; y de la cobardía de los otros, que huían á los primeros disparos por no tener la menor idea de patria, ni ningún otro conocimiento intelectual y moral que la vida abyecta y de ignorancia que observan en la mísera chosa de sus pueblos y en las tristes é ignotas soledades de la puna. (*El Comercio*. Lima, 16 de junio de 1898, edición de la mañana)

Los miembros de la Comisión encargada de la redacción del Proyecto de la Ley del Servicio Militar Obligatorio coincidían con Leyva Deustúa y con Ortiz de la Puente. Proponían como una medida complementaria a la Ley del Servicio Militar la creación de escuelas de soldados, instituciones que instaladas en diversos lugares del territorio de la República otorgaran a los jóvenes indígenas «la instrucción primaria de primer grado, la técnica que necesitan los individuos de tropa y se enseñaría un oficio», impartida por los oficiales del Ejército. En virtud de esta enseñanza se reportarían beneficios como el «cumplimiento [de] la ley que declara obligatorio la instrucción primaria», la Ley que ordena que en las escuelas se dé instrucción militar y enseñanza de un oficio y la disminución de la «vagancia». Para el Ejército se lograría la ventaja de ofrecer un contingente permanente para las altas del ejército regular y reservas para aumentar su número en caso de guerra exterior, con «hombres jóvenes, morales, acostumbrados á la obediencia militar y debidamente instruidos» (Clément 1900: 18-19). Este proyecto, que buscaba la constitución de los indígenas en hombres útiles al Estado y al mercado, no se hizo efectivo, como se verá más adelante.

6.4. El diseño y la aplicación de la Ley

La Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898 fue la primera norma que instituyó, de manera regular, la prestación del servicio de las armas en la historia republicana. Como las anteriores leyes republicanas, su presupuesto se basaba en el deber de todo ciudadano de defender la comunidad política a la que pertenecía: la Nación. Sin embargo, a diferencia de sus predecesoras, estaba diseñada para la constitución de grandes ejércitos que permitieran la instrucción metódica y la movilización masiva de la población peruana en caso de un enfrentamiento militar. En una palabra, la militarización del país para hacer realidad el famoso principio de *nación en armas*. Según dicha norma, el Ejército peruano se dividiría en tres componentes: el ejército regular, los supernumerarios, las reservas y la Guardia Nacional. El primero resultaba ser el ejército permanente, compuesto por los soldados en actividad que podía componerse por conscriptos, es decir, los jóvenes entre 19 y 23 años que, inscritos en los registros militares, eran designados al servicio por medio de un sorteo; los voluntarios, individuos que en edad entre los 19 y 30 años desearan ingresar a las filas; y, los enrolados, aquellos individuos que omisos al registro sufrían la pena de ingreso inmediato al Ejército³³⁰. El ejército regular, en el periodo estudiado, sería un cuerpo de modestas dimensiones, como el del siglo XIX, compuesto hasta 1903 por tres mil soldados, mientras que esta cifra aumentaría a cuatro mil a partir de 1904.

Dadas las reducidas dimensiones del ejército regular, la mayoría de individuos entre 19 y 23 años de edad no podrían ingresar al servicio activo, por lo que estos pasaban a la condición de supernumerarios, ciudadanos considerados como parte del ejército permanente que podían ser llamados a discrecionalidad del Gobierno para su acuartelamiento y movilización por un periodo no mayor de dos meses. Seguía en esta organización las reservas, la primera compuesta por los licenciados del Ejército con edades entre los 23 y 30 años, los jóvenes que entre 19 y 23 años estuviesen casados y los alumnos de las universidades y escuelas técnicas nacionales que tuviesen de 19 a 23 años de edad. De manera similar a los supernumerarios, estos reservistas podían ser llamados por dos meses de acuartelamiento para su instrucción

³³⁰El enrolamiento era una pena militar prevista en la Ley para los omisos al registro militar y a la presentación de los sorteados, que imponía su persecución e incorporación inmediata a las filas del Ejército.

militar. Por su parte, la segunda reserva estaba integrada por hombres mayores de 30 y menores de 35 años, los directores de instituciones educativas, docentes de colegios, escuelas técnicas y universidades, con edades entre 19 y 35 años. Finalmente, la Guardia Nacional se encontraba formada por los hombres adultos entre los 35 y 50 años de edad y los exceptuados de los otros grupos por su profesión, cargo público o condición familiar.

Cuadro15: Composición del Ejército del Perú según la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898

Fuerzas militares	Edad	Requisitos
Ejército regular	19-23 años 19-30 años 19-23 años	Designados por el sorteo Voluntarios Enrolados
Supernumerarios	19-23 años 19-23 años	Los que no hubiesen sido designados por el sorteo Los que hubiesen pagado prima militar de 500 soles para eximirse del sorteo
Primera reserva	23-30 años 19-30 años 19-30 años 19-23 años	Licenciados del Ejército Casados antes de los 19 años Alumnos de universidades y escuelas técnicas nacionales Los que hubiesen pagado prima militar de 1,000 soles
Segunda reserva	30-35 años 19-35 años 19-35 años	Hombres adultos Directores de escuelas nacionales y municipales Profesores, docentes y catedráticos de colegios, escuelas técnicas y universidades
Guardia Nacional	35-50 años Exceptuados por profesión Exceptuados por cargo público Exceptuados por condición	Hombres adultos Médicos y practicantes en ejercicio; Maestros de postas, postillones y conductores de correos; telegrafistas del Estado Jueces permanentes; primeros jefes de oficinas públicas; alcaldes y directores de beneficencia pública Hijo único de viuda pobre y el de padre pobre mayor de 60 años; viudo padre de menores de 14 años

Fuente. Ley del Servicio Militar Obligatorio del 27 de diciembre de 1898.
Cuadro de elaboración propia.

Los soldados del ejército regular eran la base de la organización militar, y como tales cumplían las funciones tradicionalmente asignadas al Ejército: la primera línea de defensa del Estado en el exterior y de seguridad interior. Los conscriptos debían servicio durante tres años, para el caso de los destinados al arma de infantería, y cuatro años para los de caballería y artillería, luego de los cuales pasaban a la condición de licenciados y parte de la primera reserva del Ejército. En el caso de guerra exterior, esta base debía aumentarse, en primer término, con los supernumerarios, quienes eran teóricamente parte del ejército activo, y luego con los miembros de la primera reserva. Por su condición de fuerzas de inminente movilización, ambos grupos debían ser instruidos militarmente, acuartelándolos hasta por dos meses. Si estas fuerzas resultaran insuficientes, se procedía a llamar a la segunda reserva, mientras que los miembros de la Guardia Nacional constituían fuerzas territoriales, asumiendo la defensa de las circunscripciones militares a las que pertenecieran. Esta forma de organización por grupos étnicos y ocupaciones específicas es lo que los actores de la época llamaban «moderno» y que se asemejaba «á las que existen en muchos países de Europa»³³¹, pues era «un verdadero engranaje en el servicio militar que se preste á la Patria, por todos los ciudadanos según su edad, estado y ocupación»³³², organizándose «no solamente el ejército y la guardia nacional, sino que se organiza todo el país, en forma de ejército efectivo»³³³.

La Ley y el Reglamento encargaban los actos de registro de la población a dos instituciones: la Junta Conscriptora de Provincia y la Junta de Inscripción de distrito. Esta última, compuesta por el Gobernador, el Alcalde y un Juez de Paz (nombrado por el Subprefecto), le correspondía en el mes de enero tomar la inscripción de los ciudadanos del distrito obligados por la Ley a prestar el servicio. En los registros distritales se debían consignar los datos personales del ciudadano, como su nombre, ocupación y lugar de nacimiento, al mismo tiempo que información importante para el servicio, como estado civil, constitución física y la presencia de defectos corporales. Esta información era elevada ante la Junta Conscriptora de Provincia, compuesta por el Juez de Paz de primera nominación, un síndico municipal (sorteado

³³¹Declaración del Senador Lorenzo Montoya el debate de la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Congreso de la República (Cámara de Senadores 1898: 113).

³³² Dictamen de las Comisiones de Guerra y Marina sobre el Proyecto de Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1898 (Cámara de Senadores 1898: 110).

³³³ Declaración del Senador Emilio Luna durante el mismo debate (Cámara de Senadores 1898: 114).

por el Alcalde), un militar desde el grado de capitán, el médico titular de la provincia y el Subprefecto que hacía de presidente de la Junta.³³⁴

Esta institución era medular en el sistema de conscripción, pues además de verificar y rectificar los datos recibidos desde los distritos, se encargaba de realizar un sorteo anual, por el cual se designaba a los jóvenes que la provincia debía remitir al Ejército, según el número de conscriptos señalados por el Estado Mayor General (en adelante, EMG). El sorteo debía hacerse en junio ante la Junta; para tal efecto, los jóvenes de 19 años debían extraer personalmente de un ánfora balotas numeradas, las cuales indicarían la prioridad de los ciudadanos en el llamamiento: aquellos que obtuvieran los números más bajos serían destinados al ejército regular hasta cumplir la cantidad de hombres exigida por el Ejército, mientras que los individuos con los números siguientes debían quedar en calidad de supernumerarios hasta que hubiera una nueva demanda de conscriptos para remplazar las bajas de los cuerpos del Ejército durante el año en curso, o fueran acuartelados en la oportunidad y por el espacio de tiempo que señalara el Ministerio de Guerra y Marina para su instrucción.³³⁵

La Junta Conscriptora también conocía y calificaba respecto a las causales de excepción de los conscriptos, sean estas por disposiciones legales y por condiciones físicas, entregando a los recurrentes una boleta de excepción. Una copia de la información del registro de inscripción debía ser elevada al Prefecto, mientras que otra era remitida al EMG. Como garantía para los ciudadanos, la Ley y el Reglamento disponían que las personas disconformes de la calificación de la Junta Conscriptora podían elevar un recurso a la Junta Revisora, una institución encargada de resolver los reclamos de los solicitantes. La Junta Revisora, también de jurisdicción provincial, estaba compuesta por el Juez de Primera Instancia, el Alcalde municipal, un médico o un empírico, el párroco de la iglesia matriz y un militar.

³³⁴ Respecto a las funciones de las Juntas de Inscripción y los registros distritales, obsérvese los artículos 15°, 16°, 17°, 21°, 22° y 23° del Reglamento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1900. En lo que corresponde a la composición de las Juntas Conscriptoras, consúltese el Artículo 15° de la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1898.

³³⁵ Estas disposiciones se encuentran en los artículos 12° y 19° de la Ley de 1898 y los artículos 41°, 49° y 50° del Reglamento de 1900.

Dispuesta la fecha de remisión, los conscriptos designados debían ser concentrados en la capital de la provincia, desde donde se enviarían al cuerpo de Ejército más cercano, para completar el número de bajas de los soldados que hubieran cumplido su tiempo de servicio, y a la capital de la República, donde se concentraba la mayor cantidad de unidades militares. Las cantidades de conscriptos que tenían uno y otro destino eran determinadas por el EMG, el cual oficiaba las instrucciones para el destino final de los nuevos soldados.³³⁶

Como se puede ver, una ley de las características como las del servicio militar obligatorio implicaba el establecimiento a nivel nacional de un conjunto de instituciones de carácter local. En ellas, correspondía a distintas autoridades del nivel provincial y distrital una cuota de responsabilidad en las tareas de conscripción y labores anexas. Resulta interesante comprobar que, a diferencia de lo que había prescrito la Ley de Conscripción de 1872, la responsabilidad en estas tareas no recaía exclusivamente en las municipalidades (órgano en el que las más de las veces se encontraban representados los intereses de los notables locales), sino que intervenían directamente de autoridades de orígenes diversos, es decir, autoridades políticas, militares, judiciales, además de miembros de profesiones específicamente relevantes. En primer lugar, se encontraban los representantes del poder Ejecutivo de carácter civil, como el Subprefecto y los gobernadores, y los de carácter militar, tanto en la Junta Conscriptora como en la Revisora. Por su número y centralidad en el proceso, las autoridades del Poder Ejecutivo eran las que disfrutaban mayor gravitación, mostrando la Ley el interés de este poder del Estado por intervenir directamente en la conscripción.

³³⁶Esta prescripción se instauró en 1903 y estipulaba que los conscriptos de cada departamento debían ser dados de alta en los cuerpos acantonados en dichas circunscripciones en las unidades de línea más cercanas, aunque el número total de conscriptos elevara el número de hombres por encima de la cantidad reglamentaria. Los excedentes serían destinados a otros cuerpos, según las disposiciones del EMG (MGM 1903: 13).

Cuadro 16: Miembros de las instituciones locales creadas por la Ley del Servicio Militar Obligatorio y su Reglamento

Origen del miembro	Junta Conscriptora (nivel provincial)	Junta Revisora (nivel provincial)	Junta de Inscripción (nivel distrital)
Ejecutivo	Subprefecto (Presidente) Un militar	Un militar	Gobernador (Presidente)
Judicial	Juez de Paz de primera nominación	Juez de Primera Instancia	Juez de Paz (nombrado por el Subprefecto)
Municipal	Síndico, sorteado en el Concejo Municipal	Alcalde municipal	Alcalde municipal
Religiosa		Párroco de la iglesia matriz	
Médico	Médico titular de la provincia o empírico	Médico Titular de la Provincia o empírico	

Fuente. Ley de Servicio Militar Obligatorio, del 20 de diciembre de 1898. Reglamento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, del 10 de diciembre de 1900. Cuadro de elaboración propia.

En segundo lugar se encontraban las autoridades municipales, el Síndico Municipal en la Junta Conscriptora, el Alcalde en la Revisora y el Alcalde de distrito en la Junta de Inscripción, todos ellos representantes de los grupos de interés locales y poseedores –en las poblaciones donde los hubiese– de los registros de ciudadanos de la localidad. Formaban parte de estas instituciones, en tercer lugar, autoridades judiciales, con el objetivo formal de cautelar los derechos de los ciudadanos. Por su parte, los profesionales que intervenían en este proceso eran los párrocos de las iglesias matrices de las provincias y los médicos o empíricos. Dentro de la Junta Revisora, los primeros resultaban importantes, en tanto disponían de información relevante sobre el estado civil y la edad de los ciudadanos, además de ser personajes influyentes en las localidades; en su caso, los médicos titulares, cumplían meramente la función profesional de calificar la condición física y los problemas de salud de los posibles conscriptos.

La Ley y el Reglamento otorgaban una importante cuota de poder al Ejecutivo en las funciones de conscripción; sin embargo, ello no aseguraba el cumplimiento de los objetivos de la Ley, es decir, la conscripción periódica, pero regular de hombres sanos, aptos para el servicio, siguiendo los procedimientos formales establecidos en las mismas normas referidas. Afirmamos que no estaban asegurados los objetivos de la Ley, porque en el Perú decimonónico, dadas las limitaciones que imponía el

territorio, la dispersión de la población y los recursos del propio Estado, las autoridades locales gozaban de una importante autonomía respecto del poder central, por lo que aplicaban las disposiciones emanadas de este en función de sus posibilidades y sus propias agendas. Considerando estos limitantes, los gobiernos que ejecutaron la Ley tuvieron que aumentar concomitantemente las capacidades organizativas del Poder Ejecutivo, para dirigir, vigilar y sancionar los múltiples procesos de conscripción que se desarrollarían de manera simultánea en todo el país.

Una de las medidas ineludibles para llevar a cabo la implementación del servicio militar fue la reforma del EMG, ya constituido durante el gobierno de Piérola. Esta reforma, efectuada en 1901, durante la administración de Eduardo López de Romaña, implicó la reorganización de la institución, otorgándole atribuciones propias de un EMG moderno, entre las que se contaban las referidas al llamamiento y movilización de la población hábil para el servicio³³⁷. Por estas funciones, el EMG se convirtió en el centro administrativo-militar que desde Lima ordenaba y resolvía todas las materias relativas a la Ley de Conscripción. En primer lugar, de acuerdo a los estimados del censo de 1876, hizo desde 1901 el llamamiento de contingentes que debían proporcionar anualmente los departamentos del país, estableciendo la cantidad de hombres que debían proporcionar las provincias y los distritos (MGM 1901: 61). En segundo lugar, establecía los criterios y lineamientos sobre los que debía realizarse las operaciones de conscripción de las Juntas de Conscripción, las subprefecturas, las comisiones militares y los estados mayores regionales (nos referiremos a estas dos instituciones más adelante). En tercer lugar, supervisaba aquellas operaciones, especialmente de las Juntas Conscriptoras y los subprefectos, estableciendo una comunicación directa entre estos y el Estado Mayor. En cuarto lugar, le cabía destinar los conscriptos a los cuerpos del Ejército diseminados en el territorio de la República y dirigir la organización de los cuerpos de supernumerarios y de reservas. En último lugar, centralizaba la información estadística producida por las Juntas Conscriptoras, con la finalidad de llevar un registro de la población hábil para el servicio de las armas en el momento de guerra.

³³⁷ El Estado Mayor General reformado estuvo conformado de cuatro secciones: Organización, Instrucción, Estudios Técnicos y Servicios Administrativos. Correspondía a la primera sección las tareas relativas a la organización de las fuerzas del Ejército, entre las que se encontraban las relativas al llamamiento, conscripción y movilización de los contingentes previstos en la Ley del Servicio Militar (Cfr. Decreto Supremo del 13 de febrero de 1901, en MGM 1901: 26 y 42-43).

En ese sentido, el Perú contó a partir de ese año de una institución centralizada y permanente que entre sus funciones regulares se encontraba la dirección y supervisión de la conscripción militar. A diferencia del pasado, en el que los gobiernos delegaban en la práctica en los jefes de cuerpos de línea el mantenimiento y el aumento de las fuerzas de sus unidades militares, con los defectos, abusos y autonomías que ello comportaba, en esta ocasión un órgano centralizado acompañaba las labores de conscripción, las dirigía, orientaba y fiscalizaba, siguiéndolas durante todo el proceso. Ello solo fue posible gracias al aumento de extensión de la red telegráfica que durante el gobierno de Piérola y el de sus seguidores (Basadre 2005, t. 11: 183). La rapidez de este tipo de comunicación hacía posible la emisión de órdenes y la exigencia de informes de manera directa entre el centro y las autoridades de los departamentos, extendiéndose así la «mirada» del EMG sobre las provincias.

Así, en un oficio de julio de 1901, el subjefto del Estado Mayor, Paul Clément, indicaba que algunas dificultades que se producían en los departamentos para el cumplimiento del llamamiento de conscriptos podrían subsanarse al «apelar á comunicación telegráfica para ganar tiempo». Indicaba Clément que la comunicación telegráfica directa con las autoridades provinciales evitaría el retraso que se producía cuando aquellas oficiaban a la Dirección de Guerra (del Ministerio) y no al Estado Mayor General, lo que «imped[ía] tomar providencia inmediata», pues:

[E]l servicio militar no puede estar sujeto á taxativas que demoran su ejecución y perturban la disciplina que debe prevalecer en todos sus actos: la actual organización militar que se persigue demanda solicitud y actividad oportuna é inmediata, lo que no se conseguirá si el Estado Mayor General no se entiende directamente con las autoridades que tienen que intervenir en la ejecución de la ley. Dígnese, pues, US oficiar á los Prefectos para que se dirijan al Estado Mayor General y cumplan las instrucciones que de este reciban.³³⁸

Ahora bien, inmediatamente reformada esta institución, se le confirió a Paul Clément, jefe de la Misión Militar francesa, el cargo de subjefto³³⁹, recayendo sobre él la responsabilidad directa de las tareas de llamamiento y supervisión de los

³³⁸ AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Oficio del Subjefto del EMG, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 1 de julio de 1901.

³³⁹ Cfr. Decreto del 10 de febrero de 1901, en MGM (1901: 22).

contingentes de conscriptos en los primeros años de aplicación de la Ley. El gobierno de López de Romaña depositó su entera confianza en este militar francés para organizar los primeros procesos de llamamiento y organización de los contingentes, dejando establecidos estos procedimientos como prácticas institucionales. Por ejemplo, en 1901, al realizarse la primera convocatoria de conscriptos a nivel nacional, siguiendo la Ley del Servicio Militar Obligatorio, se produjo un notable incidente en la ciudad de Huancayo que fue denunciado por los congresistas del departamento de Junín y diversos telegramas de vecinos de aquella ciudad. Para esclarecer lo sucedido, Clément asumió personalmente el caso, oficiando diversos telegramas al Subprefecto de la provincia y al Jefe de la Comisión Militar de los Departamentos del Centro, en los que se exigía el cumplimiento de la Ley y se reclamaba el funcionamiento imparcial de las instrucciones locales de conscripción.³⁴⁰

Por debajo del EMG, se crearon comisiones militares, como órganos dependientes de las Jefatura del Estado Mayor, encargados de la vigilancia directa de las operaciones de las Juntas Conscriptoras y Revisoras en las provincias del país³⁴¹. Resultaba lógico que desde el centro de la administración militar se destinara agentes supervisores, en tanto que las operaciones de conscripción se hacían a grandes distancias y recaían en instituciones de carácter civil, especialmente en los subprefectos de provincia, los cuales eran dependientes directamente del Ministerio de Gobierno al cual debían su primera lealtad. Por demás, mostraba la desconfianza que desde el Estado Mayor General sobre el correcto proceder de aquellas instituciones. Todas estas consideraciones fueron expresadas a los subprefectos del país, a través de una circular del Ministerio de Guerra y Marina fechada el 25 de febrero de 1901:

³⁴⁰Telegrama N.º 2, de Clément a Subprefecto, del 6 de setiembre de 1901: «llegado contingente á Lima, se han producido quejas personales [...] Los Sub-Prefectos que no cumplan son responsables por faltas»; Telegrama N.º 4, de Clément a Comisión Militar, del 6 de setiembre de 1901: «Compruebe si el Contingente está conforme con lista de sorteo, por prelación de número entre los de 19 años. Que envíe esta conforme á instrucciones. Proceda US con serenidad y energíá»; Telegrama N.º 5 de Clément a Comisión Militar, del 7 de setiembre de 1901: «US. hará las investigaciones que la naturaleza del caso requiere informando á la brevedad posible sobre el particular»; Telegrama N.º 8, de Clément á Comisión Militar, del 9 de setiembre de 1901: «Circunspección y legalidad de procedimiento de Comisión agena á toda duda». AHMP, 1901, “Expediente relativo a los conscriptos de la Provincia de Huancayo”, del 23 de noviembre de 1901.

³⁴¹ Cfr. Decreto del 15 de febrero de 1901, en MGM (1901: 57-58).

³⁴¹ Cfr. Decreto del 15 de febrero de 1901, en MGM (1901: 57-58).

[L]a extensión del territorio y los inconvenientes que por la distancia presenta una dirección central, conviene ensanchar, en cuanto sea posible, el radio de acción, vigilancia y ejecución: á este fin obedece el nombramiento de Comisiones militares con instrucciones detalladas para hacer ejecutar la ley, á la vez que, para organizar é instruir á las fracciones y á los cuerpos de supernumerarios y de la primera reserva.(Decreto del 15 de febrero de 1901, en MGM 1901: 57-58)

Como indicaba también la circular, le fue encomendada a estas comisiones la organización de los cuerpos de supernumerarios y las reservas, supervisar la movilización de los contingentes de conscriptos, además de atender los reclamos de las personas que fueran reclutadas a «viva fuerza» por las Juntas Conscriptoras. A las comisiones se les atribuyó estas tareas en más de un departamento, por lo que los jefes de estas y sus subordinados (un adjunto y un secretario) debían recorrer diferentes provincias, supervisando adicionalmente los registros a nivel distrital.³⁴² Dadas las peculiares condiciones de la capital, específicamente el tamaño de su población, se constituyó una oficina central de conscripción, la misma que se encargaba de centralizar las labores de las Juntas Conscriptoras de las provincias del departamento de Lima y del Callao, así también llevar a cabo las tareas de inscripción de la población de la capital y el sorteo de los futuros conscriptos de esa localidad.³⁴³

Dicha organización se mantuvo hasta 1905, fecha en la que se procedió a la división militar del territorio de la República, instituyéndose tres estados mayores regionales (Norte, Centro y Sur), dependientes estos del Estado Mayor General de Lima. Las circunscripciones bajo la jurisdicción de estas nuevas instituciones incluían a todos los departamentos del país, estableciéndose a su vez demarcaciones que se apoyaban en parte en las político-administrativas preexistentes (departamentos y provincias), debido a que los criterios de demarcación se hicieron siguiendo el tamaño de la población apta para su movilización. La nueva organización se estableció de acuerdo a niveles jerárquicos: las circunscripciones más amplias en la nueva demarcación recibieron el nombre de «regiones militares» (Norte, Centro y Sur) que incluían a la mayoría de los departamentos del país, salvo los

³⁴² Cfr. Decretos del 14 y 15 de febrero de 1901, en MGM (1901: 56-58).

³⁴³ Cfr. Decreto del 08 de julio de 1901, en MGM (1901: 69).

correspondientes a la Región Amazónica (Loreto y los territorios selváticos no sometidos al Estado); al interior de ellas, existían subdivisiones que recibían el nombre de «circunscripción», las cuales en la mayoría de casos congregaban a más de un departamento, mientras que el último nivel se superponía al territorio de las provincias en el ordenamiento político-administrativo tradicional del país.

Cuadro 17: División regional-militar del territorio peruano

Región	Circunscripciones	Departamentos	Cabeza de Región	Capitales de circunscripción
Norte	1. ^a	Tumbes		
		Piura	Piura	
		Lambayeque		
		Libertad		Trujillo
	2. ^a	Amazonas		
		Cajamarca		Cajamarca
Centro	3. ^a	Ancash		Huaraz
	4. ^a	Junín		Tarma
		Huanuco		
	5. ^a	Lima	Lima	
		Callao		
		Ica		
	6. ^a	Huancavelica		
		Ayacucho		
Sur	7. ^a	Apurímac		
		Cuzco		Cuzco
	8. ^a	Arequipa	Arequipa	
		Puno		Puno
	9. ^a	Moquegua		Moquegua
		Tacna		
	10. ^a	Loreto	Iquitos	
	11. ^a	Colonia de la región fluvial		

Fuente. Memoria del Ministerio de Guerra y Marina 1905 (1905: LV-LVI).

Esta nueva demarcación implicaba la constitución de una verdadera burocracia destinada a la organización militar de la población en caso de necesidad de movilización de soldados de cara a un conflicto bélico. A los estados mayores regionales les correspondía, en sus respectivas circunscripciones, recabar información del territorio, las vías y medios de comunicación, la población y los recursos disponibles, además de organizar con antelación la movilización e instrucción de conscriptos y ejecutarla en su momento cuando sobreviniese una situación de guerra. Si bien estas fueron sus funciones generales, uno de los

considerandos decisivos para organizar militarmente el territorio y crear los estados mayores regionales residía en las deficiencias existentes en el cumplimiento de la Ley del Servicio Militar Obligatorio. Según el Jefe del EMG, para 1905 no se habían «extinguido aún aquellos procedimientos que la Carta Fundamental condena». Indicaba que estos se verificaban en tanto que las instituciones encargadas de ejecutar la Ley no disponían de «la intervención y auxilio de ciertos funcionarios [militares]» por lo que su ejecución se «ha hecho difícil, irregular, ocasionando usurpaciones y abusos, ya en la formación de los registros, ya en la corrección de los sorteos, ya en la exactitud, en fin, en la reunión de los contingentes» (MGM 1905: LV).

La nueva organización territorial buscaba maximizar el control del Ejército sobre las Juntas Conscriptoras y los procedimientos propios del servicio militar. Implicaba el establecimiento de una burocracia estrictamente militar, de carácter permanente, y con mayor alcance sobre el territorio que las anteriores comisiones militares. En primer lugar, su carácter permanente y no comisionado les confería sostenibilidad en el tiempo para el cumplimiento regular de sus funciones. En segundo lugar, el control de los funcionarios militares regionales alcanzaba hasta el nivel provincial, destacándose un jefe militar provincial ad hoc encargado de acompañar constantemente las tareas de las juntas conscriptoras, es decir, observando y absolviendo cuestiones relativas al sorteo, calificación y remisión de los conscriptos, además de revisar y depurar los registros militares en este nivel (MGM 1905: LIV). El ministro de Guerra y Marina, Pedro Muñiz, indicaba en su memoria de 1904 que «[la Ley del Servicio Militar Obligatorio] requiere para su mejor cumplimiento la existencia del personal militar, con suficiente autoridad, en cada una de las provincias. De lo contrario, su ejecución no dejará de encontrar hasta hoy dificultades» (MGM 1904: XXXIII). Respecto a los registros militares, dentro del nuevo esquema regional, debían ser centralizados en las oficinas de los estados mayores regionales, desde donde serían remitidos al EMG, luego –claro está– de una segunda depuración (MGM 1905: LVII).

El montaje de esta estructura fue sumamente complejo y difícil, considerando los límites presupuestarios y organizativos del pequeño Estado peruano de principios

de siglo XX.³⁴⁴ Sin embargo, en virtud de ella, durante la primera década de implementación de la Ley, el Estado logró llamar de una manera constante y regular a cerca de veinte mil hombres para que se incorporaran a las filas de los ejércitos regular o permanente. Sobre una población que registró el censo de 1876 en 2 699 000 habitantes (en 1913 se consideraba que el número de habitantes del país alcanzaba los 3 382 525³⁴⁵), la presión anual que ejercía el Estado a través del Ejército sobre la sociedad resultaba ser muy reducida. Contabilizados solo los varones (1 365 895), la proporción de conscriptos llamados varió entre 1901 y 1910 entre 0.07 y 0.14%, dependiendo del tamaño que adoptara el Ejército. Computándose el número anual de conscriptos en función del número de soldados que exigían los licenciamientos y bajas del ejército regular, entre 1901 y 1903, el número de llamados al servicio fue de mil por año, cantidad suficiente para renovar parcialmente un ejército de tres mil soldados; a partir de 1904, las tropas del Ejército aumentaron a cuatro mil hombres, por lo que la cifra del llamamiento se elevó a dos mil conscriptos.³⁴⁶

Los jóvenes que anualmente debían ofrecer la poblaciones del país se distribuyó, como era de esperarse, siguiendo las cifras oficiales que el Estado disponía sobre su población, es decir, sobre el censo de 1876. Cada distrito debía remitir un número determinado de hombres especificado por un decreto supremo y calculado sobre su población para formar el contingente anual.³⁴⁷ El peso del llamamiento, por tanto, debía distribuirse proporcionalmente entre los distritos y provincias del país (ver anexos N.º 3 y 4), lo que implicaba una ruptura de las inveteradas prácticas de reclutamiento por las cuales la casi totalidad del Ejército era extraída de los pueblos y caseríos serranos, como criticaba Tadeo Simeón Antay a

³⁴⁴ Para 1906 se encontraban en funciones y con su personal completo los estados mayores regionales del Centro y del Norte, mientras que el del Sur no estuvo organizado, con su personal completo, hasta 1908 (MGM 1908: 9).

³⁴⁵ Los datos proyectados sobre la población peruana a principios de la década de 1910 provienen de Stiglich (1913: 126).

³⁴⁶ Si consideramos ambas cifras, entre 1901 y 1903, la presión anual que ejercía el llamamiento de conscriptos sobre la población no superaba el 0,07%, mientras que con el aumento a dos mil llamados en 1904 este guarismo se elevaba por encima del 0,14%. Respecto al número de efectivos del Ejército, puede verse Villanueva (1973: 410-411).

³⁴⁷ En un oficio dirigido al Director de Guerra, el entonces sub jefe del EMG, Paul Clément, indicaba que la distribución del contingente «tiene por base el censo de 1876 último oficial, tomando solo en consideración el número de varones peruanos existentes en aquella fecha en cada circunscripción territorial. La distribución ejecutada no deja de ser aproximativa, pero no hay posibilidad de hacerla más exacta, mientras no se levante otro censo ó no se practique con estricta regularidad la inscripción militar en todos los Distritos de la República» (AHMP, 1901, Caja N.º 4, “Oficio del Sub jefe del EMG, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 15 de abril de 1901).

finis del siglo XIX³⁴⁸. Si bien el rostro del soldado siguió (y seguiría) siendo del poblador indígena serrano, a partir de la implementación de la Ley ello se fundamentaba específicamente en que la población de este origen étnico constituía alrededor de las dos terceras partes de los habitantes del país y no necesariamente en su debilidad para resistir el reclutamiento forzado. Así, sobre un llamamiento de mil conscriptos, los departamentos serranos como Ancash, Cuzco, Junín y Puno otorgaban juntos más del 38% del contingente (104, 104, 79 y 101 conscriptos, respectivamente), mientras que los predominantemente costeros de Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima (incluyendo el Callao) y Piura, no dejaban de otorgar una cantidad importante que superaba el 20% (24, 36, 58, 91 y 49 conscriptos, respectivamente). En este sentido, por lo menos formalmente desde la Ley del Servicio Militar Obligatorio y los gobiernos de la primera década del siglo XX, existió una preocupación por hacer más equitativa la contribución de sangre entre las regiones del país (Anexo N.º3).

Como hemos visto, el peso de la conscripción, considerando el total de la población, no era excesivo. Siguiendo el decreto de llamamiento para el 1 de junio de 1904 (Anexo N.º5), que estipulaba la conscripción de mil hombres –salvo excepciones– en la mayoría de los distritos del país, el número de jóvenes destinados al servicio no superaba el 0.01% de su población total y el 0.02% de la población masculina; cuando el llamamiento de conscriptos aumentó a dos mil hombres, estas proporciones se duplicaron consecuentemente. Ahora bien, aunque la presión no era necesariamente considerable, a pesar de su proporcionalidad, su *peso* fue ciertamente diferenciado, tanto por el número de habitantes en las localidades, como por la condición de los mismos. Era de suponerse que aquel peso resultaría mayor en los distritos con menor población y orientados principalmente a las actividades agropecuarias. Teniendo el país una población reducida y dispersa en un amplio territorio, existían distritos como los de Chala, Cochas o Ichupampa con una población total que no superaba los mil habitantes y el número de varones constituía a veces poco menos que la mitad de esa cifra (Anexo N.º5). Considerándose, adicionalmente, que en estos distritos las familias se encontraban distribuidas en estancias y caseríos, es de comprenderse que en estos últimos tipos de asentamientos

³⁴⁸El Comercio. Lima, 22 de abril de 1896, edición de la tarde.

la presión debió ser concebida ciertamente como superior³⁴⁹. Al interior de los distritos, en sus caseríos y estancias, a pesar de que los llamados al servicio no fueran más que un ciudadano por distrito, la pérdida de un joven en edad productiva y reproductiva no debió ser vista positivamente. En unidades productivas tan pequeñas, el que uno de los hijos de la comunidad marchara fuera de ella, para tal vez no regresar, debió ser visto con ribetes de tragedia. Lo contrario podía esperarse en distritos más numerosos como Lima y los cercados de Cuzco, Huaraz y Arequipa, donde las poblaciones superaban los quince mil habitantes y se encontraban menos dispersas, la pérdida de los jóvenes debió verse como una molestia inevitable, en tanto que la mayor concentración de fuerzas coercitivas hacía que burlar la exigencia de hombres fuera más difícil.

6.5. Las limitaciones de la implementación ley del servicio militar

La Ley del Servicio Militar Obligatorio tuvo una serie de limitaciones propias de la implementación de una institución sumamente compleja, aplicada en una sociedad marcadamente rural y disgregada en un amplio territorio, por medio de un Estado con reducidas, aunque ascendentes, capacidades burocráticas. Los documentos de la primera década del siglo XX muestran con bastante claridad las luchas de un Estado central, representado por el Ministerio de Guerra y Marina y el EMG, por dar cumplimiento a las prescripciones de Ley, frente la resistencia, impericia o desidia de las instituciones locales de conscripción (Juntas Conscriptoras, subprefectos y gobernadores) y la resistencia de los notables locales y la propia población sometida a los mandatos de la Ley. Los deseos del Ministerio de Guerra y el EMG de aplicar irrestrictamente las disposiciones de la norma chocaban con las limitaciones estructurales del propio Estado peruano y su sociedad.

³⁴⁹ Por ejemplo, en el distrito serrano de Chala (provincia de Camaná, departamento de Arequipa), la población total era de 373 habitantes, siendo los varones 207, según el censo de 1876. El llamamiento de 1904 sobre mil conscriptos exigió un hombre para ser incorporado al Ejército, lo que implicaba con su partida a las filas que se destinaba el 0.27% de la población del distrito y 0.48% sobre el número de varones.

Una vez sancionada la Ley en diciembre de 1898, esta no fue aplicada con todo vigor hasta 1901, luego que fue sancionado su Reglamento (diciembre de 1900) y se dispuso la reforma del EMG. Había retrasado su implementación, sin duda, la revolución abortada, liderada por los caudillos Andrés A. Cáceres, Augusto Durand y Guillermo Billinghurst, la cual llevó acciones ofensivas en diversas provincias del país entre 1899 y 1900. Por ejemplo, el Subprefecto de Huamachuco manifestaba en 1900 que los documentos de conscripción que se habían levantado en la provincia, a propósito de la reactivación de las guardias nacionales en 1898, habían desaparecido «con las repetidas invasiones de los trastornadores del orden público»³⁵⁰. Efectivamente, para 1900, los únicos trabajos de conscripción que habían sido efectuados eran los relativos a la inscripción de ciudadanos en los registros de la Guardia Nacional, poco antes de la dación de la Ley del Servicio Militar. Estos primeros registros se realizaron sin el control y vigilancia de una institución centralizada, bajo la responsabilidad de las autoridades locales; por ello, en muchas provincias del país no se realizó el empadronamiento ordenado por el Gobierno, y en tantas otras este fue deficiente.³⁵¹

Cuando en junio de 1900, el Ministerio de Guerra y Marina ofició una circular a las subprefecturas para informar sobre sus intenciones de ejecutar la Ley del Servicio Militar, en algunas provincias ni siquiera se conocía el texto de la misma, como lo informaba el Subprefecto de Abancay al Ministerio en agosto de ese año.³⁵² En ese sentido, las tareas de conscripción solo se hicieron con regularidad a partir de 1901, como hemos dicho, con el apoyo y vigilancia del EMG y las comisiones militares. Para esas tempranas fechas, los subprefectos y los jefes de las comisiones

³⁵⁰ AHMP, 1900, Caja N.º 14, “Oficio del Prefecto de La Libertad, José R. de la Puente, al Director de Guerra”, del 11 de setiembre de 1900.

³⁵¹ Por ejemplo, Ortiz de la Puente transcribió en su artículo “Educación Civil en el Ejército” un oficio de una de las autoridades locales de Puno, donde se reportaba, en junio de 1898, que en los registros de la Guardia Nacional figuraban «en muy pequeña escala» miembros de la población indígenas, dado que en dichas regiones «existe la creencia de que la inscripción implica un disimulado reclutamiento, del cual rehúyen por todos los medios posibles» (*El Comercio*. Lima, 16 de junio de 1898, edición de la mañana). Por su parte, el Prefecto de Piura, en 1902, reportaba que «[l]os Registros primitivos fueron hechos en mala forma, desde 1898, repitiéndose los mismo vicios en 1900» (“Memoria del Prefecto de Piura, Pedro E. Muñiz”, p. 34, en Ministerio de Gobierno y Policía, 1902). Cuando en 1900 se empezaron a hacer los preparativos para el primer llamamiento nacional de conscriptos, no se habían aún remitido los registros matrices de 1898 de muchas provincias de los departamentos de Piura, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ancash, Junín, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho y Tacna (AHMP, 1900, Caja N.º 13, “Oficio de José R. de la Puente al Director de Guerra”, del 4 de junio de 1900).

³⁵² Cfr. AHMP, 1900. Caja N.º 5-B, “Oficio del Subprefecto de Abancay, M. B. Dulanto al Director de Guerra”, del 10 de agosto de 1900.

militares reportaron una serie de limitaciones logísticas que, poco a poco, empezaron a ser salvadas por el Gobierno. La necesidad de locales para el funcionamiento de las Juntas de Conscripción y las comisiones militares, así como la remisión de los materiales (específicamente, de los registros, cuadernos y boletos de inscripción) fueron resueltas relativamente rápido en los primeros años, adoptándose las medidas administrativas correspondientes.³⁵³

No sucedió así con un aspecto capital para las tareas de conscripción, nos referimos a la confección de los diferentes documentos de registro de la población hábil para el servicio militar. La Ley hacía recaer esta responsabilidad en las Juntas Conscriptoras, sin embargo, dado que tenían una forma de gobierno colegiado (lo que implicaba que sus funciones eran estrictamente deliberantes y no administrativas), recaía en su Presidente, es decir, el Subprefecto, las tareas emanadas de los acuerdos de las Juntas y las responsabilidades operativas que la Ley les prescribía. En ese sentido, resultaba responsabilidad de los subprefectos realizar las labores cotidianas de confección de los documentos de conscripción, labor hartamente minuciosa y trabajosa para la cual no disponían de personal estable y especializado. Para evitar recargar el presupuesto, aumentando una plaza en las subprefecturas, lo que se acordó por la Ley del Servicio Militar fue la entrega de una gratificación que no podía exceder los 200 soles a los subprefectos que remitieran anualmente al EMG todos los documentos de conscripción en conformidad con el Reglamento, las disposiciones de dicho órgano y los modelos que se enviaron desde Lima.³⁵⁴

³⁵³ Respecto a los documentos necesarios para la confección de los registros militares y los reglamentos de la materia, estuvieron en poder de varios subprefectos con mucho retraso en 1900, por lo que las tareas de conscripción se vieron perjudicadas, según manifestaba el Director de Gobierno. (AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Oficio del Director de Gobierno al Director de Guerra”, del 23 de diciembre de 1901). Así también, respecto a los locales para el funcionamiento de las comisiones militares, fueron subsanándose: el jefe de la Comisión Militar de los departamentos de Lima, Ica, Junín y el Callao, Emilio Castañón, solicitó al EMG la disposición de un local en la capital para realizar sus funciones «con el mobiliario preciso», además de «la cantidad suficiente para la adquisición de libros, carpetas, tinteros y demás utensilios propios á la instalación de esta clase de despachos» (AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Oficio del Jefe de la Comisión de la 1.ª Circunscripción Territorial Militar al Jefe del EMG”, del 6 de marzo de 1901. El Ministerio de Guerra y Marina, además de atender la solicitud de Castañón, dispuso que las prefecturas otorgaran una habitación en sus respectivos locales para las demás comisiones militares (AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Oficios del Jefe del EMG, José R. de la Puente al Director de Guerra”, del 14 y 27 de marzo de 1901).

³⁵⁴ Cfr. Reglamento de la Ley de Servicio Militar, del 10 de diciembre de 1900, Artículo 111º.

Al no disponer las subprefecturas de personal administrativo específico para la elaboración y rectificación de los registros de conscripción, se convirtió en una práctica general la contratación por parte de aquellas de una persona ad hoc para tales tareas: un amanuense. Así, por ejemplo, en febrero de 1901, el Subprefecto de Huánuco solicitaba al Prefecto fondos que, entre otras cosas, debían ser destinados al pago de un amanuense.³⁵⁵ La respuesta institucional desde el Estado Mayor a las diferentes solicitudes de fondos con este objeto, se limitó a notificar que los gastos ocasionados en la elaboración de los registros y todos los documentos de conscripción militar debían hacerse con cargo a la gratificación prevista en la Ley, como se manifestaba en un informe a propósito de una solicitud remitida por el Prefecto de Huancavelica, en junio de 1902. En su oficio, el Prefecto requería dinero para la contratación de un amanuense en la capital del departamento, a fin de realizar unas copias de los registros militares, debido al «escaso personal de empleados» y la «importancia i delicadeza del trabajo»³⁵⁶. La respuesta de la Segunda Sección del Estado Mayor era clara al respecto, responsabilizando de todos los documentos relativos a la Conscripción a los subprefectos:

La formación y rectificación de los Registros Militares, corren á cargo de los Subprefectos en cada provincia, como Presidentes de las Juntas de Inscripción. Para este objeto, y las copias que deben remitirse al Estado Mayor General, la ley acuerda un premio anual de 200 soles y es con cargo á esta gratificación que se ha acordado á varias Subprefecturas el pago del amanuense que necesiten.³⁵⁷

La práctica de asignar fondos *ex post* a los subprefectos por las labores de conscripción buscaba generar estímulos suficientes para que aquellas se realizaran de acuerdo a las prescripciones de la Ley y los requerimientos del EMG, pues, como sucedió en muchos de casos, varios subprefectos no se hicieron acreedores de tal recompensa, en tanto que los documentos que enviaron al EMG no cumplían con los requisitos exigidos por esta institución. Sin embargo, por otro lado, la ausencia de personal especializado y permanente en tales tareas dificultaba la acumulación de la experiencia administrativa suficiente para llevarlas a cabo de manera uniforme y

³⁵⁵ AHMP, 1901, Caja N.º 6, “Oficio del Subprefecto de Huánuco al Prefecto de Huánuco”, del 28 de febrero de 1901.

³⁵⁶ AHMP, 1902, Caja N.º 3, “Oficio del Prefecto de Huancavelica al Director de Guerra”, del 26 de junio de 1902.

³⁵⁷ *Ibíd.*

regular³⁵⁸. En este aspecto, ni la Ley ni las disposiciones gubernamentales posteriores ofrecieron los recursos administrativos suficientes para la ardua labor de confección de los registros de conscripción. Salvo en casos concretos, sobre todo en las ciudades importantes, como Lima, los registros adolecían de errores, por lo que eran rechazados por el EMG, ordenándose su continua rectificación. En el Anexo N.º 6 mostramos, a título de referencia, una lista de expedientes que los subprefectos enviaban, solicitando gratificaciones por la elaboración de registros militares, mostrándose en él una considerable cantidad de solicitudes rechazadas por no presentar los documentos cumpliendo los requerimientos que exigía el EMG.

Parte importante del problema radicaba en la misma base de la inscripción, trabajo que era responsabilidad de la Junta de Inscripción distrital, presidida por los gobernadores. Los subprefectos, además de los reclamos por la insuficiencia del personal administrativo, manifestaban que los gobernadores en la mayoría de casos no tenían la cualificación suficiente para realizar adecuadamente los registros distritales. Así, el Subprefecto del Cercado de Huánuco excusaba el retraso de las tareas de registro provincial «por la ignorancia y demora de los gobernadores á la mayor parte de los que hubo que devolverles mal hechos los trabajos para que los rehicieran»³⁵⁹. Este defecto no era privativo de alguna que otra provincia, muy por el contrario, era una situación muy extendida, como se consignaba en un informe emitido por los responsables del viaje de estudios de la Escuela Superior de Guerra en los departamentos de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Piura entre 1905 y 1906. El comandante Jacques Romieux, miembro de la Misión Francesa, después de hacer diversas averiguaciones concluía que «las operaciones de la Junta Inscriptora cuya composición (Gobernador, etc.) no dan garantía ninguna de exactitud á las inscripciones, base de todo [el] sistema.»³⁶⁰

³⁵⁸ En su memoria anual, el prefecto de Junín, Manuel Francisco Diez Canseco, formulaba una recomendación en el mismo sentido, indicando que a pesar de los esfuerzos de los subprefectos, «se impone en darles un amañense que siendo parte de las Juntas [Conscriptoras] á que me refiero debiera ser pagado por el Ministerio de ese ramo [de Guerra y Marina]» (“Memoria del Prefecto de Junín, Manuel Francisco Diez Canseco, de 1902”, en Ministerio de Gobierno y Policía, 1902).

³⁵⁹ AHMP, 1906, Caja N.º 8, “Informe del Subprefecto de Huánuco, Manuel E. Robles, al Prefecto del departamento de Huánuco”, del 12 de mayo de 1906.

³⁶⁰ AHMP, 1905, Caja N.º 4, “Informe sobre la aplicación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en zona recorrida durante el viaje de estudios de la Escuela Superior de Guerra”, fol. 5.

Aunque las condiciones administrativas hubieran sido óptimas, los registros de conscripción no podían reflejar a la población del país hábil en su integridad, debido a tres factores. El primero lo constituía la ausencia de un sistema nacional de registro civil de la población total del país. No se hizo un censo nacional en el siglo XX hasta 1940, por lo que no existía un instrumento que permitiera saber el total de habitantes, y menos aún su distribución étnica y su estado civil. El último censo del siglo XIX (el de 1876) sirvió de base al EMG para la elaboración de la distribución distrital de conscriptos que debían ser llamados al servicio, sin embargo, este no era más que un instrumento imperfecto para tal fin, considerándose que el número de la población debía haber sufrido modificaciones importantes después de más de veinte años. La necesidad de un censo nacional previo a la implementación del servicio militar había sido un reclamo de algunos actores militares y civiles, desde que se debatía el Proyecto de dicha Ley. Por ejemplo, el militar que escribió con el seudónimo de «Foción», en 1898, consideraba «la necesidad ineludible de establecer el censo de la República, desde luego, y después fomentar la inscripción estadística anual, como bases esenciales para el eficaz cumplimiento de la presente Ley»³⁶¹. De similar opinión fue el diputado Santiago Giraldo, quien criticaba dicha norma como prematura, entre otras razones por la inexistencia de un censo nacional que permitiera «informar acerca del número, magnitud, calidad y cantidad» de los hombres hábiles para el servicio (1899: 13).

A falta de un censo nacional, la información estadística disponible resultaba ser la registrada por las municipalidades y los documentos parroquiales. Era función de las municipalidades tener un registro cívico de la población de su jurisdicción, mientras por los oficios de los sacramentos los curas de las parroquias disponían de la información de los nacimientos (actas de bautismo), matrimonios y defunciones. No siempre las municipalidades contaban con registros civiles actualizados³⁶², por lo que la información de las parroquias resultaba indispensable. A ella se debía agregar

³⁶¹ *El Comercio*. Lima, 25 de agosto de 1898, edición de la mañana.

³⁶² En su informe sobre los departamentos que visitó el viaje de estudios de la Escuela Superior de Guerra, el comandante Luis Regal manifestaba que «[u]na de las causas esenciales á que se debe las dificultades que presenta el control de la inscripción es que no se halla bien establecido en el país el estado civil; de aquí que para corregir los defectos que presentan los Registros, se hace indispensable conocer los nacimientos ocurridos en la República desde 1880 hasta la fecha, y en seguida ver las defunciones ocurridas» (AHMP, 1905, Caja N.º 4, “Informe sobre la aplicación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio en zona recorrida durante el viaje de estudios de la Escuela Superior de Guerra”, fol. 4).

la información estadística de las autoridades judiciales. Sin embargo, todas estas autoridades en reiteradas ocasiones fueron reacias a la entrega de la información para la confección y rectificación de los registros militares, como lo hacía saber el ya general Paul Clément al Ministerio de Guerra y Marina, mediante dos oficios de julio de 1906: «algunos Alcaldes Municipales se niegan á proporcionar á los Subprefectos, presidentes de Juntas Conscriptoras, los datos que les respectan para la rectificación de los registros», al igual que «algunos Jueces de 1ª Instancia y Párrocos, se niegan á proporcionar á los Subprefectos» la mencionada información.³⁶³

Resultaba evidente que estos actores locales se resistían a las reconvenciones del Ejército, en tanto que la entrega de dicha información no les reportaba beneficio alguno, muy por el contrario, resultaba sumamente probable que les granjeara animadversiones o roces al interior de las comunidades locales. De ellos, los párrocos fueron especialmente reticentes a la entrega de la información para la rectificación de los registros militares, mostrando así la resistencia a perder el control sobre sus fieles, como lo hacía presente el Subjefe del Estado Mayor Regional del Sur, en 1909, en un oficio dirigido al Jefe del EMG:

[V]arios Jefes Provinciales de la Región á mi cargo, se quejan de los SS. Párrocos, quienes á pesar de los términos respetuosos con que se les pide los datos relativos á los individuos que han fallecido, para los efectos de la rectificación de los Registros, se niegan á proporcionarlos y ni aún permiten que dichos funcionarios los tomen de los libros de la Parroquia en que residen.³⁶⁴

El segundo factor que dificultaba la constitución de registros más concordantes con la realidad residía en las propias actitudes de la población respecto al servicio en el Ejército. Desde tempranas fechas se reportó el rechazo general de diversas poblaciones al servicio, refiriéndose al temor que este generaba, sobre todo en las poblaciones de carácter indígena. El prefecto de Ayacucho, J. Álvarez Páez, informaba al Ministerio de Gobierno, en 1902, que: «La Ley de servicio militar es una de las más difícil aplicación en nuestros Departamentos del Interior: creen los indios que por el hecho de estar vestidos de soldados están más inmediatos á la

³⁶³ AHMP, 1906, Caja N.º 8, “Oficios del Jefe del EMG, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina”, del 5 de julio de 1906.

³⁶⁴ AHMP, 1909, Caja N.º 5, “Oficio del Subjefe del Estado Mayor Regional del Sur, Saturnino Benavides, al Jefe del Estado Mayor del Ejército”, del 21 de abril de 1909.

muerte»³⁶⁵. Similar actitud fue reportada por el Subprefecto de Amazonas a la Dirección de Guerra, indicando que existía en su circunscripción un «temor nato que á este servicio abrigan los hijos del lugar», por lo que el simple hecho de la conscripción «los ahuyenta á la montaña, donde es completamente difícil sacarlos, dando así margen á que solo la clase media, sea la única que se inscriba en los registros»³⁶⁶. Como se verá más adelante, fue una táctica recurrente en las poblaciones rurales mudarse a otras provincias para evitar el registro y la conscripción misma. Y si se considera que inscripción se debía hacer por medio de la presentación voluntaria de los ciudadanos (personal o por medio de apoderado), tal táctica podía llevar al extremo que en algunas provincias no se pudiera registrar jóvenes en la edad prevista.

En 1907, el jefe de la Séptima Circunscripción, Francisco Luna, se quejaba de las informaciones de los gobernadores de los distritos de la provincia de Anta, a quienes no daba crédito que «no ha[bía] jóvenes de 19 años para inscribirse, porque esta circunstancia [podía] ocurrir en un Distrito, pero no en todos los de la Provincia.»³⁶⁷ Concordando con Luna, no parecían plausibles las excusas de los gobernadores de Anta, sin embargo, casos similares se repetían en otras provincias, como en Yauyos, en donde el Subprefecto manifestaba a su superior, ese mismo año, una situación parecida: «en los distritos de esta provincia ya no quedan sino ancianos y mozos casados, pues los individuos hábiles para prestar sus servicios en el Ejército han fugado á otro departamento».³⁶⁸ Estas circunstancias llevaban a una visión pesimista respecto a la veracidad de los Registros de Inscripción Militar hechos hasta ese entonces, como lo consideraba propio jefe del Estado Mayor del Norte, Samuel Palacios Mendiburu, al asumir su cargo en 1905:

En seis años que tiene de práctica la Ley de Servicio Obligatorio, no se conseguido la inscripción total en ninguno de los distritos del Territorio Nacional, lo prueba que: 1. que todos los contingentes, sin embargo de ser insignificante el número pedido, traen enrolados; 2. Que el número total de inscripciones no

³⁶⁵ “Memoria del Prefecto e Ayacucho J. Álvarez Páez, 1902”, p. 30, en Ministerio de Gobierno y Policía (1902).

³⁶⁶ AHMP, 1901, Caja N.º 6, “Oficio del Subprefecto de Amazonas al Director de Guerra”, del 2 de abril de 1901.

³⁶⁷ AHMP, 1907, Caja N.º 3, “Copia de Oficio del Jefe de la 7ma. Circunscripción de los Departamentos de Apurímac y Cuzco al Jefe del Estado Mayor Regional del Sur”, del 6 de junio de 1907.

³⁶⁸ AHMP, 1907, Caja N.º 8, “Oficio del Prefecto de Lima al Director de Guerra”, del 17 de julio de 1907. En dicho oficio, el Prefecto transcribió el oficio del Subprefecto de Yauyos.

corresponde á la proporción estadística, tomando como base el censo de 1876 pesar de que es notoriamente sensible que la población, desde ese año ha crecido notablemente, y 3. Que hay distritos y aún capitales de Provincia que no han obtenido una sola inscripción, por consiguiente, mientras los Registros sean incompletos responden mal á su objeto.³⁶⁹

Ni la constitución de las comisiones militares, primero, ni la organización militar regional, después, lograron resolver totalmente las imperfecciones de los registros militares provinciales y distritales. Los miembros de las comisiones militares tenían entre sus funciones vigilar la correcta elaboración de los registros distritales y, en el caso de que estos fueran incorrectos, corregirlos. Es así que debían marchar distrito por distrito para compulsar los registros de inscripción militar con la información estadística disponible en la localidad. Sin embargo, diversos indicios, mostraban que sus resultados no estaban de acuerdo a sus obligaciones, como lo daba a entender en 1901 el Director del Ministerio de Gobierno a su homólogo en la cartera de Guerra:

Otro de los motivos mas poderosos que inutilizan en muchas ocasiones los esfuerzos del Subprefecto, es la dificultad, de que las comisiones [militares] cumplan con oportunidad con la rectificación de las inscripciones distritales a que están obligados. [...] todas las dificultades que ponen los que las componen, cuando se ofrece salir de la capital de la provincia a recorrer los distritos. Unos alegan que, desde que sirven sin sueldo ó nada están obligados; otros que es necesario que se les flete bestias, ó exigen comodidades que gravarían directamente al Subprefecto, desde que no hay partida para los gastos de movilidad de la Junta.³⁷⁰

Las tareas de inscripción militar no eran las únicas que presentaron problemas en el periodo estudiado; en general, no faltaron denuncias de abusos y *errores* en los otros actos de conscripción, como los sorteos y la calificación de los conscriptos, tal como veremos más adelante. Ahora nos interesan las limitaciones organizacionales que dificultaban la puesta en marcha de los procedimientos de la conscripción. Habíamos señalado que los subprefectos eran, en realidad, los responsables principales

³⁶⁹ AHMP, 1905, Caja N.º 8, “Oficio del Jefe del Estado Mayor Regional del Norte Raúl Palacios Mendiburu al Jefe del EMG”, del 6 de julio de 1905.

³⁷⁰ AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Oficio del Director de Gobierno al Director de Guerra”, del 23 de diciembre de 1901.

asignadas por la Ley. Por un lado, eran quienes se encontraban en constante comunicación con las instituciones militares; por otro lado, recaía sobre ellos las responsabilidades de los errores en el proceder de las Juntas Conscriptoras, al ser las únicas autoridades permanentes. El diseño de la Ley les había conferido un enorme encargo. Sin embargo, las tareas de conscripción eran una función adicional a las diversas tareas propias de su cargo. Varios subprefectos se excusaron de las demoras en los procedimientos del servicio militar debido a sus múltiples ocupaciones, como en octubre de 1901 indicaba Alejandro Velasco, a la sazón subprefecto de Paruro, al Prefecto de Cuzco. Velasco solicitaba una prórroga de diez días para la entrega de los documentos de conscripción, en virtud de las diversas tareas relacionadas con el ramo de Gobierno que tenían el mismo carácter de urgente, pues debía realizar la «facción de inventarios de la Subprefectura, id. Cuadro de notables de la provincia, id. Id de embarados de la id, id padrón de vecinos, id, planos para cárceles y escuchas, aparte de que á la vez US me ordena constituirme en Carreca con motivo de un recurso de D. Narciso Loayza Arestegui.»³⁷¹

Asimismo, dificultaba las labores de las Juntas Conscriptoras el cambio constante de subprefectos, ya sea por su traslado a otros puestos, su suspensión o destitución. De ello daba cuenta, en 1901, el Director de Gobierno al de Guerra, excusando la demora de estas autoridades en el cumplimiento de sus tareas de conscripción: «En las provincias de Jauja i Huancayo, se han cambiado en menos de un año tres Subprefectos»³⁷². El cambio constante de estas autoridades obstaculizaba el aprendizaje de los complejos procesos que les encargaba la Ley del Servicio Militar, como lo reconocía el Prefecto de Lambayeque, quien informaba al Gobierno que en la provincia de Chiclayo, entre agosto y diciembre de 1901, habían pasado por el puesto tres subprefectos, cada uno de los cuales cuando «se encontraba en el período de estudio y preparación para llenar las funciones de su cargo como presidente de la Junta Conscriptora, era remplazado por otro funcionario que tenía que hacer la misma labor.»³⁷³

³⁷¹ AHMP, 1901, Caja N.º 1, “Oficio del Subprefecto de Paruro, Alejandro Velasco, al Prefecto del Departamento de Cuzco”, del 15 de octubre de 1901.

³⁷² AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Oficio del Director de Gobierno al Director de Guerra”, del 23 de diciembre de 1901.

³⁷³ “Memoria del Prefecto de Lambayeque, 1902”, p. 64, en Ministerio de Gobierno y Policía (1902).

Una de las operaciones más delicadas del proceso de conscripción resultaba ser la calificación de los jóvenes sorteados. Correspondía a los miembros de las Juntas de Conscripción sancionar el envío de los sorteados, observando la legalidad de los procedimientos, calificar si aquellos se encontraban dentro de las excepciones de la Ley y absolver las reclamaciones que se presentasen. No deja de ser obvio, por la cantidad de reclamos y solicitud de excepciones que se hicieron a instancias del Ministerio de Guerra, que estas instituciones no cumplían con sus funciones a cabalidad. En 1902, el coronel Justiniano Borgoño, como jefe de la Comisión Militar de los departamentos de Lima, Ica y Junín, daba cuenta al Ministerio de Guerra el deficiente trabajo de las Juntas Conscriptoras de esas jurisdicciones después de haberlas sometido a inspección personal:

Espresas y terminantes son las atribuciones que el Reglamento señala en su artículo 41 á las Juntas Conscriptoras; pero, éstas salvo honrosas excepciones, apenas si se preocupan de llenar sus sagrados deberes. *En verdad* los únicos que trabajan son los amanuenses-archiveros, bajo la dirección del Subprefecto, cuando es pundoroso y digno. Ni el Juez de Paz, ni el Síndico municipal, ni el médico titular llenan fielmente su cometido. Se reúnen rara vez, no conocen porque no se contraen á estudiarlas, la ley, el reglamento y las instrucciones; ni ayudan a la facción de los documentos, porque la consideran pesada y dificultosa, porque desde que no les reporta utilidad pecuniaria, *no quieren sacrificar su tiempo*. Su acción es *nula y negativa* y sobre este particular llamo especialmente la atención de US. (Borgoño 1902: 11)

Dentro de las calificaciones que sobre los sorteados les correspondía a las Juntas de Conscripción se encontraba la relativa a la aptitud física y salud de los futuros conscriptos. Uno de los objetivos de la Ley había sido garantizar al Ejército el ingreso de hombres jóvenes y sanos capaces de afrontar las penalidades de la vida en el cuartel. La Ley disponía la incorporación de un médico titular (o, en su defecto, un empírico) en el seno de esas instituciones para cumplir con tal misión. Ello suponía la existencia en todas las provincias del país de personal médico con suficiencia profesional y los materiales adecuados para cumplir dicho encargo. Sin embargo, este presupuesto era lejano a la realidad para la primera década del siglo XX. Como mostraban las estadísticas de baja de los conscriptos recién llegados, la mayoría de las causales se

debían al envío de personas con defectos físicos o enfermedades crónicas, las que correspondía detectar al personal médico adscrito a las Juntas Conscriptoras.

**Cuadro 18: Número y porcentaje de conscriptos licenciados por enfermedades
(Segundo semestre de 1904-Primer semestre de 1908)**

Año / Semestre (1)	1904.2- 1905.1	%	1905.2- 1906.1	%	1906.2- 1907.1	%	1907.2- 1908.1	%
Conscriptos reconocidos	2330		1836		2026		1673	
Tuberculosis	90	3.8	29	1.6	27	1.3	90	5.3
Otras afecciones	156	6.7	79	4.3	108	5.3	166	9.9
Total de licenciados	246	10.5	108	5.9	135	6.7	256	15.3

Fuente. “Memorias del Jefe de Sanidad Militar y Naval (1905-1908)”, en *Memorias del Ministro de Guerra y Marina (1905-1908)*. Cuadro de elaboración propia.

- (1) Las cifras de las estadísticas de la Sección de Sanidad Militar fueron elaboradas cada seis meses desde el segundo semestre de 1904. En el presente cuadro se muestran anualmente, empezando desde el semestre mencionado.

No dejaba de alarmar a las autoridades militares el alto porcentaje de conscriptos que debían ser devueltos a sus hogares por causales de salud, especialmente por enfermedades crónicas y contagiosas como la tuberculosis. La defectuosa calificación de los conscriptos tenía como primera causa el deficiente número de médicos en el país y su escasa distribución en el territorio. El Prefecto de Puno indicaba al Ministerio de Guerra que muchos de los errores cometidos en la calificación de los conscriptos se debía a «la carencia de médicos titulares en casi todas las provincias» de su departamento, lo que traía como resultado que «un enrolado ó conscripto» presentado como «aparentemente sano, reconocido aquí, es desechado cuando un profesional después de practicar un verdadero estudio, concluye declarándolo enfermo, ó de mala constitución, y por consiguiente inútil para el servicio de las armas.»³⁷⁴

Esta situación se repetía en diversas provincias, como en la de Patáz (La Libertad), desde donde se habían remitido, en el contingente de 1907, los conscriptos Hilario Tantapoma Quispe y Pablo Beltrán Usquiano, a quienes después de los reconocimientos médicos que se hicieron en Lima se les diagnosticó que padecían

³⁷⁴AHMP, 1905, Caja N.º 1, “Oficio del Prefecto de Puno al Director de Guerra”, del 5 de febrero de 1905.

escrofulosis y tuberculosis, respectivamente. Cuando se buscó adjudicar la responsabilidad pecuniaria por el traslado y alimentación de los conscriptos, el Subprefecto informó que «en esta Provincia nunca ha existido no existe hasta ahora Médico», habiendo realizado los reconocimientos «el empírico de la Junta Conscriptora de mi presidencia, don Adán Lozano».³⁷⁵ Así, en el caso de inexistencia de médicos titulares en las provincias, la Ley del Servicio Militar disponía que sus funciones fueran cumplidas por empíricos, es decir, por personas que, sin conocimientos profesionales, «diagnosticaban» enfermedades para casos leves, sobre todo en las zonas alejadas de las ciudades importantes. Sin embargo, como demostraban las cifras de conscriptos desechados, estos no disponían los conocimientos necesarios para realizar los reconocimientos físicos y de salud que la Ley prescribía. Así lo consideraba el Subprefecto de Yauyos: «El empírico nombrado por la Junta Conscriptora de mi presidencia [...] me ha manifestado que no responde de la certeza de sus certificados por cuanto carece de los conocimientos necesarios que sólo se adquieren en la facultad de medicina después de vastísimos estudios.»³⁷⁶

Además de esta falta de personal médico competente, las fallas de los reconocimientos físicos se debían en otros casos a la impericia o desidia de los médicos titulares cuando estos los efectuaban. En mayo de 1905, el subprefecto de Huari, Ignacio Angulo, solicitaba al EMG se le eximiera de la responsabilidad pecuniaria que se le imponía por la remisión de conscriptos desechados por enfermedades, indicando que aquella responsabilidad debía recaer en el médico que había realizado los reconocimientos:

Este examen á que se debe someter á los conscriptos debe ser hecho por peritos que posean conocimientos técnicos, y ser estos los que disponen la remisión de los conscriptos [...] Si el facultativo adscripto á la junta, certificó sobre las

³⁷⁵ AHMP, 1908, Caja N.º 4, “Expediente Guerra. Conscripción Militar. Reintegro de socorros á conscriptos de la Prov. de Patáz, correspondientes al Contingente de 1907”. Diversos recursos que actuaron las Juntas Conscriptoras para eximir su responsabilidad por los conscriptos «inaparentes» o «inútiles» para el servicio, daban como responsables a quienes realizaban los diagnósticos de la salud y aptitud física de los conscriptos.

³⁷⁶ AHMP, 1907, Caja N.º 8, “Oficio del Prefecto de Lima, Julio Jiménez, al Director de Guerra”, del 17 de mayo de 1907. En este oficio se transcribe otro del Subprefecto de Yauyos, fechado el 27 de abril de 1907.

buenas condiciones de estos [...] no hay razón repito para que pese sobre mí los gastos de devolución de conscriptos.³⁷⁷

Similar situación sucedió en la ciudad de Puno, en 1908, cuando desde Huancané se remitió un grupo de conscriptos. En esta provincia, al no existir médico titular, los conscriptos fueron enviados sólo bajo el visto de un empírico, por lo que en la capital del departamento fueron sometidos al examen del médico titular Carlos Oquendo, quien «los declaró aptos para servir en el Ejército activo [...] siendo, por tanto, responsable en el caso de ser considerados inaparentes, por enfermedad crónica ó defectos físicos.»³⁷⁸.

Ahora bien, en los primeros años en que se empezaba a hacer efectivo el servicio militar obligatorio, el mismo Ejército no contaba con médicos asimilados suficientes para cumplir tales tareas. Por ejemplo, en 1901, el subdirector del EMG, Paul Clément, con preocupación informaba al Director de Guerra que en la capital habían sido recibidos cien conscriptos remitidos de Huancayo y Ayacucho y que aunque «[e]l aspecto del Contingente recibido satisface, á primera vista, las exigencias reglamentarias», se hacía necesario un segundo reconocimiento médico para asegurar su salud y disposición física antes que ingresaran a los cuerpos del Ejército. Mencionaba Clément que al no contar el EMG con personal médico propio, se había solicitado que los médicos de la Intendencia de Policía de Lima realizaran tal examen, los mismos que «no se han apersonado hasta la fecha». Estos inconvenientes hacían solicitar a Clément ante el Ministerio de Guerra la contratación de médicos subordinados al EMG para realizar los reconocimientos médicos de los conscriptos traídos a la capital, pues «[l]a necesidad, comprobada en esta y en otras ocasiones que se ha hecho indispensable el reconocimiento legal de médicos adscritos exclusivamente al servicio del Estado Mayor General justifica la conveniencia de nombrarlos con tal objeto.»³⁷⁹ La solicitud de Clément tuvo respuesta definitiva con la creación de la Sección Técnica de Sanidad Militar y Naval, en 1904, adscrita al Ministerio de Guerra y Marina, luego convertida en el

³⁷⁷ AHMP, 1906, Caja N.º 4, “Expediente del Subprefecto de Huari, Ignacio Angulo ante el EMG”, del 25 de mayo de 1905.

³⁷⁸ AHMP, 1908, Caja N.º 9, “Expediente del Subprefecto de Carabaya y ex Subprefecto de Huancané, Teodoro Valcárcel”, del 18 de mayo de 1907.

³⁷⁹ AHMP, 1901, Caja N.º 5, “Oficio del Subdirector del EMG, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 5 de diciembre de 1901.

Instituto de Sanidad Militar y Naval.³⁸⁰ Organizada la Sección de Sanidad, además de otras funciones médicas, permitía efectuar en la capital un segundo reconocimiento de los contingentes que eran enviados desde las provincias, pues como hacía notar en febrero de 1908 el Cirujano Mayor Jefe de la Sección de Sanidad Militar y Naval:

[D]espués de practicado el reconocimiento de los contingentes en las respectivas provincias, por los médicos titulares, y después de hecha la selección del personal por ellos, el contingente declarado expedito ó apto sufre en Lima un nuevo reconocimiento que practican los Cirujanos de la Sección Técnica de la Sanidad Militar y Naval, y en los Cuerpos acantonados en los departamentos los Cirujanos militares al servicio de esas fuerzas. Es sólo después de este doble reconocimiento y de esta doble selección que se incorpora á las filas á los declarados aptos.³⁸¹

El tercer factor que limitaba la discriminación de conscriptos sanos por parte de los médicos de la Juntas Conscriptoras fue la carencia de instrumentos químicos para realizar diagnósticos en el caso de las enfermedades de difícil detección en sus fases iniciales, como la tuberculosis. Recién en 1906 se instaló en Lima un laboratorio bacteriológico completo puesto a órdenes de la Sanidad Militar, el cual permitía emitir diagnósticos certeros respecto a los conscriptos enviados a la capital.³⁸² Un año después, el jefe de este instituto explicaba, no sin un resabio de espíritu de cuerpo, que una poderosa razón para la remisión de conscriptos tuberculosos radicaba en el hecho de que habiéndose «presentado al llamamiento en estado aparente de salud», los nuevos soldados poseían aquel mal en «estado incipiente», el cual «se oculta mucho, y lo que se llama *inminencias*, se manifiesta tan solo á la primera ocasión», por lo que era muy difícil que los médicos de la Juntas Conscriptoras pudieran detectar su enfermedad³⁸³.

³⁸⁰ Desde su creación estuvo compuesta por un jefe o cirujano mayor y de dos cirujanos; estos fueron secundados por cuatro practicantes, un jefe de laboratorio y un ayudante para este último (MGM 1904: VI-VII).

³⁸¹ AHMP, 1908, Caja N.º 9, “Expediente de consulta sobre la renuncia del Médico de la Junta Conscriptora de Lima, oficiado por el Prefecto de Lima ante la dirección de Guerra”, del 2 de enero de 1908, fol. 3. Parte de este segundo filtro lo constituían los reconocimientos que realizaban los médicos cirujanos de los cuerpos de línea acantonados fuera de la capital, cuando los contingentes de nuevos conscriptos eran remitidos directamente a ellos.

³⁸² Cfr. “Memoria del Jefe de Sanidad Militar y Naval”, del 30 de junio de 1907, en MGM (1907: 41).

³⁸³ *Ibíd.*: 35.

Finalmente, el tercero de los inconvenientes organizativos que supuso la aplicación de la Ley del Servicio Militar radicaba en las limitadas capacidades para el ejercicio de la coerción del Estado en los espacios locales, especialmente en las zonas rurales. En una multiplicidad de casos, diversos grupos sociales fueron reticentes a entregar a sus jóvenes al Ejército, siendo esto especialmente cierto para las comunidades indígenas. Como hemos visto, estas buscaban eludir el registro militar con el objetivo de evitar ingresar al sorteo de conscripción, pasando así a formar parte de la categoría de omisos, pero, cuando sí eran registrados y designados por el sorteo, las comunidades resistían el cumplimiento de la Ley alejándose de sus poblaciones, huyendo de las autoridades. En el nivel distrital, correspondía la persecución y captura de los omisos y de los sorteados fugados a los gobernadores, las autoridades locales dependientes de los subprefectos. Esta era una tarea ciertamente enojosa y difícil para este tipo de autoridades, en virtud de que no contaban con medios de coerción suficientes para hacer cumplir la Ley. Los gobernadores normalmente, aunque podían poseer armas, no tenían a su disposición efectivos de la Gendarmería o de la Guardia Civil para someter a las poblaciones bajo su jurisdicción. Como veremos en el capítulo siguiente, en las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX, las fuerzas de Policía del país eran reducidas en relación con las dimensiones del territorio y el patrón disperso de asentamiento de la población, especialmente en algunos departamentos de la sierra. Considerando ello, había sido estrategia del pequeño Estado decimonónico el concentrar sus reducidas fuerzas en los centros administrativos departamentales y de provincia desde donde realizaban, con fines específicos, incursiones parciales, breves y discontinuas sobre las localidades más pequeñas y alejadas de tales centros. En ese sentido, el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales en los espacios distritales recaía en la capacidad de negociación del gobernador con los actores locales, en sus vínculos con los notables, y esporádicamente (previa solicitud de parte) en el apoyo de fuerzas comisionadas desde la Subprefectura o la Prefectura.

Para el cumplimiento de sus responsabilidades de conscripción, los gobernadores tuvieron que contar con el apoyo de las fuerzas coercitivas de fuera de sus localidades. Por ejemplo, el Prefecto de Ayabaca daba cuenta, en 1905, que «mi despacho dispuso que el Comisario de esta Provincia D. Antenor M. Paz, saliese en comisión á los distritos, prestando su apoyo á los Gobernadores en la reunión del

contingente por 1904»³⁸⁴. Sin embargo, estas fuerzas no estaban totalmente disponibles para los gobernadores. Así, en 1903, el prefecto de Apurímac, Manuel Eleuterio Ponze, informaba la demora en la concentración y envío del contingente conscriptos, pues por el «reducido número de individuos que forman las fuerzas de Policía de esta plaza, me impiden emplearla en frecuentes comisiones que perjudicarían los diversos servicios que prestan en esta».³⁸⁵ Como manifestaba Ponze, estas comisiones eran discontinuas, por lo que ausentadas las fuerzas destacadas de los distritos para cumplir otras tareas, los gobernadores terminaban nuevamente aislados frente a la población. En virtud de sus limitadas capacidades coercitivas, les resultaba sumamente difícil someter a sus gobernados a las disposiciones del servicio militar, especialmente en los espacios rurales, lo que permitía la elusión de los obligados a inscribirse o a servir. Así, el Subprefecto del Cercado de Cajamarca consideraba en 1904 que «no contando los gobernadores con fuerza, no han podido ni pueden desplegar persecución enérgica y eficaz contra los designados al servicio activo que, al conocer su obligación, abandonaron sus hogares y se encuentran prófugos».³⁸⁶

Es más, el mismo Subprefecto mencionaba que las recargadas tareas que exigía la Ley de Servicio Militar a su provincia había generado la malquerencia de este puesto por parte de las personas que pudieran ocuparlo, «así la labor encomendada á los gobernadores para la reunión de esos ha sido y es tan pesada que hasta á hecho odioso el cargo de gobernador»³⁸⁷. Sin embargo, ello no debe llevar a pensar que los gobernadores estuvieran totalmente *desarmados* frente a la población de sus jurisdicciones, ello sería un error. Por el contrario, diversas denuncias de particulares e informaciones de las autoridades superiores daban cuenta de abusos que cometían los gobernadores con las personas de su jurisdicción en las tareas de conscripción. En 1904, un Congresista de Abancay denunciaba los actos contrarios a la Ley del Servicio Militar que efectuaban en su departamento los gobernadores, realizando el odiado *reclutamiento*. Indicaba que en Abancay, si la Juntas Conscriptoras realizaban

³⁸⁴ AHMP, 1906, Caja N.º 1, “Expediente de Eulogio Rojas y Córdova de la Provincia de Ayabaca para que se le exima del servicio militar obligatorio”, Piura, 8 de abril de 1905.

³⁸⁵ AHMP, 1903, Caja N.º 3, “Oficio del Prefecto de Abancay, Manuel Eleuterio Ponze, al Director de Guerra”, del 26 de febrero de 1903.

³⁸⁶ AHMP, 1904, Caja N.º 6, “Copia de oficio del Subprefecto de Cajamarca al Prefecto del departamento de Cajamarca”, del 21 de enero de 1904.

³⁸⁷ AHMP, 1904, Caja N.º 6, “Copia de oficio del Subprefecto de Cajamarca al Prefecto del departamento de Cajamarca”, del 21 de enero de 1904.

el sorteo correspondiente, las listas de los llamados al servicio no eran publicadas, dejando espacio para la arbitrariedad de gobernadores que cumplían con remitir «conscriptos» siguiendo su propia agenda: «Los Gobernadores que ni se creen obligados ni tienen intenciones para hacer públicas esas listas, reclutan á todos sus enemigos, sorteados ó no, los que sólo consiguen su libertad, por medio de dádivas ó con la protesta de entrar al servicio gratuito de las autoridades, por un tiempo, mas ó menos largo.»³⁸⁸

De varios distritos de la provincia de Camaná, en Arequipa, en 1908, fueron remitidos cinco individuos en la calidad de *enrolados*, los cuales, después de las averiguaciones del caso, fueron considerados por el EMG como «remitidos directa y arbitrariamente enrolados por los respectivos gobernadores».³⁸⁹ Los diferentes casos nos permiten llegar a una serie de conclusiones respecto a la aplicación de la Ley del Servicio Militar en los espacios locales. En primer lugar, al no disponer los gobernadores de medios de coerción de manera continua, tenían dificultades para remitir los conscriptos de sus distritos en los plazos previstos. En segundo lugar, presionados los subprefectos por los requerimientos del EMG, exigían a su vez a los gobernadores el envío pronto de los conscriptos, facilitándoles por un tiempo limitado efectivos de la Guardia Civil o la Gendarmería. En tercer lugar, para cumplir el número exigido a sus distritos, los gobernadores provistos de fuerza por lapso corto tenían varias alternativas: a) enviar a los conscriptos designados por la suerte que se presentasen voluntariamente; b) enrolar a algunos de los muchos omisos; y, c) llevar civiles arbitrariamente, sin ningún criterio, o reclutar a sus rivales o enemigos locales.

No deja de ser obvio que la aquiescencia de obligados al servicio estaba en directa proporción de un suficiente y estable ejercicio de la coerción; por el contrario, al percibirse un Estado que esporádica y brevemente interviene en las poblaciones locales, aunque sus incursiones sean brutales, estas dejan intersticios suficientes para el desconocimiento de sus mandatos. En ese sentido, se pueden comprender las continuas observaciones de los pocos conscriptos que voluntariamente se

³⁸⁸ AHMP, 1904, Caja N.º 6, “Oficio del Representante de Abancay al Ministro de Guerra”, del 14 de enero de 1904.

³⁸⁹ AHMP, 1908, Caja N.º 8, “Oficio del Jefe del EMG, Enrique Varela, al Ministro de Guerra y Marina”, del 26 de diciembre de 1908.

presentaban al servicio. Estas mismas consideraciones deben tenerse en cuenta con las otras dos alternativas: por un lado, la persecución de los omisos implicaba, por lo general, el destino de efectivos por un tiempo variable e indeterminado en el caso de que estos se encontraran fugados; por otro lado, la alternativa más fácil resultaba la leva arbitraria, si se considera la presencia limitada de la fuerza. De allí que no resultaban extraños los casos de abusos en la conscripción en los espacios locales, especialmente en los primeros años, sin embargo, un creciente control desde las estructuras administrativas del Ejército redujeron notablemente esta tendencia, a través de un sistema de premios y sanciones, como veremos más adelante.

6.6. Las resistencias al Servicio Militar Obligatorio

Resulta claro que la demanda de fuerza humana por parte del Estado para el cumplimiento del servicio militar ofrecería resistencia de la población. La exigencia de acuartelar a individuos en una edad altamente productiva por un periodo de tres o cuatro años significaba la pérdida de ese tiempo productivo para quien se beneficiara de él. En primer lugar, afectaba a quienes vivían a expensas de su trabajo (por ejemplo, los jornaleros o artesanos en las ciudades) y que constituían un ingreso para las unidades familiares a las que pertenecían. Sin embargo, a pesar de ello, los casos de omisos en las ciudades importantes no fueron con el pasar del tiempo altas, especialmente en el caso de la capital³⁹⁰. Una mayor vigilancia de la población en las áreas urbanas, además de la concentración de la población en espacios relativamente reducidos, permitía a los agentes del Gobierno hacer cumplir la Ley y exigir el

³⁹⁰En octubre de 1901, el coronel Clément reportaba al Director de Guerra que, en distintas ocasiones, había oficiado a la Intendencia de Policía de la capital solicitando «la captura y remisión» de los 51 conscriptos que adeudaba dicha ciudad del contingente de 1901. Solicitaba, a su vez, el Subjefe de Estado Mayor General medidas correctivas con el Intendente para que ello fuese «estímulo á las demás Juntas Conscriptoras». Al año siguiente, a fines de junio, mes en el que las Juntas Conscriptoras debían reunir sus respectivos contingentes, el Intendente y Presidente de la Junta limeña tenía el agrado de informar haber cumplido con la remisión del total de los llamados al servicio dentro de los plazos establecidos (AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Oficio de Subjefe de EMG, Paul Clément al Director de Guerra”, del 25 de octubre de 1901; y, AHMP, 1902, Caja N.º 9, “Oficio del Prefecto de Lima, Manuel Diez Canseco, al Director de Guerra”, del 26 de junio de 1902). Para 1907, el Prefecto de Lima podía afirmar orgullosamente que: «Salvo rarísimas excepciones, los designados por la suerte, para formar los contingentes, han sido presentados al Estado Mayor General en esta capital; y cuando, por negligencia, descuidos ó causas mas graves, he tenido conocimiento, que de esta Prefectura han dado lugar á que la ley quede burlada, siquiera en parte, he comunicado esos hechos al Ministerio de Guerra, ó procurando corregir las faltas, si lo permitían mis atribuciones» (AHMP, 1907, Caja N.º 8, “Oficio del Prefecto de Lima al Director de Guerra”, del 7 de agosto de 1907).

alistamiento de los ciudadanos urbanos en las filas del ejército permanente y en la de los acuartelamientos de supernumerarios y reservistas. Ello no lleva a decir que hayan existido casos de omisión en las ciudades, sin embargo, las estadísticas disponibles hacen pensar que el registro y alistamiento fue relativamente alto en la mayoría de ciudades importantes.

Situación diferente se producía en las inmensas áreas rurales del país, donde dos actores identificables planteaban importantes desafíos a los esfuerzos del Estado por extraer la fuerza humana rural; nos referimos específicamente a los hacendados y a las comunidades campesinas indígenas. Respecto a los primeros, habíamos visto en el debate sobre la Ley en el Parlamento que este asunto era de vital importancia para algunos legisladores. El servicio militar implicaba, para los hacendados, la pérdida de fuerza de trabajo de campesinos fijados a la hacienda o de jornaleros con los que se podía contar para las labores agropecuarias. Se planteaba una competencia que debe enmarcarse en dos procesos que signa los albores del siglo XX: por un lado, la recuperación y expansión de la agricultura de exportación, especialmente en la costa; por otro lado, la expansión de la gran hacienda serrana y del gamonalismo, especialmente en la sierra sur (Burga y Flores Galindo 1987: 19-61, Burga y Reátegui 1981, Jacobsen 1993: 198 y ss., Peloso 2002: 325-327).

En un país como el Perú, en donde no existía un mercado de trabajo que facilitara la provisión de mano de obra para las actividades de los empresarios agrarios, teniéndose que requerir de prácticas extraeconómicas como el enganche o el yanaconaje, el servicio militar tendía a dificultar la satisfacción de dicha demanda. Y aunque la presión regular de la Ley sobre la población hábil para el servicio fuera magra en comparación con el total, para algunos hacendados la conscripción resultaba un asunto enojoso. Como hemos visto líneas arriba, los hacendados, en algunas ocasiones, habían prestado la reserva humana fijada a sus propiedades en los conflictos de caudillos decimonónicos, sin embargo, dicha prestación había sido corporativa, voluntaria, esporádica, por un tiempo limitado (a juicio del patrón) y sobre todo, el patrón mantenía el control sobre sus campesinos. La prestación se hacía bajo la esperanza de aumentar el poder político y/o ventajas económicas dentro de una relación clientelista con las redes políticas nacionales. En el caso de la aplicación de la Ley, la prestación se hacía individualmente, de manera forzada,

regularmente y por un tiempo prolongado; pero, sobre todo, el hacendado perdía por aquel tiempo el control (como fuerza de trabajo o como soldado particular) del campesino conscripto en las filas del Ejército. Aún más, en el caso de que estos regresasen, los conocimientos aprendidos en el cuartel, como el español y la lecto-escritura, además de un mayor contacto con el mundo oficial, no podían menos que ser incómodos para los hacendados.³⁹¹

Es claro que dicha competencia por la reserva humana se planteaba entre un Estado que buscaba establecer relaciones modernas de autoridad, a través del cumplimiento del deber, y estructuras económicas agrarias que se asentaban en relaciones laborales y de autoridad premodernas. Por estas razones existieron casos de notable resistencia de los hacendados a la Ley del Servicio Militar en regiones con tendencias a la concentración de la tierra por el aumento de su rentabilidad o en las que el poder de los hacendados aventajaba por mucho a un débil Estado. Ejemplo de las primeras áreas podrían ser los valles de los departamentos de Junín, La Libertad y Lambayeque, mientras que, en las segundas, Cajamarca podría ser el caso paradigmático³⁹². En 1902, el jefe de la Comisión Militar del Centro, el recientemente reincorporado coronel cacerista Justiniano Borgoño, informaba sobre el rechazo de los hacendados de Junín a la militarización del país por medio de la Ley del Servicio Militar: «[a]lgunas personas, sobre todo los hacendados del interior, opuestos á la militarización nacional, porque con la salida de sus braceros créen perjudicados sus intereses, no dejan de poner resistencias» (Borgoño 1902: 6). Ese mismo año, en Lambayeque, el Prefecto reportaba al gobierno las resistencias de los hacendados de la región para la conscripción de trabajadores enganchados en sus propiedades, los que constituían un número importante del total de los sometidos al deber del servicio: «Inconveniente que se presenta es también la circunstancia de que gran parte de los inscriptos son peones de fundos rústicos, que según costumbre establecida, han recibido de sus patrones adelantos; los cuales, en guardia de sus

³⁹¹ En un sugerente ensayo, Cecilia Méndez llamó la atención acerca de los diversos casos en los que indígenas licenciados del Ejército se convertían en líderes de las comunidades campesinas en sus luchas contra los gamonales durante las dos primeras décadas del siglo XX (Méndez 2006: 29-30).

³⁹² Para el caso del proceso de concentración de tierras en el valle de Chicama en La Libertad, se puede consultar Klarén (1976: cap. 1). Respecto al valle del Mantaro, se puede revisar Mallon (1983: cap. 4).

intereses, los ocultan, impidiéndoles así el cumplimiento de sus sagrados deberes ciudadanos». ³⁹³

Otros ejemplos podemos encontrarlos en espacios donde la autoridad del Estado central era por demás débil respecto a las capacidades de los notables locales. Un buen ejemplo de ello era el departamento de Cajamarca, circunscripción que desde la Guerra del Pacífico la autoridad del Estado central quedó mermada, como se verá en el capítulo siguiente. Por ejemplo, en 1901, el hacendado Manuel María Díaz inició un recurso de Habeas Corpus para ordenar la devolución de dos operarios de su fundo: José Luciano Rojas y Segundo Abanto, quienes bajo el delito de omisión (no inscribirse en los registros militares) habían sido remitidos a Lima en calidad de enrolados. Díaz presentó su demanda considerando esta medida como detención arbitraria a la Corte Superior de Loreto, Amazonas y Cajamarca, la misma que en atención a la demanda ordenó el retorno de los jornaleros enrolados para someterlos a su jurisdicción. Por su parte, el prefecto Arístides Vigil informaba al Ministerio de Gobierno, en junio de ese año, después de las averiguaciones del caso, que los enrolados eran omisos, manifestando además que el referido Díaz tenía cercanas relaciones con un candidato político «influyente con los miembros de la Corte». ³⁹⁴ Finalmente, el Ministerio de Gobierno terció, atendiendo la solicitud de la Corte Superior. ³⁹⁵

En algunos casos, la competencia por la reserva humana entre el Estado y los hacendados era ganada totalmente por estos últimos, imposibilitando de manera absoluta la remisión de hombres para el cumplimiento de la Ley. Este hecho se produjo, por ejemplo, en la provincia de la Concepción, lugar desde donde no se había podido enviar ningún conscripto desde la promulgación de la Ley, debido a que la población pasible de realizar el servicio se encontraba ya «enganchada» y por tanto no libre, como daba razón el prefecto Domingo Parra, en 1905, no sin mostrar alguna consideración para con los hacendados locales:

³⁹³ “Memoria del Prefecto de Lambayeque de 1902”, p. 64, en Ministerio de Gobierno y Policía (1902).

³⁹⁴ AHMP, 1901, Caja N.º 1, “Expediente de Habeas Corpus promovido por Manuel María Díaz ante la Corte Superior de Loreto, Amazonas y Cajamarca”.

³⁹⁵ AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Oficio del Ministro de Gobierno al Ministro de Estado en el despacho de Guerra”, del 1 de abril de 1901.

No existiendo un pueblo verdaderamente libre en la provincia de la Convención, donde los hacendados, que son los únicos pobladores de aquellas regiones, llevan venciendo no pocas dificultades, gente enganchada, para las labores que les son anexas, de los diferentes pueblos de las demás provincias del Departamento y del de Apurímac, por tiempo determinado; es imposible contar, en rigor, con verdaderos habitantes, en aquella provincia donde por consiguiente su población es flotante.

Lo expuesto es, y ha sido siempre la principal causa de que los diversos Subprefectos que se han sucedido en aquella provincia, no han podido cumplir, por mucho que hayan deseado, con las diversas prescripciones de la ley.³⁹⁶

Resulta interesante notar que, a pesar de la débil presión que ejercía anualmente el Estado sobre el total de la población, los hacendados se resistieran tenazmente a la desviación de su fuerza de trabajo hacia el Estado. Sin embargo, como hemos dicho, no sólo eran los hacendados los únicos que se resistían al servicio militar, sino la misma población campesina indígena desarrolló tácticas para eludir el deber que se le imponía desde el Estado. Siendo ellas, las comunidades indígenas, la principal reserva para los contingentes del Ejército, resultaba evidente que casuísticamente fueran reticentes a entregar sin compensación alguna parte de sus hombres en edad hábil. De manera similar al caso de los hacendados, los campesinos indígenas durante el siglo XIX, cuando habían prestado sus hombres voluntariamente a los ejércitos caudillistas, lo habían verificado de manera corporativa y negociada, por el corto tiempo que durase la campaña militar, siempre a cambio de una compensación también corporativa, estableciéndose entonces una relación clientelística entre el caudillo y la comunidad indígena. Por el contrario, la nueva Ley ejercía su presión sobre individuos, se hacía bajo el cumplimiento abstracto de un deber que no reportaba compensación tangible alguna, y que separaba a hijos, hermanos y amigos de los lazos familiares y comunitarios por un periodo de tiempo de tres a cuatro años, tiempo que no podía ni negociarse ni modificarse desde el punto de vista de esta población.

Desde su perspectiva, la Ley significaba la ausencia temporal de hombres jóvenes (de 19 a 23 años) en el mejor momento de su capacidad productiva, bajo el

³⁹⁶ AHMP, 1905, Caja N.º 15, “Oficio del Prefecto Domingo J. Parra al Director de Guerra”, del 18 de febrero de 1905.

temor latente de perderlos irremediabilmente como la experiencia de guerras civiles había demostrado hasta la saciedad. En el caso de las comunidades indígenas ligadas a prácticas de reciprocidad, la ausencia de algunos de sus miembros restaba las capacidades de prestación de fuerza de trabajo mutuo para la complementariedad de tareas ligadas a la reproducción de la comunidad. Por su parte, en las comunidades ligadas a una agricultura mercantil, como las del valle del Mantaro, resultaba evidente que la conscripción de sus miembros restaba los brazos empleables en la producción del excedente destinado al mercado (Mallon 1983: cap. 4). Así, al exigir la Ley hombres de manera obligatoria, a pesar de que la designación de los conscriptos se hiciera de manera impersonal –a través de un sorteo–, para las comunidades, el servicio militar resultaba un *impuesto de sangre* reclamado por un agente ajeno a la comunidad, tanto como había sido el reclutamiento en el siglo XIX. Era esta una Ley que exigía el cumplimiento de un deber ciudadano a una población con bajísimos o nulos niveles de ciudadanía.

Esta ausencia de valores y prácticas ciudadanos fue una de las primeras razones que reportaron las autoridades sobre quiénes recaía el registro y la supervisión de las tareas de conscripción, considerándola como el principal obstáculo para el cumplimiento de la Ley. Esta impresión tuvo el ya mencionado Justiniano Borgoño, respecto a las dificultades que se produjeron para reunir el contingente de la ciudad de Huancayo en 1901. Informaba Borgoño que al haberse hecho el llamado de los sorteados, en su mayoría indígenas, «ni uno solo, absolutamente uno se presentó»; el resultado se repitió después de que se extendió el plazo, pues los obligados al servicio consideraban que «era una nueva forma de reclutamiento». En su opinión, las causales de esta actitud eran «la ignorancia y el temor», pues si «no se ilustra al pueblo, desde enseñársele, por lo menos las grandes virtudes republicanas», entonces el resultado sería negativo. Más adelante sentenciaba que:

[E]n nuestras regiones andinas [el pueblo] ha pasado y pasa aún recorriendo un círculo de desventuras; arrastrando, en su mayor parte, las pesadas cadenas de la servidumbre; extraños á los progresos de la civilización vegetando en preocupaciones de antaño, extranjero en la patria de sus padres y siervo todavía de la Edad Media [...] Hay que luchar, pues, victoriosamente contra el despotismo de esa ignorancia, hacer efectiva la regeneración política y social, trabajando infatigables, porque nuestros indios –que son la mayoría de los

peruanos, sientan ese *amor á la Patria*, que es el origen de la felicidad de los pueblos. (Borgoño 1902: 14-15)

Por su parte, el subprefecto de Contumazá, Lizardo Bartra, daba cuenta en 1907 que en su jurisdicción solo había sido posible reunir doce de los dieciséis conscriptos que correspondían, pues, a pesar de las formalidades cumplidas, «legados aún por la ignorancia, sin ninguna noción de patriotismo, los obligados á ingresar al Ejército miran con horror el servicio militar y así lejos de presentarse á cumplir su deber, abandonan sus hogares y huyen despavoridos como si se les solicitara para conducirlos al patíbulo». Los remitidos por el subprefecto Bartra no se habían presentado voluntariamente, por el contrario, habían sido capturados, siendo trasladados en calidad de enrolados.³⁹⁷

Para eludir la prestación del servicio, la población rural (especialmente, la indígena) desarrolló una serie de tácticas. Como hemos visto, la primera táctica fue huir de sus poblaciones al saber que habían sido designados por el sorteo. En 1902, el subprefecto de Huamachuco informaba a sus superiores que no había podido enviar ningún conscripto de su provincia, porque «no ha sido posible descubrir el paradero de los conscriptos que fueron sorteados el año pasado»³⁹⁸. De similar manera, el Prefecto de Ancash indicaba, en 1904, la misma táctica de las poblaciones de su departamento: «[c]on alguna frecuencia sucede que la mayor parte de los individuos que salen sorteados, no cumplen con presentarse á las respectivas Juntas Conscriptoras».³⁹⁹

En otros casos, algunas autoridades locales reportaron que los llamados al servicio, dado el «terror» que sentían por el ingreso al Ejército, preferían «engancharse» y trabajar en haciendas, a fin de que sus propietarios les procurasen protección ante las exigencias del Estado. Ante la posibilidad de pasar a las filas, sin compensación alguna y sin perspectivas de retorno a la comunidad de origen,

³⁹⁷ AHMP, 1908, Caja N.º 9, “Expediente del Subprefecto de Contumazá, Lizardo Barta, para que se reintegre el descuento de los gastos ocasionados por remisión de conscriptos exonerados del servicio”, del 8 de febrero de 1908.

³⁹⁸ AHMP, 1902, Caja N.º 9, “Oficio de la Dirección de Gobierno a la Dirección de Guerra”, del 4 de setiembre de 1902. Este oficio transcribe un oficio del Subprefecto de Huamachuco, del 7 de setiembre de 1902.

³⁹⁹ AHMP, 1905, Caja N.º 14, “Oficio del Prefecto de Ancash al Jefe del EMG”, del 2 de diciembre de 1904.

resultaba menos opresiva la permanencia en la hacienda, al tanto que ofrecía un adelanto de dinero o en bienes por parte de los enganchadores. Este mecanismo de evasión fue reportado, en 1904, por el subprefecto de la provincia de Cajabamba, Eliezer Portal:

Hay en esta provincia muchísimos contratistas de peones que los enganchan para los trabajos de las haciendas del Valle de Chicama. El temor y la desconfianza de los ciudadanos para servir en el ejército, pues todavía lo creen castigo, incitado por estos enganchadores, hace que los sorteados para verse libres del servicio militar, se comprometan á ir á trabajar a la costa, de tal manera que cuando hai que llamarlos al servicio están la mayor parte ausentes.⁴⁰⁰

La tercera táctica empleada para eludir el servicio militar sin quebrantar la Ley fue el casar a los jóvenes, quienes habían sido designados por el sorteo de conscripción, antes que debieran presentarse al llamamiento. En 1902, informaba el Prefecto de Ayacucho que en las provincias de su jurisdicción se había apelado a los párrocos para informar a la población indígena de las nuevas disposiciones que emanaban de la Ley y lograr así vencer el temor que en ellas existía respecto a esta obligación, sin embargo, los resultados no fueron como los esperados, pues al enterarse los indígenas que la Ley exoneraba a los jóvenes casados, se llevaron a cabo matrimonios *masivos* entre la fecha del sorteo y el llamamiento de los conscriptos:

[M]uchos curas han obtenido buenos resultados por más que los medios hayan sido irregulares. Hicieron saber á los indios que la ley exoneraba del servicio militar á los casados y sin más acá ni más allá empezaron á casar á todos los que pudieron de 17 á 24 años; por manera que se presentaba un sorteado, que al inscribirse como soltero, con los comprobantes de haber contraído matrimonio días antes de sorteo: la ley no distingue á este respecto y había necesidad de poner en libertad al casado.⁴⁰¹

⁴⁰⁰ AHMP, 1904, Caja N.º 6, “Copia de oficio del Subprefecto de Cajabamba al Prefecto del departamento de Cajamarca”, del 28 de enero de 1904.

⁴⁰¹ “Memoria del Prefecto de Ayacucho J. Álvarez Páez, 1902”, p. 30, en Ministerio de Gobierno y Policía (1902). Otro caso interesante se presenta en una solicitud de baja del servicio, presentada por Eulogio Reyes, poblador de la provincia piurana de Ayabaca. Este personaje, no habiéndose inscrito ante la Junta Conscriptora en 1904, fecha en la que cumplía diecinueve años, quedó en la categoría de omiso, siendo capturado en 1905 y remitido a los cuerpos del Ejército en calidad de enrolado. Su caso resulta interesante, pues el 13 de enero de este último año Reyes contrajo matrimonio, tiempo después

Esta práctica implicaba una alianza entre los párrocos y su feligresía indígena a fin de evitar el servicio militar. Las motivaciones de la feligresía resultan evidentes; y, para los párrocos, los oficios matrimoniales ofrecían no pocos emolumentos. El no perder parte de su feligresía y evitar roces con ella debieron ser otras importantes razones, como lo hemos visto en las negativas de los mismos párrocos para ofrecer la información de las defunciones a las comisiones militares (como se vio líneas arriba). Otras manifestaciones de esta alianza se podían observar en las falsificaciones de documentos bautismales y matrimoniales que en diversas ocasiones se denunciaron.⁴⁰²

Asimismo, en algunas regiones se manifestaron casos de declaración falsa ante el registro, en el cual los jóvenes se inscribían, manifestando en el asiento una edad superior de la que realmente tenían. Esta cuarta táctica era reportada, en 1906, por el Subprefecto de Contumazá, pues había en su jurisdicción «individuos que, maliciosamente, se han inscrito con mayor edad de la que tienen, á fin de no entrar en el sorteo», registrándose algunos con 25 años de edad. Solicitaba el Subprefecto el castigo de enrolamiento para «todos los jóvenes cuya edad se compruebe con documentos auténticos». En el informe de la 1.^a Sección del EMG se reconocía el vacío de la Ley, dado que esta «no obliga á presentar en dicho acto la partida de bautismo», por lo que esta Sección dispuso que las Juntas Conscriptoras solicitaran las partidas de bautismo a las personas de las que se sospechase engaño en este sentido.⁴⁰³

En algunas pocas localidades rurales, ante la conscripción, enrolamiento o reclutamiento de sus jóvenes, optaban por el ejercicio directo de la fuerza para evitar que estos fueran desaprovechados por tres o cuatro años. Resultaba interesante esta táctica, porque mostraba que, en algunas localidades, las solidaridades comunitarias

de haber sido declarado omiso (AHMP, 1906, Caja N.º 1, “Expediente de Eulogio Rojas y Córdova de la Provincia de Ayabaca para que se le exima del servicio militar obligatorio”. Piura, 8 de abril de 1905).

⁴⁰² En 1905 fue denunciado militarmente el párroco Mauricio Mayuri «por haber falsificado una partida de bautismo para que fuera exonerado del servicio militar un conscripto que deb[ía] marchar a Lima» (AHMP, 1905, Caja N.º 15, “Oficio del Prefecto, César Elías, al Director de Guerra”, del 15 de noviembre de 1905).

⁴⁰³ AHMP, 1906, Caja N.º 4, “Oficio del Subprefecto de Contumazá, Lizardo Bartra, al Prefecto del Departamento de Cajamarca”, del 6 de noviembre de 1906.

indígenas revestían la suficiente vitalidad para enfrentar a las autoridades del Estado. El evidente objetivo de la movilización de la violencia era la protección de la reserva humana de la comunidad. En Quipiscanchis, en junio de 1902, se abrió un juicio militar contra José Fernández y otras personas más «por el delito de haber arrebatado á un conscripto que el Subprefecto [...] remitía á esta Prefectura.»⁴⁰⁴ Otro juicio militar fue ventilado, en 1907, contra Tomás Córdoba por «haber atacado á mano armada á la comisión encargada de la reunión de conscriptos», en el distrito de Santo Domingo, en el departamento de Piura.⁴⁰⁵

Finalmente, una quinta táctica implicaba la solicitud de baja de los conscriptos a las autoridades superiores, ya sean las departamentales, el Estado Mayor General o el Ministro de Guerra y Marina. El Prefecto de Ancash denunciaba, a fines de 1904, que en varias de las provincias del departamento existían personas que, habiendo sido sorteados y no presentándose al llamamiento, eran capturados y declarados enrolados por las juntas conscriptoras. Al ser remitidos a la capital del departamento, estos presentaban documentos acreditando su excepción del servicio, iniciando expedientes ante el Prefecto, en la calidad de Jefe de Zona Militar (justicia militar), quien en virtud de la evidencia no le quedaba otra opción que devolverlos a sus hogares, luego de pagados sus prest diarios:

Encontrándose aquellos individuos en sus respectivas Provincias, no formulan reclamación ninguna, sea por que carecen de comprobantes, ó por que quieren proceder de manera maliciosas; aquellas Juntas indudablemente ignoran si por la lei esos individuos están exonerados i los remiten á esta Capital de Departamento i puestos ya en el respectivo depósito, formulan sus expedientes, pidiendo su exoneración del servicio de las armas, para lo cual alegan estar comprendidos en tal ó cual artículo de la ley.⁴⁰⁶

Aunque el Prefecto de Ancash consideraba que los enrolados procedían maliciosamente para obtener beneficios del Estado, esto no necesariamente era así. Otros casos mostraban que los indígenas enrolados, estando exceptuados del servicio

⁴⁰⁴ AHMP, 1902, Caja N.º 10, “Oficio del Prefecto de Cuzco, Toribio Raygada, al Director de Guerra”, del 16 de junio de 1902.

⁴⁰⁵ AHMP, 1907, Caja N.º 3, “Oficio del Prefecto de Piura, Germán Leguía y Martínez, al Director de Guerra”, del 9 de noviembre de 1907.

⁴⁰⁶ AHMP, 1904, Caja N.º 14, “Oficio del Prefecto de Huaráz al Jefe del EMG”, del 27 de diciembre de 1904.

por alguna causal de la Ley, preferían tramitar sus expedientes ante las autoridades superiores y no ante los subprefectos, autoridades poderosas en las provincias, frente a las cuales, como individuos no podían exigir el valimiento de sus derechos. Así, en 1909, el jefe de la 2.^a Circunscripción Militar del Norte, Belisario Ravines, en un expediente de un joven injustamente enrolado, informaba que los indígenas de las provincias optaban por no presentar sus documentos a los subprefectos, bajo el temor de que estos fuesen destruidos o «encarpetados»:

[L]a generalidad de los SS. Subprefectos, por sí y ante sí, (sálvo señaladas excepciones) proceden de la manera más inconsulta, cuando tratan de reunir los contingentes provinciales de conscriptos, para satisfacer los llamamientos anuales, esto es, sin acuerdo de los demás miembros de la Junta Conscriptora, y sin atender á las reclamaciones de los que enrolan; deshechando o encarpetando las solicitudes y demás comprobantes de aquellos, sólo con el deliberado propósito de completar el número asignado á su contingente; lo que dá lugar á que el pobre indio capturado, por el temor de perder sus comprobantes no los exhiba ante la autoridad política de su provincia, prefiriendo hacerlo ante las Instituciones superiores, en donde, sus derechos son siempre respetados y sus solicitudes en justicia atendidas.⁴⁰⁷

Los expedientes podían llegar hasta las mismas oficinas del Ministerio de Guerra, como la solicitud que presentó, en 1901, Juana Arroyo, indígena de Ñahuinpuquio (provincia de Tayacaja) y madre de Feliciano Guerra. Solicitaba Arroyo que dieran de baja a su hijo, quien «arbitrariamente, fue remitido á esa Capital en calidad de conscripto». Fundaba su petición, en tanto ella era viuda y Feliciano resultaba ser su sostén por ser hijo único, configurándose una de las causales de excepción de la Ley. Adjuntó en su expediente «los certificados legales que comprobaban ampliamente mi [su] viudez»⁴⁰⁸. Respecto a este caso, informaba Paul Clément al Ministro, un mes después, que se había oficiado a las juntas Conscriptora y Revisora de la provincia de Tayacaja, para resolver sobre la solicitud de Arroyo, indicando que «este Despacho, como es de costumbre, le prestará preferente atención».⁴⁰⁹

⁴⁰⁷ AHMP, 1909, Caja N.º 3, “Expediente del Subprefecto de Chota, Víctor A. Colina, para devolución de descuentos por el envío del enrolado Roberto Rafael y Campos”, del 8 de abril de 1909, fol. 7.

⁴⁰⁸ AHMP, 1901, Caja N.º 7, “Expediente de Juana Arroyo solicitando la libertad de su hijo Feliciano Guerra”, del 17 de noviembre de 1901, fol. 1-2.

⁴⁰⁹ *Ibíd.*, fol. 5.

Expedientes similares fueron presentados ante el Ministerio de Guerra desde diversas provincias del país, accediéndose en los casos que se considerasen justos. Sin embargo, la experiencia de los años mostró al Estado Mayor que los solicitantes preferían concurrir a Lima para obtener una resolución positiva. Pues, a pesar de existir tres instancias ante las cuales se podían presentar reclamos de exoneración del servicio fundados en la Ley (las juntas Conscriptora y Revisora, además de las comisiones militares), se enviaban expedientes ante el Estado Mayor, el cual «se ve obligado á resolver favorablemente á toda solicitud por la imposibilidad que tiene para verificar los documentos con que se aparejan estas. Razón que explica el que se prefiera venir á Lima y no se reclame en los lugares respectivos».⁴¹⁰

Ahora bien, los indígenas y las poblaciones rurales no eran los únicos que buscaban protegerse del llamamiento a las armas; otras categorías sociales también realizaban actos que los liberasen del servicio cuando ya se encontraban enrolados. Uno de ellos fue el iniciar procesos de Habeas Corpus ante los tribunales, como lo hizo Amalia Coveñas, madre del joven Juan Donaires, quien en 1904 fue enrolado en el departamento de Piura por haber cometido el delito de omisión a la inscripción militar. La Corte Superior piurana, después de admitido el recurso, ordenó la baja de Donaires y conminó al Prefecto a ejecutoriar el mandato judicial, acto que este último no cumplió, entablado, como Jefe de Zona Militar, competencia de la justicia militar en este caso.⁴¹¹ Ante este tipo de recursos judiciales, el Ministerio de Guerra mantuvo una línea de protección de sus fueros, amparándose en las instancias y procedimientos administrativos que facultaba la Ley del Servicio Militar. Así lo consideraba el informe que emitió César Canevaro al Ministro, en abril de ese mismo año:

Ese recurso se interpone, cuando con violación de las leyes del procedimiento judicial ó de las garantías constitucionales, se reduce á prisión á un ciudadano. No puede sostenerse que un soldado sea un preso. Si el enrolado, lo ha sido con infracción de la ley, las Juntas que esa misma ley ha creado, resolverán su baja i aún pueden ordenar el juzgamiento militar de los funcionarios que causaron el

⁴¹⁰ AHMP, 1905, Caja N.º 14, “Oficio del Jefe del EMG, Vicente Ugarte, al Ministro de Guerra”, del 5 de enero de 1905.

⁴¹¹ AHMP, 1904, Caja N.º 6, “Oficio del jefe del EMG al Director de Guerra”, del 16 de agosto de 1904.

enrolamiento indebido; pero no puede aceptarse que los jueces comunes, contra los dispuesto en la ley de servicio militar, acuerden bajas en el ejército.⁴¹²

A los individuos de otras categorías sociales, con algún capital social o económico, les quedaban distintas vías para eludir este deber. Las primas militares eran un recurso reconocido por la Ley para eximirse, por lo que no lo consideramos como una de las tácticas de elusión. Sí comprendemos como parte de estas las que comprendían el recurso de influencias personales o la corrupción de funcionarios responsables de las tareas de conscripción. Respecto a las primeras, aunque no existe en la documentación frecuentes denuncias, es plausible que no hayan sido tan escasas. Debíó existir un número de familias que, sin tener los recursos suficientes para pagar los quinientos o mil soles de las primas militares, sí disponían las relaciones personales o el dinero suficiente para burlar la conscripción con la aquiescencia de las autoridades locales. Respecto a las conexiones personales, debemos considerar que a principios del siglo XX, el Perú es aún una sociedad de interconocimiento, de relaciones de cara-a-cara, en donde las relaciones personales eran el sustrato del posicionamiento y conducción de los actores sociales. Relaciones de padrinazgo, clientelismo o paisanaje cumplían roles importantes en las interacciones sociales. Por ejemplo, cuando en 1901 se hizo el llamamiento en Huancayo, el jefe de la Comisión Militar, Emilio Castañón, dio cuenta que las reclamaciones formuladas por los actos de conscripción habían sido hechas por personas de cierta consideración social de la ciudad. Según Castañón, las denuncias provenían de los «parientes de algunos jóvenes de este cercado y gente interesada por conveniencias privadas en el cambio del Sub-Prefecto»⁴¹³, entre quienes figuraba un notable local, quien había sido instigador y baluarte de la resistencia a la conscripción:

Se por ejemplo que un Sr Alfaro de este Cercado, á quién se considera rico, es el verdadero autor del telegrama transcrito por US. á esta Comisión [una denuncia al EMG] y firmado por el mismo y otros artesanos compañeros de su sobrino que ejerce el oficio de sastre y que apoyado en el supuesto prestigio del tío, no se presentó al llamamiento de la Junta, como otros muchos. Se le ha

⁴¹²AHMP, 1904, Caja N.º 2, “Informe de César Canevaro al Ministro de Guerra y Marina”, del 19 de abril de 1904.

⁴¹³AHMP, 1901, Caja N.º 5, “Telegrama N.º 9, de Jefe de la Comisión Militar, Emilio Castañón, al Jefe del EMG”, del 8 de setiembre de 1901.

tomado, pues, como sorteado omiso de número bajo, y como no se accede á su pretensión de exceptuarlo por la lastimadura que tiene en un pié, se ha desbordado en los términos calumniosos del telegrama en cuestión.⁴¹⁴

Las denuncias de estos procedimientos llegaron a la capital y fueron «puestas en manos del Señor Ministerio» por los diputados de Huancayo.⁴¹⁵ Este ejemplo muestra las redes sociales y políticas de algunos vecinos de dicha ciudad: por un lado, se planteaba una resistencia que se fortalecía por medio de solidaridades gremiales, la misma que se amparaba, por otro lado, en el poder de un notable local, con conexiones políticas en altos puestos del Estado. En Chíncha, ese mismo año, hubo denuncias de favorecimiento de jóvenes de familias acomodadas que, habiendo salidos sorteados, fueron remplazados por personas de menores recursos, algunos de los cuales, legalmente exonerados, firmaron una solicitud denunciando estos y otros hechos: los «hijos de ricos y pudientes de esta Provincia y mediante arreglos indecorosos se dejaron libres á estos, tomándonos y poniéndonos incomunicados en la Cárcel Pública junto con los criminales; haciéndonos firmar después uno certificados en el que se nos hacer aparecer como voluntarios»⁴¹⁶. Actos de corrupción podían ser admitidos por funcionarios modestos, pero claves en el proceso de conscripción, como fue el caso de Rodolfo Ortega, amanuense de la Jefatura Militar de Santiago de Chuco, a quien se le sometió a juicio militar, en 1906, «por intervenir en la libertad de conscriptos, obteniendo remuneración»⁴¹⁷. Al realizar o corregir ellos mismos los registros militares, los amanuenses podían modificarlos, favoreciendo a las personas con las que entablara negociación.

Es cierto que debajo de la resistencia al Ejército en los grupos sociales no indígenas había el temor de perder a sus jóvenes hijos o de restarles tiempo en una etapa altamente productiva y reproductiva de su vida; sin embargo, resultaba también evidente que existía en ellos una consideración fuertemente negativa respecto al Ejército como institución. Visto como un espacio de reclusión de hombres con objeto

⁴¹⁴ AHMP, 1901, Caja N.º 5, “Oficio de Jefe de la Comisión Militar, Emilio Castañón, al Jefe de le EMG”, del 9 de abril de 1901.

⁴¹⁵ AHMP, 1901, Caja N.º 5, “Oficio del Subjefe del EMG, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 23 de noviembre de 1901.

⁴¹⁶ AHMP, 1901, Caja N.º 5, “Solicitud de varios conscriptos de la provincia de Chicha”, del 11 de noviembre de 1901.

⁴¹⁷ AHMP, 1907, Caja N.º 8, Oficio de Prefecto de La Libertad, Francisco Moreira, al Director de Guerra, de 3 de mayo de 1907.

de separarlos de la sociedad o de reformar su comportamiento a la fuerza, era visto de manera similar a las cárceles o reformatorios. Por ejemplo, en 1901, el coronel José de la Puente reportaba al Director de Guerra que la Intendencia de Lima tenía como práctica remitir a la Escuela Militar a «vagos y muchachos de mala conducta», a fin de que «se les dé de alta en las tropas de aquella», a pesar de los reiterados oficios que desde este instituto se emitían para evitar el ingreso de tales jóvenes.⁴¹⁸ La consideración de la Escuela Militar como un reformatorio era compartido por diferentes actores de la época, como el padre del menor Juan Torres, vecino de la ciudad de Huancayo, quien buscaba que su hijo, por su «conducta y malos antecedentes» ingresase a «alguna institución militar ó naval á fin de que se corrija».⁴¹⁹

El resultado de las resistencias no formales de la población al servicio militar obligatorio condujo consecuentemente a la existencia de altos números de «ciudadanos» omisos. La pena prescrita para quienes cometieran este delito era su incorporación directa a las filas del Ejército bajo la modalidad de «enrolados»⁴²⁰. Siendo un delito, correspondía a las autoridades locales la persecución de los contraventores para presentarlos ante la Junta Conscriptora, la misma que debía remitirlos como parte integrante del contingente. El jefe del Estado Mayor Regional del Ejército, Samuel Palacios Mendiburu, en su informe de 1905 se lamentaba que a nivel nacional «todos los contingentes, sin embargo de ser insignificante el número pedido, traen enrolados»⁴²¹, lo que indicaba una enorme cantidad de omisos al servicio, especialmente indígenas. A título ilustrativo, el departamento costeño de Lambayeque hizo entrega al EMG, el 13 de diciembre de 1906, de 36 enrolados, que significaban poco más del 39% de un total de 91 altas al servicio, mientras que dos años después el mismo departamento hizo una entrega de 90 enrolados, casi el 28% del total.

⁴¹⁸ AHMP, 1901, Caja N° 7, Oficio del coronel José de la Puente al Director de Guerra, de 25 de febrero de 1901.

⁴¹⁹ AHMP, 1902, Caja N° 3, Oficio de Prefecto de Junín al Director de Guerra, de 26 de junio de 1902

⁴²⁰ Los artículos 7° y 50° de la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1898 establecían la condición y penas de los enrolados.

⁴²¹ AHMP, 1905, Caja N.º 8, “Oficio del Jefe del Estado Mayor Regional del Norte, Palacios Mendiburu, al Coronel Jefe del EMG del Ejército”, del 6 de julio de 1905.

Cuadro 19: Altas del departamento de Lambayeque (1906 y 1908)

Año	Voluntarios	Conscriptos	Enrolados	Total
1906	32	23	36	91
1908	70	170	90	330

Fuente. AHMP, 1906, Caja N.º 2, “Oficio del Prefecto de Lambayeque al Director de Guerra”, del 13 de diciembre de 1906; y AHMP, 1908, Caja N.º 4, “Expediente del Prefecto de Lambayeque al Director de Guerra”, del 1 de setiembre de 1908, f. 7. Cuadro de elaboración propia.

Las significativa cantidad de omisos hacía decir a Palacios Mediburu que la forma de instruir y poner en «contacto con la civilización» a la población indígena, de otorgarle «sentimientos de Nacionalidad», no podía ser otra que el servicio militar obligatorio; pero este no podía ser cumplido por un espontáneo acatamiento del deber, sino que, por el contrario, debido a la repulsión que los indígenas tenían al Ejército, no dejaba más recurso, «momentáneamente», que la aplicación de la fuerza a través del cumplimiento de la pena del enrolamiento. Por ello, recomendaba «que las autoridades remitan al servicio, á los no inscritos, con preferencias de los inscritos y así se destacará con el rigor, la ventaja de inscribirse y la fatalidad de la ley»⁴²². La aplicación de la pena de enrolamiento haría comprender a los indígenas que la asimilación a la civilización y nación peruana resultaba un fenómeno inexorable.

Cabe indicar que siendo sumamente numerosos los casos de omisión, sobre todo en las áreas rurales, el servicio a través del enrolamiento adoptaba una forma de «cacería» a los contraventores al deber del servicio. Aunque amparada por la Ley, la pena del enrolamiento debió ser vista por la población indígena de manera muy similar o igual al «reclutamiento», en tanto que ambas prácticas implicaban el uso de la coerción para obligar a una población reacia a servir en los cuerpos del Ejército. Y si consideramos que los funcionarios locales, especialmente los gobernadores, gozaban de importante autonomía, el alto número de omisos les facultaba legalmente a hostilizar a sus enemigos locales, siempre y cuando estos hubieran incumplido sus deberes militares. En ese sentido, para las poblaciones indígenas, en gran medida, la

⁴²² *Ibíd.*

Ley del Servicio Militar Obligatorio debió parecerles más que una ruptura de inveterados abusos, una terrible continuidad.

6.7. Resultados de la aplicación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio

6.7.1. La universalidad del servicio y la justicia de la Ley

El principal objetivo de la Ley del Servicio Militar Obligatorio fue remplazar las prácticas inveteradas de negociación y violencia para la constitución del Ejército nacional. Ejércitos de precaria existencia, conformados en base a negociaciones y lealtades personales o cuerpos de tropa constituidos por hombres reclutados por la fuerza, sin conocer sus deberes y deseosos de desertar, no podían constituir base sólida para la militarización del país de cara a un enfrenamiento militar internacional como había enseñado elocuentemente la Guerra del Pacífico. Desterrar el reclutamiento y las alianzas con actores locales, instituyendo una organización que permitiera extraer de las poblaciones del país sus hombres jóvenes para que cumplieran su deber para con el Estado, era el norte de la Ley.

Teniendo en cuenta ello y habiendo observado la documentación de la época se puede afirmar, sin lugar a dudas, que este objetivo se cumplió. Ni el reclutamiento (o leva) ni la constitución de grupos armados producto de negociaciones, volvieron a ser los mecanismos para la constitución regular de las fuerzas militares de la República. Las altas en el Ejército, no sin las dificultades anotadas, se originaron considerando los procedimientos que la Ley del Servicio Militar prescribía. Esto no quiere decir que la norma se cumpliera sin restricciones y oposiciones, ni que la leva hubiese desaparecido por completo, pues denuncias diversas en las localidades hacían notar que el reclutamiento sería una práctica difícil de eliminar, sin embargo, dejó de ser el procedimiento regular para la conscripción de soldados, proscrito desde el Estado y reparado en los casos que se conociese su comisión, como veremos más adelante.

En teoría, la Ley afectaba igualitariamente a todos los ciudadanos, de acuerdo a las prescripciones de edad y estado civil, estableciéndose condiciones especiales para los exceptuados. No obstante, los ideales de igualdad y de justicia no se llegaron a concretar; no todos los ciudadanos jóvenes cumplían con su cuota de sangre en el ejército permanente. El mismo diseño de la norma había dejado abierta la posibilidad a los grupos privilegiados para obviar el servicio activo, como mostraba la propia existencia de la prima militar, reposando por tanto este deber sobre los grupos sociales menos favorecidos, especialmente los indígenas. No obstante, un número no despreciable de casos hacían presente que incluso los grupos sociales con recursos sociales y económicos buscaban obviar el servicio sin pagar la prima militar. Hemos visto ya los casos de Junín y Chíncha, en 1901; empero, el caso más significativo en ese sentido se produjo cuando se realizó, en 1907, la movilización de supernumerarios y reservistas en Lima, descubriéndose que «muy pocos de ellos [los estudiantes de la Universidad de San Marcos] estaban inscritos en los registros militares y por consiguiente no habían cumplido con la ley del servicio militar» (Memoria del MGM 1908: 5) y, a pesar de que cumplieron con su deber en las maniobras de ese año, la ausencia de los hijos de las familias acomodadas en los registros militares era indicativo de una posición privilegiada que no consideraba positivo el servicio militar y evidenciaba la connivencia con las autoridades locales de conscripción.

En ese sentido, el peso de la conscripción recayó sobre los grupos no privilegiados y el rostro del soldado, como ha mencionado Eduardo Toche, seguirá teniendo fisionomía indígena (2008: 66). Las resistencias de esta y otras poblaciones para el cumplimiento de *su* deber tendieron a hacer, en muchísimos casos, los procedimientos impersonales del sorteo meras formalidades, teniéndose que recurrir al enrolamiento como una de las fuentes más significativas de altas para el Ejército. Durante todo el periodo estudiado, la alta cantidad de omisos, sobre todo en las zonas rurales, obligó y facultó a las autoridades locales la persecución de las poblaciones resistentes a la conscripción, enviándolos al Ejército no bajo un resignado cumplimiento del deber, sino obligados bajo el peso de la coerción de las autoridades locales. En ese sentido, el enrolamiento se emparentaba con el reclutamiento, en tanto que la «cacería de hombres» se mantuvo, aunque en el caso del enrolamiento la caza se hacía bajo prescripciones amparadas en la Ley.

Ahora bien, desde el EMG, como hemos dicho, hubo preocupación por el cumplimiento de las prescripciones de la norma del servicio militar, es decir, en la aplicación justa del servicio. Los conscriptos enviados sin que se haya cumplido con las cláusulas de excepción, ya sea por salud, condición legal (casados) o condición familiar (los hijos de viudas, por ejemplo), o quienes hubieran sido remitidos arbitrariamente, transgrediéndose las prescripciones del sorteo, terminaban siendo devueltos a sus hogares, con los prest por el tiempo que estuvieron en el Ejército y pasajes por mar y tierra hasta sus lugares de destino. En algunos periodos del año, los documentos más frecuentes que emitía el Estado Mayor General eran los destinados a la solicitud de pasajes para el retorno a sus hogares de los ciudadanos injustamente sometidos a la conscripción. Por ejemplo, el 8 agosto de 1901, el Subjefe del EMG y jefe de la Misión Militar Francesa ofició al Director de Guerra pidiendo la expedición de pasajes para cinco conscriptos dados de alta en el Regimiento de Artillería y fueran devueltos al departamento de Puno por no contar con las aptitudes físicas requeridas para el servicio de las armas.⁴²³ Infinidad de oficios con las mismas características e iguales fines fueron dirigidos anualmente desde el Estado Mayor al Ministerio de Guerra y Marina. A modo de ejemplo presentamos, en el Cuadro N.º 20, los oficios del EMG existentes en una sola caja del Archivo Histórico Militar.

⁴²³ AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Oficio del Jefe del EMG, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 8 de agosto de 1901.

Cuadro 20: Conscriptos devueltos a sus hogares en 1901(1)

Departamento de origen y de destino de los conscriptos	N.º de conscriptos	Razones por las que se les devuelve a sus hogares
Puno	14	Conscriptos inaparentes
	3	Licenciados
Cuzco	2	Inaparentes
Puno	5	Inaparentes
Puno	2	inaparentes
Puno	2	Conscriptos de nacionalidad boliviana
Puno	1	Inaparente
Puno-Cuzco	3	Inaparentes
Oroya	1	Inaparente
Ayacucho-Junín-Puno	4	Inaparentes
Cañete	1	Exonerado por la Ley
Huancayo	1	Casado
Huancayo-Junín	2	Inaparentes
Cuzco-Chiclayo-Puno-Arequipa	8	Inaparentes
Casapalca-Concepción-Chancay-Huacho	4	Inaparentes
Chancay	2	Inaparentes
Huancayo	1	Casado
Huancayo	1	Exonerado por la Ley
Total	52	

Fuente. AHMP, Año 1901, Caja N.º 8, “Oficios del Subjefe del Estado Mayor General, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 25 de julio; del 1, 8, 20 y 31 de agosto; del 6, 11, 23, 26 y 28 (2) de setiembre; del 1, 3, 4, 9, 11 y 20 de octubre de 1901. Cuadro de elaboración propia.

- (1) Todos los casos presentados en el cuadro provienen de oficios emitidos por el subjefe del Estado Mayor General, Paul Clément, al Director de Guerra del Ministerio de Guerra y Marina, solicitando pasajes para los licenciados.

Semejante a las medidas correctivas para con los conscriptos remitidos indebidamente, existió también en el EMG preocupación de que los soldados que hubieran cumplido su tiempo de servicio en el Ejército fueran licenciados y remitidos a sus hogares, con sus emolumentos y pasajes respectivos. Por ejemplo, en agosto de

1901, Paul Clément solicitaba pasajes para tres soldados del Batallón Ayacucho N.º 3, con destino a Huaraz, Puno y Cuzco, de donde procedían aquellos hombres.⁴²⁴ Un poco más de un mes después, el Jefe del Estado Mayor solicitaba, esta vez, 79 pasajes para los individuos de tropa del Batallón Lima N.º 9, quienes debían ser enviados a sus departamentos por haber concluido su tiempo de servicio.⁴²⁵ Un listado detallado de conscriptos licenciados en ese mismo año es presentado en el Anexo N.º 7. En su memoria de 1905, presentada a las Cámaras del Parlamento, el ministro de Guerra y Marina, Pedro Muñiz, manifestaba que los licenciados, antes de su partida, habían sido «atendidos con el sueldo y gratificaciones» que establecían las normas, así como se les había entregado «pasajes por vapor y ferrocarril, para restituirlos á sus hogares, llevando con su presencia al concepto de los pueblos, el escrupuloso interés con que el Gobierno procura en la actualidad el estricto cumplimiento de la ley» (Memoria del Ministro de Guerra y Marina 1905: XXXI).

La búsqueda de que la Ley del Servicio Militar se cumpliera imparcialmente, tanto para las altas del Ejército como para sus bajas, no solo era una promesa que se había ofrecido al promulgar la Ley, sino era también una forma de aminorar el temor y resistencia que existía en la población al servicio en el Ejército. Consciente de ello, Paul Clément indicaba al Jefe de la Comisión Militar de Lima, Junín e Ica, después de conocerse reclamos de los procedimientos empleados para la conscripción de ciudadanos en Huancayo, en 1901, que el sorteo era «una garantía de justicia e igualdad; no observarlo, siendo conocido, es dar lugar á reclamos que han debido evitarse para que desaparezca toda oposición á la ley».⁴²⁶ En ese sentido, el acatamiento riguroso de las prescripciones de la norma debían redundar en el aumento del prestigio del Ejército y del servicio militar como un deber justo e imparcial.

En gran medida, la justeza de la norma recaía en el acatamiento de sus prescripciones por parte de las Juntas Conscriptoras y los funcionarios militares (los miembros de las comisiones militares, primero, y los jefes provinciales, después). Hemos mostrado las dificultades con que tropezaban los subprefectos, las Juntas

⁴²⁴ AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Oficio del Sub-Jefe del EMG, Paul Clément, al Director de Guerra”, del 1 agosto de 1901.

⁴²⁵ AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Oficio del Jefe del EMG al Director de Guerra”, del 19 de setiembre de 1901.

⁴²⁶ AHMP, 1901, Caja N.º 5, “Copia de Oficio del Sub-Jefe del EMG, Paul Clément, al Jefe de la Comisión Militar de Callao, Ica, Lima y Junín”, del 9 de setiembre de 1901.

Conscriptoras y los gobernadores, pero también hemos visto su impericia, poca diligencia, indolencia o empleo interesado de sus funciones de conscripción. Para contrarrestar las faltas o delitos que podían cometer estas autoridades, la Ley disponía de herramientas punitivas de diverso tipo, como la instauración de juicios militares para todos los infractores y la separación del cargo, específicamente para los subprefectos.

En algunas ocasiones se organizaron juicios contra las Juntas Conscriptoras por haberse comprobado la remisión de hombres indebidos. Por ejemplo, en 1901, las Juntas de las provincias de Cotabambas y Andahuaylas enviaron, en conjunto, trece conscriptos que terminaron siendo desechados por el Ejército por «estar legalmente impedidos». De la provincia de Cotabambas se enviaron siete, de los cuales cinco eran mayores de 30 años (los conscriptos debían tener 19), uno ya era casado, además de hijo único, y un último era remitido en el mismo contingente que su hermano. El Ministerio de Guerra y Marina resolvió la instauración del respectivo juicio militar contra todos los miembros de ambas juntas.⁴²⁷

Siendo los subprefectos las autoridades con mayor responsabilidad en las tareas de conscripción, desde el Ministerio de Guerra y Marina también se tomaron medidas para conminarlos a cumplir la Ley. El EMG solicitaba reiteradamente la suspensión y destitución de los subprefectos que contraviniesen la Ley y las órdenes impartidas por aquel instituto. Un ejemplo de ello lo encontramos en las constantes conminaciones que hicieron el Subjefe del EMG y el Jefe de la Comisión Militar de Tacna y Moquegua al Subprefecto de Moquegua, en 1901, para que este cumpliera las disposiciones de la Ley y las instrucciones del EMG. Mientras que el Prefecto de Moquegua informaba que la norma no tenía completa aplicación en la capital del departamento «á causa de la ineptitud y falta de voluntad del subprefecto», el jefe de la Comisión Militar, Camilo Cayo, reportaba al Estado Mayor que aquel funcionario no tenía «ninguna voluntad por el cumplimiento de la ley», entorpeciendo los trabajos, «presentando dificultades de todo género» y desconociendo la autoridad del comisionado. Por tal comportamiento, se expidió una Resolución Suprema el 13 de

⁴²⁷ AHMP, 1902, Caja N.º 9, “Expediente del Prefecto de Apurímac, José M. Ocampo Prefecto de Apurímac, solicitando a la Dirección de Guerra aclaración sobre juicio militar”, del 20 de febrero de 1902. De manera similar, se instauró ese año un juicio militar contra la Junta Conscriptora de la provincia cuzqueña de Anta por la remisión de dos conscriptos inútiles para el servicio (AHMP, 1902, Caja N.º 9, “Oficio del Prefecto de Cuzco a Director de Guerra”, del 14 de febrero de 1902).

agosto del mismo año, obligando al Subprefecto de Moquegua sujetarse a la autoridad de Cayo e indicando a los demás subprefectos del país hacer lo propio, bajo amenaza de ser depuestos de su cargo. Por tales circunstancias, Clément solicitaba al Ministro ordenase la destitución y enjuiciamiento del Subprefecto «como una garantía de orden administrativo y de disciplina»⁴²⁸.

En múltiples ocasiones, desde el Ministerio de Guerra y Marina se hacían solicitudes de este tipo al Ministerio de Gobierno, pidiendo la destitución de los subprefectos como medio de castigo por sus omisiones y faltas a la Ley. Sin embargo, diversas administraciones del Ministerio de Gobierno tomaban con cautela tales requerimientos, y en cierta medida protegían a sus autoridades dependientes. Así, en junio de 1904, el Ministro de Gobierno manifestaba a su similar de Guerra y Marina que «cuando llegue el caso en que debe cumplirse la prescripción legal de la destitución de algunos de dichos funcionarios, US. se dignará anunciármelo para que la pena se aplique, siempre que la falta sea comprobada»⁴²⁹.

Más allá de la aquiescencia del Ministerio de Gobierno, el principal mecanismo que contaba el Ministerio de Guerra y Marina fue la obligación pecuniaria de los miembros de las Juntas Conscriptoras, en especial de los subprefectos, de sufragar los gastos de transporte (de remisión y devolución) y de alimentación de los conscriptos a los que se les hubiera dado de alta sin los requisitos de la Ley. Las responsabilidades pecuniarias podían ser, y de hecho lo eran, ejecutadas directamente por el ramo de Guerra, procediendo a realizar el descuento de lo gastado sobre quienes recibieran un sueldo del Estado, como los subprefectos y los médicos titulares de las Juntas Conscriptoras. Gran cantidad de expedientes sobre descuentos a los subprefectos implicados en estas faltas fueron tramitados por el Ministerio de Guerra y Marina ante las tesorerías departamentales. Por ejemplo, en el departamento de Ancash, el Ministerio ordenó a la Tesorería departamental la aplicación de estas deducciones a cinco subprefectos por los gastos ocasionados por

⁴²⁸ AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Oficios del Prefecto de Moquegua al Director de Guerra”, del 30 de setiembre y 14 de octubre de 1901; “Oficios del Jefe de la Comisión Militar de Tacna y Moquegua, Camilo Cayo, al Director de Guerra”, del 12, 19 y 24 de setiembre; y “Oficio del Sub-Jefe del EMG, Paul Clément al Director de Guerra”, del 22 de octubre de 1901.

⁴²⁹ AHMP, 1904, Caja N.º 10, “Oficio del Ministerio de Gobierno, Juan de la Quintan, al Ministro de Guerra y Marina”, del 14 de junio de 1904.

conscriptos que fueron devueltos a sus hogares, como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 21: Descuentos realizados a los subprefectos del departamento de Huaraz, en 1904

Provincia	Nombre del subprefecto	N.º de conscriptos devueltos	Gastos ocasionados por alimentación y transporte, en libras peruanas (1)
Huaylas	Enrique Barrios	3	15.7.65
Pallasca	Isaac Pancorvo	1	5.7.65
Pomabamba	Rosendo C. Tía	30	30.3.30
Huari	Ignacio Angulo	5	25.2.75
Huaraz	José C. Basagoitia	7	35.3.85
Total			111.2.10

Fuente. AHMP, 1904, Caja N.º 5, “Expediente del 25 de octubre de 1904, del Jefe de EMG a Ministro de Guerra y Marina, liquidación de Subprefectos de Ancash”. Cuadro de elaboración propia.

(1) Una Libra Peruana equivalía a diez soles de la época.

Una considerable cantidad de expedientes elevados por los subprefectos para la reconsideración de estos descuentos muestran que este mecanismo punitivo era especialmente sentido por tales autoridades. La documentación de la época indica que este castigo fue un poderoso instrumento para mejorar su desempeño, obligándolos a ceñirse con mayor celo a las prescripciones de la Ley y a vigilar con mayor cuidado los procedimientos de los gobernadores en sus circunscripciones; así, aunque el número de solicitudes de los subprefectos fue siempre importante durante todo el periodo que estudiamos, las investigaciones del EMG para determinar la responsabilidad del envío inadecuado de conscriptos, con el correr de la primera década de 1900 pasarán de sindicarse mayoritariamente a los subprefectos a responsabilizar principalmente, a fines del periodo, a los médicos. En los diez años observados, las causales para la devolución de los conscriptos resultaban, tanto por la remisión de exceptuados del servicio, como por el envío de personas con dolencias que los convertían en inaparentes. Sobre los primeros, la responsabilidad directa caía sobre los subprefectos, mientras los segundos eran imputados a los médicos de las Juntas Conscriptoras. En los últimos años de la década, las causales de devolución de conscriptos resultaban ser mayoritariamente por defectos físicos y problemas de

salud, antes que por omisiones a las excepciones del servicio, razón por la cual los expedientes de descuentos terminaban responsabilizando a quienes les correspondía los diagnósticos, sean estos los médicos titulares o los empíricos.

La reducción del número de expedientes en que se responsabilizaba a los subprefectos mostraba una mayor diligencia en el cumplimiento de sus tareas. En esa dirección anunciaba, desde 1905, el ministro de Guerra y Marina, Pedro Muñiz, la existencia de mayor regularidad en el cumplimiento de las disposiciones legales para las altas de conscriptos: aprovechando las «lecciones de la experiencia», el Gobierno había sido «inflexible con las autoridades omisas», lográndose en los últimos contingentes «personal correspondiente con arreglo a la ley y en las condiciones físicas y de edad apropiadas para el servicio de las armas» (MGM 1905: XXXII). Un año después, luego de la instalación de los estados mayores regionales con su burocracia destinada a vigilar y acompañar las instituciones de conscripción locales, según el mismo Ministro, se había «disminuido de modo considerable el procedimiento irregular, azas abusivo en que antes se incurría con clamorosa frecuencia» (MGM 1906: XI). En este progreso, el Ministro reconocía que el sistema de penas y gratificaciones había cumplido una importante función:

La inflexible aplicación de las penas establecidas por la ley con relación al proceder incorrecto de los responsables, obligándolos á reintegrar los gastos empleados en la remisión de contingentes indebidos, y negándoles las gratificaciones respectivas, que solo se han acordado, después de comprobado el derecho, con la prestación de los registros y los informes del Estado Mayor Regional correspondiente, revisados por el Estado Mayor General del Ejército; ha contribuido á crear una situación normal, resultado del mayor conocimiento de los deberes, del premio que estimula y de la pena que corrige. (MGM 1906: XII-XIII)

Sí es cierto que las reclamaciones por las altas de exceptuados disminuyeron, lo que implicaba el seguimiento más riguroso de los criterios dispuestos en la Ley por parte de las autoridades locales, no sucedió lo mismo con las calificaciones médicas sobre la salud y constitución física de los conscriptos, pues, como hemos visto, los conscriptos devueltos a sus hogares por enfermedades siguió siendo alto, incluso hasta fines del periodo que estudiamos (ver Cuadro N.º 18). Las limitaciones del desarrollo de la profesión médica en el país, a principios de siglo, no permitían

contar con el personal idóneo ni instrumentos médicos suficientes en todas las provincias del país para el procedimiento de diagnósticos certeros. Los mecanismos punitivos pecuniarios del Ministerio de Guerra y Marina fueron crecientemente dirigidos a los médicos titulares y a los empíricos, *grosso modo*, desde la segunda mitad de la década de 1900. Sin embargo, ello no indicaba necesariamente que hombres enfermos y débiles no ingresaran al Ejército. Por lo menos en la capital, personal competente y, a partir de 1907, instrumentos médicos modernos permitieron alejar de las filas del Ejército números considerables de «ciudadanos» inaparentes para el servicio o que poseían males contagiosos e incurables para la época.

6.7.2. La militarización *ad portas*: registro y movilización de los ciudadanos

Habiendo visto las dificultades para el registro de la población para el cumplimiento del servicio militar, parecería que esta tarea terminó siendo un rotundo fracaso para el Estado peruano, pues uno de los objetivos de la reforma del Ejército había sido el total registro de la población hábil para tomar las armas en momentos en que la Patria lo requiriese. Sin embargo, a fines de la primera década del siglo XX, incluso el jefe de la Misión Militar Francesa, Paul Clément, para entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, consideraba con orgullo que después de diez años de la implementación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio se había logrado inscribir en los registros militares la cifra nada despreciable de 575 238 «ciudadanos» hábiles para el servicio que incluían los licenciados del Ejército, los supernumerarios, las reservas y la Guardia Nacional.

Cuadro 22: Cantidad de ciudadanos inscritos en los registros militares, 1909

Contingente	Edad	Cifra
Supernumerarios	19 a 23 años	62860
1era. Reserva	24 a 30 años	154 404
2da. Reserva	31 a 35 años	115 957
Guardia Nacional	35 a 50 años	242 007
Total		575 238

Fuente. Clément (1910: 24). Cuadro de elaboración propia.

Considerando que la población peruana alcanzaba, según el censo de 1876, los 2 699 945 habitantes, la cantidad de hombres registrados para el servicio de las armas constituía algo menos que la cuarta parte de la población total del país. Y si el número de inscritos se comparaba con el número de varones contabilizados en aquel censo (1 365 895), aquella cifra abrazaba un poco más del 42% de los varones censados. Aunque la población había crecido necesariamente desde 1876, reduciendo con ello la proporción de los registrados, esta cifra nada despreciable se encontraba muy por encima de la cantidad de hombres registrados en el último esfuerzo de militarización del país, que se había ensayado a través de la Guardia Nacional durante el Segundo Militarismo, el mismo que no llegó a superar los ochenta mil «ciudadanos» registrados (76 711 hombres, en 1892). Según las cifras del EMG, en 1910 el Perú podía contar holgadamente, por lo menos en el papel, con más de medio millón de habitantes en un contexto de enfrentamiento militar externo.

El nivel de éxito de la reforma se podría apreciar mejor comparándolo con los esfuerzos de militarización de otros países. De acuerdo a un informe reservado, que se emitió para el EMG peruano, en 1902, el rival militar más cercano del Perú (Chile) contaba con fuerzas movilizables de 417 120 hombres, de los cuales 37 423 tenían veinte años (edad de acceso al servicio, similar a una fracción de los supernumerarios peruanos) y 379 694 se encontraban entre los 21 y 50 años (comparables a las reservas peruanas y la Guardia Nacional), fuerza que si se calcula sobre los 2 816 916 habitantes de aquel país, equivalía a un poco más de la séptima parte de su población.⁴³⁰ Aunque por la disimilitud de fechas (1902 y 1910), ambas cifras no son estrictamente comparables, sí nos ofrecen una idea de los logros que se alcanzaron, no sin dificultad, en el registro de la población hábil en el Perú. De allí que los niveles de registro alcanzados, si bien no eran perfectos, permitían al Ejército contar con un número de hombres muy por encima de sus exigencias militares; es por ello que, en 1908, el Ministro de Guerra consideraba que resultaba prudente cerrar por algún tiempo parte del registro, manteniendo solamente la inscripción de los supernumerarios y la primera reserva (los grupos etáreos más jóvenes), pero al

⁴³⁰ AHMP, 1902, Caja N.º 7, “Informe sobre la organización militar de la República de Chile escrito en diez y nueve fojas útiles, presentado por los tenientes coroneles Benjamín J. Puente y Alberto Panizo”, enero de 1902.

mismo tiempo tratar de hacer el registro más completo y riguroso, a fin de que se contase «con la seguridad de conocer siempre el paradero ó residencia de los inscritos de tal manera que se les pueda encontrar listos el día que se les llame» (MGM 1908: 5).

Ahora bien, otro de los problemas con los que tropezó comúnmente el Ejército en la aplicación de la Ley fue el cumplimiento de los plazos para la remisión de los contingentes. El EMG establecía fechas límites para que todos los conscriptos del país pudiesen ser dados de alta en las mismas fechas. En teoría, todos los conscriptos que anualmente tenían que proveer los departamentos debían llegar y ser puestos a disposición del EMG en dos fechas límite: el 1 de julio la mitad del total y el 1 de diciembre el resto. Sin embargo, por las dificultades para la reunión del contingente en las provincias, en los primeros años de ejecución de la norma, las provincias demoraban en entregar los conscriptos, llegando estos a los cuerpos del Ejército en diferentes fechas del año e incluso algunas provincias quedaban debiendo conscriptos de años anteriores. Esta deficiencia traía como problema que los hombres dados de alta en el mismo año no recibieran instrucción militar simultáneamente, desarrollándose en los soldados grados de pericia y disciplina militar disímiles.⁴³¹ Teniendo en cuenta que la instrucción militar en los ejércitos modernos es masiva y en serie, los soldados de una «promoción», en el mejor de los casos, debían contar con similares niveles de instrucción para acceder a un nivel superior de aprendizaje o ser licenciados en conjunto cuando alcanzaran las capacidades marciales esperadas, a fin de que se les llamase nuevamente a las filas en el momento oportuno.

Este objetivo específico solo se logró consumir a partir de 1907, cuando el Ministro de Guerra informaba a las Cámaras que el llamamiento se había «efectuado de manera tal que ha permitido el ingreso de los conscriptos en el Ejército en la misma época [...] circunstancia que ha permitido establecer la instrucción de manera uniforme, siguiendo los métodos reglamentarios» (MGM 1907: XIII). Coincidió con ello el jefe del EMG, Paul Clément, quien reportaba al Ministerio de Guerra ya en 1906, que «en el presente año [...] por primera vez el contingente de reclutas ha llegado casi todo en la misma época»⁴³². Estas afirmaciones, aunque indicaban el

⁴³¹ Decreto Supremo del 26 de noviembre de 1903, en MGM (1904: XXXVII-XXXVIII).

⁴³² Memoria del General Jefe del EMG del Ejército 1906, en MGM, 1906, p. 6

mejoramiento de los procedimientos de conscripción, distaban de la perfección. Así, el 26 de enero de 1907, el EMG reportaba que el número de conscriptos faltantes para completar el contingente de 1906 era de 561 hombres, mientras que el 28 de abril de 1908 manifestaba al Ministerio que la cantidad de conscriptos que aún debían las provincias ascendía a 602.⁴³³

El tercer aspecto que nos puede permitir observar los resultados de la Ley del Servicio Militar son las maniobras y movilizaciones de hombres que se hicieron en la segunda mitad de la década de 1900. Tanto en las maniobras como en las movilizaciones se hizo llamamiento de los supernumerarios y reservas del Ejército, es decir, los «ciudadanos» aptos que no habían servido en el ejército permanente. Los primeros ensayos para su llamamiento se realizaron en dos ejercicios de maniobras que se ejecutaron en Jauja y Chorrillos, en los años 1906 y 1907, respectivamente. Las maniobras estaban dirigidas para la instrucción de los ciudadanos por dos meses, el ensayo de situaciones de guerra para habituar a los oficiales al comando de tropas y para la evaluación y aprendizaje respecto al funcionamiento de las instituciones del Ejército (como el mismo servicio militar obligatorio) en condiciones de enfrentamiento militar.⁴³⁴

Las maniobras en las llanuras de Jauja-Concepción fueron el primer experimento para observar la capacidad del Ejército. Para tal efecto, se hizo el llamamiento para el acuartelamiento de mil hombres provenientes de las provincias de Jauja, Huancayo y Tarma, 500 de la calidad de supernumerarios e igual cantidad de reservistas, habiéndose presentado a esta convocatoria 1556 (MGM 1907: XVI y 4). Para estos ejercicios, los llamados fueron sometidos a un entrenamiento relámpago de tres semanas, luego de las cuales diversos testigos de la época quedaron ciertamente complacidos. Paul Clément, como jefe del EMG, informaba en su memoria de 1907 que los supernumerarios «estaban en estado de prestar servicio de manera suficientemente regular en las compañía del Regimiento», considerando que este ensayo había sido exitoso, a tal punto que incluso «los más escépticos

⁴³³ Cfr. AHMP, 1907, Caja N.º 1, “Oficio del Jefe de EMG, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina”, del 26 de enero de 1907; AHMP, 1908, Caja N.º 3, “Oficio del Jefe del EMG, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina”, del 23 de abril de 1908.

⁴³⁴ Por ejemplo, Clément informaba al Ministerio de Guerra que las maniobras de Jauja «ha[bía]n permitido [a nuestros jefes] estudiar el gran problema de la instrucción de las reservas en el momento de su movilización» (MGM 1907: 5).

tuvieron que convencerse de que el Ejército puede contar con buenas reservas y que es posible reunir las conformándose sólo a las prescripciones de la Ley.»⁴³⁵ Así también, un miembro de la intelectualidad oligárquica, como Francisco García Calderón, luego de esas maniobras, consideraba que habían tenido «un brillante éxito» y lo animaban a afirmar que «parece evidente que uno de los medios de educar a la raza indígena es hacerla pasar por el ejército, para que asimile elementos civilizadores» (García Calderón 2001: 407-408).

Como queda dicho, al año siguiente se llevaron a cabo nuevas maniobras, esta vez en el distrito capitalino de Chorrillos. Para el ejercicio limeño se triplicó el número de supernumerarios y reservistas llamados, convocándose 3050 hombres que debían provenir de Lima, sus distritos y el Callao⁴³⁶. Sabiendo los defectos de la inscripción militar, el EMG tuvo que destinar «todo el personal» de la Primera Sección para la «revisión y refundición de los registros militares [...] un trabajo muy pesado fuera de los corrientes» (MGM 1908: 6). Sobre un total de registrados de 14 870, se presentaron al llamamiento 12 722 hombres, de los cuales más de tres mil jóvenes no se encontraban inscritos.⁴³⁷ Por el número de participantes, las maniobras fueron nuevamente consideradas un nuevo éxito, dado que además de la instrucción que se ofreció a los supernumerarios y reservistas, se logró cambiar en la capital la imagen del Ejército; según oficiaba Clément al Ministro, «[l]a opinión pública parece también estar gratamente impresionada, por los esfuerzos que se están haciendo para dar al Ejército su verdadero carácter nacional», lográndose incluso la inscripción y servicio en las maniobras de los estudiantes de la Universidad de San Marcos.⁴³⁸

Ambas maniobras fueron preámbulos para las operaciones de movilización que se ejecutaron en 1909 y 1910 a raíz de problemas limítrofes con Bolivia y Ecuador que podían llevar al país a un enfrentamiento militar de consideración. En setiembre

⁴³⁵ «Memoria del Jefe del Estado Mayor del Ejército», en MGM (1907: 4-5). Estas afirmaciones no eran formalismos propios de una memoria institucional, pues el mismo Clément felicitó oficialmente las autoridades políticas de Junín «por el brillante éxito de esas operaciones» (AHMP, 1906, Caja N.º 2, «Copia de oficio del Jefe del EMG, Paul Clément, al Prefecto de Junín», del 19 de noviembre de 1906).

⁴³⁶ AHMP, 1907, Caja N.º 1, «Oficio del Jefe del EMG, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina», del 25 de setiembre de 1907.

⁴³⁷ AHMP, 1907, Caja N.º 2, «Oficio del Jefe del EMG, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina», del 16 de noviembre de 1907.

⁴³⁸ AHMP, 1907, Caja N.º 2, «Oficio del Jefe del EMG, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina», del 24 de octubre de 1907.

de 1909, a raíz de desavenencias irresueltas con Bolivia, se procedió a la formación de una «fuerte división» a la que se incorporaron cinco mil supernumerarios y reservistas, de los cuales dos mil provenían de los departamentos de Arequipa, Cuzco y Puno y tres mil de los departamentos de Junín, Lima y el Callao «principalmente á los [...] que hicieron su período de maniobras en 1906 en Jauja y en 1907 en Chorrillos» (Clément 1910: 23). En 1910, ante el peligro de una guerra con el Ecuador, se organizó en el norte un fuerte Ejército de alrededor veinte mil plazas, haciéndose el llamamiento de supernumerarios y reservistas de los departamentos de Lima, Junín, Puno, Cuzco y Arequipa, precisamente aquellos que habían participado en las maniobras de 1905 y 1907 y en la movilización de 1909, a los que se sumaron otros de los departamentos de Piura, Cajamarca, Lambayeque y La Libertad y los licenciados del Ejército, los cuales en total sumaron diecisiete mil plazas. La reunión del contingente se logró en dos meses, consiguiéndose la instrucción de alrededor doce mil hombres (Clément 1910: 7-8 y 23-24).

Si la meta de la Ley del Servicio Militar Obligatorio propugnada por Piérola y diferentes actores a fines del siglo XIX había sido la militarización del país, las movilizaciones de 1909 y 1910 habían mostrado que, después de una década de constante trabajo, esta era posible, permitiendo la defensa del país frente a una posible agresión externa. La movilización de importantes contingentes de hombres se logró en ambos casos, pero como había mostrado las maniobras de 1907 y la movilización de 1909, esta no podía conseguirse sin superar un sinnúmero de dificultades que restaban eficacia a la organización militar del país. En el caso de las maniobras de Chorrillos, para llevarlas a cabo, el EMG tuvo que destinar importante cantidad de sus recursos institucionales para la depuración de los registros militares, tarea que correspondía a las Juntas Conscriptoras. Mientras que, en el segundo caso, las provincias de Huancayo, Tarma, Cerro de Pasco y Yauli enviaron gran cantidad de hombres sin los requisitos legales y físicos para cumplir el servicio. En el caso de las dos últimas provincias, los subprefectos «por falta de reconocimiento médicos, [remitieron] algunos inhábiles, que se han devuelto»⁴³⁹, lo que mostraba lo anotado arriba sobre las limitaciones propias de un país con escaso desarrollo de la profesión

⁴³⁹AHMP, 1909, Caja N.º 1, “Oficio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina”, del 26 de agosto de 1909.

médica. Por su parte, las inobservancias a la Ley del Servicio Militar revestían carácter de gravedad en las provincias de Huancayo y Jauja:

[E]n Huancayo el subprefecto, de acuerdo sólo con el jefe provincial, dieron arbitrariamente mayor extensión á los artículos de la disposición suprema de 20 de julio último, remitiendo á individuos de clases no fijadas, á menores de edad, faltos de talla, exceptuados ó inhábiles para el servicio, pues no fueron reconocidos por el médico titular, y dando libertad á muchos individuos que debieron ser los primeros en formar el contingente.⁴⁴⁰

En el caso de Jauja, «el subprefecto de Jauja, alegando que era la única autoridad representativa de S.E. el Presidente de la República en su provincia» desconoció la autoridad del jefe provincial y, a pesar de las conminaciones de este, «ordenó la soltura de muchos individuos», cometiendo, como en el caso del Subprefecto de Huancayo, «las mismas arbitrariedades en la formación del contingente». Ante circunstancias que destruían «de una manera vergonzosa los buenos resultados obtenidos cuando el período de instrucción y maniobras en noviembre de 1906», no quedaba más opción al Jefe del Estado Mayor que solicitar la separación de ambas autoridades «como medio ejemplarizador»⁴⁴¹. Las arbitrariedades de ambos funcionarios mostraban a final del periodo las dificultades que imponía la propia estructura del Estado peruano a la movilización militar del país. Las regulaciones alcanzadas en tiempos normales eran superadas cuando se sobrepasaban las capacidades organizativas de la burocracia civil y militar, como en ese año.

6.7.3. La civilización del indígena en el marco de una militarización limitada

Uno de los más importantes objetivos que se planteó en la discusión y promulgación de la Ley de Servicio Militar Obligatorio fue la «civilización» de la población indígena. En su militarización se había puesto las esperanzas de lograr su acceso al país oficial, otorgándole competencias que los convirtieran en ciudadanos y miembros útiles para la Patria. El Ejército daría a la Nación no solo soldados sanos,

⁴⁴⁰ *Ibíd.*

⁴⁴¹ AHMP, 1909, Caja N.º 1, “Oficio del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Paul Clément, al Ministro de Guerra y Marina”, del 11 de setiembre de 1909.

fuertes y entrenados para la defensa del país, sino también hombres útiles que pudieran incorporarse a las actividades económicas y políticas del Perú occidental. Como hemos visto, dentro de los proyectos de la Comisión Militar formulados por la Ley, proponían para su implementación la aplicación de un sistema de educación civil mixto: por un lado, planteaban la institución de clases en materias civiles en los cuarteles del Ejército, práctica que se venía realizando desde el gobierno de Manuel Pardo; y, por otro lado, la creación de escuelas de soldados en diversas regiones del país con la finalidad de instruir civil y militarmente niños y jóvenes que no tuvieran oportunidad de acceder al servicio.

De esta ambiciosa propuesta de «civilización», solo se logró implementar la instrucción civil en los cuarteles del Ejército. Así, el 6 de febrero de 1900, por una Resolución Suprema, se ordenó la formación de «escuelas civiles» en todos los cuerpos del Ejército. Este mandato demoró en concretarse: pocos meses de impartida la orden, solo en algunos cuerpos se habían procedido a su instalación (un batallón en Arequipa, un escuadrón en Chíncha y en todos los cuerpos acuartelados en Lima)⁴⁴²; sin embargo, para el año 1904, se podía afirmar que se habían instalado escuelas civiles en la totalidad de unidades tácticas del Ejército, como lo manifestaba, en 1904, el ministro de Guerra y Marina, Pedro Muñiz:

[S]e suministra [la instrucción civil] en todos los cuerpos del Ejército por los respectivos oficiales; y así, mediante ella, en la forma en que se encuentra establecida, tienen oportunidad la mayor parte de nuestros soldados de volver á sus hogares con el conocimiento de nuestro idioma, con nuevos hábitos, con cierto espíritu de moralidad y disciplina, y en condiciones, en fin, mucho más ventajosas para la familia y el Estado. (MGM 1904: XXXIV)

La instrucción civil de las tropas, por lo general, corrió bajo responsabilidad de los comandantes, encomendándoles a los oficiales subalternos la enseñanza directa de las materias propias de la educación primaria; no obstante, por un corto periodo (1902-1903) se experimentó la contratación de profesores civiles, a fin de evitar que los oficiales derivaran su tiempo y energías, descuidando sus responsabilidades militares. Los profesores civiles fueron contratados con residencia fija en Lima para

⁴⁴²AHMP, 1900, Caja N.º 2, “Oficio, del Director de Guerra al Jefe de EMG”, del 11 de mayo de 1900.

impartir sus clases a los cuerpos acantonados en la capital, situación que rápidamente se mostró inconveniente.⁴⁴³ Así, en 1904, esta reforma fue rechazada, en tanto que ella «sólo era favorable para los cuerpos residentes en Lima» y presentaba, además, el inconveniente que, al marchar los cuerpos fuera de la capital, la instrucción resultaba interrumpida. Por dichas razones, se les volvió a encomendar a los oficiales la instrucción civil de sus subordinados, pues a pesar de los defectos anotados reportaba ventajas para la enseñanza y la disciplina, dado que «asegura[ba] el respeto á la autoridad, y crea[ba] vínculos entre el maestro y el alumno, que sirven para mantener el espíritu de cuerpo» (MGM 1904: XXXIV).

Una cuestión importante a saber es qué tipo de conocimientos se empezaron a impartir en los cuarteles. Una factura de los materiales y útiles escolares que presentó, en 1900, el Comandante del Escuadrón Escolta, nos permite responder esta interrogante:

**Cuadro 23: Factura de la Librería Francesa Científica
Galland, 4 de abril de 1900**

Cant.	Material	Autores
42	Gramática	Leguía y Martínez
42	Sistema métrico	Suárez
42	Historias	
42	Geografía del Perú	Carlos Wiese
1	Moral y Urbanidad	
1	Constitución Política	
1	Mapa del Perú	
4 doc.	Libro de lectura	
4 doc.	Tablas de operaciones	
12 doc.	Cuadernos de escritura	

Fuente. AHMP, 1900, Caja N.º 13, “Oficio del 5 de abril de 1900, del Comandante de Escuadrón Escolta de S. E. al Jefe de EMG. Cuadro de elaboración propia.

Como se puede observar por la factura, las prevenciones del Ministerio de Guerra para la instrucción civil de los soldados estaban orientadas a la enseñanza de competencias básicas para el aprendizaje de la cultura occidental; es decir, aprendizaje del idioma castellano (Gramática), operaciones matemáticas básicas

⁴⁴³ MGM (1903: X y 14). En los considerandos del Decreto Supremo, del 29 de octubre de 1902, se leía que «los oficiales de los cuerpos del ejército no pueden dedicarse a la enseñanza civil sin desatender sus labores y la instrucción militar» (MGM 1903: X y 14).

(Tablas), lectura y escritura (libros y cuadernos), por un lado, y de conocimientos básicos del Estado peruano (Historia, Geografía y Constitución del Perú) para convertirlos en «ciudadanos», por otro lado. La transformación ansiada por los políticos civiles y jefes militares de los conscriptos indígenas no solo tenía una dimensión cognoscitiva o actitudinal, sino también una dimensión comportamental expresada en los hábitos de moral y urbanidad que buscaban reforzar las conductas que los propios ejercicios y las prácticas militares construían en los soldados. En ese sentido, durante tres o cuatro años, los oficiales al interior de los cuarteles debían expulsar de la mente y el cuerpo de los conscriptos el mundo rural andino e introducir en ellos la cultura occidental que los convirtiera en soldados y ciudadanos peruanos.⁴⁴⁴

Por otra parte, para saber la extensión de la implementación de este proyecto resulta indispensable saber el número de soldados que recibieron educación civil en las filas del Ejército. Aunque no conocemos las cifras globales, disponemos de información oficial para los años entre 1905 y 1908, en los que se registraron 3658, 3156, 3021 y 3035 personas. En función de esta información podemos aventurarnos a hacer un cálculo, a lo menos referencial, extrapolando la proporción de conscriptos educados en los años de los que contamos con datos. Entre 1900 y 1903, el total de conscriptos ascendía a tres mil hombres, cifra que aumentó a cuatro mil en 1904, manteniéndose estable hasta 1910. Si el total de soldados del Ejército representaba cuatro mil hombres, la proporción de los que recibieron instrucción en los años que tenemos información sería la siguiente: 91% en 1905, 78% en 1906, 75.5 en 1907 y 75.9 en 1908.

Cuadro 24: Número y porcentaje de soldados que recibieron instrucción civil en el Ejército (1905-1908)

Año	Cantidad	%
1905	3568	91
1906	3156	78
1907	3021	75.5
1908	3035	75.9
Promedio		80.1

⁴⁴⁴Para mejorar la instrucción de los soldados, se encomendó al intelectual Carlos Wiese la elaboración de textos de enseñanza especiales, que estuvieron listos en 1906 (MGM 1905: XXXIII, MGM 1906: XXII).

Fuente. Memorias del Ministerio de Guerra y Marina (1905-1908). Cuadro de elaboración propia.

El promedio de la proporción de los hombres instruidos en el Ejército alcanza el 80% sobre el total de soldados. Extrapolando esta proporción para los años en que el Ejército alcanzaba los tres mil efectivos, se llegaría a la cifra de 2403; mientras que para los que se componía de cuatro mil, se obtendría 3204. Descontando el primer año, en el que se implementó el proyecto, en conjunto, las cifras disponibles sumadas a las proyectadas, nos dan como resultado 29 601. Podemos decir, remarcamos referencialmente, que en los primeros diez años de implementación del Servicio Militar Obligatorio el número de soldados «civilizados» estuvo alrededor de treinta mil hombres. Sin lugar a dudas, una cifra importante para la época, pero insignificante si se considera el total de la población indígena del país (más de un millón y medio de almas), o por lo menos el total de varones, los cuales serían el público potencial de la instrucción civil en el Ejército.

**Cuadro 25: Número de soldados que recibieron instrucción civil
por grado de instrucción y cuerpo militar (1905-1906)**

Cuerpos	1905			1906		
	Escuela primaria		Escuela secundaria	Escuela primaria		Escuela secundaria
	1er. grado	2do. grado		1er. grado	2do. grado	
Regimiento de Artillería / Regimiento de Artillería de Montaña	295	257	57	247	103	16
Grupo de Artillería de campaña				79	27	17
Id. de id de á pie y zapadores				115	15	---
Batallón N.º 1				240	56	---
Nº 3	162	141	49	124	92	50
“ 5	274	79		229	64	---
“ 7	160	180	13	146	135	41
“ 9	256	97	---	174	97	27
“ 11	252	101	---	229	82	
Escolta de S.E.	39	59	27	72	35	---
Escuadrón N.º 1	420	65	15	42	38	8
“ 3	65	28	36	48	72	---
“ 5	55	70	---	52	51	---
“ 7	60	36	33	50	62	6
“ 9	40	77	12	87	28	---
----- N.º 11 [en viaje] (para el año 1906)						
Piquete del EMG	17	---	3			
	2135	1233	290	1934	1057	165
Total anual	3658			3156		

Fuente. Memorias del Ministerio de Guerra y Marina (1905-1906). Cuadro de elaboración propia.

En tanto que el número de efectivos del Ejército peruano fuera modesto, en ningún aspecto el servicio militar permitiría la alfabetización del enorme número de personas que carecían de estos conocimientos. Y aunque periódicamente se realizaran maniobras de instrucción, llamando al acuartelamiento de los supernumerarios y las reservas, multiplicando así el número de efectivos, el periodo de estos entrenamientos no superaba los dos meses, tiempo por demás insuficiente

para realizar la ansiada transformación de la población indígena.⁴⁴⁵ Solo el servicio en el Ejército activo, ofrecía el tiempo y las condiciones suficientes para ello.

Conscientes del limitado impacto que podía ofrecer el Ejército en este asunto, desde el Ministerio de Guerra y Marina se propuso al Congreso, en 1904, la creación de «escuelas de soldados» en diferentes lugares del territorio nacional, como había sido la propuesta inicial de los miembros de la Comisión de 1898. En opinión del ministro Pedro Muñíz, estas escuelas permitirían incorporar una creciente población rural indígena, a fin de impartirles a sus niños y jóvenes además de rudimentos de conocimientos militares –como base para su futura incorporación al Ejército–, «el principal de nuestro idioma» (MGM 1904: XXXI). Se comisionó al coronel Juan Zuloaga para que recorriera los departamentos de Apurímac, Cuzco, Puno y Arequipa con la finalidad de presentar un proyecto de escuela regional que ofreciera instrucción a 600 alumnos, los cuales debían ser especialmente los jóvenes que se encontraban en situación de supernumerarios (MGM 1905: LXII). A pesar de estos deseos y de las propuestas consiguientes, no tenemos noticia que este nuevo proyecto haya sido llevado a la práctica, mas sí sabemos que por esas mismas fechas el Estado peruano apostó por una radical reforma educativa civil, reorganizando su estructura e incrementando de forma significativa el número de escuelas públicas en el territorio nacional (Cfr. Contreras 2004: 221-233). Todo parece indicar que los gobernantes de la República Aristocrática, finalmente, se decidieron por la «civilización» de origen civil para la población indígena, dejando al Ejército una función complementaria en este objetivo.

⁴⁴⁵El Artículo 42° de la Ley del Servicio Militar Obligatorio disponía que el periodo máximo de acuartelamiento para la instrucción de los supernumerarios no podía exceder los dos meses. Concordante con ello, en 1910, Paul Clément, informaba que durante las movilizaciones de 1909 y 1910 «no se á podido dedicar, como en los años anteriores, mucho tiempo á la instrucción civil» (1910: 6).

Capítulo. 7. Una política de concentración de la coerción: el recojo del armamento de guerra

Como el departamento de la Libertad, durante el tiempo de la guerra civil última, fue el centro principal de operaciones militares en el Norte, á la caída del Gobierno del General Cáceres, los pueblos que habían estado armados [...] constituían para el futuro una amenaza constante. En esta virtud, mi principal empeño se concretó á recoger las armas y municiones de propiedad del Estado que retenían ocultas los particulares, para quitarles así todo elemento de trastorno en el porvenir, y asegurar por tal medio el establecimiento, tanto del orden público [...] como así mismo la estabilidad del nuevo Gobierno.⁴⁴⁶

La revolución de 1894-1895 fue el último de los movimientos políticos que llevaron al poder a un caudillo sobre la base de abigarradas alianzas de facciones políticas nacionales, notables regionales y locales –todos ellos apoyados por sus clientelas–, militares y diversos actores locales con reivindicaciones diversas. Era esta una sociedad heterogénea, con una diversidad de agendas, articulaba sus intereses personales o de grupo en débiles alianzas compuestas por facciones y clientelas que se enfrentaban para alcanzar el poder y excluir políticamente a sus rivales del control del Estado. Como hemos visto en el Capítulo 5, la capacidad que gozaron estas redes o alianzas para derrocar gobiernos centrales durante todo el siglo XIX mostraba la «vitalidad» de una sociedad que –si bien desprovista de grupos que ejercieran abrumadoras hegemonías– lograba oponerse y vencer a un débil Estado dotado de ineficaces medios coercitivos para someter dicha sociedad a su autoridad, y desprovista también de la legitimidad política de una élite política que iniciara un proceso modernizador en el país.

⁴⁴⁶ AGN: H-6-2164, “Memoria del Prefecto de La Libertad José María de La Puente de 1896”, p. 4. *Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco*. [Sin pie de Imprenta], 1896.

El hecho de que posteriores intentos revolucionarios de esta naturaleza fueran infructuosos para alcanzar el poder en el siglo XX, debe tener una explicación en los cambios políticos y económicos que se desarrollaron posteriormente a dicha revolución y que tendieron a la *pacificación* prolongada de la vida política (al menos durante la República Aristocrática), es decir, a la canalización del conflicto político a través de los medios formales del gobierno representativo. La práctica de dirimir el conflicto político entre las élites nacionales y locales a través de guerras civiles y que tenían como principal característica la participación de las poblaciones urbanas y rurales, terminó con los albores de la nueva centuria. Las poblaciones peruanas, armadas en improvisados ejércitos, no volvieron nuevamente en la historia del Perú a protagonizar una guerra civil en torno a un caudillo civil o militar.

El inicio del siglo XX inaugura nuevas formas de dirimir los conflictos políticos, siendo sus primeras dos décadas un periodo de estabilidad excluyente y las cuatro posteriores testigos de una nueva tradición política violenta, en donde el Ejército del Perú arbitró el conflicto entre la oligarquía y los partidos políticos de masas⁴⁴⁷. Ahora bien, el tránsito del beligerante siglo XIX a la República Aristocrática reclama una explicación que vaya más allá de un conceso político modernizador de las élites o de las alianzas políticas surgidas luego de la revolución pierolista. Ello no implica negar la importancia el voluntarismo político de las élites representadas en sus partidos para llegar hacia ese consenso modernizador.⁴⁴⁸ Sin

⁴⁴⁷ Publicaciones interesantes sobre la historia de las relaciones cívico-militares durante el siglo XX son las de Víctor Villanueva (1962, 1971, 1973), Daniel Masterson (2001) y Eduardo Toche (2008).

⁴⁴⁸ Las explicaciones aceptadas sobre la estabilidad política durante la República Aristocrática subrayan la alianza existente entre la élite social representada en el Partido Civil y los gamonales en el interior del país, construyéndose esta estructura de dominación en un acuerdo tácito por el cual la oligarquía desde el Estado otorgaba prebendas políticas y económicas a los gamonales, además de anuencia a las prácticas omnímodas de estos en sus respectivas regiones, a cambio de que mantuvieran sometida a la población campesina. Esta nueva dinámica implicaba respecto al siglo XIX también que, en el interior del país, los gamonales competían entre sí por el favor de la élite gobernante. Estamos de acuerdo con esta hipótesis, aunque consideramos que deberían hacerse investigaciones más detalladas que iluminen las características de esta alianza. Sin embargo, tal interpretación pasa por alto una pregunta fundamental referida a la transición entre ambos siglos, a saber: por qué los gamonales excluidos temporalmente de los favores del Gobierno central no se lanzaron a guerras civiles apoyando a las élites ligadas a los partidos Demócrata y Liberal, también excluidas del Gobierno, como lo habían hecho durante todo el siglo XIX. Parte de la respuesta a esta pregunta debe radicar en el debilitamiento político de Nicolás de Piérola, como caudillo nacional y en el carácter reducido del partido Liberal de Augusto Durand, incapaces en tales circunstancias de liderar una revolución que los llevara al poder. También ello puede explicarse en la decisión de Nicolás de Piérola de aceptar el juego político formal, por lo menos hasta 1908. No obstante, creemos que la otra parte de la explicación reposa en los cambios operados a fines de siglo que fortalecieron al Estado al punto de hacer poco probable la victoria de una aventura política armada protagonizada por una alianza entre los actores excluidos. Estos cambios fueron, a nuestro juicio, las reformas al interior del Ejército,

embargo, vale la pena explorar en qué medida las transformaciones operadas en el Ejército y en las medidas complementarias a la reforma militar limitaron el recurso a la movilización política armada de la población en la dirimencia de los conflictos entre las élites.

La propuesta de nuestra tesis argumenta que la reforma del Ejército cerró la posibilidad al uso de este recurso, generando una nueva correlación de fuerzas entre la sociedad y el Estado, evidentemente a través de una política consciente de concentración de poderes, prerrogativas y recursos antes dispersos en diversos actores sociales o débilmente poseídos por aquel. Tales concentraciones y la adquisición de nuevos recursos, aunque no dotó al Estado peruano del monopolio de la coerción, sí inclinó la balanza del ejercicio de la violencia hacia el Estado –y a quien lo detentase–, reduciendo al mismo tiempo la posibilidad de la población de participar con sus propias demandas en los conflictos de las élites políticas y sociales.

Afirmamos que estas nuevas capacidades obtenidas por el Estado estuvieron directamente relacionadas en el mediano y largo plazo con la profesionalización, burocratización y disciplinamiento de los antes díscolos jefes militares, además de la maquinaria punitiva del Código Militar de 1898. Sin embargo, en el gobierno de Piérola se llevaron a cabo otras tácticas menos notorias –aunque no por ello menos significativas– que modificaron la correlación de fuerzas en favor del Estado. En este capítulo observaremos una política nacional, que aunque no formó parte estricta de la reforma militar, se encontraba vinculada ella. Nos referimos a la política nacional de concentración de armamento de guerra. Esta política, si bien no se encontró dentro del conjunto de medidas destinadas a la modernización del Ejército, sí formaba parte de una gran estrategia general de aseguramiento del orden interno y de afirmación del Estado, en la que está inserta la reforma del Ejército.

Antes de entrar en la materia, vale la pena exponer por qué esta medida puede y debe considerarse como relacionada con la reforma militar, a pesar de no implicar acciones estrictamente vinculadas a la institución del Ejército. En primer lugar,

como las políticas de concentración de los medios de coerción, las cuales debilitaron a los actores sociales frente al Estado.

sostenemos que nuestra propuesta interpretativa de la reforma del Ejército, desde el punto de vista de la construcción del Estado moderno, estaría incompleta si es que no se pusieran de manifiesto las medidas que posibilitaron el ejercicio de la coerción por parte del Estado sobre unos díscolos actores sociales decimonónicos. Si las medidas de la reforma del Ejército no solo estuvieron dirigidas a la modernización de dicha institución de cara a sus funciones de defensa del país, siendo por el contrario parte de sus objetivos la estabilización y el fortalecimiento del Estado frente a esos actores sociales política y militarmente movilizables, la reducción de sus capacidades de beligerancia para su subordinación a una nueva hegemonía resulta un asunto ineludible en nuestra explicación.

En segundo lugar, cualquier estudio sobre el Ejército peruano, dadas sus particularidades históricas y las del Estado republicano, debe caer en la cuenta que desde los orígenes de las instituciones castrenses en el Perú –como los ejércitos de Antiguo Régimen–, estas han sido tanto un arma contra los enemigos externos del Estado, como una herramienta para el control interno de la población (Cfr. Toche 2008: 24).⁴⁴⁹ La fuerte herencia colonial de gobierno indirecto para la administración de territorios y poblaciones, no implicaba el ejercicio inmediato de los virreinales sobre la inmensidad del territorio y sus habitantes. En gran medida, el control regular de la población recaía en autoridades venales y notables locales (representados o no en las corporaciones) y en un denso control ideológico proveído por una tradición expresada en las máximas católicas del respeto sagrado de los reyes y sus representantes.⁴⁵⁰ La llegada de un Ejército regular con los monarcas borbones y su puesta en acción contra los desafíos políticos y sociales que se abrieron primero con la rebelión de Túpac Amaru II y luego los proyectos independentistas, sentaron la práctica de emplear al Ejército como último recurso para la pacificación de los territorios interiores.⁴⁵¹

⁴⁴⁹ Todas las Constituciones Políticas de 1823, 1828, 1839, 1856 y 1860, unas con mayor claridad que otras, declaraban que la misión de la Fuerza Pública, es decir, el Ejército de línea, la Armada y las Guardias Nacionales, era asegurar los derechos de la Nación el exterior, la ejecución de las leyes y el orden interior.

⁴⁵⁰ Respecto al ejercicio del poder de las autoridades coloniales en el contexto de las rebeliones indígenas dieciochescas, se puede ver Golte (1980) y O'Phelan (1988). Para observar discursos legitimadores de la autoridad en las primeras décadas del siglo XIX, se puede consultar Aljovín y Velásquez (2011).

⁴⁵¹ Investigaciones sobre las reformas borbónicas han puesto de relieve el reforzamiento de las fuerzas militares permanentes en el Virreinato peruano y la conformación de cuerpos de milicias, para lo cual

Los ejércitos republicanos del siglo XIX heredaron esta práctica, en gran medida por la imposibilidad del Estado postindependencia de construir una fuerza policial competente y extendida en el territorio nacional que ejerciera una violencia racionalizada sobre la población civil. De manera discontinua y, a veces, brutal correspondía a los débiles destacamentos militares diseminados en las principales ciudades del país sofocar las rebeliones indígenas y los alzamientos de los opositores a los gobiernos, apoyados por una población civil leal o aliada al gobernante, organizada ya sea en milicias o en montoneras. A pesar que con el pasar del siglo XIX se crearon organizaciones policiales como la Guardia Civil o la Gendarmería, correspondía al Ejército cortar los alzamientos dada la debilidad de las fuerzas policiales antes mencionadas (Cfr. García Calderón 2007 [1879], t. II: 1015-1027). En ese sentido, la aplicación de la violencia por el Ejército no se disoció de los asuntos internos, ni aún durante el gobierno de Piérola, pues como hemos visto, la reforma militar también tenía una orientación hacia la pacificación del orden interno.

Entonces, si asumimos que dentro del modelo de Estado de las élites peruanas de fines del siglo XIX los asuntos de orden interno atañían también al Ejército, es aún más lícito considerar que para ellas las medidas dirigidas al control de la población relacionadas con los instrumentos de ejercicio de la violencia militar, tuvieran también un carácter militar. En ese sentido, la política nacional de recojo de armamento de guerra disperso desde la Guerra del Pacífico (los instrumentos para el ejercicio de la violencia militar), no debe considerarse de forma autónoma de la estrategia de estabilización política desarrollada por el gobierno de Piérola y proseguida por sus sucesores. El carácter «militar» de esta política quedó expresado en el Código de Justicia Militar promulgado en 1898. En este cuerpo legal, la persecución a la posesión de armas de guerra por civiles, como instrumentos militares, pasó a formar parte de la jurisdicción castrense.

Esta medida tendió a acrecentar la fuerza relativa del Estado peruano frente a su población. El recojo de armamento de guerra reducía la capacidad de los diversos actores sociales para retar el dominio del Estado, concentrando solo este recurso en sus propias manos, con lo que aumentaban sus capacidades coercitivas que

se puede consultar Sánchez (2007), Fisher (2000), Gálvez (1999). Respecto a la constitución del Ejército realista en el Virreinato peruano, resulta interesante el libro de Luqui-Lagleyze (2005).

contribuían a su estabilización. Esta política estuvo acorde con las posibilidades que otorgaban las características de la sociedad peruana, la misma que, con sus peculiaridades, se puede insertar en la trayectoria de los procesos de acrecentamiento de la autoridad de los Estados modernos. Siguiendo a Charles Tilly, los Estados se construyen cuando la autoridad de este se sobrepone sobre los diversos actores sociales que existen en el territorio reclamado por los primeros. Esta autoridad no puede ejercerse de otra manera sino a través de la acumulación y concentración de los medios coercitivos, siendo el gran logro de los Estados modernos europeos, desde el siglo XVII, el emprender exitosamente una larga estrategia de siglos de duración, por la cual los monarcas terminaron desarmando a sus rivales políticos (las aristocracias, los poderosos regionales y locales y a las poblaciones rurales) y concentrando en el Estado los medios para ejercer la violencia (Cfr. Tilly 1992: 44-45). Tilly señala, de manera concisa, el cambio que significó esta estrategia de concentración de la coerción:

Durante la mayor parte de la historia europea, el hombre común (una vez más, importa la forma masculina de la palabra) ha dispuesto por lo general de armas mortales; dentro de cualquier Estado dado, además los poderosos locales y regionales han tenido casi siempre el control sobre los medios concentrados de fuerza que, unidos podían igualar y aún superar a los del Estado. [...] Durante el siglo XVII, no obstante, los gobernantes han logrado inclinar la balanza de modo decisivo tanto frente a los ciudadanos particulares como frente a los poderosos que rivalizaban con ellos dentro de sus Estados. Han logrado que el recurso de las armas sea delictivo, impopular y poco práctico para la mayoría de sus ciudadanos, han proscrito los ejércitos privados y han hecho que no parezca normal que los agentes armados del Estado se enfrenten a la población civil desarmada. (Tilly 1992: 111-112)⁴⁵²

La mayoría de los nacientes Estados modernos se construyó en base del ejercicio asimétrico de la coerción sobre la población de su territorio, ganando una guerra no siempre declarada contra sus propios súbditos. Asimismo, en el tránsito del siglo XVIII al XIX, se produjo una bifurcación en los ámbitos institucionales de la aplicación la violencia sobre la sociedad sometida. Como también menciona Tilly,

⁴⁵² Dentro de las trayectorias de concentración de los medios de coerción de los Estados moderno, resulta la más notable excepción los Estados Unidos de Norteamérica.

las Fuerzas Armadas de los Estados modernos europeos, después de pacificar sus respectivas sociedades reduciendo crecientemente a los opositores a la autoridad del Estado central y sus manifestaciones de violencia privada, tendieron a dirigir su área de competencia institucional hacia el exterior de las fronteras; mientras que, para el control de la población civil, se estableció la organización de fuerzas policiales, a las que se les adjudicó funciones especiales de vigilancia, particularmente en las zonas urbanas. Por el contrario, para las zonas rurales, la separación entre las Fuerzas Armadas y el resto de organizaciones policiales se produjo con posterioridad. Las Fuerzas Policiales en el campo tuvieron hasta el siglo XX un marcado «estilo militar» (Tilly 1992: 120-121).

Christopher Dandeker, por su parte, considera que estos cambios institucionales se operaron sobre el telón de fondo de las importantes transformaciones sociales que trajo consigo el advenimiento del capitalismo industrial. Por un lado, el crecimiento de las áreas urbanas, la concentración de la población en ellas y la movilidad de personas que permitían las oportunidades del mercado constituyeron masivas «sociedades de extraños» que rebasaron las posibilidades de los instrumentos de control tradicionales como el clientelismo y las regulaciones de las comunidades de cara-a-cara. Por otro lado, la estructuración de una sociedad dividida en clases, con los consecuentes antagonismos propios de intereses de clases contrapuestos, en un contexto de creciente producción y concentración de riqueza, generaron nuevas demandas de las clases acomodadas para el control de una creciente población urbana de la que se temía podía subvertir el orden social. La solución dada por el Estado a estos desafíos fue el establecimiento de una organización especializada para la vigilancia (prevención) y represión del delito, provista de técnicas para la aplicación de la coerción focalizadas y más cercanas a la población sometida: la Policía (Cfr. Dandeker 1990: 116-123).

Según el mismo Dandeker, el advenimiento del capitalismo industrial, además que creó los excedentes necesarios para la implementación de una enorme burocracia estatal orientada a la vigilancia y control de la población, también permitió salvar las dificultades técnicas que dificultaban a los Estados centrales ejercer su autoridad sobre sus súbitos. Desarrollos técnicos que mejoraron los medios de comunicación y de transporte permitieron superar las barreras del tiempo y el espacio de las

sociedades preindustriales. El telégrafo y los ferrocarriles permitieron salvar las distancias y el consecuente tiempo empleado para su recorrido, permitiendo el acceso veloz de información sobre poblaciones distantes al centro administrativo y la rápida toma y ejecución de medidas de control sobre aquellas. En ese sentido, las innovaciones tecnológicas propias del capitalismo industrial para fines privados fueron de la mano con intereses por solidificar la autoridad del Estado central (Cfr. Dandeker 1990: 52-60).

Las características de la sociedad peruana pusieron límites a la construcción del Estado peruano en el periodo que estudiamos. El Perú era un país eminentemente agrario, con nacientes espacios de producción capitalista aún muy pequeños (Cfr. Thorp y Bertrand 1988: 42-48). La población era reducida y dispersa respecto al tamaño del territorio, siendo incluso las ciudades espacios no masificados. La mayoría de la población aún se encontraba fijada en el campo, sin las oportunidades de movilidad que otorga una sociedad en proceso de expansión del mercado. Por tanto, la regulación interior dependía en mucho de las prácticas clientelares de los notables regionales o locales y la violencia paternalista de los hacendados (fuera o dentro de sus propiedades agrarias). De la misma manera, resultaba imposible, por lo menos en este periodo, una estructuración de clases que significara un desafío para el Estado (Cfr. Burga y Flores Galindo 1987: 101-105). Antes de controlar a las clases proletarias, el Estado peruano debía defenderse de las alianzas entre facciones de las élites propietarias, de los mismos militares y de los sectores urbanos y agrarios. Esta situación cambiaría a partir de la segunda década del siglo XX con el desarrollo del proletariado urbano y rural, la intensificación de la actividad sindical y el surgimiento de los partidos de masas, especialmente del APRA (Cfr. Burga y Flores Galindo 1987: 151 y siguientes).

Estas limitaciones estructurales de la sociedad peruana no fueron salvadas hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, recalcamos que aunque no se desarrolló en este periodo un tipo de control capilar sobre la población peruana por las limitaciones anotadas, sí se logró modificar la correlación de fuerzas entre el Estado y los actores sociales a fines del siglo XIX, con la recolección de armas de guerra y las reformas que se hicieron en el Ejército. Veamos de qué trató esta política.

7.1. La dispersión de las armas de guerra

El Perú del siglo XIX era una sociedad donde los medios de coerción se encontraban dispersos entre la población. Como toda sociedad tradicional, el poblador medio disponía de medios efectivos de violencia. Por ejemplo, los campesinos indígenas –mayoritarios en el país–, en las guerras de fines del siglo XVIII y de principios del XIX marchaban a esos conflictos con sus lanzas, rejonas, palos, hondas y galgas (piedras).⁴⁵³ Lo rudimentario de estos medios de violencia se compensaba con el número de la tropa y la estrategia de los comandantes militares. Cuando se trataba de conflagraciones internas, los límites de la tecnología bélica no imponían serios inconvenientes en la medida que los grupos en pugna empleaban por igual a campesinos indígenas, pobremente armados, como el grueso de sus ejércitos.

Otros medios de violencia tecnológicamente más avanzados y efectivos los constituían las armas de fuego. Comparativamente a las armas indígenas, el poder destructivo de las armas de fuego era muy superior. Para el siglo XVIII existían en el Virreinato peruano fusiles, carabinas, escopetas, tercerolas y revólveres provenientes de Europa (Cfr. Vega 1981: 289 y 497). La posesión particular de armas de guerra era permitida por los reyes a los vasallos que pertenecieran al fuero militar, es decir, quienes sirvieran en los ejércitos de Su Majestad. Su uso oficial estaba limitado al servicio del Rey, mientras que el empleo particular estaba restringido al exterior de las áreas urbanas.⁴⁵⁴ En ese sentido, se comprende que las milicias que se formaron a finales del siglo XVIII dentro de las medidas defensivas del proyecto borbónico fueron abastecidas y armadas por los mismos vasallos criollos, «civiles vestidos de militares» (Sánchez 2007: 718-724).

Las guerras de independencia fueron un importante periodo para la introducción de armas de fuego. Al ser un conflicto extendido, tanto geográfica como

⁴⁵³ Sobre el armamento de las comunidades indígenas durante la rebelión de Túpac Amaru II, se puede consultar Vega (1981: 495-505).

⁴⁵⁴ Las Ordenanzas de Carlos III prescribían, en el Título I, Artículo 3º, que «[po]drán usar armas de guerra cuando estén de servicio, cuando no, sólo podrán utilizarlas fuera de las zonas urbanas y podrán conservarlas guardadas hasta que sean llamados de nuevo al servicio». En 1750, luego de una rebelión abortada en Lima, se hizo un recuento de los vasallos que poseían armas, contabilizándose en la capital un total de 1811 personas (Vega 1981: 289).

socialmente, permitió un mayor contacto de la población con este tipo de armamento, el cual era traído en remesas por ambos bandos para incorporar a nuevos combatientes dentro de sus filas. Estas guerras permitieron que no solo los blancos, mestizos y zambos tuvieran manejo de tales armas, como fue el caso de las milicias virreinales, sino que también indígenas fueran adiestrados en el manejo de dicho material bélico. Las guerrillas organizadas por el Ejército del libertador José de San Martín fueron un importante medio para incorporar a los indígenas en el bando patriota y, con ello, al uso de este armamento.⁴⁵⁵

Terminada la conflagración auroral del Estado peruano, resultaba evidente que una importante cantidad de los elementos bélicos permaneciera dispersa en la población, la misma que permitiría un cierto nivel de autonomía a los actores que los conservasen para negociar con los caudillos gobernantes o caudillos retadores en sus pugnas por el poder durante las guerras civiles posteriores a la independencia. En ese sentido, no era por tanto extraño ver grupos indígenas y bandoleros-montoneros armados apoyando a diversos caudillos, reclamando al mismo tiempo diversos beneficios.⁴⁵⁶ De manera similar al siglo anterior, los particulares tenían posesión de armas de guerra, sin embargo, es plausible suponer que su uso se extendió después de la independencia, considerando los constantes conflictos entre caudillos y facciones de las élites que revestían una fuerte participación popular.

Entonces, cada enfrentamiento militar externo o interno, en el siglo XIX, era ocasión para el acceso a las armas de guerra y retención por parte de la población. Especialmente, en los contextos de guerras civiles, los *ciudadanos* enrolados militarmente podían mantener la posesión de las armas entregadas por alguno de los bandos en pugna o hacerse con el armamento de los poco seguros cuarteles militares durante alguna rebelión.⁴⁵⁷ También el ingreso de armas de guerra traídas del

⁴⁵⁵ En los documentos recopilados en la Colección Documental de la Independencia del Perú, se muestra el interés de los jefes militares patriotas por la constitución de guerrillas, otorgándoles en la medida de sus posibilidades fusiles de chispa. Además de las rudimentarias armas, como las mencionadas durante la rebelión tupamarista, las poblaciones indígenas lograron obtener contacto con armas de fuego en las guerrillas y montoneras (CDIP 1971, t. V, vols. 1 y 2).

⁴⁵⁶ Para la década de 1830, los trabajos de Charles Walker y Cecilia Méndez han puesto de relieve, acertadamente, el grado de participación de los grupos sociales subalternos en las luchas caudillistas (Walker 2009: 283-310, Méndez 2004).

⁴⁵⁷ Incluso los cuarteles de Lima no podían ser resguardados de la población en momentos de alta movilización política. Como un caso extremo tenemos la sublevación de la población contra la fallida revolución acaudillada por los hermanos Gutiérrez. Los días 24 y 25 de julio de 1871, la población de

extranjero para intentos revolucionarios daban ocasión para la dispersión de estos elementos bélicos, como el armamento que trajo el mismo Piérola cuando intentó iniciar una revolución desde Arequipa, comprando el barco *Talismán* y pertrechos de guerra en Europa, en 1874.⁴⁵⁸ Este armamento disperso era siempre un inconveniente para la seguridad de los gobiernos constituidos, como lo sabían sobradamente los políticos de la época. Así, en el contexto de la rebelión iniciada en Arequipa, el 21 de abril de 1853, contra el gobierno de Echenique, el Congreso Extraordinario promulgó una Ley autorizando al Presidente para «recoger las armas y pertrechos de guerra que se hallen diseminados en la ciudad de Arequipa ó en cualquier otro pueblo y que pudiera emplearse en alterar la tranquilidad pública»⁴⁵⁹.

Los Reglamentos de Policía establecían regulaciones sobre el uso de armas por parte de los civiles, prescribiendo su registro, formas de empleo legal y los espacios en donde se podía hacer uso de ellas. Según los reglamentos que se promulgaron entre 1845 y 1849, estaba prohibido el uso de armas blancas o de fuego bajo pena de decomiso o multa, salvo las personas que las registraran ante la autoridad policial y se les autorizara por razones de su oficio, previo pago de una licencia.⁴⁶⁰ Estas mismas normas prescribían que cabía a los agentes de Policía guardar vigilancia sobre el uso particular de las armas en las ciudades, mientras que en las haciendas o

Lima, enfurecida por la noticia del asesinato del presidente Balta, se levantó contra el gobierno revolucionario, al tanto que las fuerzas de este desertaban ante el desconcierto, entregando sus armas de guerra a la población civil. Frente a la magnitud de los acontecimientos, Tomás y Marceliano Gutiérrez, junto al Batallón Zepita, intentaron refugiarse en el cuartel de Santa Catalina, la fortificación más sólida de la capital, sin embargo, a pesar de su defensa, este fue sitiado y se obligó a los hermanos a salir del cuartel, quienes encontraron la muerte poco después (Basadre 2005, t. 7: 114, 116-117).

⁴⁵⁸ Este intento revolucionario de Piérola es un buen ejemplo de cómo el armamento de guerra ingresaba al país clandestinamente, cómo se podía reducir a las débiles guarniciones locales y tomar sus pertrechos, cómo se armaba a la población civil (se armaron a varios ciudadanos de Moquegua) y se dispersaban sus fuerzas con el armamento de guerra. Detalles de la insurrección pierolista puede verse en Ulloa (1981: 193-199). Según Jorge Dulanto Pinillos, en el *Talismán* se embarcaron varios bultos de fusiles, pólvora, dos cañones y municiones (1947: 146-147).

⁴⁵⁹ Ley del 18 de agosto de 1853, en Oviedo (1861, t. II: 202-203).

⁴⁶⁰ A modo ilustrativo, el Reglamento de Policía de Trujillo de 1847 establecía, en su Artículo 80°, «Es prohibido llevar puñal, navaja grande de punta ó de barba, daga, cuchillo, estoque, aunque se a encubierto, machete, machetillo y cualquiera otra arma blanca ó de fuego, bajo la pena de perderla, y de cinco á diez días de arresto, si no resultase contra la que la llevase, sospecha fundada de estar armado con ánimo de dañar, en cuyo caso será puesto á disposición del juez competente»; la prohibición de su uso era total, tanto «dentro ni fuera de la ciudad», a menos que el jefe de Policía le otorgara una licencia de uso por un año, autorización renovable por la que debía efectuar un pago, como lo prescribía el Artículo 81° del mismo reglamento (Oviedo 1861, t. II: 218).

chacras correspondía a los propietarios el comiso del armamento que pudieran poseer los trabajadores de sus fundos, remitiéndolo luego a las autoridades policiales.⁴⁶¹

Sin embargo, distintos indicios muestran que las regulaciones eran sobrepasadas por la práctica de los actores. Son sobradamente conocidas las violentas prácticas electorales donde se hacían uso de las armas de fuego para tomar el control de las mesas de votación, a pesar de las regulaciones ad hoc que se hacían para evitar los enfrentamientos entre facciones locales (Cfr. Basadre 1980: 29-30, Aljovín 2005: 66). La imposibilidad para hacer cumplir las disposiciones gubernativas era incluso patente en la capital, como lo mostraba un articulista anónimo que publicó en *El Comercio* un comunicado criticando un decreto del Prefecto, por el cual se disponía la entrega de armas particulares por las Elecciones de 1861:

Es admirable el orden que reina en la poblacion, y lo perfectamente obedecidos, que son los bandos de la 1ª autoridad departamental. Despues del segundo bando para que nadie ande armado, anoche á las 7 recorrían las calles de la ciudad pandillas armadas que iban viviendo (¡poco importa á quien!) y disparando tiros al aire; unos con bala y otros sin ella. Tanta confianza inspiran esos *ciudadanos* armados, que apenas se veía de lejos sus algaraza cuando empezaba el cierra puertas tradicional de Lima, cada uno, temiendo, y no sin razon, que una bala perdida se meta en casa y vaya á herir alguno [...] Tenemos, por ese decreto (prefectural), que todos los vecinos de Lima, que cual mas menos tiene armas en su poder, esta obligado á entregarlas dentro del perentorio término de dos dias, y despues que vengan ladrones! Mientras, los *ciudadanos*, que se han armado, para ejercer libremente su derecho de sufragio, se aprovechan de los dias *perentorios* para quemar las municiones que tienen, no importa que el vecindario se alarme.(*El Comercio*. Lima, 16 de julio de 1861. Las cursivas son mías)

El artículo no solo mostraba la dificultad del Gobierno para controlar el uso de armas en un contexto específico, sino también la actitud favorable hacia su posesión por parte de la población. Teniendo en cuenta situaciones similares de inseguridad y las

⁴⁶¹ Por ejemplo, el Reglamento de Policía de Tacna de 1847 establecía, en el Artículo 201º, que «[l]os patrones de las chacras ó haciendas están obligados á embargar las armas prohibidas que se encuentren en los galpones ó ranchería de los fundos, y á ponerlos á disposición de la policía» (Oviedo 1861, t. II: 295).

limitadas capacidades de control del Estado, en 1873, el gobierno de Manuel Pardo sancionó legalmente el uso del armamento privado para fines oficiales a través de la organización de las «guardias urbanas». Según esta propuesta, en poblaciones «frecuentemente amenazadas por malhechores» o en las que no existieran fuerzas policiales permanentes, los vecinos debían colaborar con las autoridades políticas, prestando sus personas y sus «armas propias» para la defensa del orden interior de sus vecindarios. Para tal efecto, los subprefectos, gobernadores o tenientes gobernadores debían dividir a las localidades en barrios, convocando a los pobladores con «industria conocida» para que eligieran un alcalde y cuatro tenientes alcaldes entre las personas «dignas de esa confianza». Estos, a su vez, les correspondía registrar a los vecinos que, de acuerdo a «su edad, moralidad y circunstancias personales», pudieran ejercer funciones de policía exclusivamente en los casos de «ataques de malhechores, y para la custodia de las propiedades en caso de incendio ó siniestro de cualquier género». Considerando esto, resultaba claro que las guardias urbanas habían sido diseñadas para canalizar y dirigir las acciones particulares de los notables locales en provecho del orden interno y del gobierno de turno. Así, en tanto el Estado no era capaz de asegurar el control de las poblaciones del interior, facultaba a los vecinos de «confianza» el uso de sus armas personales, sancionando con ello una forma de ejercer la violencia que, de hecho, ya se producía (Ley del 31 de noviembre de 1873, citada en García Calderón 2007 [1879], t. II: 1015).

Esta concesión por parte del Estado no era sino una forma de compensar formas de ejercicio de la coerción, ejecutadas por otros tipos de actores. Precisamente, en las regiones en donde la presencia de las Fuerzas Policiales o del Ejército era precaria, la posesión de armamento, incluyendo las armas de guerra, posibilitó la aparición del bandolerismo. En departamentos como Piura o Cajamarca, donde la autoridad del Estado central era débil, partidas armadas rondaban las poblaciones importantes, acechando a las autoridades locales y a los individuos particulares, atacando a los viajeros o dedicándose al pillaje y la cuatrería. Cabe señalar que aquellos hombres armados, señalados por las autoridades como *bandoleros*, podían tener orígenes diversos: algunos podían ser hombres que, excluyéndose de la condición campesina, conformaban bandas de aventureros en busca de rapiña o poder personal; otros podían pertenecer a pequeños asentamientos

campesinos que hacían valer sus intereses por medio de las armas; algunos otros podían formar parte de la guardia personal o aliada a un hacendado. No obstante, estos hombres armados no eran simplemente una fuente de inseguridad en los espacios locales, su capacidad para ejercer la violencia les dio en muchas oportunidades la posibilidad de intervenir en las pugnas por el poder entre las facciones locales y regionales en la segunda mitad del siglo XIX. Como han mostrado Lewis Taylor, para Cajamarca, y Nils Jacobsen y Alejandro Diez Hurtado, para el caso de Piura, los bandoleros eran piezas claves en las estrategias de los notables en sus luchas por el dominio de sus propias regiones (Lewis 1990: 220-225, Jacobsen y Diez 2002: 57-131).

Pero la injerencia política de estos actores no terminaba en los ámbitos locales y/o regionales. En el Capítulo 5 hemos tratado, de manera tangencial, sobre la peligrosidad para los gobiernos cuando los bandoleros se convertían en actores políticos en las luchas por el poder. Algunos estudios sobre la temprana república, como los del historiador norteamericano Charles Walker, muestran esta participación y su vinculación con los grupos liberales (Walker 2009), sin embargo, el estado de las investigaciones sobre el bandolerismo y las montoneras no nos permite conocer con precisión en qué medida la participación de las montoneras fue determinante en los conflictos políticos nacionales anteriores a la Guerra del Pacífico. Por el contrario, resulta evidente que aquel acontecimiento potenció las condiciones preexistentes para la formación de grupos de bandoleros, pero sobre todo fortaleció la posición de los diversos actores sociales para respaldar, con armas de guerra, sus intereses locales respecto al Estado. De manera similar a las guerras de independencia, la extensión territorial del conflicto movilizó a diversos actores poniéndolos en contacto con el armamento introducido al país para defenderlo de las fuerzas chilenas. Los diversos gobernantes que lideraron la resistencia durante el conflicto, compraron armamentos en momentos diversos, no pudiendo siempre conservarlos por la creciente precariedad de su autoridad y la disolución de las fuerzas a su mando cuando estas fueron derrotadas.⁴⁶² No obstante ello, la introducción de armas de guerra sin control del

⁴⁶² Durante la Guerra del Pacífico se compró armamento en diversas ocasiones, no pudiendo ser conservadas por el Estado por el grado de fragmentación y precariedad del liderazgo político por ese entonces. Para la defensa de Lima se compraron doce mil rifles Remington, quedando gran parte en manos de los invasores chilenos como botín de guerra, así como en posesión de los soldados que se dispersaron estrepitosamente después de la derrota (Cfr. Leiva 1989: 285 y 291). Por su parte, en 1882 y 1883, los agentes diplomáticos del gobierno de Lizardo Montero también remitieron armamentos

gobierno en funciones no terminó con la Guerra del Pacífico, pues durante la insurrección pierolista, las armas podían internarse en el país desde las amplias fronteras que no eran lo suficientemente vigiladas⁴⁶³. Desde Bolivia, Ecuador o Chile se podían enviar cargamentos de armas para fines revolucionarios. Una nueva *democratización* en el acceso al armamento de guerra se produjo en este contexto y fue determinante para la victoria de las fuerzas pierolistas en la revolución de 1894-1895.

Algo que se debe remarcar es que la revolución había demostrado la vitalidad de los actores sociales respecto a su Estado, y la incapacidad de este para asegurar su permanencia, aún a pesar de que el gobierno de Cáceres dispuso una defensa cerrada de los jefes militares y sus cuerpos de línea. La revolución había revelado elocuentemente que una nueva articulación de intereses y facciones podía desestabilizar y derrocar un gobierno, aún sin contar con el apoyo de fuerzas militares. Los combatientes en la revolución no sólo fueron bandoleros-montoneros, sino también participaron «ciudadanos» de todo tipo que contaban con armas de guerra que protestaban contra a un gobierno desprestigiado o que luchaban siguiendo sus propios intereses (Mc Evoy 1997: 337, Jacobsen y Diez 2002: 122-123, Dulanto 1947: 410-411).

Ahora bien, a fines de siglo la posesión de armas de guerra resultó tener creciente importancia como medio de ejercicio de la coerción y la política. El continuo desarrollo de la tecnología militar en Europa y los EE.UU., durante la segunda mitad del siglo, condujo al mejoramiento progresivo de las armas de guerra portátiles, aumentándose así gradualmente el alcance de tiro, la potencia de fuego, la precisión, la cadencia del disparo y la facilidad para su carga, lo que implicaba que estas armas disparaban cada vez más a mayor distancia, sus balas resultaban ser más mortíferas y emitían más proyectiles por minuto que en el pasado. Estas innovaciones al aumentar su potencia destructiva, con el pasar de la centuria, tendieron a hacerlas cualitativamente superiores respecto a sus pares destinadas al

hacia el Perú desde la Argentina que debían ser introducidos por Bolivia y conducidos a la ciudad de Arequipa. Según Basadre, el armamento de infantería ascendía a ocho mil rifles, de los cuales una cantidad incierta debió quedar en manos de particulares luego del motín y la posterior retirada de Montero de la ciudad, a pesar de las comisiones que se realizaron para su recojo luego de la ocupación chilena de la ciudad (Basadre 2005, t. 9: 278, 291-292).

⁴⁶³Desde Chile y Bolivia se internaron en el territorio peruano armas y hombres ante la impotencia del gobierno de Cáceres (Cfr. Dulanto 1947: 408, Mc Evoy 1997: 331).

uso civil, haciéndose cada vez más determinante la posesión del armamento militar más moderno para la victoria.

Trasladando estas consideraciones al Perú de la postguerra, la posesión de armas de guerra otorgaba una serie de ventajas tácticas a quienes las poseyesen. En manos del Estado permitía a sus agentes el ejercicio asimétrico de la coerción sobre una población que en teoría solo debía poseer armas de uso civil. Sin embargo, al contrario, como sucedió a fines de siglo, encontrándose en manos de particulares y, en su caso, de actores rebeldes, las disparidades con respecto al Estado tendían a reducirse. Al poder emplear armas con el mismo alcance y potencia destructiva, los tiradores civiles tenían la capacidad para enfrentarse a los efectivos de la Gendarmería o a las unidades del Ejército con las mismas ventajas que estas, es decir, a considerable distancia y con un alto grado de precisión. Como sucedió en el caso de la revolución pierolista, numerosos focos insurreccionales compuestos de hombres con mejor conocimiento del terreno, lograron la victoria sobre el ejército cacerista, empleando la táctica de atacar a distancia y dispersarse, lo que obligaba la fragmentación y desgaste de las unidades militares y de policía gobiernista y, con ello, también la pérdida de la ventaja que les otorgaba el número y la concentración de efectivos y fuego⁴⁶⁴.

Para el orden interno y la autoridad del Estado este era el legado de la Guerra del Pacífico y de los conflictos civiles posteriores. El «ciudadano armado» era el ideal patriótico de toda república, sin embargo, existía una sustancial diferencia entre una población militarizada profesionalmente y socialmente pacificada (donde el Estado, a través del Ejército, ejercía el control de la violencia sobre una población reclutada, adiestrada y disciplinada), respecto a una sociedad diversa con poderes locales y grupos particulares que exigían sus intereses respaldados con armamento de guerra.⁴⁶⁵ En ese sentido, resultaba prioritario desmovilizar a esta población privándoles de la herramienta con la cual podían interpelar al Estado.

⁴⁶⁴ Esta táctica tan nefasta al gobierno de Cáceres, hacía reflexionar a este mismo general, ya deportado en Argentina, a fines de 1895, lo siguiente: «Las montoneras eran como tribus nómadas, sin campamento fijo ni derrotero presumible, y el gobierno tuvo que multiplicar cada día sus esfuerzos para perseguirlos y dispersarlos» (Miro Quesada 1961: 265).

⁴⁶⁵ Para los militares formados en la nueva ciencia militar, que los civiles fueran armados resultaba una situación peligrosa. Este razonamiento se sustentaba en el principio de que todo ciudadano armado debía pasar por un entrenamiento militar por el que se le inculcara la disciplina militar y la obediencia a los jefes y oficiales expertos. Un ejemplo claro de este tipo de pensamiento militar lo

7.2. La «democratización» del armamento de guerra a fines del siglo XIX

Antes de mostrar la extensión del armamento de guerra del que venimos mencionando en este capítulo, convendría hacer algunas presiones a su respecto. Las fuentes de la época, que informan acerca de la existencia de armas de guerra en manos de civiles y la necesidad para su recojo, las nombran de diversas formas. La categoría más general que se empleó fue la de *armas del Estado*; ello podía indicar que este armamento fue adquirido originalmente por autoridades del Estado y que por circunstancias ajenas a su legítimo propietario fue materia de apropiación por civiles particulares. No obstante, esta categoría fue también empleada en los casos en que los civiles, al ser inquiridos por su posesión, afirmaban haberlas comprado particularmente.⁴⁶⁶ Esto último resulta plausible en la medida que era práctica común que los agentes de los movimientos revolucionarios decimonónicos compraran con su propio peculio armamento para derrocar a los gobernantes de turno, siempre bajo la esperanza de que se les rembolsara sus gastos una vez que fuesen Gobierno. Sin embargo, como veremos más adelante, hubo casos en los que actores retenían el armamento de guerra, considerándolo como propiedad privada legítimamente adquirida, cuestionando su incautación por parte del Gobierno. Los conflictos derivados de categorizar todo armamento de guerra como propiedad del Estado, a pesar de que fuese adquirido por particulares, manifestaban la pretensión de aquel de proscribir su posesión por parte de la población civil y el deseo de estos últimos por conservarlo.⁴⁶⁷

Las fuentes también mencionan distintos modelos de armas de guerra, dependiendo de su tipo y su sistema. Por su tipo, las armas podían ser fusiles, rifles de precisión y carabinas; mientras que, por su sistema, había armas Manlicher, Comblain, Remington, Spencer, Peabody, Winchester y Grass. Por los estudios

expresaba en una Memoria el prestigioso jefe del Estado Mayor prusiano Helmuth von Moltke, quien criticaba la improvisación de soldados durante el asedio de París, en 1871, y sobre todo sus relaciones con los «alborotadores» que darían vida a la Commune, poco tiempo después (Von Moltke 1891: 300).

⁴⁶⁶ La compra de armas de guerra por civiles y la pretensión de propiedad sobre ellas por estos particulares se verá claramente en el caso Felipe Santiago Oré, que mostraremos más adelante.

⁴⁶⁷ No hemos encontrado una ley específica en la que se proscriba, de manera exclusiva, la adquisición particular de armas de guerra por parte de los civiles.

acerca de las adquisiciones de armamento en el siglo XIX sabemos que la mayoría de estos sistemas habían sido comprados por el Estado peruano en diversas administraciones desde mediados de siglo (Medina 1989: 239-302). Un tipo especial de referencia, que en los reportes oficiales se hacía sobre las armas de guerra, indicaba su peligrosidad, designando a algunas de estas como *rifles de precisión* o *armas de precisión*. Con ello se señalaba que las armas en cuestión eran de ánima rayada y, por ello, tenían una mayor potencia de fuego y alcance. Este tipo de armamento empezó a producirse en Europa desde mediados de siglo y significó un claro avance frente a los fusiles de ánima lisa.⁴⁶⁸

Como hemos manifestado, el armamento de guerra, es decir, fusiles, rifles de precisión y carabinas, quedaron dispersas en casi todos los departamentos del país donde se desarrolló la Guerra del Pacífico. La cantidad de este es una incógnita y merecería una investigación particular, pero para nuestros fines limitados basta mostrar indicios de su dispersión. Tal como muestra el Anexo N.º 10, a fines de siglo existían armas en poder de particulares en por lo menos diecisiete de los veinte departamentos del país. En los lugares donde la Guerra del Pacífico y la guerra civil de 1894-1895 se habían producido con mayor encarnizamiento, las armas de guerra no eran escasas.⁴⁶⁹ Así, en los departamentos serranos de Cajamarca, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín, donde se llevaron a cabo los últimos enfrentamientos durante resistencia de la Breña o los departamentos costeros, como Lima, Lambayeque, La Libertad, Ica y Piura, donde la revolución pierolista tuvo importante movilización, se reportó recurrentemente la tenencia ilegal de armas de guerra por parte de los civiles.

⁴⁶⁸ Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, de 1899, «rifle» era la voz anglosajona para designar al fusil de ánima rayada. Los rifles de ánima rayada eran muy superiores en potencia de fuego respecto a las armas de ánima lisa. Por ejemplo, los disparos de fusil podían alcanzar una distancia hasta de mil metros, mientras que los mosquetes de ánima lisa solo disparaban hasta los 200. (Mc Neil 1988: 255-262).

⁴⁶⁹ El registro de las incidencias de armas de guerra no es por ningún motivo exhaustivo y tiene solo una funcionalidad indicial. Es sobradamente plausible que la extensión del armamento haya sido mayor a lo que muestra nuestro cuadro y que no podemos dar cuenta, tanto por la limitación de las fuentes consultadas, como de la capacidad de vigilancia de las autoridades de la época. Respecto a la cuestión de fuentes, nuestra base han sido los documentos del Ministerio del Interior custodiados actualmente por el Archivo General de la Nación, lo que implica que no hemos tomado todas las incidencias posibles registradas documentalmente por otras instituciones. Ello también implica la posibilidad, muy real, que parte de la documentación de este Ministerio se haya perdido con el pasar del tiempo, lo que reduce nuestra capacidad de acercarnos a la magnitud del fenómeno.

Este aserto se halla suficientemente documentada en casos específicos, tanto en la documentación de la época como en investigaciones diversas. En el departamento de Piura (los actuales Tumbes y Piura), muchas armas de guerra quedaron en manos de terratenientes y grupos diversos que se movilizaban como bandoleros o montoneros, según el contexto político. En el caso de los primeros, es sobradamente conocido el papel del clan Seminario y su gravitación en la política regional en las últimas dos décadas del siglo XIX (Jacobsen y Diez 2002: 122-123), pero existían otros terratenientes de menor notabilidad que disponían de armamento. Por ejemplo, en la provincia de Ayabaca, circunscripción de la sierra piurana, fueron importantes en este periodo las figuras de los terratenientes Eloy Castro y Eduardo Merino, ambos líderes de grupos armados que formaron parte de la ofensiva contra el gobierno de Piérola, en 1898, quienes además gozaban con el apoyo de la población de la capital de la provincia de Ayabaca.⁴⁷⁰

Por su parte, el departamento de Cajamarca fue uno de los espacios más activos durante la Guerra del Pacífico, tanto por la inicial resistencia al Ejército chileno, como por la posterior pugna entre los partidarios de Miguel Iglesias y José Mercedes Puga. Como se aprecia en la documentación presentada en el estudio de Lewis Taylor sobre el bandolerismo en Hualgayoc, el armamento de guerra no era reducido en dicha región y atizó los enfrentamientos locales entre diversos actores en el periodo posterior a la guerra. Las facciones locales ligadas al cacerismo o Iglesias (y al pierolismo, después) se enfrentaron continuamente tanto por el control político local, como por *vendettas* personales, apoyadas por grupos armados heterogéneos en su composición que disponían rifles o fusiles de guerra (Cfr. Taylor 1990: 225-243). Este fenómeno no era exclusivo de Hualgayoc, pues como manifestaba el Prefecto, en mayo de 1898, la presencia de tal armamento en gran parte de las localidades de su departamento resultaba preocupante para el orden público:

En la mayor parte de los pueblos de este departamento existen muchas armas de propiedad del estado en poder de particulares, con las que estos alteran frecuentemente el orden, tienen en constante alarma al vecindario, provocan e insultan á las autoridades y cometen multitud de crímenes, alentados cada vez con la impunidad en que regularmente quedan, como ha sucedido hace pocos

⁴⁷⁰BNP, D4540, “Parte del Combate de Ayabaca”, Piura, agosto 15 de 1898, 9ff.

días en los pueblos de Asunción, pertenecientes a la provincia del Cercado, y de cuyos hechos paso a ocuparme, por creerlo sumamente necesario, a fin de que se me absuelva por ese ministerio una consulta de vital importancia para el mantenimiento de la paz pública.⁴⁷¹

Una situación análoga sucedía en el vecino departamento de Amazonas: el 22 de marzo de 1897, el Prefecto escribió al Gobierno, informando que en el distrito de Lonya existían «en algunos pueblos armas del estado, con las que algunos malos ciudadanos cometen abusos de grande significación»⁴⁷². Otro testimonio de esta dispersión del armamento de guerra lo ofreció el prefecto de Puno, M. D. Flores, quien consignaba en su memoria de 1896 que tras la última guerra civil, en su departamento, «quedaron en poder de particulares no pocos elementos de guerra, y [...] ellos podían ser un peligro para la conservación del orden público»⁴⁷³. Con el mismo tenor había reportando el Prefecto de la Libertad al Director de Gobierno, también en 1896, explicando que en el departamento de su mando existía una importante cantidad de armas de guerra, pues «[c]omo el departamento de la Libertad, durante el tiempo de la guerra civil última, fue el centro principal de operaciones militares en el Norte [...] los pueblos que habían estado armados por la situación política á que he hecho referencia, constituían para el futuro una amenaza constante.»⁴⁷⁴

Tanto la Guerra del Pacífico como la revolución pierolista habían dejado incluso depósitos de armas enterrados para serlos empleados en las ocasiones que sus poseedores considerasen conveniente. Hacia el departamento de La Libertad se envió, el 22 de julio de 1896, una comisión reservada conducida por José María Lynch y un tal Carranza para «descubrir un depósito de armas y municiones del Estado» enterrado. El mismo Carranza había manifestado al Gobierno conocer la ubicación en donde habían sido enterradas. A pesar que la comisión realizó

⁴⁷¹ AGN, MI, Paquete 52, Prefecturas, Cajamarca, “Oficio del Prefecto de Cajamarca, del 9 de mayo de 1898, al Director de Gobierno”.

⁴⁷² AGN, MI, Paquete, 43 Prefecturas, Amazonas, “Oficio de 22 de marzo de 1897, del Prefecto de Amazonas al Ministro de Gobierno”.

⁴⁷³ AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de Puno, M. D. Flores”, del 15 de julio de 1895. En *Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco*. [Sin pie de imprenta], 1896, pp. 24-25.

⁴⁷⁴ AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de La Libertad de 1896”. En *Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco*. [Sin pie de imprenta], 1896, p. 5.

excavaciones en el monte Nepén, con el auxilio del Comisario del valle, no se pudo encontrar el depósito clandestino.⁴⁷⁵

Ahora bien, de los departamentos mencionados, cabe anotar que Piura, Cajamarca, Amazonas y Puno compartían una característica que facilitaban la presencia de armamento de guerra en sus territorios: los cuatro departamentos eran circunscripciones con amplias zonas de frontera. Estas zonas eran, por lo general, eriazas y, por tanto, despobladas, razón por la cual no resultaba extraño que la introducción de armas de guerra se hiciera desde los países vecinos. A fines de siglo, las capacidades de vigilancia de las fronteras del Estado eran sumamente restringidas. En el caso de las fronteras terrestres, el reducido personal gubernamental, lo dilatado de las mismas y las limitaciones propias del transporte animal imponían un carácter discontinuo al control del tránsito terrestre en ellas y su eficacia dependía, en gran medida, de informaciones particulares para montar vigilancia en áreas específicas por periodos de tiempo limitados.⁴⁷⁶

La introducción clandestina de armamento también podía hacerse por vía marítima. El caso del departamento de Piura es bastante ilustrativo. En varios reportes oficiales de este periodo, las autoridades gubernamentales tuvieron conocimiento de la internación de armamento proveniente de Ecuador hacia Piura. Así, en setiembre de 1898, el coronel Parra, oficial de las Fuerzas Pacificadoras del Norte, manifestaba a la Prefectura de Piura que tenía noticias de que un hijo del Cónsul ecuatoriano en Tumbes internaba armas al Perú, desde Máncora con dirección a Sullana, de similar manera como el mismo Prefecto comunicaba al Gobierno casi un mes después haberse incautado 23 bultos con armas y municiones que se buscaba desembarcar por Paita.⁴⁷⁷ La situación inversa podía producirse si las situaciones políticas lo ameritaban, pues incluso emigrados ecuatorianos, que en 1898 buscaban regresar a su país para secundar un movimiento revolucionario, se

⁴⁷⁵ AGN, MI, Paquete 41 Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto de la Libertad José María de la Puente al Director de Gobierno”, del 29 de setiembre de 1896.

⁴⁷⁶ Por ejemplo, el 29 de agosto de 1899, el Prefecto de Piura informó que se había enviado una comisión a la frontera para obtener datos seguros acerca de la existencia de una montonera que pretendía cruzar la frontera, según los datos que se rumoreaban en la provincia de Tumbes. Sin embargo, después de recorrer «toda la frontera», desde Zarumilla hasta Alhaja, no se encontró ninguna partida montonera (AGN, MI, Paquete 62, Prefecturas, Piura, “Oficio del Subprefecto de Tumbes al Prefecto de Piura”, del 29 de agosto de 1899).

⁴⁷⁷ AGN, MI, Paquete 54, Prefecturas, Piura, “Oficios del Prefecto de Piura al Director de Gobierno”, del 14 de setiembre y 10 de octubre de 1898.

aprovisionaban de armas en Paita y Piura. Según el Cónsul ecuatoriano en Piura, las armas eran dirigidas hacia las provincias limítrofes meridionales de Ayabaca y Querocotillo, con destino al Ecuador.⁴⁷⁸

Probado que el armamento de guerra se encontraba disperso en el territorio peruano, es necesario mostrar qué actores sociales lo poseían. En primer lugar se encontraban los hacendados de diversos departamentos del país. Hemos mencionado a los hacendados Eloy Castro y Eduardo Merino, en Piura, pero en este departamento otros hacendados disponían también de armas de guerra. En 1898, varios informes oficiales vinculados a la insurrección de los arriba mencionados indicaban que Castro y Merino contaban con el apoyo de varios hacendados entre Tambogrande y Chulucanas, los cuales les habían entregado armas, caballos y otros bienes para organizar una montonera.⁴⁷⁹ Por su parte, en el departamento de Puno, importantes hacendados de la provincia de Azángaro disponían también de material de guerra. El poderoso clan Lizares, una prominente familia hacendada de Azángaro, formó un grupo armado con los dependientes de sus haciendas, en julio de 1899, para atacar la Subprefectura en apoyo del movimiento revolucionario favorable a Cáceres, Billingham y Durand.⁴⁸⁰ Pero no sólo los Lizares disponían de tal armamento, otros terratenientes, como los hacendados del clan Macedo y el propietario Melchor Figueroa Sancho poseían armas de precisión que pusieron al servicio de Lizares para el movimiento rebelde.⁴⁸¹

En Cajamarca, varias denuncias mostraban a hacendados poseedores de armas de guerra con la fuerza suficiente para poner en cuestión a las autoridades locales. En Chota, Wenceslao Villacorta, propietario de la hacienda Chetilla, disponía de armas

⁴⁷⁸ AGN, MI, Paquete 54, Prefecturas, Piura, “Copia certificada [Piura, 18 de junio de 1898] de oficio del cónsul de Ecuador en Piura, Antonio Ruiz”, del 15 de junio de 1898. En el mismo oficio, el Cónsul afirmaba que una expedición similar al mando del coronel ecuatoriano Carlos Maldonado había sido batida, en 1896, cuando intentaba adentrarse a ese país por el departamento de Loja.

⁴⁷⁹ BNP, D4543, “Informe elevado a la Prefectura del Departamento de Piura por la Subprefectura de la provincia de Piura-Piura”, agosto, 10 de 1898, fol. 7. De la hacienda Malingas, propiedad de Fernando Seminario, se entregaron «diez y nueve armas de precisión, algunas bestias y dinero» a Víctor Ramírez, miembro de la montonera de Eloy Castro y Eduardo Merino, en Malanguitas se le entregó voluntariamente «algunas armas y dinero».

⁴⁸⁰ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno, “Oficio del Subprefecto de Azángaro al Prefecto de Puno”, del 21 de julio de 1899; y “copia certificada de oficio del Comisionado de la Subprefectura de Azángaro, Luis F. Luna al Subprefecto de Azángaro”, del 21 de julio de 1899.

⁴⁸¹ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno, “Copia certificada de oficio del Comisionado de la Subprefectura de Azángaro, Luis F. Luna al Subprefecto de Azángaro”, del 28 de julio de 1899.

del Estado, con las que lideró una montonera rebelde en 1899⁴⁸², mientras que en Contumazá, Felipe Iglesias y sus hijos atacaron al Gobernador de Cascas, amenazándolo con armas de guerra.⁴⁸³ En Hualgayoc, hacendados como Manuel Sacramento Rodríguez incluso armaban a sus dependientes como una guardia privada para proteger sus propiedades y tomar ganado del campesinado local (Taylor 1990: 237-238). Asimismo, en el departamento de Huánuco, no sólo el clan Durand disponía de armas de guerra, como mostró su participación en los acontecimientos de 1899 y las investigaciones posteriores que se hicieron con el fin de desarmarlos⁴⁸⁴, sino que otros hacendados políticamente menos notorios hacían uso de dicho material. Por ejemplo, el hacendado Jorge Rosas Eonofre, vecino del pueblo de Jesús, del distrito de La Unión, y propietario de la estancia Puagcancha y de Yanacancha (de la provincia de Cerro de Pasco), fue denunciado por atacar las haciendas de los hermanos José, Ambrosio y Tomás Falcón y robarles ganado apoyado por un grupo de hombres «armados de rifles de precisión».⁴⁸⁵

En el mundo rural peruano de fines del siglo XIX, los hacendados no eran los únicos actores que poseían armas de guerra, pues hay indicios que diversas comunidades indígenas y pueblos rurales de orígenes étnicos borrosos habían logrado retener este tipo de armamento después de la Guerra del Pacífico. El caso de las comunidades ayacuchanas de Huanta es bastante conocido, pues estas encabezaron una importante rebelión en 1896, empleando armas de guerra conservadas desde la Guerra con Chile y otras obtenidas años después por su lealtad al general Cáceres, como lo comprobó la División Pacificadora del coronel Parra ese mismo año.⁴⁸⁶ Otros casos los encontramos en el departamento de Junín, donde se encontraban las aguerridas comunidades indígenas de Comas que habían sido parte

⁴⁸² BNP, D4622, “Memoria del Sr. Prefecto del Departamento de Cajamarca. Cajamarca”, mayo 15 de 1899, fol. III; y AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto de Cajamarca al Ministro de Gobierno”, del 12 de octubre de 1899.

⁴⁸³ AGN, MI, Paquete 46, Subprefecturas, “Oficios del Subprefecto de Contumazá al Prefecto de Cajamarca”, del 16 de julio de 1897.

⁴⁸⁴ Las investigaciones que realizó la Prefectura de Huánuco, en 1900, indicaban que miembros del clan Durand escondían armas de guerra en sus haciendas San Carlos y Pitumama. AGN, MI, Paquete 67, Prefecturas, Huánuco, “Oficio del Prefecto de Huánuco al Director de Gobierno”, del 8 de marzo de 1900.

⁴⁸⁵ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Expediente de solicitud de José, Ambrosio y Tomás Falcón, naturales y vecinos del pueblo de Jesús”, firmado en La Unión, el 25 de junio de 1899; y “Expediente de solicitud de Rosas Eonofre, vecino del pueblo de Cauri de la jurisdicción de Caina, provincia de Cerro de Pasco”, Cerro de Pasco, 19 de mayo de 1899.

⁴⁸⁶ Un estudio específico sobre el papel político de las comunidades de Huanta después de la Guerra del Pacífico es el libro de Patrick Husson (1992).

de las fuerzas guerrilleras al mando del general breñero durante la Guerra con Chile y que en las dos últimas décadas del siglo hacían su propia guerra contra los hacendados locales y las autoridades gubernamentales provistos de armamento de guerra, como bien lo ha mostrado Nelson Manrique (1988: 64-66).

Sin embargo, en otras regiones con alcances menos palmarios, comunidades indígenas hacían ostentación de la posesión de armamento militar. Por ejemplo, en la provincia huanuqueña de Huamalíes, para 1897, el pueblo de Obas disponía de un grupo armado de treinta hombres, con el cual resistieron a las fuerzas de Policía comisionadas para obligarlas a devolver el ganado que sustraían de los fundos vecinos.⁴⁸⁷ Mientras tanto ese mismo año, en la sierra limeña, los vecinos del pueblo de Chupamarca y de Viñac se encontraban enfrentados con otras comunidades indígenas de los pueblos de la vecina provincia de Castrovirreyna por la delimitación de sus tierras, ambos bandos poseyendo armas de guerra, como se verá más adelante.⁴⁸⁸ Un caso similar también fue registrado en la provincia de Canta, en enero de 1899, donde la comunidad de Baños, del distrito de Atavillos, se enfrentó con armas de guerra contra la de Yantac, del distrito de Marcapomacocha, de la provincia de Tarma, por desacuerdos en los linderos de sus tierras.⁴⁸⁹

Pero, como hemos afirmado, también poblaciones rurales de orígenes étnicos menos claros contaban con armas de guerra. Los estudios de Lewis Taylor, en Cajamarca, y Nils Jacobsen y Alejandro Diez, en Piura, entre las décadas de 1880 y 1890, dejan clara la vitalidad de estas poblaciones rurales, las que formaban bandas armadas politizadas en periodos de agitación y en tiempos de paz política se convertían en bandoleros dedicados al abigeato y otros actos de criminalidad rural (Taylor 1990, Jacobsen y Diez 2002). Sin embargo, tales departamentos no eran los únicos en los que se presentaba el fenómeno del bandolerismo, pues partidas de bandoleros pululaban en varios departamentos a fines de siglo, robando ganado, atacando a haciendas y poblaciones campesinas más modestas para extracción de recursos, imponían cupos o asaltaban a comerciantes desprevenidos. Como muestra

⁴⁸⁷ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Oficio de Luis B. Castillo Jefe de la Guardia Civil en Comisión al Prefecto del Departamento”, Huánuco, 9 de marzo de 1899.

⁴⁸⁸ AGN, MI, Paquete 46, Lima, “Oficios del Subprefecto de Yauyos”, del 24 de junio, 3 y 26 de julio de 1897; “Oficio del Prefecto de Huancavelica al Prefecto de Lima”, del 16 de junio de 1897.

⁴⁸⁹ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Lima, “Oficio del Subprefecto de Canta al Prefecto de Lima”, del 23 de enero de 1899.

el Anexo N.º 12, había presencia de activa de bandoleros en las provincias rurales de Cajamarca, Ica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

Por ejemplo, entre los límites del sur del departamento de Lima y del norte de Ica pululaban partidas de bandoleros realizando tropelías recurrentes. En 1896, el Prefecto de Ica informaba que, desde el año anterior, una partida de bandoleros, formada «al calor de la reyerta política», merodeaba las poblaciones de Chíncha y Cañete, realizando diversos crímenes (es muy probable que se tratara de los hombres de Felipe Santiago Oré). Uno de esos crímenes fue el asalto al tren proveniente de Pisco, del cual lograron escapar sus perpetradores, luego de desvalijar a sus pasajeros.⁴⁹⁰ Las autoridades locales realizaron varios intentos por capturarlos, sin embargo, resultaba sumamente difícil reducirlos, dado que los bandoleros se encontraban en constante movimiento, cruzando los límites de las jurisdicciones de las autoridades gubernamentales para poder evadirlas o ascendiendo por las áreas montañosas del límite de ambos departamentos. Así, cuando en 1898 los bandoleros de la zona fueron perseguidos por las autoridades de Cañete, estos marchaban a la provincia iqueña de Chíncha para sustraerse de la jurisdicción de sus perseguidores; y aunque un año más tarde dicha Subprefectura recibió autorización para arrestarlos dentro del departamento de Ica, los bandoleros escaparon por las quebradas de San Juan, Yauritambo y Culebrilla.⁴⁹¹

En el departamento de Huánuco, específicamente en la provincia de Dos de Mayo, existían activas y resistentes partidas de bandoleros. En 1896, el prefecto E. R. Bernaola informaba al Gobierno que había ordenado su inmediata persecución, logrando con esta medida su dispersión temporal; sin embargo, un año más tarde, el Subprefecto de Huamalíes denunciaba a la Prefectura que «varios viajeros o comerciantes de esta localidad [Huamalíes] son estropeados e injuriados en sus personas y arrebatados en sus bestias de carga y silla» por vecinos de La Unión,

⁴⁹⁰ AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de Ica de 1896”. En *Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco*. [Sin pie de Imprenta], 1896. pp. 6-7.

⁴⁹¹ AGN, MI, Paquete 53, Prefecturas, Ica, “Oficio del Prefecto de Ica al Directo de Gobierno”, del 10 de marzo de 1898; y AGN, MI, Paquete 64, Subprefecturas, “Oficio del Subprefecto de Cañete al Director de Gobierno”, del 20 de junio de 1899.

capital de la provincia de Dos de Mayo.⁴⁹² Por su parte, en la provincia de Huamachuco, en el departamento de La Libertad, pululaban las bandas de los hermanos Cárdenas y de los Sandoval. El más conocido de ellos fue Manuel Cárdenas, bandolero que se mantuvo activo en las serranías liberteñas por lo menos hasta inicios del siglo XX, mostrando fuerte resistencia a los intentos del Estado por reducirlo. Aunque el 21 de junio de 1896 se envió al distrito de Marcaval una comisión de 19 hombres al mando del Subprefecto para arrestarlo, sus intentos fueron infructuosos; Cárdenas y sus secuaces escaparon de la población después de un ligero combate, pues los «criminales» contaban «dos de ellos con revolver y cuatro con armas de guerra».⁴⁹³ Las condiciones geográficas de la región otorgaban refugio seguro a los bandoleros cuando se les trataba de reducir, razón por la cual Manuel Cárdenas y su montonera continuaron operando hasta por lo menos 1902, en el distrito de Sartimbamba de Huamachuco. El prefecto Jacinto Bedoya informó que resultaba difícil hacer frente a estos bandidos debido a lo reducido de los efectivos en la provincia, no quedándole otra opción que adoptar una medida corriente, el concentrar a los gendarmes de Otuzco y Huamachuco en los pueblos cercanos para dirigirlos luego al interior de la provincia y reprimir a los hombres de Cárdenas.⁴⁹⁴

Esta configuración de actores se corresponde con los estudios realizados por el recordado Eric Hobsbawm. Según este historiador británico, el bandolerismo florece, entre otros factores, en sociedades agrarias que se encuentran en proceso de desestructuración o han sufrido un fuerte trastorno, como una guerra; o también cuando el poder central pierde sus capacidades para subordinar a los campesinos a la Ley y al orden social tradicional (Cfr. 2001: 19-31). En teoría, resultan ser los campesinos la masa crítica del bandolerismo, hombres que se han liberado de su adscripción a la tierra y las obligaciones que ellas importan, sustentándose de manera parasitaria sobre las economías rurales locales. Sin embargo, el bandolerismo no ha sido solo un fenómeno de las clases bajas, pues no ha sido raro que los terratenientes dispongan

⁴⁹² AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de Huánuco, E. R. Bernaola”, del 15 de julio de 1896. En *Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco*. [Sin pie de Imprenta], 1896, p. 4.

⁴⁹³ AGN, MI, Paquete 41, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno”, del 1 de julio de 1896.

⁴⁹⁴ AGN, MI, Paquete 83, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno”, del 12 de marzo de 1902.

de una «fuerza armada» para «solucionar» sus conflictos con miembros de su clase, con los campesinos o con los agentes del Estado (Cfr. Hobsbawm 2001: 46-57).

Las condiciones sociales, económicas y políticas del Perú de fines de siglo XIX fueron propicias para el florecimiento del bandolerismo en determinados departamentos. La Guerra del Pacífico había trastocado las sociedades rurales de varios departamentos del país y, en general, había reducido las capacidades coactivas del Estado peruano. Por un lado, la guerra había permitido la movilización armada campesina durante el conflicto, con el consabido acceso a armas de guerra que ofrecían las herramientas para la acción violenta; por otro lado, la economía peruana sufrió un fuerte desgaste debido al esfuerzo bélico, cargando gran parte de este sobre las economías agrarias. Es más, durante el Segundo Militarismo, parte importante de los recursos de la reconstrucción del país fueron cargados sobre las poblaciones indígenas, a través del restablecimiento de la contribución personal (Cfr. Manrique 1988: 143-144). La necesidad de complementar las subsistencias de economías agrarias empobrecidas, en un contexto en el que las capacidades coactivas del Estado se habían erosionado por la derrota y las guerras civiles posteriores, ofrecían las circunstancias propicias para el bandolerismo.

No debe pensarse que la existencia de armamento de guerra disperso era solo patrimonio del ámbito rural, por el contrario, esto era cierto también para ciudades importantes como Lima, tal como observó en su juventud el escritor José Gálvez, testigo presencial de los acontecimientos de 1895. Afirmaba Gálvez que, por esos años, «[e]n ciertas casas se hacía acopio de fusiles viejos, pues desde el desbarajuste de la guerra, era rara la familia que no conservara un *Peabody*, un *Grass*, un *Coblain*.» (Gálvez s/f: 153-154). Ello era más que evidente en la medida que tanto durante la Guerra del Pacífico, como durante la revolución de 1894-1895, Lima fue teatro de enfrentamientos militares. Estas afirmaciones se corroboran con las continuas crónicas que se publicaban en *El Comercio* referidas al recojo paulatino de las armas de guerra en posesión de ciudadanos particulares de la capital.⁴⁹⁵

⁴⁹⁵En una importante cantidad de crónicas de *El Comercio*, entre 1985 y 1899, se informaba de la entrega de «armas del Estado» por parte de particulares o su requisita a quienes no las hubiesen entregado voluntariamente. Estas crónicas las podemos encontrar en *El Comercio* del 12 de febrero de 1895, edición de la mañana; 25 y 27 de febrero de 1896, edición de la mañana; 31 de marzo de 1897, edición de la mañana; 4 de octubre de 1897, edición de la tarde, 25 de noviembre de 1897, edición de la tarde; 20 de enero de 1898, edición de la tarde; 14 de setiembre de 1899, edición de la tarde.

Ahora bien, la posesión de armas por parte de hacendados, comunidades indígenas, poblaciones mestizas díscolas, en el mundo rural, y «ciudadanos» particulares en las urbes, tenía implicancias prácticas en la vida privada de cada uno de estos grupos, pero con incidencia en el orden público. La posesión de este armamento les otorgaba un poder alternativo al de las fuerzas del Estado y la capacidad de sobrepasar el ordenamiento establecido por este. El bandolerismo, con los actos propios de dicha categoría, era elocuente expresión de la capacidad y la voluntad de los actores locales rurales para desobedecer los mandatos de la autoridad estatal y su ordenamiento. Y aunque el bandolerismo podía ser enojoso para la población civil, para los gobiernos sus actividades podían atraer seguidores, erosionando aún más la obediencia a las autoridades locales⁴⁹⁶ y, peor aún, vincularse a proyectos revolucionarios, convirtiendo estas bandas de hombres proscritos por la Ley en agentes revolucionarios. En estos contextos, las actividades privadas de los bandoleros, como el robo de ganado, el cobro de cupos, el asalto de comerciantes y el ataque a las autoridades del Gobierno, se convertían en actividades revolucionarias de carácter público, generándose esa simbiosis de agendas dentro de las alianzas políticas de los excluidos del poder. Esta era una de las más poderosas razones para buscar su desarme y erradicación por parte del Gobierno, pues hombres acostumbrados al uso de las armas, conocedores de los territorios rurales e insumisos al Estado eran siempre potenciales enemigos.

La segunda consecuencia práctica de la posesión civil de armas de guerra fue una mayor tendencia a enfrentamientos violentos entre particulares fuera del control estatal. Las armas de guerra permitían a los actores locales de la época buscar dirimir sus conflictos por medio de enfrentamientos violentos, siendo un aliciente para la inestabilidad política. No es que ello haya sido un aspecto nuevo en las postrimerías del siglo XIX, pues durante toda esta centuria estos conflictos eran frecuentes y habían sido permanentes motivos para la movilización de los actores locales en la política regional y nacional. Como han demostrado distintos historiadores, los actores locales participaban en los enfrentamientos políticos nacionales bajo la expectativa que el Gobierno en funciones mediara en favor de ellos. Esta práctica fue

⁴⁹⁶ Varias autoridades locales solicitaron mayores contingentes para contener los desacatos a su autoridad en los espacios rurales, como veremos más adelante.

harto común tanto en las élites locales, como en otros grupos sociales menos favorecidos. De allí que no fuera raro, que las facciones de las élites locales y regionales trasladaran sus enfrentamientos en la arena política nacional, apoyando paralelamente a facciones de las élites nacionales que, más tarde en el poder, les retribuirían resolviendo los conflictos favorablemente a sus clientelas; así, tampoco era infrecuente que las comunidades agrarias o grupos urbanos (como los artesanos) se articularan clientelariamente a las facciones locales y regionales, apoyando a los notables y líderes políticos nacionales a cambio de ayuda contra poblaciones o grupos rivales.⁴⁹⁷

Tanto la incorporación de las élites locales, como de los sectores subalternos a las dinámicas políticas nacionales, haya sido a través de las elecciones o de las mismas revoluciones, configuraba esas abigarradas redes o alianzas faccionales que representaban diversos intereses, los mismos que al ser atendidos excluían inexorablemente a los actores rivales, incubando con ello un futuro conflicto que traspasaría los límites locales. Muchos de estos conflictos fueron simientes para el enfrentamiento violento por el poder en las guerras civiles decimonónicas que llevaban a actores locales descontentos a los campos de batalla, como ha sugerido Carmen Mc Evoy para el caso de la revolución de la coalición demócrata-civilista.⁴⁹⁸

Este potencial de los conflictos locales se incrementó en la medida que una mayor cantidad de actores locales tuvieron acceso a las armas de guerra, como lo demostró la misma revolución de 1894-1895, siendo por tanto esta posesión un peligro para la estabilización política del país que buscaba alcanzar la élite gobernante después de su victoria. Aunque no se ha estudiado aún con amplitud y en conjunto el carácter y los niveles que alcanzaron los conflictos locales después de la Guerra del Pacífico, mostramos un número no despreciable de casos de fines de siglo, en donde los actores locales se enfrentaron a sus rivales haciendo uso de armamento de guerra, desconociendo con ello la nueva autoridad estatal que se

⁴⁹⁷ Estudios como los de Cristóbal Aljovín, Cecilia Méndez y Charles Walkerhan puesto de relieve la importancia de los actores locales y sus agendas particulares en la política nacional en la temprana República (Aljovín 2000: 166-170, Walker 2004: 267-276, Méndez 2004).

⁴⁹⁸ Puede consultarse, también, Mc Evoy (1997: 320-321 y 339). Un interesante trabajo sobre las vinculaciones entre la pequeña política regional y la política nacional, lo encontramos en el reciente libro de Ulrich Mücke (2010), especialmente el capítulo 10. Puede consultarse, también, Mc Evoy (1997: 320-321 y 339).

estaba tratando de conformar desde Lima. En un país agrario, como el Perú, la mayoría de estos conflictos involucraban disputas por tierras, por ganado o acceso al agua. No resultaba extraño, entonces, que hacendados armados se enfrentaran entre sí por disputas de linderos o que atacaran a poblaciones agrarias colindantes a sus propiedades. Tampoco fue raro que las comunidades o poblaciones agrarias provistas de armas de guerra resistieran a los hacendados o que atacaran a otras poblaciones rivales por acceso a tierras. Veamos algunos de estos ejemplos.

En 1895, los vecinos del pueblo de Copa, anexo del distrito de Ocos (provincia de Cajatambo, en el departamento de Huaraz) se quejaban de los continuos actos de «vandalaje» y ataques del pueblo de Congas, también anexo de Ocos. Uno de los motivos del conflicto entre ambas poblaciones correspondía al acceso al agua de regadío. Los pobladores de Copa se quejaban que los de Congas les impedían el acceso al regadío apoyados en la fuerza de un grupo de hombres armados capitaneados por Rufino Cabanillas, quien había sido alcalde del pueblo durante el régimen cacerista. El poder de los conganos residía en la posesión de armas de guerra que habían retenido a pesar de que había concluido el conflicto, devolución que sí habían acatado los copanos y otros pueblos del distrito, bajo el argumento de haber «olvidado todo su pasado y diversidad de opiniones que tuvieron durante la Guerra Civil». Los de Copa solicitaban, además del «desarme completo, de las armas que posean», que dicho pueblo dejase «espedito la corrida de agua que nos interrumpen y afectándonos un impuesto a sus pretenciones que tan injustamente nos obligan comprar el regadío de agua»⁴⁹⁹. La posesión de armas por parte de los conganos no solo traía problemas a sus vecinos, sino que erosionaba la misma autoridad del Gobierno en el distrito, como lo manifestaba Premio Gomero, teniente gobernador del mismo Congas, quien había tenido que marchar del pueblo bajo amenazas de muerte efectuadas por Rufino Cabanillas.⁵⁰⁰

Conflictos entre poblaciones también se producían en otras zonas del país, como el caso de los enfrentamientos entre el pueblo de Chupamarca, de la provincia de Yauyos (departamento de Lima), y el de San Pedro, de la provincia de

⁴⁹⁹BNP, D558, “Oficios, recursos y denuncias referentes a existencia de armas en la provincia de Cajatambo”, Cajatambo, noviembre, 15 de 1896, 3 ff.

⁵⁰⁰BNP, DS804, “Sobre la denuncia formulada por el Subprefecto de Cajatambo respecto a la posesión de armas de unos vecinos de Cajatambo”, diciembre, 5 de 1896, 6 ff.

Castrovirreyna (Huancavelica). Las animosidades entre ambas poblaciones tenían por origen la disputa de los linderos de las tierras de Mullapurco y Huaparume, las cuales, según informaciones del Prefecto de Huancavelica, comprendían una extensión de «más de una legua»⁵⁰¹. Esta disputa había llevado a un primer enfrentamiento, el 9 de abril de 1897, resultando muertas dos personas de San Pedro y una de Chupamarca. Según el Subprefecto de Yauyos, los pobladores de Chupamarca habían sido agredidos mientras hacían «faenas de trabajo comunal y refacción de caminos» por los pobladores de San Pedro con «hondazos, galgas y bala», en tanto «me he evidenciado que estan perfectamente armados con rifles y carabinas de precisión». Ambas comunidades se encontraban armadas, pues el mismo Subprefecto afirmaba que en Chupamarca «once he podido recoger son de sistema antiguo de “chispa” y otros por el estilo» y había tomado dos del pueblo de Viñac, de donde se sabía que existía más armamento. Asimismo, indicaba que los de San Pedro «poseen armas» y que junto a los pobladores de Huangascar y Chavín «suelen favorecerse con el préstamo recíproco de armas y convinadas agresiones».⁵⁰² Aunque las autoridades de Yauyos y Castrovirreyna acusaban de iniciar las agresiones a las comunidades de la jurisdicción ajena, la documentación dejaba traslucir que era un enfrentamiento no circunstancial y tenía por origen la ausencia de una división judicial de tierras de ambas comunidades, atizada por la deficiente demarcación territorial que añadía tensión entre las autoridades políticas de ambas provincias.⁵⁰³

Un conflicto de similares características se produjo entre las comunidades de Baños, del distrito de Atavillos, en la provincia de Canta (departamento de Lima), y los de Yantac, del distrito de Marcapomacocha, provincia de Tarma (departamento de Junín). Según el Subprefecto de Canta, la razón del conflicto se debía a una disputa

⁵⁰¹ AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, Lima, “Oficio del Subprefecto de Yauyos al Prefecto de Lima, de 24 de junio de 1897”. AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, Lima, “Oficio del Prefecto de Huancavelica al Prefecto de Lima”, del 16 de junio de 1897.

⁵⁰² AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, Lima, “Oficio del Subprefecto de Yauyos al Prefecto de Lima”, del 24 de junio de 1897. El Gobernador del distrito de Chavín (Castrovirreyna) insistía que los chupamarquinos con apoyo de los de Viñac habían atacado a los de San Pedro en número de 50 con «armas de precisión propiedad del Estado» proporcionadas por el gobernador del distrito, mientras que el gobernador accidental de Chupamarca informó al Subprefecto de Yauyos que su antecesor Pedro Antonio Luna había sido maltratado por siete vecinos de San Pedro «todos harmados de todo fuego [...] a quitar la vida» (AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, Lima, “Oficio del Prefecto de Huancavelica al Prefecto de Lima”, del 16 de junio de 1897; y “Oficio del Gobernador accidental del distrito de Chupamarca al Subprefecto de Yauyos”, del 22 de junio de 1897).

⁵⁰³ AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, Lima, “Oficio del Subprefecto de Yauyos al Director de Gobierno”, del 24 de junio de 1897.

por terrenos «colindantes y que litigan por deslinde» ambas poblaciones. El enfrentamiento se inició el 8 de enero de 1899, cuando cinco comuneros de Baños se encontraban refaccionado mojones en el punto de Quisa, acción que llevó a los comuneros de Yantac a reducirlos y tomarlos prisioneros en su pueblo, no sin antes atacar y saquear la casa de un vecino del punto de Quisa. La noticia de estos sucesos indignó a los de Baños, quienes liderados por el Juez de Paz marcharon el 12 hacia Yantac y «extrajeron á los cinco sus compoblanos secuestrados, y á su vez después de un choque á palos, aprehendieron y trajeron secuestrados á Baños» á cinco pobladores. El Subprefecto, después de realizar las investigaciones y arrestar a varios vecinos de Baños, les requisó armamento de guerra: «De las invasiones á Yantac he recogido dos carabinas sistema Minié, un cañón de id, una Remington y dos rifles “Peabody” viejos.»⁵⁰⁴

Otros conflictos se manifestaban en la resistencia armada de comunidades campesinas contra los hacendados y las autoridades del Gobierno. Son bastante conocidas las correrías de los pobladores de Comas y de Acobamba en la sierra central, los cuales, poseyendo armas desde la Guerra de 1879, se resistían a la entrega de ganado tomado de los terratenientes rivales y los intentos gubernamentales por recuperarlo (Cfr. Manrique 1989: 61-70). La rebeldía de dichas comunidades fue ejemplo para otras en el valle del Mantaro, como lo expresaba una denuncia de Emilia Montano, viuda de Arias, en donde solicitaba al delegado del Gobierno que movilizara su fuerza al departamento de Junín para que le restituyera su hacienda Llaccsapirca (distrito de Pariahuanca, provincia de Huancayo), la misma que había sido tomada por sus yanaconas, auxiliados por la comunidad de Punto. En su petitorio, la propietaria indicaba que desde la Guerra del Pacífico se venían realizando muchos «abusos» por parte de los comuneros en Punto y en otros de los pueblos de Acobamba y Comas, quienes habían tomado posesión de varias haciendas de la región. Según la demandante, los actos de los comuneros en Comas y Acobamba, al no ser «reprimidos oportunamente», habían encontrado seguidores, pues la noche del 16 de marzo de 1896 «armados de rifles y palos y manifestando sus propósitos de quitarme la vida, se han apoderado de la hacienda Llaccsapirca.»⁵⁰⁵

⁵⁰⁴ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Lima, “Oficio del Subprefecto de Canta al Prefecto de Lima”, del 23 de enero de 1899.

⁵⁰⁵ AGN, MI, Paquete 46, Particulares A-T, “Solicitud de Emilia Montano al delegado del Supremo Gobierno”, Huancayo, 15 de junio de 1897.

Otros ejemplos de los conflictos entre este tipo de actores sociales los encontramos en Cajamarca. Este departamento, hasta bien entrado el siglo XX, se caracterizó por la débil presencia del Estado central y por la fortaleza de una élite provincial dedicada a la agricultura, la minería y el comercio. En algunas regiones del departamento, como la provincia de Hualgayoc, la Guerra del Pacífico había dejado como secuela un alto grado de conflictividad social y política, el empobrecimiento general del mundo rural, la exacerbación de rencillas entre las facciones locales durante el conflicto y la movilización armada del campesinado. La posesión de armas de guerra dio la oportunidad para el desarrollo de verdaderos combates faccionales, venganzas personales y bandolerismo que incluían a campesinos, bandoleros y terratenientes que, cada uno por su parte, buscaban sus propios intereses.⁵⁰⁶ En este contexto se enmarca las luchas de las poblaciones de Viejo San Gregorio y Nuevo San Gregorio. Ambas tenían una disputa contra el hacendado de Lives por unas tierras que los vecinos consideraban «comunes» y que colindaban con la hacienda. Según los campesinos, el hacendado se había apropiado de tales terrenos después de un «ruidoso juicio» y «violento despojo judicial», situación que aunque pudieron revertir «en todas las instancias», no se pudo ejecutar por la influencia personal y familiar del hacendado. A esta influencia en los tribunales, se sumaba el respaldo de Edilberto Vásquez, un famoso montonero-bandolero del distrito de Niepos, a quien el hacendado de Lives logró nombrar como gobernador del distrito, después de la revolución de 1894-1895.⁵⁰⁷

Los vecinos de los dos San Gregorio reclamaban que de consuno con el hacendado, Vásquez había impuesto el «terror» en los pueblos a través de multas y requisa de viviendas, «atacando á sangre y fuego» a sus pobladores, «[c]on el pretexto de recoger armas del estado», por lo que muchos tuvieron que marchar a

⁵⁰⁶ Según manifiesta Lewis Taylor, las luchas entre las facciones iglesistas y caceristas en Hualgayoc, sumado a *vendettas* personales, llegaron a situaciones alarmantes (1990: 238-243).

⁵⁰⁷ AGN, MI, Paquete 41, Particulares, “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblo Viejo y Nuevo San Gregorio”, ff. 1-3. Vásquez había sido un famoso montonero-bandolero que había participado en la Guerra del Pacífico a favor de la facción Puga-Cáceres y que se había mantenido al margen de la Ley después de la guerra, hostigando con una banda fuertemente armada del pueblo de Niepos, tanto a campesinos y hacendados. Según Lewis Taylor, fue una práctica común en Cajamarca que los bandoleros se alistaran como fuerzas privadas de los hacendados, a cambio de protección social (1990: 234-235).

Pacasmayo.⁵⁰⁸ Lo cierto era que los reclamantes habían apostado por el régimen anterior, participando en la guerra civil en apoyo a Cáceres, y cuando este fue derrotado se encontraron acorralados por los actores locales rivales (el hacendado de Lives y E. Vásquez) que gozaban del favor del nuevo régimen. Era evidente que, aunque se autodenominaban «pacíficos», la resistencia a sus enemigos y al Gobierno se hacía por medio del muy activo grupo armado que se había formado en esas poblaciones bajo el liderazgo de Jacinto Espinoza. Según el Subprefecto de Hualgayoc, estas poblaciones disponían de «gran cantidad de armas i municiones», con las que atacaron al Gobernador, en junio de 1896, y anteriormente evitaron el juramento de Nicolás Mendoza para lograr el nombramiento de autoridades afines a sus intereses⁵⁰⁹, habiendo la banda de Espinoza «tomado posesion del pueblo y están cometiendo toda clase de delitos», como afirmaba el prefecto Ravines.⁵¹⁰ A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades locales para reducirlos, los campesinos de San Gregorio eludían tanto los mandatos de detención como los esfuerzos para desarmarlos, aprovechando las «impenetrables montañas»⁵¹¹ que rodeaban dicha población o refugiándose «en haciendas y otros puntos de Pacasmayo».⁵¹²

Los campesinos no eran los únicos actores de la época que aprovecharon el empleo de armamento de guerra para defender sus intereses particulares, pues no era menos cierto que las armas de guerra sirvieran para avivar las guerras privadas entre hacendados en diversas localidades del país. Así, en el departamento de Huánuco, en 1899, los hermanos José, Ambrosio y Tomás Falcón, propietarios de haciendas en el distrito de Jesús (provincia de La Unión) se encontraban enfrentados con el hacendado Jorge Rosas Eonofre, propietario de haciendas y estancias en Jesús y en Cerro de Pasco. Los Falcón denunciaron que Rosas Eonofre cometía continuos robos de ganado y de otras prendas en sus propiedades, razón por la cual iniciaron un

⁵⁰⁸ AGN, MI, Paquete 41, Particulares, “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblo Viejo y Nuevo San Gregorio”, ff. 1-3.

⁵⁰⁹ AGN, MI, Paquete 41, “Informe del Sub-prefecto de Hualgayoc, Juan Villanueva”, del 19 de noviembre de 1896. En “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblo Viejo y Nuevo San Gregorio”, ff. 7-9.

⁵¹⁰ AGN, MI, Paquete 41, “Copia certificada del oficio del 30 de julio de 1896 del Prefecto Ravines al Subprefecto de Hualgayoc”. En “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblo Viejo y Nuevo San Gregorio”, f. 12.

⁵¹¹ AGN, MI, Paquete 41, “Oficio del Prefecto del Departamento de Cajamarca al Director de Gobierno”. En “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblo Viejo y Nuevo San Gregorio”, ff. 11-12.

⁵¹² AGN, MI, Paquete 41, “Informe del Sub-prefecto de Hualgayoc, Juan Villanueva del 19 de noviembre de 1896”. En “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblo Viejo y Nuevo San Gregorio”, f. 9.

proceso judicial, al tanto que solicitaron el apoyo de las autoridades locales para castigar al agresor. Por sus buenas relaciones con aquellas, los Falcón obtuvieron la orden del Gobernador para que se realizara un embargo de ganado o la captura de Rosas y sus compañeros de tropelías. El embargo se realizó los días 15 y 16 de mayo, con un grupo al mando del Teniente Gobernador y José Falcón, «armados con rifles y lanzas» según denunció el mismo Rosas Eonofre⁵¹³, del que se obtuvieron 461 cabezas de ganado lanar, 556 reses, 3 potrancas y 2 yeguas con cría.⁵¹⁴ Rosas denunció el embargo como un ataque particular realizado por un grupo armado de veinte personas dirigido por José Falcón y reclamó a las autoridades de Cerro de Pasco se pronunciaran ante el recojo de armamento de guerra que poseían los Falcón, sin embargo, antes de obtener una respuesta de las autoridades, Eonofre realizó un nuevo ataque a las propiedades de los Falcón sobre la casa estancia Matacocha «de la manera mas descarada y armados de rifles de precisión» llevándose ganado, dinero y otros bienes.⁵¹⁵ Tanto Rosas Eonofre como los Falcón disponían de armamento de guerra y lo empleaban de acuerdo a sus intereses particulares: el primero, atacando las propiedades de los segundos y resistiendo sus embates, en tanto que los segundos ejercían su fuerza sobre su rival con el amparo de las autoridades locales.

En otras ocasiones, los hacendados apoyados con armamento militar resolvían sus disputas personales con las mismas autoridades locales, como en el distrito de Calcas, de la provincia de Contumazá (Cajamarca). El 13 de junio de 1897, el gobernador del distrito, apellidado Rodríguez, fue atacado por un grupo armado con rifles Manlicher bajo el mando del hacendado Felipe Iglesias. Aunque el Gobernador no fue herido por arma de fuego, sus atacantes lo redujeron amenazándolo con estas armas, las cuales habían obtenido comprándolas a desertores del Batallón Ayacucho.

⁵¹³ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Expediente de la solicitud de Rosas Eonofre, vecino del pueblo de Cauri de la jurisdicción de Caina, provincia de Cerro de Pasco”, Cerro de Pasco, 19 de mayo de 1899, ff. 1-2; “Informe al Sr. Subprefecto que da el gobernador del Distrito de Jesús, Juan R. de Córdova”, La Unión, 25 de junio de 1899. En “Expediente de la solicitud de Rosas Eonofre, vecino del pueblo de Cauri de la jurisdicción de Caina, provincia de Cerro de Pasco”, Cerro de Pasco, 19 de mayo de 1899, ff. 2-3.

⁵¹⁴ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Informe del Juez de Primera Instancia accidental José Iturrizaga”, La Unión, 29 de julio de 1899. En “Expediente de la solicitud de Rosas Eonofre, vecino del pueblo de Cauri de la jurisdicción de Caina, provincia de Cerro de Pasco”, Cerro de Pasco, 19 de mayo de 1899, ff. 7-8.

⁵¹⁵ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Solicitud de José, Ambrosio y Tomás Falcón, naturales y vecinos del pueblo de Jesús, firmado en La Unión el 25 de junio de 1899, por José Manuel Falcón, Ambrosio Falcón y Tomás Falcón al Coronel Subprefecto”. En “Expediente de la solicitud de Rosas Eonofre, vecino del pueblo de Cauri de la jurisdicción de Caina, provincia de Cerro de Pasco”, Cerro de Pasco, 19 de mayo de 1899, ff. 6-7.

En tales circunstancias, el Subprefecto se quejaba de la poca protección que tenían las autoridades locales por la falta de efectivos.⁵¹⁶

Ahora bien, como hemos dicho, los conflictos locales cuando se ligaban a la dinámica política nacional (y *partidista*) tenían implicancias supra-locales, en la medida que movilizaban a los actores locales y sus intereses dentro de alianzas con las élites políticas nacionales. Este carácter de la dinámica política decimonónica tenía consecuencias mucho mayores cuando los actores locales disponían de elementos bélicos para avalar sus demandas particulares y apoyar a las élites nacionales que los cobijaban en sus redes clientelares, pues con tales armas aumentaban las fuerzas beligerantes de las facciones nacionales excluidas del poder, mejorando sus probabilidades de obtener una acción victoriosa. Casos de conflictos locales que movilizaban a los actores locales hacia proyectos revolucionarios de dimensión nacional se produjeron también en el gobierno de Piérola, todos ellos vinculados a los intentos del general Cáceres para regresar al poder. Veamos tres de estos casos.

En Azángaro, el poderoso hacendado José María Lizares se encontraba enfrentado con un pariente suyo, el hacendado Luis Francisco Luna, por los linderos de sus respectivas haciendas, el robo mutuo de ganado, además de fuertes odios personales. Durante el gobierno de Piérola, los ataques recíprocos fueron permanentes. Hábilmente, Luna logró consolidar el favor del Subprefecto de Azángaro y de los Prefectos del Departamento, por lo que cuando el Prefecto Agustín Tovar intentó, en febrero de 1899, mediar sobre las disputas de ambos hacendados, la familia Lizares no encontró respuesta favorable a sus pretensiones sobre los linderos.⁵¹⁷ El 19 de julio de ese año, Lizares encabezó, al mando de los indígenas de sus haciendas, un ataque a la Subprefectura de la provincia a favor de la figura del general Cáceres, Durand y Billingham, empezando con la casa de Luis F. Luna, donde sintomáticamente se encontraba ubicada también la Subprefectura. Está por demás afirmar que Lizares y otros hacendados que lo secundaron disponían de

⁵¹⁶ AGN, MI, Paquete 46, Subprefecturas, “Copia certificada de oficios del Subprefecto de Contumazá al Prefecto de Cajamarca”, del 16 de julio de 1897.

⁵¹⁷ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno, “Oficio del Subprefecto de Azángaro, Sebastián Urquiaga, al Prefecto”, del 22 de marzo de 1899; y “Oficio del Prefecto de Puno al Director de Gobierno”, del 24 de marzo de 1899.

armamento de guerra, con lo cual lograron inicialmente hacer fugar a Luna y al Subprefecto de la provincia.⁵¹⁸

En 1898, en el departamento de Piura, se urdió un levantamiento de varios hacendados y notables de dicha jurisdicción que retóricamente discrepaban con la firma del Protocolo Billinghurst-La Torre. Estuvo implicado en este amago revolucionario, el hacendado Santiago Castro, quien desde 1896 se encontraba enfrentado con los vecinos del distrito de Sullana por la posesión de unos terrenos de pastoreo que Castro consideraba como pertenecientes a la hacienda «Parales», de propiedad de su tía Juana Castro de Zapata. Aunque Santiago Castro no era propietario de «Parales», su fundo «Las Lágrimas» había sido parte de la hacienda, por lo que las autoridades departamentales y locales le sindicaban como el propietario y le acusaban de haber atacado y despojado a mano armada los frutos de los campos en disputa a los pastores de Sullana. El Prefecto terció a favor de los vecinos de Sullana y ordenó la comparecencia de Castro y su abstención sobre las labores de los pastores, bajo la pena de detención. En un petitorio presentado por Manuel A. Castro, hermano de Santiago, se denunció ante el Presidente la toma de posición del Prefecto, indicando que tales actos de «detención y el despojo autorizados por el Señor Prefecto» significaba «la promoción de una lucha cuyas proporciones no pueden calcularse, entre los dueños que defienden lo que es suyo y los asaltantes [los pastores de Sullana]». ⁵¹⁹ Dos años más tarde, Castro se encontraba entre los conspiradores del intento insurreccional de 1898 en el departamento, pues según el Subprefecto de Piura, «Santiago Castro de Parales me consta que es corresponsal de Eduardo Merino y Eloy Castro de Ayabaca. Que este individuo es el agente más infame que puede tener aquella provincia.» ⁵²⁰

También las comunidades indígenas podían participar en estos conflictos nacionales, como fue el caso de la rebelión de Huanta, de 1896. Los comuneros de las alturas de Huanta, disconformes con la implementación del impuesto a la sal, se lanzaron provistos con armas de guerra a una rebelión que tenía vinculaciones con

⁵¹⁸ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno, “Oficio del Subprefecto de Azángaro al Prefecto de Puno”, del 21 de julio de 1899.

⁵¹⁹ BNP, D4876, “Expediente sobre la queja formulada por M. Antonio Castro contra el Supremo Gobierno por los procedimientos ilegales del Prefecto de Piura”, 17 fols.

⁵²⁰ BNP, D4543, “Informe elevado a la Prefectura del Departamento por el Subprefecto de la provincia de Piura-Piura”, agosto 10 de 1898, 17 fols.

los partidarios locales de Cáceres y que, según los documentos gubernamentales, iniciaría un movimiento revolucionario más vasto. En opinión del jefe de la División Pacificadora, el coronel Domingo Parra, el impuesto a la sal había sido solo un «pretexto».⁵²¹ Los guerrilleros huantinos tenían desde la Guerra del Pacífico una alianza con Miguel Lazón, representante del partido constitucional en Huanta, movilizándose en las elecciones de 1890 contra su contendor, apoyados por las armas de precisión que se enviaron desde Lima. Esta alianza con el cacerismo les valió a los huantinos la exoneración del pago de la contribución personal, imposición abolida que, sin embargo, era reemplazada por un impuesto a la sal. En ese contexto, el reclamo particular de los guerrilleros huantinos por esta última imposición se inscribía así dentro de la dinámica política nacional.⁵²²

7.3. Política Nacional de recojo de armamento y sus límites en una sociedad agraria

Teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecían la posesión de armas de guerra a los diversos actores sociales para formar alianzas con los enemigos políticos del nuevo régimen para desestabilizarlo, el gobierno de Piérola ordenó a las autoridades departamentales el recojo de dicho material de guerra. Esta política tuvo alcance nacional, es decir, se implementó en todos los departamentos del país, con diferente alcance y éxito, como se verá más adelante. En términos generales, tal política estaba diseñada para otorgar al Estado peruano una de las características propia de los Estados modernos, a saber: el ejercicio incuestionable de la coerción legítima sobre la población y, con ello, la derivación del conflicto político a los causes institucionales del sistema representativo, es decir, resolver las diferencias interélites a través de las elecciones y de los combates parlamentarios. Sin embargo, ello no quiere decir que el gobierno pierolista y sus sucesores cuestionara el uso particular de

⁵²¹ CEHMP, Documentos donados al CEHMP por el R. P. Rubén Vargas Ugarte, Legajo N.º 8, “Memorandum de la Pacificación de las Provincia de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno”, fol. 13.

⁵²² Cfr. *Ibíd.*, fol. 4-10. Para observar las vinculaciones políticas locales de la rebelión de Huanta, puede verse Husson (1992). Un inconveniente que encontramos en la investigación de Husson radica en que el autor no inscribe suficientemente bien la rebelión de la sal en las dinámicas políticas nacionales. Los acontecimientos posteriores, como las movilizaciones de montoneras en 1898 y 1899, manifestaron elocuentemente cómo distintos actores locales secundaron los proyectos revolucionarios de los opositores al gobierno de Piérola. No resulta extraño que los huantinos estuvieran dentro de los planes revolucionarios caceristas.

armas para uso civil, las armas de caza o práctica de tiro eran permitidos y, en el caso de este último, alentado. Como se ha visto, el uso de armas era un acto presente en el siglo XIX y lo continuaría siendo hasta bien entrado el siglo XX; no obstante, la preocupación de Piérola estaba dirigida al armamento que sí podía ser orientada para la desestabilización de los gobiernos: el militar.⁵²³

Vale indicar que esta política de concentración de armamento de guerra durante el gobierno de Piérola no implicó el completo recojo de los fusiles, carabinas, rifles que quedaron diseminados en el país después de los enfrentamientos bélicos decimonónicos, ni el total desarme de la población civil, pues la evidencia muestra que esta política se continuó con éxito también durante el gobierno de Eduardo López de Romaña e, incluso, las regulaciones sobre el empleo de este tipo de armas en dicho gobierno fueron más efectivas. Sin embargo, el recojo de armas desde el gobierno de Piérola inicia una política de Estado de desarme de la población civil con sostenibilidad en el tiempo, marcando en parte las diferencias del ejercicio del poder y de la dinámica política entre el siglo XIX y el XX.

Ahora bien, como hemos afirmado al inicio del capítulo, la política de desarme de los actores sociales no puede desligarse de las reformas específicas del Ejército. La profesionalización y disciplinamiento de los oficiales y la implementación de un Código de Justicia Militar que castigaba los actos subversivos, al igual que la política de desarme de los civiles, estaban diseñados para afianzar la autoridad estatal, específicamente estabilizar el mandato de la coalición gobernante, domando a los politizados jefes militares, ampliando los mecanismos institucionales para el combate de los intentos revolucionarios y debilitando a los actores sociales regionales, subordinándolos al poder central detentado por tal coalición.

El recojo de armamento se inició casi inmediatamente después de terminado el conflicto contra las fuerzas de Cáceres. La primera acción, en ese sentido, fue el licenciamiento de las fuerzas que sostuvieron al general Cáceres en Lima, hecho que

⁵²³ No empleamos la definición weberiana de «monopolio legítimo de la violencia» para describir el pensamiento de las élites gobernantes de este periodo, pues es bien sabido que ellas y sus sucesores reconocían y ejercían la coerción en distintos ámbitos privados. El ejercicio omnímodo del poder al interior de las haciendas a fines del siglo XIX y principios del XX fue tolerado por los gobernantes de turno de la República Aristocrática y era uno de los signos más claros que el Estado peruano no podía ejercer el monopolio de la coerción.

se produjo días después de la firma del armisticio que culminaba los enfrentamientos. Los últimos defensores del gobierno de Cáceres, encabezados por el coronel Mas, en el sur, se rindieron ese mismo año ante la noticias de la caída del régimen.⁵²⁴ Entregadas las armas del Estado por las fuerzas regulares del anterior Ejército peruano, quedaba pendiente aún la enorme tarea de recoger el armamento que los aliados locales del gobierno cacerista retenían, como aliciente de su poder en sus respectivas áreas de influencia, y las armas que los civiles que apoyaron a la Coalición para derrocar al general breñero también poseían.

Para que la política de desarme se llevara a cabo, el Gobierno instruyó a los prefectos para que ejecutaran las disposiciones correspondientes en sus respectivas jurisdicciones. Así, los prefectos y subprefectos emitieron bandos ordenando la entrega del armamento de guerra que poseyeran los particulares. En tales bandos, las autoridades reclamaban las armas como «propiedad del Estado», como lo justificaba el Subprefecto de la provincia arequipeña de Condesuyos: «se ha publicado un bando para que las armas que aún se encuentran en poder de los particulares sean entregadas en un plazo perentorio, por que [es] derecho de recuperación que le compete al Gobierno».⁵²⁵ Los bandos exigían que la entrega de tales armas debiera hacerse de manera voluntaria y en un plazo establecido, ofreciendo por ello una gratificación que dependía del sistema y el estado de conservación del arma. Los contraventores de tales órdenes debían ser inicialmente multados. Veamos uno de estos bandos:

Todas las personas que por cualquier motivo conserven en su poder armas, municiones y demás prendas del Estado, están obligadas á entregarlas á los Subprefectos de cada una de las Provincias del Departamento.

Por cada arma ú otra prenda militar que reciban los Subprefectos, se pagará á los ciudadanos que voluntariamente las entreguen, una cantidad proporcionado

⁵²⁴ El Subprefecto de Islay notificó, en 1896, al Prefecto de Arequipa el envío a Lima de las armas entregadas por Pedro Mas: «hubo que atender el embarque de los rifles, cañones y municiones y demás elementos de guerra entregados por Don Pedro Mas, después de su capitulación y que condujo á Lima el Sr. Adams.» (AGN, H-6-2164, “Memoria que presenta al Ministro de Gobierno y Policía el Dr. D. Alejandro L. de Romaña, Prefecto de Arequipa”, 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco”. [Sin pie de imprenta], 1896, p. 136.

⁵²⁵ AGN, H-6-2164, “Memoria que presenta al Ministro de Gobierno y Policía el Dr. Alejandro L. de Romaña, Prefecto de Arequipa”, 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco. [Sin pie de imprenta], 1896, Anexo 3, p. 159.

al estado y calidad de ellas, con cuyo objeto imparten las órdenes respectivas á los expresados funcionarios;

Las personas que oculten y no devuelvan las prendas antedichas, serán multadas á juicio de este Despacho, no obstante la responsabilidad en que incurran por esta falta, la que se hará efectiva en la forma determinada por la ley.⁵²⁶

El castigo con multa por la ocultación de armas estaba basado en la Ley del 7 de enero de 1896 que penalizaba el contrabando, en este caso el de armas de guerra.⁵²⁷ Sin embargo, con la promulgación del Código de Justicia Militar, en 1898, se adicionó nuevas capacidades coactivas al Estado para perseguir a sus poseedores clandestinos, incorporando este delito dentro de la órbita de la justicia militar, el cual castigaba ya no solo con multas, sino con penas de cárcel o arresto, considerándose además que la punición castense era mucho más estricta que la civil.⁵²⁸ De esto fue bastante consciente José Luis Bustamante y Rivero, cuando criticaba, en su tesis de 1919, la extensión del fuero militar y los abusos que se habían cometido con fines personales:

Defecto era este que ponía fácilmente a los simples ciudadanos al alcance de la justicia privativa; y no faltaran autoridades que llegaran a aprovecharlo, para fines políticos o personales. Más de un ejemplo registra nuestra historia judicial de casos en que, por un ataque a fuerza armada que ella misma provocara tal vez, o por ocultación de armas del Estado, introducidas quizás clandestinamente por los propios agentes de la autoridad en el domicilio de la víctima, sufrieron enjuiciamientos y prisiones militares individuos del paisanaje que estorbaban al régimen imperante. (Bustamante y Rivero 1920: 15)

⁵²⁶ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, La Libertad, “Bando del Prefecto de La Libertad Eduardo Gonzales Orbegoza”, del 11 de noviembre de 1899.

⁵²⁷ Cfr. Ley del 7 de enero de 1896. La referida Ley estipulaba que las mercancías sometidas a contrabando serían decomisadas y el delito se castigaría con pena de multa. Por ejemplo, el Subprefecto de Chota informaba al Prefecto, en 1896, que el Juez de Primera Instancia «viene conociendo en asuntos de recojo de armas del estado apoyándose para ello en juzgar a los tenedores con arreglo á la ley de 7 de enero de 1896» (AGN, MI, Prefecturas, Paquete 52, Cajamarca, “Copia certificada de oficio del Subprefecto de Chota al Prefecto de Cajamarca”, del 6 de setiembre de 1897.

⁵²⁸ El Artículo 335° del referido Código establecía que «[t]odo individuo que, á sabiendas, compre, empeñe ú oculte cualquiera de los objetos á que se refiere el artículo anterior [armas, municiones ó animales destinados al servicio], sufrirá pena de arresto ó de cárcel hasta dos años.»

A pesar de ello, durante el gobierno de Piérola fueron las multas el principal mecanismo punitivo empleado para perseguir a los particulares que poseyeran armas. No debe subestimarse el alcance de esta pena, ya que las multas eran enojosas para los particulares, como manifestaron varios ciudadanos, quejándose del uso arbitrario o interesado de esta medida punitiva. Por ejemplo, los pobladores de San Gregorio, a quienes se les acusaba de bandoleros, se quejaban en 1896 que el Gobernador del distrito había ejercido «terror» con las multas por considerarlos injustamente tenedores de armas del Estado, obligándolos a marchar de su localidad.⁵²⁹ Por su parte, el Concejo municipal de Andahuaylas se quejó ante el Prefecto de las multas indebidas que el Subprefecto venía imponiendo a ciudadanos pacíficos, bajo el pretexto de ocultación, siendo la razón verdadera la pertenencia de aquella autoridad al partido local contrario a los perseguidos.⁵³⁰

Por el contrario, la entrega pacífica fue también un incentivo para la entrega de armamento de guerra. El prefecto de Arequipa, Alejandro López de Romaña, afirmaba que «previo consentimiento del Gobierno, he remitido fondos á los Subprefectos, para que compren en sus territorios, las armas de propiedad del Estado que éstos se encuentran en gran número».⁵³¹ Ese mismo año, el Prefecto del Callao informó que logró recuperar 73 armas de guerra de diversos sistemas y otro tipo de armamento, abonándose a los particulares suma total de 870 soles.⁵³² Para quienes la actividad política armada no era una posibilidad o había terminado con el establecimiento del nuevo régimen, la gratificación debió ser un interesante incentivo para la entrega de estos materiales bélicos.

En términos generales, por la documentación consultada se puede observar que la política de recojo de armamento tuvo dos picos entre 1895 y 1900. El primero se produjo durante el año que siguió a la guerra civil contra Cáceres y, el segundo, a

⁵²⁹ AGN, MI, Paquete 41, Particulares, “Expediente del 18 de octubre de 1896 promovido por los vecinos de los pueblos viejo y nuevo de San Gregorio”.

⁵³⁰ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Apurímac, “Copia certificada de oficio del Concejo Municipal de Andahuaylas al Prefecto de Apurímac”, del 6 de diciembre de 1898.

⁵³¹ AGN, H-6-2164, “Memoria que presenta al Ministerio de Gobierno y Policía el Dr. D. Alejandro L. de Romaña, Prefecto de Arequipa”, 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco. [Sin pie de imprenta], 1896, p. 22.

⁵³² AGN, H-6-2164, “Memoria que eleva al Supremo Gobierno el Coronel D. Ernesto Zapata Prefecto de la Provincia Constitucional de Callao”, 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco. [Sin pie de imprenta], 1896. p. 8.

finales del gobierno de Piérola e inicios del gobierno de Eduardo López de Romaña. Respecto al primer periodo, resultaba evidente la necesidad de recoger las armas dispersadas por la guerra, por lo que inmediatamente terminado el conflicto, las autoridades políticas recién instaladas destinaron comisiones para desarmar a los partidarios locales del gobierno caído con el apoyo de los cuerpos de línea del Ejército, aún en movilización.⁵³³ Gracias a estas medidas, las memorias que en 1896 presentaron varios prefectos daban cuenta de los logros de la política desde setiembre de 1895 hasta mediados del año siguiente. Por ejemplo, el Prefecto de La Libertad afirmaba haber remitido durante ese periodo 259 rifles y carabinas de diversos sistemas, además de 26 778 municiones.⁵³⁴ El Prefecto de Puno indicaba, por su parte, que había enviado a Lima 146 armas de diversos sistemas, 100 bayonetas y 3000 tiros.⁵³⁵ Otras entregas importantes se hicieron, por esas fechas, en la capital por intermedio del Subprefecto, enviándose al Parque de Santa Catalina 100 armas de diversos sistemas el 5 de febrero, añadiéndose 73 el 27 de ese mes.⁵³⁶ Una lista detallada fue presentada, ese mismo año, por el Prefecto del Callao, habiendo recuperado, entre los meses de febrero y junio, 73 armas de guerra:

⁵³³ En el Departamento de La Libertad, en 1896, el Prefecto informaba sobre una comisión del Escuadrón Húsares de Junín a la provincia de Huamachuco para el recojo de armas (Cfr. AGN, MI, Paquete 41, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto al Director de Gobierno”, del 16 de enero de 1896). Por su parte, el Prefecto de Lambayeque manifestó en su memoria que el Escuadrón Libertad N.º 7 prestó importantes servicios entre noviembre de 1895 y junio de 1896 «en la persecución de bandoleros, ya en el recojo de armas y municiones del Estado» (AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de Lambayeque”, de 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco. [Sin pie de imprenta], 1896, p. 17.

⁵³⁴ Cfr. AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de La Libertad”, de 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco. [Sin pie de imprenta], 1896, p. 5.

⁵³⁵ Cfr. AGN, H-6-2164, “Memoria del Prefecto de Puno M. D. Flores”, de 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco. [Sin pie de imprenta], 1896, p. 25.

⁵³⁶ *El Comercio*. Lima, 5 de febrero de 1896, edición de la tarde; y *El Comercio*. Lima, 27 de febrero de 1896, edición de la tarde.

Cuadro 26: Armas de Guerra entregadas por el Prefecto de Callao al Ministerio de Gobierno en 1896

Fecha	Armas recogidas
25/02	2 carabinas Peabody 2 carabinas Remington 4 rifles Manlicher 3 espadines 3 bayonetas
24/04	11 rifles Manlicher 1 “ Grass 1 “ Winchester 5 carabinas Manlicher 3 “ Remington 1 “ Grass
18/05	25 rifles y carabinas diversos sistemas 15 espadines 2 sables 1 saco de casquillos 1850 cápsulas diversas
27/05	8 rifles Manlicher 3 carabinas Manlicher 1 carabina Remington 2 espadines 535 cápsulas Manlicher
15/06	6 rifles Manlicher 880 cápsulas Manlicher

Fuente. AGN, H-6-2164, “Memoria que eleva al Supremo Gobierno el Coronel D. Ernesto Zapata Prefecto de la Provincia Constitucional de Callao”, 1896. En “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco”. (Sin pie de imprenta), 1896, p. 8. Cuadro de elaboración propia.

Como se aprecia en el Anexo N.º 11, después de 1896 no se pueden observar grandes volúmenes de armas recuperadas hasta fines de 1899 y 1900. Por lo que se puede concluir de la documentación consultada, los prefectos y subprefectos no realizaron requisas de un número importante de armamento de guerra hasta 1899, cuando se produce el levantamiento acaudillado por Augusto Durand y secundado por los partidarios del general Cáceres y de Guillermo Billinghurst. A finales del gobierno de Piérola y, sobre todo, inicios del gobierno de Eduardo López de Romaña, se producen nuevas incautaciones de armamento en cantidades significativas. Es evidente que el intento revolucionario de los caudillos antes mencionados manifestó elocuentemente los límites de la política de recojo de

armamento. La continuación de la política de desarme de la población civil durante la administración del sucesor de Piérola se tratará más adelante.

Ahora bien, debemos distinguir las dos formas que adoptó la política de recojo de armamento. Esta diferencia estaba en función de la situación política regional o nacional y la relación de los poseedores de armamento de guerra con dicho contexto. La primera se ejercía en condiciones de ausencia de conflictividad política regional o nacional, en contextos en los que los actores locales se encontraban políticamente aislados y militarmente desmovilizados. En tales casos, los prefectos ordenaban el recojo del armamento a sus autoridades subalternas: los subprefectos y gobernadores, los cuales, con las limitaciones propias de la reducida fuerza a su disposición, presionaban a los particulares que las poseyeran a su entrega. Dada la condición clandestina de dicha posesión, los intentos de recojo de armamento dependían de tres condiciones: la disposición de los actores locales para devolverlos voluntariamente, de la información obtenida por denuncias de otros miembros de la localidad⁵³⁷ o la manifestación fáctica de dicha posesión cuando se producía un conflicto local⁵³⁸ o actos abiertos de bandolerismo.

Cuando los actores desmovilizados planteaban resistencias a las autoridades locales, se enviaban refuerzos policiales desde los centros político-administrativos de mayor jerarquía o se destacaban comisiones con el objetivo de recoger las armas. Esta era la modalidad regular que adoptaba la política de desarme, la que se llevará a

⁵³⁷ En varias ocasiones, las autoridades locales informaron al Gobierno que sus medidas para el recojo de armamento de guerra, exitosas o no, dependían de las denuncias de los vecinos sobre la posesión ilegal de armas por parte de otros vecinos. Por ejemplo, el subprefecto de Mollepata, Manuel Ganoza, manifestaba al Gobierno que venía exigiendo la entrega de armas por parte de Mercedes Paredes en virtud de las «denuncias verbales de personas que merecen entera fe», que sindicaba a Paredes como poseedor de armas del Estado (AGN, MI, Paquete 49, Particulares, “Informe del Subprefecto Manuel G. Ganoza al Prefecto de La Libertad”, del 17 de diciembre de 1896. En “Expediente de recurso de Mercedes Paredes del distrito de Mollepata”, del 31 de agosto de 1896, f. 4). En Ayacucho, el alférez Pastor Silva manifestaba al Prefecto que había arrestado al receptor de correos de Pullo para que «entregara las que tenía en su poder [armas de propiedad del Estado], pues tenía «un cristal de los datos que le habían suministrado» (AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ayacucho, “Oficio del Alférez Pastor Silva al Coronel Prefecto Portillo”, del 11 de febrero de 1899).

⁵³⁸ En la provincia de Lucanas, el 18 de abril de 1897, se produjo un intento de toma de material electoral por parte de una facción local, liderada por Anselmo Guzmán y Nicanor Madueño, quienes postulaban al Congreso. En el acto, marcharon a la casa del alcalde Nicasio Arangoitia para pedirle armas, autoridad contraria al líder de la otra facción local, Clímaco Bendezú, quien además era tío del Subprefecto. El alcalde fue tomado preso, «acusándome que existen en poder armas de la Nación» (AGN, MI, Paquete 50, Particulares, “Oficio del Subprefecto de Lucanas al Director de Gobierno”, del 21 de abril de 1897; y “Oficio de Nicasio Arangoitia, alcalde de la municipalidad de Lucanas al Director de Gobierno”, del 27 de mayo de 1897).

cabo incluso después del gobierno de Piérola. Por el carácter delictivo de la posesión de armas y las limitadas capacidades de investigación del Estado, era obvio que las requisas de armamento de guerra de esta modalidad serían de modestas dimensiones, pues luego de la campaña de recojo realizada entre 1895 y 1896, una importante cantidad de actores ya habían entregado sus armas voluntariamente, restando aquellos que, sin estar movilizados políticamente, se resistían a desprenderse de ellas, manteniéndolas clandestinamente para sus propios fines. Para estos últimos actores no existía otra modalidad posible que desarmarlas con el auxilio de la fuerza policial, aprovechando su aislamiento político y desmovilización. Debe incluirse también en estos casos la persecución de los grupos de bandoleros armados que atacaban a las poblaciones, cuando estos no se encontraban políticamente vinculados a un proyecto revolucionario.

La segunda modalidad se ejercía cuando la presencia de actores armados superaba las desavenencias propiamente locales o el bandolerismo apolítico y tomaban alcances de consideración pública. En estos contextos, los actores políticos locales se encontraban articulados a proyectos políticos revolucionarios nacionales, con redes en el interior de su propio departamento y en otros. Acciones simultáneas en distintos espacios y coordinadas obligaban la dispersión de las fuerzas gubernamentales y otorgaban a los rebeldes mayor capacidad de resistencia y osadía, si se comparan a los contextos en los que se encontraban políticamente aislados. Para tales situaciones, el Gobierno destacaba a las fuerzas del Ejército para apoyar a las fuerzas de Policía y lograr desarmar a los civiles contraventores al Gobierno. Esto sucedió con todos los intentos de oposición armada durante el gobierno de Piérola, vinculados con alianzas políticas nacionales.⁵³⁹

En ese sentido, fuera de la recuperación regular de armamento de guerra, las fuerzas del Gobierno tomaron armas por la fuerza cuando llegaban a batir a las montoneras rebeldes movilizadas dentro de proyectos revolucionarios. En estos

⁵³⁹Por ejemplo, para la derrota de la montonera que organizaron los coroneles Villar en la provincia de Lambayeque se destacó al Escuadrón Libertad N.º 7 (AGN, MI, Paquete 49, “Informe que emite el Prefecto del Departamento de Lambayeque con motivo de la solicitud de Don Marcelino J. Carrera sobre los sucesos de el ‘Guayabo’”, del 23 de setiembre de 1897. En “Solicitud de Marcelino Carrera, sargento mayor del Ejército indefinido al Presidente de 6 de julio de 1897”. De igual manera se envió al Escuadrón Libertad N.º 7 para desarmar las montoneras comandadas por Eloy Castro y Eduardo Merino al Departamento de Piura en 1898 (AGN, MI, Paquete 54, Prefecturas, Piura, “Oficio del Prefecto de Piura al Director de Gobierno”, del 24 de octubre de 1898.

contextos, la requisita de armamentos solo era una manifestación más dentro del conjunto de medidas de la alianza hegemónica para afirmar su poder sobre opositores políticos beligerantes. En ese sentido, el recojo de armas fue una consecuencia lógica de la búsqueda de desmovilización de las facciones locales excluidas del poder (y potencialmente victoriosas), donde el desarme era una derivación inmediata de la derrota militar de las fuerzas rivales. Al movilizarse estos actores, hacían manifiesta su posesión de armas de guerra y se podía perseguirlas hasta desarmarlas. Así, por ejemplo, el comandante de la Columna Vanguardia, Daniel Estrada, al vencer en el pueblo Andajes (provincia de Cajatambo, Ancash) a la montonera Garro, pudo tomarles diversas armas y municiones.⁵⁴⁰ De similar manera, las fuerzas del Estado en el departamento de La Libertad batieron la montonera comandada por Manuel Rodríguez, tomándosele 16 armas (tres rifles Remington, tres carabinas remington, dos rifles Winchester, una carabina Winchester, una carabina Spencer, un rifle Grass, una carabina Grass y una carabina Chasspott).⁵⁴¹ Ese mismo año, las fuerzas públicas al mando del Prefecto de Huancavelica resistieron el ataque de la ciudad liderado por la montonera del cacerista Bartolomé Guerra, tomándose varias «bestias, armas y municiones»⁵⁴².

La más brutal de estas medidas de desarme se produjo en Huanta, en el contexto de la insurrección indígena conocida por la historiografía como la rebelión de la sal. En setiembre de 1896, la sublevación de las comunidades indígenas de Huanta no solo implicó la derrota de los agentes de policía local, sino también la muerte del Subprefecto y la toma de la capital provincial. Al tiempo de ser conocidos los intentos de los guerrilleros huantinos de tomar Ayacucho, el Gobierno envió una división de tres armas del Ejército al mando de Domingo Parra para pacificar la provincia y su vecina La Mar. Desde la perspectiva del Gobierno, la sublevación de Huanta, como hemos señalado líneas arriba, se encontraba conectada con planes insurreccionales de los partidarios de Cáceres en la capital de Huanta, teniendo como líder al hacendado local Miguel Lazón.⁵⁴³

⁵⁴⁰ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ancash, “Oficio de la Comandancia de la Columna Vanguardia”, del 27 de octubre de 1899.

⁵⁴¹ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno”, del 5 de junio de 1899.

⁵⁴² AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ayacucho, “Oficio del Prefecto de Ayacucho al Director de Gobierno”, del 21 de setiembre de 1899.

⁵⁴³ CEHMP, Documentos donados al CEHMP por el R. P. Rubén Vargas Ugarte, Legajo N.º 8, “Memorandum de la Pacificación de las Provincia de Huanta y La Mar al Señor Ministro de

La División Parra estuvo en Huanta y La Mar alrededor de ocho meses, organizando las instituciones locales y afirmando la autoridad del gobierno pierolista. La primera medida que tomó fue reducir violentamente a los guerrilleros huantinos, logrando después de un cruento combate derrotarlos y dispersarlos, fugando estos en masa al departamento de Huancavelica.⁵⁴⁴ Paralelamente se procedió a una persecución implacable contra Miguel Lazón, sus familiares y clientes, incluso en las zonas boscosas del departamento, teniendo el apoyo de la facción local rival, a la sazón partidaria de Piérola (Husson 1992: 142-146). Derrotada militarmente la oposición en la provincia, Parra ordenó la persecución de los rebeldes prófugos y la requisa de las armas de guerra que poseyeran las comunidades rebeldes de Huanta. Los cuerpos de la fuerza de Parra se dividieron y expedicionaron simultáneamente en diversas direcciones en las provincias de Huanta y La Mar.⁵⁴⁵ Según el mismo Parra: «[e]n las provincias de Huanta i La Mar han actuado los cuerpos con una decisión digna de reconocimiento i no hai pueblo por apartado que sea que no haya sido recorrido por nuestros veteranos soldados.»⁵⁴⁶ Después de la derrota de los rebeldes, Parra forzó a los comuneros insurrectos a la entrega del armamento de guerra a cambio de la devolución del ganado requisado: «Para efectuar el desarme me ví precisado á hacer requisar el ganado de los rebeldes i devolverlo á los que hacían sus reclamos previa la entrega de rifles, i en conformidad con los datos que me suministraba el mismo vecindario. Esta medida surtió los efectos apetecidos por que es bien sabido que el indio tiene sus cinco sentidos en sus animales.»⁵⁴⁷

Por las armas entregadas, Parra no sólo devolvió el ganado tomado (según sus propias informaciones), sino que otorgó recompensas en los casos en que los campesinos las presentaban voluntariamente: «establecí el sistema de recojo de armas, pagandolas según el sistema i estado de uso. No se hizo esperar el éxito de esta medida, los Iquichanos i muchos pobladores de las montañas trajeron buen

Gobierno”, fols. 1 y 14. La alianza entre la familia Lazón, los guerrilleros huantinos y Cáceres se había forjado desde la Guerra del Pacífico y se había mantenido activa incluso hasta 1895, cuando los partidarios de Lazón y los guerrilleros de Huanta apoyaron el sostenimiento del gobierno de Cáceres.

⁵⁴⁴Ibídem, fol. 34.

⁵⁴⁵Ibídem, fol. 21.

⁵⁴⁶Ibídem, fol. 19.

⁵⁴⁷Ibídem, fol. 20.

número de armas en mui buenas condiciones.»⁵⁴⁸ Incluso las comunidades huantinas más reacias fueron obligadas a la entrega de armamento, como la de Carhuahurán:

Agotando los medios de prudencia, impuse á la comunidad de Carhuahuran, que se presentaran en la Villa, con todas sus armas i que entregaran á los Comandantes que oportunamente habian escapado. Les hablé en su idioma i les intimé, de que si no cumplian el pacto, los volvería á batir, sin miramiento alguno. Abatidos por la derrota aceptaron sin vacilar las condiciones impuestas, i fieles al compromiso se presentaron en esta en número de doscientos cincuenta, trayendo cuarenta rifles de diversos sistemas.⁵⁴⁹

Un caso bastante notorio, pero ajeno a las dos modalidades antes mencionadas, se produjo ese mismo año, cuando se descubrieron a tres diputados de la coalición transportando clandestinamente armamento de guerra. Los diputados Ezequiel Montoya, Pablo M. Pizarro y Tomás Díaz Burga se embarcaron juntos, a fines de enero, de Lima al puerto de Pacasmayo. El 31 de ese mes, la aduana del puerto encontró en el equipaje de Montoya ocho rifles, mientras que en el de Díaz Burga se encontraron cien cápsulas de rifle Manlicher y 250 de revólver y en el caso de Pizarro se le descubrió una carabina y un cañón de carabina. Aunque inicialmente no se les arrestó, esta medida se efectuó el 2 de febrero, cuando los diputados se encontraban en Chepén, teniéndoles bajo custodia diez días en Pacasmayo, para luego ser remitidos a Lima en calidad de reos. Según las investigaciones practicadas, el destino del armamento era el departamento de Cajamarca, pues la carga del diputado Burga llegó a internarse a un punto entre el distrito de Yonán y la capital del departamento.⁵⁵⁰ En Lima fueron sometidos al laudo del Juzgado Privativo de Comisos por el delito de contrabando de armas del Estado. En su defensa, Montoya afirmó que llevaba las armas para entregarlas al Prefecto de Cajamarca, por las que había solicitado permiso al Ministro de Guerra, aunque solo pudo entrevistarse con el Director del ramo; por su parte, Pizarro afirmó que las carabinas requisadas le «habían acompañado en toda la última campaña revolucionaria, así al entrar á Lima á la cabeza de su cuerpo»⁵⁵¹. Los acusados se sometieron al fuero parlamentario,

⁵⁴⁸Ibídem, fol. 29.

⁵⁴⁹Ibídem, fol. 37.

⁵⁵⁰*El Comercio*. Lima, 21 y 28 de febrero de 1896, ediciones de la mañana.

⁵⁵¹*El Comercio*. Lima, 21 de febrero de 1896, edición de la mañana.

mientras que el Gobierno los mantuvo detenidos por varios meses, a pesar de que el tribunal de comisos se declaró incompetente en función del fuero parlamentario.

Pero la lucha contra la posesión ilegal de armas de guerra también se realizó de forma preventiva, tomando medidas para evitar el ingreso de armas a través del contrabando. Esta medida era más que una política rutinaria, en la medida que el régimen nacido en 1895 se encontraba amenazado por los actores políticos aliados al cacerismo, que en 1897, 1898 y 1899 intentaron tener éxito en acciones armadas contra el Gobierno en diversos puntos del país. El control del ingreso de armas al país era una necesidad de sobrevivencia de un régimen que se percibía a sí mismo amenazado.⁵⁵² Las fronteras eran vigiladas bajo el temor de que agentes revolucionarios, organizados fuera del país, ingresaran armas de guerra. Por ejemplo, después de la rebelión federalista de Loreto, en 1896, la situación del gobierno en dicha ciudad era precaria, por lo que correspondía a las autoridades vigilar las posibles alteraciones al orden público. En 1897, el prefecto encargado, Emilio Vizcarra, (quien, paradójicamente, será líder de otro movimiento revolucionario en Iquitos, en 1899), comunicó al Gobierno en base a las informaciones del Cónsul de Pará sobre los movimientos de los miembros de la «Federación», vinculados con agentes del Partido Constitucional.⁵⁵³ Estas informaciones permitieron el arresto de varios implicados en un posible movimiento subversivo, entre ellos a José Ramón Montani, «amigo personal de Cáceres, su decidido partidario y Coronel de un batallón de la “Federación”» y Pedro Mas, hijo del coronel cacerista del mismo nombre, además de Genaro Reyes, Trinidad Vela y Ambrosio Jaén, «servidores de la Federación y sindicados conspiradores».⁵⁵⁴ En el mismo sentido, escribió unos días después Alejandro Rivera, de la Prefectura de Loreto, informando que agentes

⁵⁵² Los dirigentes del eran conscientes de la precariedad de su administración, de la convalecencia del Estado. El mismo presidente Piérola afirmaba, en su discurso al Congreso de 1896, que «los hombres a quienes barrió la ola de la indignación pública a principios de 1895; sin otros ojos para ver que los de sus desordenados apetitos, y prepararlos, desde el siguiente día, para explotar toda dificultad pública, juzgaron llegado el momento de descargar sobre los pueblos tranquilos el azote de la revuelta» (Ugarteche y San Cristóbal, comp. 1945: 332).

⁵⁵³ Los vínculos de los partidarios de la rebelión federal de Iquitos con representantes del Partido Constitucional han sido recientemente puestos de relieve en el libro de Federica Barclay (2009: 360 y siguientes).

⁵⁵⁴ AGN, MI, Paquete 45, Prefecturas, Loreto, “Oficio del Prefecto de Loreto al Director de Gobierno”, del 6 de mayo de 1897.

cacerisrtas estaban armando y disciplinado hombres sobre la base de los desertores de un destacamento gubernamental.⁵⁵⁵

En el departamento de Piura, en octubre de 1898, se logró la incautación de 23 bultos de armas de guerra y municiones que se habían desembarcado en el puerto de Paita, traídas en el Pailebot Liva.⁵⁵⁶ Desde meses antes se venían recibiendo informaciones de los cónsules peruanos en el Ecuador acerca del contrabando de armas con destino a dicho departamento. Por ejemplo, el Cónsul peruano en Guayaquil había alertado al Prefecto del envío de armas con dirección a Zarumilla, en una pequeña embarcación. Las autoridades piuranas tuvieron también noticias de que el hijo del Cónsul de Ecuador en Tumbes internaba armas con dirección de Sullana.⁵⁵⁷ Estas informaciones se correspondían con el intento revolucionario acaudillado por Eloy Castro y Eduardo Merino de Ayabaca, conectado con la presencia de montoneras, por esas mismas fechas, en varias provincias de Cajamarca.

Asimismo, informaciones sobre envíos de armas hacia el Perú desde lugares lejanos también mostraban la preocupación por el control del armamento. El Cónsul del Perú en Burdeos y el Vicecónsul peruano en La Rochelle comunicaron, en 1898, al Ministro peruano en Francia sobre el envío sospechoso de una cantidad desmesurada de escopetas de salón con destino a Paita. Según el Cónsul de Burdeos, se estaban embarcando 120 escopetas hacia ese puerto, otras 121 hacia Mollendo y 120 para el Callao; y aunque las escopetas de pistón podían ingresar al país sin permiso del Gobierno, era sospechosa esta remesa «teniendo en consideracion el numero de ellas y la infima declaración de valor que hace el embarcador»⁵⁵⁸. Conocidas estas informaciones, se notificó a la Aduana de Paita para que hiciera las investigaciones correspondientes cuando el cargamento llegase a dicho puerto. El seguimiento de las armas se llevó a cabo, a pesar de que ellas fueron trasbordadas en

⁵⁵⁵ AGN, MI, Paquete 45, Prefecturas, Loreto. Oficio del Prefecto de Loreto al Director de Gobierno”, del 12 de mayo de 1897.

⁵⁵⁶ AGN, MI, Paquete 54, Prefecturas, Piura, “Oficio del Prefecto de Piura al Director de Gobierno”, del 10 de octubre de 1898.

⁵⁵⁷ AGN, MI, Paquete 54, Prefecturas, Piura, “Oficio del Prefecto de Piura al Director de Gobierno”, del 14 de setiembre de 1898.

⁵⁵⁸ AGN, MI, Paquete 62, Diversos, “Copia de oficio del Consulado del Perú en Burdeos”, del 23 de setiembre de 1898, y “Copia de oficio del Vicecónsul del Perú en Burdeos”, del 24 de setiembre de 1898. Este control del ingreso de armas por parte de los funcionarios consulares fue establecido desde el año 1894, en el segundo gobierno de Cáceres, bajo el temor (fundado) de la constitución de un movimiento revolucionario (Cfr. Medina 1989: 301).

Valparaíso a otro barco, de lo que resultó, según el informe de Jefe de Adunas de Paíta, que eran «infundadas las sospechas», dado que las 120 escopetas «pertenec[ía]n al antiguo sistema español para cazar [...] que son de muy mala calidad.»⁵⁵⁹

Ahora bien, la preocupación de la política de recojo de armas estuvo dirigida, en primer lugar, contra las bases locales del cacerismo. Resulta claro que esta política se ejecutó principalmente contra los enemigos del Gobierno (los caceristas) y sus potenciales aliados, es decir, los actores sociales que fueran identificados como contrarios a la coalición demócrata-civilista. Por ejemplo, Mercedes Paredes, quien había sido gobernador del distrito de Mollepata (Huamachuco, La Libertad) durante del gobierno de Cáceres fue presionado en varias ocasiones por el nuevo subprefecto, Manuel Ganoza, para la entrega de armamento de guerra que se le había proporcionado en la guerra civil para sostener al régimen anterior. Según Paredes, el Subprefecto era un peligro para él y su familia, habiendo incursionado en una ocasión, de noche, en su hacienda Mongón. El Subprefecto, por su parte, consideraba a Paredes como una «amenaza contra el orden público», quien retenía treinta rifles, de los cuales su mayoría se encontraban en su hacienda en la misma provincia.⁵⁶⁰ A motivaciones similares respondían los diversos subprefectos de Hualgayoc (Cajamarca) para perseguir a los pobladores bandoleros del distrito de San Gregorio, de los que pesaban antecedentes favorables al sostenimiento del gobierno de Cáceres. A algunos de los pobladores de San Gregorio, incluso, durante la guerra civil de 1894-1895, les fueron otorgados grados militares cuando formaron una contramontonera cacerista, incluyendo a su líder Jacinto Espinoza, quien gozaba del grado de capitán.⁵⁶¹

Por su parte, en la capital de la provincia de Lucanas fue detenido el alcalde Nicasio Arangoitia, quien había sido implicado en un motín realizado en dicha

⁵⁵⁹ AGN, MI, Paquete 62, Diversos, “Oficio de Alejandro Cortes Jefe de la Aduna Principal de Paíta”, del 13 de diciembre de 1898.

⁵⁶⁰ AGN, MI, Paquete 49, Particulares, “Expediente de recurso de Mercedes Paredes del distrito de Mollepata”, del 31 de agosto de 1896, fol. 1-2 y 4.

⁵⁶¹ AGN, MI, Paquete 41, Particulares, “Expediente promovido por los vecinos de los Pueblo de Viejo y Nuevo San Gregorio”, del 18 octubre de 1896, fols. 1-14. Especialmente interesantes son las nóminas de los pobladores de San Gregorio que estuvieron al mando de Justiniano Novoa y de Jacinto Espinoza en 1894 y 1895, donde se expresan los grados militares de diversos pobladores de San Gregorio.

ciudad, los días 18 y 19 de abril de 1897. Arangoitia fue apresado por el subprefecto Luis Fernando Montoya, acusándole de tener armas del Estado en su poder. El motín se realizó en el contexto electoral para la renovación del Parlamento. Según las informaciones del Subprefecto, en la noche del 18, treinta personas «afiliadas» a la candidatura de Anselmo Guzmán y del cacerista Nicanor Madueño (este último había sido congresista durante el gobierno de Cáceres y defensor de su régimen), en estado de ebriedad, allanaron la casa del Presidente de la Junta de Registro provincial armados de garrotes para tomar posesión de los libros de registro llegados el día anterior. Ante la presencia del Gobernador, quien estaba acompañado por un soldado armado y cuatro civiles, los rebeldes afirmaron en voz alta «Vamos a las armas» y «fueron en efecto á casa de Don Nicasio Arangoitia, que sin duda debe tenerlas, pero no les dio diciendo que estaban muy mareados».⁵⁶² Ante estos acontecimientos, el Subprefecto marchó hacia Ayacucho, regresando con una fuerza de treinta hombres, lo que motivó que los rebeldes fugaran de la ciudad. Una representación de vecinos propietarios favorables al Subprefecto informó al Gobierno que los rebeldes se habían constituido en tres cuadrillas «armadas de rifles que se dice fueron proporcionados por José A. Guzmán» (uno de los candidatos). Este conflicto, que se expresaba en el recojo de armamento, no solo tenía un cariz político nacional, donde se enfrentaban dos partidos, sino que era manifestación también de la pequeña política local, pues el Subprefecto era sobrino del candidato rival, Clímaco Bendezú.⁵⁶³

No es menos cierto que existían grupos civiles armados que fueron tolerados por el gobierno pierolista por ser afectos al régimen. Por ejemplo, en el departamento de Lambayeque, el Prefecto no sólo toleró la presencia de estas bandas armadas, como la del bandolero Arturo Rivanedeyra (conocido como «Ñaña»), sino que alentó su formación en momentos en que se combatía a los movimientos subversivos de filiación cacerista, con la finalidad de respaldar las acciones de las fuerzas del gobierno (Basadre 2005, t. 11: 78). O, en otras ocasiones, como se verá más adelante, las autoridades departamentales organizaban columnas armadas o contramontoneras, como la que se formó para combatir a Eloy Castro y Eduardo Merino en Piura, en

⁵⁶² AGN, MI, Paquete 50, Particulares, “Oficio de Subprefecto de Lucanas, Luis Fernando Montoya al Director de Gobierno”, Puquio, 21 de abril de 1897.

⁵⁶³ AGN, MI, Paquete 50, Particulares, “Carta de Nicasio Arangoitia, alcalde de Lucanas al Director de Gobierno”, Puquio, 27 de mayo de 1897; y “Petición a SE de varios vecinos de Lucanas”, del 29 de mayo de 1897.

1898.⁵⁶⁴ Si bien ello es cierto, resulta claro que esta forma de ejercicio de la coerción tocaba su final en las postrimerías de siglo, como lo muestran otros casos que empiezan a perfilar una tendencia que evidencia un mayor control del Estado sobre los mecanismos de coerción. Un ejemplo paradigmático de esta tendencia la encontramos en la persecución judicial que se le entabló a Felipe Santiago Oré, a quien se le acusó de retención de armas de guerra. Desde la Guerra del Pacífico, Oré se había convertido en una pieza clave en los valles de Cañete y Lunahuaná (Milla Batres 1986, t. VI: 377), durante la revolución de 1894-1895 había prestado inestimables servicios para la causa de la coalición y figuró entre los hombres más importantes del movimiento político que había llevado a Piérola al poder. Sus acciones militares le brindaron prestigio suficiente para convertirse en diputado y disponía de importantes alianzas entre facciones propietarias del sur del departamento de Lima.⁵⁶⁵ Este prestigio y poder políticos se veían respaldados por alianzas con bandas armadas que lo habían apoyado en la revolución y que, convertidas en montoneras, combatieron en el intento frustrado de revolución de 1899.⁵⁶⁶

Dicho poder lo convertía en una posible amenaza política al nuevo orden establecido. Por tal razón, en 1896, Oré fue acusado judicialmente por haber conservado de elementos de guerra de propiedad del Ejército luego de terminada la campaña coalicionista. En febrero de 1896, el subprefecto de Cañete, Balbuena, fue notificado que Oré ocultaba armas en sus propiedades. El 17 de ese mes, Balbuena apoyado con 30 hombres del Escuadrón Regeneración se presentó en la hacienda Montejado, fundo arrendado por Oré, y en su vivienda ubicada en la capital de la provincia, lugar donde encontraron enterrados, entre otros elementos de guerra, 22 rifles Manlicher, 28 carabinas y cartuchos de dinamita. Las armas habían sido enviadas desde Lima por el mismo Oré y entregadas a su hermano Juan Manuel,

⁵⁶⁴ En un artículo de *El Comercio*, el corresponsal de Piura informaba a los editores de ese diario que las montoneras y contramontoneras (formadas tanto por Piérola como Cáceres, en 1895 y 1898) habían contribuido a la presencia de grupos armados dedicados al bandolerismo. Manifestaba el corresponsal piurano que, en 1898, el Gobierno había formado una contramontonera con la finalidad de combatir las montoneras de Eloy Castro y Eduardo Merino (*El Comercio*. Lima, 3 de octubre de 1899, edición de la tarde).

⁵⁶⁵ *El Comercio*. Lima, 12 de junio de 1896, edición de la mañana. En un acta publicada en este ejemplar de *El Comercio*, rubricada por «propietarios y comerciantes del valle de la Provincia de Cañete», protestaron contra la captura de F. S. Oré. Los firmantes fueron Jorge Swayne (hacendado), Pedro Beltrán (hacendado), Luis Eschiafino (comerciante), Novella Hermanos (comerciantes), Guillermo Llavería (comerciante); Rafael Giraldo, Manuel Rivanedeyra y Coronado (Comerciantes), entre otros.

⁵⁶⁶ *El Comercio*. Lima, 20 de diciembre de 1899, edición de la tarde, y *El Comercio*. Lima, 21 de diciembre de 1899, edición de la mañana.

quien por el año 1895 era subprefecto y, en aquel año 1896, residía en la vivienda donde había sido incautado el armamento.⁵⁶⁷ En su defensa, Oré manifestó que esas armas habían sido compradas con su propio peculio para lanzarse a la revolución y las había retenido con el objeto de proteger la candidatura de Piérola en un momento en el que las pretensiones a la presidencia del exvicepresidente del Solar eran aún manifiestas y se temía un golpe de Estado liderado por este (Oré 1896: 17-19). Las armas fueron requisadas por el Gobierno y Oré fue sometido a un largo proceso judicial, siendo internado en la cárcel de Casamatas, desde donde escapó en 1899.⁵⁶⁸ El gobierno de Piérola no tardó mucho tiempo en manifestar estos designios, buscando la desmovilización de los montoneros de Oré desde 1896, por lo que sus hombres fueron sometidos a vigilancia y persecución, como manifestó Juan Manuel en una carta ese año: «todos tus oficiales como soldados de la última campaña son perseguidos cruelmente y muchos de ellos martirizados no sé cual sea el objeto.»⁵⁶⁹

Otros ejemplos del desarme de civiles afectos a la coalición gobernante los encontramos en el año 1899, en el contexto del proyecto revolucionario acaudillado por Durand, Cáceres y Billinghurst. En el departamento de Apurímac, en la provincia de Aimaraes, apareció una montonera al mando José del Carmen Gonzáles en apoyo del proyecto revolucionario de los tres caudillos. En diciembre de ese año, se organizó una columna conformada por civiles y comandada también por otro civil, Francisco Baluarte, con la finalidad de apoyar a las fuerzas gubernamentales en contra de las montoneras rebeldes. A dichos hombres les fueron proporcionadas armas que otros pobladores tenían en su poder, reportando el Subprefecto la cantidad de 18 las armas de guerra entregadas. Terminada la situación de inseguridad, las armas fueron devueltas a sus respectivos *dueños*, sin embargo, la Prefectura emitió un bando para el recojo de armas y municiones del Estado, ofreciendo recompensas a los que las entregasen voluntariamente y advirtiendo penalidades que se ejercerían sobre quienes las retuvieran. El bando estaba dirigido a toda la población de la provincia, no obstante, los vecinos se opusieron a tal medida. Así informó el Prefecto al Director de Gobierno:

⁵⁶⁷Cfr. *El Comercio*. Lima, de 29 de febrero de 1896, edición de la tarde, y Oré (1896: 17-19).

⁵⁶⁸ AGN, MI, 1899, Paquete 59, Prefecturas, Callao, “Oficio del Prefecto del Callao, F. de la Torre Bueno, al Director de Gobierno”, del 24 de octubre de 1899.

⁵⁶⁹ “Carta de Juan Manuel Oré”, Cañete, 23 de febrero de 1896, citado en Oré (1896: 4).

[E]n 8 de los corrientes [enero] me ofició el subprefecto de Aimaraes, manifestándome extensamente que los vecinos de su provincia le han hecho un reproche amargo de profundo desaliento por querérseles quitar las pocas armas que tiene cuando dichos vecinos han contribuido eficazmente, sin más miramiento que el orden público; con su persona y armamento, á develar el movimiento revolucionario; dicen que siempre han sido amigos de la paz y estabilidad en las instituciones y que han estado á la vanguardia en favor del gobierno; que la tenencia de dichas armas en nada perjudica el orden porque las poseen en defensa de los malhechores.⁵⁷⁰

El Subprefecto obedeció las instrucciones de su superior, aunque no se mostró muy acuerdo con ellas, haciendo manifiesta su contrariedad. Ante esta situación, la autoridad departamental solicitó instrucciones al Gobierno sobre la ejecución de la medida. En tanto que el Subprefecto apoyaba la iniciativa de los vecinos de Aimaraes, el Prefecto sugería que, aunque era dable tener en consideración a los ciudadanos favorables al Gobierno, la posesión del armamento siempre sería una fuente de inestabilidad, pues «si las referidas armas, en poder de esos particulares, son por hoy una garantía para el orden público, dada la distancia en que se encuentra esa provincia, puede no serlo mañana, al cambio de las ideas políticas.»⁵⁷¹

Similar situación se produjo en otra provincia de Apurímac. En Andahuaylas apareció, en octubre de 1899, una pequeña montonera liderada Constantino Flórez en apoyo a la montonera de José Cármen Gonzáles. Para ese entonces, Flórez era alcalde de la ciudad y la montonera tuvo el apoyo de una parte importante del Concejo municipal. La Subprefectura autorizó al exsubprefecto, en ese entonces diputado por el departamento, Félix Amador Tello, la organización de una columna de civiles para que, como en el caso anterior, apoyase a las fuerzas gubernamentales en la develación de la montonera. Según refiere Tello, organizó la columna «Chincheros» con armas prestadas de particulares: «las conseguí bajo mi palabra de honor de diferentes personas, entre ellas un rifle del Señor Prefecto de Ayacucho,

⁵⁷⁰ AGN, MI, Paquete 66, Prefecturas, Apurímac, “Oficio del Prefecto de Apurímac al Director de Gobierno”, del 27 de enero de 1900.

⁵⁷¹ AGN, MI, Paquete 66, Prefecturas, Apurímac, “Oficio del Prefecto de Apurímac al Director de Gobierno”, del 27 de enero de 1900.

además de que puse al servicio [...] dos rifles particulares de mi propiedad.»⁵⁷² Habiéndose restablecido la seguridad de la provincia, Tello marchó a Lima, mientras que el Subprefecto procedió a requisar las armas de los hombres de la columna, hecho que indignó al Diputado y a los jóvenes voluntarios que la compusieron, como manifestó el Diputado andahuaylino en un oficio que remitió al Ministro de Gobierno para solicitar se devolviese el armamento:

[No] hubiese ordenado la Prefectura que el subprefecto los desarme, faltando con este hecho no solamente á la palabra oficial empeñada de que jamás se decomisaría las armas de los jóvenes patriotas que voluntariamente se presentaron á mi llamamiento para defender el orden público, sino que tal hecho constituye un positivo peligro para el mismo orden público, que el patriotismo me obliga á no silenciar. [...] dá por resultado: que para lo futuro queden desarmados los defensores del orden y perfectamente bien armados los enemigos; cosa que con conocimiento de esto tomen aliento los revolucionarios, se reaccionen y busquen las represalias lanzándose sobre la juventud desarmada, á la segura de que no encontrarán en ella la menor resistencia bélica y podrán llevar á efecto su programa de exterminio.⁵⁷³

Luego de haber mostrado algunas características de la política de recojo de armamento de guerra, convendría hacer algunas precisiones acerca de las limitaciones que tuvo que enfrentar esta política y que le impusieron restricciones en su alcance y éxito. Es evidente que los resultados del desarme de la población civil estuvieron en función de un aspecto del Estado peruano que la misma política de armamento buscaba incrementar; nos referimos a sus limitadas capacidades para ejercer su autoridad sobre su territorio y población. El Estado peruano decimonónico era una organización débil que buscaba ejercer su autoridad en una sociedad agraria, con fuertes autonomías locales y dispersa en un amplio territorio. En ese sentido, los deseos de la coalición gobernante de construir un Estado moderno que lograra monopolizar el armamento militar tuvieron que amoldarse a las limitaciones que le imponían su propia estructura, su sociedad y el territorio.

⁵⁷² AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno, “Oficio del Diputado de Andahuaylas Félix A. Tello al Ministro de Gobierno”, del 11 de diciembre de 1899.

⁵⁷³ *Ibidem*.

Para el éxito de la política de recojo de armamento, como cualquier otra medida del Estado establecida desde el centro político, se tenía que considerar las siguientes variables: las dimensiones del territorio, el tamaño y grado de concentración de la población, los medios de comunicación y transporte, el número y cualificación de los agentes del Estado y la fortaleza relativa de los actores locales sobre los que se buscaba tener impacto. Cualquier política emprendida desde la capital para ser ejercida en las demás provincias tuvo que enfrentar las limitaciones que imponían su accidentada geografía peruana, la dispersión de la población en un amplio territorio, la deficiencia de medios de comunicación que conectaran a las autoridades locales con el centro político, el reducido número de efectivos del Estado (pobremente entrenados) y la autonomía relativa de las comunidades locales. Veamos cada una de estas características.

En el periodo que estudiamos, el territorio peruano tenía una extensión aproximada de 1 919 833 km² (incluyéndose los territorios de Tacna y Arica) (Cfr. Stiglich 1913: 126). Un territorio bastante extenso, con una accidentada geografía que, por su variedad de altitudes y pisos ecológicos, ha limitado siempre la velocidad del tránsito y ha determinado un patrón de asentamiento de la población fuertemente disperso. Para fines de siglo XIX, el Perú es un país escasamente poblado, registrándose en el censo de 1876 solo 2 699 000 habitantes. Según un cálculo bastante inflado, elaborado en 1897 por una Comisión de la Sociedad Geográfica de Lima, se estimó que el Perú estaba habitado por 4 609 887 (Cfr. Basadre 2005, t. 11: 148), mientras que en 1913 se proyectó que la población peruana recién había alcanzado los 3 382 525 habitantes (Cfr. Stiglich 1913: 126).

Como toda sociedad predominantemente agraria y precapitalista, decíamos que el patrón de asentamiento de la población peruana de este periodo era disperso, característica que se acentuaba por las particularidades ecológicas de la geografía peruana. En ese sentido, el amplio territorio peruano se encontraba *salpicado* por poblaciones de diversas dimensiones, siendo mayoritarios los asentamientos por debajo de los diez mil habitantes.⁵⁷⁴ Lima, la capital y ciudad más densamente poblada del país, tenía una población, en 1908, de alrededor 150 000 habitantes.

⁵⁷⁴ Las apreciaciones de Marie-Danielle Demélas sobre el asentamiento de la población peruana en el periodo virreinal son extensibles para el periodo republicano (Demélas 2003: 35-38).

Otras ciudades importantes como Arequipa y Trujillo no superaban los cincuenta mil habitantes incluso en la década de 1910 (Cfr. Burga y Flores Galindo 1987: 12-13), mientras que, en el interior de los departamentos, pequeños pueblos apenas alcanzaban algunas centenas de almas (ver Anexo N.º 5). Estas poblaciones se encontraban bajo la jerarquía política y administrativa de sus respectivas provincias y estas, a su vez, de las capitales departamentales; sin embargo, entre los pueblos y sus anexos en los distritos del interior y las capitales departamentales podían mediar grandes distancias que se acrecentaban por la accidentada geografía, factores que dificultaban la ejecución de las órdenes y su vigilancia. Así, para que las disposiciones del Gobierno, como el recojo de armas de guerra, fueran ejecutadas en tales circunscripciones, su mandato debía recorrer aquellas grandes distancias que abonaban, en gran medida, en la autonomía que gozaban los actores locales. De esto eran conscientes tanto las autoridades locales como las departamentales, tal como lo demostraba el oficio que el Gobernador remitió, en 1899, al Prefecto de Amazonas, a propósito de los atentados de los bandoleros capitaneados por Guillermo Oblitas:

La distancia que média esta localidad de esa capital donde reside la fuerza pública que es el custodio de las garantías, son el principal motivo para que los malhechores i jefes de bandolerismo traten de asaltar la vida de los ciudadanos pacíficos i honrados i aun de las autoridades como la del infraescrito [...] armados de rifles de precisión i revolver.⁵⁷⁵

Asimismo, descontándose el territorio que se empezaba a colonizar a fines de siglo en la ceja de selva, vastos espacios rurales del territorio peruano se constituían en fronteras donde el Estado y sus agentes les era sumamente difícil ejercer su autoridad. Se podría afirmar que en cada departamento existían «fronteras internas», donde las disposiciones estatales encomendadas al centro político-administrativo departamental eran cumplidas intermitentemente y con dificultad, espacios donde los accidentes geográficos restaban la capacidad de los agentes del Gobierno para ejecutar tales disposiciones. Por ejemplo, en el departamento de Trujillo, la persecución y desarme de la banda de los hermanos Cárdenas, en la provincia serrana de Huamachuco, fue sumamente difícil, debido a que estos bandoleros se internaban

⁵⁷⁵ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Amazonas, “Oficio del Prefecto de Amazonas al Subprefecto de Luya”, del 8 de mayo de 1899. El Prefecto transcribe el oficio del Gobernador de Luya del 18 de abril de 1899.

en los montes de la provincia, aprovechando las condiciones geográficas del territorio.⁵⁷⁶ Otro caso es el de la comunidad indígena de Obas, en el departamento de Huánuco, que resistió el ataque de una comisión armada, que buscaba recobrar el ganado que los comuneros se habían apropiado de los hacendados locales, gracias a las elevaciones aledañas a su pueblo.⁵⁷⁷

Estas afirmaciones eran aún más valederas para el caso de las áreas de expansión sobre la frontera amazónica, como lo demuestra un caso que se produjo en las inmediaciones del valle de Pozuzo, también en el departamento de Huánuco. En 1899, el empresario cauchero Ismael Ballesteros fue denunciado de «acopia[r] armas y comet[er] toda clase de abusos» en el pueblo de Panao. Aprovechando su nombramiento de comisario del valle, Ballesteros se había convertido en líder de una banda armada. A pesar de esas noticias, el Prefecto excusaba la imposibilidad de darle captura, tanto por «la insuficiente fuerza con está dotado este Departamento», como por «los pésimos caminos que conducen á aquellas montañas» y los refugios «en los bosques de la región en que habita». Por tales razones, el Prefecto había preferido no enviar una comisión de Policía a tal región, sino remitir seis carabinas al Gobernador de Pozuzo, «para que [arme] á individuos de su confianza y con la reserva y precauciones que el caso requiere» constituya, finalmente, en la localidad, una «guardia urbana».⁵⁷⁸

El medio de transporte común para los agentes del Estado en el interior del país era de tracción animal, especialmente el caballo. A excepción de las ciudades emplazadas en la delgada franja costera, que podían comunicarse rápidamente vía marítima, los desplazamientos en las serranías peruanas seguían dependiendo de la fuerza animal. Los medios de transporte modernos, como el ferrocarril, eran aún escasos y vinculaban, antes que a las poblaciones, a los recursos naturales rentables con los centros de comercialización. De estos ferrocarriles, salvo el del Centro, que comunicaba el Callao con la Oroya, y el del Sur, que unía Mollendo (Arequipa) con Puno, la

⁵⁷⁶ Cfr. AGN, MI, Paquete 41, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto al Director de Gobierno”, del 1 de julio de 1896.

⁵⁷⁷ Cfr. AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Oficio del Jefe de la Guardia Civil Luis B. Castillo al Prefecto”, del 09 de marzo de 1899.

⁵⁷⁸ AGN, MI, Paquete 60, Prefecturas, Huánuco, “Oficios del Prefecto de Huánuco al Director de Gobierno”, del 2 de febrero, 5 de abril y 22 de mayo de 1899. La transcripción es del oficio del 22 de mayo de 1899. Como se verá en otra sección, la entrega de armas a las poblaciones civiles en las fronteras amazónicas fue un hecho frecuente.

mayoría recorría cortas distancias, por lo que el país no contaba con una red ferroviaria que articulara el país.⁵⁷⁹ Y aunque en este periodo se hicieron varios esfuerzos para mejorar los caminos carreteros, la infraestructura vial era aún insuficiente para vincular adecuadamente las alejadas poblaciones del país. En ese sentido, los agentes del Estado debían recorrer esas largas distancias por sinuosos y deficientes caminos a lomo de caballo y llevar sus pertrechos por medio de mulas, dependiendo del estado físico de los animales y la disponibilidad de forrajes para alimentarlos.⁵⁸⁰

La siguiente variable la constituían los agentes del Estado. En los años del gobierno de Piérola, el número de efectivos bajo la autoridad del Ministerio de Gobierno y Policía era de 2842, siendo 1646 los asignados a la Guardia Civil, correspondiéndole a la Gendarmería 1196 (ver anexos N.º 8 y 9). En teoría, la Guardia Civil tenía como función preferente la vigilancia y cuidado del orden en los centros urbanos, mientras que la Gendarmería era una fuerza dedicada al control de la población y el orden público (García Calderón 2007 [1879], t. II: 1015-1027). Aunque la Gendarmería no estaba estrictamente destinada para las poblaciones rurales, siendo sus efectivos por lo general montados, resultaban ser la primera línea de fuerza para la aplicación de las disposiciones estatales fuera de los centros administrativos departamentales y provinciales, a la cual se le podía adicionar destacamentos de la Guardia Civil de acuerdo a la discrecionalidad del Prefecto.

Para una población que a fines de siglo superaba los 2,7 millones de almas, los 2842 efectivos significaban una relación aproximada de un oficial de Policía por cada 950 habitantes. Esta relación podría parecer razonable, sin embargo, si esta fuerza se encontrara distribuida uniformemente en el territorio, pues las ciudades que contaban con significativas poblaciones concentraban los más altos porcentajes. Por

⁵⁷⁹ Para el año 1899, el Perú contaba con las siguientes líneas férreas: a) norte: Paita-Piura; Etén-Chiclayo y Lambayeque; Pimentel-Chiclayo; Pacasmayo-Guadalupe y Yonán; Salaverry-Trujillo y Ascope; y Chimbote-Suchimán; b) centro: Lima-Ancón; Callao-Oroya; Lima-Callao; Lima-Chorrillos; Pisco-Ica; y Tambo de Mora-Chicha Alta; c) sur: Mollendo-Arequipa-Puno-Sicuani (Cfr. Anales de las Obras Públicas del Perú. Año 1899 [1899]).

⁵⁸⁰ En varias ocasiones, los jefes militares encargados de perseguir a los montoneros se excusaron de la falta de éxito en sus comisiones, indicando que las continuas marchas para perseguirlos habían debilitado sus caballos, al punto de dejarlos inservibles. Por ejemplo, el Comandante del Regimiento de Gendarmería de Lima que expedicionó en Otuzco y Huamachuco, en 1899, informaba al Director de Gobierno que las montoneras de Domingo Cruzado huían por diversas quebradas «aprovechando de las bestias que en doble número tienen», mientras que las fuerzas policiales fallaban: «nó pudiendo nosotros darles alcance por el mal estado de la caballada que se encuentra destruida por las continuas expediciones que se verifican» (AGN, MI Paquete 55, Diversos, “Oficio del Comandante del Regimiento de gendarmería de Lima al Ministro de Gobierno”, de Otuzco, del 25 de octubre de 1899).

ejemplo, estaban destacados al casco urbano de Lima 542 efectivos de la Guardia Civil, es decir, casi la tercera parte del total nacional; mientras que en Arequipa se destacaron 198 (el 12%) y en el Callao 108 (6.5%). Otro tanto ocurría con las fuerzas de Gendarmería, dado que Lima concentraba 429 efectivos, que equivalía casi el 36% del total, mientras que Arequipa se encontraba en la segunda posición con sólo 80 gendarmes (6.6%). Estas cifras se contraponían con las de otros departamentos, especialmente los serranos, que por su extensión y número de población tenían fuerzas de Policía casi ridículas. Por ejemplo, el departamento de Apurímac contaba, en 1896, con 18 guardias civiles y 20 gendarmes montados, es decir, menos de 40 efectivos de Policía que debían ejercer la fuerza sobre una población de más de 118 mil personas (según el censo de 1876); Huancavelica, por su parte, disponía de 24 efectivos de la Guardia Civil y 25 gendarmes de caballería, menos de 50 agentes de Policía para el total del departamento, cuya población ascendía a 103 mil habitantes; y, en Huánuco, la situación era muy similar, pues contaba con 18 efectivos de la Guardia Civil y 25 gendarmes, para una población de casi 79 mil habitantes en ese mismo año.⁵⁸¹

En ese contexto no resultaba raro que las autoridades provinciales solicitaran a los prefectos y estos, a su vez, al Gobierno central el destaque de más efectivos a sus respectivas jurisdicciones para mantener el orden público. Por ejemplo, el Subprefecto de Azágaro informaba al Prefecto después de la sublevación encabezada por José María Lizares que el orden público no podría mantenerse con la «pequeña fuerza cuyo número ha variado de cuatro á quince», tomando en cuenta el «carácter belicoso de la Provincia.»⁵⁸² De igual manera informó el Subprefecto del Cercado de Puno, señalando que los 96 guardias civiles de la capital eran insuficientes para vigilar los «barrios apartados» que se encuentran «en un desamparo».⁵⁸³ En 1898, el Prefecto de Cajamarca también informó con similar tenor al Gobierno, señalando que en el distrito de Bellavista había aparecido «una partida de gente con armas del estado» y dado que «estos hechos se vienen realizando con frecuencia» en varias provincias del

⁵⁸¹Para los datos poblacionales, puede verse Gootenberg (1995). Para la información acerca del número de efectivos de Policía, cfr. Ministerio de Gobierno y Policía (1896: Anexo 32). El listado de fuerzas de Policía de este año ha sido reproducido en los anexos de esta investigación.

⁵⁸² BNP, D4559, «Copia certificada de la Memoria presentada por el Subprefecto de la provincia de Azágaro, Dr. José A. Ruiz, correspondiente al año 1899», Puno, junio 24 de 1900.

⁵⁸³ Cfr. BNP, D4570, «Memoria que el Subprefecto e Intendente de Policía de la Provincia del cercado de Puno á la Prefectura del Departamento en el año 1899», Puno, junio 8 de 1899, f. 2.

departamento le era imposible «emprender persecución contra esos individuos y desarmarlos» por no contar «con la cantidad de gente necesaria» para ello.⁵⁸⁴

Al igual que otras disposiciones estatales importantes, en los casos en que las autoridades locales intentaban recoger armas de guerra o perseguir a los individuos armados que las retuvieran en localidades distantes de los centros político-administrativos de los departamentos, se debían enviar comisiones especiales para tal fin. Sin embargo, debido a que el número de agentes disponibles en la mayoría de departamentos era insuficiente para recorrer simultáneamente las dimensiones del territorio, resultaba evidente que las comisiones debían marchar esas largas distancias para obligar por la fuerza la entrega del armamento, dejando poco protegidas otras circunscripciones. Dadas todas las condiciones arriba reseñadas, lo que hacían las autoridades departamentales y provinciales era concentrar sus fuerzas en lugares específicos durante periodos de tiempo limitados para realizar el recojo, movilizándolas después a otros espacios o haciéndolos retornar al punto donde se encontraban regularmente acantonadas, lo que implicaba un ejercicio de fuerza intermitente. En esta dinámica también se inscribían los envíos de fuerzas regulares del Ejército cuando se producían desórdenes de considerable importancia, es decir, representaban el ejercicio fuertemente asimétrico de la fuerza del Estado sobre los actores locales, pero por un periodo de tiempo bastante limitado.

Solo en ese contexto de ejercicio discontinuo del poder podía comprenderse las solicitudes de Enrique Gavilano, a la sazón subprefecto de Antabamba, y los informes del Prefecto del departamento de Apurímac (uno de los que tenía menor número de efectivos). Para realizar el desarme de un grupo de ciudadanos de la localidad de Huaquirca, el Subprefecto tuvo que marchar a la capital del departamento y solicitar al Prefecto un piquete de gendarmes. El Prefecto informó al Gobierno que tras aceptar la petición de Gavilano la capital se quedó casi desguarnecida, «casi sin tropa, y solo con la fuerza moral de mi autoridad he logrado evitar hechos que sin mi presencia se habrían realizado.» La comisión encargada al subprefecto Gavilano fue exitosa, lográndose capturar a ocho individuos implicados en el ataque al Juez de Paz

⁵⁸⁴ AGN, MI, Paquete 52, Prefecturas, Cajamarca, “Oficio del Prefecto de Cajamarca al Director de Gobierno”, del 4 de abril de 1898. Para ver las diversas acciones simultáneas que venía realizando para perseguir a los bandoleros y montoneros en las provincias del Departamento, entre 1898 y 1899, cfr. BNP, D4622, “Memoria del Sr. Prefecto del departamento de Cajamarca”, Cajamarca, mayo 15 de 1899, ff. I-III.

del distrito, incautándose además seis carabinas. Ante tales circunstancias, el Prefecto solicitaba al Gobierno que instara al Congreso el «aumento de las fuerzas de policía en el departamento, pues no son suficientes, las que hoy existen», porque además de los efectivos enviados a Huaquirca, «los demás están distribuidos en todas las provincias [...] viéndome con frecuencia en el caso de quedarme, como ahora, en la capital con ocho á diez soldados»⁵⁸⁵.

Pero, como hemos afirmado, no solo el número de efectivos era una variable a considerar, sino también la cualificación de los agentes del Estado. Sin abundar en ello, diremos que esta formación era casi inexistente, dado que para el caso de la Policía Civil no existía una escuela de formación especializada; el caso de la Gendarmería era un tanto distinto, pues sus hombres provenían del Ejército, una institución teóricamente diferente.⁵⁸⁶ Se estaba aún muy lejos de una policía de investigación y preventiva que vigilara las contravenciones de la población y, en el caso concreto de la política de desarme, más lejos aún para que descubriera a los individuos que poseyeran armas de guerra. Asimismo, la ausencia de una institución que profesionalizara y disciplinara a estas fuerzas, como se estaba produciendo en esos precisos años en el Ejército, obstaculizaba la existencia de un discurso ético-profesional de lealtad al Estado y de aplicación impersonal de la Ley que regulara los comportamientos de los agentes de Policía frente al Gobierno y a los ciudadanos. Con lealtades poco sólidas, no era raro que estos funcionarios en los espacios locales tomaran partido por algunos grupos, en contra de otros, o que tuvieran una agenda particular para sus propios fines. Una aplicación interesada de la Ley no dejaba de ser un aliciente para el desconocimiento de la autoridad por la facción afectada y sus clientelas.⁵⁸⁷

⁵⁸⁵ AGN, MI, Paquete 43, Prefecturas, Apurímac, “Oficio del Prefecto de Apurímac al Director de Gobierno”, del 15 de diciembre de 1897.

⁵⁸⁶ Ulrich Mücke considera correctamente que las gendarmerías tenían, en el siglo XIX, una organización similar a la del Ejército y no era extraño que sus efectivos pasaran a aquella institución (Cfr. Mücke 2010: 270).

⁵⁸⁷ Sobre los usos personales de la política de recojo de armas ya hemos mencionado el testimonio de José Luis Bustamante Rivero en su tesis de 1919. La documentación consultada respalda las afirmaciones del connotado abogado arequipeño. Por ejemplo, el subprefecto de Cotabambas (departamento de Apurímac), A. Latorre, a pocos días de asumir el cargo inició una persecución «á varios individuos con el pretexto de que tenían armas del Estado», siendo los perseguidos «miembros del bando político opuestos al de las simpatías de su autoridad», respecto á la candidatura á la diputación de la provincia (AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Apurímac, “Oficio del Prefecto de Apurímac al Director de Gobierno”, del 3 de mayo de 1899).

En los centros urbanos con una importante población concentrada en un espacio limitado y poseedores de una considerable fuerza pública, la política de desarme de la población civil fue menos complicada. En ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa no fue sumamente difícil el recojo de armas, pues ya en tempranas fechas del gobierno de Piérola las autoridades políticas mostraron importantes entregas de armamentos. A diferencia del campo, los habitantes de las ciudades –por lo menos los no privilegiados– no tenían muchas posibilidades para alejarse de la ciudad y, por tanto, de la fuerza pública, por lo que se encontraban sometidos a una mayor presión gubernamental que en el campo. Asimismo, la presencia concentrada de un número considerable de efectivos de la Policía en estos espacios urbanos que, sumados a los cuerpos del Ejército acantonados en ellos, constituían una fuerza disuasiva suficiente para obedecer con menores resistencias las pretensiones gubernamentales para la entrega de las armas de guerra.

Dadas estas características arriba mencionadas, las poblaciones que con mayor fuerza se resistieron a la entrega de armamento provenían del mundo rural. Como hemos visto, los actores que las poseían eran diversos: hacendados, pueblos campesinos, comunidades indígenas y pobladores dedicados al bandolerismo. La retención de estas armas solo se hacía conocida por el Gobierno a través de alguna denuncia intencionada o por medio de la exhibición misma del armamento. Dadas estas características, los bandoleros eran los primeros sindicados de ser poseedores de armas, pero su continua movilización, cruzando incluso diversos departamentos, los hacía presas difíciles de perseguir. Sin embargo, otros actores utilizaban sus propias tácticas para retener las armas del Estado o incluso oponían resistencia directa a los efectivos del Estado. Ello era posible en la medida que, en este periodo de transición, las comunidades rurales aún eran lo suficientemente fuertes o autónomas como para desafiar, ocasionalmente, a las fuerzas policiales locales, lo que demostraba su vitalidad o poder relativo frente al Estado. Veamos algunos ejemplos.

Este poder relativo se podía manifestar de manera directa. Hacendados como Wenceslao Villacorta eran capaces de repeler un destacamento de la Policía, como lo hizo en 1898, cuando una comisión de 35 hombres, al mando del Subprefecto de Chota, intentó reducirlo en su hacienda Chetilla. La comisión fue recibida a balazos por Villacorta, por lo que tuvo que replegarse. Este fracaso motivó el cambio de

estrategia por el nuevo Prefecto, buscando inútilmente negociar con Villacorta su rendición.⁵⁸⁸ En otros casos, algunas poblaciones, lideradas por sus notables locales, podían plantear con la misma vehemencia la resistencia a los efectivos del Gobierno. Cuando en 1898 se envió una comisión a la población de Ayabaca, al mando del jefe del Escuadrón Libertad, el sargento mayor Manuel Rivero, «para requisar el número posible de armas y demás elementos de guerra que se hallaban en poder de particulares», terminó también en fracaso. La comisión fue recibida por Eduardo Merino, uno de los líderes del pueblo, ganando tiempo para que el otro líder, Eloy Castro, organizase un grupo 150 hombres y lanzara un ataque sorpresivo sobre los emisarios del Gobierno. Resguardados en el cuartel del pueblo, los agentes resistieron durante ocho horas los ataques de los montoneros, los cuales se encontraban además «protejidos por el vecindario, pues los disparos provenían de todas las fincas que se hallaban próximas o rodean» la Plaza de Armas. El comisionado tuvo que aceptar que Eloy Castro «como jefe de la ella [la fuerza enemiga] me impuso la rendición».⁵⁸⁹

El 20 de julio de 1897, el subprefecto de Cotumazá, Manuel Saldarriaga, se quejaba ante el Director de Gobierno sobre la falta de efectivos para mantener el orden público. Afirmaba que con un piquete de entre ocho a diez soldados era imposible mantener tranquila la provincia, pues «son muchos los puntos luctuosos que se han realizado y que existen en la historia de esta Provincia; y no es posible, en tal virtud que una autoridad, solo se apoye en un buen tino y sagacidad.»⁵⁹⁰ Un mes antes, el Gobernador del distrito de Cascas había sido agredido físicamente por el hacendado Felipe Iglesias y sus hijos, quienes tenían en su poder dos rifles Manlicher obtenidos de dos desertores del Batallón Ayacucho cuando se dirigían a sofocar la insurrección de Iquitos en 1896. Por otros medios, el Prefecto tuvo conocimiento que la familia Iglesias disponía de un rifle Winchester. El Subprefecto sentenciaba que «la carencia de la fuerza pública en esta Provincia, vá alentando repetidos hechos de desacato á las autoridades subalternas y aun á la mia»⁵⁹¹.

⁵⁸⁸ AGN, MI, Paquete 52, Prefecturas, Cajamarca, “Oficios del Prefecto de Cajamarca al Director de Gobierno”, del 1 y 29 de agosto de 1898.

⁵⁸⁹ BNP, 4540, “Parte del Combate de Ayabaca”, Piura, agosto 15 de 1898.

⁵⁹⁰ AGN, Paquete 46, Subprefecturas, “Oficio del Subprefecto de Cotumazá al Director de Gobierno”, del 20 de julio de 1897.

⁵⁹¹ AGN, Paquete 46, Subprefecturas, “Copia certificada de dos Subprefectos de Cotumazá al Prefecto del Departamento”, del 16 de julio de 1897.

Acrecentaba esta debilidad del Estado, las solidaridades familiares y locales que facilitaban la impunidad de los crímenes y la resistencia a las medidas que buscaba desarrollar el Gobierno. Uno de estos límites se encontraba en los vínculos familiares entre las autoridades subalternas y los contraventores de las leyes. El mismo Subprefecto de Contumazá informaba, en junio de 1897, que su provincia estaba compuesta por «gente belicosa y por consiguiente difícil de manejarla» solo con la autoridad moral, posibilidad que estaba incluso cerrada, pues los gobernadores eran «incapaces de dar cumplimiento a sus obligaciones por el espíritu de paisanaje y por las relaciones de parentesco que, por lo general, en los pueblos pequeños, como los de esta Provincia, tienen unos con otros.»⁵⁹² Se podían también producirse solidaridades asimétricas para proteger dependientes de las persecuciones del Gobierno. Por ejemplo, los campesinos bandoleros de San Gregorio escaparon en muchas ocasiones de los seguimientos de los subprefectos de la provincia, obteniendo la protección de hacendados de la vecina provincia de Pacasmayo, «á donde van á auxiliarse por un corto periodo en la condición de peones».⁵⁹³

Cuando estas resistencias sobrepasaban los límites locales o se encontraban conectadas con sucesos políticos supralocales, como hemos afirmado líneas arriba, eran combatidas con el envío de cuerpos línea del Ejército suficientes para perseguir y acorralar a los sindicados como poseedores de armas. Sin embargo, la presencia de estas unidades del Ejército siempre era esporádica y, aunque aquietaba las localidades derrotando a los contraventores de las políticas del Estado, dejaba márgenes para escapar de las disposiciones. En ese sentido, por los factores anotados, el intermitente ejercicio de la fuerza restringía el rendimiento de la política pierolista.

⁵⁹² AGN, MI, Paquete 46, Subprefecturas, “Oficio del subprefecto de Contumazá al Prefecto del Departamento”, del 11 de junio de 1897.

⁵⁹³ AGN, MI, Paquete 41, Particulares, “Informe del Subprefecto de Hualgayoc”, del 19 de noviembre de 1896. En “Expediente del 18 de octubre de 1896, promovido por los vecinos de los pueblos de viejo y nuevo San Gregorio”, ff. 8-9. Cita textual en AGN, MI, Prefecturas, Paquete 43, Cajamarca, “Copia certificada de oficio del Subprefecto de Hualgayoc José Manuel Baluarte al Prefecto”, del 19 de agosto de 1897.

7.4. Casos en los que se permitía el uso particular de armas de guerra

Esta política nacional de recojo de armas de guerra tenía sus matices y sus excepciones, por lo que se hace difícil afirmar que el Estado peruano, a fines del siglo XIX, logró el monopolio de la violencia en su territorio. En diversos espacios y en situaciones específicas, el Gobierno autorizó el uso de este armamento a los civiles. Por consideraciones del espacio, no fue infrecuente que el Gobierno autorizara el uso de armamento de guerra a particulares en las zonas por colonizarse. La política de desarme estaba pensada para concentrar el armamento de guerra en el espacio tradicionalmente ocupado por el Estado colonial y luego el republicano, es decir, las poblaciones de la costa y de la sierra, y en menor medida las localidades de asentamiento estable en las cabeceras de la *montaña*. En contraste con estos espacios, en los valles de reciente colonización o zonas en proceso de colonización en la selva, la posesión de armamento de guerra no estaba proscrita, sino autorizada por el Gobierno para la protección personal de los exploradores y colonizadores. Es conocido que el periodo de la posguerra se produjo un incremento de las iniciativas de exploración y explotación amazónica como una suerte de compensación a los recursos de salitre que se perdieron en Tarapacá tras la derrota. En este periodo se construyó la imagen de la región amazónica como una zona virgen y llena de riquezas que aguardaban su descubrimiento y explotación (Cfr. García 2001: 3). Los territorios selváticos de los departamentos de Loreto, Junín, Huánuco, Cuzco y Puno ofrecían oportunidades para la explotación de caucho (debe recordarse que este recurso gozó de un boom a fines del siglo XIX y principios del XX), coca, oro y otros productos, estando sintomáticamente el gobierno de Piérola bastante interesado en la incorporación de la Amazonía a la órbita de explotación peruana, como lo expresó la construcción de la vía del Pichis.⁵⁹⁴

Este creciente interés por las áreas amazónicas iba acompañado por una mayor preocupación del Estado peruano por extender la presencia «peruana» en aquellas

⁵⁹⁴El mismo Piérola fue un entusiasta de la colonización de las regiones de *montaña*. En su discurso al Parlamento, en 1896, manifestó a los representantes la importancia de una vía férrea de penetración desde Lima hacia el río Ucayali, prolongándose el ferrocarril de La Oroya, a fin de que el país tuviera comunicación entre el océano Pacífico y el Atlántico (Cfr. Ugarteche y San Cristóbal, comp 1945: 338).

regiones que se consideraban aún vírgenes. En ese sentido, existía una simbiosis entre las iniciativas económicas particulares y los intereses del Estado. Sin embargo, los exploradores-explotadores de las tierras de *montaña* debían sortear los peligros propios de zonas inexploradas, incluyendo la población originaria que resistía la invasión de sus territorios tradicionales. No resultaba raro que las poblaciones amazónicas atacaran a los exploradores, intentando expulsarlos de sus comarcas. Una petición presentada por Manuel María Estrada es muy indicativa de esta situación. Estrada era vecino de Carabaya y un empresario cocalero y minero con muchos años en la provincia, habiendo poseído cocales en las riberas del Inambari y descubierto la mina aurífera de Santo Domingo, la cual vendió a la compañía americana Inca Mining Company. Por su experiencia de años de trabajo en la región, Estrada manifestaba el constante hostigamiento y ataques cometidos por los «salvajes», «infieles» contra sus actividades y los esfuerzos de los «industriosos» ciudadanos que habían buscado explotar las regiones selváticas de la provincia.

Las zonas ribereñas del Inambari, a fines de siglo, eran un espacio aprovechable para la explotación de productos tropicales, como la cascarilla y la coca, además de una región privilegiada para la explotación de oro. Según Estrada, los pobladores amazónicos estaban frustrando los trabajos de explotación, como en 1890, cuando atacaron el caserío Obrajes, ubicado en el distrito de Coaja y dedicado a la extracción de oro y cultivo de coca. Allí ultimaron a varios vecinos, destruyeron las casas y cocales, obligando el abandono del centro poblado. Para este empresario, los continuos ataques no solo eran un obstáculo para la actividad privada, sino también para la soberanía del Estado en una zona sin presencia peruana que los colonos podían afirmar:

[N]o sólo arrebataron vidas estimables, de industriales importantes, sino que destrozaron y quemaron villorios que se iban formando á la sombra del trabajo, y que hoy habrían sido pueblos importantes que hubieran avanzado población hacia el Oriente, adonde se habrían formado grandes cocales [...] En estas circunstancias, no es posible emprender trabajos en las regiones orientales, cuyo beneficio es á todas pruebas evidentemente importante para el Perú, tanto en lo industrial, cuanto en lo internacional; pues, por los pocos datos que yo conozco, que he experimentado, y hé pronunciado, puedo constar más de noventa

víctimas de la ferocidad salvaje de los infieles, en los cicales Marimari, Majari, Cacclumi y Tunguipata.⁵⁹⁵

Esta presencia peruana se hacía más precisa en la medida que esta era una región que se encontraba en disputa con Bolivia, por la que el mismo presidente del país altiplánico, José María Pando, había manifestado interés, enviando una expedición científica y militar a la cuenca del Inambari en 1897.⁵⁹⁶ Por otro lado, la motivación inmediata de Estrada se encontraba en el ataque que el 3 de agosto de ese mismo año sufrió su explotación de Chilimayo, en el distrito de Ayapata. Por tal razón, solicitaba al Gobierno le otorgara permiso para hacer uso de entre 25 a 50 armas de fuego, con el exclusivo objeto de defender «nuestras propiedades y vidas, armando á nuestros colonos.» El Gobierno aceptó la petición de Estrada, aunque solo le autorizó el empleo de ocho armas de guerra, ordenándole al Prefecto de Puno entregar dicho material.⁵⁹⁷

Otro ejemplo, en ese sentido, lo encontramos en la petición que hizo al Gobierno el ciudadano alemán Bruno Lau, comerciante residente en Lima. Lau solicitó, el 10 de mayo de 1897, la introducción de un rifle y una carabina Mauser con 1500 cartuchos que emplearía para la protección de una propiedad de cien hectáreas, ubicada en el valle de Marcapata, provincia de Quipiscanchi (departamento de Cuzco).⁵⁹⁸ Similares solicitudes se hacían para las regiones de montaña de las provincias de Puno. El 12 de abril de 1897, el sindicato de minas de Oro Sandia-Carabaya solicitó la autorización de empleo de cuatro carabinas, con su respectiva dotación de municiones, para emprender un viaje de exploración a la provincia de Carabaya bajo la dirección del coronel José M. Pereira y del ingeniero Antenor

⁵⁹⁵ AGN, MI, Paquete 64, Particulares, “Solicitud de Manuel María Estrada, vecino, cocalero, propietario y minero de la Provincia de Carabaya”, del 12 de agosto de 1899.

⁵⁹⁶ Distintas informaciones provenientes del departamento de Puno alertaron de la expedición de Pando en las zonas selváticas indeterminadas entre ambos países. Oficios de los distritos de Sandia, así como del Subprefecto de dicha provincia dieron cuenta al Gobierno sobre estas exploraciones. AGN, MI, Paquete 46, Prefecturas, Puno, “Copia certificada de los oficios del Subprefecto de Sandia al Prefecto de Puno”, del 23, 30 de mayo y 4 de julio de 1897; y “Oficio del Subprefecto de Chuchito al Prefecto de Puno”, del 15 de mayo de 1897.

⁵⁹⁷ AGN, MI, Paquete 64, Particulares, “Resolución del Ministerio de Gobierno y Policía”, del 25 de agosto de 1899.

⁵⁹⁸ AGN, MI, Paquete 49, Particulares, “Solicitud que presenta a V.E. Manuel Pérez en representación de Bruno Lau”, del 10 de mayo de 1897.

Rico.⁵⁹⁹ Asimismo, el 26 de octubre de 1899, el prefecto de Arequipa, Isaac Recavarren, otorgó una licencia a la casa comercial de José María Peña y Compañía, para llevar de la ciudad de Arequipa seis armas de diferentes sistemas e internarlas en las provincias de Puno, Huancané y Sandia, donde la compañía poseía explotaciones de caucho. Según el Prefecto, se había expedido la autorización «para que tengan como defenderse de probables irrupciones de salvajes de la montaña, i porque los solicitantes prestan toda suerte de garantías.»⁶⁰⁰

Pero la entrega de armas a civiles no solo se hizo por consideraciones de la defensa de la propiedad en las tierras amazónicas, también el Gobierno las otorgó a civiles en las zonas de regular dominio del Estado, pero las circunstancias eran bien distintas. A pesar de que la política de recojo de armamento buscaba el desarme de la población civil, en varias ocasiones, las autoridades locales y las expediciones militares que se enviaron desde Lima a combatir los intentos revolucionarios en otros departamentos armaron a la población civil para apoyar a las fuerzas policiales y militares del Gobierno, sustentando tal medida en la insuficiencia de efectivos. Así, en diversas acciones armadas de consideración dirigidas a la persecución y desarme de los montoneros rebeldes, se organizaron columnas compuestas de civiles y contramontoneros, entregándoles armamento de guerra. Resultaba evidente que se otorgaba armamento a los actores locales partidarios del régimen de Piérola para afianzar su Gobierno. Para mostrar ello, veamos algunos de los muchos casos. Por ejemplo, en el departamento de Huancavelica, el Subprefecto de Tayacaja tuvo que armar entre ocho y diez ciudadanos por tener pocos hombres a su disposición, mientras existiera la amenaza de que aún merodiaran por el lugar algunas partidas sueltas de las que habían intentado tomar la ciudad de Huancavelica en setiembre de 1899.⁶⁰¹

Ese mismo año, el Subprefecto de Hualgayoc, ante el peligro de la invasión de la montonera de Agustín Verástegui, alistó una columna por los «jóvenes de la ciudad», con la cual logró repeler el ataque, obligando a los agresores a marchar

⁵⁹⁹ AGN, MI, Paquete 49, Particulares, “Solicitud que presente G. de Menchada, en representación del Sindicato de minas de Sandia”, del 12 de abril de 1897.

⁶⁰⁰ AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno, “Informe del Prefecto de Arequipa Isaac Recavarren al Director de Gobierno”, del 14 de diciembre de 1899.

⁶⁰¹ AGN, MI, Paquete 60, Prefectura de Huancavelica, “Oficio del Subprefecto de Tayacaja al Prefecto de Huancavelica”, del 24 de setiembre de 1899.

hacia Bambamarca.⁶⁰² Otra columna se organizó también en 1899, en el departamento de Ancash, ante la presencia de las montoneras de Augusto Durand y otros grupos armados. El prefecto Luis Bernal levó una columna compuesta por los empleados de la Prefectura, confiriéndole al oficial archivero y de partes, Daniel Estrada, el grado de teniente, quien estuvo auxiliado por Zeferino Moncada (oficial auxiliar de la secretaría) y Pedro Grimaldo (amanuense).⁶⁰³ La columna se compuso además por catorce jóvenes civiles del departamento y fue enviada a recorrer la provincia de Cajatambo para perseguir a la montonera de Toribio Garro, hombre al que se le había conferido el cargo de primer jefe y comandante de Cajatambo por las fuerzas insurgentes. En su trayecto, la columna se aumentó con seis hombres voluntarios de los «pueblos vecinos», con la autorización del Subprefecto⁶⁰⁴. La columna tuvo éxito contra la montonera de Garro, sin embargo, el Subprefecto de Cajatambo denunció que los combatientes civiles se apropiaron de las armas y bestias de los montoneros, «aquellos jóvenes enviados á mi disposición para conservar el orden se convirtieron en verdaderos negociantes»⁶⁰⁵. Ello se confirmaba por lo que escribía el mismo Estrada al Prefecto, indicándole que los objetos requisados y no reclamados por particulares habían sido considerados «como botín de guerra», el cual había servido para otorgar «pequeñas gratificaciones» a los miembros de la columna y a los que se adicionaron a ella.⁶⁰⁶

Respecto a las contramontoneras, se formaron algunas en la expedición del coronel Parra para la persecución de los líderes guerrilleros de Huanta. Aprovechando las desavenencias entre las comunidades de Luricocha con los iquichanos rebeldes, Parra formó una contramontonera de luricochanos, considerándola útil, pues estaban «resueltos á sacudirse de la presión en que habian vivido, [por lo que] expedicionarían á mis órdenes i como conocedores del país, facilitarían la

⁶⁰² AGN, MI, Paquete 64, Subprefecturas, “Oficio del Subprefecto de Hualgayoc al Ministerio de Gobierno y Policía”, del 20 de diciembre de 1899.

⁶⁰³ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ancash, “Oficio del Prefecto de Ancash al Director de Gobierno”, del 9 de noviembre de 1899.

⁶⁰⁴ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ancash, “Oficio del Comandante de la Columna Vanguardia, Daniel Estrada, al Prefecto de Ancash”, del 21 de octubre de 1899.

⁶⁰⁵ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ancash, “Oficio del Subprefecto de Cajatambo Alejandro Lavado, al Prefecto de Ancash”, del 4 de noviembre de 1899.

⁶⁰⁶ AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Ancash, “Oficio del Comandante de la Columna Vanguardia, Daniel Estrada, al Prefecto de Ancash”, del 7 de noviembre de 1899.

captura de los Comandantes i principales sediciosos».⁶⁰⁷ Algo similar se produjo en el departamento de Lambayeque, en 1897, cuando el Prefecto se valió del grupo armado del bandolero Ñaña, para perseguir a la montonera organizada por los hermanos Grimaldo y Belisario Villar. El Prefecto redactó un informe, donde señaló que había enganchado a un grupo de civiles por la insuficiencia de hombres que tenía a su disposición; sin embargo, algunas denuncias indicaban que entre aquellos enganchados se encontraba el «célebre bandolero [Ñaña] con las partidas de foragidos capitaneados por estos y pagados para cooperar á la persecución y exterminio de los que pretendían alterar el orden público.»⁶⁰⁸ Dos años más tarde, el nuevo Prefecto organizó otra contramontonera comandada por Leopoldo Pacheco, la cual estuvo subordinada a las fuerzas del Departamento para perseguir y neutralizar las montoneras provenientes de la provincia cajamarquina de Chota.⁶⁰⁹

La formación de las contramontoneras o su tolerancia implicaba una contradicción misma con la política de recojo de armamento militar, empero, esta no puede ser vista sino como una medida circunstancial o táctica, realizada en virtud de la condiciones que amenazaban al gobierno de Piérola. Para su supervivencia, podían romper las reglas, permitiendo la posesión de armas de guerra a hombres aliados, no obstante, como mostraban los casos en otras provincias, como las de Apurímac, que nos referimos líneas arriba, una vez concluida la situación de inseguridad las armas fueron exigidas por las autoridades gubernamentales bajo el temor que fueran aliciente de movimientos rebeldes futuros.

7.5. Continuación de la política de desarme de la población civil

El gobierno de Piérola culminó en medio de un proyecto revolucionario acaudillado por Augusto Durand, desde Huánuco, y Emilio Vizcarra, desde Loreto y Amazonas,

⁶⁰⁷ CEHMP, Documentos donados al CEHMP por el R. P. Rubén Vargas Ugarte, Legajo N.º 8, “Memorandum de la Pacificación de las Provincia de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno”, fol 23.

⁶⁰⁸ AGN, MI, Particulares 49, Solicitud de Marcelino Carrera, Sargento Mayor del Ejército indefinido al Presidente”, del 6 de julio de 1897; e “Informe que remite el Prefecto del Departamento de Lambayeque con motivo de la solicitud de Don Marcelino J. Carrera sobre los sucesos de el ‘Guayabo’”, Chiclayo, 23 de setiembre de 1897.

⁶⁰⁹ AGN, MI, Paquete 61, Prefectura de Lambayeque, “Oficio del Prefecto de Lambayeque al Director de Gobierno”, del 10 de octubre de 1899.

movimiento en el que se encontraban involucrados el general Andrés A. Cáceres y Guillermo Billinghurst. Ante este acto político, los esfuerzos del gobierno de Piérola por controlar los intentos revolucionarios requisando el armamento de guerra mostraron sus límites y su carácter de proceso inacabado. Antes que nada, su Gobierno marcó el inicio de esta política de Estado que buscaba la pacificación de la vida política a través del desarme de la población civil. Proseguir dicho lineamiento resultaba ser la tarea de su sucesor, Eduardo López de Romaña, quien era representante de la coalición dominante. El nuevo Gobierno, aunque iniciaba su mandato poco auspiciosamente, logró acorralar y derrotar a las montoneras rebeldes entre fines de 1899 y principios del año siguiente. En los primeros meses del año 1900 se logró la derrota de la montonera del coronel Emilio Vizcarra, militar que había ejercido la prefectura de Loreto hasta su sublevación en mayo de 1899. Habiéndose aliado a Cáceres y Durand, Vizcarra estuvo amenazando a la coalición gobernante desde las zonas boscosas de los departamentos de Loreto y Amazonas, hasta que encontró su muerte en manos de la población de la región.⁶¹⁰

Desde Huánuco, Augusto Durand y sus montoneros iniciaron una fallida campaña que lo llevó a Ancash con el objeto de reunirse con las fuerzas de Vizcarra en el norte. Las fuerzas del Gobierno terminaron cercando y disminuyendo a la de Durand, obligándolo a internarse nuevamente en las tierras huanuqueñas.⁶¹¹ Ya otras partidas vinculadas a Cáceres habían sido derrotadas antes del término del mandato de Piérola, como la del clan Lizares, en Azángaro, y la de Octavio Negrete, en Arequipa. Ante la imposibilidad de obtener victoria, el caudillo de la Breña desistió en su apoyo al proyecto revolucionario, no sin antes negociar la rendición con el nuevo gobernante, lo que en la práctica ponía punto final a las hostilidades de los seguidores de su partido.⁶¹²

⁶¹⁰ Para observar los movimientos de Vizcarra en las selvas de Iquitos y Amazonas, entre 1899 y 1900, se puede consultar AGN, MI, Paquete 59, Amazonas; y AGN, MI, Paquete 66, Amazonas.

⁶¹¹ Sobre la derrota de las fuerzas de Lizares en Azángaro existe una abundante información en AGN, MI, Paquete 61, Prefecturas, Puno. Sobre la montonera de Octavio Negrete, se puede consultar los varios oficios e informes de las acciones armadas en la provincia de Camaná (AGN, MI, Paquete 59, Prefecturas, Arequipa).

⁶¹² En *El Comercio* se publicó un manifiesto del general Cáceres desistiendo de sus planes revolucionarios; según sus propias palabras: «Al retirarme de la actual lucha política, téngase por bien entendido, que no es el resultado de pactos celebrados ni de propuesta alguna aceptada, sino de una observación cariñosa sobre mi patria, que empiezo á ver anarquizada por una revolución á la que yo por mi parte ni otro alguno, hemos podido imprimir rumbos que satisfagan ó que compensen al país el sacrificio que se le impone. Esta declaración, que entraña casi confesión de delito, la hago en ofrenda nacional desde el seno de las provincias cautivas, que me recibieron en entusiasta actitud, no

A pesar de esta rendición, la presencia de las montoneras movilizadas demostraba la necesidad de continuar la política de recojo de armamento de guerra por el nuevo Gobierno. Correspondía, en primer lugar, perseguir y desarmar las montoneras que habían quedado dispersas en varios departamentos. Hasta principios de 1900, las autoridades regionales daban cuenta de la captura, muerte y desarme de varios montoneros aún activos que se dedicaban al pillaje. Por ejemplo, la montonera de Agustín Verástegui venía realizando correrías desde 1898, en varias provincias de Cajamarca; finalmente, sus hombres fueron derrotados a fines de diciembre de 1899, encontrando su líder la muerte a manos de las fuerzas del Gobierno. En la acción de armas murieron otros jefes de la montonera y hubo varios prisioneros, quedando este grupo totalmente desarticulado, pues «[s]e les ha tomado la caballada, gran cantidad de armas y todo el parque.»⁶¹³ De manera similar, la montonera de Cleto Hoyos y Francisco Reaño fue batida en la provincia de Contumazá, el 9 de enero, por hombres destacados desde Otuzco en combinación con las fuerzas del Subprefecto de Contumazá.⁶¹⁴ También en el departamento de Amazonas, en abril de 1900, se derrotó una partida de 60 hombres de una montonera que asolaba las inmediaciones de Molinopampa, mientras que un mes antes se había iniciado el juicio militar contra los líderes de una montonera que se había formado en Ocalli, en diciembre de 1899, los cuales se encontraban presos.⁶¹⁵

Por su parte, las autoridades de Huánuco no dejaron de vigilar e informar sobre los movimientos de Augusto Durand y sus allegados. En marzo de 1900 se envió una comisión a la hacienda Ayanacocha, lugar donde, según información, algunos montoneros del caudillo habían escondido armas, municiones y prendas militares. Cuando se llevó a cabo la diligencia, se tuvo noticia que las prendas militares habían sido trasladadas a la hacienda Pitumama, de propiedad de Gregorio Durand. Por tales hechos, el Prefecto impuso una multa de cien soles a los dueños de Ayanacocha, al

olvidando sin duda los esfuerzos del soldado que supo cumplir su deber en la época luctuosa de la guerra. Andrés A. Cáceres» (*El Comercio*. Lima, 7 de octubre de 1899, edición de la mañana). En correspondencia con esta decisión, López de Romaña impulsó una Ley de Amnistía contra los revolucionarios de 1899, lo que les eximió de ser juzgados por el fuero militar.

⁶¹³ AGN, MI, Paquete 66, Prefecturas, Cajamarca, “Boletín Oficial”, Cajamarca, 3 de enero de 1900.

⁶¹⁴ AGN, MI, Paquete 66, Prefecturas, Cajamarca, “Oficio del Prefecto de Cajamarca al Director de Gobierno”, del 16 de enero de 1900.

⁶¹⁵ AGN, MI, Paquete 66, Prefecturas, Amazonas, “Oficios del Prefecto de Amazonas al Director de Gobierno”, del 2 de marzo y 2 de mayo de 1900; y AGN, MI, Paquete 59, “Oficio del Prefecto de Amazonas al Director de Gobierno”, del 22 de diciembre de 1899.

tiempo que solicitaba autorización para «presionar» a Gregorio Durand, en Pitumama, y Augusto Durand, en la hacienda de San Carlos, con «las fuerzas necesarias» hasta que entregasen las armas y municiones que poseían.⁶¹⁶ Esta solicitud se encontraba plenamente fundada, pues ese mismo año el Prefecto informó sobre las actividades sospechosas de una serie de personas vinculadas políticamente a Durand, encabezadas por los senadores y diputados de Huánuco. Los mantenía en vigilancia a pesar de que «sus secuaces hacen propaganda reservada al respecto» y porque existía en el departamento la «voz general que Durand conspirará siempre».⁶¹⁷

Desde el segundo semestre de 1899 y en los años siguientes, nuevos bandos fueron publicados por las autoridades departamentales y provinciales, ordenando la entrega voluntaria de armas de guerra, otorgando recompensas e imponiendo penas a sus contraventores. El desarme de la población civil implicaba una reiterada presión sobre los poseedores de dicho armamento. En el contexto de la derrota de las montoneras rebeldes, para el año 1900 algunos departamentos como La Libertad y Moquegua ya podían hacer nuevas remisiones importantes de armas de guerra, enviando el primer departamento «noventa armas de diferentes sistemas recogidas», mientras que el segundo, «diez i siete armas de [varios] sistemas.»⁶¹⁸

Para 1902, las memorias de los prefectos mostraban que los avances en el recojo de armamento eran un tópico exigido por el Gobierno en los informes oficiales de dichas autoridades. Dentro del esquema del documento se incluía un acápite especial para «recojo de armas», en donde se informaba las medidas tomadas y la cantidad de material recogido. Así, el Prefecto de Ica informaba que había recogido de la población civil «47 armas de diferentes sistemas», en 1901, mientras que para el año siguiente manifestó que no había podido obtener sino solo cinco armas del Estado, tomadas dos de algunos asaltantes de Pisco y tres de particulares.⁶¹⁹ Por esas mismas fechas, el Prefecto de Ayacucho consignaba haber

⁶¹⁶ AGN, MI, Paquete 67, Prefecturas, Huánuco, “Oficio del Prefecto de Huánuco al Director de Gobierno”, del 8 de marzo de 1900.

⁶¹⁷ AGN, MI, Paquete 67, Prefecturas, Huánuco, “Oficio del Prefecto de Huánuco al Director de Gobierno”, del 11 de octubre de 1900.

⁶¹⁸ AGN, MI, Paquete 68, Prefecturas, La Libertad, “Oficio del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno, de 23 de febrero de 1900; y AGN, MI, Paquete 68, Prefecturas, Moquegua, “Oficio del Prefecto de Moquegua al Director de Gobierno”, del 17 de febrero de 1900.

⁶¹⁹ Ministerio de Gobierno y Policía, “Memoria del Prefecto de Ica Manuel Luna”, del 30 de mayo de 1902, p. 46.

remitido al Gobierno «once rifles y cuatro carabinas de precisión teniendo en depósito nueve, recogidas todas en poder de particulares».⁶²⁰ Otros departamentos, aunque no reportaban noticias sobre el recojo de armamento militar, sí informaban sobre las medidas que habían verificado para la captura de bandoleros locales, como lo hicieron los prefectos de Piura y Lambayeque en sus respectivas memorias.⁶²¹

Ese mismo año, en el departamento de Junín, las aguerridas comunidades de Jauja y Pariahuanca fueron finalmente desarmadas después de casi treinta años de resistencia a la autoridad del Estado, siendo obligadas a la entrega de fundos y animales tomados durante la Guerra del Pacífico de propietarios colaboracionistas, como informó el Ministro de Gobierno: «Algunos de los instigadores de aquella situación, se han sometido á la obediencia del Gobierno, otros han entregado sus armas, los propietarios despojados han vuelto á la posesión de sus fundos» (Ministerio de Gobierno y Policía 1902: 7, Manrique 1988: 68-70). El desarme final de las otrora reacias comunidades en el centro del país era sintomático de la mayor fortaleza con la que el Estado podía ejercer autoridad sobre su población después de siete años de implementación de la política de recojo de armas de guerra.

Su ejecución, sostenida al tanto que se realizaban reformas que hacían del Ejército una institución subordinada al orden oligárquico, terminó por orientar el balance de poder entre el Estado y su población crecientemente en favor del primero, dejando consecuentemente con cada vez menos recursos a los actores sociales para defenderse o a atacar a los gobiernos. El intento revolucionario que encabezaron Augusto Durand y Felipe Santiago Oré contra el gobierno de Augusto B. Leguía, en 1908, nació abortado desde el principio, a pesar de contar con el apoyo de algunos líderes del Partido Demócrata. No obtuvo la adherencia de la población del centro del país, en tanto que sus notables y otros actores sociales disponían de menos medios para desafiar exitosamente a las fuerzas del Estado, especialmente a un Ejército crecientemente profesionalizado. Con el inicio del nuevo siglo, no volvió a ser victorioso ningún proyecto político sostenido sobre alianzas clientelares y la

⁶²⁰ Ministerio de Gobierno y Policía, “Memoria del Prefecto de Ayacucho J. Álvarez Páez”, del 5 de junio de 1902, p. 31.

⁶²¹ Ministerio de Gobierno y Policía, “Memoria del Prefecto de Lambayeque”, p. 34; y Ministerio de Gobierno y Policía, “Memoria del Prefecto de Piura, Pedro E. Muñiz”, p. 14.

movilización militar de la población civil como tantos habían llevado al sillón presidencial a caudillos en el siglo anterior.

CONCLUSIONES

1. La modernización del Ejército peruano, que se inició durante el gobierno de Nicolás de Piérola, otorgó al Estado peruano los suficientes medios para aumentar sus capacidades de ejercicio de autoridad sobre los diferentes actores sociales que, en el siglo XIX, la habían cuestionado. La reforma implementada tendió a concentrar funciones, competencias y poderes (nombramiento e instrucción de oficiales, capacidad de castigo de tropas, capacidad de alistamiento militar de tropas) y recursos materiales (armamento de guerra) y simbólicos (goce de grados militares) ligadas al mundo castrense, pero que se encontraban dispersas en diferentes actores sociales. A través de su retención, estos actores habían podido ejercer diferentes niveles de coerción participando clientelaramente en las guerras civiles que habían dirimido el acceso al poder hasta fines del siglo XIX. Esta concentración de la coerción se expresó en una creciente burocratización de tres ámbitos de la institución militar (la asimilación y formación del cuerpo de oficiales, la administración de la justicia militar y la organización de la conscripción militar) y en una política sostenida de recojo de armamento militar.
2. El gobierno de Piérola inicia una política de control sobre la incorporación de oficiales al Ejército peruano. Los objetivos de esta política estuvieron dirigidos a regular los mecanismos de acceso a la carrera de las armas, desconociéndose los métodos de ingreso por criterios sociales como el de «soldado distinguido» y los originados por lealtades políticas en acciones revolucionarias. La creación de la Escuela Militar Preparatoria y Naval y la Escuela Militar de Aplicación sentarían las bases de lo que en el futuro sería la Escuela Militar de Chorrillos, convirtiéndose en los filtros especializados del Estado por los cuales, en adelante, los jóvenes civiles debían obligatoriamente cursar para convertirse en oficiales del Ejército. En ese sentido, la existencia de estas entidades educativas indicaban la posición del Estado de regular aquel acceso que había sido prerrogativa privatizada por los jefes de cuerpo y los caudillos militares gobernantes.

3. Los procesos de formación e instrucción profesional también pasaron a ser regulados por las escuelas militares. En esta tarea, el gobierno de Piérola y sus sucesores dejaron entera libertad a los miembros de la Misión Militar Francesa para instruir a los cadetes peruanos. Los procedimientos de aprendizaje en los cuarteles o en el campo de batalla bajo la tutela de los jefes superiores del cuerpo terminaron siendo desechados, empleándose la modalidad escolarizada e impersonal, ya ensayada en otros gobiernos (Castilla, Pardo y Cáceres). En sus aulas, los oficiales de la Misión instruyeron en tácticas francesas, pero sobre todo dieron a la guerra el nivel riguroso de ciencia. En consonancia, inculcaron en sus ejecutantes un modelo ético-profesional de responsabilidad, laboriosidad, conocimiento y competencia como orientador del nuevo oficial, arquetipo que no solo debía adquirirse en las aulas, sino también en ejercicios de cualificación profesional como el viaje del Estado Mayor General, en 1902. No siendo los modelos discursivos éticos suficientes, en las escuelas regentadas por los franceses se aplicaron técnicas de disciplinamiento para los cadetes (someterlos a pequeñas coerciones a fin de militarizarlos e interiorizar en ellos hábitos de obediencia jerárquica y sumisión a la institución). Tanto el discurso ético profesional, como la disciplina marcial debían redundar en generar en los nuevos oficiales actitudes favorables de obediencia al Estado y a sus gobernantes civiles, aminorando los apetitos políticos que habían lanzado a los caudillos a incontables guerras civiles. El nuevo oficial peruano debía únicamente contraerse a los fines de su institución.
4. El Código de Justicia Militar de 1898 estableció un sistema jurisdiccional uniforme, burocrático y autónomo de la función de los jefes militares. En primer lugar, esta Ley implicó la uniformización de las normas por las que se penalizaba los crímenes de carácter militar. Habiéndose heredado las antiguas Ordenanzas Militares de Carlos III, que reconocían el fuero militar y facultaban una penalidad física e infamante, las normas republicanas durante el siglo XIX las modificaron parcialmente, estableciendo un conjunto de disposiciones contradictorias que restaban eficacia en la prescripción de los delitos y sus castigos. Al establecerse una única norma para penalizar los delitos militares, sus disposiciones resultaban armónicas entre sí. En segundo lugar, la justicia militar fue separada de las atribuciones de los jefes de cuerpo, es decir, estos dejaron de

ser jueces de sus soldados. Se creó un sistema de jueces, impersonal e independiente de la relación de autoridad entre las tropas y el comandante militar. Aunque el sistema fue diseñado para que funcionara en todo el país, lo cierto fue que solo en Lima se reunieron concejos de justicia militar, derivándose en esos tribunales los procesos instruidos en cada uno de los departamentos. Ello reducía, sin duda, la agilidad de la aplicación de la justicia –uno de sus supuestos–. En tercer lugar, este sistema restó la capacidad de castigo de los comandantes de tropa, disminuyendo el poder personal que podían ejercer sobre sus subordinados. Considerado el poder de castigo (que pasaba por el flagelamiento, el cepo o el fusilamiento) como una de las fuentes por la cuales los jefes militares habían obtenido la obediencia pasiva de los soldados, la eliminación de esta función les restaba también su capacidad de movilizarlos políticamente.

5. La justicia militar también tuvo una orientación hacia afuera de la institución castrense. La ampliación de su jurisdicción hacia delitos políticos y de carácter civil con trascendencia política para inscribirlos en el fuero militar fue una clara propuesta de perseguir a los enemigos de la coalición gobernante a través de los jueces militares. El diseño del sistema contenía una serie de «cerrojos» que llegaba hasta la instancia suprema (Concejo Supremo de Justicia Militar, CSJM) y aseguraba que los perseguidos políticos terminasen siendo juzgados en este fuero especial. Perseguir a quienes buscaran cuestionar el poder de los gobiernos establecidos y a los grupos montoneros, que movilizados podían ser las huestes de nuevos proyectos revolucionarios, era parte del propósito de esta nueva norma. Asimismo, el Código de 1898 otorgó a todo representante de la fuerza del Gobierno (del Ejército o de las Fuerzas Policiales) una protección legal, penalizando cualquier ataque a la fuerza armada. Como mostraron las estadísticas y las memorias del CSJM, estas disposiciones estaban dirigidas a fortalecer en la población (especialmente de los sectores populares) la imagen de unas reducidas fuerzas conteniendo sus ataques bajo el temor de ser encausados militarmente.
6. A pesar de las resistencias de varios sectores de la opinión pública se instituyó el servicio militar obligatorio. El establecimiento de esta institución logró

modificar las formas por las cuales se incorporaban soldados al Ejército. Alejando las tareas de conscripción de los propios jefes militares, se entregó estas tareas a una serie de funcionarios y autoridades civiles y militares que, vigiladas desde el Estado Mayor General, representaron a un Estado que se convirtió por Ley y en la práctica en la única con capacidad de levantar tropas. La conscripción, a pesar de ser ejecutada por un sinnúmero de autoridades, fue encargada y dirigida centralmente por el Estado Mayor General, órgano técnico del Estado destinado para esta función. En ese sentido, sin la función de los jefes militares de aumentar o mantener el número de sus tropas, la leva –el reclutamiento– quedó proscrita. Asimismo, desterradas las luchas políticas que arrastraban ejércitos al combate, la derivación parcial, momentánea y negociada de jóvenes para empuñar las armas se hizo inoperante. Amparado en una burocracia civil y militar, las negociaciones con las comunidades rurales y los hacendados por soldados se hicieron inútiles, posibilitando al Estado incorporar de manera regular y predecible a individuos (y no grupos) al Ejército.

7. Aunque el sistema cambiase, afectando a los que particularmente se beneficiaban de la conscripción (comunidades rurales, hacendados, entre otros), no supuso el funcionamiento ideal de la institución del servicio militar. Por un lado, la ausencia de prácticas y valores ciudadanos imposibilitaron, las más de las veces, el cumplimiento voluntario del deber que constituía el servicio militar. Las comunidades rurales (especialmente, las indígenas) y los hacendados fueron reticentes a entregar sus hombres jóvenes al Ejército. En el caso de los hacendados, su resistencia planteaba problemas difíciles de solucionar, dada la posición social de aquellos; por su parte, las comunidades rurales fueron también renuentes a entregar sus jóvenes, tratando de esquivar su registro o eludiendo de diferentes maneras su presentación a las Juntas Conscriptoras. Las limitaciones organizativas del Estado peruano (su reducida cantidad de fuerzas coercitivas), aunado a la dispersión de una población rural, hacían difícil el cumplimiento de la norma, lo que llevó a recurrir considerablemente al empleo de la pena de omiso para cubrir las altas no obtenidas voluntariamente. Esto último no debe llevar a pensar que el incumplimiento del deber del servicio fuera excepcional en los «ciudadanos» peruanos; en España, por ejemplo, en donde existía un Estado más consolidado que en el Perú, por esas mismas fechas existían similares

resistencias, especialmente en provincias, desarrollándose también mecanismos individuales o colectivos para eludir una prestación que fue considerada como un impuesto de sangre o una carga, antes que un deber ciudadano (Cfr. Molina 1996: cap. 3).

8. El servicio militar obligatorio siguió recayendo en los indígenas y en los sectores menos favorecidos de la población. El principio igualitario y universal sobre el que se basaba esta norma fue abdicado desde un inicio por la élite gobernante, estableciéndose la prima militar para exonerar del servicio activo a los hijos de las familias acomodadas. Para los políticos peruanos, un derecho universal podía cumplirse de una manera desigual entre los ciudadanos, en tanto ellos eran considerados también desiguales; las personas ricas podían cumplirlo con dinero. Mientras los indígenas entraban a las filas del Ejército, desde la élite política se consideró una forma de incorporarlos al mercado y a la ciudadanía a través de su instrucción civil en el Ejército, la famosa civilización de los indios que la historiografía considera como una propuesta que vino con los miembros de la Misión Militar Francesa (Cfr. Bullick 1999, Masterson 2001, Toche 2008), pero que, no obstante, ya era un consenso en la élite civil y militar casi una década antes. Esta instrucción civil fue limitada en tanto que la militarización de la población lo fue también. No más de treinta mil hombres tomaron las armas en una población masculina que superaba el millón y medio de habitantes.

9. Por su parte, la política de recojo de armamento guerra fue una táctica iniciada también en el gobierno de Piérola para reducir los medios de ejercicio de la coerción por parte de los actores sociales que los poseyeran. El armamento de guerra, más que cualquier otro medio de violencia, resultaba un elemento necesario a fines de siglo para alimentar las dinámicas por la conquista del poder. Su concentración en la institución castrense, como guardián del mismo, supuso la concentración del armamento por el Estado, convirtiéndose en su único titular. Aunque la medida tuvo un carácter nacional durante el segundo gobierno de Piérola, ella se mostró insuficiente para desmovilizar a los actores desafectos al régimen, lanzándose estos a más de un combate por derrocarlo. Los límites de aquella medida estuvieron nuevamente en función de las restringidas capacidades de vigilancia y coerción del Estado peruano a fines del siglo XIX y

los intereses políticos inmediatos del Gobierno, permitiendo coyunturalmente la posesión de este armamento a los aliados del régimen. Es por ello que la política de recojo de armamento de guerra se siguió implementando durante el gobierno de Eduardo López de Romaña.

10. Estas cuatro reformas condujeron a la concentración de medios administrativos y recursos materiales y simbólicos por los que se ejercía la violencia y que eran reclamados teóricamente por el Estado, afectando a los actores que habían dispuesto de una cuota de ellos durante el siglo XIX. Los primeros afectados fueron los jefes militares como individuos. Al constituirse mecanismos formales e impersonales para la incorporación de oficiales, los caudillos militares y los jefes de cuerpo perdieron la capacidad para controlar el ingreso a sus fuerzas y las lealtades que venían aparejadas. En segundo lugar, sin ser *maestros* directos de los nuevos cadetes (la educación se había escolarizado), los jefes de cuerpo perdían una autoridad omnímoda sobre aquellos en su periodo de adiestramiento. En tercer lugar, la burocratización de la justicia castrense reguló impersonalmente la obediencia y lealtad de los soldados a los comandantes de tropa, rompiendo la subordinación nacida del castigo, al mismo tiempo que otorgó a la élite civil gobernante los mecanismos penales suficientes para controlar a los jefes de cuerpo. Este sistema judicial otorgaba al Presidente de la República diferentes «cerrojos» para encausar marcialmente a los jefes militares que pudieran resultar peligrosos.
11. Como queda dicho, parte de algunas de estas reformas se orientaron a debilitar a los actores civiles que en alianzas con los militares habían retado y vencido al Estado. En primer lugar, la política de recojo de armamento de guerra y la persecución judicial de civiles rebeldes, montoneros o simples bandoleros tuvieron una orientación contraria a cualquier iniciativa política que empleara la guerra para acceder al poder. Era una justicia militar con un fuerte control del Ejecutivo que podía encausar incluso a altas autoridades públicas, como parlamentarios y autoridades eclesiásticas. Con menos armas de guerra para atacar o defenderse, penalizados militarmente los ataques a las fuerzas del Estado y perseguidos en ese mismo fuero los que pudieran configurar un acto de desacato a la fuerza que representaran al Gobierno, el Estado peruano podía

ejercer asimétricamente su autoridad sobre los diversos grupos sociales, aún más si se considera que aquel estaba transformando al Ejército en una organización más compacta, leal y profesional y única poseedora de las armas más mortíferas.

12. Una población sin armas pocos soldados podía ofrecer a cualquier ejército sea revolucionario o del gobierno. El reformado ejército peruano prescindió de esta forma de constitución de contingentes armados con la Ley del Servicio Militar Obligatorio. La burocratización de la conscripción obvió la necesidad de recurrir a las anteriores fuentes de soldados: las haciendas y las comunidades rurales. Los hacendados, sin oportunidad de ofrecer hombres al Ejército, veían cerrada su capacidad de añadir a su poder social el rango militar y la oportunidad de participar en las guerras civiles a cambio de favores políticos. Las comunidades rurales –especialmente, las indígenas– perdían la oportunidad de negociar beneficios y lealtades con un Estado que demandaría obediencia a sus mandatos y la entrega individual, y sin compensación tangible, de hombres.

13. Este proceso de modernización de las Fuerzas Armadas peruanas no fue exclusivo del Perú. En América Latina, la consolidación de oligarquías agroexportadoras, a fines del siglo XIX y principios del XX, llevó a otros países de la región a reformar sus respectivos ejércitos. Utilizando el título de una obra de Natalio Botana, estas oligarquías construyeron un «orden conservador»⁶²², una modernización dirigida por un Estado central orientado a contener las autonomías regionales y subordinar a los sectores populares, en donde el Ejército juega como garante del orden interno (Cfr. Rouquié 1984, Atehortúa 2009)⁶²³. Estos proyectos pueden ser vistos como las variantes de construcción de la organización estatal en Latinoamérica de los procesos de larga duración que permitieron la construcción del Estado moderno en Europa, a saber: una autoridad política que termina concentrando los mecanismos y recursos materiales y simbólicos para el ejercicio de la coerción, de tal manera que es la única que

⁶²²Empleamos el título del libro de Natalio Botana (1985) para describir el proceso de ascenso de las oligarquías sudamericanas en el tránsito del siglo XIX al XX.

⁶²³ Resulta sumamente interesante comparar la reforma que inicia Piérola, en 1895, con la ejecutada en Colombia por el presidente Rafael Reyes. Tanto los fines (acabar con las guerras civiles y proteger al país de amenazas extranjeras), como los medios (contratación de asesores extranjeros, regulación de la carrera militar y la reforma de la escuela de oficiales, así como el recojo del armamento de guerra, están presentes en las reformas de ambos países (Cfr. Atehortúa 2009: cap. 1).

puede ejercer la violencia sobre un territorio y una población que reclama como suya. Respaldados por la riqueza generada por el sistema capitalista y excedentes extraídos de otras partes del mundo, los Estados europeos lograron subordinar, a lo largo de tres siglos, a la nobleza terrateniente, los poderosos regionales, las oligarquías urbanas y los campesinos. Este proceso fue en parte negociación, pero en gran parte el establecimiento de una relación de asimetría entre los ejércitos de los reyes y príncipes europeos y las capacidades de cuestionar su autoridad por parte de los actores sociales rivales (Cfr. Tilly 1992, Dandeker 1990).

14. El Perú de principios de siglo XX logró, con la reforma del Ejército iniciada por Nicolás de Piérola, la suficiente concentración de medios y recursos de coerción para erigir un Estado central lo suficientemente poderoso para evitar su desestabilización por medio de una guerra civil coordinada por unos actores, ahora ya menos beligerantes. En virtud del nuevo Ejército, no fue el Estado peruano de inicios de aquel siglo un agente que podía arrogarse el monopolio de la violencia –el poder de los hacendados en el campo seguía siendo, y lo será todavía por mucho tiempo, la ley en los vastos espacios rurales–, sino una entidad que podía asegurar su continuidad y el acatamiento de sus disposiciones que serían, en este periodo, las de la naciente oligarquía.

ANEXOS

Anexo N.º 1

Listado de coroneles con licencia indefinida (1897)

Departamento (1)	Clase	Nombre	Fecha de licencia indefinida	Cargos durante los gobiernos del Partido Constitucional
Lima	Coronel	Crespo, Felipe Santiago	30-12-1896	Comisario de 2do. cuartel de Lima (3)
Lima	Coronel	Eléspuru, Juan N.	12-08-1895	Director de la Escuela Militar
Lima	Coronel	Huguet, Joaquín	11-05-1896	Subprefecto de Lima (1895)
Lima	Coronel	Ramírez, Rafael	17-08-1896	
Lima	Coronel	Salcedo, Armando	13-02-1895	1er. Jefe de "Cazadores" (3)
Lima	Coronel Graduado	Althaus, Augusto	05-11-1895	
Lima	Coronel Graduado	Alayza, José	24-08-1895	
Lima	Coronel Graduado	Abrill, Federico	02-09-1895	
Lima	Coronel Graduado	Alcázar, Mariano A	08-01-1896	
Lima	Coronel Graduado	Acevedo, Abraham	23-03-1896	2do. Jefe del Batallón Ayacucho (3)
Lima	Coronel Graduado	Arias Pozo, Samuel	20-04-1896	1er. Jefe de Batallón Ayacucho (3)
Lima	Coronel Graduado	Bustíos, Francisco Saturnino	28-05-1895	
Lima	Coronel Graduado	Burgos Estenos, Eduardo	24-11-1896	
Lima	Coronel Graduado	Byrne, Guillermo	14-06-1895	1er. Jefe del Escuadrón Escolta (3)
Lima	Coronel Graduado	Benavidez, José A.	18-09-1896	
Lima	Coronel Graduado	Carbajal, Cirilo	13-03-1897	
Lima	Coronel Graduado	Cáceres, Ricardo	13-05-1895	
Lima	Coronel Graduado	Cáceres, Manuel	29-05-1895	
Lima	Coronel Graduado	Carbajal, Francisco	17-06-1895	
Lima	Coronel Graduado	Coll Cárdenas, Eduardo	10-08-1895	
Lima	Coronel Graduado	Cueto, Domingo	02-09-1895	
Lima	Coronel Graduado	Combe, Ernesto de la	06-09-1895	
Lima	Coronel Graduado	Calmet, Francisco	07-04-1896	
Lima	Coronel Graduado	Callirgos Quiroga, Manuel	04-06-1896	
Lima	Coronel Graduado	Castellano, Joaquín	12-06-1896	
Lima	Coronel Graduado	Cortés, Miguel	02-12-1896	
Lima	Coronel Graduado	Carrera, Manuel	24-04-1896	
Lima	Coronel Graduado	Cavero, Eulogio	10-02-1897	
Lima	Coronel Graduado	Chocano, Francisco	25-01-1897	
Lima	Coronel Graduado	Eléspuru, Teobaldo	24-08-1895	
Lima	Coronel Graduado	Espejo, Pedro	27-08-1895	
Lima	Coronel Graduado	Frias, José María	16-02-1895	
Lima	Coronel Graduado	Gómez, Manuel	09-01-1896	2do. Jefe de "Cazadores" (3)
Lima	Coronel Graduado	Gómez, José Isaac	09-01-1896	
Lima	Coronel Graduado	Huertas, José B	01-06-1895	

Lima	Coronel Graduado	Huget, Felipe N.	20-08-1895	
Lima	Coronel Graduado	Yáñez, Guillermo	24-03-1896	1er. Jefe de la Artillería (3)
Lima	Coronel Graduado	Jiménez, Julio	16-05-1895	
Lima	Coronel Graduado	Loza Saavedra, Manuel	07-03-1896	
Lima	Coronel Graduado	La Rosa, Lizardo	20-10-1896	
Lima	Coronel Graduado	Martínez, Pedro R.	13-03-1897	
Lima	Coronel Graduado	Morán, Mariano R.	13-03-1897	
Lima	Coronel Graduado	Márquez, Francisco	05-09-1895	
Lima	Coronel Graduado	Marino, Fabián	08-01-1897	
Lima	Coronel Graduado	Mendizábal, Francisco	20-10-1896	
Lima	Coronel Graduado	Nieto, Daniel	06-04-1896	1er. Jefe del Escuadrón de Artillería (3)
Lima	Coronel Graduado	Pizarro, José R.	06-09-1895	
Lima	Coronel Graduado	Quimper, Benjamín	18-07-1895	
Lima	Coronel Graduado	Rivero, Antonio	11-04-1896	
Lima	Coronel Graduado	Smith, Timoteo	19-07-1895	
Lima	Coronel Graduado	San Román, Manuel	20-06-1896	Comité Directivo Partido Constitucional (1898)
Lima	Coronel Graduado	Saravia, Juan	12-06-1896	
Lima	Coronel Graduado	Tirado, Mariano G.	25-11-1895	
Lima	Coronel Graduado	Ugarte, Vicente	04-07-1895	Comandante de Guardias de 3er. Cuartel de Lima (3)
Lima	Coronel Graduado	Velarde, Baltazar	29-08-1895	Jefe de la Inspección (3)
Lima	Coronel Graduado	Valencia, Teodoro	20-10-1896	
Lima	Coronel Graduado	Vizcarra, Juan C.	21-05-1895	Comisario del 4to. Cuartel de Lima (3)
Lima	Coronel Graduado	Vivanco, José Manuel	20-08-1895	
Lima	Coronel Graduado	Vivas, Manuel	18-12-1896	
Lima	Coronel Graduado	Vildoso Bustios, Manuel	10-02-1897	
Arequipa	Coronel	Luna, Francisco	07-09-1895	
Arequipa	Coronel	Canseco Diez, Pedro A.	30-06-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Alarcón, José A.	26-06-1895	3er. Jefe del Batallón Callao (3)
Arequipa	Coronel Graduado	Diez Canseco, José Manuel	11-03-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Dávila, Eleodoro	20-01-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Llosa, Germán	19-05-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Manrique, Zacarías	04-11-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Masías, Manuel	22-06-1895	
Arequipa	Coronel Graduado	Somocurcio, Ignacio	14-11-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Sarmiento, Juan Manuel	24-03-1896	
Arequipa	Coronel Graduado	Velarde, Máximo León	25-01-1897	
Callao	Coronel	La Torre, José	08-08-1895	
Callao	Coronel Graduado	Zela Vidal, Adriano	29-05-1895	
Cuzco	Coronel	Ninguno (2)		
Cuzco	Coronel Graduado	Salazar, Francisco	07-03-1896	
Ica	Coronel Graduado	Morales Bermúdez, Román	10-08-1895	2do. Jefe de Gendarmes (3)

Ica	Coronel Graduado	Paulett, Miguel	12-12-1896	
Junín	Coronel Graduado	Baldizán, Salvador	12-11-1896	
Lambayeque	Coronel Graduado	Carmelino, Adolfo	29-08-1895	
Piura	Coronel	Ninguno (2)		
Piura	Coronel Graduado	Ninguno (2)		
Puno	Coronel	Ninguno (2)		
Puno	Coronel Graduado	Ninguno (2)		

Fuente. *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1897.* (1897). Cuadro de elaboración propia.

- (1) Los departamentos que no figuran en la presente lista no contaban con oficiales de grados de coronel o coronel graduado con licencia indefinida.
- (2) Las casillas donde figura *Ninguno* indican que en los respectivos departamentos existían oficiales de grado de coronel o coronel graduado con licencia indefinida expedida en años anteriores a 1895.
- (3) Los puestos indicados son los que aparecen en un Acta fechada el 10 de mayo de 1890, por la cual 36 jefes del Ejército se comprometían a disolver el Congreso en el caso que este no resolviese sobre la victoria de Remigio Morales Bermúdez en las elecciones presidenciales de ese año. Reproducida en *El Comercio*. Lima, 6 de mayo de 1895.

Anexo N.º 2
Juicios a encausados civiles sentenciados en la Zona
Militar de Lima (1899-1906)

Año	Zona	Delito	Oficio	Raza	Presencia de más de un encausado	Sentencia
1899	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Aparador	India		Dos años de reclusión
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Marmolista	Mestiza		Un año de reclusión
	Piura	Heridas	Zapatero	Blanca	Sí	Tres meses de arresto
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Empleado	Blanca		Cien días de arresto
	Lima	Homicidio	Jornalero	India		Veinte años de Penitenciaría
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	India		Absuelto
1900	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Vaporino	s/d.		Un año de reclusión
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Vaporino	s/d.		Un año de reclusión
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Vaporino	s/d.		Absuelto
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Vaporino	s/d.		Absuelto
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	s/d.	Sí	1 año de reclusión
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	s/d.		1 año de reclusión
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Calderero	s/d.		Absuelto
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Marinero	s/d.		s. r.
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Industrial	s/d.		Dos meses de arresto
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	s/d.		Siete meses de arresto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Panadero	Blanca		Ocho meses de arresto
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Marinero	Blanca		Un años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Panadero	Blanca		Cinco meses de arresto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Panadero	India		Tres años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Pastelero	Blanca		Un año de reclusión
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	Blanca		Un año de reclusión
1901	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Doméstico	India		Absuelto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	Blanca		Siete meses de arresto mayor
	Junín	Homicidio y otros delitos	Sombrero	Blanca		Veinte años de Penitenciaría
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Carpintero	Blanca		Absuelto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Telefonista	Blanca		Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Aparador	Blanca		Dos años de reclusión
	Cajamarca	Homicidio	Minero	Amarilla		Seis años de Penitenciaría
	Callao	Ataque a Fuerza Armada	Carpintero	India		Seis meses de Arresto
1902	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Cocinero	India		Seis meses de arresto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Empleado	Blanca		Un años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	India	Sí	Seis meses de arresto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Pintor	Blanca		Ocho meses de arresto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	India		Seis meses de arresto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	s/d.	Blanca		Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Periodista	Blanca		Absuelto
1903	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	India		Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Zapatero	Blanca		Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	Blanca	Sí	Cinco años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Fogonero	Blanca		Cuatro años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Panadero	Blanca		Absuelto
1904	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	India	Sí	Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Carpintero	India	Sí	Dos años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Sastre	Blanca		Dos años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	Blanca		Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Tipógrafo	Blanca		Absuelto
	Arequipa	Ataque a Fuerza Armada	Zapatero	India		Un año de reclusión
	Lima	Salteamiento	Agricultor	India		Absuelto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	Blanca	Sí	Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Aparador	Blanca	Sí	Cinco años de cárcel
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Albañil	India	Sí	Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Herrero	India	Sí	Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Trenzador	India		Un año de reclusión

	Lima	Abuso de autoridad	Agricultor	Blanca		Absuelto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Carpintero	Blanca		Dos años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	India		Un año de reclusión
	Arequipa	Asalto a cárcel	Labrador	India	Sí	Dos años de reclusión
	Lima	Salteamiento	Albañil	India	Sí	Absuelto
	Cajamarca	Varios delitos	Comerciante	Blanca		Dos años de cárcel
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	India		Absuelto
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	Blanca		Dieciocho meses de reclusión
	Arequipa	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	India		Un años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Jornalero	India		Ocho meses de arresto
1905	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Carpintero	Zamba		Absuelto
	Piura	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	Zamba		Dieciocho meses de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Platero	Blanca		Un año de reclusión
	Apurímac	Ataque a Fuerza Armada	Arriero	India		Un año de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Carpintero	India		Dos años de reclusión
	Lima	Ataque a Fuerza Armada	Agricultor	India		Absuelto
1906	Ica	Salteamiento	Agricultor	India	Sí	Absuelto
	Junín	Ataque a Fuerza Armada	Comerciante	Blanca		Nueve meses de arresto
	Junín	Salteamiento	Sastre	India	Sí	Absuelto

Fuente. *Anales de Justicia Militar*, tomo I (1899-1900), II (1901-1902), III (1903-1904), IV (1905-1906). Cuadro de elaboración propia.

Anexo N.º 3
Llamamiento de conscriptos para el año 1904
por departamentos

Departamentos	1er. Contingente 1-06-1904 (a)	2do. Contingente 1-12-1904 (a)	1er. Contingente 1-06-1904 (b)	2do. Contingente 1-12-1904 (b)
Ancash	104		104	52
Apurímac	52		52	25
Arequipa	60		58	29
Ayacucho	60		60	30
Cajamarca		87	87	43
Callao	12		12	6
Cuzco		104	104	52
Huancavelica		40	40	20
Huánuco		31	31	15
Ica	24		24	12
Junín		79	79	39
Lambayeque	36		36	18
La Libertad		58	58	29
Lima	79		79	40
Moquegua	12		12	6
Piura	49		49	24
Puno		101	101	53
Tacna	12		12	6
Tumbes	2		2	1
Suma	500	500	1000	500

Fuente. Estado Mayor General del Ejército, Servicio Militar, Llamamiento a 1000 conscriptos (1903).

Estado Mayor General del Ejército, Servicio Militar, Llamamiento a 500 conscriptos, (1904).

(a) Distribución del contingente establecida por el Decreto Supremo del 26 de noviembre de 1903 para el llamamiento de 1904.

(b) Distribución del contingente establecida por el Decreto Supremo (s/f), aumentando el número de 500 conscriptos al llamamiento de 1904.

Anexo N.º 4
Llamamiento de conscriptos para el año de 1904 por
departamentos y provincias

Departamentos	Provincias	Efectivo Sobre 1000	Efectivo Sobre 500	Total
Ancash	Bolognesi	5	2	7
	Cajatambo	6	3	9
	Huaráz	21	12	33
	Huari	22	11	33
	Huaylas	19	9	28
	Pallasca	8	4	12
	Pomabamba	16	9	25
	Santa	7	3	10
Apurímac	Abancay	8	4	12
	Andahuaylas	20	10	30
	Antabamba	3	2	5
	Aimaraes	8	3	11
	Cotabambas	13	6	19
Arequipa	Arequipa	20	11	31
	Camaná	6	3	9
	Castilla	10	5	15
	Caylloma	7	3	10
	Condesuyos	4	2	6
	Islay	4	2	6
	Unión	7	3	10
Ayacucho	Ayacucho	13	7	20
	Cangallo	10	4	14
	Huanta	6	3	9
	La Mar	11	5	16
	Lucanas	10	5	15
	Parinacochas	10	6	16
Cajamarca	Cajabamba	8	3	11
	Cajamarca	23	13	36
	Celendín	6	2	8
	Contumazá	5	2	7
	Chota	22	11	33
	Hualgayoc	18	10	28
	Jaén	5	2	7
Callao	Callao	12	6	18
Cuzco	Acomayo	8	3	11
	Anta	8	5	13
	Calca	6	3	9
	Canas	16	9	25
	Canchis	16	9	25
	Convención	4	2	6
	Cuzco	9	5	14
	Chumbivilcas	7	3	10
	Paruro	8	3	11
	Paucartambo	6	3	9
	Quipiscanchis	9	5	14
	Urubamba	7	3	10
Huancavelica	Angaraes	10	5	15
	Castrovirreyna	6	3	9
	Huancavelica	10	5	15

	Tayacaya	14	7	21
Huánuco	Dos de Mayo	9	4	13
	Huamalíes	9	4	13
	Huánuco	13	7	20
Ica	Chincha	10	5	15
	Ica	12	6	18
	Pisco	2	1	3
Junín	Huancayo	22	11	33
	Jauja	23	12	35
	Pasco	17	8	25
	Tarma	17	8	25
Lambayeque	Chiclayo	14	7	21
	Lambayeque	22	11	33
Libertad	Huamachuco	10	5	15
	Otuzco	12	7	19
	Pacasmayo	6	2	8
	Patáz	12	7	19
	Santiago de Chuco	7	3	10
	Trujillo	11	5	16
Lima	Canta	6	3	9
	Cañete	9	5	14
	Chancay	12	7	19
	Huarochirí	6	2	8
	Lima	41	21	62
	Yauyos	5	2	7
Moquegua	Moquegua	12	6	18
Piura	Ayabaca	13	6	19
	Huancabamba	7	3	10
	Paita	8	4	12
	Piura	21	11	32
Puno	Ayaviri	10	5	15
	Azángaro	19	10	29
	Carabaya	5	2	7
	Chucuito	17	9	26
	Huancané	17	8	25
	Lampa	7	3	10
	Puno	21	12	33
	Sandia	5	2	7
Tacna	Arica	3	2	5
	Tacna	6	3	9
	Tarata	3	1	4
Tumbes	Tumbes	2	1	3
Total	Total	1000	500	1500

Fuente. Estado Mayor General del Ejército, Servicio Militar, Llamamiento a 1000 conscriptos, (1903).

Estado Mayor General del Ejército, Servicio Militar, Llamamiento a 500 conscriptos, (1904).

- (a) Distribución del contingente establecida por el Decreto Supremo del 26 de noviembre de 1903 para el llamamiento de 1904.
- (b) Distribución del contingente establecida por el Decreto Supremo (s/f), aumentando el número de 500 conscriptos al llamamiento de 1904.

Anexo N.º 5
Presión de servicio militar obligatorio sobre los distritos
del país (año 1904).
Llamamiento de mil quinientos hombres

Departamento	Provincias	Distritos	Total	Hombres	1000	1500	1000/ Total	1500/ Total	1000/ Hombres	1500/ Hombres
	Bolognesi	Acas	900	420	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aquia	1400	638	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cajacay	1759	812	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cochas	375	262	1	1	0,27	0,27	0,38	0,38
		Chiquián	2139	1013	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huasta	1669	796	1	1	0,06	0,06	0,13	0,13
		Huayllacayán	1445	709	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Mangas	1817	797	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ocros	2212	1098	1	2	0,05	0,09	0,09	0,18
		Paclón	1133	525	1	1	0,09	0,09	0,19	0,19
		Ticlos	2439	1144	1	2	0,04	0,08	0,09	0,17
	Cajatambo	Ambar	882	414	1	1	0,11	0,11	0,24	0,24
		Andajes	865	306	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Caujul	1054	477	1	1	0,09	0,09	0,21	0,21
		Cajatambo	2792	1237	1	2	0,04	0,07	0,08	0,16
		Cochamarca	793	356	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ccopa (b) incl. en Mangas	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Gorgor	2056	958	1	2	0,05	0,10	0,10	0,21
		Huancapón	1136	465	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oyón	2870	1290	1	2	0,03	0,07	0,08	0,16
		Pachangará	1304	588	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ancash	Huaráz	Aija	5210	2528	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Carhuáz	16732	7944	5	8	0,03	0,05	0,06	0,10
		Cotaparaco	2357	1087	1	1	0,04	0,04	0,09	0,09
		Huaráz	14525	6873	4	6	0,03	0,04	0,06	0,09
		Malvas (a)	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Marca	1925	894	1	2	0,05	0,10	0,11	0,22
		Pampas	3548	1619	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Pararín	1743	794	1	2	0,06	0,11	0,13	0,25
		Pariacoto	1416	736	1	1	0,07	0,07	0,14	0,14
		Recuay	4778	2277	2	3	0,04	0,06	0,09	0,13
		Yangas	2980	1364	1	2	0,03	0,07	0,07	0,15
		Yungar	2316	1063	1	2	0,04	0,09	0,09	0,19
	Huari	Chacas	12929	5841	4	6	0,03	0,05	0,07	0,10
		Chavín	3177	1530	1	2	0,03	0,06	0,07	0,13
		Huacachi (a)	s.d.	s.d.	3	3	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Huachis	6658	3258	1	1	0,02	0,02	0,03	0,03
		Huantar	3430	1669	0	1	0,00	0,03	0,00	0,06

		Huari	9406	4485	4	6	0,04	0,06	0,09	0,13
		Llamellín	7573	3648	3	4	0,04	0,05	0,08	0,11
		San Luis	8010	3780	3	5	0,04	0,06	0,08	0,13
		San Marcos	3352	1609	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Uco	5004	2433	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
	Huaylas	Ancash	16433	7483	6	9	0,04	0,05	0,08	0,12
		Caráz	9015	4249	3	4	0,03	0,04	0,07	0,09
		Huata	1539	725	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huaylas	5421	2621	2	3	0,04	0,06	0,08	0,11
		Macate	3419	1708	2	3	0,06	0,09	0,12	0,18
		Mancos	3073	1364	1	1	0,03	0,03	0,07	0,07
		Mato	2008	966	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Pamparomás	3182	1566	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
		Pueblo Libre	3619	1681	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Quillo	1690	812	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Shupluy	1930	925	1	2	0,05	0,10	0,11	0,22
	Pallasca	Cabana	3727	1670	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
		Corongo	5981	2791	2	3	0,03	0,05	0,07	0,11
		La Pampa (b) incl. Corongo	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Llapo	2509	1150	1	2	0,04	0,08	0,09	0,17
		Pallasca	7291	3300	3	4	0,04	0,05	0,09	0,12
		Tauca	3104	1311	1	2	0,03	0,06	0,08	0,15
	Pomabamba	Llumpa (b) incl. Piscobamba	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Parobamba	7860	3586	2	4	0,03	0,05	0,06	0,11
		Piscobamba	15097	7209	6	9	0,04	0,06	0,08	0,12
		Pomabamba	10119	4550	4	6	0,04	0,06	0,09	0,13
		Sihuas	9607	4195	4	6	0,04	0,06	0,10	0,14
	Santa	Cáceres del Perú (a)	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Casma	5867	4324	1	2	0,02	0,03	0,02	0,05
		Huarmey	1083	652	1	1	0,09	0,09	0,15	0,15
		Moro	2800	1698	1	1	0,04	0,04	0,06	0,06
		Nepeña	5321	3657	2	3	0,04	0,06	0,05	0,08
		Santa	3595	2776	1	2	0,03	0,06	0,04	0,07
		Yaután	692	424	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Apurímac	Abancay	Abancay	4804	2393	2	3	0,04	0,06	0,08	0,13
		Circa	1891	939	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Curahuasi	4935	2414	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Huanipaca (b) incluida en Abancay	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Lambrama	2332	1167	1	2	0,04	0,09	0,09	0,17
		Pichirhua	2478	1242	1	2	0,04	0,08	0,08	0,16
	Andahuaylas	Andahuaylas	4543	2218	2	3	0,04	0,07	0,09	0,14
		Chincheros	7442	3554	3	4	0,04	0,05	0,08	0,11
		Huancarama	6850	3463	2	3	0,03	0,04	0,06	0,09
		Huancaray	6212	3141	2	3	0,03	0,05	0,06	0,10
		Occpbamba	3945	1958	1	2	0,03	0,05	0,05	0,10

		Ongoy	3015	1486	2	3	0,07	0,10	0,13	0,20
		Pampachiri	4430	2176	2	3	0,05	0,07	0,09	0,14
		San Gerónimo	8110	3988	4	6	0,05	0,07	0,10	0,15
		Talavera	4283	2170	2	3	0,05	0,07	0,09	0,14
	Antabamba	Antabamba	3154	1508	1	2	0,03	0,06	0,07	0,13
		Oropesa	1234	593	1	1	0,08	0,08	0,17	0,17
		Pachaconas	942	445	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sabayno	1384	860	1	2	0,07	0,14	0,12	0,23
	Aimaraes	Colcabamba	3619	1844	2	3	0,06	0,08	0,11	0,16
		Chalhuanca	5215	2532	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Chapimarca	2084	1004	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Soraya	3732	1842	2	3	0,05	0,08	0,11	0,16
		Tapayrihua	3536	1739	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
	Cotabambas	Cotabambas	4245	2081	2	3	0,05	0,07	0,10	0,14
		Chuquibambilla	4758	2443	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Haquira	2649	1453	2	2	0,08	0,08	0,14	0,14
		Huayllati	3672	1882	1	2	0,03	0,05	0,05	0,11
		Mamara	3764	1944	2	3	0,05	0,08	0,10	0,15
		Mara	4830	2461	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Tambobamba	4728	2407	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
Arequipa	Arequipa	Arequipa	30932	15030	8	12	0,03	0,04	0,05	0,08
		Cayma	3290	1573	1	2	0,03	0,06	0,06	0,13
		Characato	1992	849	1	1	0,05	0,05	0,12	0,12
		Chihuata	1632	810	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Miraflores (b) Incl. en Arequipa	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Paucarpata	3159	1490	1	2	0,03	0,06	0,07	0,13
		Pocsi	1708	722	1	1	0,06	0,06	0,14	0,14
		Quequeña	2259	1064	1	2	0,04	0,09	0,09	0,19
		Sabandía	1001	488	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachaca	3063	1455	1	2	0,03	0,07	0,07	0,14
		Siguas (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Socabaya	2768	1337	1	2	0,04	0,07	0,07	0,15
		Tiabaya	2741	1355	1	2	0,04	0,07	0,07	0,15
		Uchumayo	1050	531	1	1	0,10	0,10	0,19	0,19
		Vitor	1258	794	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yanahuara	4282	2011	1	2	0,02	0,05	0,05	0,10
		Yura	854	483	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Camaná	Acarí	1819	1298	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Atico (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Atiquipa	221	118	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Camaná	6713	3643	2	3	0,03	0,04	0,05	0,08
		Caravelí	3677	1882	1	2	0,03	0,05	0,05	0,11
		Chala	373	207	1	1	0,27	0,27	0,48	0,48
		Chaparra	660	369	1	1	0,15	0,15	0,27	0,27
		Huanuhuanu	288	141	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jaqui	595	375	1	1	0,17	0,17	0,27	0,27
		Ocoña	1292	685	0	1	0,00	0,08	0,00	0,15
		Quicacha	783	417	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Quilca (b) Incl. en Isaly	575	331	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San Juan de Sihuas (c)	497	283	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yauca	310	158	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Castilla	Andagna	1100	516	1	2	0,09	0,18	0,19	0,39
		Aplao	1934	960	1	2	0,05	0,10	0,10	0,21
		Chachas	1701	833	0	1	0,00	0,06	0,00	0,12
		Choco	1027	507	1	1	0,10	0,10	0,20	0,20
		Huancarqui	2781	1702	1	1	0,04	0,04	0,06	0,06
		Orcopampa	1234	600	1	1	0,08	0,08	0,17	0,17
		Pampa Colca	6285	3348	2	3	0,03	0,05	0,06	0,09
		Uracá	1270	775	1	1	0,08	0,08	0,13	0,13
		Viraco	5891	3194	2	3	0,03	0,05	0,06	0,09
	Caylloma	Achoma	733	320	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cabanaconde	2499	1096	1	2	0,04	0,08	0,09	0,18
		Callalli	1235	535	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Caylloma	2446	1154	1	2	0,04	0,08	0,09	0,17
		Coporaqui	619	270	1	1	0,16	0,16	0,37	0,37
		Chivay	1311	597	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huambo (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Ichupampa	481	208	1	1	0,21	0,21	0,48	0,48
		Lari	770	332	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Lluta	937	442	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maca	608	253	1	1	0,16	0,16	0,40	0,40
		Machangay (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Madrigal	580	228	1	1	0,17	0,17	0,44	0,44
		Santa Isabel de Sihuas (c)	1235	651	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tapay	1509	687	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tisco	1485	699	0	1	0,00	0,07	0,00	0,14
		Tuti	1085	512	1	1	0,09	0,09	0,20	0,20
		Yanque	1578	743	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Condesuyos	Andaray	1198	578	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Carani	864	371	1	1	0,12	0,12	0,27	0,27
		Chuquibamba	5401	2531	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Salamanca	2008	959	1	2	0,05	0,10	0,10	0,21
		Yanaquihua	1528	740	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Islay	Cocachacra (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Islay	2069	1046	1	2	0,05	0,10	0,10	0,19
		Mollendo (a)	s.d.	s.d.	2	3	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Punta de Bombón (a)	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Tambo (c)	5789	3604	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unión	Alca	6863	3040	2	3	0,03	0,04	0,07	0,10
		Cotahuasi	2958	1436	1	2	0,03	0,07	0,07	0,14

		Charcana	1099	510	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huaynacotas	2340	1082	1	2	0,04	0,09	0,09	0,18
		Pampamarca	1330	668	1	1	0,08	0,08	0,15	0,15
		Puica (a)	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Quechualla	856	417	1	1	0,12	0,12	0,24	0,24
		Sayla	1413	665	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tomepampa	934	461	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Toro	1506	2742	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ayacucho	Ayacucho	Acos vicho	3323	1650	2	3	0,06	0,09	0,12	0,18
		Ayacucho	10212	4560	4	6	0,04	0,06	0,09	0,13
		Chiara	1767	965	1	2	0,06	0,11	0,10	0,21
		Quinua	3478	1737	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Santiago	3573	1803	1	2	0,03	0,06	0,06	0,11
		Socos Vinchos	4774	2370	2	3	0,04	0,06	0,08	0,13
		Tambillo	4101	2039	2	2	0,05	0,05	0,10	0,10
	Cangallo	Canaria	2248	1096	1	2	0,04	0,09	0,09	0,18
		Cangallo	2988	1574	1	2	0,03	0,07	0,06	0,13
		Carapo	1123	576	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Colca	1279	622	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chuschi	2587	1260	1	2	0,04	0,08	0,08	0,16
		Hualla	3956	1914	1	2	0,03	0,05	0,05	0,10
		Huambalpa	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Huancaraylla	1112	557	1	1	0,09	0,09	0,18	0,18
		Paras	1435	764	2	2	0,14	0,14	0,26	0,26
		Sancos	2000	914	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Totos	1646	769	1	1	0,06	0,06	0,13	0,13
		Vischongo	994	558	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Huanta	Huamanguilla	5398	2630	2	3	0,04	0,06	0,08	0,11
		Huanta	6313	3043	3	4	0,05	0,06	0,10	0,13
		Luricocha	4108	2010	1	2	0,02	0,05	0,05	0,10
	La Mar	Anco	4819	2394	2	3	0,04	0,06	0,08	0,13
		Chilcas (b) Incl. en San Miguel	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Chungui	4152	2048	1	2	0,02	0,05	0,05	0,10
		San Miguel	9418	4615	4	6	0,04	0,06	0,09	0,13
		Tambo	5907	2899	3	4	0,05	0,07	0,10	0,14
	Lucanas	Aucará	2006	950	0	1	0,00	0,05	0,00	0,11
		Cabana	2433	1062	1	2	0,04	0,08	0,09	0,19
		Carhuanca	724	382	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chipao	1682	843	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Huancaña	1045	488	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Laramate	3215	1542	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Otoca	1452	703	1	1	0,07	0,07	0,14	0,14
		Payco	1145	569	1	1	0,09	0,09	0,18	0,18
		Puquio	3435	1572	1	2	0,03	0,06	0,06	0,13
		Querobamba	1866	931	1	2	0,05	0,11	0,11	0,21

		Sancos	1102	540	1	1	0,09	0,09	0,19	0,19
		San Juan	2102	939	1	2	0,05	0,10	0,11	0,21
		Santa Lucía	730	382	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soras	916	430	1	2	0,11	0,22	0,23	0,47
	Parinacochas	Colta	1974	920	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Coracora	4431	1974	1	2	0,02	0,05	0,05	0,10
		Corculla	1748	774	1	1	0,06	0,06	0,13	0,13
		Chump	1910	864	1	1	0,05	0,05	0,12	0,12
		Lampa	3287	1483	1	2	0,03	0,06	0,07	0,13
		Oyolo	2237	1033	1	2	0,04	0,09	0,10	0,19
		Pacapausa	3222	1642	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Pararca	1655	777	1	1	0,06	0,06	0,13	0,13
		Pausa	2804	1181	1	2	0,04	0,07	0,08	0,17
		Pullo	2373	1095	1	2	0,04	0,08	0,09	0,18
Cajamarca	Cajabamba	Cachachi	2991	1517	2	3	0,07	0,10	0,13	0,20
		Cajabamba	4228	1827	2	3	0,05	0,07	0,11	0,16
		Colcabamba (c)	1536	713	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Condebamba (a)	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Cauday (c)	1289	603	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		La Pampa (c)	1748	829	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nuñumabamba (c)	1062	519	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Purihual (c)	900	453	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sayaplo	1491	751	1	1	0,07	0,07	0,13	0,13
		Sitacocha	2628	1292	2	3	0,08	0,11	0,15	0,23
	Cajamarca	Asunción	4243	2016	2	3	0,05	0,07	0,10	0,15
		Cajamarca	15134	6931	6	8	0,04	0,05	0,09	0,12
		Cospám	3304	1651	0	1	0,00	0,03	0,00	0,06
		Chetilla	1572	690	1	2	0,06	0,13	0,14	0,29
		Encañada	2897	1410	1	2	0,03	0,07	0,07	0,14
		Ochocán	4728	2238	2	3	0,04	0,06	0,09	0,13
		Jesús	5275	2497	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Magdalena	863	449	0	1	0,00	0,12	0,00	0,22
		Matara	1576	748	1	2	0,06	0,13	0,13	0,27
		San Marcos	7142	3450	3	4	0,04	0,06	0,09	0,12
		San Pablo	7593	3746	4	5	0,05	0,07	0,11	0,13
		Yacanora	1211	619	3	4	0,25	0,33	0,48	0,65
	Celendín	Celendín	4181	1943	1	2	0,02	0,05	0,05	0,10
		Chumuch	1837	866	1	1	0,05	0,05	0,12	0,12
		Huancapampa (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Huashmín	1553	580	1	1	0,06	0,06	0,17	0,17
		Huanco	1850	898	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Lucmapampa	1440	684	1	1	0,07	0,07	0,15	0,15
		Sorochuco	2741	1308	1	2	0,04	0,07	0,08	0,15
	Contumazá	Cascas	3134	1675	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Contumazá	5715	2579	2	3	0,03	0,05	0,08	0,12

		Guzmango	2568	1278	1	1	0,04	0,04	0,08	0,08
		San Benito (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Trinidad	1875	982	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
	Chota	Cachén	2593	1181	1	2	0,04	0,08	0,08	0,17
		Cochabamba	2773	1333	1	2	0,04	0,07	0,08	0,15
		Conchán (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Cutervo	7003	3276	2	3	0,03	0,04	0,06	0,09
		Chiguirip (a)	s.d.	s.d.	0	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Chota	13746	6436	6	8	0,04	0,06	0,09	0,12
		Huambos	3189	1522	1	2	0,03	0,06	0,07	0,13
		Lajas	4095	1939	2	3	0,05	0,07	0,10	0,15
		Llama	2823	1375	1	2	0,04	0,07	0,07	0,15
		Pasccha	1800	810	1	2	0,06	0,11	0,12	0,25
		Pión	780	396	1	1	0,13	0,13	0,25	0,25
		Querecoto	2105	1031	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Sócota	2055	1003	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Tacabamba	8119	3892	4	6	0,05	0,07	0,10	0,15
	Hualgayoc	Bambamarca	8266	3955	4	5	0,05	0,06	0,10	0,13
		Hualgayoc	9094	4278	4	6	0,04	0,07	0,09	0,14
		Llapa	4780	2210	1	2	0,02	0,04	0,05	0,09
		Niepos	3000	1473	1	2	0,03	0,07	0,07	0,14
		San Gregorio	2444	1084	1	2	0,04	0,08	0,09	0,18
		San Miguel	12946	5259	4	7	0,03	0,05	0,08	0,13
		Santa Cruz	7452	3549	3	4	0,04	0,05	0,08	0,11
	Jaén	Bellavista	483	281	1	1	0,21	0,21	0,36	0,36
		Callayuc	1078	537	0	1	0,00	0,09	0,00	0,19
		Colasay	2168	1096	1	2	0,05	0,09	0,09	0,18
		Cujillo	834	435	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chirinos	1095	569	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Choros	281	125	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jaén	885	509	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pinpigos	963	494	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Querocotillo	1537	815	1	2	0,07	0,13	0,12	0,25
		Sallique	741	370	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San Felipe	718	386	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San Ignacio	1242	667	1	1	0,08	0,08	0,15	0,15
		Tabaconas	703	364	1	1	0,14	0,14	0,27	0,27
Callao	Callao	Callao	34492	20218	12	18	0,03	0,05	0,06	0,09
Cuzco	Acomayo	Acomayo	6197	3152	3	4	0,05	0,06	0,10	0,13
		Pomacachi	5119	2522	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Rondocan	2708	1366	1	1	0,04	0,04	0,07	0,07
		Sangará	3492	1732	2	3	0,06	0,09	0,12	0,17
	Anta	Anta	6368	3045	3	5	0,05	0,08	0,10	0,16
		Huarocondo (a)	s.d.	s.d.	1	2	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Limatambo	5348	2689	2	3	0,04	0,06	0,07	0,11

		Zurite	6368	3045	2	3	0,03	0,05	0,07	0,10
	Calca	Calca	6815	3307	2	3	0,03	0,04	0,06	0,09
		Lares	2736	1475	2	3	0,07	0,11	0,14	0,20
		Pisac	4269	2156	2	3	0,05	0,07	0,09	0,14
	Canas	Coporaque	8157	4226	4	6	0,05	0,07	0,09	0,14
		Checca	3708	1910	2	3	0,05	0,08	0,10	0,16
		Langui	3050	1611	1	2	0,03	0,07	0,06	0,12
		Layo	2157	1102	1	2	0,05	0,09	0,09	0,18
		Ocururo	972	481	1	1	0,10	0,10	0,21	0,21
		Pichihua	3273	1567	1	2	0,03	0,06	0,06	0,13
		Yanaoca	3691	1832	2	3	0,05	0,08	0,11	0,16
		Yauri	10968	4460	4	6	0,04	0,05	0,09	0,13
	Canchis	Cacha	4823	2446	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Checcacupe	5811	2851	2	3	0,03	0,05	0,07	0,11
		Marangani	4280	2158	2	3	0,05	0,07	0,09	0,14
		Pampamarca	2432	1166	2	4	0,08	0,16	0,17	0,34
		Sicuaní	12413	6437	6	9	0,05	0,07	0,09	0,14
		Tinta	5771	2908	2	3	0,00	0,01	0,07	0,10
	Convención	Echarati	2359	1319	1	2	0,04	0,08	0,08	0,15
		Huayapata	1862	926	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Occobamba	1484	795	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Santa Ana	4471	2322	2	3	0,04	0,07	0,09	0,13
		Villcabamba (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
	Cuzco	Cuzco	18370	8121	5	7	0,03	0,04	0,06	0,09
		San Gerónimo	2682	1296	2	4	0,07	0,15	0,15	0,31
		San Sebastián	2194	1140	2	3	0,09	0,14	0,18	0,26
	Chumbivilcas	Ccapacmarca	1194	594	1	1	0,08	0,08	0,17	0,17
		Colquemarca	6119	3267	3	4	0,05	0,07	0,09	0,12
		Chamaca	1705	874	1	2	0,06	0,12	0,11	0,23
		Livitaca	5000 aprox.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Llusco	6533	3483	2	3	0,03	0,05	0,06	0,09
		Vilille	1564	782	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paruro	Accha	3370	1688	2	3	0,06	0,09	0,12	0,18
		Ccapi	1747	894	1	1	0,06	0,06	0,11	0,11
		Collcha	1800	894	1	2	0,06	0,11	0,11	0,22
		Huanoquite	2513	1270	1	1	0,04	0,04	0,08	0,08
		Omacha	2402	1259	1	1	0,04	0,04	0,08	0,08
		Paruro	4968	2459	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
	Paucartambo	Caycay	3050	1548	1	2	0,03	0,07	0,06	0,13
		Ccacca	3060	1539	1	2	0,03	0,07	0,06	0,13
		Colquepata	9114	1061	1	1	0,01	0,01	0,09	0,09
		Challabamba	2204	1115	1	1	0,05	0,05	0,09	0,09
		Paucartambo	3715	1872	2	3	0,05	0,08	0,11	0,16
	Quipiscanchis	Marcapata	2026	1028	1	2	0,05	0,10	0,10	0,19
		Ocongate	2207	1354	1	2	0,05	0,09	0,07	0,15

		Oropesa	4541	2260	2	3	0,04	0,07	0,09	0,13
		Quiquijana	6255	3113	2	3	0,03	0,05	0,06	0,10
		Urcos	4936	2484	3	4	0,06	0,08	0,12	0,16
	Urubamba	Maras	539	272	3	4	0,56	0,74	1,10	1,47
		Ollantaitambo	2639	1312	1	2	0,04	0,08	0,08	0,15
		Urubamba	6946	3417	3	4	0,04	0,06	0,09	0,12
Huancavelica	Angaraes	Acobamba	7880	3966	3	5	0,04	0,06	0,08	0,13
		Caja	4672	2319	1	2	0,02	0,04	0,04	0,09
		Julcamarca	7230	3596	3	4	0,04	0,06	0,08	0,11
		Lircay	6847	3246	3	4	0,04	0,06	0,09	0,12
	Castrovirreyna	Arma	1633	903	1	1	0,06	0,06	0,11	0,11
		Castrovirreyna	1218	679	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Córdova	3248	1752	1	2	0,03	0,06	0,06	0,11
		Chavin	1504	779	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chupamarca	1410	809	1	2	0,07	0,14	0,12	0,25
		Huachos	1262	617	1	1	0,08	0,08	0,16	0,16
		Huaytará	934	463	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pilpichaca	1473	815	1	1	0,07	0,07	0,12	0,12
		Santiago	2206	1229	1	2	0,05	0,09	0,08	0,16
	Huancavelica	Acoria	8739	4448	4	5	0,05	0,06	0,09	0,11
		Conayca	2478	1290	1	2	0,04	0,08	0,08	0,16
		Huancavelica	9381	4407	3	5	0,03	0,05	0,07	0,11
		Huando (b) incl. en Acoria	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Moya	4231	2173	2	3	0,05	0,07	0,09	0,14
	Tayacaya	Anco	2593	1317	1	1	0,04	0,04	0,08	0,08
		Colcabamba	4558	2203	2	3	0,04	0,07	0,09	0,14
		Huaribamba	3704	1859	1	2	0,03	0,05	0,05	0,11
		Locroja	3339	1661	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Mayoc	3669	1882	2	3	0,05	0,08	0,11	0,16
		Pampas	7826	3818	4	5	0,05	0,06	0,10	0,13
		Paucarbamba	4844	2436	1	2	0,02	0,04	0,04	0,08
		Salcabamba	4584	2477	1	2	0,02	0,04	0,04	0,08
		Surcobamba	2929	1473	1	1	0,03	0,03	0,07	0,07
Huánuco	Dos de Mayo	Aguamiro	2260	1066	1	2	0,04	0,09	0,09	0,19
		Baños	2316	1088	1	2	0,04	0,09	0,09	0,18
		Chavin	3282	1663	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
		Chupán	3212	1634	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
		Huallanca	1693	950	1	1	0,06	0,06	0,11	0,11
		Jesús	3236	1612	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
		La Unión (b) incl. en Aguamiro	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Obas	3347	1683	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Pachas	3419	1697	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
	Huamalíes	Arancay	1223	687	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huacaybamba	2775	1362	1	1	0,04	0,04	0,07	0,07
		Huacrachuco	4471	2312	2	3	0,04	0,07	0,09	0,13

		Llata	4779	2246	1	2	0,02	0,04	0,04	0,09
		Monzón	1358	783	1	1	0,07	0,07	0,13	0,13
		Pinra	4062	1984	2	3	0,05	0,07	0,10	0,15
		Singa	2921	1412	2	3	0,07	0,10	0,14	0,21
	Huánuco	Chinchao	2505	1354	1	2	0,04	0,08	0,07	0,15
		Higueras	3881	1918	2	3	0,05	0,08	0,10	0,16
		Huacar	5739	2821	2	3	0,03	0,05	0,07	0,11
		Huánuco	10717	5082	4	6	0,04	0,06	0,08	0,12
		Panao	4765	2413	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Santa María del Valle	6405	3307	2	3	0,03	0,05	0,06	0,09
		Pozuzo (c)	440	248	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
Ica	Chincha	Chavín	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Chincha Alta	14198	8258	6	9	0,04	0,06	0,07	0,11
		Chincha Baja	7546	4690	3	4	0,04	0,05	0,06	0,09
		Tambo de Mora	699	404	0	1	0,00	0,14	0,00	0,25
	Ica	Ica	9763	4916	4	6	0,04	0,06	0,08	0,12
		Nazca	2871	1716	1	1	0,03	0,03	0,06	0,06
		Palpa	3252	1901	1	2	0,03	0,06	0,05	0,11
		Pueblo Nuevo	3944	2244	1	2	0,03	0,05	0,04	0,09
		San José de los Molinos (incl. en San Juan Bautista)	s.d.	s.d.	0	2	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		San Juan Bautista	6640	3734	3	3	0,05	0,05	0,08	0,08
		Santiago	2353	1473	1	1	0,04	0,04	0,07	0,07
		Yauca	1148	610	1	1	0,09	0,09	0,16	0,16
	Pisco	Huáncano (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Humay (c) incl. en Chincha	1402	1010	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pisco (c) incl. en Chincha	6295	4102	2	3	0,03	0,05	0,05	0,07
Junín	Huancayo	Colca	5409	2556	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Chongos	3692	1648	1	2	0,03	0,05	0,06	0,12
		Chupaca	12075	5678	4	6	0,03	0,05	0,07	0,11
		Huancayo	10825	5123	4	6	0,04	0,06	0,08	0,12
		Huayucachi (a)	s.d.	s.d.	1	2	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Pariahuanca	5100	2634	2	3	0,04	0,06	0,08	0,11
		San Gerónimo	6327	2940	3	4	0,05	0,06	0,10	0,14
		San Juan (c)	3482	1691	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sapallanga	10284	4951	3	5	0,03	0,05	0,06	0,10
		Sicaya	3193	1450	2	2	0,06	0,06	0,14	0,14
	Jauja	Acolla	2009	995	0	1	0,00	0,05	0,00	0,10
		Apata	7974	3856	2	3	0,03	0,04	0,05	0,08
		Cincos	3583	1630	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Comas	5295	2602	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Concepción	5427	2525	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Huaripampa	5713	2700	2	3	0,04	0,05	0,07	0,11
		Jauja	21039	10241	8	12	0,04	0,06	0,08	0,12
		Llollapampa	691	314	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Matahuasi	1912	949	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11

		Mito	5064	2367	2	3	0,04	0,06	0,08	0,13
		Muquiyauyo	1375	653	1	1	0,07	0,07	0,15	0,15
		Orcotuna	5232	2430	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
	Pasco	Cayna	7751	3932	3	4	0,04	0,05	0,08	0,10
		Cerro	12317	5983	4	6	0,03	0,05	0,07	0,10
		Chacayan	5109	2494	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Huancabamba	831	435	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huariaca	8313	4347	4	6	0,05	0,07	0,09	0,14
		Huayllay	1051	536	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ninacaca	2432	1210	1	1	0,04	0,04	0,08	0,08
		Yanahuanca	7531	3685	3	5	0,04	0,07	0,08	0,14
	Tarma	Acobamba	9965	4878	3	5	0,03	0,05	0,06	0,10
		Carhuamayo	4640	2296	1	2	0,02	0,04	0,04	0,09
		Chacapalpa (b) incl. en Yauli	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Chanchamayo	1405	1073	1	1	0,07	0,07	0,09	0,09
		Junín	7719	3874	4	6	0,05	0,08	0,10	0,15
		Marcapomacocha	1167	625	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oroya	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Tarma	13540	6616	5	7	0,04	0,05	0,08	0,11
		Vitoc	1060	618	1	1	0,09	0,09	0,16	0,16
		Yauli	5326	2572	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
La Libertad	Huamachuco	Huamachuco	15222	7339	4	6	0,03	0,04	0,05	0,08
		Marcabal	2617	1262	1	2	0,04	0,08	0,08	0,16
		Sanagorán (b) incl. Huamachuco	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Sarín (b) incl. Huamachuco	s.d.	s.d.	2	3	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Sartibamba	3870	1691	2	3	0,05	0,08	0,12	0,18
	Otuzco	Charat	1766	877	1	1	0,06	0,06	0,11	0,11
		Huaranchal	747	398	0	1	0,00	0,13	0,00	0,25
		La Cuesta	680	321	1	1	0,15	0,15	0,31	0,31
		Lucma	1876	917	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Marmot	798	414	0	1	0,00	0,13	0,00	0,24
		Otuzco	10723	5177	4	6	0,04	0,06	0,08	0,12
		Salpo	2308	1066	1	1	0,04	0,04	0,09	0,09
		Sinsicap	2561	1265	1	2	0,04	0,08	0,08	0,16
		Usquil	8339	3919	3	5	0,04	0,06	0,08	0,13
	Pacasmayo	Chepén	3581	2417	1	1	0,03	0,03	0,04	0,04
		Guadalupe	3543	2150	1	2	0,03	0,06	0,05	0,09
		Jequetepeque	857	463	1	1	0,12	0,12	0,22	0,22
		Pacasmayo	1091	566	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pueblo nuevo	751	460	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San José	1033	747	1	1	0,10	0,10	0,13	0,13
		San Pedro de Lloc	4912	2541	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
	Patáz	Bambamarca	1539	758	1	2	0,06	0,13	0,13	0,26
		Buldibuyo	2312	1081	1	2	0,04	0,09	0,09	0,19
		Cajamarquilla	1415	687	1	1	0,07	0,07	0,15	0,15

		Chilia	4029	1956	1	2	0,02	0,05	0,05	0,10
		Huancaspata	5035	2225	2	3	0,04	0,06	0,09	0,13
		Huaylillas	1036	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huayo	883	458	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ongón	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Parcoy	1933	919	1	2	0,05	0,10	0,11	0,22
		Pataz	4000	2095	2	3	0,05	0,08	0,10	0,14
		Soledad	572	281	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tayabamba	6285	3046	3	4	0,05	0,06	0,10	0,13
		Uchumarca	556	274	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Santiago de Chuco	Cachicadán (b) Incl. en Santiago de Chuco	s.d.	s.d.	2	3	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Citabamba	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Moyepata	5825	2770	2	3	0,03	0,05	0,07	0,11
		Santiago de Chuco	12534	5833	3	4	0,02	0,03	0,05	0,07
	Trujillo	Ascope	5241	3559	1	2	0,02	0,04	0,03	0,06
		Chicama	1952	1452	1	1	0,05	0,05	0,07	0,07
		Chocope	2567	1914	1	1	0,04	0,04	0,05	0,05
		Huanchaco	668	301	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Magdalena de Cao	913	561	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Moche	1357	673	1	1	0,07	0,07	0,15	0,15
		Paiján	2989	1553	2	3	0,07	0,10	0,13	0,19
		Salaverry	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Santiago de Cao	2126	1260	1	1	0,05	0,05	0,08	0,08
		Simbal	1284	651	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trujillo	10538	5590	3	5	0,03	0,05	0,05	0,09
		Virú	2671	1708	1	2	0,04	0,07	0,06	0,12
Lambayeque	Chiclayo	Chiclayo	12937	6674	6	8	0,05	0,06	0,09	0,12
		Chongoyape	1737	949	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Etén	3909	2056	2	3	0,05	0,08	0,10	0,15
		Lagunas	887	585	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Monsefú	8256	4265	3	5	0,04	0,06	0,07	0,12
		Picsi	2525	2005	1	2	0,04	0,08	0,05	0,10
		Reque	1573	805	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Saña	2459	1750	1	2	0,04	0,08	0,06	0,11
	Lambayeque	Ferreñafe	7326	4023	4	6	0,05	0,08	0,10	0,15
		Jaynca	2722	1597	1	2	0,04	0,07	0,06	0,13
		Lambayeque	7883	4332	4	6	0,05	0,08	0,09	0,14
		Mochumí	1882	954	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Mórrope	4928	2381	2	3	0,04	0,06	0,08	0,13
		Motupe	6050	3110	3	5	0,05	0,08	0,10	0,16
		Olmos	3861	2008	2	3	0,05	0,08	0,10	0,15
		Pacora	1702	814	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Salas	12129	5900	5	7	0,04	0,06	0,08	0,12
		San José	1569	841	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		Islas: Lobos de Tierra y Lobos de Afuera (c)	1649	1546	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
Lima	Canta	Araguay	1409	659	1	1	0,07	0,07	0,15	0,15
		Atabillos Alto	1595	673	1	1	0,06	0,06	0,15	0,15
		Atabillos Bajo	1768	814	1	2	0,06	0,11	0,12	0,25
		Canta	2912	1340	1	2	0,03	0,07	0,07	0,15
		Huamantanga	3993	1845	1	2	0,03	0,05	0,05	0,11
		Lampían	1756	804	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Pacaraos	1686	664	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San Buenaventura	1534	708	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cañete	Calango	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Cañete	4871	2996	2	3	0,04	0,06	0,07	0,10
		Coayllo	1207	630	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chilca	2092	1076	1	2	0,05	0,10	0,09	0,19
		Lunahuaná	5772	2960	3	4	0,05	0,07	0,10	0,14
		Mala	2468	1344	1	2	0,04	0,08	0,07	0,15
		Pacarán	1333	743	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San Luis	4501	9093	2	3	0,04	0,07	0,02	0,03
		Aucallama (c)	1846	1558	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chancay	Barranca	2379	1491	1	2	0,04	0,08	0,07	0,13
		Chancay	4746	3156	1	2	0,02	0,04	0,03	0,06
		Checras	2664	1154	1	2	0,04	0,08	0,09	0,17
		Huacho	9294	4845	4	6	0,04	0,06	0,08	0,12
		Huaral	s.d.	s.d.	1	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Huaura	3211	2610	1	1	0,03	0,03	0,04	0,04
		Ihuari	1579	759	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Paccho	2668	1203	1	2	0,04	0,07	0,08	0,17
		Pativilca	3194	2611	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sayán	2189	1554	1	1	0,05	0,05	0,06	0,06
		Supé	2530	1682	1	2	0,04	0,08	0,06	0,12
	Huachirí	Carampoma	1148	524	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Casta	1182	552	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Chorrillos	1721	861	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Huachirí	1698	809	1	2	0,06	0,12	0,12	0,25
		Matucana	2006	1086	1	2	0,05	0,10	0,09	0,18
		Olleros	693	314	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Quinti	1829	837	1	1	0,05	0,05	0,12	0,12
		San Damián	1333	644	1	1	0,08	0,08	0,16	0,16
		San Mateo	1630	832	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Santa Eulalia	1157	665	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lima	Ancón	632	379	1	2	0,16	0,32	0,26	0,53
		Ate	2477	2107	1	2	0,04	0,08	0,05	0,09
		Barranco (c)	894	553	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Carabayllo	3816	3190	1	2	0,03	0,05	0,03	0,06
		Chorrillos	4329	2373	3	4	0,07	0,09	0,13	0,17

		Lima	101488	52824	30	45	0,03	0,04	0,06	0,09
		Lurigancho	1248	1036	1	1	0,08	0,08	0,10	0,10
		Lurí	1648	1049	1	2	0,06	0,12	0,10	0,19
		Magdalena	1439	1089	1	1	0,07	0,07	0,09	0,09
		Miraflores	1107	682	1	1	0,09	0,09	0,15	0,15
		Pachacamac	1268	756	1	1	0,08	0,08	0,13	0,13
		San José de Surco	1980	1310	1	2	0,05	0,10	0,08	0,15
	Yauyos	Ayaviri	956	463	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Carania	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Huangascar (b) incl. en Castrovirreyna	1173	652	1	1	0,09	0,09	0,15	0,15
		Huañec	2171	1048	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Laraos	3738	1837	1	2	0,03	0,05	0,05	0,11
		Omas	638	320	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pampas	2151	1183	1	1	0,05	0,05	0,08	0,08
		Tauripampa	1037	497	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Viñac	685	361	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yauyos	2289	1110	1	2	0,04	0,09	0,09	0,18
Moquegua	Moquegua	Carumas	2850	1152	1	2	0,04	0,07	0,09	0,17
		Ichuña	2123	1004	1	1	0,05	0,05	0,01	0,01
		Ilo	909	494	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Moquegua	7407	4276	3	4	0,04	0,05	0,07	0,09
		Omate	3784	1725	2	3	0,05	0,08	0,12	0,17
		Puquina	3859	1798	1	2	0,03	0,05	0,06	0,11
		Torata	4885	2752	2	3	0,04	0,06	0,07	0,11
		Ubinas	2969	1303	2	3	0,07	0,10	0,15	0,23
Piura	Ayabaca	Ayabaca	15377	7527	5	7	0,03	0,05	0,07	0,09
		Cumbicus	4837	2350	1	2	0,02	0,04	0,04	0,09
		Chalaco	5469	2631	2	3	0,04	0,05	0,08	0,11
		Frias	7839	3919	4	5	0,05	0,06	0,10	0,13
		Santo Domingo (b) incl. en Chalaco	s.d.	s.d.	0.	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Suyo	2165	1151	1	2	0,05	0,09	0,09	0,17
	Huancabamba	Huancabamba	10843	5073	4	6	0,04	0,06	0,08	0,12
		Huarmaca	5650	2636	2	3	0,04	0,05	0,08	0,11
		Sondor	1492	737	1	1	0,07	0,07	0,14	0,14
	Paita	Amotape	3009	1503	1	2	0,03	0,07	0,07	0,13
		Arenal	715	336	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Colán	1934	986	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Huaca	2740	1271	1	2	0,04	0,07	0,08	0,16
		Paita	2396	1064	1	1	0,04	0,04	0,09	0,09
		Querocotillo	3451	1697	2	3	0,06	0,09	0,12	0,18
		Sullana	6780	3294	2	3	0,03	0,04	0,06	0,09
	Piura	Castilla	1118	502	1	2	0,09	0,18	0,20	0,40
		Catacaos	18750	9194	7	10	0,04	0,05	0,08	0,11
		Chulucanas (c)	5355	2717	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Morropón	4672	2299	3	4	0,06	0,09	0,13	0,17

		Piura	6811	2954	3	4	0,04	0,06	0,10	0,14
		Salitral	1229	613	1	2	0,08	0,16	0,16	0,33
		Sechura	9081	4527	4	5	0,04	0,06	0,09	0,11
		Tambo Grande	7911	3901	3	5	0,04	0,06	0,08	0,13
		Yapatera	5355	s.d.	1	2	0,02	0,04	s.d.	s.d.
Puno	Ayaviri	Antanta	s.d.	s.d.	0	1	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Ayaviri	7669	3751	3	3	0,04	0,04	0,08	0,08
		Cupi	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Llalli	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Macari (b) incl. en Lampa	4500	2473	2	3	0,04	0,07	0,08	0,12
		Nuñoa (b) incl. en Lampa	2400	1188	1	2	0,04	0,08	0,08	0,17
		Orurillo (b) incl. en Lampa	5070	2520	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		S. Rosa (b) incl. en Lampa	3034	1460	1	2	0,03	0,07	0,07	0,14
		Umachiri (b) incl. en Lampa	2018	973	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
	Azángaro	Achaya	1891	900	1	1	0,05	0,05	0,11	0,11
		Arapa	3833	1801	2	3	0,05	0,08	0,11	0,17
		Asilo	5144	2712	3	4	0,06	0,08	0,11	0,15
		Azángaro	8711	4835	4	6	0,05	0,07	0,08	0,12
		Caminaca	1841	957	1	1	0,05	0,05	0,10	0,10
		Chupa	3298	1667	1	2	0,03	0,06	0,06	0,12
		Muñani	2559	1254	1	2	0,04	0,08	0,08	0,16
		Potoni	1399	704	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Putina	3855	1817	1	2	0,03	0,05	0,06	0,11
		Samán	4481	2362	2	3	0,04	0,07	0,08	0,13
		San Antón	1651	805	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		San José	2113	1143	1	2	0,05	0,09	0,09	0,17
		Santiago de Pupuja	4473	2325	2	3	0,04	0,07	0,09	0,13
	Carabaya	Ajoyani	360	172	0	1	0,00	0,28	0,00	0,58
		Ayapata	2158	1096	1	2	0,05	0,09	0,09	0,18
		Coaza	1741	882	1	1	0,06	0,06	0,11	0,11
		Corani	974	478	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Crucero	931	1498	1	1	0,11	0,11	0,07	0,07
		Ituata	1591	797	1	1	0,06	0,06	0,13	0,13
		Macusani	1459	720	1	1	0,07	0,07	0,14	0,14
		Ollachea	989	507	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usicayos	801	409	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chucuito	Desaguadero	937	448	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Huacullani	1948	967	1	2	0,05	0,10	0,10	0,21
		Ilave	10864	5344	4	6	0,04	0,06	0,07	0,11
		Juli	5942	2913	3	4	0,05	0,07	0,10	0,14
		Pisacoma	1185	560	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomata	3226	1722	2	3	0,06	0,09	0,12	0,17
		Santa Rosa	1532	751	1	1	0,07	0,07	0,13	0,13
		Yunguyo	7691	3816	3	5	0,04	0,07	0,08	0,13
		Zepita	8316	4141	3	5	0,04	0,06	0,07	0,12

	Huancané	Cojata	2522	1186	1	1	0,04	0,04	0,08	0,08
		Conina	3180	1503	1	2	0,03	0,06	0,07	0,13
		Huancané	8964	4482	4	6	0,04	0,07	0,09	0,13
		Inchupalla	2828	1346	1	1	0,04	0,04	0,07	0,07
		Moho	8011	3792	2	3	0,02	0,04	0,05	0,08
		Pusi	2127	1067	1	1	0,05	0,05	0,09	0,09
		Rosaspata	3575	1777	1	2	0,03	0,06	0,06	0,11
		Taraco	4194	2109	2	3	0,05	0,07	0,09	0,14
		Vilca-chico	9055	4442	4	6	0,04	0,07	0,09	0,14
	Lampa	Cabanilla	4968	2393	2	3	0,04	0,06	0,08	0,13
		Calapuja (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Lampa	6668	3214	2	3	0,03	0,04	0,06	0,09
		Nicasio	1015	485	1	1	0,10	0,10	0,21	0,21
		Ocuviri	1027	474	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Palca (a)	s.d.	s.d.	0	0	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
		Pucará	2641	1700	2	3	0,08	0,11	0,12	0,18
		Vilavila	656	303	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Puno	Acora	7523	3863	3	4	0,04	0,05	0,08	0,10
		Atuncolla	2119	1031	1	2	0,05	0,09	0,10	0,19
		Cabana	3996	1926	2	3	0,05	0,08	0,10	0,16
		Capachica	5856	2934	2	3	0,03	0,05	0,07	0,10
		Caracoto	5092	2500	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Coata	1642	776	1	1	0,06	0,06	0,13	0,13
		Chucuito	7018	3319	2	3	0,03	0,04	0,06	0,09
		Juliaca	6071	2989	2	3	0,03	0,05	0,07	0,10
		Paucarcolla	2077	976	1	2	0,05	0,10	0,10	0,20
		Pichacani	2032	988	1	2	0,05	0,10	0,10	0,20
		Puno	6525	3314	2	3	0,03	0,05	0,06	0,09
		San Antonio	682	347	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tiquillaca	2245	1094	1	2	0,04	0,09	0,09	0,18
		Vilque	3140	1451	1	2	0,03	0,06	0,07	0,14
	Sandia	Cuyo cuyo	2252	1144	1	2	0,04	0,09	0,09	0,17
		Patambuco	1563	801	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Pabra	1805	945	1	1	0,06	0,06	0,11	0,11
		Poto	757	412	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Quiaca	816	427	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sándia	4762	2560	2	3	0,04	0,06	0,08	0,12
		Sina	776	379	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tacna	Arica	Arica	4013	2164	1	2	0,02	0,05	0,05	0,09
		Belén	938	472	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Codpa	1641	875	1	2	0,06	0,12	0,11	0,23
		Livilcar	440	227	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Yuta	1466	893	1	1	0,07	0,07	0,11	0,11
		Socoroma	553	258	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tacna	Cabana	1758	1029	0	1	0,00	0,06	0,00	0,10

		Ilabaya	1548	858	1	1	0,06	0,06	0,12	0,12
		Locumba	1415	877	0	1	0,00	0,07	0,00	0,11
		Pachia	2010	1113	1	1	0,05	0,05	0,09	0,09
		Sama	1736	1001	1	1	0,06	0,06	0,10	0,10
		Tacna	10778	5396	3	4	0,03	0,04	0,06	0,07
	Tarata	Candarave	2378	1149	1	1	0,04	0,04	0,09	0,09
		Curibaya	596	301	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Estique	672	345	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tarata	2348	1128	1	2	0,04	0,09	0,09	0,18
		Tarucachi	593	268	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ticaco	1136	543	1	1	0,09	0,09	0,18	0,18
Tumbes	Tumbes	Corrales	2186	1078	1	2	0,05	0,09	0,09	0,19
		San Juan de la Virgen (b) incl. en Piura	1099	568	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sarumilla	321	167	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tumbes	2272	1127	1	1	0,04	0,04	0,09	0,09

Fuente. Estado Mayor General del Ejército, Servicio Militar, Llamamiento a 1,000 conscriptos, (1903).

Estado Mayor General del Ejército, Servicio Militar, Llamamiento a 500 conscriptos, (1904).

Resumen del Censo General de Habitantes del Perú (1876)

- (a) Distrito consignado en los decretos de llamamiento de contingente de 1903 y 1904, pero no es registrado en el Censo de 1876.
- (b) Distrito consignado en los decretos de llamamiento de contingente de 1903 y 1904 como autónomo, registrado en el Censo de 1876 como perteneciente a otro distrito.
- (c) Distrito que es consignado en el Censo de 1876, pero no es registrado en los decretos de llamamiento de contingente de 1903 y 1904.

Anexo N.º 6
Listado de solicitudes de gratificación de subprefectos por
elaboración correcta de los registros militares
(1901-1906)

Departamento	Provincia	Solicitud	Resultado	Fuente	Encabezado de Expediente	Fecha
Ancash	Huari	Solicita gratificación por trabajos de inscripción de Cajamarca y Huari.	Sin respuesta.	1901. Caja 6	Of. de Subprefecto de Huari a Prefecto	2-03-1901
Ancash	Huari	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por rectificación de registros militares de 1905.	Resol. de 21-04-1905 Dispone solicitud improcedente debido a que la gratificación se otorga por elaboración de registros. Solicitud rechazada.	1906 Caja 4	Of. de Prefecto de Ancash que eleva Expediente de Subprefecto de Huari	23-03-1906
Arequipa	Islay	Subprefecto Solicita gratificación por trabajos de conscripción de 1904.	Sin respuesta.	1904 Caja 5	Of. de Jefe de EMG a Ministro de Guerra y Marina	5-11-1904
Ayacucho	Huanta La Mar Cangallo		Director de Guerra desaprueba gratificaciones de subprefectos de las provincias por elaboración de registros militares de 1903.	1904 Caja 6	Of. de Prefecto de Ayacucho a Director de Guerra	5-08-1904
Ayacucho	Huanta	Subprefecto solicita gratificación (S/. 200) por rectificación de registros militares de 1904 y 1905.	EMG, 17-10-1905 Informa que existen documentos incompletos e incorrectos de 1904 y de 1905. Solicitud rechazada	1905 Caja 15	Expediente de Subprefecto de Huanta	09-09-1905
Ayacucho	La Mar	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por elaboración de registros militares de 1904.	Sin respuesta.	1906 Caja 4	Of. de Prefecto de Ayacucho al Director de Guerra	13-06-1906
Cajamarca	Cajamarca Cercado		Prefecto de Cajamarca: Informa pago de gratificación a Subprefecto de Cercado por registros de 1902 y 1902: S/. 200.	1903 Caja 10	Of. de Prefecto de Cajamarca a Director de Guerra	11-09-1903
Cajamarca	Contumazá		Prefecto indica que no se ha abonado gratificación a Subprefecto. de Contumazá, pues no ha entregado documentos de conscripción	1904 Caja 6	Of. de Prefecto a Director de Guerra	15-01-1904
Cajamarca	Chota	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por registro militar de 1902.	Informe EMG, 18-03-1904: Informa no existir documentos de 1902. Prefectura, 13-02-1900: indica que existen documentos de 1901 y 1902 en la Prefectura.	1904 Caja 15	Of. de Prefecto de Cajamarca al Director de Guerra	22-02-1904
Cajamarca	Chota	Solicita gratificación por elaboración de registros militares de 1903.	EMG 9-12-1904 Documentos incompletos.	1904 Caja 6	Of. de Tesorería Fiscal de Cajamarca de Prefecto	29-10-1904
Cajamarca	Hualgayoc	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por la elaboración y rectificación de registros militares.	EMG: Existe incompleta e incorrecta información de 1901; no existen registros de 1902 Prefectura de Cajamarca, 13-02-1904: Existen registros militares de 1901 y 1902.	1904. Caja 15	Expediente de Subprefecto de Hualgayoc al Prefecto	10-02-1904
Cajamarca	Celendín	Subprefecto solicita gratificación(S/. 300) por registros de 1901 y 1902.	Sin respuesta.	1904 Caja 6	Of. de Prefecto de Cajamarca a Director de Guerra	26-03-1904
Cajamarca	Cajabamba	Prefecto solicita el abono de	EMG, 19-09-1904 Rechazo de la solicitud del	1904 Caja 15	Expediente de Subprefecto	25-05-1904

		gratificación por registros militares de 1904 por haber adelantado S/. 100 al Subprefecto.	Prefecto por estar prohibido adelanto de dinero.			
Cajamarca	Contumazá	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por elaboración de registros de 1905.	EMG, 23-08-1905 Informa no existe registros militares de Contumazá. Solicitud rechazada.	1905 Caja 15	Expediente de Subprefecto de Contumazá	24-06-1905
Cajamarca	Hualgayoc	Exsubprefecto solicita gratificación por elaboración de registros militares y documentación anexa de 1903 y 1904.	EMG, 24-08-1905 Documentación incorrecta, por lo que fue devuelta para su modificación. Solicitud rechazada.	1905 Caja 15	Of. de Prefecto de Cajamarca a Director de Guerra	17-07-1905
Cajamarca	Cajabamba	Subprefecto solicita gratificación por registros militares de 1905.	EMG, 22-08-1905 Documentación incorrecta, por lo que ha sido devuelta. Solicitud rechazada.	1905 Caja 15	Expediente de Subprefecto de Cajabamba	30-06-1905
Cajamarca	Chota	Solicita gratificación por elaboración de registros militares de 1902, 1903 y 1904. Solicita gratificación por registros de Contumazá de 1901.	EMG, 01-12-1905 Informa que los registros de 1902 y 1904 no se han enviado aún. El registro de 1903 lo realizó el Subprefecto anterior. El de 1901 adolece de múltiples errores. Solicitud rechazada.	1905 Caja 15	Expediente de Subprefecto de Chota	31-07-1905
Cajamarca	Contumazá	Exsubprefecto solicita gratificación por elaboración de registros militares de 1905 y Hualgayoc de 1903 y 1904.	Resol. de 3-05-1906 Solicitud rechazada.	1906 Caja 4	Expediente de subprefecto de Cajabamba, exsubprefecto de Hualgayoc y Contumazá	29-05-1906
Callao	Callao	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por la elaboración de registros militares de 1902 y 1903.	Oficina Departamental de Conscripción. Remitió registros oportunamente y con anexos solicitados.	1904 Caja 15	Expediente de Subprefecto del Callao	14-10-1904
Callao	Callao	Subprefecto Solicita gratificación por trabajos de conscripción de 1904.	Resol. De Ministerio de 12-10-1904: Concede gratificación de S/ 100.	1904 Caja 1	Of. de Prefecto de Callao a Jefe de EMG	30-09-1904
Cuzco	Varias provincias		Prefecto: No se ha entregado registros de inscripción militar de 1898.	1904 Caja 1	Of. de Prefecto a Director de Guerra	23-06-1904
Cuzco	Anta	Exsubprefecto solicita gratificación por elaboración de registros militares de 1904.	Sin respuesta.	1904 Caja 2	Of. de Jefe de EMG a Director de Guerra	01-10-1904
Cuzco	Cuzco	Subprefecto solicita gratificación (100) por documentos conscripción de 1900.	Sin respuesta.	1904 Caja 7	Of. de Subprefecto Cuzco a Gregorio Casanova	15-03-1904
Cuzco	Cuzco cercado	Subprefecto solicita gratificación por registros militares de 1902.	EMG, 9-04-19 Registros militares recibidos y correctos, pero con ligeras imperfecciones. Solicitud aceptada	1904 Caja 15	Of. de Prefecto de Cuzco a Director de Guerra	15-03-1904
Cuzco	Anta	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por elaboración de registros militares de 1905.	EMG, 27-12-1905 Informa que los registros son correctos, sin embargo, existen errores en la documentación adjunta que son insalvables. Solicitud rechazada	1905 Caja 15	Of. de Prefecto de Cuzco al Director de Guerra	21-11-1905
Huancavelica	Castrovirreyña		Prefecto informa haber recibido órdenes de abonar al Subprefecto la gratificación (S/. 100) por la elaboración de registros militares de 1905.	1906 Caja 2	Of. de Prefecto de Huancavelica a Director de Guerra	21-02-1906
Huancavelica	Huancavelica	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por elaboración de	EMG, 20-12-1906 Documentación entregada correctamente. Solicitud	1906 Caja 8	Of. de Jefe de EMG a Director de Guerra	02-01-1906

		registros militares de 1906.	aprobada.			
Huánuco	Varias provincias		Prefecto: no se ha entregado registros de inscripción militar de 1898	1904 Caja 1	Of. de Prefecto a Director de Guerra	14-06-1904
Huánuco	Huánuco Cercado	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por rectificación de registros militares de 1906.	EMG, 26-07-1906 Informa que se han realizado correctamente los registros, sin embargo no se ha llevado a cabo aún la rectificación anual de los mismos.	1906 Caja 2	Of. de Prefecto de Huánuco al Director de Guerra	17-07-1906
Ica	Pisco		Prefecto indica haber ordenado abono de gratificación del Subprefecto por registros militares	1905 Caja 15	Of. de Prefecto de Ica al Director de Guerra	20-03-1905
Junín	Varias provincias		Prefecto de Junín Acusa recibo de Of. de EMG indicando que documentos de registros militares del Departamento están incompletos.	1904 Caja 1	Of. de Prefecto a Director de Guerra	17-06-1904
La Libertad	Otuzco	Gratificación por elaboración (S/. 200) rectificación de registros militares (S/. 100).	EMG, 19-02-1903 Documentos deficientes: faltan listas de sorteo y contingente.	1902 Caja 8	Expediente de Prefecto de La Libertad a Jefe de EMG	29-12-1902
La Libertad	Trujillo	Subprefecto Solicita gratificación por registro de 1904	Sin respuesta.	1904 Caja 5	Of. De Jefe de EMG a Ministro de Guerra y Marina	10-10-1904
La Libertad	Trujillo	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100), necesita fondos para llevar a cabo rectificación de registros.	Informe de EMG: 6-07-1904 No se puede abonar gratificación sin haber concluido los trabajos de conscripción.	1904 Caja 15	Expediente de Subprefecto de Trujillo	11-06-1904
La Libertad	Trujillo	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100), por elaboración y rectificación de registros de 1904.	Resol. de Ministerio de Guerra y Marina de 12-10-1904 Se aprueba la documentación remitida.	1904 Caja 15	Expediente de Subprefecto de Trujillo al Prefecto de La Libertad	15-07-1904
La Libertad	Otuzco	Subprefecto solicita gratificación por elaboración e registros de conscripción de 1905.	Resol. De Ministerio, 28-10-1905 No aceptada porque tal Subprefecto no ha realizado tales registros.	1905 Caja 5	Expediente. de Subprefecto de Otuzco	28-09-1905
La Libertad	Trujillo	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por rectificación de registros militares de 1905.	EMR del Norte, 16-04-1906 y Resol. 8-08-1906 Informa que la rectificación se registros se ha hecho sin considerar Resol. de 12-06-1906, posterior al trabajo del Subprefecto. Solicitud rechazada.	1906 Caja 2	Of. de Prefecto de La Libertad al Director de Guerra	15-02-1906
La Libertad	Pacasmayo	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por elaboración de apéndices de registros militares de 1904 y 1905.	EMR del Norte, 16-04-1906 y Resol. 24-04-1906 Informa que la rectificación se registros se ha hecho sin considerar Resol. de 12-06-1906, posterior al trabajo del Subprefecto. Además, no tiene derecho a gratificación porque solamente a elaborados los apéndices y no los registros militares. Solicitud rechazada.	1906 Caja 2	Of. de Prefecto de La Libertad al Director de Guerra	04-01-1906
La Libertad	Huamachuco		Prefecto informa haber recibido órdenes de abonar al Subprefecto la gratificación (S/. 100) por la elaboración de registros militares de 1905.	1906 Caja 2	Of. de Prefecto de La Libertad a Director de Guerra	06-05-1906
Lambayeque	Chiclayo	Subprefecto solicita gratificación por trabajos de conscripción de 1903.	Resol de 23-07-1904 Devuelve documentos por encontrarse incorrectos.	1904 Caja 6	Of. de Subprefecto a Prefecto de Lambayeque	06-05-1904
Lambayeque	Lambayeque		Prefecto indica haber ordenado abono de gratificación del	1905 Caja 15	Of. de Prefecto de Lambayeque al	02-01-1905

			Subprefecto por registros militares de 1903 y 1904.		Director de Guerra	
Lima	Lima	Jefe de Oficina Departamental de Conscripción solicita gratificación por registros de 1900, 1901 y 1902.	EMG, 14-04-1903: Se ha abonado premio a Subprefectos: Huarochiri: Formación y rectificación de registro (1902): S/. 200 Chancay: rectific. (1902): S/. 100 Canta: rectific. (1902): S/. 100 Cañete: formación y rectificación: S/. 300.	1903 Caja 2	Of. de Oficina de Departamental de Conscripción de Lima	04-03-1903
Lima	Huarochiri	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por registros militares.	Sin respuesta.	1904 Caja 8	Of. de Subprefecto de Huarochiri a Director de Guerra	20-09-1904
Lima	Chancay	Subprefecto solicita gratificación (100) por registros militares de 1904.	Sin respuesta.	1904 Caja 8	Of. de Prefecto a Director de Guerra	09-11-1904
Lima	Yauyos	Subprefecto solicita gratificación (100) por registros militares de 1904.	Sin respuesta.	1904 Caja 8	Of. de Prefecto a Director de Guerra	31-12-1904
Lima	Canta	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por rectificación de registros militares.	EMG, 12-07-1906 Informa el envío de documentación incompleta. Solicitud rechazada.	1906 Caja 1	Of. de Prefecto de Lima al Director de Guerra	06-07-1906
Moquegua	Moquegua	Subprefecto solicita gratificación de (S/. 100) por elaboración de registros militares de 1904.	EMG, 19-08-1905 Se han enviado registros militares de 1904 correctamente. Solicitud aprobada.	1905 Caja 1	Of. de Prefecto de Moquegua a Director de Guerra	04-04-1905
Piura	Piura Cercado	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por rectificación de registros militares de 1903.	EMG, 18-03-1904 Informa que los registros de 1903 se encuentran incompletos e incorrectos.	1904 Caja 15	Of. de Prefecto de Cajamarca a Director de Guerra	13-01-1904
Piura	Ayavaca	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por trabajos de registros de inscripción 1903.	EMG, 1-1-11-1903: Documentos incorrectos e incompletos. Solicitud denegada.	1903 Caja 4	Expediente de Subprefecto	08-09-1903
Puno	Sandia	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por elaboración de registros militares de 1904.	Contaduría del Ejército, 21-08-1905. Indica que no se ha abonado gratificación, pero que es merecida. Solicitud aceptada.	1905 Caja 1	Of. de Prefecto de Puno al Director de Guerra	03-08-1905
Tumbes	Tumbes	Subprefecto solicita gratificación (S/. 100) por el elaboración de registros militares de 1904.	EMG, s/f Informa registros militares correctos. Solicitud aceptada.	1905 Caja 1	Of. de Prefecto de Tumbes a Director de Guerra	07-02-1905

Fuente. Archivo Histórico Militar, años 1901-1906. Cuadro de elaboración propia.

Anexo N.º 7
Relación de los individuos de tropa del Escuadrón N.º 1 para quienes se solicita pasajes desde Cajamarca hasta los lugares que se indican

Clases	Nombres	Motivos de baja	Lugares a donde se trasladan
Sargento 2º	Ernesto Duran	Tiempo cumplido	Lima
Sargento 2º	Anselmo Valenzuela	Id.	Lima
Cabo 1º	Domingo Acha	Id.	Lima
Cabo 2º	César Alva	Id.	Lima
Id.	José Rimero	Id.	Lima
Id.	Manuel Marquina	Id.	Lima
Id.	Mariano Delgado	Id.	Lima
Id.	Nicolás Urbina	Id.	Lima
Id.	Froylan Tirado	Id.	Lima
Soldado	Claudio Mestanza	Id.	Lima
Id.	José Aldave	Id.	Lima
Id.	Roberto Barreto	Id.	Lima
Id.	Demetrio León	Id.	Lima
Id.	Manuel Cotito	Id.	Lima
Id.	Leonardon Callapa	Id.	Lima
Id.	José Mercedes Carrillo	Id.	Lima
Id.	Alfredo Jiménez	Id.	Lima
Id.	José Talavera	Id.	Lima
Sargento 2º	Nicolás Barrera	Id.	Lima
Soldado	Juan M. Arosemena	Id.	Lima
Id.	Juan M. Unca	Id.	Extranjero
Id.	Irais Mendoza	Id.	Lima
Id.	Abrahan Guerrero	Id.	Lima
Id.	Manuel Acevedo	Extranjero	Lima
Id.	Manuel N. Portales	Tiempo cumplido	Lima
Id.	Enrique Távora	Id.	Lima
Id.	Simón Naupari	Id.	Lima
Id.	Aristides Vallejos	Id.	Lima
Cabo 1º	Rufino Zevallos	Id.	Arequipa
Soldado	Pedro Cornejo	Id.	Arequipa
Id.	Agustín Cornejo	Id.	Arequipa
Id.	Simón Ramos	Id.	Arequipa
Id.	Máximo Velazco	Id.	Arequipa
Id.	Francisco Sánchez	Id.	Arequipa
Sargento 2º	Domingo Salízar	Id.	Cuzco
Soldado	Julio N. Alvarez	Id.	Cuzco
Id.	Ramón Arce	Id.	Ayacucho
Id.	Juan Castillo	Id.	Ayacucho
Sargento 2º	Fidel Aymar	Id.	Piura
Soldado	Manuel Yance	Viejo	Piura
Id.	Manuel Ramos	Tiempo cumplido	Chincha
Id.	Alejandro Olavio	Id.	Huancavelica
Id.	Alejandro Hurtado	Id.	Moquegua
Id.	Manuel Araujo	Id.	Huancayo
Sargento 1º	Manuel Rodríguez	Id.	Ica
Soldado	Juan Ascarrenaga	Id.	Tarma
Id.	Agustín Aguilar	Falta de talla	Chiclayo
Id.	Eugenio Suarez	Id.	Huacho

Fuente. AHMP, 1901, Caja N.º 8, “Relación de los individuos de tropa del Escuadrón N.º 1 para quienes se solicita pasajes desde Cajamarca hasta los lugares que se indican”, del 8 de octubre de 1901.

Anexo N.º 8
Estado del personal de las Fuerzas de Policía de la República que
existen en la actualidad: Guardia Civil

Guardia civil										
Departamentos	Comisarios	Jefes Superiores	Inspectores Superiores	Mayores de Guardias	Inspectores de Sección	Inspectores	Inspectores de Orden	Subinspectores	Guardias	Totales
Amazonas				1				4	36	36
Ancash				1		1		7	48	48
Apurímac				1				4	18	18
Ayacucho				1				4	36	36
Arequipa	1	1		3		15			198	198
Cajamarca				1				4	30	30
Callao		1		2		4		14	108	108
Cuzco				1		1		7	78	78
Huancavelica				1				4	24	24
Huánuco				1				4	18	18
Ica				1		1		7	48	48
Junín				1		1		4	40	40
Lambayeque				1		1		7	48	48
Libertad				1		1		7	72	72
Lima: Columna A	1		3		10		100			100
Lima: Columna B	1		3		10		100			100
Lima: Columna C	1		3		10		115			115
Lima: Columna D	1		3		10		118			118
Lima: Columna E	1		3		10		109			109
Chorrillos				1		2		3	54	54
Huarocharí								1	12	12
Loreto				1		1		11	68	68
Moquegua				1				4	24	24
Piura				1		2		7	48	48
Puno				1		2		13	96	96
Totales	6	2	15	22	50	32	542	116	1104	1646

Fuente. Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta á la Legislatura Ordinaria de 1896. Lima: Imprenta de “El País”, 1896.

Anexo N.º 9
Estado del personal de las Fuerzas de Policía de la República que
existen en la actualidad: Gendarmes de Caballería

Gendarmes de Caballería											
Departamentos	Tenientes Coroneles	Sargentos Mayores	Capitanes	Tenientes	Alférez y Subtenientes	Sargentos Primeros	Sargentos Segundos	Cabos Primeros	Cabos Segundos	Soldados	Totales
Amazonas			1	1	1	1	2	2	2	18	25
Ancash			1	1	2	1	4	4	4	27	40
Apurímac			1	1	1	1	2	2	2	13	20
Ayacucho			1	1	2	1	4	4	4	22	35
Arequipa		1	1	2	3	1	4	6	7	62	80
Cajamarca			1	1	2	1	4	4	4	37	50
Callao			1	1	2	1	4	4	4	37	50
Cuzco			1		2	1	4	4	4	37	50
Huancavelica			1	1	1	1	2	2	2	18	25
Huánuco			1	1	1	1	2	2	2	18	25
Ica			1	1	2	1	4	4	4	27	40
Junín			1	1	2	1	4	4	4	27	40
Lambayeque			1	1	1	1	2	3	2	24	32
Libertad			1	1	2	1	4	4	4	37	50
Lima Infantería	1	1	2	5	4	2	9	8	10	91	120
Lima Caballería	1	3	6	7	15	9	24	30	24	222	309
Loreto-infantería			1	1	2	1	2	4	4	29	40
Moquegua			1	1	1	1	2	2	2	18	25
Piura			1	1	2	1	4	4	4	27	40
Puno			1	1	2	1	4	4	4	37	50
Tacna			1	1	1	1	2	2	2	18	25
Chanchamayo				1			1	1	1	7	10
Frontera de Bolivia				1			1	2	2	10	15
Totales	2	5	27	34	51	30	95	106	102	863	1196

Fuente. Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta á la Legislatura Ordinaria de 1896. Lima: Imprenta de "El País", 1896.

Anexo N.° 10

Armamento de Guerra disperso. Departamentos (1896-1899)

Departamento	Provincias	Distrito	Año	Presencia de Armas	Fecha	Fuente
Amazonas	Luya	Varios	1897	Vecinos de Yamón, Lonya Grande y Ocalli posee armas del Estado.	22-03-1897	AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto de Amazonas al Ministro de Gobierno", del 22-03-1897.
	Luya	Lonya	1899	Existencia de banda armada.	17-12-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Copia certificada de Decreto de prefectura", del 17-12-1899.
	Luya	Yamon	1899	Ataque al gobernador por bandoleros venidos de Chota.	09-05-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Copia certificada de Decreto de Prefectura", del 09-05-1899.
	Luya	Bagua	1899	Bandoleros con armas de precisión atacan a viajeros en el puerto de Huanguerilla.	07-06-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Copia certificada de oficio de gobernador de Bagua al Prefecto", de 07-06-1899.
Ancash	Cajatambo	Congas	1896	Se acusa a Rufino Cabanillas de ocultar armas del Estado.	05-12-1896	BNP, DS804, "Sobre la denuncia formulada por el Subprefecto de Cajatambo respecto a la posesión de armas de unos vecinos de Cajatambo".
Arequipa	Islay		1896	Se informa armas del Estado en poder de particulares.	02-05-1896	AGN H-5-2164, "Memoria del Subprefecto de Islay". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896.
	Condesuyos		1896	Se informa armas del Estado en poder de particulares.	01-05-1898	AGN H-5-2164, "Memoria del Subprefecto de Condesuyos". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896.
Apurímac	Antabamba	Huaquirca	1897	Vecinos armados con carabinas atacan al Juez de Paz.	15-12-1897	AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Apurímac, "Of. del Prefecto de Apurímac al Director de Gobierno", del 15-12-1897.
	Cotabambas		1899	Armas en posesión de particulares.	04-01-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Apurímac, "Of. del Prefecto de Apurímac al Director de Gobierno", del 04-01-1899.
	Andahuaylas	Huancarama	1899	Presencia de montoneros Constantino Flórez y Maximiliano Hermosa.	21-10-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Copia de oficio de Subprefecto Anahuaylas al Félix A. Tello (Jefe de Columna Chincheros)", del 21-10-1899.
Ayacucho	Huanta		1896	Diversas comunidades poseen armamento de guerra empleado para la toma de la ciudad.		AHMP, Documentos donados al CEHMP por el R.P. Ruben Vargas Ugarte, Legajo N.º 8, "Memorandum de la Pacificación de las Provincias de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno".
	Lucanas	Puquio	1897	Se acusa a Nicasio Arangoitia de poseer armas del Estado.	18-04-1897	AGN, MI, Paq. 50, Particulares, "Of. del Subprefecto de Lucanas al Director de Gobierno", del 21-04-1897.
	Lucanas	Puquio	1897	Existencia de hombres armados con rifles a las afueras del Distrito.	29-05-1897	AGN, MI, Paq. 50, Particulares, "Petición de propietarios y vecinos de Puquio al Presidente", del 29-05-1897.
Cuzco	Chumbivilcas	Levitaca	1899	Posesión de armas del Estado por Daniel y Nicolás Espinoza y Carlos Zúñiga.	02-02-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Cuzco, "Of. de Subprefecto de Chumbivilcas al Prefecto", de 02-02-1899.
	Chumbivilcas		1899	Aparición de montera de veinte hombres armados a favor de Cáceres.	24-09-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Cuzco, "Copia certificada de of. de Subprefecto, de Chumbivilcas al Prefecto", del 24-09-1899.
Cajamarca	Hualgayoc	San Gregorio	1896	Población de San Gregorio posee armas desde la última guerra civil.	19-10-1896	AGN, MI, Paq. 41, Particulares, "Expediente promovido por vecinos de los pueblos Viejo y Nuevo San Gregorio...".
	Hualgayoc	San Gregorio	1897	Bandoleros de San Gregorio liderados por Jacinto Espinoza.	07-08-1897	AGN, MI, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 07-08-1897.
	Contumaza		1897	Hacendado Felipe Iglesias posee dos rifles Manlicher.	13-06-1897	AGN, MI, Paq. 46, Subprefecturas, "Of. del Subprefecto de Contumazá al Prefecto de Cajamarca", del 16-07-1897.

	Chota	Jacobamba	1898	Partida de hombres con armas del Estado.	04-04-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 04-04-1898.
	Cajamarca	Asunción	1898	Particulares disponen de armas del Estado y atacan autoridades.	09-05-1898	AGN, MI, Paq. 52, "Prefecturas, Cajamarca. Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 09-05-1898.
	Cajabamba		1898	Montoneros al mando de Agustín Verástegui.	3108-1898	AGN, MI Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 31-08-1898.
	Contumazá		1898	Montoneros liderados por Manuel Rodríguez.	31-08-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 31-08-1898.
	Celendín		1898	Montoneros liderados por un individuo apellidado Estrada.	24-08-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 24-08-1898.
	Jaén		1898	Montoneros liderados por Natividad Castillo.	29-08-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-08-1898.
	Chota		1899	Denuncia de posesión de armas de guerra a Wenceslao Villacorta en su hacienda Chetilla.	24-04-1899	AGN, MI, Paq. 64 Particulares, "Expediente de solicitud de Wenceslao Villacorta contra exgobernador Práxedes Espejo", del 24-04-1899.
	Chota	Cachén	1899	Presencia en el pueblo de Tocmoche de una montonera con armas de guerra y escopetas.	16-10-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Lambayeque, "Of. del Prefecto de Lambayeque al Director de Gobierno", del 16-10-1899.
	Chota	Cochabamba	1899	Presencia de las montoneras de José Manuel Rodríguez y Wenceslao Villacorta.	12-10-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno", del 12-10-1899.
	Cajamarca	Cajamarca	1899	Presencia de montonera liderada por Guerrero en el pueblo de Huatun	17-10-1899	AGN, MI, Paq. 64, Subprefecturas, "Of. Subprefecto de Pacasmayo al Ministerio de Gobierno", del 24-10-1899.
	Hualgayoc		1899	Presencia de la montonera de Agustín Verástegui.	20-12-1899	AGN MI, Paq. 64, Subprefecturas, "Of. Subprefecto de Hualgayoc al Ministerio de Gobierno", del 20-12-1899.
	Contumazá		1899	Presencia de montonera liderada por Reaño en Contumazá dirigiéndose al distrito de Cascas.	01-12-1899	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 01-12-1899.
Huancavelica	Castrovirreyna	San Pedro/Chavin/Huangascar	1897	Posesión y préstamo recíproco de armas entre los tres pueblos.	24-06-1897	AGN, MI, Paq. 46, Prefecturas, Lima, "Of. de Subprefecto de Yauyos al Prefecto de 24-06-1897".
	Castrovirreyna	Arma	1898	Armas del Estado en posesión de particulares.	29-10-1898	AGN, MI, Paq. 53, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto de Huancavelica al Director de Gobierno", del 29-10-1898.
	Castrovirreyna	Huachos	1898	Armas del Estado en posesión de particulares.	29-10-1898	AGN, MI, Paq. 53, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto de Huancavelica al Director de Gobierno", del 29-10-1898.
	Huancavelica	Huancavelica	1899	Montonera intenta tomar la ciudad y se dispersa en diversos distritos del departamento.	17-09-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto de Huancavelica al Director de Gobierno", del 17-09-1899.
	Huancavelica	Moya	1899	Posesión de armas del propietario Mariano Egas.	11-11-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Subprefecto de Huancavelica al Prefecto", del 11-11-1899.
	Huancavelica	Vilca	1899	Posesión de armas de hermanos apellidados Sanes.	11-11-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Subprefecto de Huancavelica al Prefecto", del 11-11-1899.
Huánuco	Huamalíes	Monzón	1897	«Revoltosos» armados que cometieron un atentado en Monzón.	11-04-1897	AGN, MI, Paq. 44, Prefecturas, Huánuco, "Of. del Subprefecto de Huamalíes al Prefecto de Huánuco", del 11-04-1897.
	Huamalíes	Obas	1897	Presencia de treinta hombres armados en Obas.	11-04-1897	AGN, MI, Paq. 44, Prefecturas, Huánuco, "Of. del Subprefecto de Huamalíes al Prefecto de Huánuco", del 11-04-1897.
	Dos de Mayo		1896	Presencia de bandoleros.	15-07-1896	AGN H-5-2164, "Memoria del Prefecto de Huánuco". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa..." [Sin pie de imprenta], 1896.

	Dos de Mayo	La Unión	1897	Habitantes de La Unión asaltan comerciantes provenientes de Huamalíes.	11-04-1897	AGN, MI, Paq. 44, Prefecturas, Huánuco, "Of.del Subprefecto de Huamalíes al Prefecto de Huánuco", del 11-04-1897.
	Huamalíes	Obas	1897	Comunidad de Obas posee armas de precisión y sustrajó ganado.	09-03-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huánuco, "Of.de del Jefe de la Guardia Civil Luis B. Castillo al Prefecto", del 09-03-1899.
		Pozuzo	1898	Denuncia a Ismael Ballesteros y una banda armada de ataque y robo a la familia Uriarte con carabinas Winchester y escopetas.	03-11-1898	AGN, MI, Prefecturas, Paq. 61, Loreto, "Solicitud de Manuel Iriarte por ataque y robo de banda de Ismael Ballesteros", del 13-12-1898.
	Huánuco	Panao	1899	Individuos encabezados por Ismael Ballesteros se encuentran acopiando armas y cometiendo abusos.	05-04-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huánuco, "Of.del Prefecto de Huánuco al Director de Gobierno", del 05-04-1899.
	Huánuco	Huánuco	1899	Montoneros de Augusto Durand tomaron la ciudad de Huánuco y el pueblo de Ambo.		AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Junín, "Of.de del Prefecto de Junín al Director de Gobierno", del 17-08-1899.
	Dos de Mayo	La Unión	1899	Hacendado Jorge Eonofre del pueblo de Jesús tiene armas de precisión y ataca a otros propietarios rivales.	13-06-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huánuco, "Solicitud de José, Ambrosio y Tomás Falcón al Subprefecto", del 25-06-1899.
Ica	Chincha		1896	Bandoleros merodean entre Chincha y Cañete.		AGN H-5-2164, "Memoria del Prefecto de Ica". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896.
	Chincha		1898	Bandoleros merodean Chincha.	10-03-1898	AGN, MI, Paq. 53, Prefecturas, Ica, "Of.del Prefecto de Ica al Director de Gobierno", del 10-03-1898.
	Chincha		1899	Presencia de bandoleros en la Quebrada de San Juan.	20-06-1899	AGN, MI, Paq. 64, Subprefecturas, "Of. Subprefecto de Cañete al Director de Gobierno", del 20-06-1899.
	Chincha		1899	Montonera encabezada por Felipe Santiago Oré.	07-10-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Ica, "Of.del Prefecto José Olaechea al Director de Gobierno", del 07/11/1899.
Junín	Huancayo	Pariahuanca	1896	Comunidades de Punto armados de rifles y palos tomaron hacienda Llacasapirca.	26-03-1896	AG, MI, Paq. 49, Particulares, "Expediente de Emilia Montano propietaria de Llacasapirca", del 15-05-1897.
	Huancayo	Sicaya	1898	Presencia de la una montonera liderada por Bartolomé Guerra y José Gavino Esponda.	11-10-1898	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Junín, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 11-10-1899.
	Cerro		1899	Grupo sospechoso aliado con Aurelio Woolcott de quien se sabe posee armas de guerra.	31-07-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Junín, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 31-07-1899.
La Libertad	Pacasmayo		1897	Veinte hombres armados en las cercanías de la provincia.	19-06-1897	AGN, MI, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 19 y 26-06-1897.
	Huamachuco	Marcabal	1896	Bandoleros Hermanos Cárdenas poseen 4 armas de guerra.	21-06-1896	AGN, MI, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno".
		Mollepata	1896	Exgobernador cacerista Mercedes Paredes posee treinta rifles del Estado.	17-12-1896	AGN, MI, Paq. 49, Particulares, "Expediente de Mercedes Paredes vecino de Mollepata", del 31/08/1896.
	Huamachuco		1899	Montonera de Domingo Cruzado merodea la provincia de Huamachuco.	10-10-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno", del 10-10-1899.
Lambayeque	Lambayeque		1896	Presencia de Bandoleros con armas del Estado.	01-07-1898	AGN H-5-2164, "Memoria de José M. Rodríguez Prefecto de Lambayeque". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [sin pie de imprenta], 1896.
	Lambayeque		1897	Montonera organizada por los militares y hermanos Villar con armas de guerra.	18-06-1897	AGN, MI, Paq. 49, Particulares, "Expediente de Marcelino Carrera, Sgto. Mayor indefinido", del 06-07-1897.
	Lambayeque		1898	Presencia de bandas armadas que cometen extorsiones en el departamento.	21-09-1899	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Lambayeque, "Of. de Prefecto de Lambayeque al Director de Gobierno", del 21-09-1899.
	Lima	Lima	1896	Recojo de 72 armas de distintos sistemas.	27-02-1896	<i>El Comercio</i> . Lima, 27-02-1896, edición tarde.
	Callao		1896	Recojo de importante cantidad de armamento.	Varias fechas	AGN H-5-2164. "Memoria de Ernesto Zapata Prefecto de Prov. de Callao". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896.

Lima	Yauyos	Chupamarca	1897	Vecinos poseen armas de guerra tipo chispa y escopetas.	24-06-1897	AGN, MI, Paq. 46, Prefecturas, Lima, "Of. de Subprefecto de Yauyos al Prefecto", del 24-06-1897.
	Yauyos	Viñac	1897	Vecinos poseen dos armas de guerra.	24-06-1897	AGN, MI, Paq. 46, Prefecturas, Lima, "Of. de Subprefecto de Yauyos al Prefecto", del 24-06-1897.
	Canta	Baños	1899	Vecinos de Baños en conflicto con los de Yantac usando armas de guerra.	23-01-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Lima, "Of. de Subprefecto de Canta al Prefecto", del 23-01-1899.
Moquegua			1899	Requisita de armamento de guerra de diversos sistemas por el Prefecto.	27-11-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Moquegua, "Of. del Prefecto de Moquegua al Director de Gobierno", del 27-11-1899.
Piura	Tumbes		1898	Bandoleros provenientes de Lambayeque.	16-05-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto de Piura al Director de Gobierno", del 16-05-piura-1898.
	Tumbes	Zarumilla	1898	Hacendado posee armas en su fundo, se tiene noticia de armas en diversos pueblos y haciendas.	10-08-1898	BNP, D4543, "Informe elevado a la Prefectura del Departamento de Piura por el Subprefecto de la provincia de Piura-Piura", agosto 10 de 1898.
	Paita		1898	Emigrados ecuatorianos compran armas.	15-06-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Copia de Of. del Consul de Ecuador en Piura al Prefecto", del 15-06-1898.
	Piura		1898	Emigrados ecuatorianos compran armas.	15-06-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Copia de Of. del Consul de Ecuador en Piura al Prefecto", del 15-06-1898.
	Piura	Tambogrande	1898	Informaciones referentes a entrega de armas de hacendados de Tambogrande entregaron armas a montoneras de Eloy Castro.	08-08-1898	BNP, D4543, "Informe elevado a la Prefectura del Departamento de Piura por el Subprefecto de la provincia de Piura-Piura", agosto 10 de 1898.
	Piura	Piura	1898	Informaciones de ciudadanos armados para subvertir orden público.	10-08-1898	BNP, D4543, "Informe elevado a la Prefectura del Departamento de Piura por el Subprefecto de la provincia de Piura-Piura", Agosto 10 de 1898.
	Ayabaca	Ayabaca	1898	Hacendados Eloy Castro, Eduardo Merino y pueblo de Ayabaca poseen armas de guerra.	15-08-1898	BNP, D4540, "Parte del Combate de Ayabaca".
		Querocotillo	1898	Individuo Agustín Campo posee de diez a doce rifles.	10-08-1898	BNP, D4543, "Informe elevado a la Prefectura del Departamento de Piura por el Subprefecto de la provincia de Piura-Piura", agosto 10 de 1898.
	Huancabamba		1898	Montoneros liderados por un individuo apellidado Morante.	29-08-1899	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-08-1898.
	Huancabamba	Huancabamba	1899	Ataque de bandoleros con carabinas, escopetas y revólver, exigiendo entrega de armas.	31-08-1899	AGN, MI, Paq. 62, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-08-1898.
Puno	Azángaro		1896	Prefecto informa que existen armas del Estado en manos de particulares en varias provincias del departamento.	15-07-1898	AGN H-5-2164, "Memoria del Prefecto de Puno". En "Memoria del Prefecto de Lima...".
		Azángaro	1899	Montonera revolucionaria liderada por José M. Lizares atacó la Subprefectura de Azángaro e intentó tomar la ciudad.	20-07-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 20-07-1899.
		Putina	1899	Posesión de armas de precisión del hacendado Melchor Figueroa en su finca Canco, vinculado a la revolución de Lizares.	25-07-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Copia de of. del Subprefecto de Azángaro al Prefecto", del 02-08-1899.
	Huancané		1899	Traslado de armas de guerra a hacienda Piñani propiedad de Víctor Lino, donde estuvieron revolucionarios de Azángaro.	23-08-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 23-08-1899.

Anexo N.º 11

Política nacional de recojo de armamento

Departamento	Provincias	Distrito	Año	Acción para recojo y control de armas de guerra	Resultado	Fecha	Fuente
Amazonas	Luya		1897	Vecinos de Yamón, Lonya Grande y Ocalli posee armas del Estado.	Se envió una comisión para el recojo de armas, indicándose haberse recojido algunas (no se especifica el número) en el distrito de Yamón y Lonya Grande.	22-03-1897	AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto de Amazonas al Ministro de Gobierno", del 22-03-1897.
	Luya	Yamón	1899	Persecución para captura y desarme de bandoleros que poseen rifles de precisión liderados por Guillermo Oblitas.			AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 09-05-1899; "Copia de Of. del Prefecto al Subprefecto de Luya", del 08-05-1899.
	Luya	Bagua	1899	Persecución de bandoleros que amenazaban Bagua provenientes del distrito de Bellavista (provincia de Jaén).		07-07-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 07-07-1899.
			1900		Captura de líderes de la montonera de José María Matheus y Dionisio Merino.	02-03-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 02-03-1900.
			1900		Derrota de una montonera a órdenes de Amaro La Rosa en el pueblo de Molinopampa.	23-04-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 02-05-1900.
Ancash	Cajatambo		1899	Persecución de montoneras a favor de Durand armadas de rifles de precisión.		20-10-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Ancash, "Of. del Comandante de la Columna Vanguardia al Director de Gobierno", del 21-10-1899.
	Cajatambo		1899	Derrota de la montonera liderada por Toribio Garro en el pueblo de Churín.	Se tomaron bestias, armas y municiones en poca cantidad (no se especifica el número).	27-10-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Ancash, "Of. del Comandante de la Columna Vanguardia al Director de Gobierno", del 27-10-1899.
	Cajatambo			Publicación de Bando ordenando la entrega de armas por parte de los particulares multando a quienes las retengan y ofreciendo recompensa a los que lo denuncien.		12-06-1902	AGN, MI, Paq. 82, Prefecturas, Ancash, "Bando del Subprefecto de Cajatambo", del 12-06-1902.
Apurímac	Abancay		1899	Publicación de Bando ordenando la entrega de armas y municiones de propiedad del Estado en manos particulares		14-11-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Apurímac, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 14-11-1899.
	Cotabambas		1899	Subprefecto Federico Lora y Otoyá ha reunido gran cantidad de armas de particulares.	Las armas no habían sido entregadas al Prefecto.	04-01-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Apurímac, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 04-01-1899.
	Cotabambas		1899	Subprefecto A. Latorre acusado de emplear el recojo de armas para atacar a rivales políticos.		03-05-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Apurímac, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 03-05-1899.
	Antabamba	Huáquirca	1897	Vecinos armados con carabinas atacan al Juez de Paz cuando el Subprefecto se ausentó de la prov. para solicitar fuerzas para el recojo de armamento.	Se tomaron prisioneros a varios de los atacantes y se logró requisar seis carabinas.	15-12-1897	AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Apurímac, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 15-12-1897.
	Andahuaylas		1899	Se procedió a la dispersión de la montonera liderada por José C. Gonzáles.	Se logró recoger parte del armamento de la montonera (no se especifica el número).	22-10-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Of. del Prefecto a Félix Amador Tello, Jefe de la Columna Chincheros", del 22-11-1899.
	Andahuaylas		1899		Desarme de la Columna Chincheros, formada por civiles contra su voluntad.	11-12-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Of. de Félix Amador Tello, Diputado por la Provincia de Andahuaylas al Ministro de Gobierno", del 11-12-1899.
	Aimaraes		1900	Propuesta de desarme de la Columna Aimaraes compuesta por civiles armados favorables al Gobierno.		27-01-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Apurímac, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 27-01-1900.
Arequipa	Arequipa		1896	Prefecto informa haber remitido fondos a los subprefectos para que compren armas de guerra en posesión de particulares.			AGN, H-5-2164, "Memoria que presenta al Ministro de Gobierno y Policía el Dr. Alejandro L. de Romaña", de 1896. En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...".[Sin pie de imprenta], 1896, p. 11.

	Condesuyos		1896	Se publicó bando ordenando la entrega de armas retenidas por particulares.	Se enviaron al Prefecto ocho rifles que poseían los particulares.		AGN, H-5-2164, "Memoria que presenta al Ministro de Gobierno y Policía el Dr. Alejandro L. de Romaña", de 1896. En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896, p. 11.
	Islay		1896	Se publicó bando ordenando la entrega de armas retenidas por particulares.	Se recuperaron un rifle Winchester y una carabina Remington.		AGN, H-5-2164, "Memoria que presenta al Ministro de Gobierno y Policía el Dr. Alejandro L. de Romaña", de 1896. En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896, p. 11.
		Pampacolca	1899	Destrucción de la montonera Octavio Negrete, por una sección del Escuadrón Libertad y con el apoyo de «ciudadanos armados» de Virac y Pampacolca.		07-08-1899	AGN, MN, Paq. 59, Prefecturas, Arequipa, "Copia de Of. del Gobernador de Pampacolca al Prefecto de Arequipa", del 08-08-1899; "Of. de Prefecto al Directo de Gobierno", del 11-08-1899.
Ayacucho	Huanta		1896-1897	Pacificación de la provincia por la división a las órdenes de Domingo Parra, enviado a rendir y desarmar a las comunidades de Huanta.	Persecución de los líderes guerrilleros de las comunidades de Huanta y requisa de importante cantidad de armas de guerra. No se especifica el total de armas obtenidas		CEHMP, Documentos donados por el R.P. Ruben Vargas Ugarte, Legajo N.º 8 "Memorandum de la Pacificación de las Provincias de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno".
	La Mar				Persecución de los líderes guerrilleros de las comunidades de Huanta y de su aliado M. Lazón.		CEHMP, Documentos donados por el R.P. Ruben Vargas Ugarte, Legajo N.º 8 "Memorandum de la Pacificación de las Provincias de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno".
	Huanta		1900	Ataque a un civil por otros individuos. Se envió soldados al fundo de uno de los atacantes, los que fueron recibidos a balazos.	Se logró tomar un rifle Manlicher y un revólver.	11-01-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Ayacucho, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 11-01-1900.
			1900	Remite al Director de Gobierno un listado del armamento recuperado a particulares.	Se indica dos rifles Manlicher, una carabina, treinta rifles Remington 43, dieciséis rifles Remington recortados, doce rifles Remington 50, nueve rifles Peabody, seis rifles Peabody recortados, nueve rifles Comblain y una gran cantidad de municiones.	25-01-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Ayacucho, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 25-01-1900.
			1902		Informa haber recogido 24 armas que estuvieron en posesión de particulares (de ellas once rifles y cuatro carabinas de precisión).		"Memoria del Prefecto de Ayacucho J. Álvarez Paez", del 5 de junio de 1902. En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta al Congreso". Lima: Imprenta del Estado, 1902, p. 31.
	Lucanas		1897	Se toma preso al Alcalde de Lucanas por sindicarle poseedor de armas del Estado e implicado en un motín en la ciudad.		27-05-1897	AGN, MN, Paq. 50, Particulares, "Recurso de Nicasio Arantioita, alcalde la provincia de Lucanas al Director de Gobierno", del 27-05-1897.
Cajamarca	Hualgayoc	San Gregorio	1895	Se ordenó al Subprefecto el recojo de armas y municiones del Estado de los pueblos de Nuev y Viejo San Gregorio.	No se pudo realizar porque los habitantes marcharon a la jurisdicción del dep. de La Libertad.		AGN, MI, Paq. 41, Particulares, "Expediente de los vecinos de Nuevo y Viejo San Gregorio", del 18-10-1896, ff. 8-9.
	Hualgayoc	San Gregorio	1897	Coordinación con fuerzas del dep. de La Libertad para el ataque de los bandoleros del San Gregorio liderados por Jacinto Espinoza.	No se pudo atraparlos debido a que marcharon a la costa.	15-08-1897	AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Cajamarca, "Copia del Of. del Subprefecto de Hualgayoc al Prefecto", del 19-08-1897.
	Hualgayoc		1899	Persecución de las montoneras de W. Villacorta por parte del Subprefecto de Hualgayoc.			AGN, MI, Paq. 64, Subprefecturas, "Of. del Subprefecto de Hualgayoc al Ministro de Gobierno", del 20-12-1899.
	Cajamarca	San Marcos	1899	Derrota de la montonera liderada por Santos Llerena en el caserío de La Laguna.	La población dio muerte a Santos Llerena y desarmó a cinco de sus hombres.		AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Telegrama del Prefecto de Cajamarca al Ministro de Gobierno", del 12-10-1899.

	Chota		1897	Subprefecto viene realizando medidas para el recojo de armas en la provincia.		06-09-1897	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca."Copia de Of. de Subprefecto de Chota al Prefecto", del 06-09-1897.
	Chota		1898	Se envió un destacamento para recoger armas de guerra en posesión del hacendado Wenceslao Villacorta.	La comisión fue repelida a balazos desde la hacienda Chetilla de Villacorta, luego se procedió a negociar rendición de Villacorta.	01-08-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 01-08-1898 y del 29-08-1898; AGN, MI, Paq. 64, Particulares, "Solicitud de W. Villacorta", del 24-04-1899.
	Chota	Cachén	1899	Derrota de montonera en el pueblo de Tocmoche.	Muerte de dos montoneros, toma de monturas, una carabina Peabody, una escopeta y cincuenta tiros.		AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Lambayeque, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 01-10-1899.
	Chota	Cochabamba	1899	Persecución de las montoneras de Rodríguez y W. Villacorta.			AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Telegrama del Prefecto Cajamarca al Ministro de Gobierno", del 12-10-1899.
	Celendín		1900	Derrota total de la montonera liderada por A. Verástegui.	Muerte de Verástegui y otros montoneros. Se les tomó «gran cantidad de armas» (no se especifica el número).	30-12-1899	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Boletín Oficial. Cajamarca", del 03-01-1900.
	Contumazá	Cascas	1898	Persecución de las montoneras de José Manuel Rodríguez, titulado delegado de dep. de La Libertad, Cajamarca y Huaráz.		31-08-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 31-08-1898.
	Contumazá		1899		Captura de los montoneros Miguel y Alfonso Mendoza, aunque Miguel logró escapar.	17-02-1899	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 22-12-1899.
	Contumazá		1900	Persecución y derrota de la montonera de Cleto Hoyos y Francisco Reaño.	Derrota y dispersión de la montonera.	16-01-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 16-01-1900.
	Cajabamba		1898	Persecución de las montoneras de Agustín Verástegui.		31-08-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 31-08-1898.
	Cajamarca	Asunción	1900	Toma del pueblo de Huatun, lugar de reunión de montoneras.		14-01-1900	AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 16-01-1900.
	Cajamarca		1901	Captura de miembros de la montonera de Daniel Díaz.	Se ha recogido siete carabinas en poder de los miembros de dicha montonera.	15-02-1901	AGN, MI, Paq. 74, Prefecturas, Cajamarca, Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 15-02-1901.
	Jaén		1898	Persecución de montoneras lideradas por José N. Castillo.	Muerte del líder, toma de varios prisioneros, requisas de víveres y bestias.	10-11-1898	AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 10-11-1898.
Cuzco	Chumbivilcas		1899	Se dispuso la captura de Daniel y Nicolás Espinoza denunciados como poseedores de diez armas del Estado.	Se capturó a Daniel Espinoza.	02-02-1899	AGN, MN, Paq. 60, Prefecturas, Cuzco, "Of. del Subprefecto de Chumbivilcas al Prefecto", del 02-02-1899.
	Chumbivilcas-Cotabambas		1899	Se envió una fuerza de cien para derrotar la montonera formada en Cotabambas y que ha marchado a Chumbivilcas.		30-09-1899	AGN, MN, Paq. 60, Prefecturas, Cuzco, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 30-09-1899.
	Cuzco		1899		Informa haber enviado a Lima 116 fusiles y envía 69 adicionales recojidos a particulares.	08-06-1899	AGN, MN, Paq. 60, Prefecturas, Cuzco, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 08-06-1899.
Huancavelica	Castrovirreyna	Huachos-Armas	1898	Prefecto marcha para recoger armas del Estado en posesión de particulares en los distritos de Huachos y Armas.		29-10-1898	AGN, MI, Paq. 53, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-10-1898.
	Huancavelica		1899	Se rechazó el ataque de la montonera liderada por B. Guerra el 17/09/1899, a favor de Durand.	Se tomaron prisioneros, bestias, armas y municiones.	17-09-1899	AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Ayacucho, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 21-09-1899.

		Moya	1899	El Prefecto se dirigió al distrito de Moya para realizar directamente el recojo de armas.	El Prefecto indica que se han recogido cinco armas de precisión y hay cuatro por recogerse.	01-11-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Subprefecto del Cercado al Prefecto", del 01-11-1899.
	Huancavelica	Moya	1899	Se envió una comisión a los pueblos del distrito para desarmar a los vecinos favorables al ataque de Huancavelica del 17/09.		03-11-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Subprefecto del Cercado al Prefecto", del 11-11-1899.
	Huancavelica		1901	Publicación de Bando ordenando la entrega de armas del Estado a las autoridades del Gobierno ofreciendo gratificación a quienes la entreguen e imponiendo multas a los que las retengan.		21-01-1901	AGN, MI, Paq. 75, Prefecturas, Huancavelica, "Bando del Prefecto", del 21-01-1901.
Huánuco	Huamálies	Llata	1897	Captura de uno de los principales agitadores del Monzón. El Subprefecto indica seguir realizando recojo de armas.	Se logró obtener siete armas.	11-04-1897	AGN, MI, Paq. 44, Prefecturas, Huánuco, "Of. del Subprefecto de Huamálies al Prefecto", del 11-04-1897.
	Dos de Mayo	Obas	1899	Persecución a los pobladores de Obas para recuperación de ganado particular y castigo por los robos.	Resistencia del pueblo de Obas, arresto de dos individuos y recojo de una carabina Remington.	09-03-1899	AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huánuco, "Of. del Jefe de la Guardia Civil al Prefecto", del 09-03-1899.
	Huánuco	Cercado	1900	Publicación de Bando ordenando la entrega de armas del Estado a las autoridades del Gobierno ofreciendo gratificación a quienes la entreguen e imponiendo multas a los que las retengan.		18-12-1899	AGN, MI, Paq. 67, Prefecturas, Huánuco, "Bando del Subprefecto accidental del Cercado", del 18-12-1899.
			1900	Envío de fuerzas para el registro de las haciendas y propiedades de Augusto Durand y sus familiares implicados en la montonera.	No se pudo encontrar el armamento, pero se le impuso una multa a sus dueños, Solicita el Prefecto envío de fuerza para ocupar tales fundos.	08-03-1900	AGN, MI, Paq. 67, Prefecturas, Huánuco, "Of. de Prefecto al Director de Gobierno", del 08-03-1900.
Ica	Chincha		1898	Persecución de bandoleros provenientes de Cañete.		10-03-1898	AGN, MI, Paq. 53, Prefecturas, Ica, "Of. del Prefecto de Ica al Director de Gobierno", del 10-03-1898.
	Chincha	Chincha Alta		Persecución de la montonera liderada por F. S. Oré, por 39 hombres de la Escolta de Gendarmes de Lima, 130 de la Escolta de Húsares de la Guardia y 16 de la Gendarmería de Ica.		05-11-1899	AGN, MN, Paq. 60, Prefecturas, Ica, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 07-11-1899.
	Pisco				Remisión de armas de guerra al Ministerio de Guerra de particulares.	26-07-1899	AGN, MN, Paq. 62, Diversos, "Of. del Administrador de Aduanas de Pisco al Director de Gobierno", del 26-07-1899.
			1901		Envío al Gobierno de 47 armas de diversos sistemas que estaban en posesión de particulares.		"Memoria del Prefecto de Ica Manuel Luna", del 30 de mayo de 1902. En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta al Congreso". Lima: Imprenta del Estado, 1902, p. 45.
			1902		Recojo de dos rifles y una carabina Manlicher en posesión de particulares. Se recuperó de poder de bandidos un rifle Remington y un Comblain.		"Memoria del Prefecto de Ica Manuel Luna", del 30 de mayo de 1902. En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta al Congreso". Lima: Imprenta del Estado, 1902, p. 45.
Junín	Tarma-Huancayo		1898	Persecución de las montoneras de Bartolomé Guerra y Gavino Esponda.	En setiembre de 1898, se tomó armas, caballos y monturas de la montonera de Esponda. Este es atrapado en enero de 1899 en la ciudad de Huancayo.		AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, Junín, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 27-09-1898, 11-10-1898 y 27-01-1899.
	Cerro de Pasco				Captura de Marco a Woolcott por presunción de poseer cuarenta rifles.	25-09-1899	AGN, MN, Paq. 64, Particulares, "Expediente de Marco A. Woolcott al Presidente", del 25-09-1899.

La Libertad			1896	Investigación sobre depósito de armas y municiones del Estado en el monte Nepén, ordenada por el Ministro de Gobierno.	No se encontró el depósito de armamento.	29-09-1896	AGN, MN, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-09-1896.
			1896		Se remitió a la Dirección de Guerra 259 rifles y carabinas de diversos sistemas y 26 778 municiones.		AGN, H-5-2164, "Memoria del Prefecto de La Libertad". En Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad...". [Sin pie de imprenta], 1896, p. 4.
	Pacasmayo		1896	Captura de los diputados Ezequiel Montoya, Pablo M. Pizarro y Tomás Díaz Burga implicados en contrabando de armas de guerra y municiones.	Se decomisó diez armas del Estado y municiones. Los diputados fueron sometidos a juicio, pero se acogieron a la inmunidad parlamentaria.		<i>El Comercio</i> . Lima, 21-02-1896, edición mañana; 28-02-1896, edición mañana; 04-03-1896, edición mañana.
	Pacasmayo		1896	Investigaciones sobre ingreso de armas de guerra por Aduana de Pacasmayo por parte del coronel Arguelles.		04-05-1896	AGN, MN, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 04-05-1896.
	Pacasmayo		1897	Envío de fuerzas para atrapar banda de veinte bandoleros a veinte leguas de la provincia.		19-06-1897	AGN, MN, Paq. 45, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 19-06-1897.
	Pacasmayo		1897	Envío de 25 hombres de Escuadra Libertad para apoyar al subprefecto de Hualgayoc en persecución de bandoleros liderados por Jacinto Espinoza del pueblo de San Gregorio.		21-08-1897	AGN, MN, Paq. 45, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 21-08-1897.
	Huamachuco		1896	Se ha enviado al Escuadron Húsares de Junín para llevar a cabo recojo de armas.	El Prefecto informa que se lleva a cabo el recojo paulatinamente.	16-01-1896	AGN, MN, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 16-01-1896.
	Huamachuco	Marcaval	1896	Persecución a bandoleros Hnos. Cárdenas y Sandoval.	Se tomó una carabina.	01-07-1896	AGN, MN, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 01-07-1896.
	Huamachuco	Mollepata	1896	Iniciativa del Subprefecto Manuel B. Ganoza para que Mercedes Paredes entregue treinta files del Estado.		31-08-1896	AGN, MN, Paq. 49, Particulares, "Recurso de Mercedes Paredes del distrito de Mollepata, provincia de Huamachuco", del 31-08-1896, ff. 1-4.
	Huamachuco	Mollepata	1897	Persecución a la montonera liderada por coronel Domingo Cueto, el Cap. Emilio Távara y el Cmdte. N. Álvarez, coordinando el cerco con el Subprefecto de Pallasca (Ancash).		13-10-1897	AGN, MN, Paq. 45, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 13-10-1897.
	Huamachuco	Huamachuco	1899	Se enviaron fuerzas a perseguir la montonera de Domingo Cruzado, derrotándola en dicha población.	Informa haber muerto dos montoneros, capturado seis, tomado dos espadas, un pistón y parque de guerra.	24-11-1899	AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 24-11-1899.
			1899		Se informa que envía tres rifles y tres carabinas Remington, dos rifles y un carabina Winchester, una carabina Spencer, un rifle y una carabina Grass y una carabina Chaspott, que pertenecieron a Montonera de Rodríguez.	05-06-1899	AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 05-06-1899.
			1902	Persecución de bandoleros encabezados por Manuel Cárdenas.		12-03-1902	AGN, MN, Paq. 83, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 12-03-1902.

			1899	Publicación de Bando ordenando la entrega de armas del Estado a las autoridades del Gobierno ofreciendo gratificación a quienes la entreguen e imponiendo multas a los que las retengan.		11-11-1899	AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Bando del Prefecto de La Libertad", del 11-11-1899.
			1899	El Cmdte. Gral de las fuerzas expedicionarias de La Libertad cortó avanzada de montonera de montonera de Durand, haciéndolo retirarse a Huánuco.		14-10-1899	AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 14-10-1899.
			1900		Envío al Ministerio de Gobierno de noventa armas de diversos sistemas recogidos de particulares.	23-02-1900	AGN, MN, Paq. 68, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 23-02-1900.
Lambayeque			1896	El Prefecto indica que se tomaron medidas para el recojo de armas de guerra en poder de particulares.	Informa que se han tomado «regular número de armas del Estado con sus respectivas municiones». (No especifica la cantidad).		AGN, H-5-2164, "Memoria del Prefecto de Lambayeque, J. M. Rodríguez", del 1 de julio de 1896. En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho...". [Sin pie de imprenta], 1896.
			1897	Registro de armas a los Hnos. Belisario y Grimaldo Villar, las haciendas Tabacal y Batán Grande, donde pernctaron. Los Villar encabezaron una montonera revolucionaria.	La derrota de la montonera se produjo en Jaén donde se tomaron armas y municiones por las fuerzas del Gobierno.	06-07-1897	AGN, MN, Paq. 49, Particulares, "Recurso de Marcelino Carrera Sargento Mayor indefinido a SE el Presidente", Chiclayo, del 06-07-1897.
			1902	Persecución de bandoleros en el desierto de Sechura.			"Memoria del Prefecto de Lambayeque". En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Polician presenta al Congreso". Lima: Imprenta del Estado, 1902, pp. 33-34.
Lima	Callao	Cercado	1896		Envío de 73 armas de guerra de diversos sistemas y municiones recobradas de los particulares.		AGN, H-5-2164, "Memoria de Ernesto Zapata Prefecto de Prov. de Callao". En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho...". [Sin pie de imprenta], 1896, p. 8.
	Lima	Cercado	1896	Publicación de Bando ordenando la entrega de armas de guerra retenidas por particulares.	La Subprefectura envió cien rifles de diversos sistemas al Parque de Santa Catalina entregados por particulares.	05-02-1896	<i>El Comercio</i> . Lima, 05-02-1896, edición tarde.
	Lima	Cercado	1896	Entrega de armas por parte de dos particulares a la Intendencia de Policía.	Cinco carabinas Remington, un rifle Peabody y un rifle Manlicher.	21-02-1896	<i>El Comercio</i> . Lima, 21-02-1896, edición mañana.
	Lima	Cercado	1896		Envío al Cuartel de Santa Catalina de 73 rifles de diversos sistemas poseídos por particulares.	27-02-1896	<i>El Comercio</i> . Lima, 27-02-1896, edición tarde.
	Yauyos	Chupamarca	1897	Recojo de armas de los pobladores de Chupamarca.	Se recojieron once armas de antiguo sistema de chispa.	24-06-1897	AGN, MI, Paq. 46, Prefecturas, Lima, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 24-06-1897.
	Yauyos	Viñac	1897		Se recojieron dos armas.	24-07-1897	AGN, MI, Paq. 46, Prefecturas, Lima, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 24-06-1897.
	Canta	Baños	1899	Arresto de líderes de comunidad de Baños enfrentada a la de Yantac.	Se recogieron dos carabinas sistema Minié, un cañón Minié, una carabina Remington y dos rifles «Peabody» viejos.	23-01-1899	AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Lima, "Of. de Subprefecto de Canta al Prefecto", del 23-01-1899.
Loreto			1897	Investigaciones del Consulado peruano en Pará sobre contrabando de armas en Brasil.	Las datos sobre el contrabando de armas resultaron falsos.	06-05-1897	AGN, MN, Paq. 45, Prefecturas, Loreto, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 06-05-1897.
			1897	Informaciones que en Pará y Manaos se arman grupos revolucionarios a favor de Cáceres.		12-08-1897	AGN, MN, Paq. 45, Prefecturas, Loreto, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 12-05-1897.

	Bajo Amazonas		1898	Publicación de Bando ordenando la entrega de armas del Estado a las autoridades del Gobierno.			AGN, MN, Prefecturas, Paq. 61. Loreto, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29/12/1898.
Moquegua			1899	Se publicó bando ordenando entrega de armas del Estado que posean los particulares.	Se recuperó a Lima 24 armas de diversos sistemas y algunas municiones (no se especifica el número).	27-11-1899	AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, Moquegua, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 27-11-1899.
			1900		Envío a Ministerio de Gobierno de 17 armas de diversos sistemas recogidos a particulares.	17-02-1900	AGN, MN, Paq. 68, Prefecturas, Moquegua, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 17-02-1900.
Piura	Ayabaca		1898	Envío de comisión a Ayabaca para el recojo de armas de guerra que poseían los vecinos.	La comisión fue atacada y capturada por los vecinos, liderados por los hacendados E. Castro y E. Merino.	25-07-1898	BNP, D4540, "Parte del Combate de Ayabaca", Piura, agosto 15 de 1898.
	Ayabaca		1898	Envío a la provincia de Ayabaca de fuerza de Ejército comandada por Crnl. Parra.	Se logró ocupar la capital de la provincia y dispersar a los hombres E. Castro y E. Merino	14-09-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 14-09-1898.
	Paita-Tumbes		1898	Persecución de bandoleros provenientes de Lambayeque.		16-05-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 16/05/1898.
	Piura		1898	Se realizaron investigaciones sobre la internación de armamento por parte del hijo del Cónsul cuatoriano en Tumbes hacia Sullana		14-09-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto de al Director de Gobierno", del 14-09-1898.
	Piura		1898	Se persiguió embarcación que se consideraba llevaba armamento de guerra para las montoneras levantadas en Piura.	No se encontró la embarcación.	14-09-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 14-09-1898.
	Paita		1898	Se capturó el pailebot Liva desembarcando armas y municiones de guerra en el puerto de Paita.	Se capturó al conductor y se confiscaron 23 bultos con armas y municiones.	10-10-1898	AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 10-10-1898.
	Piura		1898	Notificación al Administrador de Aduanas de Payta para que revise sospechoso cargamento de 120 escopetas de salón provenientes de Europa.		24-11-1898	AGN, MN, Paq. 62. Diversos, "Of. del Director de Gobierno al Administrador de Aduanas de Paita", del 24-11-1898.
	Piura		1902	Persecución de bandoleros fugitivos en la provincia.			"Memoria del Prefecto de Piura Pedro E. Muñiz". En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta al Congreso". Lima: Imprenta del Estado, 1902, p. 14.
Puno			1896		Se envió a Lima 146 armas de guerra de diversos sistemas, cien bayonetas y tres mil tiros.		AGN, H-5-2164, "Memoria del Prefecto de Puno", 15 de julio de 1896. En "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa...". [Sin pie de imprenta], 1896p. 25.
		Putina	1899	Captura del hacendado Melchor Figueroa, implicado en el ataque a la Subprefectura de Azángaro y sindicado poseedor de armas de precisión.	Se le encontró un arma sistema Winchester, pero se hicieron denuncias de posesión de diez rifles.	28-07-1899	AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Copia de Of. del Comisionado Luis F. Luna al Subprefecto de Azángaro", del 28/07/1899.
			1899	Persecución de la montonera de Lizares y registro para la incautación de armas de guerra en diversas haciendas de la propiedad de la familia Lizares y de otros implicados.			AGN, MN, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Copia de Of. del Comisionado Luis F. Luna al Subprefecto de Azángaro", del 21 y 24/07/1899.

Anexo N.º 12

Bandolerismo y montoneras-revolucionarias en diversos departamentos (1895-1902)

Departamento	Provincia	Distrito	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902
Abancay		Huancaraz				Jun: Presencia de bandoleros atacando a viajeros.				
Amazonas								Ene-Mar: Ataque a la hacienda Coccocho por una banda liderada por José M. Matheus y Dionisio Merino.		
	Chachapoyas	Molinopampa						Abr: Derrota de 60 montoneros-revolucionarios liderados por Amaro La Rosa, disgregados de las fuerzas de E. Vizcarra. Se dispersaron algunos a los valles vecinos.		
	Luya	Yamón			Mar: Ciudadanos armados atacan las poblaciones locales.		May: Ataque al Gobernador de Yamón por una banda con armas de precisión encabezada por Guillermo Oblitas y proveniente de Chota (Cajamarca).			
	Luya	Lonya Chico					Dic: Ataque al Gobernador de Lonya chico por una montonera formada en Ocalli por José Matheus y Dionisio Merino.			
	Luya	Lonya Grande			Mar: Ciudadanos armados atacan las poblaciones locales.					
	Luya	Bagua					Jun: Presencia de bandoleros con armas de precisión al mando de un individuo apellidado Montenegro.			
Ancash	Cajatambo	Congas	Banda armada liderada por Rufino Cabanillas	Banda armada liderada por Rufino Cabanillas						
	Casma						Oct: Presencia de montonera con 70 hombres liderada por Abel Lomparte.			
	Huaráz						Set: Aparición de la montonera de Durand proveniente de Huánuco.			
Arequipa	Camaná						Jul-Ago: Aparición de la montonera de Octavio Negrete favorable a Durand, Billinghurst y Cáceres. Fue derrotada.			

Ayacucho	Huanta			Rebelión de comunidades vinculadas al régimen cacerista Fue derrotada.	Rebelión de comunidades vinculadas al régimen cacerista Fue derrotada.					
	Lucanas				May: Cuadrillas armadas a favor de candidatos caceristas					
Cajamarca	Cajabamba					Ago: Presencia de montonera de A. Verástegui.	Nov: Montonera de Domingo Cruzado.			
	Cajamamca				Jun 26:Partidas armadas merodean entre los departamentos de Lambayeque y Cajamarca.					
	Cajamamca	Asunción						Ene: Presencia de montoneros en el pueblo de Huatun, los que fueron derrotados y dispersados.		
	Cajamarca	La Encañada				Montonera del cacerista Wenceslao Vecorena se moviliza entre La Encañada y San Marcos.				
	Cajamarca	San Marcos				Montonera del cacerista Agustín Verástegui se moviliza entre San Marcos y Cajabamba.				
	Celendín					Aparición de montonera de filiación cacerista, liderada por un individuo apellidado Estrada.	Dic: Montonera de A. Verástegui ocupa la ciudad.	Ene: derrota de la montonera A. Verástegui, con la muerte de su líder y principales cabecillas.		
	Chota					Mar: presencia de banda con armas del Estado entre Jacabamba y Bellavista (provincia Jaén). Se destacó una comisión para desarmar a Wenceslao Villacorta en su hacienda, la que fue repelida a balazos.	Oct: Montonera de Rodríguez y Villacorta con 200-300 hombres en Cochabamba (distrito de Chota) Dic: Montonera de W. Villacorta requisó ganados e impone cupos a ciudadanos.			
	Contumazá					Ago: Presencia de montonera liderada por José Manuel Rodríguez (delegado cacerista de los departamentos de La Libertad, Ancash y Cajamarca).	Dic: Montonera de Verástegui proveniente de Huatun (distrito Asunción, provincia Cajamarca), apoyada por pobladores de ese pueblo, ataca Contumazá.	Ene: Montonera de Cleto Hoyos y Francisco Reaño merodean Contumazá, Huatun y Cascas. Derrota de la montonera de Reaño en el pueblo de Casmán.		
	Hualgayoc	San Gregorio		Jun 28: Ataque al Gobernador por Jacinto Espinoza y sus hombres.	Ago: Ataque de Jacinto Espinoza al pueblo de San Gregorio.					
	Hualgayoc	Bellavista					Dic: Presencia de montonera de Agustín Verástegui formada por 39 hombres en la provincia de Hualgayoc.		Ene: Banda de 25 hombres armados intentaron asesinar al ciudadano Natalio Piérola.	
	Jaén	Jaén				Ago: Formación de montonera			Ene: Ataque al	

						de Natividad Castillo que atacó la ciudad de Jaén.			Subprefecto por hombres armados.	
	Jaén					Montonera de 600 hombres regularmente armada, liderada por José Manuel Rodríguez y A. Verástegui.	Nov: Montonera con 20 hombres liderada por Domingo Cruzado se dirige hacia Pataz (La Libertad).			
Cuzco	Cotabambas-Chumbivilcas						Set: Montonera cacerista con 20 hombres armados ataca la capital de la provincia.			
Huánuco	Dos de Mayo	Varios pueblos		Partidas de «malhechores» armados atacan.	Abr: 30 hombres armados atacan viajeros provenientes de Llata.			Ene: Presencia de grupos reducidos de bandoleros apolíticos.		
	Huánuco						Ago: Aparición de montonera liderada por Augusto Durand.			
Huancavelica	Huancavelica	Cercado					Set 17: Ataque de grupos montoneros (entre 200-300 hombres en organización militar), liderados por Bartolomé Guerra. Oct: Dispersados se fueron a las alturas de Moya, poseen armas del Estado.			
	Tayacaja	Surcubamba					Oct: Montonera dispersa comandada por B. Guerra.			
	Tayacaja	Tayacaja					Oct: Montonera dispersa comandada por B. Guerra.			
Ica	Chincha		Bandoleros merodean Chincha y Cañete			Mar: Bandoleros perseguidos entre Chincha y Cañete.	Jun: bandoleros merodeando quebrada de San Juan. Nov: Montonera liderada por Felipe S. Oré ataca Chincha Alta y marcha a Lunahuaná y Alto Larán.			
	Pisco						Montonera con 20 hombres formada por empleados del Estado es rechazada en Pisco.			
Junín	Huancayo					Set-Oct: Presencia de montonera con 50 hombres comandada por B. Guerra y otra de 18 hombres liderada por José Gavino Esponda.				Derrota de las comunidades de Comas (provincia Jauja) y Pariahuanca (provincia Huancayo).
La Libertad	Huamachuco	Mollepata			Oct: Insurrección de militares Crnl. Domingo Cueto, Cptn. Emilio Távara y Cmdte. N. Álvarez.	Montonera encabezada por Mercedes y Augusto Paredes, merodean Huamachuco y frontera con Ancash.				
	Huamachuco	Citabamba				Montonera encabezada por Mercedes y Augusto Paredes, merodean Huamachuco y frontera con Ancash.				
	Huamachuco	Sartimbamba					Oct: Presencia de montonera de 50 hombres de Domingo Cruzado, en la provincia de Huamachuco.			Mar: Merodea la partida de Bandoleros encabezada por Manuel Cárdenas.
	Huamachuco	Marcabal		Jun 21: Presencia de bandoleros						

				conocidos como Hnos. Cárdenas y Hnos. Sandoval.						
	Otuzco	Otuzco		Enero: Presencia de «malhechores».						Mar: Merodea la partida de Bandoleros encabezada por Manuel Cárdenas.
	Pacasmayo				Jun 17: 20 hombres armados merodeaban la provincia.					
Lambayeque					Jun26:Partidas armadas merodean entre departamentos de Lambayeque y Cajamarca.		Set: Bandas armadas recorren el departamento atacando poblaciones.			
	Lambayeque			Ataque de partidas de bandoleros con fines de venganzas particulares.	Jun:Insurrección de los militares Hnos. Villar.					Pequeñas partidas de bandoleros atacan a ciudadanos aprovechando el desierto de Sechura.
Lima	Yauyos	Huangazcar					Dic: Llegada de montoneras de Oré, con 300 hombres, venidas de Lunahuaná y derrotadas en Yauyos.			
Piura				Abr: Presencia de partida de bandoleros.		Bandoleros procedentes de Lambayeque se dirigieron a Tumbes.				Crecido número de criminales fugitivos que aprovechan el desierto de Sechura.
	Ayabaca					Ago: Montonera de Eloy Castro recorre la frontera Ayabaca-Piura. Ataque a Ayabaca por montonera liderada por Eduardo Merino y Eloy Castro.				
	Huancabamba						Set: Ataque de montonera con carabinas, escopetas y revólver, exigiendo entrega de armas.			
Puno	Puno					Ago-Nov: Montonera liderada por el exmilitar Edmundo Rivera Santander merodea Chucuito.				
	Azángaro						Jul19: Movimiento revolucionario liderado por el coronel José María Lizares a favor de Cáceres, con apoyo de hacendados y los indígenas de sus haciendas.			
	Huancané						Ago: Banda armada vinculada a la revolución de Azángaro, apoyando liderazgo de Billinghurst.			
Tacna	Locumba				Abr: Presencia de partidas de bandoleros.					

Fuente.

1895-1896

Ancash: *Cajatambo*, 1895-1896: BNP, D5586, "Oficios, recursos y denuncias referentes a existencia de armas en la provincia de Cajatambo". Cajatambo, noviembre 15 de 1896; BNP, D5804, "Sobre denuncia formulada por el Subprefecto de Cajatambo respecto a la posesión de armas de unos vecinos de Cajatambo", diciembre 5 de 1896; AGN, MI, Paq. 49, Particulares, "Solicitud de Ambrocio Alcántara, en nombre de los hijos de la villa de Copa de Ocros", Lima, 25-11-1896.

Ayacucho: *Huanta*, 1896: CEHMP, Documentos donados por el R.P. Ruben Vargas Ugarte, Legajo N.º 8, "Memorandum de la Pacificación de las Provincias de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno".

Cajamarca: *Hualgayoc-San Gregorio*, 1896: "Copia certificada de Of. del Prefecto de Cajamarca al Subprefecto de Hualgayoc", del 30-07-1896.

Huánuco: *Dos de Mayo*, 1896: AGN, H-6-2164, "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huanuco". [Sin pie de imprenta], 1896.

Ica, 1895: AGN, H-6-2164, "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huanuco". [Sin pie de imprenta], 1896, p. 7.

La Libertad: *Otuzco*, 1896: AGN, MI, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 16-01-1896; *Marcaval*, 1896: AGN, MI, Paq. 41, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 01-07-1896.

Lambayeque, 1896: AGN, H-6-2164, "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huanuco". [Sin pie de imprenta], 1896.

Piura 1896: AGN, H-6-2164, "Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huanuco". [Sin pie de imprenta], 1896.

1897

Amazonas. *Yamón-Lonya Grande*: AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Ministro de Gobierno", del 22 -03-1897.

Ayacucho. *Huanta*, 1897: CEHMP, Documentos donados por el R.P. Rubén Vargas Ugarte, Legajo N.º 8, "Memorandum de la Pacificación de las Provincias de Huanta y La Mar al Señor Ministro de Gobierno". *Lucanas*: AGN, MI, Paq. 50, Particulares, "Solicitud de vecinos de Puquio", del 29-05-1899.

Cajamarca. *Hualgayoc*: AGN, MI, Paq. 43, Prefecturas, Cajamarca, "Copia certificada del Of. del Subprefecto de Hualgayoc al Prefecto de Cajamarca", del 19-08-1897; *Cajamarca y Lambayeque*: AGN, MI, Paq. 45, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno", del 26-06 y 21-08-1897.

Huánuco. *Dos de Mayo*: AGN, MI, Paq. 44, Prefecturas, Huánuco, "Of. del Subprefecto de Huamalíes al Prefecto", del 11-04-1897.

La Libertad: *Pacasmayo*: AGN, MI, Paq. 45, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 19-06-1897; *Mollepata*: AGN, MI, Paq. 45, Prefecturas, La Libertad. Of. del Prefecto al Director de Gobierno de 13-10-1897.

Lambayeque: AGN, MI, Paq. 45, Prefecturas, Lambayeque, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 07-07-1897; AGN, MI, Paq. 49, Particulares, "Expediente iniciado por el Sargento Mayor del Ejército, Marcelino Cabrera, para esclarecer asesinato de su hijo Ricardo Cabrera", del 06-07-1897.

Tacna: AGN, MI, Paq. 46, Prefecturas, Tacna, "Of. del Prefecto de Tacna al Director de Gobierno", del 28-04-1897.

1898

Abancay. *Huancaraz*: AGN, MI, Paq. 51, Prefecturas, Abancay, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 27-06-1898.

Cajamarca

Cajabamba: BNP, D4622, "Memoria del Sr. Prefecto del Departamento de Cajamarca", Cajamarca, mayo 15 de 1899; AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 31-08-1898.

Cajamarca, San Marcos y La Encañada: BNP, D4622, "Memoria del Sr. Prefecto del Departamento de Cajamarca", Cajamarca, mayo 15 de 1899.

Celendin: BNP, D4622, "Memoria del Sr. Prefecto del Departamento de Cajamarca", Cajamarca, mayo 15 de 1899; AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 24-08-1898.

Chota: AGN, Ministerio de Interior, Prefecturas, Paq. 52, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 04/04/1898, y "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 01/08/1898.

Contumazá: AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 31-08-1898.

Jaén-Jaén: BNP, D4622, "Memoria del Sr. Prefecto del Departamento de Cajamarca", Cajamarca, mayo 15 de 1899; AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-08-1898.

Ica. AGN, MI, Paq. 53, Prefecturas, Ica, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 10-03-1898.

Junín: AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Junín, "Of. del Prefecto al Ministerio de Gobierno", del 27-09, 11-10 y 14-10-1898.

La Libertad. *Mollepata-Citabamba*: AGN, MI, Paq. 58, Particulares, "Solicitud de Andrés Encina, natural de Pallasca denunciando existencia de montoneras en distritos de Mollepata y Citabamba", del 28-11-1898.

Piura

Piura, 1898: AGN, MI, Paq. 54, Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 16-05-1898.

Ayabaca, 1898: BNP, D4543, "Informe elevado a la Subprefectura del Departamento de Piura por el Subprefecto de la provincia Piura-Piura", agosto 10 de 1898, 17ff.; BNP, D4540, "Parte del Combate de Ayabaca".

Puno

Puno, 1898: BNP, D4570, "Memoria que el Subprefecto e Intendente de Policía de la Provincia del cercado de Puno á la Prefectura del Departamento en el año 1899", Puno, junio 8 de 1899.

1899

Ancash. *Casma*: AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Ancash, "Of. del Prefecto Aristides G. Vigil al Director de Gobierno", del 19-10-1899; *Huaráz: El Comercio*. Lima, 05-09-1899, edición tarde.

Amazonas

Luya-Yamón: AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 09-05-1899; "Copia certificada de Of. del Prefecto de Amazonas al Subprefecto de Luya", del 08-05-1899.

Luya-Lonya Chico: AGN, MI, Prefecturas, Paq. 59, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 09-05-1899

Bagua: AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 07-07-1899; "Copia certificada de Of. del Gobernador de Bagua al Prefecto de Amazonas", del 07-06-1899.

Arequipa. *Camaná*: AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Arequipa, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 11-08-1899; *El Comercio*. Lima, 14-08-1899, edición tarde.

Cajamarca

Cajabamba: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 03-12-1899; Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. de Prefecto de La Libertad al Director de Gobierno", del 24-11-1899.

Celendín: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Boletín Oficial de Cajamarca", del 03-01-1900;

Chota: AGN, MI, Paq. 52, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 22-12-1899;

Contumazá: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 03-12; 09-12-1899.

Hualgayoc: AGN, MI, Paq. 64, Subprefecturas, "Of. del Subprefecto de Hualgayoc al Ministerio de Gobierno", del 20-09-1899.

Cuzco. *Cotabambas-Chumbivilcas*: AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Cuzco, "Copia certificada de Of. del Subprefecto de Chumbivilcas al Prefecto", del 24-09-1899; "Of. del Subprefecto de Paruro al Prefecto", del 29-09-1899.

Huancavelica:

Huancavelica: AGN, MI, Paq. 59, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto de Ayacucho Pedro Portillo al Director de Gobierno", del 19-09 y 21-09-1899; AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 17-09-1899.

Huancavelica-Moya: AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Gobernador de Moya al Subprefecto del Cercado", del 30-10-1899.

Surcubamba: AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 02-10-1899.

Tayacaja: AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 23-10-1899.

Huánuco: *El Comercio*. Lima, 20-08-1899 (ysiguientes ediciones de 1899).

Ica

Chincha: AGN, MI, Prefecturas, Exp. Subprefecturas, "Of. del Subprefecto de Cañete al Director de Gobierno", del 20-06-1899; AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Ica: "Of. del Prefecto de Ica al Director de Gobierno", del 07-11-1899.

Pisco: AGN, MI, Paq. 60, Prefecturas, Ica, "Of. del Prefecto de Ica al Director de Gobierno", del 31-10-1899.

La Libertad. *Huamachuco*. AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 10-10-1899.

Lambayeque: AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Lambayeque, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 21-09-1899.

Lima. *Yauyos-Huangazcar*: AGN, MI, Paq. 68, Prefecturas, Huancavelica, "Of. del Prefecto al Ministro de Guerra", del 27-11-1899; "Of. del Prefecto al Ministro de Gobierno", del 18/12/1899.

Piura: AGN, MI, Paq. 62 Prefecturas, Piura, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 29-08-1898.

Puno 1899. *Azángaro*: BNP, D4559, "Copia certificada de la Memoria presentada por el Subprefecto de la provincia de Azángaro, Dr. José A. Ruiz, correspondiente al año 1899", Puno, junio 24 de 1899; AGN, MI, Paq. 61, Prefecturas, Puno, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 20 y 23-07-1899.

Huancané: AGN, MI, Prefecturas, Paq. 61, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 23/08/1899.

1900

Amazonas. *Chachapoyas-Molinopampa*: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Amazonas, "Of. del Prefecto de Amazonas al Director de Gobierno", del 26-01, 02-03, 02-05, 22-06 y 13-07-1900.

Cajamarca

Cajamarca-Asunción-Huatum: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 19-01-1900.

Celendín: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Boletín oficial de Cajamarca", del 03-01-1900.

Contumazá: AGN, MI, Paq. 66, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 19-01-1900.

Huánuco 1900: AGN, MI, Paq. 67, Prefecturas, Huánuco, "Of. del Prefecto del Departamento al Director de Gobierno", del 10 -01-1900.

1901

Cajamarca: *Jaén(Cercado)* y *Bellavista*: AGN, MI, Paq. 74, Prefecturas, Cajamarca, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 11-01-1901.

1902

La Libertad: AGN, MI, Paq. 83, Prefecturas, La Libertad, "Of. del Prefecto al Director de Gobierno", del 12-03-1902.

Lambayeque: "Memoria del Prefecto de Lambayeque (1902)". En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía Sr. Leónidas Cárdenas presenta al Congreso Ordinario de 1902". Lima: Imprenta del Estado, 1902, pp. 33-34.

Piura: "Memoria del Prefecto de Piura Pedro Muñiz (1902)" y "Memoria del Prefecto de Lambayeque (1902)". En "Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía Sr. Leónidas Cárdenas presenta al Congreso Ordinario de 1902". Lima: Imprenta del Estado, 1902, pp. 14 y 33-34.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

FUENTES

Fuentes documentales manuscritas

Archivo General de la Nación (AGN)

Ministerio del Interior (MI)

- 1896. Paquete 41. Prefecturas. Moquegua, La Libertad y varias
Particulares
Municipalidades
- 1897. Paquete 43. Prefecturas. Arequipa, Apurímac, Ancash, Amazonas y
Cajamarca
- Paquete 44. Prefecturas. Ayacucho, Callao, Cuzco y Huánuco
- Paquete 45. Prefecturas. Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque y Loreto
- Paquete 46. Lima, Moquegua, Puno, Piura y Tacna
Subprefecturas
- Paquete 49. Particulares A-T
- Paquete 50. Particulares U-Z

- 1898. Paquete 51. Prefecturas. Ayacucho, Arequipa, Abancay, Ancash y
Amazonas
- Paquete 52. Prefecturas. Cajamarca y Cuzco
- Paquete 53. Prefecturas. Callao, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín y La
Libertad
- Paquete 54. Prefectura. Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura,
Puno y Tacna
- Paquete 55. Subprefecturas
Diversos
- Paquete 58. Particulares A-Z

- 1899 Paquete 59. Prefecturas. Ayacucho, Apurímac, Ancash, Amazonas, Arequipa y Callao
- Paquete 60. Prefecturas. Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco e Ica
- Paquete 61. Prefecturas. Junín, La libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua y Puno
- Paquete 62. Prefecturas. Piura y Tacna
- Diversos
- Paquete 64. Particulares A-Z
- Subprefecturas
- 1900 Paquete 66. Prefecturas Ayacucho, Apurímac, Amazonas y Cajamarca
- Paquete 67. Prefecturas. Huánuco
- Paquete 68. Prefecturas. Huancavelica, La Libertad y Moquegua
- 1901 Paquete 74. Prefecturas. Cajamarca
- Paquete 75. Prefecturas. Huancavelica
- 1902 Paquete 82. Prefecturas. Ancash
- Paquete 83. Prefecturas. Junín y La Libertad
- Paquete 85. Prefecturas. Tumbes
- H-6-264. “Memoria del Prefecto de Lima. Intendencia de Lima, Callao, Arequipa, Puno, La Libertad, Ayacucho, Ica, Lambayeque, Tacna, Huánuco”. [Sin pie de imprenta, 1896].

Archivo Histórico Militar del Perú (AHMP)

1895. Cajas 3, 6, 7 y 8
1896. Cajas 1, 4, 6 y 8
1897. Cajas 3 y 6
1898. Cajas 1, 2, 3, 6, 7 y 8
1899. Cajas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11

- 1900. Cajas 2, 5-B, 7, 9, 10, 13, 14, 15 y 16
- 1901. Cajas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
- 1902. Cajas 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 16
- 1903. Cajas 1, 2, 3, 4 10 y 11
- 1904. Cajas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10 y 15
- 1905. Cajas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14 y 15
- 1906. Cajas 1, 2, 3, 4 y 8
- 1907. Cajas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 10
- 1908. Cajas 3, 4, 8, 9 y 10
- 1909. Cajas 1, 2, 3, 5, 6 y 11

Archivo Parlamentario (AP)

- Año 1827. Asuntos Reservados para el Congreso N.º 52, Ayacucho: “Expediente promovido por algunos pueblos de la Provincia de Parinacochas sobre la Exempcion de contribución”.
- Año 1828. Asuntos Remitidos a Comisión, N.º 7 62 (a): “Solicitud de varios indígenas de la provincia de Quipiscanchi pidiendo exesion de diezmo”.

Biblioteca Nacional del Perú (BNP)

- D5804 “Sobre la denuncia formulada por el Subprefecto de Cajatambo respecto a la posesión de armas de unos vecinos de Cajatambo”. 5 de diciembre de 1896, 6 ff.
- D4876 “Expediente sobre la queja formulada por M. Antonio Castro contra el Supremo Gobierno por los procedimientos ilegales del Prefecto de Piura”. 17 ff.

- D5586 “Oficios, recursos y denuncias referentes a existencia de armas en la provincia de Cajatambo”. 15 de noviembre de 1896, 3 ff.
- D4559 “Copia certificada de la memoria presentada por el Subprefecto de la provincia de Azángaro, Dr. José A. Ruíz, correspondiente al año 1899”. Puno, 24 de junio de 1899.
- D4570 “Memoria del Subprefecto é Intendente de Policía de la Provincia de Cercado de Puno á la Prefectura en el año 1899”. Puno, 8 de junio de 1899.
- D4506 “Memoria elevada a la Subprefectura del Departamento del Cuzco por el Subprefecto de la Provincia de la Convención, J. F. Piérola”. Santa Ana, 24 de julio de 1899.
- D5798 “Telegramas sobre las incursiones practicadas á la zona de Santa por los montoneros de Durand”. Casma, 14 de octubre de 1899, 13 ff.
- D4621 “Memoria que presenta el Prefecto de Huancavelica al Sr. Director de Gobierno”. Huancavelica, 6 de junio de 1899, 16 ff.
- D4622 “Memoria del departamento de Cajamarca”. 15 de mayo de 1899, 23 ff.
- D4540 “Parte del Combate de Ayabaca”. Piura, 15 de agosto de 1899, 9 ff.
- D4543 “Informe elevado a la Prefectura del Departamento de Piura por el Subprefecto de la provincia de Piura”. 10 de agosto de 1899, 17 ff.
- D4614 “Memoria elevada a la Dirección de Gobierno por el Prefecto del Departamento de Ancash, D. Luis Bernaldes”. Huaraz, 8 de mayo de 1899.

Fuentes documentales impresas

Publicaciones oficiales

Anales (1907). *Anales de Justicia Militar. Bienio 1899-1900. Publicación Oficial*. Tomo I. Lima: Imprenta de “El Lucero”.

_____ (1907). *Anales de Justicia Militar. Bienio 1901-1902. Publicación Oficial*. Tomo II. Lima: Imprenta de “El Lucero”.

_____ (1907). *Anales de Justicia Militar. Bienio 1903-1904. Publicación Oficial*. Tomo III, Lima: Imprenta de “El Lucero”.

_____ (1908). *Anales de Justicia Militar. Bienio 1905-1906. Publicación Oficial*. Tomo IV, Lima: Imprenta de “El Lucero”.

_____ (1929). *Anales de Justicia Militar. Publicación Oficial*. Tomo V. Lima: Edit. “Cervantes”.

Anales de las Obras Públicas del Perú. Año 1899. Publicación Oficial. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1899. Sección Estadística de Ferrocarriles.

Anónimo (1946). Misiones militares francesas. Orientación informativa. En *Homenaje de la Revista Militar del Perú en el cincuentenario de la llegada de la primera Misión Militar Francesa*. Lima: Revista Militar del Perú.

Arenas, A. (1921). *Memorial del Ejército. Primer centenario de la Independencia Nacional*. Lima: Imprenta del Estado Mayor General del Ejército.

Cámara de Senadores (1898). *Diario de los debates de la Honorable Cámara de Senadores. Congreso Extraordinario de 1898*. Lima: Imprenta de “El Comercio”.

Cámara de Diputados (1899). *Diario de los debates de la H. Cámara de Diputados. Congreso Extraordinario de 1898*. Lima: Imprenta de “El País”.

Clément, P. (1902). *Viaje de Estado Mayor*. Chorrillos: Oficina Tipográfica de la Escuela Militar.

Escuela Militar de Chorrillos (1908). *Memoria del Director Coronel Eduardo Dogny, en la clausura del Año Escolar de 1908*. Lima: Oficina Tipográfica de la Escuela Militar.

_____ (1901). *Decreto Supremo de Organización de la Escuela Militar. 31 de enero de 1901*. Chorrillos: Imprenta de la Escuela Militar.

Escuela Superior de Guerra (1906). *Viaje de estudios de la Escuela Superior de Guerra en los departamentos de La Libertad, Cajamarca, Lambayeque y Piura. Diciembre de 1905, Enero y Febrero de 1906*. Lima: Imprenta Prisma.

Estado Mayor General del Ejército (1903). *Servicio Militar. Llamamiento a 1000 conscriptos. Distribución del contingente que corresponde por departamentos, por provincias y por distritos. Año 1903*. Lima: Imprenta de “El Nacional”.

_____ (1904). *Servicio Militar. Llamamiento a 500 conscriptos. Distribución del contingente que corresponde por departamentos, por provincias y por distritos. Año 1904*. Lima: Imprenta de “El Nacional”.

Ministerio de Gobierno y Policía (1896). *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta á la Legislatura Ordinaria de 1896*. Lima: Imprenta de “El País”.

_____ (1897). *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta á la Legislatura Ordinaria de 1897*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1898). *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía presenta á la Legislatura Ordinaria de 1898*. Lima: Imprenta de “El País”.

_____ (1899). *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía D. José María de la Puente presenta a la Legislatura Ordinaria de 1899*. Lima: Imprenta y Librería de San Pedro.

_____ (1900). *Memoria que el Sr. Ministro de Gobierno y Policía Coronel Domingo J. Parra presenta al Congreso Ordinario de 1900*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1901). *Memoria que el Ministro de Gobierno i Policía Don Ernesto Zapata presenta á la Legislatura ordinaria de 1901*. Lima: Imprenta de “El Lucero”.

_____ (1902). *Memoria que el Ministro de Gobierno y Policía Sr. Leónidas Cárdenas presenta al Congreso Ordinario de 1902*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1903). *Memoria que el Ministro de Gobierno, Policía, Correos y Telégrafos presenta al Congreso Ordinario de 1903*. Lima: Imprenta del Estado.

Ministerio de Guerra y Marina (1847). *Memoria que dirige el Ministro de Guerra y Marina al Congreso*. Lima: Imprenta de José Masías.

_____ (1861). *Memoria que presenta el Ministro de Estado en el despacho de Guerra y Marina al Congreso de 1860*. Lima: Tipografía de Aurelio Alfaro y Cía.

_____ (1862). *Memoria que presenta el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional de 1862*. Lima: Imprenta de La Época por J. E. del Campo.

_____ (1870). *Memoria que en el Ramo de Guerra presenta a la Legislatura de 1870 el Ministro de Guerra y Marina*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1884). *Memoria que el Ministro de Estado en el despacho de Guerra y Marina, general D. Javier de Osma presenta á la Asamblea Constituyente de 1884*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1885). *Memoria que el Ministro de Estado en el despacho de Guerra y Marina Coronel D. Juan Martín Echenique presenta a la Asamblea Constituyente en 1885*. Lima: Imprenta “El Bien Público”.

_____ (1886). *Memoria de Guerra y Marina presentada al Congreso Constitucional de 1886 por el Ministro del Ramo*. Lima: Imprenta Torres Aguirre.

_____ (1887). *Memoria del Ramo de Guerra presentada a la Legislatura Ordinaria de 1887 por el Ministro de Guerra y Marina*. Lima: Imprenta de La Merced de Peter Bacigalupi y Cía.

_____ (1888). *Memoria que presenta al Congreso Ordinario de 1888 el Ministro de Estado en el despacho de Guerra y Marina, Elías Mujica*. Lima: Imprenta Torres Aguirre.

_____ (1890). *Memoria que el Ministro de Estado en el despacho de Guerra y Marina presenta al Congreso Ordinario de 1890*. Lima: Imprenta y Librería del Universo de Carlos Prince.

_____ (1891). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta al Congreso Ordinario de 1891*. Lima: Imprenta Liberal de F. Masías y Cía.

_____ (1892). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta al Congreso Ordinario de 1892*. Lima: Imprenta liberal de F. Masías y Cía.

_____ (1893). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta al Congreso Ordinario de 1893. Ramo de Guerra*. Lima: Imprenta del Centro Militar.

_____ (1896). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1896*. Lima: Imprenta de “El País”.

_____ (1897). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1897*. Lima: Imprenta de “El País”.

_____ (1898). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1898*. Lima: Imprenta de “El País”.

_____ (1899). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1899*. Lima: Imprenta de “El País”.

_____ (1900). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta a la Legislatura Ordinaria de 1900*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1901). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta al Congreso Ordinario de 1901*. Lima: Imprenta Liberal.

_____ (1902). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina Sr. Coronel Heráclito Fernández presenta al Congreso Ordinario de 1902*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1903). *Memoria que el Ministro de Guerra y Marina presenta al Congreso Ordinario de 1903*. Lima: Imprenta Liberal.

_____ (1904). *Memoria del Ministerio de Guerra y Marina 1904*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1905). *Memoria del Ministerio de Guerra y Marina 1905*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1906). *Memoria del Ministerio de Guerra y Marina 1906*. Lima. Tipografía de “El Perú” de Ricardo Flores y Cía.

_____ (1907). *Memoria del Ministro de Guerra y Marina 1907*. Lima: Imprenta del Estado.

_____ (1908). *Memoria del Ministro de Guerra y Marina 1908*. Lima: Tipografía “El Progreso Literario”.

Homenaje de la Revista Militar del Perú en el cincuentenario de la llegada de la primera Misión Militar Francesa. Lima: Revista Militar del Perú, 1946.

Memoria de la Subprefectura e Intendencia de Policía de Lima. 1 de Julio de 1897 á 30 de junio de 1898. [Sin pie de imprenta].

Resumen del Censo General de Habitantes del Perú hecho en 1876. Lima: Imprenta del Estado, 1878.

Colecciones documentales

CDIP, Tomo V: *La acción patriótica del pueblo en la Emancipación*. Vols. 1 y 2: *Guerrillas y montoneras*. Lima: Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971.

Milla Batres, C. (ed.) (1980). *Recopilación de partes y documentos de la guerra del Pacífico: 1879-1883*. Edición conmemorativa del primer centenario de la guerra del 79. Lima: Milla Batres.

Oviedo, J. (1861). *Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año de 1821 hasta 31 de diciembre de 1859*. Tomo II. Ministerio de Gobierno, Culto y Obras Públicas. Lima: Felipe Bailly Editor-Librería Central, pp. 202-203.

Folletos, ensayos y libros de época

Anónimo (1868). *Definiciones extractadas de varias obras para el uso de los SS. oficiales del ejército*. Piura: [Sin pie de imprenta].

Anónimo(1882). *Apuntes sobre moral militar, seguidos de algunas instrucciones para el servicio de campaña*. Ayacucho: Imprenta de la Unificación Nacional.

Bolognesi, M. (1864). *Prontuario de instrucción militar*. Lima: A. Aubert.

Bustamante y Rivero, J. L. (1920). *Organización y procedimientos de la Justicia Militar en el Perú. Estudio presentado a la Universidad del Gran Padre San Agustín de Arequipa, para optar el grado de doctor en Jurisprudencia y obtener el título de Abogado*. Lima: Imprenta del Estado Mayor General del Ejército.

Capelo, J. (1895). *Sociología de Lima*. 4 tomos. Lima: Imprenta Masías.

Clément, P. (1900). *Legislación militar*. Lima: Tipografía y Litografía de la Escuela Militar.

El Callao (1887). *Los breves apuntes sobre la sociología del Perú del Dr. Don Carlos Lisson juzgados por "El Callao", 1887*. Lima: Imprenta de El Callao.

Enciclopedia Española de Derecho y Administración ó Nuevo Teatro Universal de la Legislación de España e Indias (1852). Tomo V. Madrid: Imprenta de Díaz y Cía.

Fajardo, V. (1896). *Compendio de moral militar*. Lima: Imprenta de la H. Cámara de Diputados.

_____ (1878). *Compendio de moral militar*. Lima: Imprenta del Estado.

Giraldo, S. (1899). *Legislación militar. Crítica parlamentaria por el H. Diputado Santiago Giraldo*. Lima: Imprenta Portal San Agustín.

Gutiérrez, J. M. (1823). *Práctica criminal de España*. Tomo III. Cuarta edición. Madrid: Imprenta de Fermín Villapando.

Lama, M. A. de la (1877). *Juicios militares con formularios y apéndices de leyes patrias*. Lima: Imprenta y Librería de Benito Gil.

Lisson, C. (1887). *Breves apuntes sobre la sociología del Perú en 1886*. Lima: Imprenta y Librería de Benito Gil.

Ordenanzas de S. M. para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos. (1847-1852 [1768]). Madrid: Imprenta de los Sres. Andrés y Díaz.

Oré, F. S. (1896). *Exposición que a sus HH. Colegas presenta el Diputado por Cañete D. Felipe S. Oré*. Lima: Imprenta Liberal.

Partido Demócrata (1889). *Declaración de principios i otros documentos*. Lima: Imprenta y Librería de Benito Gil.

Químper, J. M. (1886). *Derecho político: el liberalismo*. Lima: Imprenta de L. de Busscher.

Seminario, T. (1895). *Consideraciones generales sobre los ejércitos del continente europeo. Máximas que deben de inculcarse al soldado; estudio sobre las armas, eficacia de sus fuegos; empleo de la caballería; orden de combate*. París: Tipografía Moderna.

Sepúlveda, J. A. (1861). *Manual del oficial en campaña*. Lima: Imprenta de J. Montoya.

Stiglich, G. (1913). *Geografía comentada del Perú: curso recomendado por el Ministerio de Instrucción*. Lima: Casa Editora Sanmarti y Cía.

Periódicos y Revistas

Periódicos

El Comercio. Lima, 1854-1855, 1857, 1866-1872, 1895-1899

La Opinión Nacional. Lima, 1895-1898

El Progreso. Lima, 1849-1850

El Tiempo. Lima, 1896-1899

Revistas

El Derecho. Lima, 1898-1899

El Perú Militar. Lima, 1902-1904

La Luz Eléctrica. Lima, 1895-1898

Revista Militar y Naval. Lima, 1888-1891, 1893

Revista Militar. Lima, 1899-1900

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, C. (2004). La penitenciaría de Lima y la modernización de la justicia penal en el siglo XIX. En Panfichi, A. (ed.). *Mundos interiores. Lima, 1850-1950*. Lima: Universidad del Pacífico.

Aljovín, C. (2005). Sufragio y participación política. En Aljovín, C. y S. López (eds.). *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: IEP.

_____. (2000). *Caudillos y constituciones. Perú, 1821-1845*. Lima: PUCP, Instituto Riva-Agüero; México, D.F.: FCE.

Aljovín, C. y N. Jacobsen (eds.) (2007). *Cultura política en los Andes (1750-1950)*. Lima: UNMSM-Embajada de Francia-IFEA.

Aljovín, C. y D. Velásquez (2011). La cuestión de la lealtad frente a la independencia. Autoridades religiosas, Perú 1808-1825. En Schmidt, P., Dorsh, S. y H. Helod-Schmidt (coords.). *Religiosidad y Clero en América Latina-Religiosity and Clergy in Latin America (1767-1850). La Época de las Revoluciones Atlánticas-The Age of the Atlantic Revolutions*. Hungary: Böhlau Verlag GmbH & Cie.

Arbulú, G. (1988). *El Ejército y la ingeniería militar en el siglo XX. 1900-1980*. Vol. I. Lima: Talleres de la Imprenta del Ejército.

Atehortúa, A. (2009). *Construcción del ejército nacional en Colombia, 1907-1930. Reforma militar y misiones extranjeras*. Medellín: La Carreta.

Barclay F. (2009). *El Estado Federal de Loreto, 1896. Centralismo, descentralismo y federalismo en el Perú a fines del siglo XIX*. Lima: IFEA-Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

- Barra, F. de la (1967). *Objetivo: Palacio de Gobierno*. Lima: Mejía Baca.
- Basadre, J. (2005). *Historia de la República del Perú*. Lima: El Comercio.
- _____ (2003). *La iniciación de la República*. 2 tomos. Lima: UNMSM, Fondo Editorial.
- _____ (1980). *Elecciones y centralismo en el Perú*. Lima: Universidad del Pacífico.
- _____ [1944]. *La promesa de la vida peruana*. Lima: Revista Historia.
- Beltrán, E. (1977). *Las guerrillas de Yauyos en la emancipación del Perú, 1820-1824*. Lima: Editores Técnicos Asociados.
- Bendix, R. (1974). *Estado nacional y ciudadanía*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- _____ (1970). *Max Weber*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
- Blume, E. (2010). *La justicia militar en la historia del Perú*. Arequipa: ADRUS.
- Botana, N. (1985). *El orden conservador: la política argentina entre 1880 y 1916*. Buenos Aires: Editorial. Hyspamerica.
- Brahmp, E. (2002). *Preparados para la guerra. Pensamiento militar chileno bajo la influencia alemana 1885-1930*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Bullick, L. (1999). *Pouvoir militaire et société au Pérou aux XIXe e XXe siècles*. Paris: Publication de la Sorbonne.

Burga, M. y A. Flores Galindo (1987). *Apogeo y crisis de la República Aristocrática*. Cuarta edición. Lima: Rikchay Perú.

Burga, M. y W. Reátegui (1981). *Lanas y capital mercantil en el sur andino*. Lima: IEP.

Cabello, M. (1998). Profesiones de porvenir. En Bravo, J. *Fundadores de la narración en el Perú (1805-1905)*. Lima: Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del Perú.

Camacho, C. (2011). Síntesis y perspectiva de los estudios de transferencias militares europeas en Sudamérica (1890-1940). *Revista de Historia Iberoamericana*. Vol. 4, N.º 2, Año 2.

Cassasa, L. (1966). *Los orígenes de la Justicia Militar las referencias históricas de la pena en la justicia militar del Perú*. (Tesis de Licenciatura en Derecho). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Chiaramonti, G. (2005). *Ciudadanía y representación en el Perú, 1808-1860: los itinerarios de la soberanía*. Lima: UNMSM, Fondo Editorial.

_____ (1995). Andes o nación: la reforma electoral de 1896 en el Perú. En Annino, A. (coord.). *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*. Montevideo: FCE.

Clausewitz, K. von (1972). *De la guerra. Sobre la naturaleza de la guerra. La teoría de la guerra. De la estrategia en general*. México, D.F.: Editorial Diógenes, S.A.

Comisión Permanente de Historia del Ejército (1981). *La gesta de Lima 1881 - 13/15 de enero-1981*. Lima: CPHE.

Contreras, C. (2004). *El aprendizaje del capitalismo. Estudios de historia económica y social del Perú republicano*. Lima: IEP.

Contreras, C. y M. Cueto (2004). *Historia del Perú contemporáneo*. Tercera edición. Lima: IEP-PUCP-Universidad del Pacífico.

Dandeker, Ch. (1990). *Surveillance, power and modernity. Bureacracy and discipline from 1700 to the present day*. Cambridge: Polity Press.

Dávalos y Lissón, P. (1989). *La Ciudad de los Reyes*. Lima: INC.

Dellepiane, C. (1943). *Historia militar del Perú*. Lima: Ministerio de Guerra.

Demélas, M.-D. (2003). *La invención política. Bolivia, Ecuador, Perú en el siglo XIX*. Lima: IEP-IFEA.

Deustúa J. y J. L. Rénique (1984). *Intelectuales, indigenismo y descentralismo en el Perú 1897-1931*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

Diccionario histórico y biográfico del Perú. Siglo XV-XX. Tomo VI: M-O. Lima: Editorial Milla Batres, 1986.

Dulanto, J. (1947). *Nicolás de Piérola*. Lima: Compañía de Impresiones y Publicidad.

Eto G., Landa C. y J. Palomino (1997). La jurisdicción militar en el Perú. En *Jurisdicción militar y constitución en Iberoamérica*. Lima: Editorial Grijley.

Favre, H. (1997). *El indigenismo*. México, D.F.: FCE.

Fisher, J. (2000). *El Perú borbónico 1750-1824*. Lima: IEP.

Foucault, M. (2001). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Gálvez, F. (1999). Burócratas y militares en el siglo XVIII. En O'Phelan, S. (comp.). *El Perú en el siglo XVIII. La era borbónica*. Lima: PUCP-IRA.

Gamarra, A. (1973). *La ciudad de los pelagatos*. Segunda edición. Lima: Peipsa.

García Calderón, F. (2007 [1879]). *Diccionario de la legislación peruana*. Tomo II. Edición facsimilar de la segunda edición. Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega-Tribunal Constitucional del Perú-Ministerio de Justicia-Ilustre Colegio de Abogados de Lima-Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

_____ (2001). *El Perú contemporáneo*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú.

García Jordán, P. (2001). *Cruz y arado, fusiles y discursos. La construcción de los Orientes en el Perú y Bolivia 1820-1940*. Lima: IFEA-IEP.

Golte J. (1980). *Repartos y rebeliones. Túpac Amaru y las contradicciones de la economía colonial*. Lima: IEP.

González, C. (1923). La Misión Francesa y nuestro Ejército. Lo que hizo en el pasado y lo que se espera de ella en el futuro. En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Gootenberg, P. (1997). *Caudillos y comerciantes. La formación económica del Estado peruano 1820-1860*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

_____ (1995). *Población y etnicidad en el Perú republicano (siglo XIX). Algunas revisiones*. Documento de Trabajo N.º 71. Lima: IEP.

Guiot, R. (1912). Deux années au Pérou à la mission militaire française (1909-1910) par le sous-intendant militaire. *Revue du Service de l'Intendance Militaire*. Año XXV, N.º 214.

Halperin, T. (1972). *Historia contemporánea de América Latina*. Madrid: Alianza Editorial.

Herbozo, E. (1923). Instrucción y disciplina en la Escuela Militar de Chorrillos en los años de 1898 a 1902. En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Herrera, B. (1929). *Escritos y discursos*. Tomo I. Lima: Rosay.

Hidalgo, T., Medina, L., Sánchez, G. y M. Gálvez (2005). *Historia General del Ejército del Perú*. Tomo V: *El Ejército en la República: siglo XIX*. Volumen 1: *La institucionalización del Ejército: organización y evolución*. Lima: Comisión Permanente de Historia del Ejército.

Hobsbawm, E. (2001). *Bandidos*. Barcelona: Crítica.

Holborn, H. (1992). La escuela pruso-alemana: Moltke y el auge del Estado Mayor General. En Paret, P. (ed.). *Creadores de la estrategia moderna: desde Maquiavelo a la era nuclear*. Madrid: Ministerio de Defensa.

Hooper, R. (1966). *Biblioteca de hombres del Perú: Miguel Iglesias*. Tomo XXXII. Lima: Editorial Universitaria.

Huntington, S. P. (1995). *El soldado y el Estado. Teoría y política de las relaciones cívico militares*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

Patrick, H. (1992). *De la guerra a la rebelión (Huanta, siglo XIX)*. Lima-Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas.

Jacobsen, N. (1993). *Mirages of transition. The Peruvian Altiplano, 1780-1930*. Los Ángeles: University of California Press.

Jacobsen, N. y A. Diez (2002). Montoneras, La Comuna de Chalaco y la revolución de Piérola: la sierra piurana entre el clientelismo y la sociedad civil,

1868-1895. En Escobar, A. y R. Falcón (coords.). *Los ejes de la disputa: movimientos sociales en América Latina, siglo XIX*. Amsterdam: AHILA/Madrid: Iberoamericana/Frankfurt am Main: Vervuert.

Jara, C. de la (1923). Moralidad militar (extracto). En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Kapsoli, W. (1987). *Los movimientos campesinos en el Perú*. Lima: Editorial Atusparia.

Klarén, P. (2004). *Nación y sociedad en la historia del Perú*. Lima: IEP.

_____ (1976). *Formación de las haciendas azucareras y orígenes del APRA*. Segunda edición. Lima: IEP.

Leiva, L. (1995). *Colección Forjadores del Perú: Nicolás de Piérola*. Lima: Editorial Brasa S.A.

Loayza, A. (2005). El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851. En Aljovín, C. y S. López (eds.). *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: IEP.

López, R. (1932). *Las escuelas militares del Perú. Monografía histórica redactada por disposición del Director de la Escuela Militar*. Lima: Imprenta de la Escuela Militar.

Luqui-Lagleyze, J. (2005). “*Por el rey, la fe y la patria*”. *El ejército realista del Perú en la independencia sudamericana, 1810-1825*. Madrid: Ministerio de Defensa.

Lluncar, C. y A. Muñoz (1923). La Escuela Militar de Chorrillos (reseña histórica). En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Mallon, F. (1983). *The defense of community in Peru's central highlands: peasant struggle and capitalism transition, 1860-1940*. New Jersey: Princeton University Press, 1983.

Manrique, N. (1988). *Yawar Mayu: sociedades terratenientes serranas, 1879-1910*. Lima: IFEA-DESCO.

Martínez, P. P. (1935). *Haciendo un poco de historia*. Lima: [s.n.].

_____ (1924). *Páginas militares*. Lima: Imprenta Eduardo Rávago.

Masterson, D. (2001). *Fuerza Armada y sociedad en el Perú moderno: un estudio sobre las relaciones civiles militares, 1930-2000*. Lima: Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos.

Mc Evoy, C. (2004). *La huella republicana liberal en el Perú. Manuel Pardo: escritos fundamentales*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

_____ (1997). *La utopía republicana: ideales y realidades en la formación de la cultura política peruana (1871-1919)*. Lima: PUCP, Fondo Editorial.

_____ (1994). *Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su visión del Perú*. Lima: PUCP, Fondo Editorial.

Mc Neill, W. (1988). *La búsqueda del poder: tecnología, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 d.C.* Madrid: Siglo XXI Editores.

Mead, E. (1968). *Creadores de la estrategia moderna. El pensamiento militar desde Maquiavelo a Hitler*. Tomo II. Buenos Aires: Colección Histórico Militar.

Medina, L. (1989), *Historia general del Ejército peruano*. Tomo V: *El Ejército en la república, siglo XIX*. Vol. 2: *La institucionalización del Ejército: logística*. Lima: Comisión Permanente de la Historia del Ejército del Perú.

Méndez, C. (2006). Las paradojas del autoritarismo: ejército, campesinado y etnicidad en el Perú, siglos XIX y XX. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, N.º 26.

_____ (2004). *Tradiciones liberales en los Andes: militares y campesinos en la formación del estado peruano*. Consultado el 26 de agosto de 2009, de <http://www.tau.ac.il/eial/XV_1/mendez.html>

Middendorf, E. W. (1973). *Perú: observaciones y estudios del país y sus habitantes durante una permanencia de 25 años*. Lima, UNMSM, Fondo Editorial.

Millones, I. (2004). Los caceristas de la República Aristocrática: composición social, intereses y principios del Partido Constitucional (1895-1919). *Histórica*. Lima, N.º XXVIII, Vol. 2.

_____ (1998). *El Partido Constitucional: miembros y utilidad de ser miembro de un partido político durante la República Aristocrática*. (Tesis de Licenciatura en Historia). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Miro Quesada, C. (1961). *Autopsia de los partidos políticos*. Lima: Ediciones Páginas Peruanas.

Molina, J. (1996). *Quintas y servicio militar: aspectos sociológicos y antropológicos de la conscripción*. Lleida: Universitat de Lleida.

Moltke, H. von (1891). *La guerra franco-alemana de 1870-1871 por el Feld-Mariscal Conde de Moltke*. Barcelona: Montaner y Simon.

O'Phelan, S. (1999) (comp.). *El Perú en el siglo XVIII. La era borbónica*. Lima: PUCP-IRA.

_____ (1997). *Kurakas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios (Perú y Bolivia, 1750-1835)*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

_____ (1988). *Un siglo de rebeliones anticoloniales. Perú y Bolivia 1700-1783*. Cuzco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas.

Parker, G. (2002). *La revolución militar. Innovación militar y apogeo de Occidente, 1500-1800*. (Versión de Alberto Piris y José Luis Gil Aristu). Madrid: Alianza Editorial.

Peloso, V. (2002). Yanaconaje y crecimiento económico en las haciendas algodoneras en el Perú en el inicio del siglo XX. En Contreras, C. y M. Glave (eds.). *Estado y mercado en la historia del Perú*. Lima: PUCP, Fondo Editorial.

Peralta, V. (2005). Los vicios del voto: el proceso electoral en el Perú, 1895-1929. En Aljovín, C. y S. López (eds.). *Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo*. Lima: IEP.

Ponce, M. (1962). Las escuelas militares de Cáceres y Piérola. En Ríos, C. *Historia de la Escuela Militar del Perú*. Lima: Escuela Militar de Chorrillos.

_____ (1948). Homenaje a la Escuela Militar en el Quincuagésimo Aniversario de su creación como Escuela Militar de Aplicación. *Revista de la Escuela Militar de Chorrillos, 50 aniversario 1898-1948*. Año XXIII, N.º 268.

Portocarrero, F. (1995). *El imperio Prado, 1890-1970*. Lima: Universidad del Pacífico.

Possony, S. y E. Mantoux (1968). A. Du Picq y Foch. La escuela francesa. En Mead, E. *Creadores de la estrategia moderna. El pensamiento militar desde Maquiavelo a Hitler*. Tomo II. Buenos Aires: Colección Histórico Militar.

Quiroz, A. (1995). Fuentes, temas y revisiones en la historia financiera peruana. *América Latina en la Historia Económica*. Vol 2, N.º 3.

Quiroz, F. (1992). Los curacas de Huarochirí y su presencia en las guerrillas de la Independencia y los primeros años de la República (1750-1830). En *Huarochirí: ocho mil años de historia*. Lima: Municipalidad de Santa Eulalia de Acopaya.

Ríos, C. (1962). *Historia de la Escuela Militar del Perú*. Lima: Escuela Militar de Chorrillos.

Rothengerg, G. E. (1992). *Moltke, Schlieffen y la Doctrina del Envolvimiento Estratégico*. En Paret, P. (ed.). *Creadores de la estrategia moderna: desde Maquiavelo a la era nuclear*. Madrid: Ministerio de Defensa.

Saint John, T. (2007). *La mission militaire française au Pérou de 1896 à 1939*. (Memoria de Maestría en Historia). Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, Francia.

Rouquié, A. (1984). *Estado militar en América Latina*. México, D.F.: Siglo XXI Editores.

Salas, F. (1992). *Ordenanzas militares en España e Hispanoamérica*. Madrid: MAPFRE.

Salinas, A. (2012). *El califato de Piérola: 1895-1899*. Lima: Seminario de Historia Rural Andina-UNMSM, Fondo Editorial.

Sánchez, S. (2007). “Civiles vestidos de militares”. La construcción de las diferencias regionales de la militarización borbónica en el Perú. En Guerra, M., Mazzeo, C. y D. Rouillon (eds.). *Historias compartidas: economía, sociedad y poder, siglos XVI-XX. Actas del primer encuentro de historia Perú-Argentina*. Lima: Instituto Riva-Agüero-PUCP, Fondo Editorial.

Salmón, J. (1923). Reminiscencias. El antiguo cuartel de Chorrillos. En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Skocpol, T. (1995). El Estado regresa al primer plano: estrategias de análisis en la investigación actual. En Grompone, R. (ed.). *Instituciones políticas y sociedad. Lecturas introductorias*. Lima, IEP.

_____ (1984). *Los estados y las revoluciones sociales: un análisis comparativo de Francia, Rusia y China*. México, D.F.: FCE.

Tanaka, M. (2010). *El Estado, viejo desconocido. Visiones del Estado en el Perú*. Lima. IEP.

Taylor, L. (1990). Los orígenes del bandolerismo en Hualgayoc, 1870-1900. En Aguirre, C. y C. Walker (eds.). *Bandoleros, abigeo y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglo XVIII-XX*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.

Thorp, R. y G. Bertram (1988). *Perú: 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta*. Lima: Mosca Azul Editores.

Tilly, C. (1992). *Coerción, capital y los estados europeos, 990-1990*. Madrid: Alianza Editorial.

Toche, E. (2008). *Guerra y democracia. Los militares peruanos y la construcción nacional*. Lima: DESCO-CLACSO.

Torres, E. (1923). Estudio y trabajo. En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Tristán, F. (2003). *Peregrinaciones de una paria*. Lima: Flora Tristán-UNMSM, Fondo Editorial.

Turner, M. (2007). *Republicanos andinos*. Lima: IEP-CBC.

Ugarteche, P. y E. San Cristóval (1945). *Mensajes de los presidentes del Perú*. Volumen II: 1869-1899. Lima: Librería e Imprenta Gil, S.A.

Ulloa, A. (1981). *Don Nicolás de Piérola*. Lima: Editorial Minerva.

Vega, J. J. (1981). *Historia general del Ejército peruano*. Tomo III: *El Ejército durante la dominación española del Perú*. Vol. 1. Lima: Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú.

Walker, C. (2009). Montoneros, bandoleros, malhechores: criminalidad y política en las primeras décadas republicanas. En *Diálogos con el Perú: ensayos de Historia*. Lima: Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos.

_____ (2004). *De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú republicano, 1780-1840*. Segunda edición. Cusco: Centro de Estudios Regionales Bartolomé de las Casas.

Wu, C. (1993). *Generales y diplomáticos: Gran Bretaña y el Perú, 1820-1840*. Lima: PUCP, Fondo Editorial.

Velásquez, D. (2010). *Mutaciones del concepto "Patria". Perú: 1730-1866*. (Tesis de Licenciatura en Historia). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Vich, V. (2005). *El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia*. Lima: IEP.

Vidal, C. (2003). Escuela militar, escuela del honor. En *La Escuela Militar en el XXV aniversario de su fundación 1898-1923*. Chorrillos: Tipografía Boza.

Villanueva, V. (1973). *Ejército peruano: del caudillismo anárquico al militarismo reformista*. Lima: Mejía Baca.

_____ (1971). *100 años del Ejército peruano: frustraciones y cambios*. Lima: Mejía Baca.

_____ (1962). *Militarismo en el Perú*. Lima: Empresa Gráfica T. Sheuch.

Villarán, M. V. (1962). Las profesiones liberales en el Perú. En *Páginas escogidas*. Lima: Talleres Gráficos P.L. Villanueva.